



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Programa de Posgrado en Ciencias Sociales IDES – UNGS

Doctorado en Ciencias Sociales

Período 2014-2016

**Acumulación de capital y acción política
de la clase terrateniente: el caso de la
Sociedad Rural Argentina (1989-2008)**

Tesista: Mgr. Nicolás Pérez Trento

Director: Dr. Juan B. Iñigo Carrera

Codirector: Dr. Gastón Caligaris

Buenos Aires

Diciembre de 2016



FORMULARIO "E" TESIS DE POSGRADO

Este formulario debe figurar con todos los datos completos a continuación de la portada del trabajo de Tesis. El ejemplar en papel que se entregue a la UByD debe estar firmado por las autoridades UNGS correspondientes.

Niveles de acceso al documento autorizados por el autor

El autor de la tesis puede elegir entre las siguientes posibilidades para autorizar a la UNGS a difundir el contenido de la tesis:

- a) ~~Liberar el contenido de la tesis para acceso público.~~
- b) ~~Liberar el contenido de la tesis solamente a la comunidad universitaria de la UNGS:~~
- c) **Retener el contenido de la tesis por motivos de patentes, publicación y/o derechos de autor por un lapso de cinco años.**

a. Título completo del trabajo de Tesis: *Acumulación de capital y acción política de la clase terrateniente: el caso de la Sociedad Rural Argentina (1989-2008)*

b. Presentado por (Apellido/s y Nombres completos del autor): *Pérez Trento, Nicolás*

c. E-mail del autor: *nicolaspereztrento@hotmail.com*

d. Estudiante del Posgrado (consignar el nombre completo del Posgrado): *Doctorado en Ciencias Sociales*

e. Institución o Instituciones que dictaron el Posgrado (consignar los nombres desarrollados y completos): *Universidad Nacional de General Sarmiento – Instituto del Desarrollo Económico y Social*

f. Para recibir el título de (consignar completo):

- a) Grado académico que se obtiene: *Doctor en Ciencias Sociales*
- b) Nombre del grado académico: *Doctorado en Ciencias Sociales*

g. Fecha de la defensa: / /
 día mes año

h. Director de la Tesis (Apellidos y Nombres): *Dr. Iñigo Carrera, Juan.*
Codirector: *Dr. Caligaris, Gastón*

i. Tutor de la Tesis (Apellidos y Nombres):

- j. Colaboradores con el trabajo de Tesis:
- k. Descripción física del trabajo de Tesis (cantidad total de páginas, imágenes, planos, videos, archivos digitales, etc.): *362 páginas, incluyendo gráficos estadísticos.*
- l. Alcance geográfico y/o temporal de la Tesis: *Argentina, 1989-2008*
- m. Temas tratados en la Tesis (palabras claves): *Sociedad Rural Argentina - Terratenientes - Acción política - Acumulación de capital*
- n. Resumen en español (hasta 1000 caracteres):
El paro agrario desencadenado en marzo del 2008 se constituyó como uno de los más destacados en la larga historia de los conflictos agrarios. Entre sus múltiples resultados, destaca el hecho de que se configuró como disparador de distintos debates de larga data en el interior de la sociología rural hacia la opinión pública, como, la evolución de la estructura social agraria y la caracterización de los sujetos que la conforman, el poder social de que estos dispondrían, y la representatividad de las entidades rurales, tan sólo para nombrar los que aquí interesan. Estas son, en definitiva, las cuestiones que vertebran la investigación aquí expuesta. Más específicamente, aquí vamos a centrarnos en la acción política de una de las asociaciones en cuestión: la Sociedad Rural Argentina (SRA). Acerca de ella se realizan, como veremos posteriormente, afirmaciones contrapuestas: si, de una parte, se asevera que se trata de una entidad sumamente poderosa, de la otra se postula que su época de mayor poderío habría quedado ya en el pasado. El objetivo principal de esta investigación, por tanto, será analizar la potencia que ésta tiene a lo largo de un período de tiempo relativamente extenso: las casi dos décadas que trascienden entre la asunción a la presidencia de Menem, en 1989, y el decenio de gobiernos neoliberales que la sucedió, y el conflicto del 2008. Para poder avanzar en él, partiremos de afirmar que la potencia que caracteriza el accionar de la organización en cuestión sólo puede brotar de los sujetos sociales por ella representados. En este sentido, procuraremos demostrar que a pesar de que su base social está compuesta de manera general por individuos que reúnen simultáneamente el carácter de capitalistas y el de terratenientes, la acción política de la entidad se ejerce principalmente en representación de esta última clase social. La hipótesis que guía la presente tesis, en este sentido, toma como punto de partida el hecho de que la SRA asume la representación política de la fracción agraria pampeana de la clase terrateniente argentina, y establece que, como tal, es portadora de las potencias que ésta posee en el marco de la forma específica de acumularse el capital en la Argentina.
- o. Resumen en portugués (hasta 1000 caracteres):
A greve agrícola desencadeada março 2008 foi estabelecido como um dos mais importantes na longa história de conflitos agrários. Entre as suas muitas conclusões, destaca-se o fato de que foi configurado como gatilho vários debates de longa data dentro sociologia rural para a opinião pública, como a evolução da estrutura social agrária e caracterização dos sujeitos que conformam , poder social que estes têm pronto acesso e representação

de entidades rurais, só para citar aqui abordado. Estes são, em suma, as questões que sustentam a pesquisa aqui apresentada.

Mais especificamente, aqui vamos nos concentrar sobre a ação política de uma das associações em causa: a Sociedad Rural Argentina (SRA). Sobre ela percebeu, como veremos mais tarde, reivindicações conflitantes: se, por um lado, afirma-se que esta é uma entidade extremamente poderosa no outro postula-se que o seu período de maior potência já foram no passado. O principal objetivo desta pesquisa, portanto, é analisar o poder que tem sobre um período de tempo relativamente longo: as quase duas décadas que transcendem entre a assunção da presidência da Menem em 1989, e na década governos neoliberais que foram bem sucedidas, e o conflito de 2008.

A fim de avançar-lo, começamos a dizer que o poder que caracterizou as ações da organização em questão só pode surgir de assuntos sociais representados por ele. Neste sentido, vamos tentar mostrar que, apesar da sua base social é composto geralmente por pessoas que simultaneamente satisfazem o caráter de capitalistas e latifundiários, a ação política da organização é exercido principalmente em nome da última classe. A hipótese que orienta essa tese, nesse sentido, tem como ponto de partida o fato de que o SRA assume a representação política da fração agrária Pampas da classe latifundiária Argentina, e afirma que, como tal, carrega poderes este último, no contexto da forma específica de capital acumulado na Argentina.

p. Resumen en inglés (hasta 1000 caracteres):

The agrarian lockout unleashed in May 2008 has proven itself to be one of the most important across the long history of agrarian conflicts. Among its multiple consequences, stands out the fact that it turned to be the source that triggered long-standing academic debates to public opinion, like the agrarian social structure development and its social actors, as well as its social power, or the representation of rural organizations, just to mention the ones that are relevant to this research.

Specifically, we are going to focus in the political action of one of such organizations: the Sociedad Rural Argentina (SRA), which has been object of analysis that led to opposite conclusions. While some authors claim that it is a powerful organization, others state that such power has already vanished. Therefore, the main goal of this research is to analyse the social power of the SRA across a long period, which embraces from 1989, when the Menem government took office, to the 2008 conflict.

In order to accomplish our goal, we will set as starting point the fact that the social powers of the organization have their origin on the represented subjects. Hence, we aim to prove that despite its social basis is composed by individuals belonging both to capitalist and landlord classes, the political action of the SRA is mainly performed in representation of the last one. Consequently, the hypothesis that leads this enquiry states that the SRA assumes the representation of the agrarian fraction of the argentinian landlords of the pampean region, and as such, it bears the social powers of these social actors in the context of the specificity of capital accumulation in Argentina.

q. Aprobado por (Apellidos y Nombres del Jurado):

Firma y aclaración de la firma del Presidente del Jurado:

Firma del autor de la tesis:

Resumen

El paro agrario desencadenado en marzo del 2008 se constituyó como uno de los más destacados en la larga historia de los conflictos agrarios. Entre sus múltiples resultados, destaca el hecho de que se configuró como disparador de distintos debates de larga data en el interior de la sociología rural hacia la opinión pública, como, la evolución de la estructura social agraria y la caracterización de los sujetos que la conforman, el poder social de que estos dispondrían, y la representatividad de las entidades rurales, tan sólo para nombrar los que aquí interesan. Estas son, en definitiva, las cuestiones que vertebran la investigación aquí expuesta.

Más específicamente, aquí vamos a centrarnos en la acción política de una de las asociaciones en cuestión: la Sociedad Rural Argentina (SRA). Acerca de ella se realizan, como veremos posteriormente, afirmaciones contrapuestas: si, de una parte, se asevera que se trata de una entidad sumamente poderosa, de la otra se postula que su época de mayor poderío habría quedado ya en el pasado. El objetivo principal de esta investigación, por tanto, será analizar la potencia que ésta tiene a lo largo de un período de tiempo relativamente extenso: las casi dos décadas que trascienden entre la asunción a la presidencia de Menem, en 1989, y el decenio de gobiernos neoliberales que la sucedió, y el conflicto del 2008.

Para poder avanzar en él, partiremos de afirmar que la potencia que caracteriza el accionar de la organización en cuestión sólo puede brotar de los sujetos sociales por ella representados. En este sentido, procuraremos demostrar que a pesar de que su base social está compuesta de manera general por individuos que reúnen simultáneamente el carácter de capitalistas y el de terratenientes, la acción política de la entidad se ejerce principalmente en representación de esta última clase social. La hipótesis que guía la presente tesis, en este sentido, toma como punto de partida el hecho de que la SRA asume la representación política de la fracción agraria pampeana de la clase terrateniente argentina, y establece que, como tal, es portadora de las potencias que ésta posee en el marco de la forma específica de acumularse el capital en la Argentina.

Palabras clave: Sociedad Rural Argentina - Terratenientes - Acción política - Acumulación de capital

Summary

The agrarian lockout unleashed in May 2008 has proven itself to be one of the most important across the long history of agrarian conflicts. Among its multiple consequences, stands out the fact that it turned to be the source that triggered long-standing academic debates to public opinion, like the agrarian social structure development and its social actors, as well as its social power, or the representation of rural organizations, just to mention the ones that are relevant to this research.

Specifically, we are going to focus in the political action of one of such organizations: the Sociedad Rural Argentina (SRA), which has been object of analysis that led to opposite conclusions. While some authors claim that it is a powerful organization, others state that such power has already vanished. Therefore, the main goal of this research is to analyse the social power of the SRA across a long period, which embraces from 1989, when the Menem government took office, to the 2008 conflict.

In order to accomplish our goal, we will set as starting point the fact that the social powers of the organization have their origin on the represented subjects. Hence, we aim to prove that despite its social basis is composed by individuals belonging both to capitalist and landlord classes, the political action of the SRA is mainly performed in representation of the last one. Consequently, the hypothesis that leads this enquiry states that the SRA assumes the representation of the agrarian fraction of the argentinian landlords of the pampean region, and as such, it bears the social powers of these social actors in the context of the specificity of capital acumulation in Argentina.

Keywords: Sociedad Rural Argentina - Landlords - Political Action - Capital accumulation

Índice

Abreviaturas de organizaciones y organismos mencionados	11
Agradecimientos	13
Introducción	15
I.1. El rol de la clase terrateniente en los distintos enfoques sobre la estructura social agraria	18
I.2. Enfoques sobre la potencia de la SRA	21
II. La SRA como representante de la clase terrateniente y la potencia de su acción política.....	23
III. Objetivos, estructura y fuentes utilizadas.....	25
Capítulo 1. La acción política en el modo de producción capitalista	29
1.1. El devenir de la teoría marxista de la acción política.....	30
1. 2. El capital como sujeto concreto inmediato de la producción social	37
1.2.1. La unidad entre las relaciones económicas y políticas	41
1.3. Determinaciones generales de la acción política de la clase capitalista	44
1.3.1. Las organizaciones políticas de la clase capitalista	48
1.4. La clase terrateniente y su acción política	50
1.5. Síntesis.....	53
Capítulo 2. La especificidad del proceso de acumulación de capital en la Argentina	55
2.1. La unidad del proceso mundial de acumulación de capital desde sus orígenes y la diferenciación de los procesos nacionales de acumulación. 56	
2.2. La especificidad de la acumulación de capital en la Argentina.....	59
2.2.1. La especificidad de la acumulación de capital en la Argentina desde mediados de la década de 1970	63
2.2.2. La acumulación de capital durante el período 1990-2008.....	64
2.3. La acción política de capitalistas y terratenientes en el proceso nacional de acumulación de capital.....	68
2.4. Síntesis.....	69

Capítulo 3. La acumulación de capital y la estructura social agraria de la región pampeana	71
3.1. La evolución histórica de la estructura social agraria pampeana	71
3.2. Los debates en torno a la propiedad de la tierra	72
3.3. Principales tendencias en la producción agraria hacia la década de 1990.....	77
3.3.1. El proceso de “agriculturización” de la región pampeana	77
3.3.2. El estancamiento en la producción ganadera	81
3.3.3. La estructura social agraria hacia el inicio de la década de 1990	82
3.4. La acumulación de capital y la estructura social agraria en la región pampeana durante el período 1990-2008.....	83
3.4.1. El período 1989-2001	83
3.4.1.1. Evolución de la producción agraria.....	85
3.4.1.2. La concentración y centralización del capital agrario.....	87
3.4.1.3. Los sujetos sociales de la producción agraria	89
3.4.2. Período 2002-2008.....	94
3.4.2.1. Evolución de la producción agraria.....	95
3.4.2.2. La concentración y centralización del capital agrario.....	96
3.4.2.3. Los sujetos sociales de la producción agraria	97
3.5. Síntesis.....	98
Capítulo 4. Características generales de la SRA y rasgos principales de su accionar en la crisis de 1989	101
4.1. Creación, modo de acción, y vínculo con los distintos gobiernos.....	101
4.2. Base social.....	104
4.3. Estructura interna	106
4.4. Dirigencia	110
4.5. Relación de la SRA con otras organizaciones de capitalistas y/o terratenientes	113
4.6. Ideología.....	117
4.7. La SRA hacia fines de la década de 1980	119

4.7.1. El retorno de la democracia y la apertura de una interna política en la SRA	119
4.7.2. La SRA en la crisis de 1989	120
4.7.3. El programa económico de la SRA.....	122
4.8. Síntesis.....	124
Capítulo 5. Los primeros años del gobierno menemista: de la euforia al apoyo crítico (1989-1994)	125
5.1. La SRA ante los primeros pasos del neoliberalismo	126
5.2. La consolidación de la CD	134
5.3. La SRA frente a la instauración de la Convertibilidad y el inicio de una fase de auge de la protesta agraria	136
5.4. De la euforia a la decepción: reevaluación de la política económica y giro hacia una posición de apoyo crítico.....	144
5.5. Consolidación y descrédito de la Comisión Directiva.....	156
5.6. Síntesis del período y forma de la acción política	158
Capítulo 6. Del apoyo crítico a la apoteosis menemista (1995-1997)	165
6.1. Del apoyo crítico a la apoteosis	166
6.2. La unificación de los comités	176
6.3 Síntesis del período y forma de la acción política	179
Capítulo 7. Pedaleando en el aire. La desorientación de la SRA durante la crisis de la convertibilidad (1998-2001)	181
7.1. De la apología a la desesperación.....	181
7.2. ...y del paro al temor	195
7.3. El cuestionamiento de las reformas y la desbandada del G-8.....	205
7.4. La SRA en el derrumbe del neoliberalismo.....	214
7.5. La gestión dirigencial de la entidad, también en crisis	223
7.6. Síntesis del período y forma de la acción política	226
Capítulo 8. El desconcierto. La SRA bajo el gobierno de Duhalde (2002-2003).....	231
8.1. Devaluación y desconcierto.....	231

8.2. Reprocesando la Convertibilidad	235
8.3. El “veranito” y el paro.....	240
8.4. Renovación dirigencial y conformación de la CAI	242
8.5. Síntesis del período y forma de la acción política	246
Capítulo 9. Fantasmas del pasado. La SRA y el regreso del populismo (2003-2008)	249
9.1. Saliendo de la desorientación.....	249
9.2. La acción de la SRA en la crisis de la carne	256
9.3. La SRA ante la consolidación del populismo	268
9.4. “El piquete está de moda”. La SRA en el conflicto del 2008.....	275
9.5. La licuación del contenido político en la crítica de la oposición interna.....	282
9.6. Síntesis del capítulo y forma de la acción política	285
Capítulo 10. La acción política de la SRA: análisis de su representatividad, sus formas concretas y su potencia	289
10.1. Representatividad.....	289
10.2. Ideología.....	298
10.3. Estrategia de acción	302
10.4. Alianzas.....	309
10.5. Las disputas en el seno de la CD	311
10.6. La potencia de la acción política de la SRA	313
10.6.1. La SRA y los límites de su acción política	314
10.6.2. La SRA y los límites a la apropiación de renta de la tierra.....	319
Conclusiones generales	323
Anexo 1. Fuentes estadísticas	327
1. Magnitud y apropiación de la renta agraria en millones de \$ año 2004: 1976-2007	327
2. Porcentaje del total de renta de la tierra apropiado por la clase terrateniente: 1976-2007	327

3. Existencias totales de ganado bovino en millones de cabezas: 1875-2008.....	328
4. Exportación de carne fresca, porcentaje sobre el total producido: 1958-2008.....	328
5. Producción anual de granos en las provincias de la región pampeana, total y por producto, en toneladas: 1989-2008.....	329
6. Superficie sembrada anual de granos y oleaginosas en las provincias de la región pampeana, total y por producto, en hectáreas: 1989-2008.....	329
7. Precios promedio anuales en el mercado mundial de los granos de maíz, trigo y soja en US\$ por tn (FOB golfo): 1989-2008	330
8. Precios del arrendamiento de la tierra en la región pampeana para zonas agrícolas y ganaderas en US\$ por hectárea y quintales/kilaje.	330
9. Indicadores ganaderos: 1990-2008.....	331
10. Superficie y número de EAPs en la región pampeana: 1988 y 2002.....	331
Anexo 2. La SRA y el devenir del predio de Palermo	333
Fuentes primarias y sus abreviaturas	345
Diarios y revistas.....	345
Documentos de la SRA	345
Otros documentos institucionales.....	345
Bibliografía	347

Abreviaturas de organizaciones y organismos mencionados

BAPRO:	Banco Provincia.
BCRA:	Banco Central de la República Argentina
CARBAP:	Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.
CAI:	Cadena Agroindustrial
CARSFE	Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe
CARTEZ:	Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona
CEA:	Consejo Empresario Argentino
CF:	Chacareros Federados
CI:	Capitanes de la industria
CIARA-CEC:	Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales.
CD:	Comisión Directiva de la SRA
CONINAGRO:	Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada
CNA:	Consejo Nacional Agropecuario
CRA:	Confederaciones Rurales Argentinas
DGI:	Dirección General Impositiva
FAA:	Federación Agraria Argentina
FCA:	Foro de la Cadena Agroindustrial
FREPASO:	Frente País Solidario
G-8:	Grupo de los 8
GP:	Grupo Productivo
IEE:	Instituto de Estudios Económicos de la SRA
INDEC:	Instituto Nacional de Estadística y Censos
MECON:	Ministerio de Economía
MINAGRI:	Ministerio de Agricultura
ONABE:	Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado
SAGPYA:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
SENASA:	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
UATRE:	Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

Agradecimientos

A pesar de que la graduación doctoral tiene por requisito la presentación y defensa de una tesis realizada exclusivamente por el doctorando, es claro que está lejos de tratarse de un proceso estrictamente individual. Mi deseo en estas líneas, por lo tanto, es agradecer a todas aquellas personas o instituciones que, de una u otra forma, han sido parte de esta labor.

En primer lugar a Juan, quien contribuyó enormemente a desentrañar las cuestiones más abstrusas que fueron emergiendo a lo largo de la investigación, así como a dotarla de un contenido mucho más preciso. También a Gastón, a quien atormenté inacabablemente con una multitud de absurdos teóricos, problemas inconducentes y redacciones escabrosas, todo lo cual no logró amedrentarlo jamás. Sin la dirección de ambos, esta tesis simplemente no hubiera podido escribirse.

A toda la gente que trabaja en el posgrado UNGS-IDES, y que también fueron parte de esta empresa. En particular, a Silvio y Andrés por su predisposición y su comprensión de las diversas inquietudes y cuestiones que hacen a la vida cotidiana del doctorando. Lo mismo se aplica a Vanesa y Sabrina, quienes no dejaron de darme una mano cada vez que les fue posible.

Institucionalmente, al CONICET, que hizo posible que me dedicara a este trabajo a tiempo completo durante cinco años, así como al DAAD, que me permitió enriquecerlo mediante una breve estadía en Berlín. También a toda la gente del Ibero-Amerikanisches Institut, y particularmente a Bárbara Göbel y Peter Birle, que se ocuparon de que me halle a gusto y me hicieron sentir como en casa.

Finalmente, a Mariana, por acompañarme en mis avances y mis frustraciones, por compartir incertidumbres y realidades, desilusiones y esperanzas. En suma, por estar ahí siempre a lo largo de todos estos largos años de tesis. Sin su contención y apoyo incondicionales jamás hubiera podido finalizarla.

Introducción

El 11 de marzo del 2008 se desencadenó en la Argentina uno de los conflictos más significativos de la larga historia de enfrentamientos agrarios. Tres meses de paro con interrupciones y reinicios, múltiples manifestaciones por parte de los bloques en pugna, desabastecimiento de productos alimenticios en los centros urbanos, camiones derramando leche en cantidades industriales, numerosos cortes de rutas, y una votación final en el Congreso que se cerró dramáticamente a altas horas de la madrugada mediante el voto “no positivo” del propio vicepresidente de la nación, fueron algunos de los rasgos que permiten otorgar semejante status al fenómeno.

Políticamente, el conflicto fue decodificado como un enfrentamiento entre el gobierno y el sector agrario, representado institucionalmente por las cuatro organizaciones gremiales de alcance nacional aglutinadas en la Mesa de Enlace: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). En este sentido, el resultado del enfrentamiento se convirtió en un hecho sumamente significativo, ya que se configuraba como uno de los reveses políticos más serios que había enfrentado el gobierno.

Por otra parte, el fenómeno se configuró como un disparador de distintos debates de larga data en el interior de la sociología rural hacia la opinión pública. Entre ellos, destacan la evolución de la estructura social agraria y la caracterización de los sujetos que la conforman, el poder social de que estos dispondrían, y la representatividad de las entidades rurales, tan sólo para nombrar los que aquí interesan. Porque son éstas, en definitiva, las cuestiones que vertebran la investigación aquí expuesta.

Más específicamente, aquí vamos a centrarnos en la acción política de una de las asociaciones en cuestión: la SRA. Acerca de ella se realizan, como veremos posteriormente, afirmaciones contrapuestas: si, de una parte, se asevera que se trata de una entidad sumamente poderosa, de la otra se postula que su época de mayor poderío habría quedado ya en el pasado. El objetivo principal de esta investigación, por tanto, será analizar la potencia que ésta tiene a lo largo de un período de tiempo relativamente extenso: las casi dos décadas que trascienden entre la asunción a la presidencia de Menem, en 1989, y el decenio de gobiernos neoliberales que la sucedió, y el conflicto del 2008, que se constituye como el punto más alto en la conflictividad agraria durante los años de la posconvertibilidad y del período completo. El propósito de abarcar un lapso de extensión semejante radica, precisamente, en la posibilidad de observar la acción de la SRA no sólo en un período lo suficientemente prolongado, sino también caracterizado por un contexto en el que se

transforma la representación política general del proceso nacional de acumulación de capital, que pasa del más crudo neoliberalismo a un populismo¹ de intensidad creciente.

Para poder avanzar en este objetivo, partiremos de afirmar que la potencia que caracteriza el accionar de la organización en cuestión sólo puede brotar de los sujetos sociales por ella representados. En este sentido, procuraremos demostrar que a pesar de que su base social está compuesta de manera general por individuos que reúnen simultáneamente el carácter de capitalistas y el de terratenientes, la acción política de la entidad se ejerce principalmente en representación de esta última clase social. La hipótesis que guía la presente tesis, en este sentido, toma como punto de partida el hecho de que la SRA asume la representación política de la fracción agraria pampeana de la clase terrateniente argentina, y establece que, como tal, es portadora de las potencias de ésta.

Esta forma particular de plantear el conocimiento de la realidad social se fundamenta, como argumentaremos en el primer capítulo de esta tesis, en la crítica de la economía política desarrollada primeramente por Karl Marx. Creemos que la presentación más acabada de este punto de vista, sin embargo, puede hallarse específicamente en los trabajos de Juan Iñigo Carrera (2003; 2007a), en los cuales se apoya el desarrollo general de esta tesis. Como veremos en el segundo capítulo, se trata de un enfoque que también ha demostrado ser particularmente útil para la comprensión de la acumulación de capital en la Argentina, así como de sus formas políticas. Asimismo, y en lo que respecta al objeto de esta tesis, también ha resultado fructífero a la hora de dar cuenta del contenido de la acción política de la asociación aquí estudiada.

Sobre esta base, entonces, nos detendremos en la acción política de la SRA a lo largo del período referido, haciendo hincapié en algunos aspectos clave, como el vínculo entablado con los distintos gobiernos, su estrategia de acción, su esquema de alianzas, y la distinta forma en que sus miembros procuraron orientar la acción de aquella, lo que resultó ocasionalmente en disputas internas. El análisis de estos aspectos específicos nos permitirá avanzar hacia la comprensión del sentido general de su acción política a lo largo del período. En este sentido, es necesario explicarse, por ejemplo, por qué la entidad sostuvo a lo largo de toda la década neoliberal un vínculo con los distintos gobiernos (y particularmente con el menemista) que muchos, incluso en su propio seno, juzgaron de excesiva cercanía, y ello a pesar de que, como la dirigencia de la SRA no dejó de advertir, el esquema económico implementado estuvo lejos de ser favorable al sector agrario. O por qué, a lo largo de esos años, sostuvo una alianza con la asociación que representa a

¹ Contrariamente al uso peyorativo con que frecuentemente se inviste al término "populismo", aquí vamos a utilizarlo en su sentido más estricto, esto es, como referente al pueblo. Por lo tanto, los gobiernos populistas son los que parecieran expresar el interés general del pueblo, o más bien, de la nación. Por cierto, otros autores, entre los que destaca Laclau (2005), han ido más lejos en la utilización del término, invirtiendo su sentido y asignándole un contenido positivo.

algunos de los principales capitales industriales, a los que había enfrentado duramente acusándolos de ser “ineficientes”. O por qué la alianza entablada posteriormente con los capitales del sector agroindustrial, que a priori nucleaba actores sociales más homogéneos, mostró prontamente poseer escasa capacidad para intervenir políticamente. Y más allá de la forma concreta que va tomando su acción política, en última instancia, la pregunta se dirige hacia la potencia que ésta muestra tener en relación a lo que, plantearemos posteriormente, constituye el objeto principal de la acción de los terratenientes: la apropiación de renta de la tierra.

Pero es precisamente la apropiación de fracciones de dicha masa de riqueza social uno de los ejes sobre los que sostiene, argumentaremos, el proceso de acumulación de capital en la Argentina. En efecto, dicho proceso tiene aquí la particularidad de estar conformado por una masa de capitales industriales que ponen en acción un trabajo social de productividad sustancialmente menor a la que determina el precio que rige en el mercado mundial, lo que implica un costo de producción correspondientemente mayor, y a su vez, una reducción en la tasa de ganancia. Una de las formas en que dicha merma se ve compensada es, precisamente, la apropiación de fracciones de renta de la tierra, proceso que se realiza bajo distintos mecanismos que examinaremos posteriormente.

Esta caracterización permite especificar más la hipótesis. En tanto organización que representa a la fracción agraria pampeana de la clase terrateniente, la potencia de la acción política de la SRA sólo puede constituirse como expresión de las potencias que porta dicha clase en el proceso nacional de acumulación de capital. Con lo cual, esta acción resulta incapaz de detener la apropiación de una fracción de renta de la tierra agraria por sujetos distintos de los terratenientes y, al mismo tiempo, se constituye en el vehículo de la apropiación de la fracción restante. Las formas concretas bajo las que esto sucede, por lo tanto, serán objeto de estudio en la presente tesis.

Antes de avanzar en el desarrollo de la tesis, cuya estructura en capítulos sintetizaremos posteriormente, es pertinente sintetizar el estado de la cuestión respecto de la potencia de la SRA en tanto organización política. En este sentido, argumentaremos, los enfoques predominantes tienen por base el rol jugado por la clase terrateniente en la estructura social agraria (y, consecuentemente, en el proceso nacional de acumulación de capital). En lo que sigue, por lo tanto, presentaremos brevemente estas cuestiones.

I.1. El rol de la clase terrateniente en los distintos enfoques sobre la estructura social agraria²

Una de los enfoques más persistentes respecto de la producción agraria argentina se caracteriza por el rol destacado que ocupa la clase terrateniente, particularmente en el interior de la región pampeana. En la corriente marxista, esta interpretación surge ya en el siglo XIX (véase, por ejemplo, Ave-Lallemant (2008 [1835-1910]) y se mantiene hasta nuestros días (por ejemplo en el análisis de Azcuy Ameghino (2007b)).

El representante más acabado de esta interpretación en la actualidad, sin embargo, probablemente sea Eduardo Basualdo, ya que además de sostener reiteradamente esta línea explicativa ha procurado fundamentarla mediante un extenso procesamiento estadístico, diseminado en una serie de trabajos. Detengámonos entonces, brevemente, en el análisis de su argumentación.

De acuerdo a este autor, la historia argentina puede entenderse a partir de la sucesión de distintos “patrones de acumulación”, esto es, articulaciones de variables económicas cuyo sostén está liderado por bloques de poder específicos, en los que se nuclea distintas fracciones del capital (Basualdo, 2007). Estos bloques, señala este autor, han tenido a lo largo de la historia a un mismo sujeto social dominante: la “oligarquía diversificada”. Se trata de una fracción del capital constituida originariamente por la “oligarquía pampeana”, esto es, los terratenientes de mayor tamaño, que con el desarrollo de la industrialización sustitutiva diversificaron sus actividades hacia la industria. Así, si durante el “modelo agroexportador” los terratenientes se constituían tanto en el actor central del bloque social que lo lideraba como en los principales beneficiarios de éste, en los patrones de acumulación sucesivos seguían siendo los actores centrales de los bloques que los lideraban, montados sobre la ventaja que les daría su diversificación en un contexto en que los continuos vaivenes en la acumulación favorecían la expansión de uno u otro sector (Basualdo, 2006).

Como puede apreciarse, la hipótesis de Basualdo se apoya fuertemente en la existencia, o más bien en la persistencia, de una clase terrateniente sumamente poderosa. Y, efectivamente, este autor considera que la producción agraria sigue estando dominada por grandes propietarios de tierras, cuya fracción principal se haya diversificada (Basualdo, 2008).

Para sostener este argumento, realizó una serie de trabajos en los que se esfuerza por identificar el tamaño de las propiedades sobre la tierra, tomando como fuente principal el catastro inmobiliario de la provincia de Buenos Aires y valiéndose de otras fuentes

² La caracterización original de estos enfoques se halla presentada en la tesis de doctorado de Caligaris (2014b), que aquí sintetizamos.

complementarias (Basualdo & Khavisse, 1993; Basualdo, 1996; Basualdo & Bang, 1997; Basualdo, 1998). Allí se intenta demostrar la hipótesis de que durante las últimas décadas, y con el objeto de eludir impuestos y conservar el tamaño de la escala de producción ante el avance de la subdivisión provocada por la herencia, las principales formas jurídicas mediante las que se gestiona la propiedad de la tierra han variado, predominando ahora los condominios y grupos societarios. Sobre esta base, se sugiere procesar las partidas inmobiliarias agrupándolas de forma tal de aprehender el verdadero movimiento que sigue la propiedad de la tierra, oculto tras las formas jurídicas mencionadas. El resultado al que arriba el autor, y que queda expuesto en los trabajos previamente mencionados, es que un 32% de las tierras productivas de Buenos Aires pertenece a “grandes propietarios”.

En abierto contraste con la línea argumentativa que concibe a una clase terrateniente poderosa y que domina en la producción agraria, durante la década de 1970 comenzó a desarrollarse una concepción que presentaba al “productor medio” como un sujeto social innovador, dinámico, y guiado por una racionalidad capitalista (véase por ejemplo el trabajo de Flichman (1970-1)). Entre los distintos autores que trabajan en esta línea, los trabajos que mejor la expresan son los realizados por Barsky y Pucciarelli (Barsky & Pucciarelli, 1991; Barsky, 1997; Pucciarelli, 1997a; Pucciarelli, 1997b), desarrollados en abierta polémica con las hipótesis de Basualdo. A continuación los sintetizaremos muy esquemáticamente.

La principal hipótesis que surge de estos análisis es que, tras la consolidación de la frontera agraria y la distribución de la tierra pampeana a principios del siglo XX, se habría iniciado un proceso de subdivisión de las unidades territoriales de producción de mayor tamaño, al tiempo que tomó lugar otro proceso contrapuesto de concentración de la superficie media de las explotaciones. Hacia la década de 1970, el resultado de estos movimientos se expresa en un resultado que los autores denominan “desconcentración sin dispersión”, esto es, en que la continua subdivisión de las unidades más grandes no tiene como consecuencia la multiplicación de las más pequeñas, sino el engrosamiento de las que se ubican en la mitad de la escala. Asimismo, este proceso de división de las unidades de producción coincide con el movimiento de desconcentración en la propiedad de la tierra que se evidencia en los datos catastrales (Barsky & Pucciarelli, 1991). En síntesis, para estos autores, tanto las unidades de producción como la propiedad de la tierra arrastran desde principios del siglo pasado un movimiento de desconcentración que converge hacia un tamaño medio.

Como se ve, el rol de los terratenientes aparece aquí marcadamente disminuido. No sólo porque ya no son presentados como los sujetos dominantes de la producción agraria, sino porque se afirma que el movimiento que sigue la propiedad de la tierra toma una forma opuesta a la que caracteriza el enfoque anterior. En este sentido, el fenómeno de la

expansión de nuevas formas jurídicas que encubrirían un movimiento de concentración de la propiedad es considerado por los autores como una contratendencia, cuya potencia no alcanza a contrarrestar el movimiento anterior. A tal punto es negado en este análisis el poder que acumularían los terratenientes, que estos ni siquiera son presentados como tales. Por el contrario, y haciendo abstracción de la división de la sociedad capitalista en clases, los autores estructuran la rama agraria en “productores” de distinta dimensión, entre los cuales destacan, como afirmamos previamente, los de tamaño medio.

Un tercer enfoque, en el interior del cual sobresalen especialmente los trabajos de Bisang (2003; 2007; 2008) plantea que, a partir de la serie de transformaciones que caracterizan a la producción agraria durante la década de 1990, y particularmente respecto de la de soja, habría advenido un “nuevo modelo” de organización de la producción. Dicho modelo, frecuentemente referido como de “producción en red”, está caracterizado precisamente por la separación de las distintas funciones que se hallaban anteriormente reunidas en el productor tradicional. De esta forma, el nuevo modelo productivo se configura sobre la confluencia de distintos sujetos sociales, entre los que destacan los empresarios agrarios (frecuentemente caracterizados como “empresarios innovadores”), los contratistas de servicios y los propietarios de la tierra.

Como puede apreciarse, también aquí el rol de la clase terrateniente se ve relativizado ya que, lejos de ser el sujeto dominante de la producción agraria, se limita a participar de la producción en red entregando sus tierras en arriendo. Su relevancia se ve incluso disminuida de otra forma: esta línea de investigación tiende a acentuar el rol que juegan en la producción los pooles de siembra, que aparece como la quintaesencia de la producción en red. Y los casos más notables de esta forma específica de producción, esto es, los que producen sobre grandes extensiones de superficie, destacan tanto por este hecho como porque la totalidad o la mayor parte de la producción se realiza sobre tierras arrendadas. Como sintetiza Hernández (2009) al retomar el punto de vista de lo que presenta como empresario propio del paradigma del *agribusiness*, “la propiedad de la tierra, soporte material en la construcción de la identidad chacarera, pasa a tener un status totalmente subordinado en la dinámica de la ruralidad globalizada”, ya que la nueva lógica productiva “sitúa la competitividad en la gestión de la tierra y no en su propiedad”, con lo cual “adquiere plenamente sentido la expresión «los sin tierra» como emblema identitario de los empresarios «innovadores»” (pág. 53).

Así, la clase terrateniente aparece teniendo una importancia y un rol desigual en los distintos enfoques sobre la estructura social de la producción agraria. Detengámonos a continuación, entonces, en los análisis respecto de su representación política.

I.2. Enfoques sobre la potencia de la SRA

Tal como señalan numerosos autores, la SRA se constituye como representación política de la fracción agraria pampeana de la clase terrateniente. Con lo cual, sería esperable que los análisis que se detienen específicamente en dicha organización reflejen, de una u otra forma, los distintos enfoques acerca del rol jugado por dicha clase. Y efectivamente, así es. De hecho, estos pueden ser divididos, esquemáticamente, entre los que afirman que se trata de una entidad poderosa y los que buscan mostrar que, por distintas razones, en las últimas décadas, la SRA ha comenzado a atravesar un proceso por el cual está perdiendo su poderío.

Entre aquellos que atribuyen a la SRA un gran poder económico y político se halla, en primer lugar, el propio Basualdo. Este autor, cabe destacar, jamás hace referencia directa a la entidad en cuestión. Sin embargo, como destaca agudamente Panero (2013) respecto de las dos pasadas décadas, muchos de los sujetos que Basualdo identifica como miembros de la "oligarquía agropecuaria" figuran como socios, e incluso como dirigentes, de la SRA. De ello habría que concluir, señala, que "para esta perspectiva, la SRA seguiría conservando un gran poderío" (pág. 333).

La investigación que emprende de Palomino (1988) llega a conclusiones similares respecto del período 1955-1983. Esta autora se detiene en el análisis de las formas concretas que tomaría ese poder económico a nivel político. Específicamente, busca indagar en la capacidad de influencia que tendría la entidad, a través de sus miembros, en las decisiones de los funcionarios gubernamentales, para lo cual toma como indicador la participación de aquéllos en los sucesivos equipos de gobierno. La autora concluye que para dicho período, y valiéndose exclusivamente de este indicador, "no cabe duda de que la SRA dispone de poder, aun cuando éste no sea tan hegemónico como en las primeras décadas del siglo XX" (pág. 77). Tales conclusiones pueden extenderse hacia parte del período analizado aquí. Si bien los miembros de la SRA no ocuparon posiciones destacadas en los gobiernos neoliberales, tanto Heredia (2003) como Muro de Nadal (2009) ponen de manifiesto que la dirigencia de la entidad tuvo un acceso sumamente fluido a los funcionarios más destacados del gobierno, incluyendo el propio Presidente.

En contraste, otros autores sugieren que, en el período estudiado, la SRA exhibe un poderío económico y político declinante. En este sentido, Sidicaro (1982) afirma que, ya a principios de la década de 1980, la fracción de clase que denomina "gran burguesía agraria" y es representada políticamente por la SRA ingresa en un proceso que el autor denomina "incapacidad de dirección", y que refiere a la imposibilidad de postular un proyecto político que logre la adhesión consensuada de sectores más amplios de la sociedad. Así, la imagen positiva de una elite progresista y dinámica que habría concitado a lo largo del llamado

“período agroexportador”, en el que sí habría logrado hacer coincidir sus intereses con los distintos sectores sociales, acabó por verse sustituida por la de una clase orientada hacia la búsqueda de sus propios beneficios. En contrapartida, sin embargo, Sidicaro señala que habría conservado un cierto “poder de invalidación”, por el cual mantiene aún cierta eficacia para enfrentar las propuestas que podrían afectarla negativamente.

Heredia (2003), por su parte, plantea que la SRA se halla en decadencia, producto de las transformaciones económicas sucedidas durante la década de 1990 (en especial, de la sobrevaluación del peso), que habrían afectado especialmente al sector agrario. A pesar de ello, dicha entidad habría apoyado de manera casi irrestricta al gobierno que las puso en marcha, lo que le causó una pérdida de poder simbólico evidenciada en la puesta en cuestión de sus fundamentos identitarios: el liberalismo económico, el antiperonismo y el tradicionalismo. Por otra parte, tanto la contracción relativa del volumen exportable de mercancías agrarias como la introducción de una nueva política fiscal como parte de las reformas económicas habrían disminuido la dependencia del Estado respecto de los “productores” agrarios, redireccionando la base impositiva hacia el consumo.

Similares apreciaciones ofrece, para el mismo lapso, el estudio de Muro de Nadal (2009). La autora afirma, por una parte, que la SRA fue incapaz de acompañar las transformaciones tanto respecto de los desarrollos tecnológicos como de la gestión del capital agrario. Por otra parte, señala, la fluidez que mostró el vínculo entre la asociación y el gobierno menemista estuvo lejos de garantizarle, como plantea de Palomino, un poder político. La autora menciona algunas de las medidas que más afectaron a la rama agraria a lo largo del gobierno menemista, que contraponen al aparente poder político que significaría el acceso directo al gobierno: “la relación de la Comisión Directiva con el Poder Ejecutivo pasó por sus mejores momentos [...]. Sin embargo, ese acceso directo no garantizaba que las medidas que los perjudicaban fueran removidas, [sino] todo lo contrario” (pág. 218).

Por último, Panero (2013) afirma que, a partir de la década de 1990, “se ha producido una pérdida de centralidad de [la] SRA en tanto entidad que poseía la preeminencia representativa de [...] las fracciones dominantes del sector agropecuario argentino” (pág. 324), hecho que se habría producido por dos razones principales. En primer lugar, a raíz de un “desacople” entre los intereses de la “fracción dominante” del agro, que desde mediados de la década de 1990 se estructuraría en torno a la producción de soja transgénica. Así, Panero toma como punto de partida la hipótesis de Basualdo respecto de la existencia de una fracción económica dominante constituida por una oligarquía diversificada o dedicada principalmente a la actividad ganadera (Panero, 2014, pág. 1). Como ya habíamos señalado, y a partir del análisis de los trabajos de aquél autor, Panero asume que la representación política de aquélla está en manos de la SRA. A partir de la década de 1990, sin embargo, esta fracción habría perdido el predominio económico, que se

relocalizaría en la producción de soja, realizada por sujetos sociales completamente distintos. Panero señala, al respecto, que la SRA no sólo se desinteresó por estas transformaciones tecnológicas, como afirma Muro de Nadal, sino que sus propios miembros prefirieron no pasarse a la producción de soja (o lo hicieron muy tardíamente), con lo cual la SRA ya no representaría a la fracción dominante (2013; 2014).

En segundo lugar, el autor sugiere que durante la década de 1990, la serie de transformaciones macroeconómicas dieron lugar a que los “productores” tuvieran una mayor necesidad de resolver problemas de tipo microeconómicos que de sostener una representación política (o “gremial”, como refiere Panero). La SRA, sin embargo, habría sido incapaz de dar respuesta a esta necesidad, lo que se expresa en “la pervivencia en [...] acciones y discursos de una lógica de representación de perfil gremial, que ve disminuida su eficacia en momentos en que se verifica una disminución de la capacidad estatal en el establecimiento de políticas macroeconómicas, ámbito privilegiado del accionar gremial” (Panero, 2013, pág. 324). Sobre esta base, señala, las organizaciones rurales surgidas recientemente expresan esta necesidad de forma más adecuada, disminuyendo así la capacidad representativa de la SRA. Al mismo tiempo, el autor plantea que, paradójicamente, cuando la SRA tuvo mayor acceso al gobierno, éste había perdido buena parte de su capacidad de gestión sobre la economía; mientras que cuando la recuperó, tras la devaluación del 2001, la entidad fue incapaz de entablar un vínculo similar con los gobiernos que se sucedieron.³

II. La SRA como representante de la clase terrateniente y la potencia de su acción política

En síntesis, como hemos vistos, los distintos autores que se detienen en el análisis de la SRA le atribuyen una magnitud de poder social desigual: o bien la entidad aparece representada como sumamente poderosa, o bien tiende a ser descripta como perdiendo aceleradamente dicha característica. Cabe entonces formular el interrogante, que se constituye como el principal objetivo de esta tesis, acerca de la potencia social de que dispone, en verdad, la SRA.

³ La hipótesis de que las condiciones macroeconómicas existentes durante la década de 1990 reducen la necesidad, por parte de los sujetos sociales de la producción agraria, de sostener una representación política eficaz, al tiempo que incrementan la de que las asociaciones que los representan se vuelquen hacia el desarrollo de la gestión microeconómica, es formulada por vez primera por Lattuada (2003), quien se centra principalmente en la Federación Agraria Argentina. De forma paralela, Bocchicchio & Cattáneo (2005) analizan lo que bajo la misma hipótesis constituye el anverso de la medalla, centrándose en los casos de AAPRESID y ASAGIR, organizaciones que se centran exclusivamente sobre cuestiones técnicas y dejan de lado (al menos en principio) todo tipo de acción política. Por último, Anlló (2013) destaca que durante la década de 1990 habría surgido un “nuevo sujeto social” en la producción agraria, organizado bajo la forma de “producción en red” ya referida y que, por lo tanto, requiere de una representación que también difiere por ser más técnica y menos gremial. Sin aludir a ninguna entidad agraria específica, el autor plantea que la representación general podría estar transformándose.

Para hacerlo, en primer lugar, es necesario dar cuenta de qué sujetos sociales son representados políticamente por la organización. Hasta aquí, en este sentido, hemos partido de afirmar que ésta representa a la clase terrateniente agraria argentina, sobre la base de los análisis realizados por distintos autores.

Se trata, no obstante, de una cuestión que requiere mayor clarificación. En efecto, la mayoría de estos autores destaca que, en realidad, los sujetos que conforman dicha base social son al mismo tiempo terratenientes y capitalistas. E incluso aquéllos que hacen referencia exclusivamente a la primera condición, no dejan de imputarles funciones que pertenecen en realidad a los capitalistas (como la organización de la producción, por ejemplo), sino incluso la propiedad de un capital.

En este último grupo se ubican tanto de Palomino (1988) como Makler (2008), Panero (2013; 2014) y Hora (1994), que refieren a los sujetos representados como “grandes terratenientes”, “grandes propietarios”, “terratenientes pampeanos”, o simplemente, “terratenientes”. Gálvez (2012), por su parte, también los caracteriza como “grandes terratenientes”, aunque los subsume en la categoría del “empresariado”. Otros autores destacan de forma más clara la doble condición de capitalista y terrateniente que detenta la generalidad de su base social: de Imaz (1964) entiende que se trata al mismo tiempo de “grandes ganaderos” y “grandes propietarios”; Azcuy Ameghino (2004) los define como “grandes terratenientes y capitalistas agrarios” (añadiendo ocasionalmente el epíteto de “latifundistas”); mientras que Sanz Cerbino (2014) los refiere también como “burguesía terrateniente”. También Heredia (2003) y Muro de Nadal (2009) distinguen ambas condiciones al mencionarlos, aunque lo hacen reduciendo su condición de capitalistas a la de abstractos “productores”. Tan sólo Sidicaro (1982) soslaya su condición de terratenientes al referirlos de manera general como “gran burguesía agraria”, aunque posteriormente aclara que se trata además de “propietarios de grandes establecimientos rurales localizados en la región pampeana”.

En síntesis, ya sea que se caracterice a su base social como un conjunto de terratenientes capitalistas, o que se los refiera simplemente como terratenientes (aunque, como vimos, se les reconozca implícitamente la condición de capitalistas), lo que subyace en estos análisis es que la SRA representa políticamente a estas dos clases sociales, sobre la base de que los socios de la entidad personifican al mismo tiempo a ambas.

Sobre esta base, el otro objetivo de la presente investigación consiste en demostrar que, a pesar de que su base social está mayormente compuesta por individuos que reúnen ambas condiciones, la SRA se constituye, de manera general, como representación política de la clase terrateniente agraria. Esto no significa, ciertamente, que su acción política no se ejerza en ningún momento en representación de la fracción agraria de la clase capitalista. Lo que procuraremos mostrar, en este sentido, es que la orientación general de su acción no se

limita a la representación política de los intereses de su base social, sino que se extiende a la generalidad de los terratenientes agrarios de la región pampeana.

III. Objetivos, estructura y fuentes utilizadas

Repasemos, entonces, los objetivos de la tesis. Habíamos afirmado previamente que si se caracteriza a la SRA como representante político de dicha fracción de clase, la potencia que va a tener su acción política será la que corresponda a su ser social. Sobre esta base, la caracterización de la SRA como organización que representa políticamente dichos sujetos sociales se constituye como uno de los objetivos de esta tesis. Ya efectuado este reconocimiento, el siguiente objetivo refiere al análisis de la potencia que ésta tiene a lo largo del período 1989-2008.

Para hacer esto, daremos cuenta de las acciones políticas que realiza la entidad durante este período, deteniéndonos específicamente en la relación entablada con los distintos gobiernos, que alterna o combina tanto distintas formas de negociación como de protesta, así como en las alianzas que establece con las restantes organizaciones. Al mismo tiempo, interesa avanzar sobre la dinámica interna de la SRA. Específicamente, vamos a procurar integrar al análisis las discusiones entre las corrientes políticas internas.

Expuestos ya los objetivos principales de la tesis, así como el estado de la cuestión, en lo que sigue daremos cuenta de la forma en que aquélla se estructura. En líneas generales, se halla dividida en diez capítulos, a los que se suman las conclusiones generales. A ellos siguen dos anexos.

En el primer capítulo nos detendremos en algunas determinaciones generales de la acción política de las clases capitalista y terrateniente. Allí, tras sintetizar algunos de los aspectos más destacados de los desarrollos efectuados por corrientes marxistas respecto de dicha cuestión, expondremos posteriormente nuestro punto de vista.

El análisis de la acción política de la SRA, sin embargo, no puede enmarcarse en estas determinaciones generales, sino que debe hacerlo en el contexto económico y político nacional. El siguiente paso en el análisis, por lo tanto, está dado por el desarrollo de la especificidad que toma el proceso argentino de acumulación de capital en la unidad mundial de la acumulación, así como a las formas concretas que éste toma durante el período 1990-2008, tarea a la que nos abocamos en el segundo capítulo.

Un tercer paso, en este mismo sentido, está dado por la síntesis de los aspectos más relevantes que toma la acumulación de capital en la rama agraria y en su estructura social. Desarrollaremos estas cuestiones en el capítulo siguiente, haciendo hincapié en las principales transformaciones que tienen lugar en el interior de la región pampeana.

Los capítulos siguientes están destinados al análisis de la SRA. En el primero de ellos vamos a presentar algunas de sus características generales. Específicamente, nos referiremos a su creación y el tipo de relación que tiende a establecer con los gobiernos de distinto signo político, su base social, estructura interna, dirigencia, relación con otras organizaciones e ideología. Adicionalmente, sintetizaremos los rasgos más destacados de su acción política en el contexto de la crisis de finales de la década de 1980, entre los que se incluye la presentación de un programa económico con el que sugerían su abordaje. En los cinco capítulos posteriores se expone la forma concreta que cobró la acción política de la SRA, haciendo eje en los aspectos anteriormente señalados, y dividiendo el período en cinco subperíodos, tres de los cuales corresponden a distintos momentos de la fase neoliberal, mientras que los dos restantes refieren a la fase posterior. En el último capítulo de la tesis analizaremos el contenido de dicha acción, nuevamente centrándonos, en primer lugar, en las cuestiones ya señaladas, para avanzar finalmente sobre la potencia de aquélla.

Un último apartado, titulado *Conclusiones generales*, cierra la tesis. Allí volveremos sobre las conclusiones, presentándolas ahora como corolario de los desarrollos anteriores, que a su vez sintetizaremos.

A los capítulos siguen dos anexos. En el primero se agrupan los distintos cuadros, gráficos y tablas estadísticas con las que se ilustran algunas referencias pertenecientes a los capítulos 2 y 3. En el segundo se condensa, con base en notas de tipo periodístico, el devenir del predio de Palermo a lo largo de este período, ocasionalmente mencionado a lo largo de la tesis.

Por último, vamos a referirnos brevemente a las fuentes utilizadas. Tanto las acciones políticas de la SRA como los análisis de la coyuntura sobre los que se basa para actuar se hallan recopilados en los documentos de la entidad, a los que hemos podido acceder. Entre estos, interesan particularmente dos tipos: en primer lugar, la revista *Anales*, cuya publicación tiende a ser trimestral, aunque en ocasiones se hace bimensual o incluso mensual. Allí se publican notas referentes a la actualidad de la producción agraria, la coyuntura económica y política, las novedades institucionales, u otras más bien de contenido general, aunque siempre vinculadas o bien a la asociación o bien a la producción. La línea política de la entidad suele reflejarse en los editoriales de la revista, a cargo del director de la publicación. Si bien se trata de una revista que circula principalmente entre los miembros de la organización, está destinada también al público general, que puede adquirirla o, más recientemente, consultarla en internet.

La otra serie de documentos, *Memoria y Balance*, es de publicación anual. Allí se presenta a los socios un informe económico general y también uno específico sobre la producción agraria, seguido por una segunda parte titulada “acción social”, en la que se reflejan las intervenciones de la entidad en la vida política y se transcriben los discursos y

comunicados emitidos. A ello precede una síntesis de la Asamblea Ordinaria que incluye las elecciones de dirigentes y las decisiones tomadas por la misma, así como los movimientos en el número de miembros. Entre los años 1989 y 2001, asimismo, se transcribe el discurso con el que el presidente de la asociación abre la asamblea. Finalmente, se publica el balance anual.⁴

Para reconstruir la acción política de la SRA también hemos recurrido a notas publicadas en diarios. Esto permite, por una parte, acceder a declaraciones de los dirigentes de la entidad que no aparecen en las Memorias por no tratarse de actos oficiales, así como recabar mayor información respecto de sus acciones de protesta. Por otra parte, la acción de las distintas corrientes internas en el seno de la dirigencia tampoco es registrada por las publicaciones de la entidad, a excepción de las elecciones internas.

Hemos consultado principalmente, en este sentido, los principales tres diarios de tirada nacional, esto es, La Nación, Clarín, y Página/12. El primero de ellos probó ser el que mayor espacio dedicó a las cuestiones de la producción agraria y sus organizaciones políticas, y en particular, a la SRA.⁵ El último, por su parte, también dedicó un espacio no menor a la organización, aunque con una línea bastante más crítica. Se utilizaron también, ocasionalmente, otros diarios tanto de tirada nacional como provincial, que son mencionados en el apartado de fuentes.

Cabe formular un breve comentario en relación a la utilización de las fuentes. Los capítulos construidos principalmente en base a éstas incorporan abundantes citas textuales, a riesgo de entorpecer el flujo de la lectura. Dos razones principales pesaron en la decisión de mantener este estilo. En primer lugar, a veces sólo la transcripción de fragmentos de texto permite recrear con mayor precisión el contexto, o al menos, la interpretación del contexto, en el que tienen lugar las distintas acciones y posicionamientos políticos de la asociación. Más importante aún, la importancia que cobran determinados aspectos en detrimento de otros, o la forma en que algunas cuestiones son presentadas, sólo puede aprehenderse (y demostrarse) mediante la reiteración de citas. Así, a la hora de extraer conclusiones, procuraremos sostenerlas evitando referencias a afirmaciones coyunturales o descontextualizadas.

⁴ Hasta 1993, por otra parte, se publicaron también los Boletines Mensuales, que contienen información algo más detallada que la que se presenta en Anales respecto de la producción agraria, y que, a diferencia de ésta, se hallaban específicamente dirigidos a los socios de la entidad.

⁵ Al respecto, cabe destacar que no sólo la afinidad ideológica entre la línea editorial del diario y la SRA es manifiesta, sino que Bartolomé Luis Mitre, descendiente de quien fuera presidente de la nación en el siglo XIX y fundador del diario, fue durante dos años dirigente de la SRA.

Capítulo 1

La acción política en el modo de producción capitalista

La acción política, y en particular, la que se realiza de forma colectiva, se ha conformado como un tópico con múltiples perspectivas y puntos de entrada en el interior de las ciencias sociales. Autores provenientes de disciplinas diversas y partiendo de enfoques no menos variados han indagado en el tema considerando, entre otros aspectos, los motivos que llevan a los individuos a participar en este tipo de acciones, la posición en la estructura social de tales actores, los problemas de acción y organización que surgen en las asociaciones que forman, las estrategias posibles de acción, o el poder social de que disponen, para mencionar tan sólo algunos de los más recurrentes.⁶

La presente investigación se interroga concretamente por la potencia de una organización que, procurará demostrarse, representa específicamente a una determinada clase social, en este caso, la terrateniente. Tanto por el hecho de considerar a las clases como actores sociales relevantes como por preguntarse acerca del poder social que dichos actores poseen, vamos a considerar, para el análisis de la acción política, los aportes provenientes de corrientes marxistas.

En este capítulo, por lo tanto, procuraremos reconstruir el devenir de los desarrollos marxistas sobre las determinaciones generales de la acción política, poniendo de relieve tanto sus aportes como los problemas que presentan. Posteriormente, tras presentar un enfoque basado en la obra de Marx en el que se considera al capital como el sujeto concreto inmediato de la producción social y las relaciones económicas y políticas como una unidad, buscaremos replantear sobre estas bases las determinaciones en cuestión. Asimismo, se considerarán las contribuciones de distintos autores para el análisis específico de las organizaciones políticas.

Al respecto, cabe destacar que, de manera general, buena parte de la bibliografía que se detiene específicamente en las determinaciones generales de la acción política no suele considerar a la clase terrateniente como un sujeto cuya acción política presente particularidades. Por el contrario, los distintos enfoques se detienen en la acción emprendida por los capitalistas, subsumiendo allí muchas veces a la clase terrateniente.⁷

⁶ Intentos por organizar tipológicamente algunas de estas perspectivas pueden hallarse en los trabajos de Acuña (1994), Lattuada (2006), Dossi y Lissin (2011), Beltrán (2012) y Tirado (2015a; 2015b), para mencionar tan sólo algunos ejemplos.

⁷ A diferencia, como ya vimos en la introducción, de aquéllos que estudian la acción política concreta de organizaciones que representan a la clase terrateniente en la Argentina, que realizan en numerosas ocasiones la operación contraria.

Aquí procuraremos, por el contrario, diferenciar a ambas clases. Vamos a centrarnos por lo tanto, en primer lugar, sobre las determinaciones de la acción de la clase capitalista para, posteriormente, pasar al análisis de las de la clase terrateniente y hallar su especificidad.

1.1. El devenir de la teoría marxista de la acción política

Con la publicación de *The Logic of Collective Action* a mediados de la década de 1960, Mancur Olson (1965) dio un nuevo paso en la expansión de la teoría económica neoclásica hacia otras disciplinas académicas. En efecto, como afirmaría posteriormente uno de los autores más reconocidos de dicho ámbito, los supuestos que daban forma a esta teoría económica (la maximización individual de las utilidades, la noción de equilibrio de los mercados, y la tendencia a la estabilidad en las preferencias) comenzarían a extenderse hacia los “aspectos no-económicos” de la vida, configurando lo que posteriormente dio en llamarse “imperialismo de la economía” (Becker, 1976). En este contexto, señala Acuña (1994), el trabajo de Olson lograría superar a las teorías pluralistas, que presentan a los actores colectivos como sujetos que participan en iguales condiciones por la distribución de recursos de cualquier tipo, nucleándose sobre la base de sus intereses comunes en distintos “grupos de interés” o “grupos de presión”, y cuyo éxito depende de la capacidad de los grupos sociales para definirlos, organizarlos y promoverlos. El objetivo de esta línea de análisis se dirigía hacia el estudio de la implementación de las políticas públicas, que emergería como resultado del conflicto entre los distintos intereses expresados por estos grupos.

Olson logró complejizar la simplicidad de estas premisas, al detenerse en la lógica de funcionamiento de los grupos que persiguen algún tipo de interés económico. En pocas palabras, su teoría partía de establecer que, a menos que el tamaño de los grupos fuera particularmente reducido, sus miembros no van a perseguir el interés grupal debido a su racionalidad individualista. En efecto, de acuerdo a este análisis, el curso más racional de acción para estos es lo que la teoría neoclásica ha denominado “free riding”, y consiste en el usufructo individual de los logros colectivos conseguidos por el grupo sin haber contribuido a su obtención, es decir, sin haber pagado los costos. Así, el éxito de los “grupos de interés” sólo puede alcanzarse o bien como subproducto de los beneficios selectivos que las organizaciones pueden ofrecer a sus miembros, o bien en su capacidad de coaccionarlos.⁸

A pesar de no ofrecer más que una complejización del funcionamiento de los grupos en cuestión sobre la base de las premisas del utilitarismo, la teoría de Olson se expandió

⁸ Una síntesis del desarrollo de Olson, así como de las repercusiones y críticas que recibió, puede hallarse en el trabajo de Udéhn (1993).

velozmente en el interior de las ciencias sociales, dando forma a un nuevo avance del imperialismo de la economía (neoclásica). Su impacto fue lo suficientemente grande como para afectar incluso la producción teórica marxista, hasta aquí renuente a avanzar más allá de la crítica general al individualismo metodológico.

Uno de los impactos más evidentes lo constituyó el surgimiento del llamado “marxismo analítico”, que abandonó la posición crítica hacia estos postulados para avanzar en un sincretismo teórico que buscaba armonizar tanto los desarrollos de la *rational choice* como los de la filosofía analítica, procurando colocarse al mismo tiempo bajo el paraguas del marxismo. En este sentido, los análisis provenientes de esta corriente partían de afirmar que el marxismo se había constreñido, hasta ese momento, a indagar en el movimiento de la sociedad capitalista a partir de sus clases sociales, pero tenía poco que ofrecer respecto de la acción individual de cada uno de sus miembros, lógica que quedaba confinada al campo del individualismo metodológico que caracterizaba a los fundamentos de la economía neoclásica. Przeworski, uno de sus más destacados integrantes, lo sintetiza de este modo:

By and large, Marxists were satisfied with the intuitive belief that people act out their class positions: Marx's phrases about studying capitalists as “personifications”, “carriers or “representatives” of capital seemed sufficient, and that Marx referred to profit as sometimes “the motor,” sometimes “the aim”, sometimes “the motive”, and still at other times “the need” of capitalists, capital, or capitalism, somehow did not seem confusing. What was important about history happened at the level of forces, structures, collectivities, and constraints, not individuals. Hence, microfoundations were at most a luxury it would have been nice to have, to explain other minor variations. Marxism was a theory of history without any theory about the actions of people who made this history (1985, pág. 382).

Se trataba, establecían, de un problema que merecía ser discutido, en la medida en que tenía consecuencias políticas directas para la acción política de la clase obrera:

If Mancur Olson and his followers are correct, then we cannot expect that the working class would ever become a collective historical subject, a class-for-itself, with all the consequences that would follow. Understandably, most Marxist reactions to methodological individualism have concentrated on this issue (pág. 381).

Sobre esta base, los integrantes de esta vertiente analítica se esforzaron por continuar desarrollando esta teoría, así como en pensar en las implicancias que tendría para el marxismo.⁹ La pertinencia de avanzar en esta dirección, sin embargo, fue objetada por distintos autores, que cuestionaron reiteradamente la filiación marxista de estos enfoques. En este sentido, Lebowitz (1988) sugiere que vale la pena cuestionarse si, tras haber decretado la obsolescencia de la “teoría de las fuerzas productivas y las relaciones de

⁹ Al respecto, destacan especialmente las investigaciones de Elster y Roemer. Una reseña crítica de estos, así como de su relación con la obra de Olson, puede hallarse en el trabajo de Lash & Urry (1984).

producción”, y la generalidad de la “teoría económica marxista”, incluyendo particularmente a la teoría del valor y la de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, así como los conceptos de “materialismo dialéctico” y “socialismo científico” (Elster, 1986), e incluso de la explicación sobre la explotación (Roemer, 1982), puede considerarse verdaderamente al marxismo analítico como una corriente marxista. Hodgson (1994), por su parte, va incluso más lejos al referirse a esta línea, descartando de plano cualquier tipo de vínculo, y remarcando la determinación social de la acción:

They incorporate core assumptions concerning rationality, knowledge and equilibrium that are indistinguishable from neoclassical orthodoxy. And all this is done in the name of Marx, who argued with eloquence that individuals are not isolated, atomistic units, but socially formed (pág. 22).¹⁰

En cualquier caso, el análisis de la acción política de la clase capitalista recibió escasa atención por parte de los miembros de esta corriente, que se concentraron principalmente en avanzar sobre las determinaciones de la acción política en general, y en extraer las consecuencias de ellas respecto de la clase obrera.¹¹ Una respuesta mucho más significativa a la ofensiva neoclásica surgiría, paralelamente, desde fuera de esta vertiente.

En efecto, mientras ésta se consolidaba, surgiría paralelamente otro enfoque que dejaría huella, y que se hallaba igualmente influenciado, aunque en distinto sentido, por los desarrollos de Olson. Se trata de un artículo escrito por los sociólogos alemanes Claus Offe (quien se enmarcaba en el legado teórico de la escuela de Frankfurt) y Helmut Wiesenthal, y cuyo título remite directamente a la obra de aquél: *Two logics of collective action: theoretical notes on social class and organizational form* (1980).

Allí, los autores comienzan por establecer una primera crítica significativa al enfoque olsoniano, en la que coinciden con el marxismo analítico: el abordaje de los llamados “grupos de interés”, argumentan, niega u oculta la existencia de clases sociales. Lo novedoso, sin embargo, es el esfuerzo por comprender las consecuencias que la estructuración de la sociedad en clases tiene para la acción política. La conclusión más importante que extraen al respecto, como veremos, es que las asociaciones que las representan están desigualmente dotadas para la persecución de sus objetivos. Al mismo tiempo, el trabajo se inserta en los debates que tenían lugar entre algunas corrientes marxistas respecto de la conceptualización de la relación entre el Estado y los capitalistas. En efecto, una de las posiciones sostenidas caracterizaba al Estado como instrumento de la burguesía para la realización de sus intereses, ya se lo considerara una extensión directa de

¹⁰ La serie de problemas que presenta la asimilación de esta línea analítica al corpus teórico marxista, así como una detallada crítica realizada en los términos planteados por aquélla, puede ser encontrada en los trabajos de Hindess (1984) y Hodgson (1985).

¹¹ Si bien Bowman (1982) teorizó sobre los escenarios en los que los capitalistas individuales procurarían cooperar voluntariamente para alcanzar algún tipo de coordinación organizada en el plano económico, su acción en el ámbito político no fue objeto de indagaciones posteriores.

ésta (y estuviera, por tanto, “colonizado” por sus miembros), o se le atribuyera una cierta autonomía.¹² Al respecto, los desarrollos de Offe y Wiesen­thal buscarán demostrar que el Estado es por completo independiente de dicha clase y que, a pesar de ello, ésta es capaz de imponer sus intereses.¹³ Asimismo, como veremos, hacen una significativa referencia al rol jugado por las asociaciones que los representan políticamente. Detengámonos entonces brevemente en el análisis que efectúan.

Los autores comienzan por señalar que la característica más importante de los trabajadores es su individualidad: mientras que el capital que los nuclea se halla indivisiblemente integrado bajo la forma de medios de producción, los trabajadores no pueden, a diferencia de éste, fusionarse o integrarse, sino apenas asociarse. Por otra parte, debido a la imposibilidad de separar su fuerza de trabajo de su propia persona, los trabajadores deben organizar una gran cantidad de necesidades, y sus objetivos de clase no se les presentan inmediatamente. En contraposición, los capitalistas poseen un interés tan autoevidente como homogéneo: se trata, simplemente, de valorizar su capital. Esta asimetría, que deriva de la distinta posición en la estructura social que estos ocupan, acarrea marcadas consecuencias en la organización de la acción política.

El objetivo principal del análisis, nuevamente, es la caracterización de los problemas que conlleva la acción política de la clase obrera. Es allí donde, como señalan Lash & Urry (1984), Offe y Wiesen­thal se separan más marcadamente de los presupuestos de la *rational choice* incorporados por el marxismo analítico, ya que plantean que los trabajadores no sólo pueden desarrollar una forma no utilitarista de la acción, sino que deben hacerlo para superar los mayores costos que implica participar en una acción colectiva y así nivelar fuerzas con los capitalistas, cosa que sólo podrían lograr mediante el establecimiento de una identidad colectiva.¹⁴

Al mismo tiempo, los autores avanzan también en la caracterización de la acción política de la clase capitalista. Pasemos ahora a las consecuencias que extraen de la asimetría estructural que hallan respecto de dicha clase.

¹² Ambas posiciones son rastreadas por Elster (1986) en la obra de Marx. Mientras que la primera, a la que le asigna el nombre de “teoría instrumentalista”, tendría su formulación más clara en el Manifiesto Comunista (en el que el Estado es caracterizado como el “comité de negocios de la burguesía), la segunda es bautizada como “teoría de la abdicación” en razón de la idea de que la clase capitalista se abstiene de tomar el control directo del Estado (abdicando de él en ocasiones, como en el caso de Francia), sobre la base de establecer que puede perseguir mejor su interés manteniéndose fuera de la política.

¹³ En el marco de la discusión respecto del rol del Estado sostenida por Miliband y Poulantzas (Miliband, 1969; Poulantzas, 1973 [1968]; Poulantzas, 1969; Miliband, 1973), Offe anticipa, en coautoría con Ronge, algunas de estas premisas en un trabajo publicado anteriormente (1975). Asimismo, tanto Block (1977) como Lindblom (1977) presentan enfoques similares a la posición sostenida por Offe y Wiesen­thal.

¹⁴ Como se ve, no obstante, la ruptura es sólo parcial, en la medida en que los autores siguen dando por hecho que los presupuestos en cuestión son válidos en una primera instancia. Es decir, los aceptan como una forma natural de la conciencia, pero que es posible modificar. Veremos, asimismo, que ésta es también la racionalidad que se atribuye a los capitalistas.

Los capitalistas, señalan, disponen de tres medios de organización para defender su interés: la empresa, las relaciones informales, y las asociaciones empresarias. Estas últimas constituirían la herramienta menos efectiva, principalmente a causa de que el interés perseguido por estos sujetos sociales es tan autoevidente como homogéneo: se trata, simplemente, de valorizar su capital. En consecuencia, los miembros de esta clase carecerían de la necesidad de coordinar intereses divergentes.

En este sentido, la decisión más eficiente se hallaría al nivel de la empresa, y consistiría, simplemente, en el control sobre la inversión. Al constituirse como el agente de la acumulación, y guiados por la racionalidad instrumental, los capitalistas harán valer sus intereses mediante la reducción de la inversión o la simple amenaza de ella, lo que resultaría eventualmente en una crisis. Se trata de una suerte de “poder de veto” que estos pueden ejercer de forma individual, aunque la homogeneidad del interés que persiguen les permitiría extender la acción al nivel de la clase sin requerir mayor coordinación. Los capitalistas son capaces de obrar de esta manera, afirman los autores, por la relación asimétrica que establecen con el Estado: éste depende de la performance del capital para funcionar exitosamente, pero no viceversa. Sobre esta base, en suma, los autores no pueden menos que concluir que las asociaciones de capitalistas son un medio mucho menos eficaz para la realización de sus objetivos, y por lo tanto, carecen de relevancia, mientras que la defensa más eficaz de sus intereses descansa especialmente en el ámbito individual de la empresa, por medio de la presión que son capaces de ejercer a raíz de su control privado sobre la inversión.

Este enfoque, en síntesis, se detiene específicamente en la potencialidad que caracterizaría a la acción política de los capitalistas bajo la forma colectiva de las organizaciones, razón por la cual es recurrentemente referido en la bibliografía que toma a éstas por objeto de análisis. Avancemos ahora hacia las críticas que recibió este desarrollo teórico.

La primera de ellas plantea una consecuencia metodológica inmediata: si el papel jugado por las asociaciones de capitalistas no es relevante en comparación con el recurso del control sobre la inversión, entonces la investigación no debería centrarse en la acción política de aquéllas, sino limitarse simplemente a indagar en el comportamiento a nivel microeconómico (Acuña, 1994; Beltrán, 2012).

Pero también esta premisa, que juega un papel central en el análisis, fue sometida a distintas objeciones. Como señala Birlle (1997), la argumentación de que la decisión de invertir o la amenaza de dejar de hacerlo puede constituir un recurso de presión poderoso es correcta bajo determinadas circunstancias, como lo es el hecho de que, también en situaciones particulares, los capitalistas disponen de un poder de negociación lo suficientemente grande como para imponer sus intereses de forma individual en lugar de

recurrir a negociaciones colectivas. Esta premisa, sin embargo, tiene una importancia menor a la que los autores le asignan. Al respecto, Acuña enumera una serie de circunstancias bajo las que este poder de veto pierde buena parte de su potencia. En primer lugar, el recurso con el que cuentan los capitalistas para presionar al Estado puede verse disminuido por el rol que ocupa éste en el proceso de acumulación: un Estado que depende de capitales agrarios privados para obtener divisas, señala en coincidencia con Birle, se halla en una posición más débil que uno que controla la producción y venta de las mercancías exportables. Ambos autores coinciden también en destacar que la decisión de no invertir no tiene los efectos que se le atribuyen si se toma de manera individual: si la falta de inversión en determinada rama puede ser compensada por el aumento de las inversiones en otra, y a menos que se efectúe una acción coordinada, la capacidad de ejercer presión disminuirá. Acuña formula otras dos objeciones: por un lado, cuando hay crisis económica o recesión, el nivel de inversión se ve de por sí reducido, con lo cual la amenaza pierde efecto; por otro, el Estado puede recurrir él mismo a medidas que desalienten la no inversión o alienten su expansión.¹⁵

En un nivel más abstracto, el supuesto de la homogeneidad de intereses que tendrían los miembros de la clase capitalista fue también objeto de debate. Como ya señalamos, Offe y Wiesenthal suponen que una de las ventajas que posee dicha clase radica en que la valorización de su capital es su objetivo único e inmediato, cuyo reconocimiento no requiere del acuerdo con otros capitalistas. El resultado de esto, como ya señalamos, clausura el problema específico de la acción colectiva: la coordinación de intereses divergentes.

Pero estos intereses, ha sido advertido, no serían tan homogéneos. En este sentido, se ha objetado a los autores no tomar en cuenta las distintas posiciones ocupadas por los capitalistas en la estructura económica. En efecto, estos se hallan divididos por sector y rama de actividad, capacidad de exportación, composición del capital, concentración media en la rama y sector, etc. Al desagregar a la clase capitalista según estos parámetros, comienza a evidenciarse que sus intereses serían más heterogéneos de lo que Offe y Wiesenthal suponían (Acuña, 1994; Birle, 1997; Beltrán, 2012). O más exactamente: el hecho de compartir un mismo objetivo, esto es, la valorización de su capital, determina la existencia de una relación antagónica entre ellos, lo que reintroduce el problema de la coordinación de la acción.

¹⁵ Una objeción más inmediata, y basada en una observación simple, es planteada por Streeck (1990), quien afirma que el hecho de que existan infinidad de asociaciones de capitalistas hace suponer que, después de todo, no son tan irrelevantes. En el trabajo de dicho autor puede hallarse, por otra parte, una crítica de distintos aspectos del planteo de Offe y Wiesenthal que aquí no retomamos, mientras que un contraste entre ambas posiciones es posteriormente presentado por Traxler (1993).

Por último, Acuña ha señalado que la perspectiva marxista supone que los actores colectivos pasan a ser “portadores” o “apoyos” de los “espacios estructurales propios de la lógica de acumulación capitalista”, lógica que se reduce a ser, por tanto, “un mero epifenómeno de la dinámica de acumulación que caracteriza al capitalismo” y, por lo tanto, carecen de autonomía (1994, pág. 59). En este sentido, si bien afirma que la teoría marxista sigue teniendo la ventaja de que parte de reconocer la contradicción estructural de intereses propia del capitalismo, señala, sin embargo, que si bien los “factores económico-estructurales” fijan los límites dentro de los cuáles puede actuar la clase capitalista, no pueden explicar la forma concreta que ésta da a su accionar.¹⁶

El desarrollo de Offe y Wiesenhal, de esta forma, cumple en poner de relieve la estructuración de la sociedad capitalista en clases, velada por la teoría de Olson, y en procurar extraer las consecuencias que ello tiene a nivel de la acción política. Como objetan sus críticos, sin embargo, tiene numerosas deficiencias.

En lo que sigue, por tanto, procuraremos volver a examinar los aspectos generales de la acción política de la clase capitalista valiéndonos de los aportes de Marx. Lo haremos, específicamente, partiendo de las determinaciones más simples de la relación social, camino que emprende en *El Capital* (2006 [1867]; 2009 [1885]; 2009 [1894]).

Como se sabe, sin embargo, dicha obra ha sido fruto tanto de interpretaciones contrapuestas como de base para nuevos desarrollos. De entre estos, nos serviremos de los aportes de Juan Iñigo Carrera (2003; 2007a; 2012a). La propuesta de este autor consiste en no interpretar el análisis original de Marx, sino en realizar a partir de éste un proceso de reconocimiento, avanzando en donde sea necesario sobre nuevas determinaciones (2007a, págs. 2-10).

¹⁶ Así lo sintetiza el autor:

Supongamos que el sector capitalista enfrenta cuatro posibles estrategias económico-políticas: *a*, *b*, *c* y *d*. Supongamos también que el análisis estructural-económico nos permite concluir que tanto *a* como *b* afectan negativamente los intereses de este sector, mientras que tanto *c* como *d* permiten que estos se realicen, aunque la primera opción frustra la posibilidad de aumentar los salarios mientras que la segunda la permite. Desde ya que para el análisis del proceso político, la diferencia entre una conducta *c* o *d* es central. Los “límites” estructural-económicos nos permiten comprender el porqué los capitalistas no actuaron de manera *a* o *b*, pero no permiten explicar por qué lo hicieron de manera *c* o *d*. La razón para ello está dada, en primer lugar, porque las condiciones estructurales fijan el campo de posibilidades para las estrategias de los actores y no las estrategias o movimientos específicos (pág. 61).

1. 2. El capital como sujeto concreto inmediato de la producción social

En *El Capital*, Marx comienza el análisis de la organización de la producción y el consumo sociales por la forma más simple que ésta toma en la producción capitalista: la mercancía. No obstante, se trata ya de determinaciones que refieren específicamente a la forma capitalista que toma este proceso. Cabe entonces comenzar el análisis, tal como propone Iñigo Carrera (2007a, págs. 43-8), por sus determinaciones más generales, esto es, referentes a la materialidad de este proceso cualquiera sea su forma concreta. Vamos entonces a sintetizar este desarrollo.

De acuerdo a este autor, el proceso de vida humano se diferencia del de las especies animales por tener la capacidad de apropiarse del medio necesario para reproducir su cuerpo mediante el trabajo. El desarrollo de esta capacidad humana para transformar el medio en un medio para sí toma la forma de una creciente separación instrumental, espacial, temporal y personal entre la acción que abre un ciclo de metabolismo y el resultado que lo cierra reproduciendo a los sujetos humanos, llegando el punto en que el conocimiento de la propia potencialidad respecto a la potencialidad del medio sólo puede realizarse como un proceso que se conoce a sí mismo como tal. Es decir, como un proceso cuyos sujetos se saben a sí mismos como individuos que conocen. El proceso de reproducción de la vida humana toma entonces la forma de la organización consciente del trabajo. Y la conciencia puede desencadenar el gasto productivo del cuerpo sólo porque conoce el objetivo de su acción, que ejecuta de forma voluntaria. El trabajo humano se convierte en una acción consciente y voluntaria, que conoce su propia necesidad, y que se desencadena porque conoce el resultado.

Como es evidente, el trabajo humano es un proceso de carácter individual, en tanto consiste precisamente en el gasto del propio cuerpo. Por lo tanto, sus potencias productivas se realizan como atributo del trabajador individual. Sin embargo, en la subjetividad de cada individuo están portadas las fuerzas productivas que han llegado hasta él por el trabajo de otros individuos. Con lo cual, a pesar de ser un gasto productivo individual, el trabajo humano realiza las potencias productivas propias de su carácter social.

El segundo momento de este proceso de metabolismo humano es el del consumo, que es asimismo un proceso individual, y que está socialmente determinado, ya que los objetos consumidos son el producto del trabajo de otros individuos. Por lo tanto, al producir objetos para el consumo de otros, lo que produce cada individuo es la condición material para que los otros puedan reproducirse como seres humanos. El producto de su trabajo son, por lo tanto, otros seres humanos.

En la unidad social del proceso de metabolismo humano, la conciencia y la voluntad están también portadas como atributos individuales de cada uno de los sujetos. Pero

además de ser las formas en que cada uno de ellos organiza su proceso de trabajo individual, son también la forma en que se organiza el carácter social de este proceso. Son la forma a través de la que cada individuo se reconoce a sí mismo y actúa como portador individual de las fuerzas productivas del trabajo social. En otras palabras, son las portadoras de las relaciones sociales, esto es, las que rigen la unidad del proceso humano de metabolismo social.

El análisis de la mercancía que emprende Marx en el primer capítulo de *El Capital* avanza sobre las determinaciones más simples de este proceso en el modo de producción capitalista. Allí, resalta inmediatamente el carácter privado con que se realiza el trabajo social, es decir, la ausencia de relaciones directas de dependencia personal que le impongan a cada productor la forma concreta útil en la que debe gastar su fuerza de trabajo. Estos son, por lo tanto, individuos libres. Cada uno de ellos realiza su trabajo de forma privada, ejerciendo una autonomía inmediata de su conciencia y voluntad. Pero así como su conciencia y voluntad libres no se encuentran subordinadas a las de ningún otro al organizar privadamente su trabajo individual, se encuentran igualmente privadas de participar en la organización de los restantes procesos de trabajo individuales. En otras palabras, como individuos libres, los productores independientes de mercancías organizan de forma privada sus trabajos individuales, pero carecen de toda capacidad para organizar socialmente sus trabajos de manera directa aplicando sus conciencias y voluntades individuales como fuerza inmediatamente social.

Esta organización se resuelve entonces de manera indirecta. Cada individuo va a aplicar su propia fuerza de trabajo, es decir, la capacidad de gastar productivamente la materialidad de su cuerpo según lo que su conciencia de individuo libre le dice va a resultar en un valor de uso social, o sea, uno que va a ser consumido por otro. Lo que implica que debe hacerlo sin saber de antemano si su trabajo es efectivamente un trabajo social. Y es igualmente un atributo de los restantes individuos libres el resolver qué valores de uso sociales producidos de forma privada van a consumir, y por lo tanto, van a reconocer como valores de uso sociales.

Así, la unidad de ambos momentos del proceso de metabolismo social, es decir, la producción y el consumo, toma la forma de una relación social indirecta entre las personas que está portada como la potestad que tienen los productos del trabajo social realizado de forma privada para cambiarse entre sí. Sólo si el producto de un trabajo privado es capaz de cambiarse por el de otro, se habrá puesto en evidencia su condición de materialización de trabajo social. Se trata, por lo tanto, de un valor de uso social que es capaz de cambiarse por otro, en la medida en que ambos sean cristalizaciones de igual cantidad de trabajo abstracto (o sea, de gasto material indiferenciado de cuerpo humano en general) socialmente necesario. Materializado en su producto, las mercancías, este trabajo aparece

representado como valor, esto es, la aptitud de éstas para relacionarse socialmente entre sí en el cambio, poniendo de tal forma en relación social a sus productores.

La unidad de la producción social organizada de forma privada, por lo tanto, se resuelve mediante la representación como valor del trabajo abstracto socialmente necesario gastado para producir los valores de uso sociales. La forma de valor que tienen las mercancías es la única relación social que puede establecerse, de forma indirecta, entre productores privados. Por lo tanto, la mercancía es la relación social general materializada que rige la producción y el consumo sociales. La forma que toma la unidad de la organización del proceso de metabolismo social regido por la ausencia de relaciones directas de dependencia personal o, en otras palabras, por individuos libres, es a través de darle a su relación social general la forma indirecta de una relación entre cosas, o sea, mediante el cambio de mercancías.

El cambio de mercancías es entonces la forma de organizar la producción y el consumo sociales. Cada individuo sólo puede consumir, sin embargo, si previamente ha satisfecho una necesidad social, para lo cual deben primeramente aplicar su conciencia y voluntad libres a producir un valor de uso social. Esto es, en su carácter de individuos libres, y por lo tanto, capaces de realizar por su propia voluntad su trabajo individual, debe darle al producto de éste un carácter social sin realizarlo de modo inmediatamente social, es decir, organizándolo coordinadamente con otros productores. De tal modo, ni siquiera es capaz de saber si su trabajo es o no socialmente útil al momento de realizarlo. En otras palabras, es un individuo libre en su trabajo individual, pero no respecto al carácter social de su trabajo. Por lo tanto, debe someter su conciencia y voluntad de individuo libre a las potencias sociales del producto de su trabajo. No está sujeto al dominio personal de nadie, pero debe ser sirviente de su mercancía.

Así, los individuos libres sólo pueden relacionarse entre sí por intermedio de las mercancías que producen. Marx señala que los trabajos privados funcionan como fragmentos del trabajo colectivo “por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y, a través de los mismos, entre los productores”. Y concluye:

A estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas, en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas (2006 [1867], pág. 87).

O, como lo sintetiza Iñigo Carrera (2007a): la relación social de los individuos libres está portada en la mercancía. El valor (su capacidad de relacionarse mediante el cambio) no es un atributo de su persona, sino del producto material de su trabajo. Es por eso que son individuos libres de toda relación de dependencia personal con otros. Su conciencia y

voluntad de individuos libres se han aplicado a la producción de una potencia social que le pertenece a la mercancía, objeto que posee la capacidad de relacionar socialmente a su creador. Así, el producto material de su trabajo los enfrenta como portador de una potencia social que les es ajena y a la cual deben someter su conciencia y voluntad libres. Al actuar como individuos libres, o sea, al dominar el ejercicio de su trabajo privado realizado de forma independiente de los demás individuos, se hallan sometidos a las potencias sociales del producto de su trabajo. Por lo tanto, al poner en acción su conciencia y voluntad libres no hacen sino enajenarlas en la mercancía.

Sobre esta base, el autor concluye que, en el modo de producción capitalista, la conciencia libre es la forma en que se realiza la conciencia enajenada. Desde el punto de vista de la organización del trabajo social, la única voluntad que pueden tener los productores es la de producir valor. Por lo tanto, todo lo que les cabe hacer es personificar su mercancía. Sólo actuando como personificación pueden relacionarse socialmente, y por lo tanto, reproducirse como personas (págs. 55-62).¹⁷

La producción social no tiene ya como objeto inmediato, por lo tanto, la producción de simples valores de uso, sino la producción de valor, es decir de la relación social general misma. Y la producción de valor tiene su forma acabada en la producción de plusvalía. Con lo cual, el fin inmediato de la producción capitalista no es simplemente la producción de valor, sino de valor que se valoriza, esto es, capital. En otras palabras, la relación social materializada en las mercancías sólo va a poner en movimiento el trabajo social con el único fin de reproducir de forma ampliada la misma relación social materializada. Se trata, como señala Marx, de un proceso en el que el capital se vuelve el sujeto de su propio movimiento:

En la circulación D - M - D funcionan ambos, la mercancía y el dinero, sólo como diferentes modos de existencia del valor mismo: el dinero como su modo general de existencia, la mercancía como su modo de existencia particular o, por así decirlo, sólo disfrazado. El valor pasa constantemente de una forma a la otra, sin perderse en ese movimiento, convirtiéndose así en un sujeto automático [...]. Pero, en realidad, el valor se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual, cambiando continuamente las formas de dinero y mercancía, modifica su propia magnitud, en cuanto plusvalor se desprende de sí mismo como valor originario, se autovaloriza. El movimiento en el que agrega plusvalor es, en efecto, su propio movimiento, y su valorización, por tanto, autovalorización (2006 [1867], pág. 188).

O, como sintetiza Iñigo Carrera (2003), el capital se erige así en el sujeto concreto inmediato de la producción social.¹⁸ Con lo cual se pone en evidencia que las mercancías,

¹⁷ Marx lo sintetiza de este modo en un prólogo de *El Capital*: "aquí sólo se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase" (2006 [1867], pág. 7).

¹⁸ En las últimas décadas, otros autores también han presentado al capital como el sujeto de la sociedad capitalista. Pueden consultarse, al respecto, los trabajos de Postone (1993), Robles Baez (1997), Arthur (2002) y

que eran hasta aquí consideradas como producto del trabajo de abstractos productores privados e independientes, lo son en realidad del trabajo enajenado en el capital.

Tales productores son entonces, en el modo de producción capitalista, obreros asalariados doblemente libres, tanto respecto de conservar para sí la autonomía para vender la única mercancía que tienen en posesión, su fuerza de trabajo, como respecto de los medios de producción necesarios para ponerla en acción por sí mismos. Los capitalistas, por su parte, son quienes encarnan las potencias de la mercancía determinada como capital (págs. 12-3).

Estos entran en la relación social general como personificaciones de la única mercancía de la que disponen para vender: su fuerza de trabajo.¹⁹ Y establecen una relación antagónica con el capital por la venta de su fuerza de trabajo por su valor, constituyéndose así como clase obrera.

1.2.1. La unidad entre las relaciones económicas y políticas

Hasta aquí, hemos sintetizado el análisis hasta concluir en el capital como sujeto de la producción social. Vamos ahora a avanzar hacia otro aspecto que interesa desarrollar: la unidad entre las relaciones económicas y políticas.

La exposición de las determinaciones de la mercancía le permite a Marx proseguir su análisis en torno a la forma general en la que se desarrollan las relaciones sociales que establecen los individuos con la mediación de aquéllas. Es decir, de las relaciones económicas:

Las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado ni intercambiarse ellas mismas. Tenemos, pues, que volver la mirada hacia sus custodios, los *poseedores de mercancías*. Para vincular esas cosas entre sí como mercancías, los custodios de las mismas deben relacionarse mutuamente como personas cuya voluntad reside en dichos objetos, de tal suerte que el uno, sólo con acuerdo de la voluntad del otro, o sea mediante un acto voluntario común a ambos, va a apropiarse de la mercancía ajena al enajenar la propia. Los dos, por consiguiente, deben reconocerse uno al otro como propietarios privados. Esta relación jurídica, cuya forma es el contrato --legalmente formulado o no--, es una relación entre voluntades en la que se refleja la relación económica. El contenido de tal relación jurídica o entre voluntades queda dado por la relación económica misma. Aquí, las personas sólo existen unas para otras como representantes de la mercancía, y por ende como poseedores de mercancías. En el curso ulterior de nuestro análisis veremos que las máscaras que en lo económico asumen las personas, no son más que personificaciones de las relaciones

Fausto (2002), así como la producción del International Symposium on Marxian Theory. Para un contraste entre algunas de estas perspectivas y la desarrollada por Iñigo Carrera puede consultarse Starosta (2016a).

¹⁹ Para una discusión más exhaustiva sobre la naturaleza mercantil de la fuerza de trabajo y la subsunción del obrero como un atributo del capital, véase Starosta (2011), Starosta y Caligaris (2016b) y Starosta y Fitzsimons (2016).

económicas como portadoras de las cuales dichas personas se enfrentan mutuamente (2006 [1867], págs. 103-4).

De esta manera, la forma concreta más simple que toma la relación social es la relación indirecta establecida a través del cambio de mercancías. Tal relación se establece entre sus poseedores como personificaciones suyas, mediante el contrato de compra-venta.

En otras palabras, Marx presenta un contenido, dado por las relaciones indirectas establecidas por los individuos mediante las mercancías, o relaciones económicas, y la forma necesaria en la que éste se realiza, constituida por las relaciones directas entre personificaciones establecidas en la circulación, o sea, las relaciones jurídicas. Lo que significa que las relaciones económicas toman la forma necesaria de relaciones jurídicas (Iñigo Carrera, 2012b).

El desarrollo del análisis le permite avanzar en el despliegue de esta relación. Tras presentar a obreros y capitalistas como los verdaderos sujetos sociales de la producción, queda en evidencia el carácter antagónico de la relación que estos entablan, determinado por la realización del valor de la fuerza de trabajo. Esta relación se resuelve necesariamente bajo la forma de la lucha de clases. Así lo presenta Marx:

Tiene lugar aquí, pues, una antinomia: derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza. Y de esta suerte, en la historia de la producción capitalista la reglamentación de la jornada laboral se presenta como lucha en torno a los límites de dicha jornada, una lucha entre el capitalista colectivo, esto es, la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea la clase obrera (2006 [1867], pág. 282).

Sin embargo, trabajadores y capitalistas entran en esta relación con desigual determinación. Y, a igualdad de derechos jurídicos que los asisten como poseedores de mercancías, como señala Marx, la realización del valor de éstas sólo puede resolverse por la fuerza. La competencia entre los trabajadores por vender individualmente su fuerza de trabajo para poder reproducir su vida natural acaba por inclinar la balanza del lado de los capitalistas, con lo cual, la fuerza de trabajo se encuentra condenada a venderse por debajo de su valor. No obstante, esta posibilidad, que resulta conveniente para los capitalistas individuales, desde el punto de vista del capital social de la sociedad acaba por minar su capacidad de acumulación, agotando progresivamente la fuerza de trabajo disponible.

En este punto, Marx comienza a desplegar las determinaciones más generales de la relación social, que ahora se extienden hasta abarcar las relaciones políticas, o, más específicamente, la lucha de clases y el Estado. A este respecto cabe destacar que la idea de que Marx no habría desarrollado estas cuestiones ha sido señalada por distintos

autores.²⁰ No cabe aquí, sin embargo, detenernos en la discusión en torno a la forma en la que éstas aparecen en el análisis marxiano.²¹ En su lugar, vamos a sintetizar el desarrollo que efectúa al respecto Iñigo Carrera (2003, págs. 24-7; 95-108).

Marx plantea, al analizar el límite de la jornada laboral como obstáculo a la producción de plusvalía absoluta, que en el enfrentamiento entre trabajadores y capitalistas, la competencia entre aquéllos inclina la balanza hacia estos, al forzar la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. ¿Cómo se resuelve entonces este enfrentamiento?

La competencia entre trabajadores por vender la fuerza de trabajo va a tomar la forma de su opuesto, esto es, de una relación directa de solidaridad mutua. Con lo cual, la venta de la fuerza de trabajo por su valor trasciende no sólo las potencias del obrero individual, sino también las del colectivo de obreros recortado por el carácter privado de cada capital individual, y aún las de la suma de estos colectivos en cada esfera de la producción. De la misma forma ocurre en lo que respecta a la representación de estos capitales por sus capitalistas.

Por lo tanto, la realización de la fuerza de trabajo por su valor toma necesariamente forma concreta en la determinación de obreros y capitalistas no ya como personificaciones antagónicas que se enfrentan de manera directa e individual a través de la compra y venta de la fuerza de trabajo, sino como clases de personificaciones que se enfrentan entre sí de manera directa. La competencia por la compra o venta de esta mercancía en el interior de cada polo de esta relación cobra la forma de una relación de solidaridad de alcance general entre quienes personifican a la fuerza de trabajo, por un lado, y quienes personifican a su capital, por el otro. O, en otras palabras, de una relación consciente directa de clase.

Con lo cual, la relación indirecta entre las personas establecida por el cambio de mercancías, que se constituye como la relación económica propia del modo de producción capitalista, se realiza necesariamente bajo la forma de una relación directa entre personificaciones, o sea, una relación jurídica, que trasciende del alcance individual para tomar un carácter inmediatamente social: las clases y su lucha. Se trata de una relación jurídica pública, esto es, de una relación política. Por lo tanto, estas relaciones son la forma concreta necesaria que toman las relaciones económicas.

Como resulta evidente, sin embargo, la lucha de clases como forma concreta necesaria de realizarse la venta de la fuerza de trabajo por su valor tiende a perturbar el desarrollo fluido del proceso de acumulación del capital. Así, esta relación antagónica va a

²⁰ Por caso, Nicos Poulantzas, uno de los teóricos que más se ha preocupado por desarrollar una teoría marxista sobre el Estado y la política, afirma que los textos de Marx “no trataron específicamente, en el nivel de la sistematicidad teórica, la región de lo político” (Poulantzas, 1969, pág. 12). Una posición similar sostiene Heinrich (Heinrich, 2008, pág. 203). Desde fuera del marxismo, la referencia más significativa quizás sea la de Norberto Bobbio, quien afirmara que “no obstante las buenas intenciones, Marx no logró jamás ocuparse sistemáticamente del problema del Estado” (Bobbio, 1978, pág. 246).

²¹ Una discusión acerca de esta cuestión puede verse en el trabajo de Caligaris (2012).

tomar la forma concreta de su contrario, es decir, de una relación de solidaridad general, que va a presentarse a la conciencia de las personas como una relación política sin más contenido que ser una relación natural entre personas abstractamente libres. Concretamente, va a tomar la forma de la relación de ciudadanía del Estado. El Estado es entonces la relación social objetivada que aparenta brotar de la abstracta voluntad libre de los individuos a los que la naturalidad de la sangre o el suelo los ha determinado como ciudadanos, y que actúa como representante político general del fragmento de capital social que opera en su territorio.

Se trata, en este sentido, de un sujeto que es portador de una conciencia y voluntad independiente de los capitales individuales. La propia acumulación de capital, sin embargo, encuentra un límite a su organización autónoma mediante el ejercicio privado de la conciencia y voluntad que personifica a los capitales individuales en cuanto éste comienza a ser capaz de atentar contra las condiciones de la reproducción general del proceso de acumulación. De esta forma, la asignación del trabajo social necesita entonces ser realizada de manera directa por el capital social. De ahí que el Estado encarne las potencias de la acumulación de capital como un sujeto que enfrente a los capitales individuales no sólo como portador de una conciencia y voluntad independiente de la de estos, sino también de la capacidad de imponer la suya directamente por sobre ella.

1.3. Determinaciones generales de la acción política de la clase capitalista

Volvamos ahora a encarar el análisis de las determinaciones más generales de la acción política de la clase capitalista, partiendo de la base de que, en cuanto personificaciones, deben poner su conciencia y voluntad al servicio del capital que personifican. Desde este punto de vista, dicha necesidad determina su acción política. Como señala Marx,

En su condición de vehículo consciente de ese movimiento, el poseedor de dinero se transforma en capitalista [...]. El contenido objetivo de esa circulación (la valorización del valor) es su fin subjetivo, y sólo en la medida en que la creciente apropiación de la riqueza abstracta es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona él como capitalista, o sea como capital personificado, dotado de conciencia y voluntad (Marx, 2006 [1867], págs. 187-8).

Como conciencia y voluntad del capital que personifican, por lo tanto, la determinación más general de su acción política consiste en la búsqueda de la valorización de aquél. De esta forma, la personificación del capital toma la forma del interés del capitalista por valorizarlo. En cuanto miembros de dicha clase comparten, por lo tanto, un interés homogéneo.

Lo que no elimina, ciertamente, el carácter problemático de la acción colectiva. En primer lugar porque si bien la lucha con que enfrentan a la clase obrera por la compraventa de la fuerza de trabajo da lugar a una relación antagónica entre ambas personificaciones en cuanto clases, los capitalistas están también relacionados entre sí por la competencia, tanto por la compra de fuerza de trabajo y medios de producción como por la venta de las mercancías producidas. Esto significa que, como capitalistas, tienen también entre sí una relación antagónica, aspecto que, como ya vimos, queda borrado en el análisis de Offe y Wiesenthal.

Esta relación de competencia va a tener además una expresión particular. Habíamos afirmado previamente que la acción política de los capitalistas va a estar orientada hacia la búsqueda de las condiciones más favorables posibles para valorizar su capital. Mas esto no supone que persigan un mismo objetivo inmediato, en la medida en que las condiciones de acumulación que resultan más adecuadas para determinadas fracciones del capital pueden entorpecer la acumulación de otras fracciones. Esto reabre, por lo tanto, la necesidad de coordinar su acción, hasta aquí desestimada.

En este sentido, las asociaciones de capitalistas juegan un papel mucho más significativo del que le atribuyen Offe y Wiesenthal. En primer lugar, porque constituyen el ámbito en el que una fracción de la clase da a su relación de competencia la forma de la solidaridad, lo que sucede en distintos niveles. Un primer espacio de asociación está constituido por las organizaciones de primer grado, en las que aquéllos tienden a nuclearse por rama de actividad y/o por ámbito geográfico. A su vez, muchas de estas organizaciones van a formar parte de otras de segundo y tercer grado. Es en estos espacios donde las distintas fracciones de clase procuran establecer los objetivos inmediatos a perseguir y coordinar su acción. Lo que vuelve a plantear el interrogante de cómo lo hacen, es decir, qué forma concreta dan a su acción.

Al respecto, se ha objetado a estos autores el haber detenido su análisis en el ámbito de las relaciones económicas. En este sentido, y basándose en los aportes de autores como Offe (1988) y Schmitter y Streeck (1999), tanto Acuña (1994) como Dossi (2012) y Beltrán (2012) sugieren estudiar la acción política de los capitalistas recurriendo a un marco teórico que enfoque dicha acción desde una perspectiva que abarque distintos niveles, extendiendo el análisis hasta abarcar también aspectos no económicos del contexto social, esto es, las relaciones jurídicas, políticas, ideológicas, etc.; en una palabra, lo que el marxismo suele englobar bajo el concepto de “superestructura”. Estos aspectos, sin embargo, son generalmente presentados como codeterminantes de la acción.²²

²² Por ejemplo, en el trabajo de Acuña:

En efecto, el desarrollo teórico de los sociólogos alemanes tiende a restringir el análisis a las relaciones económicas, ámbito respecto del cual trasciende, evidentemente, la forma concreta que toma la acción política de los capitalistas. En este sentido, la sugerencia de incluir también a las relaciones jurídicas y políticas, así como las formaciones ideológicas, es sin duda pertinente. Aquí, no obstante, vamos a entenderlas no como relaciones externas a las económicas, y por lo tanto codeterminantes de la acción, sino como formas concretas de éstas. Como señala Barker, otro de los investigadores que ha tomado a la acción política como objeto de estudio,

Marxists thus face a series of theoretical and practical-strategic problems. Part of capitalism's complexity rests on its multi-layered quality, whose representation requires different degrees of generality. Opposition to capitalism must handle multiple manifestations, which are, while interlinked, not all of the same order. Marx himself was explicit about the distinction between different levels of abstraction and concreteness.

Marx's master work, *Capital*, mostly explores the capitalist system at a high level of abstraction. Its landscape is populated by 'bearers of economic relations': the capitalist, the labourer, the financier, the landowner, and so on [...]. These abstractions are required to identify capitalism's underlying processes, relationships and tendencies of development. They are not, however, the end of the process of portraying the whole system. The whole theoretical movement in Marx's presentation involves an expanding spiral, from the 'core' of capitalism towards its variegated 'surface'. At each step, new 'determinations' and complexities are introduced, and Marx's 'cartoon characters' both take on additional features, and face new strategic problems [...]. Classes are not themselves coherent political actors, capable of acting as single entities: they are inwardly divided by particular interests, subject to conflicting impulses. 'Class issues', meaning problems arising from capitalism's underlying character, do, certainly, confront political actors, but how these actors respond is 'mediated' by a host of concrete particulars (2013, págs. 46-7).

El primer paso en esta dirección, de este modo, lo constituye el análisis de la forma específica más inmediata que toma la acumulación de capital en su unidad mundial, esto es, el ámbito nacional concreto en el que operan los capitalistas. El capítulo siguiente, por lo

La lógica de mercado no es previa a y redefinida por instituciones políticas sino que las acciones del Estado y de los actores colectivos, así como las instituciones y reglamentaciones del gobierno, son factores que co-constituyen al mercado [...]. No es verdad que lo estructural-económico y su lógica existan por fuera de lo político-institucional y como conjunto de variables necesariamente independientes [...] de las estructuras político-institucionales, las formaciones ideológicas, la legislación, las reglamentaciones y las acciones y estrategias de los actores (1994, págs. 62-3).

tanto, está dedicado al análisis de la forma específica que toma la acumulación de capital en la Argentina.

Recapitulemos ahora brevemente. Habíamos ya establecido, en primer lugar, que el objetivo de la acción política de los capitalistas es la obtención de las condiciones más favorables posibles para la acumulación. En este sentido, la primera determinación que surgía respecto de su accionar individual consistía en la compra de la fuerza de trabajo entregando a cambio la menor cantidad de valor posible. Hasta aquí, por lo tanto, la acción de los capitalistas individuales puede ser considerada homogénea, y es sobre esta base que se enfrentan políticamente como clase con los trabajadores, constituidos igualmente como clase.

Por otro lado, habíamos igualmente puesto de relieve la relación de competencia entre las distintas fracciones de capital, lo que implica la persecución de intereses heterogéneos para cada una de éstas. En efecto, las condiciones generales ideales de acumulación para estas fracciones no coinciden necesariamente, con lo cual los capitalistas van a enfrentarse no sólo a los trabajadores como clase en torno a la compraventa de la fuerza de trabajo, sino que también lo harán entre sí respecto de la instauración de tales condiciones.

En cuanto representante general del capital social, y por lo tanto, de gestor de las condiciones de la reproducción general del proceso de acumulación, el Estado va a configurarse como uno de los ámbitos principales sobre el cual las distintas fracciones de la clase capitalista ejercen su acción política. Como ya señalamos, el Estado aparece como una potencia social ajena a cada uno de los capitales individuales, y capaz de imponer su voluntad respecto de la de estos. En cuanto personificaciones suyas, por lo tanto, los capitalistas individuales van a interactuar con él, procurando que de curso a sus demandas de establecer las condiciones de acumulación más favorables posibles. Su acción individual, por lo tanto, va a constituirse como forma concreta en que se resuelve la unidad del movimiento del capital social.

Surge entonces la pregunta respecto de la potencia que muestran los capitalistas para lograr sus objetivos. Al respecto, Offe y Wiesenthal asumen, como ya vimos, que la posición que ocupan aquéllos en la estructura social los dota de un medio de presión sobre el Estado tan efectivo que torna irrelevante su acción colectiva. El cuestionamiento de este supuesto, no obstante, vuelve a abrir el espacio para la exploración de este eje, tal como plantea Beltrán: “¿Es suficiente el poder estructural de los empresarios para la concreción de sus objetivos?” (2012, pág. 75).

Offe y Wiesenthal suponen que el poder de veto individual con el que cuentan los capitalistas será suficiente para torcerle el brazo al Estado, que es presentado en este análisis unilateralmente, esto es, sólo desde el punto de vista de dicha clase, que lo percibe

como una potencia social ajena. Esto les impide avanzar en el análisis de la potencia de la acción política de los capitalistas. Como ya señalamos, estos siempre van a procurar valorizar su capital individual pasando por sobre los límites que corresponden a la acumulación del capital social: por un lado, en relación a la compraventa de la fuerza de trabajo por su valor, lo que resultaría en la imposibilidad de reproducir a la fuerza de trabajo en las condiciones materiales y morales con que el capital la requiere; por otro, buscando la instauración de condiciones diferenciales de acumulación por parte del Estado, cosa que tendría por consecuencia la imposibilidad de la reproducción en condiciones normales del capital social en su conjunto.

Desde la perspectiva que habíamos desarrollado, ciertamente, los capitalistas no pueden sino enfrentar al Estado como un poder social que escapa a su control. Y además de representar políticamente a la porción del capital social total que opera en el ámbito bajo su control, el Estado es el que tiene a su cargo, precisamente, la gestión de su movimiento, y por lo tanto la de las condiciones concretas de la acumulación, condiciones que se hallan a su vez mediadas por la acción política de los capitalistas.

Dicha gestión se realiza bajo las políticas públicas que pone en marcha, las cuales fluctúan permanentemente por expresar la forma indirecta bajo la que se organiza socialmente la producción y el consumo sociales. Es sobre estas políticas que buscan intervenir las distintas fracciones de la clase capitalista mediante su acción política, dándole así un curso concreto de realización a las políticas en cuestión.

También aquí, sólo el análisis de la marcha que toma la acumulación en un ámbito nacional, acumulación que posee a su vez una determinación específica, es lo que va a determinar qué potencia va a mostrar la acción política de la clase capitalista en relación a los objetivos que se propone. En efecto, al ser dicha acción la forma concreta en que se resuelve la unidad del movimiento del capital social, su potencia va a tener los límites que le impone dicha determinación.

Antes de avanzar hacia el análisis de la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina, detengámonos brevemente en algunos de los aspectos concretos que comporta el análisis de las organizaciones de capitalistas. Interesa dar cuenta, específicamente, de su accionar en el seno de sus organizaciones políticas.

1.3.1. Las organizaciones políticas de la clase capitalista

En la sección anterior habíamos dado cuenta de la necesidad de extender el análisis de las organizaciones más allá de la esfera de las relaciones económicas, y establecido como primer paso el estudio de la especificidad del proceso nacional de acumulación de capital en el que operan. Veamos ahora qué aspectos cabe considerar una vez desarrollado

éste, recuperando algunas de las sugerencias efectuadas por autores como O'Donnell (1978), Acuña (1994) y Dossi (2012) para el estudio de las organizaciones políticas de capitalistas.

La primera dimensión del análisis parte de indagar en la pertenencia de clase de los miembros de la organización estudiada y su rama de actividad, así como el rol que juega ésta en el proceso nacional de acumulación del que forma parte. Sobre esta base, pueden estudiarse las principales características de la asociación en cuestión. En primer lugar, la composición de su base social, que puede ser más o menos homogénea. Asimismo, la forma que adquiere el proceso de toma de decisiones (directamente vinculado con la estructura interna de la entidad), y particularmente, la posible existencia de distintas corrientes o agrupaciones internas que procuren encauzar la acción de la organización hacia determinadas estrategias políticas. En este sentido, es importante analizar también la estructura organizacional de la entidad. Por último, cabe indagar en la ideología que fundamenta su accionar.

Una segunda dimensión se centra en el análisis de la estructura de representación de intereses compuesta por las asociaciones vinculadas con la organización estudiada, tanto directa como indirectamente. El vínculo directo refiere a la estructura de asociaciones de primer grado que representan a la clase a nivel de sus fracciones tanto estructurales como geográficas, y que tienden a agregarse en entidades de segundo, tercer, y ocasionalmente cuarto grado, para representarla a niveles de mayor agregación. Respecto de los vínculos indirectos, cabe destacar tanto que una fracción de clase puede estar representada por más de una asociación, como que éstas pueden representar a más de una de ellas. Por lo tanto también es pertinente analizar, en este sentido, la relación que establecen entre sí estas organizaciones, tanto si representan a miembros de la misma rama o fracción como si no lo hacen. Asimismo, cabe indagar la posibilidad de que los miembros de dichas asociaciones sean capaces de accionar por fuera de ellas.²³

La última dimensión, finalmente, es la acción política en sí misma. Como señala Beltrán (2012, pág. 73), se trata de una acción “orientada a intervenir en el campo político con el fin de influir sobre las decisiones de los agentes gubernamentales”. Dicha acción puede tomar formas variadas. En este sentido, algunos de los principales recursos con los que cuentan las organizaciones para perseguir sus objetivos son enumerados por Tirado (1996, pág. 263), quien señala que éstas pueden: acudir directamente al gobierno y al Congreso para plantear sus demandas; vincularse a los partidos políticos para que defiendan sus intereses o no interfieran con los mismos; actuar en el seno de las

²³ Como señala Birlé (op.cit.), los representantes de determinados capitales pueden, en virtud del tamaño de estos, realizar individualmente algunas de las acciones que suelen quedar en manos de las asociaciones, como entablar negociaciones frente a funcionarios estatales.

organizaciones empresariales de grado superior, haciendo que sus intereses se conviertan en propuestas de las asociaciones y sean promovidos por las mismas; comparecer directamente ante la opinión pública para conformarla acorde con sus intereses y demandas. A esto habría que sumar otro recurso frecuentemente utilizado: el paro o lockout, al que acuden como forma de presión ante los gobiernos. Por otra parte, la enumeración propuesta por este autor excluye, ciertamente, las acciones realizadas por fuera del marco legal, como el cohecho.²⁴

Hasta aquí, entonces, algunas de las determinaciones generales de la acción política de la clase capitalistas. Avancemos a continuación hacia la clase terrateniente, cuya existencia no ha brotado aún del análisis.

1.4. La clase terrateniente y su acción política

Como señalábamos anteriormente, la diferencia entre las clases capitalista y terrateniente no siempre se presenta de manera clara en la bibliografía. Habíamos ya destacado en la introducción a esta tesis que algunos autores que estudian a esta última clase le atribuyen funciones que, en realidad, corresponden a los capitalistas. Por su parte, entre aquéllos que analizan las formas concretas que toma la acción política de la clase capitalista prevalece una subsunción de signo inverso: la de la clase terrateniente en la capitalista. Así, las categorías de “burguesía” o “empresariado” frecuentemente aluden a ambas.²⁵ Veamos entonces, a continuación, qué es la clase terrateniente y cuál es su relación social.

La producción de determinadas mercancías, y en lo que interesa específicamente para esta tesis, de las mercancías agrarias, se realiza en tierras sobre las cuales la aplicación del trabajo tiene distinta productividad debido a la presencia de condicionamientos naturales no controlables por el capital, lo que hace variar su precio de producción individual.²⁶ Los valores de uso producidos, no obstante, no van a encerrar inmediatamente ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, su precio comercial va a equivaler al del precio de producción correspondiente al trabajo menos productivo que se haya puesto en marcha para satisfacer la demanda. Este precio comercial implica una

²⁴ Un estudio que se detiene específicamente en las formas concretas bajo las que accionaron los capitalistas y terratenientes argentinos frente al Estado a lo largo de la década de 1980 es presentado por Lattuada (1990). Abarcando también parte de la década de 1990, pueden consultarse asimismo los trabajos de Acuña (1990; 1995) y Birle (1997).

²⁵ Entre los autores ya mencionados, tal es el caso de Acuña (1994), Birle (1997), Beltrán (2012) y Dossi (2007). Otros autores, incluso, llegan a subsumir conceptualmente ambas clases, como mencionaremos posteriormente.

²⁶ El desarrollo de Marx respecto de la transformación de valores en precios de producción es presentado en la sección segunda del tercer tomo de *El Capital* (2009 [1894], págs. 179-268). Una síntesis de las discusiones suscitadas en torno a esta cuestión puede hallarse en trabajo de Moseley (2016), mientras que un análisis desde el enfoque que sustenta esta tesis puede hallarse en Iñigo Carrera (1995).

ganancia extraordinaria para aquéllos capitales que producen sobre tierras donde la productividad del trabajo que ponen en marcha es superior, a causa de los condicionamientos naturales, obteniendo por lo tanto un precio de producción menor. La competencia entre los distintos capitales por apropiarse de esta ganancia extraordinaria provoca que ésta se desvíe hacia los bolsillos de aquellos que tienen el monopolio sobre la disponibilidad de tales condiciones naturales, esto es, la clase terrateniente. La ganancia extraordinaria se convierte, de este modo, en la renta que apropia dicha clase. Por tratarse de una renta basada en el monopolio de condiciones naturales diferenciales, Marx la denomina renta diferencial (Marx, 2009 [1894], págs. 823-34).

A diferencia de los capitales industriales en general, los que se aplican a la producción de estas mercancías no constituyen una unidad técnica indiferenciada. Por el contrario, se dividen en una serie de porciones de aplicación sucesiva, cada una de las cuales pone en marcha una distinta productividad del trabajo. Pero, de la misma forma, el precio comercial de las mercancías se va a ubicar en el nivel de la porción que corresponda a la menor productividad del trabajo, lo que genera una nueva fuente de ganancia extraordinaria sobre las porciones de capital que ponen en marcha un trabajo más productivo. Y, también de la misma forma, esta ganancia extraordinaria se convertirá en renta diferencial para el terrateniente. Se trata de la renta diferencial de tipo I y II, respectivamente.^{27 28}

En lo que refiere al proceso de producción social, por lo tanto, el carácter específico del terrateniente está dado por la personificación de la propiedad de la tierra, lo que le permite apropiarse de la fracción de la plusvalía que se constituye como renta (diferencial, en este caso) de la tierra. En otras palabras, son capaces de reclamar una fracción del producto social sin entregar a cambio contrapartida material alguna (Marx, 2009 [1894], págs. 823-833). Los terratenientes tendrán que poner entonces su conciencia y voluntad al servicio de la propiedad de la tierra a la que personifican, de forma tal de apropiarse de la totalidad de la renta.

Esto supone, por lo tanto, la existencia de una relación de solidaridad entre terratenientes y capitalistas, puesto que la apropiación de la renta se halla directamente ligada a la valorización del capital. Pero, al mismo tiempo, la relación entre estos sujetos sociales no deja de ser antagónica en torno a la apropiación de dicha renta. Antagonismo que, por cierto, no obsta para que ambos se constituyan como socios en la explotación de la

²⁷ La clase terrateniente puede además apropiarse de una fracción de la plusvalía mediante el monopolio ya no diferencial, sino absoluto sobre la tierra. Sin embargo, por tratarse de procesos cuya incidencia en el proceso nacional de acumulación de capital es mínima en relación a las magnitudes en juego, su desarrollo no cabe aquí. En su lugar, remitimos a los desarrollos de Iñigo Carrera (2007b, págs. 13-4; 2007). En todo lo que sigue, y al sólo efecto de favorecer la fluidez del desarrollo del texto, toda mención a la renta de la tierra referirá específicamente a la renta diferencial, a menos que se indique lo contrario.

²⁸ Una síntesis crítica de las discusiones en torno a la renta diferencial de tipo II puede hallarse en los trabajos de Caligaris y Pérez Trento (2012), Caligaris (2014a), e Iñigo Carrera (2014).

clase obrera, puesto que ambos reproducen su vida sobre la base de la apropiación de la plusvalía.²⁹

La apropiación de la renta de la tierra, sin embargo, no sólo determina la existencia de una relación antagónica entre terratenientes y capitalistas de las ramas de la producción en cuestión. Como señala Iñigo Carrera (2014, pág. 713), la renta de la tierra que embolsan los primeros se constituye como una resta de la capacidad de acumulación del capital social total.³⁰ Esto determina, por lo tanto, una relación de antagonismo entre dicha clase y el capital social total. Marx lo sintetiza de este modo:

El capitalista es el explotador directo de los trabajadores [...]. Pero como (para el capitalista industrial) ello sólo puede ocurrir gracias al proceso de producción, y en éste mismo, él es a su vez un funcionario de esta producción, su director. Por otro lado, el terrateniente posee un derecho [sobre la tierra] que le permite embolsarse una parte de este sobretrabajo o plusvalía, en cuya dirección y creación para nada contribuye. Por lo tanto, cuando existe un conflicto, el capitalista lo considera una redundancia, una excrecencia sibarítica, un parasito de la producción capitalista, el piojo que se adhiere a él (1974 [1861-3], pág. 380).

Y este debe resignarse a esta sangría, puesto que evitarla supondría la abolición de la propiedad privada sobre la tierra como medio de producción, y por lo tanto, sobre los medios de producción en general. Como afirma Marx:

El terrateniente [...] es un residuo inútil en el mundo industrial. El burgués radical [...] avanza entonces, en términos teóricos, hacia una refutación de la propiedad privada de la tierra que, en forma de propiedad estatal, le agradecería convertir en propiedad común de la clase burguesa, del capital. Pero en la práctica le falta la valentía, pues un ataque contra una forma de propiedad (una forma de propiedad privada de una condición de trabajo) podría arrojar considerables dudas sobre la otra forma (1974 [1861-3], pág. 36).³¹

De esta forma, y a pesar de no jugar rol alguno en la organización capitalista de la producción, la clase terrateniente tendrá la potencia, en principio, para apropiarse la totalidad de la plusvalía que adopta la forma de renta de la tierra.

²⁹ Sobre esta base, se ha llegado a incluso a plantear que no existe una diferencia significativa entre ambas clases. Tal es el caso, por ejemplo, de Sartelli et. al. (2008), quienes afirman que “en sentido estricto, el terrateniente no es una clase social [...]. El terrateniente es una fracción de la burguesía” (pág. 25).

³⁰ Para revisión crítica de la discusión en torno a la fuente del plusvalor que constituye la renta de la tierra puede verse el trabajo de Caligaris (2014a).

³¹ En este sentido, al capital social total sólo le queda la recuperación del uso productivo de la fracción de renta que los terratenientes no consumen individualmente, que recibe como capital prestado a interés, y la expansión de la escala de determinadas ramas de producción, sobre la base del consumo individual de los terratenientes, para avanzar en el desarrollo de la productividad del trabajo y, de ahí, en la apropiación de plusvalía relativa (Iñigo Carrera, 2014, pág. 731).

1.5. Síntesis

En este capítulo hemos procurado desarrollar, sintéticamente, las determinaciones generales de la acción política de las clases capitalista y terrateniente. Repasémoslas brevemente.

Hemos procurado sintetizar, en primer lugar, los aspectos más destacados del enfoque marxista sobre la acción política, y mostrado que, a pesar de enfatizar aspectos importantes como la necesidad de abordar su estudio a nivel de las clases sociales, dicha perspectiva desecha la pertinencia del estudio de las organizaciones que representan políticamente a los capitalistas. Y lo hace sobre la base de obturar el análisis de la acción política ejecutada de forma colectiva, ya que parte de afirmar que la acción más potente de que disponen los capitalistas se halla al nivel de la empresa.

Posteriormente, repasamos algunas de las críticas que recibió este abordaje, y que ponen en cuestión algunos de sus supuestos fundamentales. A continuación, volvimos a encarar la cuestión partiendo de un enfoque que, con base en la obra de Marx, entiende al capital como el sujeto concreto inmediato de la producción social y a las relaciones políticas como forma concreta de desarrollarse las relaciones económicas, esto es, conformando ambas una unidad. Sobre esta base, volvimos a plantear algunas determinaciones generales de la acción política desarrollada por la clase capitalista, reintroduciendo el problema de la coordinación de la acción, planteando la necesidad de no limitar el análisis a las relaciones económicas, y dando cuenta de la potencia que, por el rol que desempeña en la acumulación, porta genéricamente la clase capitalista. Subsiguientemente, repasamos algunas de las cuestiones más significativas para el análisis de las organizaciones de capitalistas, entre las que destacan las relacionadas a su base social, organización interna, vínculo con otras asociaciones, estrategia de acción, etc. Por último, hicimos extensivo el análisis hacia la clase terrateniente.

Como ya señalamos, se trata hasta aquí de determinaciones de carácter general. El análisis de la acción de una organización que representa políticamente a una fracción de carácter nacional de esta última clase exige, por lo tanto, detenerse en la forma concreta que toma la acumulación de capital en el ámbito nacional en el que aquélla opera. A ello dedicaremos el capítulo siguiente.

Capítulo 2

La especificidad del proceso de acumulación de capital en la Argentina

En el capítulo precedente hemos avanzado hacia el análisis de las determinaciones generales de la acción política de las clases capitalista y terrateniente. Corresponde, a continuación, detenerse en la especificidad que caracteriza al proceso argentino de acumulación de capital, entre cuyas formas concretas de realizarse se halla la acción política de aquéllos.

Tal paso nos enfrenta entonces a la cuestión del carácter de los distintos procesos nacionales de acumulación de capital. Al considerar de forma general la unidad mundial de este proceso, Marx y Engels establecen que el desarrollo de las fuerzas de producción bajo la forma específicamente capitalista es lo que da origen a la creación del mercado mundial. Y, una vez que éste logra afirmarse como tal, potencia aquel desarrollo (1985, pág. 36).

Surge entonces la cuestión acerca del carácter de los distintos procesos nacionales de acumulación que confluyen en este mercado. Esto es, si cada uno de estos lleva en sí la potencia para desarrollar las fuerzas productivas del trabajo social.

En lo que refiere a la Argentina, el supuesto subyacente en buena parte de la producción marxista es la existencia de esta potencia, que no logra realizarse por la presencia de “trabas” al desarrollo.³² Esto es, se parte de creer que todo espacio nacional de acumulación es capaz de participar en el desarrollo de las fuerzas productivas y, más aún, de hacerlo mediante la producción de mercancías en general.

Aquí vamos a partir, por el contrario, de un enfoque opuesto, que se desprende de considerar al capital como el sujeto concreto inmediato de la producción y el consumo sociales. Esto es, como la relación social general. Como hemos expuesto previamente, tal es el análisis que sustenta el hecho de considerar las relaciones políticas como la forma concreta bajo la que se realizan las relaciones económicas.

Partir de que el capital es el sujeto concreto inmediato de la reproducción de la vida social implica dar cuenta de su necesidad de fragmentarse en distintos espacios nacionales de acumulación. Es decir que, desde este punto de vista, la unidad de dicho proceso es mundial por su contenido, y nacional por su forma.

³² Dichas trabas tienden a ser localizadas, por ejemplo, en la constitución de distintas alianzas de clase, incapaces cada una de imponer a la contraria de forma sostenida su propio patrón de acumulación. Ejemplos de esta perspectiva pueden hallarse en los trabajos de Peralta Ramos (1973) y Portantiero (1977). O, también, en la potencia de otros procesos nacionales para limitar este desarrollo, como sugiere, por ejemplo, Braun (1970).

El desarrollo que sigue constituye una síntesis de los trabajos de Juan Iñigo Carrera que avanza sobre este análisis de manera general (2003, págs. 148-54; 2014), y sobre la especificidad que toma este proceso en la Argentina, desarrollados tanto por este autor (1998; 2004; 2005; 2007; 2011) como por otros investigadores que parten del mismo enfoque (Guevara, 2007, 2011, 2012; Fitzsimons, 2013, 2014, 2016; Starosta & Grinberg, 2014; Grinberg, 2016).³³

2.1. La unidad del proceso mundial de acumulación de capital desde sus orígenes y la diferenciación de los procesos nacionales de acumulación³⁴

En su origen histórico, la acumulación de capital a escala mundial se desarrolla sobre la base de distintos procesos nacionales de acumulación que procuran abarcar en su interior la producción de la generalidad de las mercancías que consumen. En su lucha por afirmarse independientemente de los otros, estos procesos nacionales, a los que por simplicidad denominaremos clásicos, chocan entre sí conformando el proceso mundial de acumulación de capital.

La formación del mercado mundial excede, de este modo, la simple competencia por la venta de la misma mercancía. La reproducción de los capitales individuales, así como la de la clase obrera nacional como población en activo, tiene por condición inmediata la reproducción del proceso de acumulación nacional que conforman. Así, ambas clases establecen entre sí una relación directa que se enfrenta de forma antagónica a los otros espacios nacionales. La competencia en el mercado mundial no se realiza, por lo tanto, simplemente a través de los capitales individuales, sino que se ve mediada por las relaciones directas que establecen entre sí los representantes políticos generales de los distintos fragmentos nacionales del capital social, es decir, los Estados nacionales.

La competencia entre los capitales individuales en el mercado mundial toma entonces una primera forma específica, consistente en la competencia por venderles a los de los restantes fragmentos nacionales evitando comprarles, de forma de expandir todo lo posible la escala del proceso nacional de acumulación que conforman.

Por supuesto, por mucho que se desarrolle la generalidad de la producción de mercancías en el interior de cada ámbito nacional de acumulación, ésta no logra abarcar todas las ramas. En particular, la producción de materias primas tiende a escapar del alcance de estos procesos nacionales, en la medida en que se trata de producciones en donde la productividad del trabajo se halla especialmente subordinada a condiciones

³³ Aspectos específicos de otros procesos nacionales de acumulación han sido también analizados desde este enfoque. Al respecto, pueden consultarse los trabajos de Grinberg (2008; 2010; 2013a; 2013b) y Starosta & Grinberg (2009).

³⁴ Esta sección sintetiza el desarrollo de Iñigo Carrera (2003, págs. 148-54).

naturales no controlables por el capital normal. Condiciones que son más favorables, o únicamente existen, en territorios que son exteriores a los ámbitos en cuestión. De este modo, los capitales de los países clásicos establecen un segundo eje de competencia en el mercado mundial, consistente en la competencia por abastecerse de materias primas y, al mismo tiempo, en la expansión del mercado externo, mediante la venta a los capitales o simples productores de mercancías localizados en estos territorios que ahora tienen la capacidad de compra proveniente de la realización de sus mercancías en el mercado mundial.

El desarrollo de la producción capitalista en los territorios destinados al abasto de materias primas requiere del desembolso en ellos del capital destinado a la producción y circulación de las mismas a la escala correspondiente a la determinación del precio de producción en el mercado mundial. La baja velocidad con que la acumulación local podría alcanzar tal escala abre la posibilidad, para los capitales normales de los países clásicos, de operar sobre estos territorios.³⁵

La incorporación de los territorios en los que existen las condiciones naturales requeridas para la producción de materias primas con el objeto de potenciar los procesos clásicos de acumulación toma entonces dos modalidades específicas. La primera de ellas es la ocupación militar directa del territorio por parte del fragmento nacional del capital social que va a hacer uso de él, esto es, el colonialismo. En otros casos, la modalidad está dada por la formación de ámbitos nacionales independientes de acumulación. Sin embargo, para los países clásicos no se trata de engendrar nuevos competidores en el mercado mundial, sino de abastecerse de materias primas desde territorios cuyas condiciones naturales permiten producirlas con una mayor productividad del trabajo, de forma de expandir la plusvalía relativa generada en su ámbito de origen. Estos nuevos ámbitos de acumulación son entonces engendrados como forma concreta necesaria de expandirse la acumulación de capital en los países clásicos. Con lo cual no encierran, desde su mismo origen, la potencia para transformarse en un proceso de acumulación capaz de abarcar la generalidad de la producción de mercancías. Y se hallan, por lo tanto, específicamente recortados con el fin de producir materias primas abaratas para los países clásicos.

La realización del precio de producción de estas mercancías, sin embargo, determina la existencia de un flujo de plusvalía que escapa de los países clásicos con destino a estos territorios. En efecto, las materias primas producidas en los espacios nacionales de acumulación recortados a tal fin son portadoras de renta de la tierra. La realización de éstas

³⁵ La participación activa de los capitales industriales en el proceso de formación de la tasa general de ganancia tienen por condición que alcancen el grado de concentración suficiente para operar en la escala que sea capaz de poner en marcha la capacidad productiva del trabajo que determina el valor de las mercancías, lo que determina a dichos capitales como normales o medios en su rama. Aquéllos capitales que quedan atrás en el proceso de concentración y centralización quedan entonces determinados como pequeños capitales (Iñigo Carrera, 2003, págs. 137-41).

en el mercado mundial, por lo tanto, fuerza a los capitales individuales que importan tales mercancías a dejar escapar una fracción de la plusvalía que arrancan a sus obreros, y que inicia su curso hacia los bolsillos de los terratenientes de los países que producen las mercancías en cuestión.

Por supuesto, estos capitales no harían un gran negocio al buscar incrementar su producción de plusvalía relativa mediante el abaratamiento de materias primas simplemente localizando la producción de éstas allí donde existen condiciones naturales diferenciales. Si tal fuera el caso, no estarían haciendo más que cederles a los terratenientes locales la materialización de una porción de este diferencial en la productividad del trabajo bajo la forma de renta de la tierra. Por el contrario, aquellos capitales van a ser capaces de recuperar una fracción de la plusvalía que pierden. Capacidad que proviene del hecho de conformar un proceso de acumulación de capital que es portador de la potencia para desarrollar las fuerzas productivas del trabajo social. En oposición a estos, desde el punto de vista de la producción social, los terratenientes de todos los espacios nacionales de acumulación se constituyen en puros parásitos sociales. Y en cuanto tales, no necesitan apropiarse la totalidad de la renta de la tierra para su propia reproducción.

Los Estados nacionales que representan las porciones de capital social bajo las cuales se desarrollan los procesos de producción de mercancías portadores de renta de la tierra pueden entonces interrumpir el flujo de ésta hacia los terratenientes mediante distintas formas. Pero por tratarse de procesos nacionales de acumulación que han sido específicamente engendrados con el fin de expandir la escala de la acumulación de los capitales individuales que operan en los países clásicos, la renta de la tierra desviada de su curso por la acción de dichos Estados no puede dar lugar a la potenciación de los procesos de acumulación específicamente restringidos que representan. Por el contrario, su acción va a ser la portadora de la reversión parcial del flujo de renta hacia su lugar de origen bajo distintas formas, entre las que destacan tanto la expansión de una masa de capitales prestados a elevadas tasas de interés que conforman la deuda externa, como el desvío hacia los fragmentos recortados que los capitales normales desprenden de sí para operar en los países productores de materias primas con una productividad del trabajo marcadamente inferior a la normal.

La unidad del proceso mundial de acumulación de capital determina entonces la conformación de espacios nacionales carentes desde su propia génesis de la potencia para convertirse en productores de mercancías de forma general. En otras palabras, se configuran como fragmentos de capital social conformados por capitales individuales incapaces de participar en el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social. Por el contrario, se hallan específicamente recortados al fin de producir mercancías agrarias

portadoras de renta de la tierra, parte de la cual refluye hacia los países que la dejan escapar.

La Argentina es uno de los ejemplos más característicos de este tipo de espacio nacional.

2.2. La especificidad de la acumulación de capital en la Argentina³⁶

El espacio nacional argentino tiene su génesis, como hemos visto, en la necesidad de los fragmentos de capital social que constituyen los países clásicos de abastecerse de las materias primas, en este caso agrarias, para expandir su escala de producción.

Como proceso nacional de acumulación de capital, entonces, la Argentina es engendrada carente de la potencia para convertirse en uno en el que se produzcan mercancías de manera general. Inicialmente, no cabe más producción en ese espacio que la de las mercancías en cuestión, así como las destinadas a su conservación y circulación.

Su realización implica, sin embargo, el ingreso de un flujo de plusvalía arrancada a los trabajadores de los países clásicos por los capitales individuales que los emplean, y que inicia su camino hacia los terratenientes locales bajo la forma de renta de la tierra para, posteriormente, retornar parcialmente hacia los ámbitos nacionales que la dejan escapar.³⁷

La forma más visible de este movimiento son los impuestos a la exportación, más conocidos como retenciones. El Estado nacional apropia directamente una parte de la renta y le da curso mediante el pago de subsidios, la expansión de la capacidad de compra de las mercancías que producen estos capitales, etc. Por otra parte, las retenciones tienen al mismo tiempo el efecto de abaratar las mercancías agrarias consumidas internamente, lo que abarata a su vez el valor de la fuerza de trabajo para el capital sin afectar al salario real. El mismo efecto poseen la restricción a la exportación de mercancías agrarias y la fijación de precios internos, aunque se trata de una vía indirecta, ya que la porción de renta no transita las arcas del Estado (a menos que tenga el monopolio sobre el comercio).

³⁶ La síntesis de esta sección se basa en Iñigo Carrera (1998; 2007b).

³⁷ Esta primera determinación de la especificidad del proceso nacional de acumulación de capital fue puesta de relieve previamente por dos autores. Laclau (1969) señala que a la economía nacional ingresa de forma sostenida una masa de riqueza social, bajo la forma de renta diferencial de la tierra, esto es, "plusvalía producida por el trabajador extranjero" (pág. 37). Pero, al mismo tiempo, caracteriza a la Argentina como un país dependiente (págs. 36-7), lo que implica que debe ceder, en virtud de la menor composición orgánica del conjunto de sus capitales, una porción de su excedente económico (págs. 33-4). De la misma forma, y tomando el trabajo de Laclau como referencia inmediata, Flichman (1977) afirma que el continuo flujo de renta que ha ingresado hacia la Argentina ha desempeñado un rol fundamental en su desarrollo económico (págs. 76-7), y establece que una fracción de ésta ha desviado su camino para beneficiar a los capitalistas industriales y a la clase obrera, aunque no ve en este movimiento más que una abstracta "política redistribucionista" encarnada por el gobierno peronista (págs. 111-2). A pesar de haber avanzado sobre esta determinación, sin embargo, se las arregla para encontrar en ella la causa de la traba al desarrollo económico: se trata de que el enorme peso de la renta del suelo brinda un gran poder económico y político a la clase terrateniente, que es entonces capaz de trabar dicho desarrollo (pág. 83).

Sin embargo, existe una tercera forma, también indirecta, en que una fracción de la renta agraria es apropiada por aquellos capitales. Se trata de la sobrevaluación de la moneda nacional, que se impone recurrentemente a lo largo de la historia nacional. Este mecanismo tiene el mismo efecto que las retenciones sobre los precios internos de las mercancías agrarias. Pero además, retiene parte del precio de producción de las mercancías exportadas en el momento en el que pasan por la mediación cambiaria. Las únicas mercancías capaces de atravesar esta mediación deben no sólo haberse producido en condiciones normales, sino además contar con una porción de plusvalía mayor al que constituye la ganancia normal. Es precisamente el caso de las mercancías agrarias, que son portadoras de renta de la tierra. Una porción de ésta es apropiada al pasar por la mediación cambiaria y, sin mediación aparente del Estado, desviada hacia sus beneficiarios: los capitales que importan mercancías industriales, correspondientemente abaratas por la sobrevaluación.

Desde el inicio del siglo XX hasta la crisis de 1930, tres sujetos sociales confluyen en la apropiación de la renta de la tierra. En primer lugar, la clase terrateniente que, por cierto, tiene a su cargo la gestión política del proceso nacional de acumulación. En segundo lugar, los capitales industriales extranjeros que operan en la circulación de las mercancías agrarias hacia el mercado mundial, y en los servicios públicos de los centros urbanos. Lo hacen al importar con un peso sobrevaluado y remitir al exterior las ganancias realizadas internamente, para lo cual toman una parte de la renta que queda pendiente de apropiación al exportarse las mercancías agrarias al peso sobrevaluado. Otra porción de renta pasa a valorizar dichos capitales a causa del menor valor de la fuerza de trabajo, efecto de la baratura interna de las mercancías agrarias por efecto de la misma sobrevaluación. Finalmente, otra fracción pasa a sus manos al forzar a los capitales agrarios al pago de tarifas marcadamente superiores a las vigentes en otros ámbitos nacionales. El tercer socio en la apropiación de renta de la tierra lo constituyen los capitales acreedores de la deuda pública externa, que reciben su parte a través del cobro de sus créditos a tasas de interés que llegan a triplicar o cuadruplicar las que rigen en el mercado mundial. La masa de riqueza social que fluye hacia ellos es la que retiene el Estado nacional al forzar la exportación de mercancías agrarias con un peso sobrevaluado que deja una fracción de renta pendiente de apropiación, y pasa a sus manos bajo la forma de impuestos a la importación para seguir posteriormente su curso.

La génesis de la forma del proceso nacional de acumulación de capital durante el siglo XIX alcanza su plenitud en las primeras décadas del siglo XX y se cierra hacia mediados del mismo. En este período, el fragmento de capital social recortado nacionalmente que produce mercancías en general y se abastece de mercancías agrarias fuera de su territorio es principalmente el capital industrial inglés. A través del capital

prestado a tasas de interés excepcionalmente altas y a la valorización extraordinaria de los capitales industriales aplicados en la Argentina a la circulación de las mercancías agrarias y a los restantes servicios públicos, el proceso británico de acumulación de capital recupera una porción de la plusvalía que inicialmente dejara escapar hacia el espacio nacional de acumulación bajo la forma de renta de la tierra.

Desde fines de la crisis de 1930, comienza a desarrollarse en la Argentina una masa de pequeños capitales que avanzan en la producción de mercancías en general, pese a carecer de la escala necesaria para competir en el mercado mundial. Su valorización, consecuentemente, no puede sostenerse simplemente mediante la extracción de plusvalía a sus obreros, sino que necesitan apropiarse una fracción de la renta de la tierra que portan las mercancías producidas en el interior del proceso nacional de acumulación. A mediados de la década siguiente, la acumulación de estos pequeños capitales se expande violentamente. Sin embargo, cuando la magnitud de renta apropiable se contrae, hacia mediados de la década de 1950, estos entran inmediatamente en crisis. Se pone entonces de manifiesto que este desarrollo es la base que abre la entrada al país a los capitales normales que sí disponen de la escala requerida para competir directamente en el mercado mundial, pero que desprenden fragmentos suyos para valorizarse aquí sobre la escala particularmente restringida del mercado local. Estos capitales se valorizan a tasas por lo menos similares a las que obtienen operando en otros países a escala normal sobre una doble base específica. Por una parte, suman a la plusvalía que extraen a sus obreros una porción de renta diferencial de la tierra que se ven obligados a ceder los terratenientes y una porción de ganancia que liberan en la circulación los pequeños capitales.³⁸ Por la otra, ponen a valorizar capital bajo la forma de medios de producción ya obsoletos por el desarrollo mundial de las escalas de producción, y cuyo valor es por tanto muy bajo o nulo. La manifiesta impotencia para participar en el desarrollo de las fuerzas productivas que corresponde a estas tecnologías ya obsoletas libera además a dichos capitales de la necesidad de sostener un Estado nacional capaz de actuar como el sujeto político de este desarrollo, bajo las formas de la evasión y elusión impositivas.

Por otra parte, el desarrollo de todo proceso nacional de acumulación tiene, entre sus formas concretas de realizarse, la centralización de los capitales. Y en el ámbito argentino,

³⁸ La participación activa de los capitales individuales en el proceso de formación de la tasa normal de ganancia implica que estos tienen la magnitud suficiente como para poner en acción la productividad del trabajo que determina el valor de las mercancías. Aquellos que quedan atrás en la concentración y centralización se ven marginados de participar en dicho proceso, y quedan por tanto determinados como pequeños capitales. Como tales, se hallan forzados a convertirse en fragmentos que se unen para integrar otros capitales industriales, bajo la forma del capital prestado a interés.

Sin embargo, pueden postergar este paso si el precio de producción de sus mercancías se ubica por encima del que corresponde a la capacidad de valorización normal concreta de estos capitales, que se halla regida por la tasa de interés. La competencia entre estos hace que la porción de plusvalía que va desde su precio que regula el límite de su reproducción al que determina el precio de producción sea apropiada como ganancia extraordinaria por los capitales más concentrados que se vinculan con ellos en la circulación (Iñigo Carrera, 2003, págs. 140-5).

esta tendencia avanza a expensas de socavar su base específica. Lo hace al aniquilar, bajo la forma de la centralización, a los pequeños capitales locales, cuya existencia es condición para que los fragmentos de capitales medios se valoricen a partir de la ganancia que aquellos liberan. Al mismo tiempo, la expansión de estos hacia nuevas ramas extiende la masa de renta de la tierra y ganancia que necesitan apropiarse para valorizarse a la tasa normal de ganancia. Pero, además, el límite específico que impone a la acumulación la escala restringida del espacio nacional argentino provoca, por mucho que ésta se desarrolle, una separación creciente entre la pequeña escala con la que operan localmente los fragmentos capitales medios y la escala normal con la que producen fuera del país, lo que también contribuye a expandir la masa de plusvalía que necesitan apropiarse. De este modo, el proceso nacional de acumulación de capital choca contra su límite específico, dado por la magnitud de renta de la tierra apropiable por el capital industrial.

Por su propia naturaleza, dicha magnitud se encuentra sujeta a violentas fluctuaciones. Es así que, cuando la renta se expande, también lo hacen las formas de apropiación que la desvían hacia la generalidad de los capitales industriales: la moneda nacional pasa a sobrevaluarse, aumentan los impuestos a las exportaciones, y se incrementa el déficit público que conlleva al desarrollo de tasas de interés reales negativas. Pero cuanto más se expande la acumulación de estos capitales, más necesitan sostenerse sobre una masa de renta cuya expansión sea más acelerada que la de estos. En cuanto ésta detiene su expansión, o peor aún, se contrae, las formas de su apropiación siguen el curso opuesto, y el proceso nacional de acumulación pone de manifiesto su propio límite.

Este proceso tiene una expresión política igualmente específica. El período de veloz expansión que se abre a mediados de la década de 1940 para los pequeños capitales locales determina además el crecimiento no menos veloz de los salarios. Así, la representación política de esta etapa recae en un gobierno que parece expresar el interés compartido tanto por la clase obrera como por la fracción del capital social correspondiente a los capitales individuales de origen nacional o, en otras palabras, al pueblo argentino. Se trata del populismo peronista.³⁹

Pero en cuanto esta expansión alcanza su techo y la acumulación empieza a fluctuar, la representación política de este proceso asume formas aparentemente contrapuestas. Las fases de expansión, ahora mucho más moderada, van a estar representadas por gobiernos de un populismo mucho más atenuado. Estos, no obstante, no pueden expresar el movimiento inverso, es decir, la contracción en la acumulación, momento en el que caen los salarios y se estrangula la expansión e incluso la reproducción

³⁹ Como ya señalamos en la introducción (véase la primera nota al pie de página), el término populismo no reviste aquí un significado peyorativo.

de los pequeños capitales. Sobrevienen entonces los golpes militares que imponen un gobierno de tipo liberal, que ejecuta las políticas opuestas a las de la expansión.

*2.2.1. La especificidad de la acumulación de capital en la Argentina desde mediados de la década de 1970*⁴⁰

Hacia fines de la década de 1960 y principios de 1970 el flujo de renta agraria permanece estancado en su mínimo histórico, con lo cual la especificidad de la acumulación en la Argentina parece estar a punto de chocar contra su límite específico. Este momento, sin embargo, se ve postergado por una nueva y violenta suba en el precio comercial de las mercancías agrarias, forma concreta que toma el proceso mundial de acumulación de capital cuando se enfrenta a una inminente crisis de superproducción. Se impone entonces un abanico de formas de apropiación de renta: sobrevaluación de la moneda, monopolio estatal en el comercio de granos, fijación de precios internos para las mercancías agrarias inferiores al precio de producción que determina su precio comercial en el mercado mundial, y déficit público financiado con expansión monetaria que arrastra una tasa de interés real negativa. Así y todo, la clase terrateniente sigue logrando apropiarse casi la mitad de la masa total de renta hacia el año 1973.

Esta fluctuación provoca entonces la expansión inmediata del proceso de acumulación de capital, que vuelve a tomar la forma política del populismo, encarnado por el gobierno a cuya cabeza se halla nuevamente el propio Perón.

Pero la irrupción de la crisis mundial de superproducción retrotrae rápidamente la situación. Hacia fines de 1974, el precio comercial de las mercancías agrarias se desploma tan violentamente como se había incrementado, con lo cual la renta de la tierra vuelve a contraerse velozmente. Suena entonces la hora final para las políticas que dan forma a su apropiación, que comienzan a ser desmanteladas. La violencia con que la escala de la acumulación necesita contraerse se expresa a través de una dictadura militar especialmente cruenta, que se impone en 1976.

Así, el proceso nacional de acumulación de capital vuelve a chocar brutalmente contra su límite específico. De allí en más, la magnitud de la renta de la tierra va a mostrarse insuficiente para sostener por sí sola a la valorización de los capitales industriales, que necesitan entonces sumar nuevas fuentes de riqueza social para compensar su reducida tasa de ganancia.

La primera de ellas consiste en el resurgimiento del endeudamiento público externo, cuyo saldo se torna marcadamente positivo durante buena parte de este período. De este

⁴⁰ En esta sección nos basamos en Iñigo Carrera (1998; 2007b). La magnitud de la renta de la tierra que fluye al territorio nacional en el período 1976-2008, así como su apropiación, son presentadas en los primeros dos gráficos del anexo estadístico que acompaña la tesis.

modo, una masa de riqueza social afluye a la economía nacional bajo la forma de deuda externa que no es cancelada a su vencimiento, ya que los saldos e intereses son constantemente renovados.

La segunda remite a las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. La continua expansión de la población sobrante es un rasgo específico del proceso general de acumulación. La especificidad que éste toma en la Argentina, sin embargo, tiende a agudizarlo. En primer lugar, porque la brecha entre la productividad del trabajo puesta en marcha localmente y la que rige a escala mundial tiende a ser cada vez mayor, lo que provoca que en los períodos en que la acumulación se estanca o contrae esto se ponga de manifiesto como la imposibilidad creciente de continuar valorizándose de buena parte de los pequeños capitales locales. El capital dispone entonces de un flujo de fuerza de trabajo sobrante, que lo libera de la necesidad de reproducir a la que se halla en activo. Y ésta, consecuentemente, pasa a venderse por debajo de su valor.

2.2.2. La acumulación de capital durante el período 1990-2008⁴¹

Visto de forma exterior, en este período parecen desarrollarse dos procesos totalmente opuestos entre sí. Así lo indica incluso la forma política general que toma la acumulación de capital: mientras que durante toda la década de 1990 se impone el más crudo neoliberalismo, tras la crisis del 2001 resurge una vez más un gobierno de características populistas. Se trata, no obstante, de las dos formas políticas que conforman la unidad de la acumulación de capital en la Argentina.

La década de 1990 constituye una fase en que se renuevan las bases específicas con las que se reproducen la generalidad de los capitales industriales. El rasgo clave de este período es la marcada sobrevaluación de la moneda, que promedia durante toda la década un 100%. Este mecanismo se constituyó en la principal forma de apropiación de renta que, más allá de sus fluctuaciones, y a pesar de que a la renta de la tierra agraria se suman ahora con mayor significatividad la de las tierras petrolera, gasífera e hidroeléctrica, se muestra ya marcadamente insuficiente para sostener la escala de la acumulación.

De este modo, los capitales más concentrados logran modernizar, aunque siempre en términos relativos, sus medios de producción de forma abaratada, al importarlos a un tipo de cambio sobrevaluado. Tipo de cambio que, al mismo tiempo, les abarata el valor de la fuerza de trabajo. Sin embargo, la sobrevaluación provoca también la liquidación de una multitud de pequeños capitales de origen nacional, ya que abarata también a la importación de las mercancías que compiten con las suyas.

⁴¹ A menos que se especifiquen otros autores, los desarrollos refieren a trabajos de Iñigo Carrera (1998, 2004, 2005, 2011).

Con una masa de renta agraria relativamente estancada, la escala de la economía nacional medida en términos de valor no logró superar en este período al promedio registrado durante la década de 1970. De esta forma, un tipo de cambio que se mantiene sobrevaluado en esa magnitud torna innecesario, dada la magnitud de la renta en juego, el recurso a otras formas de apropiación:

In general terms, with the combined mass of ground rent and net loanable capital (credit) inflows stagnating/contracting, or simply growing more slowly than their requirement by capital, the previously developed scale of industrial production could not be sustained any longer. Policies that had been transferring these resources to industrial capital, thus sustaining its profitability, then slowly reversed into neoliberal programmes inspired by the so-called Washington Consensus. Import tariffs were sharply, though not universally, reduced while several state-owned enterprises were privatised (or closed altogether) and public sector employment and welfare expenditures were 'rationalised', thus eliminating some of the main forms of ground rent transfer to, and appropriation by, industrial capital. State policies supporting the process of ISI (such as the combination of an overvalued currency and market protection, subsidised state-bank loans, and tax credits) became thereafter increasingly selective and limited (Starosta & Grinberg, 2014).

Pero, al mismo tiempo, la sobrevaluación permite la multiplicación de la riqueza social con sólo sacarla al exterior, con lo que provoca la salida constante de divisas. De este modo, su sostenimiento en el tiempo supone el ingreso de un flujo en sentido inverso que compense esa salida. Durante la primera mitad de la década, las privatizaciones de empresas públicas a capitales extranjeros, usualmente a precios marcadamente bajos, se transforman en uno de los sostenes de la moneda sobrevaluada. Ya agotada esta fuente, la expansión constante del saldo neto del endeudamiento público externo logra sostener este tipo de cambio, al menos mientras se reproduce tal flujo.

Como sintetiza Grinberg, sin embargo, se trata de bases cada vez más precarias para sostener el proceso de acumulación, ya que se mostraron insuficientes para revertir el proceso de contracción que venía desarrollándose desde décadas atrás:

During the 1990s, both related variables (i.e. the supply of credit and the mass of the ground-rent at world scale) experienced a partial recovery and so did the process of capital accumulation in these countries. This mild recovery, however, was neither enough to significantly reverse the deterioration of the previous contraction nor long-lasting. By the end of the decade, the new contraction of credit supply at world scale manifested again in the fall of the rate of growth of the world economy, and therefore in the mass of the ground-rent, and in the contraction of the mass of credit capital available (2007, pág. 18).

En efecto, en términos relativos, la escala del proceso nacional de acumulación de capital medida en términos de valor permaneció estancada durante toda la década. Lo que

implica, por cierto, una contracción, si se la compara con la expansión que sigue desarrollándose en los países clásicos. Y ante tal estancamiento, la masa de población obrera que el capital determina como sobrante no hace sino consolidarse, incrementando de este modo los índices de desempleo y haciendo que la fuerza de trabajo se venda marcadamente por debajo de su valor.

Por supuesto, la personificación del estancamiento económico, la privatización de empresas públicas, el aumento desenfrenado del endeudamiento externo, la liquidación de los pequeños capitales nacionales y la consolidación de fracciones crecientes de la clase obrera en su condición de sobrante no pueden tomar otra forma política que la de sucesivos gobiernos de signo neoliberal. Pero, al mismo tiempo, la realización de estas políticas requiere la contención de la resistencia de la pequeña burguesía y la clase obrera. Con lo cual, el movimiento político que fue su representante histórico, esto es, el populismo peronista, se convierte en el ejecutor más adecuado de estas políticas. De este modo, y bajo un discurso formalmente populista, el gobierno neoliberal de Menem logró acceder al gobierno tras la crisis de 1989.

Sólo tras 10 años de agotamiento político que incluyeron una reelección, el gobierno menemista tuvo que ceder el poder a la oposición. Pero agotadas las fuentes de sostenimiento de la sobrevaluación, el régimen de la convertibilidad comienza a tambalearse. Ya bajo el gobierno de De la Rúa, el flujo de plusvalía que ingresa a la economía nacional bajo la forma de deuda pública externa cesa abruptamente. La reproducción del proceso nacional de acumulación requiere entonces la salida de la convertibilidad y la suspensión momentánea del pago de la deuda, medidas que el gobierno es incapaz de ejecutar. El cese de este flujo se resuelve entonces en una violenta crisis que arrastra consigo al gobierno y desemboca en una devaluación y el *default* de la deuda.

Tras una sucesión de cuatro presidentes, el Congreso Nacional ungió a Duhalde, en ese momento senador por la provincia de Buenos Aires. Sobre la base de un discurso industrialista, bajo su gobierno fue liquidada una masa de capitales industriales, el salario se desplomó brutalmente y se expandieron los índices de desempleo y subempleo (Starosta & Grinberg, 2014).

La necesidad de contracción del proceso nacional de acumulación de capital se realizó mediante el movimiento cambiario. Lejos de llevar el peso a su paridad, la devaluación lo dejó significativamente subvaluado. Este movimiento elimina el abaratamiento de las importaciones, con lo cual encarece costos para los capitales industriales. Pero, al mismo tiempo, abre a los capitales que producen con escala restringida la posibilidad circunstancial de vender en el mercado mundial sobre una doble base. Por una parte, al permitirles la apropiación de una fracción de plusvalía que compensa los mayores costos provenientes de su escala. Por la otra, al ampliar por sí misma la escala de la

producción interna. Pero el principal sostén de este movimiento es la caída del salario, base sobre la cual se inicia un nuevo período de expansión.

La eliminación de la sobrevaluación, asimismo, permite la expansión de la aplicación intensiva y extensiva de los capitales agrarios, trabada por la sobrevaluación anterior. Y al mismo tiempo, incrementa el flujo de riqueza social que apropia la clase terrateniente. En primer lugar, mediante la suba de los precios a los que circulan internamente las mercancías agrarias. Es decir, de una parte del salario de la clase obrera. En segundo lugar, mediante la apropiación de parte de la plusvalía portada en los ingresos al país de divisas por exportaciones, cuyo valor interno se haya multiplicado por la subvaluación. Una porción de este flujo de plusvalía que pasa ahora a engrosar la renta de los terratenientes va a ser recuperado por la reinstalación de las retenciones a la exportación. En efecto, durante el año 2002, dicho impuesto no alcanza siquiera a compensar la magnitud de este flujo.

Hacia principios del año siguiente, el proceso nacional de acumulación entraría lentamente en una nueva fase expansiva, sostenida en primer lugar sobre el desplome de los salarios, y posteriormente mediante la expansión de la producción agraria, trabada hacia fines de la década precedente por efecto de la sobrevaluación. No sería Duhalde, sin embargo, quien personificaría este proceso. La represión desencadenada sobre el movimiento piquetero, integrado principalmente por fracciones de la población obrera sobrante, desembocó en un doble asesinato que acabó por minar su legitimidad. El adelantamiento de las elecciones coronó entonces a Néstor Kirchner, tras la renuncia del ganador en primera vuelta, el ex-presidente Menem, a participar en el ballotage (Starosta & Grinberg, 2014).

Ocurre que, en vísperas de una nueva fase expansiva, y ante la necesidad de extender la asistencia estatal a los desocupados y de renegociar la deuda, el proceso nacional de acumulación de capital iba a volver a tomar una forma populista, esta vez para personificar la expansión:

En la primera ronda, parecía que el neoliberalismo más crudo podía retomar de inmediato la representación política general del proceso nacional de acumulación. Pero, ya reabierto la negociación por la deuda externa, se imponía ahora la puja por la quita. Al mismo tiempo, sin aire siquiera para llevar el peso a la paridad y con la sustancial caída del salario, la reproducción de la especificidad pasaba por un resurgimiento de la “sustitución de importaciones”. Había llegado el momento de una expresión política que apareciera reafirmando la autonomía nacional en oposición al discurso neoliberal, pero no ya en su versión farsesca, sino en la adusta del “capitalismo en serio”. Además, la explosión de la miseria imponía la asistencia estatal masiva a los desempleados. El populismo volvía a ser la expresión política general del proceso nacional de acumulación de capital. Pero de un proceso que no daba más que para un populismo tímido en manos de un candidato de compromiso. Sin embargo, ya en las vísperas electorales se había empezado a poner de manifiesto

la suba de la renta de la tierra. La reproducción de la especificidad iba tomando una forma mucho más vigorosa. Y de la timidez inicial, la representación política populista fue cobrando vigor en la apariencia de un populismo pleno (Iñigo Carrera, 2005, págs. 14-5).

Mientras tanto, los precios de las mercancías agrícolas exportables no sólo recuperaban los niveles de la década previa, sino que los superaban largamente. Se impuso entonces el resurgimiento de formas de apropiación de renta de la tierra en las que la acción del Estado quedaba directamente expuesta, consolidando así la forma política propia de estas fases: fijación de precios para la circulación interna de mercancías agrarias, subsidios a los capitales de servicios públicos, créditos a tasas de interés real negativa, y expansión del gasto público (Starosta & Grinberg, 2014).

Al mismo tiempo, la subvaluación del peso fue cediendo lentamente. Mientras que en el año 2003 ya no alcanzaba a compensar la magnitud de las retenciones, que volvían así a recaer sobre la renta de la tierra, hacia el año 2006 el tipo de cambio se establecería en torno a la paridad. Con el alza de los precios de los granos, comenzaría a sobrevaluarse nuevamente. Primero de forma tibia, y mucho más marcadamente tras el intento fallido de subir por tercera vez en menos de un año las retenciones, intento que dio origen al paro agrario del 2008.

2.3. La acción política de capitalistas y terratenientes en el proceso nacional de acumulación de capital

La forma específica con la que se acumula el capital en la Argentina posee importantes consecuencias para el análisis de la acción política de los capitalistas y terratenientes locales. La más importante de ellas es que el antagonismo general entre ambas clases por la apropiación de la renta de la tierra va a presentarse de forma más aguda.

En efecto, como habíamos señalado respecto de la determinación general (que se corresponde con un ámbito de acumulación en el que se produce la generalidad mercancías con la productividad normal del trabajo), el capital social total debe resignarse a dejar escapar una fracción de la plusvalía producida en beneficio de la clase terrateniente. La forma concreta que esto toma es la lucha individual entre capitalistas agrarios y terratenientes por la apropiación de la plusvalía extraordinaria, que tiende a resolverse mediante la obtención de la correspondiente ganancia por parte del primero, y de la porción restante, esto es, la renta en sí misma, por parte del segundo.

En la Argentina, por el contrario, una porción sustancial de la renta de la tierra es apropiada mediante distintos mecanismos por los capitales industriales, que se resarcen así

de su menor tasa de ganancia. El reverso de este movimiento es, ciertamente, la exacción de dicha porción de riqueza social a la clase terrateniente.

Este proceso tiende a exacerbar el antagonismo entre terratenientes y capitalistas. Así, la lucha entre estos ya no va a limitarse a la rama sobre la que operen los últimos sino que, por el contrario, va a extenderse al conjunto de los capitalistas, que buscarán apropiarse la mayor fracción de renta posible. En contraste, por otra parte, y en la medida en que dicha apropiación tiene lugar de forma sostenida, la necesidad de la clase terrateniente de accionar para retener para sí la mayor cantidad de renta posible se presenta aquí magnificada. Esto hace suponer que, mediante las organizaciones políticas que los representan, van a luchar de forma igualmente sostenida para evitar o limitar dicha apropiación. Veremos, posteriormente, si esto es efectivamente así.

2.4. Síntesis

Hemos sintetizado, en este capítulo, los aspectos más generales que muestra la acumulación de capital en la Argentina. De manera particularmente significativa para el objeto de estudio de la presente investigación, una de las características más relevantes es la apropiación de fracciones de renta de la tierra por parte de distintos sujetos sociales, entre los que destacan por su continuidad a lo largo del tiempo los capitales industriales y a los que se suman los acreedores externos. Esto significa que la clase terrateniente, de manera general, se ve forzada a liberar una fracción de renta, lo que exacerba el antagonismo que mantiene con la clase capitalista.

En el capítulo siguiente nos detendremos en la forma que tomó la acumulación en la rama agraria durante el período estudiado, completando así el análisis del marco en el que actúa la organización que constituye el objeto de estudio de la presente investigación. Posteriormente, por lo tanto, nos abocaremos hacia su análisis.

Capítulo 3

La acumulación de capital y la estructura social agraria de la región pampeana

En el capítulo previo hemos sintetizado la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina, avanzando especialmente sobre sus rasgos específicos de período 1990-2008. Antes de avanzar sobre el análisis de la acción política de la SRA, vamos a detenernos brevemente en la forma concreta que tomó el proceso de acumulación de capital en la rama agraria a lo largo de estos años en la región pampeana, así como en las transformaciones acaecidas en la estructura social de esta producción.

La importancia de desarrollar estos aspectos es doble. En primer lugar, cabe destacar que la renta de la tierra está portada en el ciclo del capital agrario, del cual emerge. En segundo lugar, las transformaciones mencionadas constituyen el escenario en el que va a operar la entidad que constituye el objeto de estudio de la tesis.⁴²

Aquí sintetizaremos, por lo tanto, la evolución histórica de la estructura social agraria de esta región, precisando con un poco más de detalle las transformaciones en la propiedad de la tierra. Posteriormente, indagaremos en las principales características de la evolución de la acumulación de capital en la rama agraria y de su estructura social durante el período estudiado.

3.1. La evolución histórica de la estructura social agraria pampeana

A lo largo del siglo XX, la producción agraria de la región pampeana atraviesa una serie de importantes transformaciones. En un trabajo ya clásico, Barsky y Pucciarelli (1991) sintetizan, de manera general, el sentido de esta evolución.

Los autores periodizan este movimiento en cuatro etapas principales. El primero, que se abre con los datos del Censo Agropecuario Nacional (CNA) de 1914, se caracteriza por la presencia de explotaciones caracterizadas por los autores como de tamaño grande, así como de un grado alto de concentración de la tierra, distribuida en propiedades de tamaño igualmente grande. En esta etapa se desarrolló asimismo un sistema de arrendamientos que abarcó tanto la producción ganadera como la agrícola.

Este momento cierra hacia fines de la década de 1930 para dejar paso al segundo subperíodo, ilustrado con el censo de 1937. En él se aprecia la existencia de un intenso

⁴² Las series de datos, cuadros y tablas más relevantes para el análisis del período se hallan compiladas en el anexo estadístico, al que ocasionalmente se refiere para la consulta de aquéllos.

proceso de subdivisión de las explotaciones, que da origen a un 75% de nuevas explotaciones. Las unidades mayores a 1000 has son las que pierden más cantidad de superficie, que pasa principalmente a las que ocupan entre 100 y 500 has, y en menor medida a las de menos de 100 has. Asimismo, el porcentaje de arrendatarios crece marcadamente, al tiempo que disminuye el número de propietarios. Este fenómeno muestra no sólo la veloz expansión agrícola que atraviesa esta etapa, sino también la expansión del arrendamiento ganadero.

En el tercer movimiento, que se extiende hasta finales de la década de 1960, el proceso de subdivisión territorial continúa su avance. El arrendamiento, sin embargo, se contrae fuertemente, en contraste con el crecimiento de la tenencia en propiedad de la tierra. Asimismo, se desarrolla un fenómeno que obra en sentido contrario y compensa parcialmente esta tendencia, consistente en el recupero de tierras arrendadas para la producción agrícola por parte de terratenientes ganaderos.

El último subperíodo, que abarca las décadas de 1970 y 1980, se caracteriza por una disminución en el proceso de subdivisión de las grandes propiedades, que se ve atenuado por un proceso de centralización que tiende a incrementar el tamaño medio de las explotaciones. Durante este período comienzan a desarrollarse nuevas formas de relación entre los terratenientes y los capitalistas agrarios que tienden a reemplazar al antiguo sistema de arriendo, entre las que destaca el “contratismo”, esto es, el arriendo por cosecha o por año. Esto parece haber contribuido a aminorar la marcha del proceso de subdivisión y acceso a la propiedad de la tierra a partir de la década de 1970.

3.2. Los debates en torno a la propiedad de la tierra

Por recolectar la información tomando como unidad estadística básica a la explotación agropecuaria, los censos no logran recabar información precisa en relación a la propiedad de la tierra. Esta se halla dispersa en otras fuentes estadísticas: registros y planos catastrales, y listados de recaudación impositiva. Al hallarse totalmente desagregada, sin embargo, su procesamiento se torna extremadamente dificultoso. De este modo, la dirección que toma este proceso sigue siendo objeto de debate.⁴³

En el trabajo referido, Barsky y Pucciarelli utilizan fuentes secundarias para inferir una estimación. La tendencia principal, señalan, es la existencia de un proceso de subdivisión de las grandes unidades territoriales a lo largo de todo el período, durante el que crece marcadamente el número de explotaciones, mientras que la superficie lo hace en

⁴³ Una ponderación acerca de los límites y problemas que presentan los censos agrarios para medir fenómenos como el de la concentración o desconcentración de la propiedad de la tierra, y formas de organización de la producción como los pooles de siembra, puede hallarse en el trabajo de Barsky (1997, págs. 135-66).

mucha menor medida. Este proceso afecta, entre los años extremos, unas 12 millones de has correspondientes al 67% de la superficie controlada por las explotaciones mayores a 2500 has hacia la década de 1920.

Esta se distribuyó principalmente en los estratos situados entre las 500 y las 5000 has, fenómeno que los autores denominan “desconcentración sin dispersión”, ya que la superficie redistribuida no tiende a conformar nuevas explotaciones.

El período en el que más fuertemente opera esta tendencia es el que se extiende entre las décadas de 1940 y 1960, después del cual tiende a estabilizarse (1991, págs. 349-51). En efecto, hacia fines de la década de 1930 tuvo lugar una pronunciada caída en los precios de las mercancías agrarias que no afectó, sin embargo, a las producidas por el sector ganadero. Esto provocó una retracción en la producción agrícola durante las dos décadas siguientes (período caracterizado por numerosos autores como “estancamiento”)⁴⁴ e inmediatamente, un vuelco de numerosas explotaciones hacia la producción ganadera que, frente a la endeblez de regulaciones en materia contractual, amenazaba con expulsar de la producción a una enorme masa de arrendatarios agrícolas.

Frente a este escenario, en 1942 fue sancionada la primera ley que permitía reajustar el canon de arrendamiento, prorrogaba durante un año los contratos que vencieran durante el año agrícola en curso, y suspendía los desalojos. Se inauguraba así un período de 25 años durante el cual se dispusieron sucesivas leyes “de emergencia”, que garantizaron la continuidad de los arrendamientos y regularon sus precios.⁴⁵ Durante este período se transformó marcadamente la estructura de propiedad de la tierra, de la mano de una serie de políticas agrarias que buscaron favorecer el acceso a la propiedad de los arrendatarios, entre las que se cuentan desde la colonización de tierras fiscales o expropiadas (esto es, compradas de manera forzosa) hasta la oferta de créditos a tasas de interés real negativas para su compra, pasando por la creación de organismos que arbitrarán las disputas entre terratenientes y arrendatarios en torno al canon de arrendamiento y al posible precio de venta. El período de auge de estas políticas se ubicó

⁴⁴ Barsky (1988) presenta una síntesis de la diversidad de desarrollos en torno al período de estancamiento y un análisis del alcance de este proceso puede hallarse, mientras que una crítica a los análisis más recurrentes sobre el mismo junto con una explicación alternativa puede encontrarse en el trabajo de Iñigo Carrera (1999).

⁴⁵ Tanto el congelamiento de los arrendamientos como la existencia de una tasa de interés real negativa son mecanismos por los cuales la clase terrateniente cede una porción de su renta hacia los capitales industriales. El primero opera con base en la pérdida de capacidad unitaria para representar valor de los signos monetarios frente al congelamiento o alzas del canon que no alcanzan a compensar dicha pérdida, con lo cual la porción de renta correspondiente en primer lugar pasa a manos de los capitales agrarios, y luego a los capitales industriales en general vía el establecimiento de un precio comercial que se ubica por debajo del que determina el precio de producción en el mercado mundial (Flichman, 1977, págs. 111-2). Al mismo tiempo, la prohibición de los desalojos les impedía el control absoluto sobre su propiedad. Tal situación los forzaba a colocar la renta como capital prestado a interés, con lo cual entraban en el segundo mecanismo, cuyo funcionamiento consiste en el establecimiento de una tasa de interés que se sitúa igualmente por debajo de aquél movimiento de los signos de valor. Dicha tasa se consolida entonces como negativa en términos reales, lo que beneficia a la generalidad de los capitales industriales, que son los tomadores de dicho capital (Iñigo Carrera, 1998, pág. 9).

en los tres primeros años del gobierno peronista, tras lo cual su implementación disminuyó notablemente (Lattuada M. , 1986, págs. 127-36).

No obstante, los arrendamientos iban a mantenerse congelados dos décadas más. En este sentido, tanto el gobierno militar de 1955 como el democrático que le sucedió buscaron resolver la cuestión mediante los llamados “planes de transformación agraria”, que establecían una serie de mecanismos para resolver los conflictos entre arrendatarios y terratenientes en torno al canon de arrendamiento y al posible precio de venta. Se ha señalado que el objetivo de estas políticas consistió menos en la transformación de la estructura agraria que en el restablecimiento del sistema de libre arrendamiento, objetivo que de cualquier modo estuvieron lejos de cumplir (Lazzaro, 2005).

Cabe tener en cuenta, por otra parte, que los efectos indirectos de estas políticas probablemente tuvieron mucha mayor relevancia. La combinación de la pérdida de control sobre la tierra arrendada, la cesión de una fracción significativa de la renta, y el clima político impulsó a muchos terratenientes a vender sus tierras, o parte de ellas, a los arrendatarios (Balsa, 2006, págs. 107-16).

Cuando en 1967 el gobierno de Onganía decidió poner punto final a la extensa sucesión de leyes de emergencia que habían mantenido congelados los arrendamientos, la estructura agraria pampeana había sufrido un proceso de transformación. En efecto, del predominio de las explotaciones en arriendo o aparcería se había pasado al de las explotaciones en propiedad. Tras un reprocesamiento de los datos del censo agrario de 1969, Balsa señala que la proporción de terratenientes asciende del 35% en 1937 al 63% en 1969 (2006, págs. 91-3). Respecto a esta cuestión, la discusión refiere a los sujetos sociales que emergieron de este proceso.

De un lado, se ha puesto el énfasis en el acceso a la propiedad de los arrendatarios (proceso conocido como “farmerización”), como resultado tanto de las políticas agrarias del período como de sus efectos indirectos. En este sentido, autores como Flichman (1977), Forni y Tort (1984) y Lattuada (1988) sugieren que una buena parte de los arrendatarios logró acceder a la propiedad de la tierra, transformándose así en pequeños y medianos terratenientes que dan inicio a un proceso sostenido de capitalización. Del otro lado, Slutzky (1968) enfatiza el proceso de expulsión de numerosos arrendatarios, que emigran hacia zonas urbanas o permanecen en la rama agraria pero como contratistas en explotaciones de mayor tamaño.

Ambas tendencias, sin embargo, se habrían desarrollado de forma simultánea, como señalan Barsky y Pucciarelli (1991). Similar apreciación resulta del análisis de Blanco (2008), así como del que efectúa Balsa, quien concluye que aproximadamente la mitad de los arrendatarios de las tres zonas de la provincia de Buenos Aires que forman parte de su

investigación lograron adquirir tierras, mientras que la otra mitad fueron desalojados de formas legales o ilegales por los terratenientes (2006, págs. 116-7).

En paralelo a este proceso de desconcentración de la propiedad de la tierra, Barsky y Pucciarelli (1991) identifican un proceso inverso de centralización, que opera como contratendencia. Hacia el año 1958, una aproximación a este movimiento arroja que las unidades mayores a las 5000 has absorben una superficie de 1,6 millones de has que ceden los predios de menor extensión. Si se lo compara contra la tendencia a la desconcentración, que para el mismo período arroja una pérdida de 6,4 millones de has para esas unidades, el efecto contrarrestante puede ser estimado, gruesamente, en una reducción del 25% sobre los cálculos referidos a la desconcentración. Durante las décadas de 1960 y 1970, por otra parte, ambos procesos parecen haber aminorado fuertemente su marcha. Otro movimiento que los autores identifican como contratendencia radica en la expansión del fenómeno de la multipropiedad, así como el incremento de sociedades jurídicas y de hecho (págs. 356-9).

En el largo plazo, por lo tanto, parece existir una tendencia hacia la desconcentración de la tierra, que comenzaría posteriormente a desacelerarse y ser contrarrestada por tendencias opuestas.

En contraposición, y como ya vimos, Basualdo formula una hipótesis radicalmente opuesta a ésta. Este autor afirma que, lejos de desconcentrarse, la propiedad de la tierra sigue estando concentrada a niveles relativamente altos, aunque los terratenientes ocultan esto al operar bajo distintas formas jurídicas de propiedad. Esto es, lo que Barsky y Pucciarelli presentan como una contratendencia que limita parcialmente el movimiento general hacia la desconcentración, para Basualdo es la tendencia principal. Así, de acuerdo a sus cálculos, la tercera parte de las tierras productivas de Buenos Aires se halla en manos de “grandes propietarios”.

Esta hipótesis, sin embargo, adolece de numerosos problemas. En primer lugar, como destaca Caligaris (2015), cuando se mira la composición de este grupo, la imagen de que la producción agraria se halla dominada por grandes terratenientes comienza a desvanecerse. En efecto, Basualdo agrupa aquí a todos los propietarios de extensiones de tierra mayores a 2500 has. Por mucho que este tamaño parezca representarse en una magnitud de riqueza social inmensa, de acuerdo a los datos provistos por el propio autor para la época en que realiza el estudio, el precio de una porción de tierra de semejante extensión bordeaba el medio millón de dólares para el caso de hallarse en una zona de cría, y se acercaba a los cuatro millones en la zona agrícola del norte bonaerense, donde se hallan las tierras más caras del país. Y desde el punto de vista del capital social global, estos valores resultan relativamente pequeños, puesto que la magnitud de valor de los capitales normales que lo constituyen se cuentan por cientos o miles de millones de dólares.

Estos indicadores resaltan aún más cuando se observa la proporción que ocupan en el conteo de Basualdo. En efecto, el 31% del conjunto de “grandes propietarios” posee extensiones de tierra que van de 2500 a 4999 has. Y si se extiende el conteo hasta agrupar a la franja cuyo límite superior se halla en las 7499 has, el porcentaje asciende hasta el 48%.

En contraste, los propietarios de tierras de extensión superior a 20.000 has representan apenas el 8% de la superficie de la provincia, con un promedio de casi 45.000 has. Recién en esta franja, señala el autor, puede hallarse a la oligarquía agropecuaria y diversificada: mientras que la primera fracción sería propietaria del 5% de toda la tierra de la provincia, la diversificada no alcanza a cubrir más que el 1,4%. Se trata, evidentemente, de una incidencia bastante pequeña para lo que se presenta como el sujeto dominante de la producción agraria.

Pero, en segundo lugar, los datos utilizados por este autor han sido fuertemente objetados. Tanto Lattuada (1994) como Barsky (1997) han impugnado la metodología utilizada en la primera publicación en la que se expone la hipótesis (Basualdo & Khavisse, 1993). Los autores señalan que, en primer lugar, las conclusiones a las que arriban Basualdo y Khavisse refieren a toda la provincia, cuando en realidad trabajan sólo con una muestra. De esta manera, los resultados presentan un fuerte sesgo, ya que dicha muestra excluye más de 7 millones de has correspondientes a las propiedades de menor tamaño, que corresponden precisamente al estrato en el que las personas físicas tienen mayor incidencia en la forma de propiedad. Una vez que se reponen al cálculo las hectáreas sustraídas, la propiedad individual sigue predominando por sobre las distintas formas jurídicas de propiedad que Basualdo y Khavisse destacan. Barsky añade a esta crítica que la comparación entre estos resultados y el catastro de 1958 es por añadidura inválida, ya que estos datos no fueron sometidos al método de reunificación que aplican los autores para el catastro de 1988, y por lo tanto el proceso de concentración aparece espuriamente magnificado.

Otro aspecto objetado es el hecho de que los autores computan los condominios junto con las sociedades para demostrar el creciente peso de estas últimas. El supuesto que subyace a este criterio es que todo condominio sería una forma de transición hacia algún tipo de sociedad. Sin embargo, tanto Barsky como Lattuada señalan que esto no necesariamente es así, ya que los condominios pueden ser una forma de tránsito tanto hacia una sociedad como hacia propiedades individuales o formas intermedias. El criterio de inclusión en los condominios de toda propiedad que una persona posea de forma individual si al mismo tiempo forma parte de una sociedad, asimismo, resulta sumamente arbitrario.

Finalmente, la comparación que efectúan Basualdo y Khavisse comprende el período 1958-1988, en el que comienza a enlentecerse el proceso de desconcentración ya señalado.

Barsky y Lattuada objetan que si se toma como punto de partida el año 1928, este proceso sigue estando lejos de marchar hacia una reversión. Los autores reconocen esta evidencia en su texto, pero se limitan a señalar que posteriormente, al incorporar los grupos societarios que controlan una mayor cantidad de superficie, el proceso de concentración quedará debidamente demostrado.⁴⁶

3.3. Principales tendencias en la producción agraria hacia la década de 1990

A partir de la década de 1970, la tendencia más marcada de la producción agraria está dada por el avance de la agricultura y la situación de estancamiento que caracteriza a la ganadería. Esto se produce sobre una aceleración en el proceso de concentración, que comienza a liquidar cada vez más velozmente a las unidades de producción del extremo inferior de la escala. Las que comienzan a producir sobre esas tierras, sin embargo, no son las del otro extremo, sino las de la franja central.

Detengámonos ahora brevemente sobre estos procesos.

3.3.1. El proceso de “agriculturización” de la región pampeana

A partir de la década de 1970 comienza a desarrollarse en la región pampeana, un proceso conocido como “agriculturización”, y que se constituye en la antesala de las

⁴⁶ El debate entre estos autores se extendió posteriormente. En efecto, tras la publicación de la crítica realizada por Lattuada, Basualdo (1995) respondió a algunas de las objeciones. Allí comienza por reconocer, sin embargo, la imposibilidad de generalizar los resultados de la muestra al total del universo. Tras recalculer los resultados incorporando las hectáreas sustraídas, señala que aun así los condominios agrupan más hectáreas que las personas físicas (págs. 129-30). No obstante, Lattuada había rechazado también a la metodología utilizada para agrupar condominios, ante lo cual Basualdo se limitó a defender la validez de un agrupamiento concreto, pero sin responder a la crítica metodológica. (págs. 131-4). Al mismo tiempo, procuró justificar la validez de la comparación entre los datos de 1958 y 1988, a pesar de que sólo este último padrón fue reprocesado para estimar la superficie de condominios. Su argumento es que, efectivamente, el catastro de 1958 excluye los condominios, pero a pesar de que no existen evidencias que permitan evaluar su importancia, afirma, lo más probable es que tuvieran un fuerte peso, y que de cualquier modo su superficie estaría incluida en el padrón, aunque habría sido atribuida erróneamente a propietarios individuales. Este supuesto le permite afirmar que mientras la subdivisión catastral sea baja, el grado de error tenderá a ser bajo. Sin embargo, frente a un proceso de subdivisión catastral creciente como el que opera hacia 1988, y el aumento posterior del número de condominios, Basualdo infiere que este aumento expresaría una tendencia hacia la concentración (págs. 134-7), aunque reconoce que no se trata más que de una hipótesis (pág. 130).

En 1996, y ya sin la coautoría de Khavisse, Basualdo (1996) presentó un avance sobre la segunda parte de su estudio, referente a los grupos de sociedades en el agro pampeano. En este trabajo diferencia a los grupos económicos, constituidos por conjuntos de empresas de distintas ramas de la producción que tienen distinta razón social pero que responden a una propiedad común de su capital social y actúan coordinadamente, y los grupos agropecuarios, que se diferencian en que no comparten la inserción multisectorial de aquellos. Entre ambos, precisa, controlan casi dos millones de has, correspondientes al 83,1% de los propietarios de más de 20.000 has. La metodología de cómputo, sin embargo, fue nuevamente cuestionada por Barsky (1997), quien formula una objeción similar a la planteada inicialmente por Lattuada: el criterio de agrupamiento no es válido. Basualdo agrupar bajo una misma sociedad, afirma, no sólo a todas las unidades pertenecientes a sociedades que incluyan miembros del mismo apellido, sino también a las propiedades individuales que cada uno de estos pudiera tener. Pero ni siquiera de esta forma, señala Barsky, logra demostrar lo que se propone (págs. 186-8).

Ignorando estas críticas, Basualdo (1998) publicó dos años más tarde los resultados finales de su investigación, en los que ratifica y amplía las conclusiones anteriormente presentadas.

transformaciones que experimentará la región pampeana en las dos décadas subsiguientes. Cabe, por lo tanto, detenerse brevemente sobre esta cuestión.

El rasgo característico de este fenómeno es una expansión agrícola sostenida, que tiende a desplazar progresivamente a la producción ganadera. Barsky y Gelman (2001) fechan este período entre los años 1970 y 1985, en los que, con algunas oscilaciones, el volumen de la producción mantuvo un ritmo creciente hasta la cosecha de 1984/5, en la que alcanzó la cifra record de 44 millones de toneladas.

Uno de los aspectos más destacados por la literatura en relación a este período es la introducción de tecnologías que permiten incrementar la productividad del trabajo agrario. Durante las dos décadas previas, el principal aspecto de este fenómeno remite a un avance de la tractorización y la utilización de maquinarias agrícolas, entre las que se destaca especialmente la cosechadora de maíz. Esta transformación tecnológica se hace aún más marcada durante la década de 1970 de la mano de dos hitos principales: la introducción de semillas mejoradas de maíz, sorgo, trigo y girasol, y la difusión del cultivo de soja. Por otra parte, el proceso de mecanización prosigue su desarrollo, al incrementarse, por un lado, el número y la potencia del parque de tractores, lo que permite el incremento de la productividad del trabajo y la liberación de las tierras destinadas al mantenimiento de los animales de tiro; por otro lado, también se moderniza el parque de cosechadoras, con lo que se logra una mayor eficacia en la recolección y tratamiento de cereales y oleaginosas (Obschatko, 1988; Barsky & Gelman, 2001, págs. 360-9).

En relación con esta actualización tecnológica, se expande en este período la presencia de un nuevo sujeto social: el contratista de labores. Se trata de propietarios de maquinarias agrícolas que son contratados (frecuentemente de modo informal) por capitalistas agrarios para la realización de distintas tareas, frecuentemente siembra, cosecha y fumigación.⁴⁷ Si bien su presencia en la producción agropecuaria de la región pampeana se remonta hasta principios del siglo pasado, el CNA de 1988 da cuenta de un fuerte incremento en la contratación de este tipo de servicios, lo que supone un crecimiento en el número de contratistas durante las décadas anteriores (Llovet, 1991). Tal crecimiento respondería a diversas razones, entre las cuales se destaca la compra de modernas maquinarias por parte de pequeños capitalistas en períodos de fuerte oferta de créditos a tasa de interés negativa y eliminación de impuestos a la importación de maquinaria, lo que los dejaría sobremecanizados en relación al tamaño de sus explotaciones (Barsky & Dávila, 2008, págs. 85-7).

Se ha destacado, asimismo, la expansión de una nueva forma de articulación de la producción denominada *contratismo tantero*, consistente en la producción exclusivamente

⁴⁷ La importancia de este sujeto social de la producción agraria fue puesta de relieve por primera vez en el trabajo de Baumestier (1980).

sobre tierras tomadas bajo arriendo o aparcería durante períodos cortos. Esta posibilidad había sido abierta por un decreto ley de 1957, que establecía la posibilidad de realizar contratos “accidentales” por hasta dos siembras como máximo, ya sea por dos temporadas o durante el mismo año agrícola. La relevancia creciente de esta forma de organización de la producción ya había sido destacada (Llovet, 1991). Sin embargo, los datos del CNA de 1988 muestran que, hasta ese momento, las formas tradicionales de arrendamiento y aparcería siguen superando en buena medida a los contratos accidentales (Barsky, 1997, pág. 163; Balsa, 2006, pág. 147).

De este modo, queda abierta la cuestión en torno a los sujetos sociales que habrían protagonizado esta nueva expansión agrícola. De acuerdo a Balsa (2006, pág. 134), la literatura especializada se ha concentrado más bien en el surgimiento de nuevos sujetos sociales (como los contratistas tanteros) y en la desaparición de las explotaciones más pequeñas, que en las posibles continuidades con las transformaciones sociales previas ya señaladas, que transformaron significativamente la estructura social pampeana a la salida del “estancamiento” al constituir como sector predominante al de los “farmers”, esto es, pequeños capitalistas devenidos terratenientes.

Y, en efecto, la investigación que este autor desarrolla sobre la provincia de Buenos Aires arroja que la forma de producción que lideró la expansión agrícola fue la de los pequeños capitalistas con 1 o 2 asalariados permanentes que explotaban una superficie mayor a las 200 has, combinando la propiedad con otras formas de tenencia del suelo, como los contratos accidentales. De este modo, mientras que el proceso de desconcentración de la propiedad de la tierra aminora su marcha, la forma en que estos pequeños capitalistas-terratenedores expanden su producción comienza a combinar la propiedad con el arriendo (págs. 154-60).

Por el contrario, las explotaciones de menor tamaño, especialmente las de los arrendatarios puros, entraron en crisis durante este período, que exhibe una tendencia a la concentración de la producción agraria en unidades de tamaño medio. En este sentido, una de las principales transformaciones en la estructura social agraria que muestra el CNA de 1988 en relación al realizado en 1969 es la desaparición de alrededor de 60.000 explotaciones de tamaño menor a 100 has.

Este estrato suele estar asociado a la producción de tipo familiar, por lo que se entiende generalmente una forma de organizar la producción en la que la mayor parte del trabajo está a cargo del titular de la explotación y de su familia. Sin embargo, el carácter de este tipo de explotaciones entra cada vez más, durante este período, en un terreno difuso.

Una de las cuestiones más espinosas para la determinación de la producción familiar radica en la contratación de fuerza de trabajo: mientras algunos autores incluyen bajo esta categoría a las explotaciones que emplean mano de obra durante cortos períodos de tiempo

o en baja proporción, otros las excluyen por completo. Otro criterio utilizado refiere al hecho de que los miembros de la familia realicen parte del trabajo directo en la explotación, con lo que dejan afuera a aquellos que se reservan únicamente el trabajo de gestión y dirección.⁴⁸

El auge del contratismo de labores torna aún más problemática la situación, ya que distintos estudios reconocen la utilización de estos servicios en explotaciones caracterizadas como de tipo familiar.

Una de las áreas en las que suele reconocerse el peso de este tipo de producción es el noroeste bonaerense. Para esta zona, el CNA de 1988 precisa que más del 65% de los agricultores habían recurrido durante ese año a la contratación de servicios de cosecha. En efecto, el recurso a la utilización de contratistas de labores es la única forma que hallan estos sujetos sociales para acceder a tecnologías que no pueden incorporar como medio de producción propio, debido a la magnitud de su capital (Martínez Dougnac, 2008, págs. 580-2).

De este modo, la utilización de categorías como “productor familiar”, o “productor familiar capitalizado” para aquellos productores a cargo de pequeñas explotaciones que contratan estos servicios queda sujeta a discusión, a raíz de la gran variedad de situaciones que pueden presentarse. Martínez Dougnac (2008) señala que en el caso de aquellos que contratan estos servicios para la realización de todas las tareas no se justificaría su inclusión dentro de estas categorías, aún en el caso de que se tratara de una estrategia de supervivencia de lo que alguna vez pudo haber sido efectivamente un productor familiar que haya entrado en un proceso de descapitalización.

Sin embargo, en la mayoría de los casos los servicios contratados no implican la totalidad de las tareas, con lo cual un buen número de explotaciones queda en una zona gris. En base a un estudio sobre pequeñas explotaciones de Pergamino en 1988, Azcuy Ameghino y Lazzarini (2001) proponen extender la categoría de “pequeña producción de base familiar” a aquellas explotaciones en las que se utilicen contratistas de labores para las tareas de cuidados y cosecha, y se contrate fuerza de trabajo de forma temporaria por menos de 25 jornadas de trabajo. Esta caracterización es objetada por Sartelli, quien señala que una explotación que contrata todas las tareas y dirige la siembra utilizando hasta 25 jornadas de trabajo puede perfectamente desarrollar su actividad sin poner en juego mano de obra familiar (2008, págs. 72-3).

Más allá de este debate, sin embargo, el sujeto social que lideró el proceso de agriculturización parece haber sido principalmente el de pequeños capitalistas devenidos terratenientes durante el período de estancamiento. Mediante la incorporación de las nuevas maquinarias hacia fines de la década de 1970, las explotaciones de tamaño mediano y mediano-grande, especialmente en la franja de las 200 a las 2500 has, lograron incrementar

⁴⁸ Para un repaso de la controversia, véase Neiman (2010) y Craviotti (2012).

el tamaño de la superficie trabajada mediante el arrendamiento o la compra de tierras, sin necesidad de expandir la contratación de fuerza de trabajo. Por otra parte, el aporte de trabajo familiar en este tipo de explotaciones, que ya era pequeño en 1969, se redujo aún más hacia 1988 (Balsa, 2006, págs. 154-60).

Incluso el capitalista reduce cada vez más su aporte de trabajo directo, para dedicarse principalmente a las funciones de organización de la producción, comercialización y financiación. Y lo hace ya no en el campo, sino en la ciudad: es en este período en que comienza a cobrar importancia el fenómeno de la radicación urbana, que se incrementa en proporción al tamaño de la explotación (2006, págs. 161-241). En otras palabras, en esta franja de explotaciones la forma de organización de la producción comandada por el *chacarero*, esto es, el terrateniente-capitalista que organiza personalmente la producción y trabaja en compañía de la fuerza de trabajo familiar y ocasionalmente contratando asalariados, parece estar lentamente cediendo lugar frente a una organización que se corresponde más con la relación social general específicamente capitalista, en la cual el trabajo directo queda a cargo de asalariados o contratistas, mientras el capitalista tiende a asumir, si acaso, las funciones de dirección y gestión.

3.3.2. El estancamiento en la producción ganadera

La contrapartida de la veloz expansión de la producción agrícola está dada por la situación de relativo estancamiento que atraviesa la producción ganadera desde la década de 1970, y particularmente de la más significativa, esto es, la ganadería vacuna. Al respecto, los distintos autores que observan el fenómeno coinciden en afirmar que éste puede ser aprehendido mediante la observación de uno de los principales indicadores de la actividad: el stock de cabezas. Y en efecto, una simple observación a la evolución histórica de esta variable muestra inmediatamente el fenómeno: mientras que el número de cabezas crece de forma sostenida desde el último cuarto del siglo XIX, en 1977 alcanza un pico 61 millones que ya no volverá a superar. Y de hecho, lo que sigue inmediatamente es una veloz contracción que va a tocar fondo en el año 1988, en la que el total de ganado vacuno va a reducirse a 47 millones, cifra que recién alcanza un paralelo en 1965 (véase el cuadro 1 del anexo estadístico).

En primer lugar, este fenómeno puede ser explicado como el reverso de la agriculturización. El avance de la agricultura se produce sobre tierras ganaderas, que pierden unas 5 millones de has en la región pampeana. Esto genera una caída en la productividad del trabajo, ya que el desplazamiento de la producción hacia regiones extrapampeanas no permite sostener la misma carga por hectárea debido al diferencial

existente en las condiciones naturales, particularmente la calidad de los suelos y el régimen de lluvias (Barsky & Gelman, 2001; Barsky & Dávila, 2008).

Se ha señalado, asimismo, el papel que podría haber jugado en este proceso la transformación en el comercio mundial de carne evidenciada ya a fines de la década de 1950, en la que el Reino Unido deja de ser el principal importador, papel que comienza a jugar la Comunidad Económica Europea (CEE) en su unidad junto con EE.UU. Se trata de un período signado por la puesta en marcha de mecanismos, por parte de la CEE, destinados a aumentar la productividad del trabajo agrario en la rama ganadera, que lograron no sólo reducir cada vez más la proporción de carne importada, sino por el contrario convertir al bloque en exportador neto hacia la década de 1980. La contracara de este fenómeno consistió en la implementación de políticas proteccionistas tanto arancelarias como paraarancelarias (entre las que destaca la que impide el ingreso de carne proveniente de ámbitos en los que existan brotes de aftosa), que impidieron o disminuyeron drásticamente las importaciones de países como Argentina. La evolución de las exportaciones argentinas de carne fresca grafica claramente este fenómeno: tras alcanzar un pico de casi el 35% sobre el total mundial a principios de la década de 1960, en tan sólo una década desciende a menos del 5%, valores que no logra superar desde mediados de la década de 1980.

Al respecto, Azcuy Ameghino (2007a) sugiere que el estancamiento de la producción vacuna es consecuencia de esta contracción en las exportaciones. Sobre esta base, y a pesar de la tendencia a contraerse que muestra la producción a partir de 1977, el peso del consumo interno fue ganando terreno a la magnitud de carne exportada. Sin embargo, y a pesar de que el mercado interno comenzó a absorber desde 1974 no menos del 80% de las cabezas faenadas, el consumo por habitante medido en kg por cabeza también comienza a caer hacia finales de la década de 1980.

3.3.3. La estructura social agraria hacia el inicio de la década de 1990

La estructura social de la producción agraria también atraviesa transformaciones marcadas hacia finales de la década de 1980, como puede apreciarse en el CNA de 1988. La tendencia general más evidente que allí se registra es la concentración de la producción en el centro de la escala.

Como puede observarse en la tabla 2, las explotaciones de entre 100 y 500 has representan el 39% del total, con lo cual el estrato permanece virtualmente inalterado en relación al censo de 1969. Lo mismo sucede en el segmento de las que ocupan entre 500 y 1000 has, que ascienden al 8,3%. Las explotaciones menores a 100 has, por otra parte, comienzan a perder peso: mientras que en 1969 constituían el 56,3%, en 1988 la suma

desciende al 45,3%. Esta pérdida es más marcada en el segmento de las menores a 25 has, que pasan de ocupar el 24,8% al 16,9%. En el otro extremo de la escala, las explotaciones mayores a 1000 has tienden a aumentar su proporción: las que ocupan entre 1000 y 5000 has constituyen el 7,3%, y las mayores a éstas el 0,7%.

Un similar panorama surge si se observa la superficie ocupada: las unidades menores a 100 has representan menos del 6% de ésta, superficie similar a la que aglutinan las que se hallan en la franja de 100 a 200 has. En el extremo opuesto, las unidades mayores a 2500 has toman aproximadamente el 34% de la superficie, lo que refuerza la concentración en el centro de la escala, ya que las que se hallan entre las 200 y las 2500 has suman el 53,8% de la superficie.

3.4. La acumulación de capital y la estructura social agraria en la región pampeana durante el período 1990-2008

Los distintos procesos señalados anteriormente, esto es, el avance de la agriculturización, el estancamiento de la ganadería, y la tendencia de las unidades de producción a concentrarse en la franja media sobre la base de la liquidación de las de menor escala continúan desarrollándose durante este período. Esta expansión, sin embargo, se realiza sobre distintas bases, ya que el proceso nacional de acumulación de capital atraviesa en estos años una nueva fase cíclica. Como fue sintetizado en el capítulo previo, hacia mediados de la década de 1970, tras haberse estrellado una vez más contra su propio límite dado por el límite de la masa de renta apropiable, inicia una prolongada fase de estancamiento relativo que desemboca en la crisis del 2001. La característica principal de la década de 1990, o más exactamente del período 1990-2001, está dada por el resurgimiento de la sobrevaluación de la moneda, que logra sostenerse durante estos diez años. Por el contrario, la crisis del 2001 desemboca en una marcada devaluación que deja al peso subvaluado durante algunos años, tras lo cual vuelve a sobrevaluarse. Veamos entonces qué efectos tienen estos movimientos sobre la producción agraria, y qué características toma ésta a lo largo de estos dos períodos principales.

3.4.1. El período 1989-2001

La sobrevaluación de la moneda que caracteriza este período tiene un doble efecto sobre la producción agraria. Por un lado, restringe la aplicación intensiva y extensiva del capital agrario, ya que al alcanzar el valor íntegro de las mercancías exportadas, requiere que sean portadoras de una magnitud de renta suficiente como para absorber la sobrevaluación sin afectar la ganancia normal. Por el otro, provoca el efecto opuesto, al

reducir los costos de producción para los capitales agrarios mediante el abaratamiento de la importación de medios de producción y el valor de la fuerza de trabajo (Iñigo Carrera, 2007b, págs. 19-20).

La eliminación de los impuestos a la importación potencia este último aspecto. Sin embargo, uno de los hitos agrarios del período fue la largamente aclamada supresión de las retenciones a la exportación, siempre consideradas como una carga que “discrimina” especialmente al sector. Si bien esto permite la expansión de la aplicación del capital agrario, su efecto estuvo más que compensado por el límite impuesto por la sobrevaluación (Iñigo Carrera, 2005, pág. 3).

Pero la forma política neoliberal que tomó el proceso nacional de acumulación de capital no estuvo dada simplemente por la sobrevaluación de la moneda y la eliminación de impuestos, sino que una de sus principales características consistió en la retracción de las diversas políticas de protección arancelaria. En la rama agropecuaria, éstas mismas políticas se manifestaron en la eliminación de instituciones reguladoras, la desregulación de hecho de diversos mercados, incluido el de arrendamiento de tierras, la eliminación de subsidios a distintas producciones, y la privatización de buena parte del sistema de transporte, entre otros aspectos (Azcuay Ameghino E. , 2004, págs. 231-2).

En lo que refiere a la región pampeana, la disolución de la Junta Nacional de Granos (JNG) fue una de las medidas más significativas. Sus principales funciones eran la intervención en el mercado de granos para la obtención de precios mínimos, que llevaba a cabo mediante el establecimiento de precios sostén; el control del comercio de granos, y la administración de la red oficial de elevadores. La JNG tenía asimismo un rol activo en la exportación de granos, ya que al negociar acuerdos directos con algunos países importadores lograba aumentar sustancialmente los precios. El mismo destino corrió la Junta Nacional de Carnes. Asimismo, fueron eliminadas las regulaciones sobre la producción de leche (Barsky & Gelman, 2001, págs. 374-6). Por cierto, al momento de su liquidación, la JNG había perdido ya hace décadas la mayoría de estas funciones (Leon & Rossi, 2006).

El sistema de transportes también se vio fuertemente afectado. La red ferroviaria de carga se redujo fuertemente, y el transporte automotor se vio encarecido a causa de la suba de los precios de los peajes, que fue parcialmente compensada por la disminución de los impuestos a las cubiertas y el gasoil, y el establecimiento de sanciones a vehículos radicados en jurisdicciones donde rigieran regulaciones de reserva de cargas. Los elevadores portuarios y de campaña fueron privatizados o entregados en concesión, mientras que la estructura portuaria también fue desregulada, al permitir la instalación de puertos privados y flexibilizar el régimen laboral portuario. Asimismo, se licitó el dragado del

sistema fluvial desde la ciudad de Santa Fe, lo que permitió el ingreso de barcos de mayor tamaño (Barsky & Gelman, 2001, pág. 376).

3.4.1.1. Evolución de la producción agraria

Una de las particularidades más notorias de la acumulación de capital en la rama agraria consiste en la velocidad que alcanza la expansión agrícola a lo largo de estos años. Durante la primera mitad de la década de 1990 la producción total de cereales y oleaginosas, entre las cuales la soja comienza a ocupar un volumen cada vez más destacado, promedió los 36 millones de toneladas, lo que representa un 16% de incremento en relación al promedio de toda la década anterior. Mucho más significativa es la expansión en la segunda mitad, en la cual tras la campaña record de 1996, en la que alcanzan los 47 millones, el promedio llega casi a los 55.

Esta expansión se produce, en parte, sobre un crecimiento de la superficie sembrada, especialmente durante la primera mitad de la década. Pero también crece durante todo el período la productividad del trabajo agrícola, lo que permite incrementar los rendimientos por hectárea de los principales cultivos. Lo hace, principalmente, sobre la base de la introducción de un paquete tecnológico, consistente en la incorporación de variedades transgénicas de granos, autorizadas para su cultivo en 1996: el maíz BT y la soja RR.⁴⁹ Esta última, desarrollada por Monsanto, incorpora un gen que la vuelve resistente al glifosato, un herbicida no selectivo, lo que permite el reemplazo del paquete completo de herbicidas y disminuye los costos de producción. El paquete soja RR-glifosato se completa con la utilización de la siembra directa, que tiene el mismo efecto. En esencia, se trata de una técnica que permite implantar las semillas mediante una única operación, con una sola máquina y un mayor control, reemplazando la variedad de pasos (y por lo tanto de máquinas específicas) que se utilizan en la siembra tradicional. De esta forma, reduce el consumo de combustible y la utilización de fuerza de trabajo. Por otra parte, este método acorta los ciclos del proceso, y por lo tanto incrementa la posibilidad de realizar un doble cultivo o de cultivar en zonas de menor humedad. Otra ventaja es que al sembrar sobre los rastrojos de la cosecha anterior, conserva mejor la humedad del suelo (Bisang, 2007, págs. 203-4). Cabe destacar que la siembra directa no puede realizarse mediante la utilización de una sembradora tradicional, sino que se efectúa mediante una diseñada especialmente para esta técnica, de mayor valor, y que permite a su vez el uso de tractores de mayor potencia.⁵⁰ La adquisición de estas maquinarias, en gran medida importadas, fue abaratada durante toda la década por la sobrevaluación de la moneda y la eliminación de impuestos. Lo mismo

⁴⁹ Pueden consultarse, acerca de esta cuestión, los trabajos de Campi (2013) y Caligaris (2016).

⁵⁰ Acerca del método de siembra directa y su historia en la Argentina, puede consultarse a Alapin (2008).

sucedió con la utilización de agroquímicos, cuyo volumen se incrementa exponencialmente en estos diez años (Bisang, 2007, pág. 251). La contracara de esta expansión está dada, como veremos, por la liquidación masiva de las unidades de producción del extremo inferior de la escala.⁵¹

Mientras la producción agrícola se expande, la ganadería permanece en su situación de estancamiento relativo. Tras la contracción histórica en el número de cabezas registrado en 1988, éste comienza un ciclo de ascenso que se interrumpe hacia 1992, momento en que se alcanzan los 53 millones. Como puede verse en el gráfico 3 del anexo, sin embargo, y tras oscilar durante 4 años en torno a esa cifra, en 1996 vuelve a iniciar una fase de contracción, y entre los años 1998 y 2001 el stock se ubicará en torno a los 48 millones de cabezas, superando por apenas un millón a la marca histórica de 1988.⁵²

En este marco, la producción de carne vacuna siguió la misma trayectoria que venía sosteniendo en décadas anteriores. Por una parte, la proporción exportada sostuvo la tendencia a la contracción que registrara desde mediados de la década de 1970, como se observa en el gráfico 4, promediando un 13%, aunque con fuertes oscilaciones. El volumen exportado que también venía arrastrando una tendencia decreciente, comenzó la década con una caída en la que, de unas casi 475.000 tn de res con hueso exportadas en 1990, desciende hasta llegar a las 281.000 en 1993. A ello siguió una fase de veloz crecimiento, que hizo un nuevo pico de 520.000 en 1995 para posteriormente volver a caer hacia las 340.000 en 1999 y 2000, y desplomarse en el 2001 (rebrote de aftosa mediante) en 152.000 tn. Asimismo, el consumo interno se recuperó ligeramente a principios de la década promediando los 2500 millones de toneladas para posteriormente volver a caer, marcando menos de 2300 millones para el promedio del período 1995-2001, lo que se refleja en una contracción del consumo per cápita, que se desploma de los 78 kg registrados para el año 1990 hasta menos de 62 en 1998, tras lo cual inicia una nueva fase de expansión y contracción pero ya en magnitudes menores: de los 66 kg promedio consumidos en 1999 la baja alcanza los 58 kg en el 2002. Los precios, por su parte, se mantuvieron relativamente constantes a lo largo del período, alcanzando un pico de 2,2 US\$ la tn exportada con hueso y de 1,06 US\$ el kilo vivo en el mercado interno para el año 1998.⁵³

En síntesis, dejando de lado las oscilaciones cíclicas que caracterizan a la producción ganadera, resulta evidente que ésta no logra salir del estancamiento a lo largo

⁵¹ La evolución de los indicadores mencionados de la producción agrícola se hallan en los gráficos 5-7 del anexo.

⁵² Al respecto, distintos autores afirman que la expansión del cultivo de soja se realizó sobre tierras ganaderas, lo que permite explicar, al menos en parte, la contracción en la producción (Pengue, 2001; Teubal, 2003; Satorre, 2005; Azcuy Ameghino & León, 2005; Azcuy Ameghino & Ortega, 2010). Por su parte, Caligaris (2016) señala que no existe evidencia empírica en favor de esta hipótesis, y que la expansión del cultivo de soja en la región pampeana se hizo en realidad a expensas de la superficie sembrada con otros cultivos.

⁵³ Presentamos el movimiento de estos indicadores en la tabla 9 del anexo, en la que se añaden otros cuya evolución aquí no desarrollamos, pero son de utilidad para complementar el análisis.

del período. En estos años, por otra parte, comienza a imponerse una transformación en la técnica de producción, consistente en el reemplazo del clásico sistema de pastoreo por el tipo de producción conocido como feedlot, en el cual se incrementan notablemente la cantidad de cabezas por unidad de superficie (Barsky & Dávila, 2008, págs. 22-3; Sartelli, 2008, págs. 54-6).⁵⁴

Distinto es el panorama en lo que refiere a la producción de leche, que se expande aproximadamente un 50% entre los años extremos. Dicho incremento se produce sobre la base de un crecimiento en la escala de los tambos y un notorio aumento de la productividad del trabajo originado por mejoras tecnológicas, tanto a nivel de la alimentación del ganado como los desarrollos relacionados con el enfriado de la leche o la mecanización del ordeño. Al igual que en la agricultura, esta expansión se realiza sobre la base de la liquidación de un gran número de tambos, incapaces de acompañar el proceso mediante la expansión de su escala (Barsky & Gelman, 2001, pág. 385).

3.4.1.2. La concentración y centralización del capital agrario

La incorporación de estas tecnologías derivó en un incremento de la magnitud del capital necesario para poner en marcha los procesos de producción agrarios, especialmente para el caso de la agricultura. Si por un lado la sobrevaluación del peso permitió la importación de maquinarias capaces de poner en marcha una mayor productividad del trabajo, por el otro la escala requerida para su puesta en producción se expandió proporcionalmente. En otras palabras, si bien los costos de producción por hectárea tendieron a caer, la superficie de la unidad productiva necesaria para alcanzar dicha reducción se incrementó notablemente, ya que esta caída obedece también a economías de escala en la circulación, como la compra de herbicidas en grandes cantidades, etc.

Estos procesos acaban por expulsar de la producción a una masa de pequeños capitales que se muestran incapaces de seguir el ritmo de la concentración del capital. Una de las formas en la que se manifiesta tal incapacidad está dada por las diferencias en el acceso al crédito que obtienen los capitales de distinta magnitud (Fernández, 2008). Pero aun accediendo a créditos con tasas de interés relativamente altas para adquirir medios de producción más potentes, su utilización requiere la ampliación de la escala mediante la expansión de la superficie sembrada. En contraparte, los capitales de mayor tamaño, capaces de obtener mejores condiciones crediticias, fueron los que más fácilmente lograron incorporar los avances tecnológicos y ampliar la superficie sembrada (Piñeiro & Villarreal, 2005).

⁵⁴ Una descripción más detallada sobre el sistema de feedlot puede hallarse en Sartelli (2008, págs. 60-4).

De esta forma, se profundiza la tendencia de la estructura social agraria hacia la concentración de la producción en las unidades de un tamaño que las ubica en la mitad de la escala,⁵⁵ como puede apreciarse en la tabla 10 del anexo, en la que se comparan los resultados de los censos de los años 1988 y 2002 para las provincias de la región pampeana. Se observa allí una profundización de las tendencias que vienen desarrollándose desde décadas anteriores, y que se evidencian a partir de los censos de 1960 y 1969. En relación a este último, se aprecia, en primer lugar, una drástica disminución en la cantidad de EAPs sobre una superficie prácticamente invariable: la desaparición de casi el 30% de las unidades se vio prácticamente compensada por la expansión en la superficie de otras.

De esta forma, la liquidación masiva de las explotaciones de menor escala es, nuevamente, uno de los rasgos principales de este período. Dicho proceso afecta especialmente a la franja de las menores a 500 has, aunque en distinta proporción. Las menores a 25 has virtualmente desaparecen, ya que se reducen casi a la mitad, mientras que la superficie ocupada desciende a un 0,3%. Similar trayectoria siguen las que ocupan entre 25 y 100 has, que pierden casi el 40% de las unidades, y reducen la superficie ocupada al 3%. La tenencia se aminora en los estratos que concentran las unidades de entre 100 y 500 has, en los cuales desaparecen algo menos del 25% de las unidades, que siguen ocupando una superficie similar a la registrada en 1988. Cabe señalar que esta franja sigue agrupando al 40% de las unidades totales, con lo que tienden a representar, en número, a la escala promedio. El fenómeno es más pronunciado, por otra parte, en la franja de las 100 a 200 has que en la que va de 200 a 500 has.

La superficie liberada por éstas, casi unas seis millones de has, es parcialmente absorbida por las que se ubican en escalas superiores, restando los dos millones de has que salen de producción. Aproximadamente un millón se redistribuye hacia la expansión de la superficie de la franja que va de las 1000 a las 2500, que constituyen ahora un 7,7% de las unidades totales. Las que ocupan entre 2500 y 5000 pierden un buen número de unidades, a pesar de lo cual absorben unas 700.000 has, y aglutinan el 2,3% del total. Finalmente, las mayores a 5000 toman 2 millones de las has liberadas, incrementando su número que pasa a representar el 1,2% del total.

En el medio se ubican las EAPs que ocupan entre 500 y 1000 has, cuyo peso sigue siendo similar al de 1988: mientras que su número se reduce de forma no significativa y pasa a agrupar ahora al 11,2% del total de unidades, en términos de superficie pierden apenas 300.000 has.

⁵⁵ Cabe destacar que, estrictamente, lo que puede observarse no es el tamaño del capital aplicado sobre la tierra, sino el de la cantidad de hectáreas de tierra sobre las que dicho capital se aplica.

De esta forma, la producción tiende a concentrarse aún más en el centro de la escala, sobre todo en el rango de las 500 a 2500 has, al interior del cual las inferiores a 1000 siguen descendiendo en número. En los extremos, las de mayor superficie tienden a expandirse, mientras que las más pequeñas reducen su número y superficie de forma drástica. Así, el aumento del tamaño promedio de las unidades pega un salto en relación a los datos de 1988: pasa de 378 a 510 has.

Como veremos, esto se produce sobre la continuidad de la expansión, en términos relativos, de la forma de producción que combina la propiedad de la tierra con el arrendamiento, así como del contratismo accidental.

3.4.1.3. Los sujetos sociales de la producción agraria

La liquidación de más de 50.000 unidades de producción de menos de 500 has pone inmediatamente de relieve a los sujetos sociales más afectados por este proceso: los que se hallan al frente de las unidades de explotación más pequeñas. Al interior de este estrato sobresale especialmente el devenir de las unidades menores a 200, de las cuales desaparecen 46.000 equivalentes a una superficie de más de 3 millones de has.

Los principales sujetos sociales afectados por este proceso son, por supuesto, los arrendatarios (ya sea que revistan esa condición de forma excluyente o combinada con la de terrateniente). Sin embargo, la sobrevaluación de la moneda hizo que las consecuencias recayeran también sobre los terratenientes, al desviar de sus bolsillos un promedio de 80% de la renta agraria. En el caso de los pequeños capitalistas-terratenientes, esta merma los privó de la capacidad de compensar su baja tasa de ganancia mediante la apropiación de una porción de dicha renta.

De este modo, los capitales más pequeños se vieron forzados a enfrentar este proceso mediante el incremento de su magnitud vía la expansión de su fracción constituida por el capital prestado a interés, esto es, el crédito bancario. Cabe recordar que durante este período, las tasas de interés se tornaron marcadamente positivas. Y, al igual que en toda rama de la producción, las condiciones de acceso al crédito son diferenciales tanto en relación a la magnitud del capital que lo incorpora como a su situación financiera inmediata. De esta manera, la forma concreta que tomó esta liquidación masiva de pequeños capitales fue, en un buen número de casos, la imposibilidad de pagar los créditos (Fernández, 2008). Al mismo tiempo, la fuerte caída de los precios de producción vigentes en el mercado mundial de las principales mercancías agrarias durante los últimos cuatro años del período agudizó este proceso (Barsky & Gelman, 2001, pág. 386; Bisang, 2007, pág. 199).

Pero la salida de la producción agraria abrió distintos caminos para estos sujetos sociales. Una de las principales diferencias está dada por la posibilidad de retener la

propiedad de la tierra, esto es, de seguir siendo un terrateniente. En efecto, durante este período florece un actor social conocido posteriormente como “mini rentista”, esto es, pequeños capitalistas que habían logrado convertirse en terratenientes en períodos anteriores, y que pasaban a dejar atrás su condición de capitalistas. Se trata, como señala Cloquell (2007, pág. 182), de una inversión histórica: del antiguo pequeño capitalista que producía sin ser dueño de la tierra hacia comienzos del siglo XXI, a un pequeño terrateniente que ya no puede sostenerse en producción como capitalista hacia fines de siglo.

Otra posibilidad para aquellos que hubieran logrado retener una porción de su capital de magnitud insuficiente para sostener la producción consiste en engrosar las filas de los contratistas, con lo cual logran mantenerse en actividad en la rama (Gras, 2010, págs. 52-6). En buena medida, sin embargo, la desaparición de muchas de estas pequeñas explotaciones implicó la liquidación absoluta tanto del capital como de la propiedad de la tierra.

Otros ensayaron distintas estrategias de supervivencia, a cuál más riesgosa. En algunos casos, contrayendo la escala de la producción: algunos capitalistas-terratenientes que habían logrado expandirse arrendando más tierras, abandonaron éstas para producir exclusivamente sobre las de su propiedad. El incremento de la competencia por los arrendamientos hacia finales de la década, por otra parte, forzó en muchas ocasiones esta retracción. Si bien esto les facilitaba no tomar crédito y por lo tanto esquivar la posibilidad de la quiebra por deudas, por otro lado, al contraer la escala de la producción se alejaban aún más del tamaño necesario para sostener el ritmo de la acumulación. En otros casos, arrendaron su propiedad, y con la renta obtenida arrendaron a su vez tierras en zonas de menor productividad, lo que los colocaba en una situación aún más inestable (Gras, 2010, págs. 56-9).

El auge del contratismo permitió también que algunos de estos sujetos sociales vendieran sus maquinarias y tercerizaran la totalidad de las tareas. Asimismo, algunos otros optaron, frente a la caída de los precios de la carne y la leche, liquidar el stock de animales y volcarse enteramente a la producción de soja, de la mano de la financiación que comenzaban a ofrecer compañías como Monsanto (Gras, 2010, págs. 52-6). Cabe destacar, finalmente, que muchos de estos se emplean además en ramas extraagrarias (pluriactividad), ya sea para expandir o sostener la magnitud del capital puesto en producción como para, en casos más extremos, permitir la reproducción de la vida de los miembros de la familia (Craviotti, 2001, págs. 11-3).⁵⁶

⁵⁶ Acerca de la cuestión de la pluriactividad, pueden consultarse también los textos de Murmis y Feldman (2005) y de Bendini, Murmis y Tsakoumagkos (2009).

La expansión en la contratación de servicios en los estratos más bajos de la escala de producción revela el avance de otro fenómeno ya señalado. El CNA de 1988 había mostrado un alto grado de utilización de contratistas de labores, sobre todo para las tareas de cosecha y cuidados. Este proceso continúa desarrollándose durante la década de 1990, en la que la siembra, tarea que más frecuentemente quedaba en manos del titular o su familia por resultar de crucial importancia para el éxito del cultivo, comienza también a escapar de sus manos frente al avance de la siembra directa. Esta sólo puede realizarse mediante una inversión de capital en nuevas maquinarias (que tornan obsoletos los equipos de siembra anteriores) y el incremento de la superficie sembrada, posibilidad que escapa a los capitales más pequeños, que acaban, de este modo, por tercerizarla en gran medida (Craviotti, 2001, págs. 7-8).

De esta forma, el aumento en la utilización de contratistas de labores contribuye a transformar la dinámica de este tipo de explotaciones, frecuentemente caracterizadas como de tipo familiar, ya que tiende a desplazar precisamente el aporte de trabajo de la familia. Al mismo tiempo, sin embargo, la incorporación de estas nuevas tecnologías requiere el desarrollo de las capacidades de organización y gestión de la producción, ya que, por su forma material, la producción mediante siembra directa implica una complejización de estas tareas, ya que supone tomar en cuenta aspectos como la forma de realizar el cultivo antecesor, el estado del suelo, la distribución del rastrojo, la fecha y densidad de siembra, las variedades, y el control de las malezas e insectos, entre otros aspectos (Craviotti, 2001, pág. 9).

Finalmente, otra fracción de capitalistas y productores independientes lograron expandir su escala. Lo hicieron, en muchos casos, arrendando más tierras, o asociándose de distintas formas con otros capitalistas o contratistas. En buena medida, la forma que toma esta expansión avanza disolviendo el carácter familiar de este tipo de explotaciones, ya que implica la asociación con otros capitalistas para aumentar la superficie sembrada, mejorar las condiciones de comercialización de las mercancías producidas, o incorporar nuevas maquinarias, entre otros aspectos que tienden a acentuar el carácter específicamente capitalista de la organización de la producción. Se trata del fenómeno referido frecuentemente en la literatura como el “nuevo empresario rural”, o “empresario innovador” (Hernández, 2007; Gras & Hernández, 2009a).

En la franja inmediatamente superior, las explotaciones de entre 200 y 500 has sufrieron en menor medida el proceso de liquidación que caracterizó al estrato inferior. Si bien, por una parte, desaparecieron algo más de 8000 unidades que ocupaban dos millones y medio de has, la representación del total de unidades se incrementó ligeramente hasta alcanzar casi el 22%, con lo cual el estrato sigue siendo el de mayor peso en cuanto número de explotaciones. Cabe suponer que, en el interior de este estrato, fueron las unidades más

cercanas al límite inferior las que engrosaron las filas de la liquidación, sobre todo teniendo en cuenta la escasa variación que muestra la franja superior.

Buena parte de la superficie cedida por las explotaciones de menor tamaño fue tomada por las de mayor escala, que durante este período incrementaron la superficie ocupada. Por un lado, la franja de las 2500-5000 has perdió la cuarta parte de sus unidades, a pesar de lo cual se extendió en casi 750.000. Por el otro, el estrato de las explotaciones mayores a 5000 has muestra un pequeño incremento en el número de sus unidades, pero una expansión de la superficie que representa casi dos millones de has.

En el extremo superior de la escala, asimismo, se expande durante todo el período una forma específica de producción agraria, denominada genéricamente *pool de siembra*. Bajo esta figura se agrupan distintas formas de centralización de capital, tanto agrario como extra-agrario, gestionado por firmas bajo una variedad de figuras legales. Durante esta década, su período de auge se situó entre los años 1995 y 1998 (Posada & Martínez de Ibarreta, 1998; Fernández D. , 2010; Grosso, y otros, 2010; Caligaris, 2015).

Inicialmente, fueron organizados por los llamados *Fondos Agrícolas de Inversión Directa*, mecanismo que integraba un fondo con aportes en cuotas de inversionistas, en algunos casos bajo el auspicio de una entidad bancaria. Posteriormente, en 1994, la sanción de la Ley 24.441 creó la figura del fideicomiso financiero, lo que dio un mayor impulso a esta forma de organización de la producción (Nava, 2003; Fernández & Scalerandi, 2009; Caligaris, 2015).

La magnitud del capital que gestionan estos fondos permite disminuir los costos de producción de distintas formas. En primer lugar, por volumen de compra de materias primas y medios de producción; asimismo, el tamaño de la producción hace descender el costo de asistencia técnica por unidad de producto; finalmente, se reducen los costos en la negociación con los contratistas de labores. El valor del arriendo de la tierra también suele reducirse, ya que las firmas pueden ofertar al terrateniente el pago del canon por anticipado. Por otra parte, el volumen de las mercancías producidas permite obtener un mejor precio de venta (Posada & Martínez de Ibarreta, 1998).

La administración de este capital posee características distintivas. Una de ellas consiste en que ninguna porción de éste se adelanta en la compra de tierras, sino que se valoriza en su totalidad como un capital industrial. Tampoco suelen emplear directamente fuerza de trabajo; en lugar de eso, recurren a contratistas de labores para realizar las distintas tareas. El arrendamiento de tierras, asimismo, suele distribuirse en distintas regiones del área pampeana (y, en ocasiones, por fuera de ella, e incluso por fuera del territorio nacional), lo que permite reducir el riesgo de pérdidas por eventos climáticos adversos (de Martinelli, 2008; Fernández D. , 2010; Caligaris, 2015).

El volumen de la producción agraria realizado por estos fondos de inversión es aún objeto de debate, ya que no son registrados por los censos. Para el año 1997, una estimación precisaba que la superficie sembrada por los pools de siembra comprendía entre el 15% y el 20% de la región pampeana, aunque este número no necesariamente habría ido *in crescendo* (Posada & Martínez de Ibarreta, 1998). En relación a la magnitud del capital concentrado, sin embargo, se presentan situaciones dispares, ya que bajo esta figura caben tanto la asociación temporal de pequeños capitalistas locales hasta grandes empresas que funcionan con esta estructura y siembran cientos de miles de hectáreas (Barsky & Dávila, 2008, págs. 91-2; Fernández D. , 2010, págs. 2-3).⁵⁷

De esta forma, mientras las explotaciones de menor tamaño tienden a desaparecer, las de tamaño medio sostienen su peso, y las más grandes expanden la superficie ocupada. Lo hacen principalmente, al igual que los pools de siembra, sobre la base del arrendamiento de las tierras que dejan libres las más pequeñas.

En efecto, mientras que las explotaciones con régimen de propiedad exclusiva sobre la tierra disminuyen de 44 a 34 millones de has., las que combinan propiedad con arrendamiento pasan de ocupar 19 millones a hacerlo sobre 24, y las que producen exclusivamente sobre superficie arrendada incrementan su peso de 5 millones de has a más de 6 (Barsky & Dávila, 2008, pág. 80).

El otro sujeto social que se expande velozmente durante este período es, como hemos visto, el contratista de labores. El proceso de liquidación de las explotaciones más pequeñas sería una de las causas de esta aceleración: un relevamiento provincial de Buenos Aires indica que casi el 70% de los contratistas había sido previamente productor agropecuario, y que el 55% inició su actividad en la década. La expansión del crédito en la rama agraria, por otra parte, tendió a ser absorbida hacia el final de la década por estos sujetos: entre 1996 y 1999, el crédito bancario creció un 66% para los contratistas. Asimismo, el incremento en la utilización de agroquímicos y fertilizantes contribuyó a expandir la demanda de estos servicios (Lódola, 2008).

Esta demanda se expandió, como ya se ha señalado, en ambos extremos de la escala. Por un lado, por parte de las explotaciones más pequeñas, cuya escala de producción se ve superada por el proceso de avance tecnológico que vuelve obsoletos sus medios de producción. Por el otro, a causa de los pools de siembra, que tienden a privilegiar

⁵⁷ En relación a este proceso, Barsky afirma que por su propia lógica de funcionamiento, los pools de siembra encuentran límites a la concentración del capital por no adelantarlo en la incorporación de maquinaria propia (1997, pág. 167). Por el contrario, creemos que la relación que estos entablan con los contratistas de maquinaria se asemeja a la que se establece entre los capitales normales y los pequeños capitales en la circulación, por la cual estos liberan una porción de plusvalía que pasa a manos de aquellos (Iñigo Carrera, 2003, págs. 140-5). En este sentido, si existieran límites al proceso de concentración, estos provendrían más bien del hecho de que, como señala Caligaris (2015), la caída en los costos de producción de estos capitales obedece más al desarrollo de economías de escala en la circulación que a la expansión de la productividad del trabajo que ponen en marcha mediante la utilización de medios de producción más modernos.

la utilización de contratistas de labores en lugar del empleo de trabajadores temporarios o permanentes.

Sin embargo, por mucho que se haya expandido la necesidad social de los contratistas de labores, mucho más se expandió el número de estos, lo que exacerbó la competencia. De esta forma, se vieron sometidos a la misma dinámica que los capitalistas agrarios de menor tamaño: aquellos que no pudieron incorporar maquinarias más modernas o diversificar la oferta de servicios, fueron expulsados también de esta rama. Al mismo tiempo, surgieron contratistas de mayor tamaño, que comenzaron a funcionar ya no como productores independientes, sino como pequeños capitales que poseen diversas maquinarias y contratan fuerza de trabajo para utilizarlas (Azcuy Ameghino & Fernández, 2008, págs. 9-10; Gras, 2010, pág. 54).

En síntesis, durante este período se produce un doble movimiento. Por un lado, los sujetos sociales de la producción agraria tienden hacia una heterogeneización, al incluir ahora a los pools de siembra y contratistas. Al mismo tiempo, se expanden los capitalistas no terratenientes, esto es, los arrendatarios puros, y los terratenientes no capitalistas, es decir, los puros rentistas. Por el otro, tras la liquidación de más de 50.000 explotaciones menores a 500 has, la mayor parte de la producción tiende a concentrarse en los estratos medios y altos de la escala, lo que marca una tendencia opuesta en lo que hace a la tradicional heterogeneidad de la producción pampeana, que de este modo se ve reducida.

3.4.2. Período 2002-2008

Como señalamos en el capítulo previo, la imposibilidad de sostener la Convertibilidad del peso, esto es, la forma jurídica que había tomado la sobrevaluación, se resolvió en una crisis en la que la moneda se devaluó violentamente, arrastrando al peso por debajo de su nivel de paridad. Si bien, como señalamos en el capítulo previo, la subvaluación del peso se sostuvo a lo largo de casi todo este período, fue desapareciendo lentamente hasta alcanzar el nivel de paridad entre los años 2006 y 2007 para comenzar a sobrevalorarse nuevamente en el 2008.

En lo que respecta a la producción agraria, la subvaluación provoca un efecto inverso a la sobrevaluación: si por un lado los costos de producción se encarecen, al mismo tiempo se libera la traba a la aplicación intensiva y extensiva de capital sobre la tierra, efecto que se ve potenciado, por otra parte, por la caída del salario que aquella arrastra. El efecto sobre la producción puede verse claramente en la agricultura: mientras que en la campaña 2003/04 la superficie sembrada alcanzó por primera vez las 22 millones de has, superando así el promedio del quinquenio anterior en el que rondó los 21 millones, hacia el 2008 había llegado ya a los 26 millones.

Al mismo tiempo, la devaluación derivó en una expansión de la magnitud de renta diferencial de la tierra, que había caído fuertemente en el año 2001. En este escenario, el desvío de su curso hacia la generalidad de los capitales industriales comienza a estar determinado por mecanismos de apropiación que ponen de manifiesto, de forma mucho más inmediata, el papel del Estado en este movimiento. Vuelve entonces a aparecer el impuesto que con tanto fervor rechaza la clase terrateniente: las retenciones a la exportación. Éstas son restablecidas en el 2002, aunque inicialmente su magnitud no alcanza a compensar el desvío de la enorme masa de riqueza social hacia los bolsillos de los terratenientes que determina la subvaluación durante los primeros años. Recién lo hará a medida que ésta se vaya licuando y marchando hacia una nueva fase de sobrevaluación. De esta forma, el efecto de la subvaluación tiende a perderse e incluso revertirse a medida que se desarrolla el período.

El aumento sostenido en el precio internacional de las mercancías agrarias tiende a compensar, sin embargo, esta última tendencia. Sobre esta base, las retenciones a la exportación (a las que se suman otros mecanismos inmediatamente visibles de apropiación de renta, como la intervención de los mercados o el cierre de las exportaciones) van aumentando su magnitud, especialmente las que afectan a la producción granaria, cuyo ciclo alcista pega un nuevo salto en los años 2007 y 2008. Es este panorama el que determina al gobierno a incrementar una vez más el nivel de retenciones, lo que desató el paro agrario de marzo.

3.4.2.1. Evolución de la producción agraria

Las tendencias mostradas por la producción agraria durante la década anterior se prolongaron durante este período. En primer lugar, el volumen de producción de cereales y oleaginosas mantuvo su tendencia ascendente: la cosecha de la temporada 2001/2 arroja un saldo de algo más de 69 millones de toneladas, la marca más baja del período, mientras que los últimos dos años alcanza los 93 y 96 millones respectivamente. Nuevamente, el cultivo que más se expande es la soja, que en el último año analizado llega a representar la mitad de la producción total.

Mientras tanto, el stock ganadero inicia una nueva fase de expansión para volver a estancarse en niveles más bajos respecto de su máximo histórico de 1977. En efecto, ya para el año 2002 el número de cabezas había ascendido de 48 a 52 millones, para posteriormente morigerar la velocidad de la expansión, que se estanca en torno a los 57 millones de cabezas entre los años 2005 y 2008. El control del brote de aftosa, por otra parte, reabre algunos mercados externos, lo que permite aumentar la magnitud de la proporción exportada. Así, mientras que el volumen se había mantenido por debajo de las

400.000 tn en los años 2002 y 2003, en los dos años siguientes salta hasta alcanzar el record histórico de más de 770.000 tn, que expresa a su vez una reversión momentánea en la tendencia decreciente de la proporción exportada, ya que en el año 2005 ésta supera el 24% del total. Posteriormente, sin embargo, se contraen nuevamente tanto el volumen, que cae hasta 430.000 tn exportadas en 2008, como la proporción exportada, que vuelve a ubicarse en sus niveles habituales. El precio, en contraste, que había entrado en un proceso de caída tras el pico de 1998, toca fondo en el año 2002 y comienza a recuperarse para volver a tocar esos valores en 2006 y 2007, y superarlos marcadamente en el 2008.

Por su parte, la producción de leche entra en un proceso de acelerada contracción tras la crisis, que implica la liquidación de un buen número de tambos (Barsky & Dávila, 2008). Si de 6.500 millones de litros producidos en 1989 había llegado a superar los 10.000 en 1999, comienza allí un proceso de contracción cuyo mínimo se registrará en 2003, en la que el volumen producido caerá por debajo de los 8.000 litros. Hacia el 2004 iniciará un proceso de recuperación, volviendo a superar los 10.000 litros en el año 2008.

3.4.2.2. La concentración y centralización del capital agrario

Como fue señalado, la moneda subvaluada libera temporariamente la traba para la aplicación de capitales sobre la tierra, lo que acelera el proceso de acumulación. Al mismo tiempo, y en la medida en que las retenciones a la exportación no alcancen a compensar la expansión del flujo de renta, los pequeños capitalistas agrarios y productores independientes que son a su vez terratenientes atraviesan un breve respiro en el acelerado proceso de liquidación que impone la concentración del capital. Al mismo tiempo, la sustancial reducción de la deuda bancaria que significó la pesificación asimétrica contribuyó a extender este proceso a la generalidad de estos (Azcuy Ameghino & Fernández, 2008). Cabe destacar, sin embargo, que la deuda mantenida con proveedores de insumos quedó excluida del proceso de pesificación.

La expansión de los pequeños capitales vuelve a encontrar límites, sin embargo, también en este período. En primer lugar, porque ésta implica la competencia con capitales de mayor magnitud por el arrendamiento de las tierras, cuyo precio va a volver a iniciar un ciclo de rápida alza. Por otra parte, a medida que se va licuando la subvaluación de la moneda y el peso se acerca a su nivel de paridad, el flujo de plusvalía que pueden apropiarse los terratenientes comienza a menguar, reduciendo para los que son también capitalistas la posibilidad de expandirse e incluso, para algunos de ellos, la de sostenerse en actividad. Si bien estos límites se vieron parcialmente compensados por el alza de los precios de las mercancías agrarias, los sucesivos incrementos de las retenciones en el año 2007 tendieron a morigerar esta tendencia.

Los efectos de este proceso sobre la estructura social de la producción agraria deberían haber quedado plasmados en el CNA realizado en el año 2008. Su fallida implementación, sin embargo, torna imposible la utilización de los datos recabados (Barsky & Dávila, 2008, pág. 195).

No obstante, el escenario abierto a partir de la crisis del 2002, signado durante los primeros años por la subvaluación de la moneda y la tendencia alcista del precio de las mercancías agrarias, a lo que se añadió la pesificación de una parte de las deudas bancarias, permite inferir un enlentecimiento temporario de la tendencia a la liquidación de los pequeños capitalistas agrarios y productores independientes. Conforme avanza el período, sin embargo, esta tendencia habría vuelto a revertirse.

3.4.2.3. Los sujetos sociales de la producción agraria

Tanto la eliminación a la traba de la aplicación de capital sobre la tierra determinada por la devaluación como la fase de alza en los precios de las principales mercancías agrarias exportables configuraron un escenario propicio para la expansión de los pequeños capitales que sobrevivieron a la fase anterior de liquidación. En un ejercicio de contraste entre ambos períodos, Azcuy Ameghino y Fernández (2008, págs. 13-20) dan cuenta de este nuevo escenario, al comparar las distintas situaciones tomando como variables el acceso al crédito, la compra de insumos y la contratación de servicios.

Se ha registrado, asimismo, el reingreso a la producción agraria de pequeños capitalistas terratenientes que durante la década previa habían arrendado sus tierras por no contar con escala suficiente para expandirse. En este sentido, reingresar a la producción supone volver a enfrentar este límite que sólo puede ser superado poniendo en producción una superficie mayor, ya sea mediante la compra o el arrendamiento de más tierras (Gras, 2010, pág. 55). La subvaluación de la moneda, sin embargo, en la medida en que no esté compensada por las retenciones, así como la apropiación de una mayor fracción de renta, les permite en muchos casos compensar los mayores costos de la pequeña escala.

Con el alza de los precios de las mercancías agrarias, sin embargo, los precios de los arrendamientos reflejaron un aceleramiento de la tendencia alcista que comenzó a desarrollarse hacia mediados de la década de 1990, lo que se convirtió en un obstáculo para la expansión de los capitales más pequeños. Por el contrario, este fenómeno estimuló el crecimiento de un sujeto social que ya había comenzado a expandirse durante el período previo: los pequeños rentistas (Azcuy Ameghino & Fernández, 2008, pág. 21; Barsky & Dávila, 2008, pág. 101).

A diferencia de la década pasada, sin embargo, muchos pequeños capitales lograron expandirse. En algunos casos, lo hicieron mediante la compra o el arrendamiento de tierras.

En otros, mediante la participación en distintos esquemas de asociación con otros capitalistas agrarios o contratistas de labores, fenómeno ya presente durante la década pasada. El resultado de estos procesos, como ya fue señalado, es el creciente desdibujamiento del carácter familiar de la explotación, así como la profesionalización en la gestión y administración por parte de los capitalistas.

Por supuesto, el mismo camino siguen los capitales que se ubican en el centro y el otro extremo de la escala. La medida en que lo hacen, sin embargo, no puede precisarse ni siquiera utilizando el indicador del tamaño de las explotaciones agropecuarias, en razón de la imposibilidad de contar con los datos del CNA del 2008.

Las estimaciones respecto de los pools de siembra, por su parte, reflejan para el período 2004-2008 tanto una expansión en la superficie de siembra proyectada como en el propio número de pools (Fernández D. , 2010, pág. 12; 2015).

Los capitales más concentrados del sector, referidos comúnmente como “grandes empresas”, son otro actor que gana cada vez más peso en la producción agraria. En rigor, muchas de éstas inician sus actividades durante la década previa, pero expanden rápidamente su producción durante este período.⁵⁸ Los casos más conocidos son Los Grobo y El Tejar, que hacia el 2008 administraban alrededor de 150.000 has cada una. La lógica de funcionamiento es, generalmente, similar a la de los pools de siembra: escasa o nula inversión en tierras (sólo el 10% de las tierras sobre las que produce Los Grobo son propias) y maquinaria propia, y en su lugar, arrendamiento y utilización de contratistas de labores (Barsky & Dávila, 2008, págs. 97-8). Empresas con mayor historia, asimismo, comienzan a implementar esta lógica. Para tomar un ejemplo, MSU, fundada en 1985 y hoy una de las más grandes, destaca que en 1997 comienza a desarrollar una nueva estrategia, consistente en el arrendamiento de campos a terceros. Al mismo tiempo, y como ya señalamos, los pools de siembra van a iniciar un nuevo ciclo de expansión tras la devaluación de la moneda.

3.5. Síntesis

En este capítulo nos hemos referido a algunos aspectos de la acumulación de capital de la rama agraria que interesa destacar para el desarrollo subsiguiente. Tras reseñar muy brevemente la evolución histórica de la estructura social de dicha rama en la región pampeana, repasamos los debates respecto del movimiento de la propiedad de la tierra, señalando las notorias debilidades que presenta la hipótesis que afirma que la tendencia principal es una veloz concentración, y sintetizando una línea de investigación que, con

⁵⁸ Una investigación que toma por objeto específico a estos actores sociales realizada por Caligaris (2017) se halla pronta a ser publicada.

argumentos más sólidos, avanza en la dirección contraria. Posteriormente, hemos referido al devenir de la acumulación de capital en la rama agraria y las transformaciones en la estructura social que conlleva, mostrando la profundización de la dinámica que exhibe desde décadas anteriores: una expansión arrasadora de la producción agrícola, producida ahora en buena medida sobre la base de la utilización de un nuevo paquete tecnológico, y un estancamiento relativo en la ganadería que, a pesar de mostrar fases de alza, no logra ser superado. Esto se produce, por otra parte, sobre la base de una marcada aceleración en el proceso de concentración y centralización del capital, que sólo durante el período neoliberal deja como saldo la liquidación de más del 30% de las explotaciones de menor escala.

Pasemos, ahora sí, al análisis de la organización que nos ocupa, examinando en primer lugar algunas de sus características generales más relevantes.

Capítulo 4

Características generales de la SRA y rasgos principales de su accionar en la crisis de 1989

En este capítulo nos proponemos avanzar en algunas de las características relevantes para el análisis de la acción política de la SRA. Nos referiremos, por lo tanto, a su creación y el tipo de relación que tiende a establecer con los gobiernos de distinto signo político, su base social, estructura interna, dirigencia, relación con otras organizaciones e ideología. Adicionalmente, sintetizaremos los rasgos más destacados de su acción política en el contexto de la crisis de finales de la década de 1980, entre los que se incluye la presentación de un programa económico con el que sugerían su abordaje.

4.1. Creación, modo de acción, y vínculo con los distintos gobiernos

La acción de la SRA durante sus primeras décadas se enmarca en el período en que la Argentina se consolida como uno de los principales exportadores de mercancías agrarias. Proceso que se realiza, por cierto, sobre la base del avance en el control de porciones mayores del territorio por parte del Estado nacional. Y es precisamente este avance el que había ya generado, y continuaría haciéndolo, a la propia clase terrateniente, que se convertiría en propietaria del suelo en un gran número de casos a título gratuito o cuasi gratuito (Iñigo Carrera, 2014).⁵⁹

Dicha clase se organizó tempranamente. Ya en 1819 se había conformado una primera Sociedad de Labradores y Hacendados, sobre cuya base se fundó en 1866 la SRA, que se trazaba el ambiguo objetivo de “velar por los intereses generales de la campaña” (de Palomino, 1988, pág. 20).

Como señala Anlló (2013), el contexto en el que transcurre la acción de la SRA durante las primeras décadas de su existencia hace muy difícil caracterizar a la entidad como puramente técnica o de carácter gremial o político, ya que ambos aspectos aparecen fusionados.⁶⁰ Similar apreciación formula Hora (2015, págs. 33-78), quien afirma que el

⁵⁹ La cuestión de la apropiación de la tierra por parte de la clase terrateniente ha sido tratada por distintos autores, muchos de los cuales hicieron hincapié en lo sucedido en la provincia de Buenos Aires. Los trabajos de Avellaneda (1915), Cárcano (1968 [1917]), Oddone (1930) constituyen algunas de las primeras aproximaciones al tema, mientras que, ya en la década de 1970, puede consultarse el trabajo de Carretero (1972). De entre las investigaciones más recientes, pueden verse, entre otras, las de Infesta y Valencia (Infesta & Valencia, 1987; Infesta, 1993; Infesta, 2006; Valencia, 2005). Una síntesis crítica del proceso puede hallarse en el análisis ya referido de Iñigo Carrera.

⁶⁰ Por el contrario, en el contexto de la crisis de 1890 y el derrumbe del Partido Autonomista Nacional, la Liga Agraria se constituyó como entidad con un objetivo explícitamente político. Véase, al respecto, el trabajo de

objetivo de la asociación radicaba en la construcción de una fuerza capaz de representar sus intereses, incrementar su poder y, al mismo tiempo, transformar a los de su clase en sujetos económicamente más dinámicos, modernizando la producción, y políticamente más activos.⁶¹

Y en efecto, se trata de un período caracterizado por un marcado desarrollo técnico, en el que destaca el refinamiento del ganado vacuno mediante la importación de ejemplares de raza fina y su cruce con los de origen local. En este sentido, la SRA contribuyó a promover estos cambios, contándose también entre sus iniciativas la creación de registros genealógicos destinados a controlar el pedigrí de los animales de raza y el alambrado de los campos, entre otros aspectos.⁶² La preocupación por accionar políticamente, por otra parte, estuvo presente de forma constante desde la época de su creación, momento en el que la entidad procuró que los sujetos interpelados tomaran parte en las luchas políticas y ocupen posiciones en el Estado (Sidicaro, 1982, pág. 58). De esta forma buscó, por un lado, convertir a los terratenientes ganaderos en un actor político de mayor peso, sin dejar, por otra parte, de accionar políticamente ella misma, tras haber logrado establecer un vínculo aceitado con los gobernantes de Buenos Aires (Hora, 2015, págs. 33-78).⁶³

Pronto se convirtió en un importante interlocutor de los distintos gobiernos (Sidicaro, 1982; de Palomino, 1988; Martínez Nogueira, 1988). Tanto es así que, de acuerdo a Smith (1986), la SRA se constituyó no sólo en el organismo asesor del gobierno en cuestiones agrarias hasta la creación del Ministerio de Agricultura en 1898, al cual posteriormente proveería de socios para conducirlo en reiteradas ocasiones, sino que también lo hizo respecto de otros cargos de gobierno, incluyendo por cierto presidentes de la nación: para el período 1910-1943, 5 de 9 presidentes y 4 de 7 vicepresidentes eran miembros de la organización, además de 28 ministros sobre un total de 72.

Hacia mediados de la década de 1920, la diferenciación en la producción ganadera entre criadores, considerados el eslabón más débil de la cadena, e invernadores, menos susceptibles a padecer los vaivenes de la producción y vinculados más estrechamente a los

Hora (2009). Asimismo, las peripecias de la Unión Provincial, un proyecto de partido político de base terrateniente que perdió prontamente dicho contenido, son también analizadas por Hora (2015, págs. 133-58).

⁶¹ También Halperin Donghi (1985, pág. 226) destaca este último aspecto de la acción de los individuos inicialmente nucleados en la SRA. Su trabajo presenta, en este sentido, un análisis de la forma en que algunos de los fundadores de la entidad entendían la realidad social tanto a nivel rural como nacional (págs. 223-62)

⁶² El rol de los ganaderos en el proceso de modernización de la producción es analizado con mayor detalle en el trabajo de Sesto (2005). Por otra parte, y tal como afirma Hora (1994), el hecho de que la asociación reuniera a una masa de ganaderos no implicó que la actividad agrícola quedara fuera de su alcance. Por el contrario, aunque de forma limitada, la SRA hizo de la agricultura objeto de su análisis y acción ya desde finales del siglo XIX.

⁶³ La acción de la SRA en las primeras décadas que siguieron a su creación es analizada por distintos autores. En el trabajo ya referido, Halperin Donghi (1985) se detiene en los líderes de la agrupación y su prédica política en el contexto de la estructura social rural, aspecto que retoma posteriormente Sabato (1989). Por su parte, Valencia se centra en su constitución, estatutos, estructura interna y evolución de la masa social (1991), así como su acción política en el Congreso Nacional (1993). Algunos de estos temas serán retomados en uno de los trabajos de Hora (2015) anteriormente mencionados.

frigoríficos, dio lugar a un conflicto interno que no acabó de saldarse sino hasta la década siguiente, en que la representación general de los terratenientes-capitalistas ganaderos comenzó a escindirse con la creación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). Dicha organización agruparía a los ganaderos criadores, mientras que los invernadores se mantendrían nucleados en la SRA. Hacia 1943, CARBAP se coaligaría con otras confederaciones y federaciones del interior para conformar Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) (Giberti, 1986; de Palomino, 1988).⁶⁴

Hasta aquí, el vínculo de la entidad con los sucesivos gobiernos nacionales había sido sumamente fluido. Este hecho se trastocaría con el advenimiento del peronismo, en la que si bien no fue totalmente excluida del acceso a cargos gubernamentales, la relación viró de la colaboración a la confrontación abierta, en la que destacaron los conflictos suscitados en torno a la ley de arrendamientos y el estatuto del peón. La relación con los gobiernos en el período posterior, que exhibiría una alternancia de gobiernos militares y democráticos, mantendrá un signo inequívoco, aunque con marcados matices: por una parte, el vínculo se tornará mucho más estrecho con los gobiernos militares, bajo los cuales recuperaba el acceso al gobierno vía el nombramiento de funcionarios que o eran socios de la entidad o tenían un fluido contacto con ésta. Dichos regímenes solían ser referidos por la dirigencia de la asociación como “nuestro gobierno”.⁶⁵ Por otra parte, su acceso a los gobiernos democráticos se vería mermado, y la SRA tendería a rechazarlos y en muchas ocasiones a enfrentarlos. Los casos más extremos serían, en este sentido, tanto el gobierno peronista de 1973 como el régimen de facto que lo sucedió tres años más tarde (Niosi, 1969; Sidicaro, 1982; de Palomino, 1988).

Respecto a su metodología de acción, Martínez Nogueira (1988, págs. 320-3) sostiene que la asociación recurre a la difusión de declaraciones de marcado contenido ideológico, la búsqueda permanente de puntos de encuentro con las entidades que representan los intereses de los capitales más concentrados, y la acción sobre el Estado por medio de la influencia personal. Veremos, posteriormente, que las alianzas que desarrolla se extienden ocasionalmente hacia las restantes entidades rurales, y que frente a gobiernos

⁶⁴ La caracterización de los criadores como un sector “más débil”, esto es, de menor concentración económica en comparación con los invernadores, es recogida pero también matizada por Smith, que sugiere la inconveniencia de establecer una diferenciación tajante en este sentido, ya que, señala, “muchos prominentes criadores poseían la suficiente fortuna para importar toros de raza ingleses, y provenían de familias aristocráticas: por cada Anchorena entre los invernadores había un Martínez de Hoz o un Pereda entre los criadores” (1986, págs. 53-4). Una referencia a la emergencia de rivalidades entre estas fracciones de clase en el contexto de la retracción de la exportación de carne a Gran Bretaña en las décadas de 1920 y 1930 puede hallarse en el trabajo de Hora (2015, págs. 232-48).

⁶⁵ En este sentido cabe destacar, como lo hacen Sidicaro (1982, págs. 58-9) y de Palomino (1988, págs. 111-69), que algunos de los gobiernos militares que recibieron inicialmente el apoyo de la SRA acabaron siendo también blanco de sus críticas, aunque ciertamente mucho más matizadas que las que espetaría a los gobiernos democráticos del período. El giro más marcado probablemente se halle bajo el período del gobierno de facto instaurado en 1966, quien fuera inicialmente recibido cálidamente para ser posteriormente fuertemente repudiado y acusado incluso de promover medidas con “fundamentos colectivizantes”.

con los cuales establece un vínculo de enfrentamiento, no trepida en recurrir además a medidas de protesta y presión, entre las que destacan los paros.

4.2. Base social

Desde sus inicios, la base social de la SRA estuvo conformada por individuos que se constituyen como personificación de dos relaciones sociales distinguibles: la propiedad de la tierra y la del capital. Esto es, se constituyen al mismo tiempo como terratenientes y capitalistas, respectivamente. Distintos autores coinciden en señalar, asimismo, que esta entidad reunía a algunos de los terratenientes y capitalistas ganaderos de mayor tamaño (o, más exactamente, a los propietarios de tierras de mayor tamaño y de los capitales agrarios más concentrados).⁶⁶ Asimismo, la mayoría de los socios poseía sus tierras en la región pampeana, y particularmente en la provincia de Buenos Aires (Sidicaro, 1982; de Palomino, 1988). Cabe destacar que la SRA no es, estrictamente, una organización de primer grado, puesto que admite la afiliación de personas jurídicas. Para el año 1981, de Palomino constató que un 18% de los socios inscriptos correspondían a empresas (principalmente organizadas bajo la figura de la sociedad anónima). Si bien muchas de ellas corresponden simplemente a individuos amparados en esta figura por razones económicas (principalmente, por ventajas impositivas), la autora menciona también la presencia de capitales como Celulosa Argentina, propietaria a su vez de unas 100.000 has de tierra forestable. Otra característica de los asociados a la entidad es la pervivencia de distintas familias a lo largo de varias generaciones, lo que se puede verificar en un buen número de apellidos que se repiten desde su fundación (de Palomino, 1988).

La SRA estructura a sus asociados en seis categorías. La más importante de ellas es la del *socio activo*, principal componente de la masa social, y que tiene derecho tanto a elegir miembros de la Comisión Directiva (CD) como a postularse para serlo. Cumplidos cuarenta años de antigüedad en la organización, los socios son nombrados *vitalicios*, conservando sus derechos. Los socios *honorarios*, por otra parte, constituyen una categoría que refleja la vinculación de la entidad con la esfera política, puesto que nombra sistemáticamente como tales a los presidentes y vicepresidentes de la nación, así como al presidente de las cámaras legislativas, de la Corte Suprema, al gobernador de Buenos Aires, al Ministro o Secretario de Agricultura y Ganadería, etc., además de aquellas personalidades que considere particularmente destacadas. La categoría de *adherentes*, por otra parte, se ofrece tanto a personas vinculadas a entidades afines a la SRA como, de forma temporaria, a menores de edad descendientes de socios, que pasan a ser activos al

⁶⁶ Aunque, como afirma Hora, los miembros más activos de la entidad destacaban menos por la extensión de las tierras que poseían que por contar con “destrezas intelectuales y empresariales poco comunes entre sus colegas” (2015, pág. 37).

cumplir la mayoría. Durante el período estudiado, los *menores* pasaron a constituir una categoría en sí misma. Finalmente, los estatutos de la entidad establecen la posibilidad de distinguir con la categoría de *correspondientes* a quienes se destaquen con producciones científicas o trabajos relacionados con la entidad, y *transeúntes* a los integrantes de misiones extranjeras que se encuentren momentáneamente en el territorio nacional.

La evolución del número total de socios que registra la entidad desde su creación forma una parábola, que alcanza su pico hacia mediados de la década de 1970. Desde su creación hasta mediados de la década de 1940, nucleó a un grupo no menor a 2.000 socios y no mayor a 3.000. A partir de ese momento, se evidencia una nueva dinámica en la afiliación, que probablemente responda a los intentos de la SRA por ampliar su representatividad como estrategia defensiva ante el gobierno peronista. Estos prosiguieron durante la década de 1960, mediante una flexibilización de los estatutos y la realización de una campaña para asociar nuevos miembros en 1961. A pesar de que ésta no dio los resultados esperados, el número de miembros se mantuvo creciente: con picos de afiliación registrados hacia fines de dicha década, entre 1946 y 1975 dicho número creció de forma sostenida, pasando de aproximadamente 3.100 a unos 11.800. Como sugiere Ross Schneider (2004, pág. 184), esto podría haber estado vinculado con la apariencia imperante a principios de la década de 1970 de que algún tipo de reforma agraria que avanzara contra los "latifundios" podría llegar a ponerse en práctica.

Cabe destacar, de cualquier modo, que no todos los socios incorporados se integraron a la vida de la entidad, ya que muchos acabaron siendo desafiliados por no pagar la cuota social, aunque hasta ese momento su número fuera marcadamente menor al de los ingresantes.⁶⁷ El número de asociados se mantiene estable en torno a los 11.000 hasta 1982, año en el que comienza a revertirse la tendencia a pasos acelerados: hacia 1985, quedaban ya solamente unos 9.300 miembros.

Durante el período aquí estudiado, dicha tendencia se profundiza notablemente. Como señala Muro de Nadal (2009), a lo largo de la década de 1990 la entidad habría perdido a un gran número de miembros, a pesar de que los registros no reflejan dicho proceso. Esto dio lugar a que un grupo de socios que albergaban similares sospechas reclamara la revisión de los padrones hacia finales de la década (A-Dic99: 40).

Y, en efecto, esta estimación resultó ser correcta. De acuerdo a los balances, el número de socios osciló, entre los años 1990 y 2001, entre los 8.000 y los 9.000 individuos. Sin embargo, tras la renovación de buena parte de la CD en el año 2002, la SRA comenzó a sincerar los padrones, eliminando a los socios que habían dejado de ser activos. Al mismo

⁶⁷ Discusiones en torno a cómo posicionarse frente a los gobiernos peronistas se saldaron, asimismo, con la desafiliación de un número importante de socios al final de los períodos, lo que tampoco bastó para contrarrestar la tendencia ascendente (de Palomino, 1988).

tiempo, el proceso de contracción en el número de asociados siguió desarrollándose. Así, el balance del año 2008 arrojaba una cifra apenas superior a los 4.500 socios.

Este fenómeno parece obedecer a distintas causas. En primer lugar, el proceso de pérdida de socios afectó a las cuatro entidades agrarias durante la década de 1990. De acuerdo a Lattuada (2006), la principal causa radicaría en la necesidad de los asociados de obtener asesoramiento técnico, así como una expansión en los servicios prestados que permita suplantar el rol que hasta allí desempeñaban algunos organismos del Estado. A esta explicación, que refiere al conjunto de las organizaciones, puede añadirse otra que afecta particularmente a la base social de la SRA: la marcada contracción seguida por un largo estancamiento que experimenta la producción ganadera, y que tiene un punto de inflexión precisamente a mediados de la década de 1970.

Dicho movimiento intentó ser contrarrestado por la CD, que procuró compensar esta caída de distintos modos. A principios de la década, encomendó a sus socios la tarea de buscar nuevos afiliados, al tiempo que justificaba la necesidad de aumentar la cuota social (A-Oct89: 4). A la luz de los resultados, el intento resultó infructífero. Por otra parte, mejoró la oferta de asesoramiento a sus socios sobre la evolución de los mercados internacionales y sobre cuestiones legales (Lattuada, 2006) y optimizó la calidad de los servicios técnicos ya prestados, reequipando su laboratorio de análisis de suelos, aguas y granos (A-Nov99: 46-7). Como destaca Martínez Nogueira (1988, pág. 302), no obstante, la histórica debilidad de las estructuras técnicas de la SRA sugiere que la afiliación a la misma se produjo siempre más bien por motivos políticos y simbólicos.

Al mismo tiempo, la CD se propuso expandir el alcance de la representatividad de la SRA mediante distintos métodos. En primer lugar, creó a principios de la década de 1990 un cuerpo de delegados que buscaba aumentar la presencia de la entidad en todo el territorio nacional (A-Abr92: 4-5). Posteriormente, resolvió constituir un nuevo organismo interno: el Consejo Federal, que agruparía a numerosas sociedades rurales del interior y que hacia fines de la década superarían ya el centenar. Se trataba de un espacio abierto a la participación de estas organizaciones locales que podían así usufructuar, sin pagar una cuota social, de la mayor facilidad que tenía la SRA para plantear sus demandas al gobierno de turno (A-Abr96: 3; Oct96: 140).

4.3. Estructura interna⁶⁸

La principal autoridad de la SRA es la *Asamblea General*, en la que pueden participar todos los socios activos con sus cuotas sociales al día. Las decisiones se toman por

⁶⁸ Salvo referencia a otra fuente, los datos aquí presentados provienen del trabajo de De Palomino (1988).

mayoría simple, a excepción de la modificación de los estatutos que requiere dos tercios de los votos y la convocatoria a una *Asamblea Extraordinaria*.

Las actividades regulares de la entidad, consistentes en la consideración de la Memoria anual y la elección de miembros para la CD se realizan anualmente, en la *Asamblea General Ordinaria*. El voto puede emitirse por correspondencia, lo que permite que los socios que residen en el interior participen sin tener que viajar. La proporción de socios que efectivamente participan de las asambleas no figura en los registros. Con base en informaciones periodísticas, de Palomino señala que en el período 1955-1983 el número osciló en torno al millar, incluyendo no sólo a los asambleístas presentes de cuerpo sino también al voto por correspondencia, de los cuales entre 300 y 600 asistirían personalmente a las asambleas.

A pesar de que la asistencia a las Asambleas Ordinarias no es recogida en las Memorias, en el lapso estudiado en la presente investigación se sucedieron distintas Asambleas Extraordinarias, de cuyas votaciones sí se guarda registro. Éstas se constituyeron con un número que oscilaba en torno a los 130 miembros, lo que indica un marcado descenso en relación al período estudiado por de Palomino, que se corresponde con la contracción en el número de socios. Cabe destacar, por otra parte, que frente a acontecimientos inusuales, como la presentación de dos listas para integrar la CD, el número crece marcadamente: en la elección de 1990 se registraron poco más de 3700 votos. También esto, sin embargo, representa una caída si se compara el dato con la anterior ocasión en la que se desarrolló el mismo proceso: en las elecciones de 1972, los votantes fueron 5300 (LN, 28/09/90). En elecciones que podrían considerarse como “normales”, esto es, en las que se presenta una sola lista, el número de socios tiende a caer: en el año 2002 el número de votantes fue de 1500 incluyendo los votos por correo (LN, 27/09/02), aunque como ya señalamos, la cantidad total de miembros habría caído marcadamente durante la década previa.

La CD, órgano de conducción de la asociación, se elige por dos años y se renueva anualmente por mitades, mientras que sesiona con un quórum mínimo de un tercio de sus miembros. Estos pueden y suelen ser reelectos, variando frecuentemente su rol. Los vocales se eligen por un sistema implementado en la década de 1950 y que procura ampliar la representatividad mediante la elección de doce vocales generales elegidos a pluralidad de votos y otros doce vocales distritales a razón de uno por cada distrito en que se había dividido la totalidad del territorio, con lo cual se procuró ampliar la representatividad. Siete de esos doce distritos, sin embargo, corresponden a distintas áreas de la región pampeana, lo que indica que sigue siendo la región sobre la cual la entidad sigue centrando su accionar. El órgano ejecutivo de la entidad es la *Mesa Directiva*, constituida por el Presidente, dos Vicepresidentes, Secretarios, Tesoreros, y miembros de la CD designados para ocuparse de

tareas como la dirección de la Biblioteca, el Instituto de Estudios Económicos o la revista *Anales*, entre otros.

El número de integrantes tanto de la CD como de la Mesa Directiva varía a lo largo del período estudiado. Durante el lapso que analiza de Palomino, la CD estuvo conformada por 27 miembros: Presidente, Vicepresidentes y los 24 vocales, mientras que la Mesa Directiva se reducía a 11 integrantes. Entre 1989 y 2008, este número se fue ampliando a través de sucesivas modificaciones estatutarias que expandieron el número de vocales a 34, mientras que el número de cargos en la Mesa Directiva osciló entre 13 y 18.

Existen otros órganos de relevancia en el interior de la SRA. Uno de ellos es el *Tribunal Arbitral*, cuyos miembros (que totalizan una decena para el período estudiado) tienen carácter vitalicio. Se trata de un organismo de supervisión, que de Palomino asemeja a un “consejo de notables”, y cuyas decisiones son inapelables. Su relevancia para los asuntos ordinarios de la entidad, no obstante, parece ser escasa, con la excepción de que, de acuerdo a dicha autora, sus integrantes podrían jugar un papel relevante en la selección de los candidatos a ocupar puestos directivos. Durante el período aquí estudiado, sin embargo, dicha función la cumplió el *Comité Unificado*, en el que se fusionaron algunos integrantes de los grupos que apoyaron a las dos listas que se presentaron a la elección de 1990.

El *Instituto de Estudios Económicos*, dirigido por un miembro de la CD, se encarga de elaborar y sostener la línea económica de la SRA, de la elaboración de programas y propuestas, y de la presentación del informe anual sobre la evolución de la producción agraria y la economía en general. Asimismo, elabora previsiones sobre los mercados agrarios y asesora a los socios en temas económicos, legales, impositivos y contables.

Finalmente, también existe un Consejo que reúne a representantes de distintas entidades, que incluyen asociaciones de criadores, cámaras de producción provinciales y sociedades rurales locales. Se trata de un organismo que se reúne mensualmente, discute temas de relevancia para la producción agraria e invita a funcionarios gubernamentales de forma que sus participantes puedan presentar directamente sus demandas e intercambiar opiniones. De acuerdo a de Palomino, la SRA estimaba que hacia 1976 el Consejo representaba a unos 40.000 capitalistas y/o terratenientes agrarios. Originalmente llamado *Consejo General Consultivo*, pasó a llamarse posteriormente *Consejo Institucional*. En el período que nos ocupa, este organismo comenzó a tener representación en la CD mediante un vocal en 1992. En 1996, el Consejo Institucional se desdobló para dar lugar a un nuevo órgano: el Consejo Federal (CF), cuyo objetivo sería agrupar un número mayor de sociedades rurales. Hugo Feü, miembro de la CD y uno de los principales impulsores de estas transformaciones en la estructura interna de la SRA, sintetiza de este modo el sentido de éstas en una entrevista publicada en *Anales*:

El Consejo Federal fue algo que surgió un poco por una de las necesidades que veíamos en muchas de las Sociedades Rurales del interior, de integrarse a la Rural de alguna manera y buscar otro canal, otra vía para traer sus inquietudes a alguien más que también los representara [...]. Ya había algunas Sociedades Rurales desde hace algunos años, en el Consejo Institucional. Y después empezamos a recibir demandas de muchas otras [...] que querían ver cómo podían integrarse a la SRA [...]. Se resolvió en CD crear el CF como un desdoblamiento del CI, y a partir de ese momento comenzamos a recibir adhesiones.

Se trataba de un nuevo avance en la política de extender el alcance de la representación a la que había dado inicio este nuevo grupo dirigencial desde su consolidación, primero con la creación del cuerpo de delegados y luego mediante el CF:

ANALES: Esto forma parte de una política, que desde la asunción de Crotto, él habló de recorrer el país [...], y está cumpliendo con eso, acompañado por todos los directores de la SRA, está nutriéndose de la gente del interior [...].

Feü: Nosotros nos nutrimos de todo lo que está sucediendo y nos enteramos de todo lo que pasa en el interior del país, de todos los problemas, y al mismo tiempo ellos reciben el apoyo de la Rural por sus inquietudes para tratar en el orden nacional o donde fuera necesario [...]. Inclusive, volviendo un poco atrás, sobre el tema delegados [...]. Se creó un cuerpo de delegados hace tiempo, hace mucho tiempo. También bregué mucho por ello, fui el autor del proyecto, hace años, y costó mucho en ser aceptado. Tardó mucho tiempo en empezar a funcionar. Pero ahora funciona tan bien que tenemos doscientos y pico de delegados distribuidos en todo el país [...] (A-Oct96: 139-41).

Hacia el año 2002, la CD decidió incorporar un vocal extra en representación del CF. Poco tiempo después, éste ya había logrado aglutinar a más de un centenar de sociedades rurales (A-Oct04: 40).⁶⁹

La consolidación del CF forma parte de un proceso de reestructuración de la organización interna, cuyo objetivo consistió en la ampliación de la base social representada. Ya durante la década de 1950 la entidad había procurado avanzar en este sentido mediante la reforma de la CD, que pasaría a incluir además de los doce vocales generales, otros doce vocales distritales, cada uno de los cuales representaría una de las zonas en las que habían dividido la totalidad del territorio argentino. Cabe destacar, sin embargo, que la región pampeana seguía ostentando la preeminencia, puesto que siete de los doce vocales distritales correspondían a distintas áreas de dicha región.

⁶⁹ No sin polémica, por cierto: la dirigencia de la SRA insistió reiteradamente en el hecho de que la creación del CF no era conflictiva, ya que no se le exigía a las sociedades rurales desafiliarse de sus entidades madre. Algunas confederaciones nucleadas en la CRA, sin embargo, protestaron por la iniciativa. Desde la SRA, por su parte, reconocieron la existencia de una situación de “celos con otras federaciones” (A-Oct96: 39; Dic-97: 5; Ago-04: 44).

Otro paso en esta misma dirección fue dado en 1991, mediante la ya referida creación de un sistema de delegaciones. Su objetivo consistía en extender la representación de su base social, para lo cual incorporaría un grupo de delegados que tendrían la función de representar a la entidad en su localidad, y al mismo tiempo informar a la CD sobre las cuestiones locales:

El propósito esencial de la creación de delegaciones y designación de delegados es llevar a todo el territorio nacional la presencia personalizada de la SRA. Ello sólo será posible por conducto de quienes asumen la responsabilidad de presentarla en cada distrito, integrando entre todos un cuerpo orgánico y compacto al servicio de los socios y de la producción agropecuaria en general [...]. Los delegados [...] trasuntan físicamente la imagen de la SRA en cada lugar de la República en que trabajan y actúan [...]. Son el nexo, la unión directa entre nuestra entidad y las autoridades e instituciones locales [...].

Los delegados participantes dejaron a la CD de la entidad su información, sus inquietudes y por cierto que sus críticas, quejas y propuestas, que son también expresión de productores y reflejo de la de aquellos con quienes en su zona comparten las tareas rurales.

Expusieron y plantearon temas referentes a las comunicaciones, a la atención de la salud, la educación, a las políticas y regímenes tributarios, a la comercialización de los productos, a la infraestructura, y muchos otros que dan cuenta de las deficiencias y falencias que en general padecemos en nuestra campaña (A-Jun92: 5-6).

Como señala Muro de Nadal (2009, pág. 194), la creación de delegaciones buscaba ampliar la representatividad, mas no democratizar el funcionamiento de la entidad, puesto que los delegados no tendrían representación en la CD. No obstante, algunos de ellos ingresarían a ella en calidad de vocales o a cargo de alguna función.

4.4. Dirigencia

Como señala de Palomino (1988), una de las características más salientes de la dirigencia de la SRA es su prolongada permanencia: una vez que los socios llegan a ocupar un cargo en la CD, se considera una rareza el hecho de que no sean reelectos. Particularmente, los Presidentes y Vicepresidentes no fueron reelectos al menos una vez sólo en circunstancias excepcionales. Dicha posición se alcanza, usualmente, tras ingresar a la CD como vocal y ocupar posteriormente otros cargos, mientras que los restantes miembros pueden volver a ocupar cargos como vocales, rotando indistintamente en el interior de la estructura de la CD.

En cuanto a su posición en la estructura social, dicha autora logra comprobar que estos individuos son propietarios de grandes extensiones de tierra (en un promedio de 3.400 has para los casos efectivamente constatados), en la mayor parte de los casos en la

provincia de Buenos Aires. A grandes rasgos, estos resultados se condicen con los que presentara previamente de Imaz (1964), quien llega a la conclusión de que la SRA asume exclusivamente la representación de los grandes terratenientes.

Asimismo, de Palomino señala que como capitalistas, su actividad predominante es la ganadería, y una buena fracción de ellos no son invernadores sino “cabañeros”, esto es, criadores de ganado de raza fina, particularmente Aberdeen Angus, Hereford y Shorthorn. Otro aspecto relevante es su participación en otras ramas de la producción, característica que distintos autores refieren como “diversificación”: poco más del 60% de los dirigentes del período que analiza esta autora integra una o varias sociedades anónimas (lo que no significa que ni estos ni los restantes no participen en sociedades comerciales o de otro carácter). Algunos de ellos participan en sociedades exclusivamente agropecuarias, pero la mayor parte integran también directorios de compañías financieras, de seguros, industriales o comerciales. Estos datos contrastan con los ofrecidos por de Imaz (1964), quien no sólo halla un número de dirigentes diversificados bastante menor, sino que aquéllos que lo están tienden a participar, de forma predominante, en sociedades exclusivamente agrarias. Un trabajo presentado por Panero (2014) que coincide parcialmente con el período que nos ocupa arroja resultados similares. Dicho autor analiza la actividad de la mayor parte de los miembros de las CD, y concluye que la ganadería sigue siendo su actividad única o principal, así como que gran número de ellos siguen siendo cabañeros. Sobre un total de 35 individuos, identifica a 8 que caracteriza como “diversificados”.⁷⁰ Asimismo, remarca que a pesar de que algunos son capitalistas agrícolas, la agricultura suele no ser más que un complemento de su actividad principal, la ganadería.

Destaca, asimismo, la existencia de un núcleo reducido de dirigentes que de Palomino denomina “grupo de control”, y que muestra una extensa permanencia en los cargos de la CD y, por lo tanto, se hace con el control de las decisiones de la entidad. Esta característica había sido notada también por de Imaz (op. cit.), que señaló la presencia de un “elenco estable”, y que vinculaba exclusivamente a las familias más tradicionales de la entidad, cuestión que sólo se verifica parcialmente en el análisis más exhaustivo que realiza la autora. Su investigación muestra que, en el período de 26 años que estudia, unos 24 dirigentes se mantuvieron en la CD por lo menos unos 9 años. De estos, entre 9 y 19 individuos formaron parte de la CD al mismo tiempo durante la mayor parte de este lapso, lo que constituye un número suficiente para garantizar el quórum. Por su parte, también Martínez Nogueira (1988, pág. 302) plantea la existencia de un núcleo de dirigentes que se

⁷⁰ Panero define de este modo” al capitalista que posee una “rama agropecuaria integrada subordinada a lógica empresarial”, en contraste con la “empresa solamente agropecuaria” y el “holding multinacional con rama agropecuaria en Argentina”. Dicho criterio parece ser más restrictivo que el utilizado por de Palomino, en la medida en que no incluye dentro de él a dos individuos que, además de ganaderos, identifica como “empresario de la yerba mate” y “vinculado comercialmente con empresa diversificada” respectivamente.

conforma como una especie de “oligarquía institucional”, y que perdura durante años en la CD

La existencia de un grupo de estas características se verifica asimismo en el período analizado aquí. En efecto, mientras que 11 dirigentes ocuparon algún cargo en la CD a lo largo de todo el período, otros 19 lo hicieron durante más de 10 años. La permanencia en el tiempo de este grupo, sólo se vio alterada dos veces en el lapso estudiado: en 1996, cuando se eligieron 7 nuevos miembros, y en el 2002, momento en que se produjo una renovación dirigencial de unos 12 miembros, que incluyó al presidente y casi la totalidad de la Mesa Directiva. Estos procesos serán abordados a lo largo del desarrollo posterior de esta tesis.

Una última cuestión relevante refiere al grado de diferenciación u homogeneidad existente entre la dirigencia y la restante masa social. La investigación de De Palomino (op. cit.) muestra que las diferencias existentes entre estos grupos tienden a ser poco significativas, y destaca la mayor proporción de dirigentes que viven en Buenos Aires, así como una tendencia ligeramente mayor a diversificarse, de lo que deduce que el tamaño del capital que poseen y/o la renta que perciben también es ligeramente mayor. De este modo, el grado de homogeneidad existente entre la dirigencia y los socios restantes (así como entre estos últimos), es significativamente alto. Esto permite, señala la autora, no sólo la reproducción de una ideología relativamente incambiada a lo largo del tiempo, sino también la escasa emergencia de conflictos internos. Así, cuando estos surgen, no tienen por base ni un enfrentamiento entre sectores con diferente posición en la estructura social (no, al menos, tras la retirada del grupo de ganaderos que acabó creando CARBAP), ni tampoco ideologías contrapuestas, sino que más bien tienden a expresar alternativas de posicionamientos políticos frente a determinadas coyunturas. Por caso, menciona tres momentos específicos: el período 1954-5, en la que surgieron disidencias en torno a qué estrategia seguir ante el gobierno peronista; el año 1962, de forma coincidente con los enfrentamientos militares entre azules y colorados; y el año 1972, frente a la crisis política en la que estaba sumido el gobierno militar y el inminente retorno del peronismo.

Estos dos últimos momentos coinciden, por otra parte, con las dos últimas veces en que se presentaron dos listas a las elecciones internas con anterioridad al período aquí estudiado en el que, como veremos, el fenómeno se repetiría en 1990. La norma consuetudinaria que rige en la SRA es, por el contrario, la presentación de una única lista a los socios, cuyos integrantes son consensuados por grupos que forman ya parte de la CD. En este sentido, la presentación de dos listas es un hecho absolutamente excepcional.

4.5. Relación de la SRA con otras organizaciones de capitalistas y/o terratenientes

La acción política de la SRA tiene lugar, asiduamente, en alianzas con otras organizaciones, que revisten distintos grados de formalidad. En este sentido, las restantes entidades agrarias cuya base social se ubica predominantemente en la región pampeana pero procuran avanzar, igualmente, hacia una representatividad que se extiende a la totalidad del territorio, aparecen como su aliado más natural. Sin embargo, los conflictos entre ellas no fueron infrecuentes.

Hacia principios del siglo XX, una gran parte de los pequeños capitales agrarios revestía, como hemos visto, el carácter de arrendatario. En la medida en que la personificación de terratenientes y capitalistas agrarios recaiga sobre distintas personas, la relación entre éstas tendrá un carácter antagónico, determinado por la apropiación de la ganancia extraordinaria que toma la forma de renta de la tierra. Esta determinación se realiza de manera tal que la relación de competencia que entablan entre sí tanto capitalistas como terratenientes por el arrendamiento de tierras toma la forma de una relación directa de solidaridad.

Así, la FAA se constituye, en 1912, como representante específico de los pequeños capitalistas agrarios, en su mayoría arrendatarios agrícolas. Inicialmente, el alcance de la organización se limita a las provincias de la región pampeana, para posteriormente extenderse hasta abarcar la mayor parte del territorio nacional. Su acción política se va a dirigir a confrontar a los sujetos sociales con los que mantienen relaciones antagónicas. En primer lugar, ante la clase terrateniente, en torno a la fijación del canon de arrendamiento. En segundo lugar, ante los capitales normales que operan localmente como soporte para el procesamiento y transporte de las mercancías agrarias (por ejemplo, los capitales comerciales exportadores), en torno al precio comercial al que circulan internamente éstas. Finalmente, la apariencia de que el Estado nacional obra como un sujeto exterior que favorece o legitima estos procesos, apariencia que se ve reforzada cuando, durante las tres primeras décadas del siglo, es la propia clase terrateniente la que detenta la gestión política general, hace que dichos sujetos sociales confronten también con aquél en torno a la conquista de regulaciones que les permitan defenderse de estos, y de políticas que les permitan acceder a la propiedad de la tierra (Bonaudo & Godoy, 1985, págs. 176-80).⁷¹

Durante las dos primeras décadas desde su creación, la acción política de la FAA se orientó hacia la resolución de tres problemas principales: régimen de propiedad y tenencia

⁷¹ Y también, por supuesto, enfrentará a la clase obrera. Para un repaso de la larga serie de luchas entre los capitalistas agrarios y los trabajadores rurales en momentos en que estos comenzaban a sindicalizarse, véase el trabajo de Mascali (1986).

de la tierra, crédito y comercialización. De este modo buscó lidiar con los sujetos sociales cuya relación es antagónica. Por un lado, la clase terrateniente. El curso de la acción pasó por demandarle al Estado tanto la regulación de los cánones y las condiciones de los arrendamientos como la creación de mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra. Por otro lado, los capitales comerciales, frente a los cuales se propuso avanzar en la organización de sus propias estructuras de comercialización de tipo cooperativo, para lo cual necesitó a su vez exigir al Estado la sanción de leyes que posibiliten y faciliten la operación de estas estructuras (op. cit.). Entre estos enfrentamientos, el que va a caracterizar fuertemente las acciones de la FAA durante las décadas siguientes es el que la opone contra los sujetos sociales que aparecen como inmediatamente antagónicos, esto es, la clase terrateniente, cuya representación general detentaba, inicialmente, la SRA.

En la década de 1930, como hemos visto, la representación general de los terratenientes capitalistas ganaderos comienza a escindirse con la creación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). Hacia 1943, CARBAP va a coaligarse con otras confederaciones y federaciones del interior para conformar Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) (Giberti, 1986).

En síntesis, la estructura de representación de intereses políticos del sector agrario opone originariamente de un lado a pequeños capitalistas agrarios y productores independientes, ambos arrendatarios, y del otro a terratenientes-capitalistas ganaderos. Tal estructura queda cristalizada de forma relativamente estable en 1956, a partir de la creación de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), que nuclea miles de cooperativas distribuidas por todo el territorio y agrupadas a su vez en una docena de federaciones de segundo grado. Esta organización es resultado de distintas experiencias de nucleación de cooperativas, que toman fuerza en la década de 1940 como alternativa a las comercializadoras privadas.

Se trata de una estructura articulada en torno a las reivindicaciones políticas, y caracterizada por su fragmentación, principalmente en torno a la actividad productiva, la posesión de la tierra y magnitud del capital, y de estrategia respecto a las formas de comercialización. Por otra parte, presenta una cierta indeterminación en relación a las bases sociales representadas, que en parte se superponen (Lattuada, 1992).

Inicialmente, la relación entre las entidades estaba atravesada por fuertes antagonismos, entre los cuales se destacaba el que enfrentaba a terratenientes, nucleados en la SRA y CRA, y arrendatarios agrarios, tanto capitalistas como productores independientes, aglutinados en la FAA. En particular, destacaba la abierta hostilidad con que la FAA enfrentaba a la SRA (Hora, 2010, pág. 82). A tal punto que una acción política conjunta parecía un fenómeno impensado. Sin embargo, como destacan Martínez Nogueira (1988, pág. 311), Lattuada (1992, pág. 128) y Hora (2010, pág. 96), las transformaciones

que atraviesa la estructura social agraria durante el llamado período de estancamiento tienden a diluir parcialmente este antagonismo.

En efecto, cuando hacia 1967 el gobierno de Onganía pone fin a un período de 25 años de leyes que congelaron virtualmente los cánones de arrendamiento y dificultaron los desalojos, comienza a cerrarse en la región pampeana un proceso de desconcentración de la propiedad que trastoca su estructura social. Durante este período, dicha estructura se había transformado de forma tal que el principal modo de tenencia de la tierra no era ya el arrendamiento, sino la propiedad. En este sentido, la bibliografía destaca tanto la conversión de los arrendatarios en propietarios por efectos directos e indirectos de estas políticas (Flichman G. , 1977; Forni & Tort, 1984; Lattuada, 1988), como la expulsión de un buen número de ellos por parte de los terratenientes, que recuperaban así el control sobre sus tierras (Slutzky, 1968), mientras que otros autores ponderan ambos fenómenos (Barsky & Pucciarelli, 1991; Balsa, 2006).

Así, una gran masa de pequeños capitalistas agrícolas lograría acceder a la propiedad de la tierra, mientras que otra fracción sería desalojada y perdería, en muchos casos, su condición de capitalista. Al mismo tiempo, el sistema tradicional de arrendamientos se cerraría definitivamente en 1968 para configurar, posteriormente, uno de mayor flexibilidad.⁷² Estos hechos tendieron a diluir, parcialmente al menos, la relación antagónica que la entidad había entablado con la SRA y la CRA, y ampliaban el espacio para la realización de acciones conjuntas, tal como las que emprenderían en 1970.

Dicho año registra la primera acción coordinada por las cuatro entidades agrarias. Ante un escenario en el que la renta de la tierra se hallaba contraída a niveles críticos para la acumulación de capital, el gobierno militar (que había sido apoyado por la SRA al momento del golpe) reinstaló los impuestos a la exportación, sancionó un impuesto “de emergencia” a las tierras aptas, y posteriormente, accionó sobre la circulación interna de las principales mercancías agrarias para que se vendieran por debajo de su precio de producción. Frente a este nuevo avance sobre la renta de la tierra, las entidades gremiales volvieron a la lucha encabezadas por la FAA, que iba a ser la punta de lanza en la conformación del frente rural. En marzo de 1970, la entidad lanzó un “Plan de Acción Gremial”, consistente en una serie de actos y asambleas a lo largo del país. Hacia el mes de agosto, ya había logrado confluir en distintas asambleas con CARBAP. Dos meses después, las cuatro organizaciones lograron coincidir en una asamblea nacional conjunta, a la que denominaron “Primera Reunión Nacional de Entidades Agropecuarias”. El fruto de esta convergencia fue la elaboración de un documento conjunto en el que se objetaba la política

⁷² Una análisis de la evolución del sistema de arrendamientos entre 1914 y 1969 puede hallarse en el trabajo de Barsky (1997).

agraria, y se constituía la Comisión de Enlace como un frente de carácter permanente (Sanz Cerbino, 2012, págs. 32-7).

Esta unidad tendría, sin embargo, un carácter esporádico, ya que se desintegraría frente al inminente retorno del peronismo (Baudino & Sanz Cerbino, 2013). Sin embargo, como veremos, la Comisión de Enlace se reconstituiría no sólo en el 2008, sino que las entidades coincidirían también en otra acción conjunta en 1999.

Respecto de su relación con entidades industriales y comerciales, cabe destacar que la SRA integró, hacia 1958, la Acción Coordinadora de Instituciones Empresariales Libres, que actuó como un espacio de coordinación entre distintas organizaciones de alcance nacional, entre las que se contaban la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara de la Construcción, y sostuvo una línea política y económica de tono marcadamente liberal. Esta organización de cuarto grado se disolvió a comienzos de la década de 1970, aunque cinco años después fue creada otra de similares características: la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, en la que además de la SRA formaron parte CARBAP, la CAC, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines (COPAL), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y la Bolsa de Comercio, entre otras. El accionar de esta organización habría estado directamente vinculado a la coordinación del golpe de Estado de 1976 (Sanz Cerbino, 2010).

En el período que nos ocupa, la SRA integró el Grupo de los 8 (G-8) hasta su disolución hacia fines de la década de 1990. Dicho grupo se conformó como una organización informal de cuarto grado, que era el resultado de la estabilización de agrupamientos similares constituidos como los intentos de representar de modo general a la clase capitalista y terratenientes desde el retorno de la democracia en 1983: el Grupo de los 11 devino en primer lugar en Grupo de los 17, y finalmente, en 1987, en Grupo de los 8, que nuclearía a la UIA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de la Construcción, la UAC, ADEBA, la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), la Cámara Argentina de Comercio, y la SRA. Las fusiones de ambas organizaciones bancarias y del comercio redujeron posteriormente el número de integrantes a seis, aunque el grupo siguió conservando su nombre (Viguera, 2000). Se trataba, en resumen, de una agrupación que reunía a las fracciones más concentradas de los capitales industriales, comerciales y bancarios, a las que se sumaba la representación de los terratenientes-capitalistas ganaderos de mayor escala que encarnaba la SRA.

La SRA estuvo ligada, asimismo, al Consejo Empresario Argentino (CEA), organización que no nuclea a otras asociaciones, sino a algunos de sus representantes a título individual. Fundada en la década de 1960, el CEA ha tenido una participación política destacada como expresión de los intereses del capital más concentrado, y se lo ha

relacionado tanto con el plan económico de Krieger Vasena en 1967 como con el golpe de Estado de 1976 (Schneider, 2004, págs. 184-6; Sanz Cerbino, 2015). Algunos destacados dirigentes de la SRA han formado parte de su nómina, entre los que se cuentan a Celedonio Pereda, Luis Firpo Miró y Raúl Mascarenhas. Asimismo, integró a José Alfredo Martínez de Hoz, bisnieto de uno de los fundadores de la SRA y Ministro de Economía durante los primeros cinco años del último gobierno militar (de Palomino, 1988). Tras la dictadura, el CEA reapareció fugazmente en la escena pública a principios de la década de 1990, sin lograr jugar un papel relevante en la coyuntura política. En el año 2002 se fusionó con la Fundación Invertir para conformar la Asociación Empresaria Argentina, aunque no jugaría un papel relevante sino hasta el año 2009.

Cabe destacar, por último, la relación entablada entre la SRA y la UIA. Contra lo que cabría esperarse, el vínculo entre ambas fue siempre cordial. Ello puede apreciarse tanto en la participación de cada una en actividades organizadas por la otra (la exposición de Palermo, en el caso de la primera, y el Día de la Industria en el caso de la segunda), como en el sostenimiento permanente de contactos formales e informales. Asimismo, como se ha mencionado, participan conjuntamente en organizaciones de cuarto grado, como la Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (de Palomino, 1988) o el G-8. La buena sintonía que la SRA suele tener con la UIA, sin embargo, contrasta fuertemente con el papel que aquella asigna a los capitales industriales en la economía nacional, como veremos en el siguiente apartado.

4.6. Ideología

Otro aspecto que interesa analizar refiere a la ideología que caracteriza el pensamiento de la entidad. Como lo señalan distintos autores (Sidicaro, 1982; de Palomino, 1988; Heredia, 2003), la SRA está animada por una ideología de marcado carácter liberal. Destacan, entre sus características principales, el rechazo hacia todo tipo de impuestos a la producción (incluyendo, por supuesto, los impuestos a la importación y especialmente a la exportación), regulación o intervención de los mercados (entre los que se cuenta ciertamente el laboral), y la expansión del gasto público, que a su criterio debería mantenerse en umbrales mínimos. Como corolario de esto último, rechazan también la posibilidad de que el Estado tome en sus manos la gestión de fracciones del capital con un doble argumento: por un lado, acicateado por la búsqueda de ganancias, el capitalista privado sería siempre más eficiente; por el otro, el Estado cerraría así el espacio para la formación de nichos de corrupción, que provocan la pérdida de recursos públicos. En este sentido, sobresale también la confianza en el mercado como el más eficiente asignador de recursos, lo que les permite sostener que cualquier mecanismo que implique una

transferencia de recursos hacia los capitales individuales es contraproducente para el capital social total, puesto que en lugar de someter a aquéllos a la competencia para así estimular su necesidad de incrementar la productividad, se les permite reproducirse sosteniendo una productividad del trabajo más baja. Es decir, en términos de la propia entidad, una gran fracción de los capitales locales son “ineficientes”, a pesar de lo cual logran escapar de la alternativa de aumentar la productividad del trabajo que ponen en marcha o ser derrotados en el mercado por la competencia, constituida en este caso por mercancías importadas.

En la SRA, asimismo, el liberalismo se entremezcla con una ideología agrarista que hunde sus raíces en los orígenes de la nación. Así, la patria aparece indisolublemente ligada a la producción agraria, que logró conquistar los mercados mundiales y ganarle un papel al país en el escenario internacional durante el siglo XIX. De acuerdo a esta interpretación histórica, la Argentina habría vivido su hora más gloriosa bajo el denominado por la historiografía liberal “período agro-exportador”, situado frecuentemente entre 1880 y 1930.⁷³ Sobre esta base, la entidad parte de afirmar que la producción agraria es la única que se puede considerar eficiente en términos internacionales, y que su desarrollo, por lo tanto, debe ser la base del desarrollo nacional, lo que le permite posicionar a la rama agraria como el “motor de la economía”. Al respecto, Sidicaro afirma acerca de esta articulación entre liberalismo, producción agraria e historia argentina, que se habría transformado en base para que “toda iniciativa política que afectase sus intereses sectoriales podía ser objetada no sólo en nombre de un defensismo corporativo y categorial, sino de la invocación a los principios constitutivos de la sociedad argentina” (1982, págs. 56-7). Es por eso que, frente a la aplicación de impuestos como las retenciones, su oposición se basa en un doble fundamento: el de un origen puramente liberal, que supone que estos impuestos son en sí perniciosos en cualquier rama que se apliquen, y el que remite específicamente al rol que ocuparía la producción agraria en la economía nacional, por el cual postulan que al aplicarlos se estaría bloqueando el desarrollo de dicha rama de la producción y, consecuentemente, el de la economía en su totalidad.⁷⁴ De esta manera, no puede sorprender el hecho ya referido de que la entidad haya mantenido mejores relaciones con los gobiernos que identifica como próximos a esta ideología, y un vínculo más turbulento respecto de los que entiende más se apartan de ella, aspecto que se aprecia claramente en la alternancia de gobiernos militares y democráticos durante el período 1955-1983.

⁷³ Al respecto, puede consultarse el texto ya clásico de Díaz Alejandro (1970). Una interpretación de la propia SRA en esos términos puede hallarse en M89: 113.

⁷⁴ En este sentido, y como veremos posteriormente, la entidad oscila entre condenar de manera general el sostenimiento de los capitales industriales, o afirmar que una vez que la rama agraria se halla desarrollado plenamente se podrá evaluar qué puede hacerse con las restantes.

Retomaremos la cuestión de la ideología de la SRA en el último capítulo, en relación con el período que analizaremos aquí. Antes de avanzar sobre éste, conviene sintetizar la acción política de la SRA en los años anteriores, cosa que haremos en lo que sigue.

4.7. La SRA hacia fines de la década de 1980

El período de análisis que abarca la presente investigación se inicia en 1989, momento en el que, a pesar de la accidentada transición democrática, dicha forma de gobierno se estaba consolidando tras décadas de sucesivas interrupciones mediante golpes de Estado. En este sentido, cabe referirse a dos aspectos que serán de relevancia para el análisis de la acción política de la SRA desde 1989: por una parte, la incómoda posición en la que quedaba tras la batida en retirada del gobierno militar, al que había apoyado sin vacilaciones, y las consecuencias que tendría dicho apoyo; por otra parte, la crisis que había signado los últimos años del gobierno radical y provocado su caída se extendería también durante los primeros años del menemismo, lo que hace pertinente la revisión de la acción política desarrollada por la entidad desde un breve período inmediatamente previo. Al respecto, reviste particular interés el análisis del programa económico que la asociación había desarrollado y difundido como propuesta de salida de la crisis. Nos detendremos entonces, brevemente, en estas tres cuestiones.

4.7.1. El retorno de la democracia y la apertura de una interna política en la SRA

Tras el desplome de la dictadura militar, en 1983, la SRA buscó renovar su imagen ante la sociedad. En efecto, la asociación había apoyado sin reservas el golpe de 1976 y defendido posteriormente la labor del gobierno de facto, tanto más cuanto que José Alfredo Martínez de Hoz, perteneciente a una de las familias más tradicionales de la casa, había sido nombrado Ministro de Economía, mientras que la Secretaría de Agricultura sería ocupada por un socio activo. A pesar de efectuar críticas moderadas sobre la política económica, la organización sostendría su apoyo político al régimen a lo largo de toda su extensión (de Palomino, 1988). El retorno de la democracia y el desprestigio en el que dicho régimen había quedado sumido, por lo tanto, provocaron que la SRA buscara despegarse de su proceder.

Ya electo Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, en 1984 la Asamblea Ordinaria de la asociación elegiría como su principal representante a Guillermo Alchourón. Su afiliación a la UCR jugaría entonces un doble papel: por un lado, exhibir su flamante compromiso con la democracia; por el otro, procurar obtener llegada directa con el gobierno radical.

Pero Alchourón poseía además otra “virtud”: se trataba de un socio que no podía ser identificado con las familias aristocráticas que se habían constituido en el emblema de la SRA, sobre la base de que no había recibido por herencia su condición de terrateniente ganadero, sino que había sido adquirida posteriormente. De igual modo, tampoco pertenecía a las organizaciones de criadores más tradicionales. Por el contrario, era miembro de la Asociación de Criadores Holando Argentina, raza destinada a la producción de leche. Esto le permitía presentarse en sociedad como un “lechero pobre” (Heredia, 2003). La elección de Alchourón y la posterior consolidación de un grupo conformado en torno a él, sin embargo, acabaría por desatar un conflicto de gran magnitud en la SRA, cuando la línea más aristocrática procure recuperar su posición en la CD en 1990. Hasta tanto, la entidad debería lidiar con el gobierno radical, cuyas políticas económicas, que incluían acuerdos de precios, tipo de cambio diferencial para la exportación y retenciones, no eran precisamente de su agrado.

4.7.2. La SRA en la crisis de 1989

Superada la crisis de 1982, la acumulación de capital volvió a expandirse a un ritmo moderado hasta fines de la década de 1980, en la que asomó nuevamente la crisis. Este escenario alteró el tablero de las asociaciones de capitalistas: tras sucesivos realineamientos, como hemos visto, recién en 1987 el G-8 quedó definitivamente conformado.

En ese mismo año, el gobierno radical comenzó a avanzar en la implementación de algunas de las medidas que formarían parte, posteriormente, de la agenda neoliberal: apertura comercial y privatizaciones. Frente a este escenario, el sector industrial osciló entre el rechazo frontal y la oposición negociadora. Específicamente, y a pesar del apoyo de la COPAL a las medidas, la UIA acabó adoptando un perfil crecientemente confrontativo. La dirección en la que parecía avanzar ahora el gobierno se acercaba mucho más a las demandas que enarbolaba la SRA. Sin embargo, dicha entidad estaría lejos de apoyarlo (Viguera, 2000, pág. 69).

En agosto de 1988, el gabinete económico procuró una vez más controlar la crisis mediante la implementación del llamado Plan Primavera. Su lanzamiento dejó en evidencia la escasa homogeneidad entre los integrantes del G-8. La CAC y la UIA, por una parte, apoyaron explícitamente el plan, aunque dicho apoyo se sustentaba menos sobre la convicción que sobre el miedo a la explosión de una nueva crisis y la posible implementación de medidas como el congelamiento de precios. Al mismo tiempo, el apoyo le permitía negociar con el gobierno medidas como la continuidad de los programas de promoción de las exportaciones, un desdoblamiento cambiario más favorable, y la discusión

de las modificaciones en los aranceles de importación (Viguera, 2000, pág. 69). En cambio, la SRA protestó contra el desdoblamiento, que además de implicar la apropiación de una fracción de renta de la tierra se sumaba a la reinstalación de las retenciones, efectuada el año previo. Frente a la incapacidad de presionar desde el G-8, optó entonces por recostarse sobre las restantes entidades agrarias. A escasos días de ser anunciado, las cuatro entidades publicaron una solicitada denunciando al plan en general y al desdoblamiento cambiario en particular como un despojo al campo y a los consumidores (Acuña, 1990; Lattuada, 1991, pág. 141). Dicho plan se instrumentaba, por otra parte, en un contexto de fuerte sequía en la región pampeana, que había contraído de por sí la magnitud de renta apropiable.

La alianza de la UIA con el gobierno había desatado las críticas de otros miembros del G-8. Particularmente, la SRA había impulsado, sin éxito, empujar al grupo a pronunciarse contra la política cambiaria (Birle, 1997, pág. 235). Paralelamente, el enfrentamiento con el gobierno se agudizaría pocos días después de la implementación del plan, en la inauguración oficial de la Exposición de Palermo. Allí, una fuerte silbatina recibió al presidente Alfonsín, impidiéndole hablar. Su respuesta no se hizo esperar: “es una actitud fascista no escuchar al orador”, bramó. Sobre el final, y rompiendo el protocolo, Alchourón tomó nuevamente la palabra para intentar conciliar: “Estoy orgulloso como argentino de haber podido discutir en esta tribuna centenaria qué piensa cada argentino: el que representa a la producción y el presidente de la Nación. Esto, señores, es democracia” (EP, 19/08/88). El conflicto, no obstante, había quedado lejos de saldarse.

En febrero de 1989, la suspensión de la venta de dólares al precio oficial por parte del BCRA desató una nueva corrida. Sería la última que enfrentaría el gobierno radical, que cedería el poder meses más tarde en medio de una violenta crisis inflacionaria.

La situación había polarizado las estrategias políticas de las distintas organizaciones mencionadas. En este contexto, la SRA mantendría su enfrentamiento con el gobierno, pero sería incapaz de establecer alianzas. El G-8, como señalamos, no lograba funcionar plenamente como espacio de articulación política debido a la alianza de la UIA con el gobierno, a pesar de que la crisis acabaría forzando una ruptura. Una nueva modificación en el tipo de cambio para la exportación, hecho como concesión al sector agrario, fue considerada “insuficiente” por las organizaciones agrarias, que en vista de la “grave situación” acordaron reunirse regularmente. Sin embargo, tampoco fueron capaces de coordinar una acción política conjunta. De este modo, y a instancias de CARBAP, la CRA realizó por su propia cuenta un paro de 72 horas en abril. Mientras tanto, uno de los vicepresidentes de la UIA protestó por la modificación cambiaria alegando que implicaba una transferencia de ingresos hacia el sector rural, y provocando una dura respuesta de las entidades agrarias (Birle, 1997, págs. 238-40). En suma, alejada de sus pares sectoriales e

incapaz de maniobrar en el interior del G-8, la SRA se mantuvo incólume en su enfrentamiento con el gobierno radical durante los restantes meses de 1989 en los que éste logró sostenerse.

4.7.3. El programa económico de la SRA

Veamos, por último, qué diagnóstico hacía la SRA de la crisis, y qué propuestas formulaba para superarla. Ya nos hemos referido brevemente a los fundamentos liberales que animan a la entidad. Detengámonos ahora entonces en el programa elaborado sobre esas bases para la coyuntura de fines de la década de 1980, que se le presenta como un momento propicio para presionar por una salida afín a sus ideas. Con este espíritu, la asociación elaboró un programa económico en el que integró, además de las medidas históricamente reclamadas, otras que respondían a la coyuntura. Analicémoslo entonces brevemente.

Se trata de un documento elaborado en 1988 y difundido posteriormente como “Mensaje a la Dirigencia” en el que además de realizar un análisis de la historia económica argentina efectuaban una serie de propuestas que conformaban un “nuevo modelo de crecimiento”. Dicho modelo sólo podría ser puesto en marcha, señalaban, en un contexto de estabilidad económica, cuyo impedimento principal era la inflación. Por lo tanto, afirmaban, “es necesario atacar directamente [...] sus causas. Por ello, la eliminación del déficit fiscal a través de una efectiva reducción de los egresos del Estado es el único camino seguro hacia la estabilidad económica”. Las propuestas para lograrlo incluían: privatización de las empresas públicas; “reordenamiento de la administración central”, que significaba la contracción o eliminación de los organismos del Estado; reforma del sistema impositivo “sobre la base de la simplificación tributaria y la no discriminación intersectorial”, esto es, reducción o eliminación de los impuestos que recaen sobre la renta de la tierra; “financiamiento de los equilibrios en el corto plazo”, mediante una política de aumento de las exportaciones y la utilización del endeudamiento externo “para promover inversiones productivas, en lugar de para aumentar su capacidad de control de las variables económicas”. Esto permitiría eliminar, sostenían, las causas de la inflación. Sin embargo, el estancamiento de la economía argentina tenía su origen, afirmaban, en una “mala asignación de los recursos productivos, como consecuencia del alto grado de regulación que ha caracterizado al sistema económico”. La propuesta, por lo tanto, señalaba que “deberán eliminarse en forma progresiva todas las trabas y controles que el Estado ejerce hoy sobre la actividad económica, y permitir que el mercado sea el factor determinante en la asignación de los factores”. En este sentido, las medidas a implementar consistirían en: eliminación de la intervención del Estado en la fijación de precios y salarios; unificación y

liberación del mercado cambiario; eliminación de retenciones a las exportaciones; reducción de los aranceles a la importación, y la “revisión inmediata de todos los planes y sistemas de promoción especial de actividades productivas, manteniendo siempre el firme criterio de no discriminación entre sectores” (M89, 123-6).

Por otra parte, de lograr avanzar en la dirección planteada por el programa, la preocupación siguiente de la SRA sería evitar su reversión. Por lo tanto, sugería que

Para que la desregulación del sistema económico genere los objetivos deseados, es necesario que los operadores económicos tengan la plena seguridad de la estabilidad de las medidas tomadas. [Para ello], deberían crearse los mecanismos legales para asegurarse la continuidad del camino elegido. Una alternativa podría ser que el Congreso Nacional dicte una ley de carácter nacional que establezca claramente las atribuciones y límites del Poder Ejecutivo en materia de política económica (M89, 126).

Por último, sugería una serie de políticas específicas para el sector agrario, entre las que destacaban: eliminación de retenciones y de las normas de intervención sobre los mercados agrarios, tratamiento impositivo idéntico al del resto de los sectores de la economía; reducción de impuestos municipales y provinciales; privatización de organismos como las juntas de carnes y de granos; y privatización del sistema de puertos y transportes.

El espíritu general del programa, así como el diagnóstico sobre el que este se funda fueron resumidos en una declaración de 1988:

La Sociedad Rural Argentina ha señalado en reiteradas oportunidades que la desregulación, la desmonopolización y la privatización deben ser los pilares de los cambios estructurales que necesita nuestra economía para permitir el desenvolvimiento eficaz de las fuerzas productivas y contribuir de esa forma al crecimiento definitivo de nuestro país [...]. El alto nivel de protección contra la competencia externa acordado a muchos sectores del quehacer nacional es, sin duda, una de las principales trabas al normal acomodamiento de la economía. La consecuencia de muchos años de erróneas políticas proteccionistas se ve reflejada en la creciente ineficiencia de la estructura productiva argentina medida en su escasa capacidad para competir internacionalmente y mantenida artificialmente por discriminatorios traslados de recursos del Sector Agropecuario o por aumentos en los déficits fiscales. En definitiva, la sociedad en su conjunto es la que ha tenido que pagar los costos de este sistema (M89: 82-3).

Asimismo, en un comunicado de prensa emitido en febrero de 1989, sumaba a estos reclamos la presión para avanzar en la desarticulación de los distintos mecanismos de apropiación de renta de la tierra por parte de los capitales industriales, cuestión que se había constituido en el eje de sus reclamos desde el retorno de la democracia:

Las medidas instrumentadas no solucionan los problemas básicos de la economía, lo que sólo podrá lograrse mediante el desmantelamiento del sistema de privilegios, conjuntamente con el equilibrio fiscal. La unificación del mercado cambiario por nosotros reclamada y la racionalización de los gastos estatales constituyen piezas claves de ese camino y contribuirían a establecer el clima de confianza necesario en los operadores y definir una política monetaria donde las tasas de interés se alinien [sic] con las vigentes a nivel internacional” (M89, 136).

Se trata, en síntesis, del programa económico que había sostenido la entidad durante décadas: reducción del gasto público, vía achicamiento del Estado y reducción de subsidios y demás formas de sostenimiento de la ganancia de los capitales industriales; eliminación o reducción de impuestos, con especial énfasis en las retenciones a la exportación; apertura económica, esto es, reducción de los aranceles a la importación, particularmente de medios de producción agrarios; desregulación de los mercados, incluyendo por supuesto el laboral, y liberación del mercado cambiario. Si bien no era una demanda nueva, por otra parte, la privatización de las empresas de propiedad pública se iba configurando como otro de los reclamos más importantes, al que se agregaba el apoyo al endeudamiento externo, pero para “promover inversiones productivas”. En esencia, las críticas y propuestas coincidían con las que comenzaría a enarbolar específicamente tras el advenimiento del gobierno peronista hacia mediados de la década de 1940, aunque adaptadas a la coyuntura económica de fines de la década de 1980.

4.8. Síntesis

En este capítulo hemos sintetizado algunas de las características y tendencias más destacadas de la SRA. Concretamente, nos hemos referido a su creación y la relación que tendió a construir con los gobiernos de distinto signo político, particularmente durante el período de alternancia entre regímenes democráticos y de facto; hemos caracterizado, asimismo, su base social y dirigencia, así como su estructura organizacional. También caracterizamos el vínculo que establece con otras asociaciones, tanto agrarias como de otras ramas de la producción, así como la ideología que ha sostenido a lo largo del tiempo. Finalmente, repasamos de forma somera su posicionamiento político de cara a la crisis de finales de la década de 1980, incluyendo específicamente el programa económico que promovían para la Argentina. Sobre esta base, entonces, podemos ya pasar al estudio de su acción política en el período que nos ocupa.

Capítulo 5

Los primeros años del gobierno menemista: de la euforia al apoyo crítico (1989-1994)

Fuimos muchos los que nos ilusionamos y creímos que la hora del reclamado y ansiado cambio había llegado [...] en 1989. Este regocijo inicial se prolongó en tanto, mediante las transformaciones producidas, se desreguló la economía, se liberaron los mercados de cambios y de salarios, se eliminaron la casi totalidad de las retenciones a las exportaciones y, fundamentalmente, se fue recuperando la estabilidad y el valor de nuestra moneda. [...]. Pero lamentablemente aquellas esperanzas no duraron mucho. El cambio que consideramos auspicioso exigió un considerable ajuste de cuentas para subsistir.

Editorial de Anales, junio de 1994.

Las elecciones presidenciales de mayo consagraron como presidente a Carlos Menem por un amplio margen sobre Eduardo Angeloz, el candidato de la UCR. Si bien ambos habían propuesto en sus campañas la implementación de medidas de corte liberal, como privatizaciones de empresas estatales, apertura económica, o mejoramiento de las condiciones para la inversión extranjera, entre otras, Menem sumaba a dichas propuestas las vagas promesas de “revolución productiva y salarizado”, enmarcadas además en una campaña en la que había desplegado su carácter de caudillo provincial, y hecho gala de su cercanía con la CGT (Birle, 1997, pág. 241). Esto dejaba, ciertamente, una gran inquietud en torno a la política económica que desplegaría.

Sin embargo, serían prontamente despejadas. El agudizamiento de la crisis forzó la salida anticipada del gobierno radical, quien cedería su lugar en julio al presidente electo. Poco tiempo antes de asumir, éste había anunciado que nombraría a un empresario al frente del Ministerio de Economía (MECON). El elegido acabó siendo Miguel Ángel Roig, del grupo Bunge & Born. Su sola nominación bastó para empujar hacia arriba las cotizaciones de la Bolsa en un 45%. Similar impresión causó su alocución de apertura en el Congreso, a la que la SRA se refirió de este modo:

En el discurso que pronunciara ante la Asamblea Legislativa el 08/07/89 anunció un cambio radical en el rumbo a seguir en materia de política económica, y el diagnóstico efectuado acerca de la crisis económica y social argentina fue acertado. Con el anuncio de los

lineamientos básicos a seguir en el espectro económico, se advirtió una firme decisión de encarar una reforma del Estado a fin de reducir el déficit fiscal y la consecuente emisión monetaria, causa principal del proceso inflacionario argentino durante los últimos años (M90: 10).

Las dudas acerca del rumbo económico que encararía el nuevo gobierno comenzaban tempranamente a disiparse.

5.1. La SRA ante la implementación del neoliberalismo

Tras la asunción del flamante gobierno, Roig puso en práctica un plan de ajuste anunciado previamente, y que incluía fuertes aumentos en las tarifas públicas y combustibles, un congelamiento de precios y salarios por tres meses, y una devaluación del peso. El plan, en suma, no se diferenciaba demasiado de los que se habían puesto en marcha durante el gobierno de Alfonsín. Paralelamente, no obstante, el gobierno había enviado al Parlamento (en donde había casi alcanzado la mayoría absoluta) dos leyes que harían historia. Por una parte, la de Reforma del Estado, que lo autorizaba a privatizar total o parcialmente un gran número de empresas públicas; por la otra, la de Emergencia Económica, por la cual podrían suspenderse temporalmente los subsidios entregados por el Estado a los capitales privados (regímenes de promoción industrial, sistema de “compre nacional”, y subsidios a las tarifas de los servicios públicos), despedir masivamente empleados públicos y eliminar los llamados “salarios de privilegio” en el sector.

Estas primeras medidas obtuvieron una adhesión no demasiado entusiasta por parte de los capitalistas industriales. De momento, sin embargo, la devaluación dificultaba la importación de mercancías que pudieran competir contra las producidas localmente, y daba aire a los capitales exportadores. La designación de Roig, por otra parte, había sido interpretada como una alianza entre el gobierno y los Capitanes de la Industria (CI)⁷⁵ en desmedro de la UIA, que sin embargo, al igual que las restantes asociaciones que conformaban el G-8, apoyó inicialmente el programa económico (Birle, 1997; Viguera, 2000).

La SRA, por su parte, recibió al nuevo gobierno con los brazos abiertos. Las versiones de que en la inauguración de la Exposición Ganadera se anunciaría una reducción de las retenciones a la exportación y de los aranceles a la importación habían ya predispuesto favorablemente a la CD. Y en efecto, Menem anunció que dicho impuesto iría reduciéndose paulatinamente, así como la instrumentación de una baja en los aranceles para la importación de agroquímicos. Pero la SRA no recibió solamente las noticias que estaba esperando desde hace años, sino que además quedó gratamente sorprendida con el

⁷⁵ Se trataba de un agrupamiento informal de algunos de los capitales industriales de mayor concentración. Respecto del mismo, puede consultarse el libro de Ostiguy (1990).

discurso del presidente, quien señaló en reiteradas oportunidades que consideraba a la producción agraria como el motor de la economía y que la salida de la crisis pasaba por estimular dicha producción, además de insistir en la necesidad de desregular la economía. Ante su propia estupefacción, el director de Anales, Carlos Vaquer, reproduce en el editorial de la edición de julio numerosos pasajes de este discurso, y concluye:

La convicción que trasuntaron las palabras del presidente de la Nación a través de su humildad expresiva y la sencillez de su terminología, llegó a los oyentes con máxima accesibilidad y credibilidad. Sus giros y gestos simples, sin arrogancias ni soberbias, pidiendo ayuda para sacar al país adelante, llegaron con fuerza a los hombres de campo [...]. Es que ese día, en muchos casos por primera vez, habían escuchado el mensaje de un gobierno nacional que reconocía no sólo el mérito de su esfuerzo constante, sino que hacía justicia al destacar su permanente y generoso aporte al progreso y bienestar del país. Fue entonces que los productores agropecuarios templaron su ánimo y renovaron con emoción y esperanza su compromiso eterno y siempre cumplido de colaborar con la Nación (A-Sep89: 4-5).

Pocos días después, la entidad emitió un comunicado instando a los legisladores a aceptar “el imperativo de la hora” y votar las leyes de Reforma Económica y Emergencia Financiera enviadas al congreso (M90: 63). Más tarde, insistiría en la necesidad de aprobar el paquete de reformas, instando a los legisladores “reticentes” a votar por su sanción, “indispensable [...] para superar el déficit fiscal que nos ha quebrado”, y aprobó los esfuerzos realizados por el gobierno para superar la crisis (A-Sep89: 5).

Cuando las leyes fueron aprobadas, en agosto y septiembre, la SRA celebró el hecho. En efecto, el esquema económico puesto en marcha parecía ir en la dirección más favorable para sus intereses: además de las reformas liberales y el recorte en las transferencias de renta de la tierra hacia el capital industrial, la devaluación del austral había sido leída como un estímulo hacia las exportaciones. El propio Rapanelli, que había reemplazado en el MECON al prontamente fallecido Roig, había declarado en agosto que la recuperación económica estaría basada “en el campo y el petróleo” (Viguera, 2000: 102). Así, mientras en la dirigencia industrial comenzaba a instalarse la idea de que el plan B&B favorecería específicamente a estos sectores, y la UIA protestaba por las tasas de interés, la suspensión de reembolsos y exenciones impositivas y la presión tributaria, la SRA mostraba su aprobación a la “eliminación de costosos e inexplicables subsidios y promociones” (M90: 82).

No obstante, se trataba hasta aquí, simplemente, de la marcha general que iba tomando una política económica que se revelaría zigzagueante. En octubre, la entidad comenzó a recelar de un proyecto de reforma tributaria, cuya sanción significaría “un nuevo esquema discriminatorio para el sector” (M90: 85). Mayores quejas expresaron frente a la

continua revaluación de la moneda, que iría licuando el efecto de la devaluación de julio (Viguera, 2000, pág. 102). En diciembre, a la apreciación del peso se le sumó la reversión en la baja de las retenciones que pretendió implementar Rapanelli elevándolas un 11%, con lo cual volvían a quedar cerca de los niveles previos. Tras una reunión con Menem, no obstante, Alchourón logró desactivar la medida (CL, 17/12/89). Así, la táctica de acercarse al gobierno para negociar parecía estar rindiendo frutos.

En este período, el principal apoyo al gobierno por parte de la clase capitalista provino del CEA. Con los miembros del CI pujando entre sí para influir sobre las decisiones de política económica del gobierno, Jorge Born buscó reactivar el papel del CEA como soporte ideológico. En él se nucleaban, a título individual, capitalistas provenientes principalmente de las ramas petrolera y agroexportadora. Entre ellos se contaban Celedonio Pereda, socio de la SRA y presidente entre 1972 y 1978, y José Martínez de Hoz. No obstante, como señala Viguera (2000, pág. 104), dicho agrupamiento no constituía, por lo reducido de su número, una masa crítica lo suficientemente grande como para que pudiera considerársela una coalición en sí misma; por otra parte, al accionar por fuera de dicha organización, no todos sus miembros presionaban por la profundización de las políticas liberales. El papel del CEA, en este sentido, puede entenderse como un apoyo hacia los aspectos más liberales de las políticas económicas en cuanto orientación general, frente a las posibles alternativas de tipo populista y a las resistencias a las privatizaciones y desregulaciones provenientes de distintos sectores sociales.

En este sentido, el temor al fracaso del experimento neoliberal se reveló fundado: el lapso de estabilidad logrado por el gabinete B&B fue breve. La combinación de apreciación cambiaria y altas tasas de interés en pesos derivó en movimientos especulatorios que acabaron por resolverse en una nueva crisis, que arrastró al equipo económico del gobierno. En este escenario, el gobierno rompió su alianza con el grupo B&B y designó como nuevo ministro a Antonio Erman González, uno de los funcionarios de confianza de Menem.

Éste procuró distanciarse de la gestión anterior, acusada de favoritismos a la hora de implementar la apertura económica: ya en uno de sus primeros discursos anunció que iba a “terminar con la patria financiera y la patria contratista”. Al mismo tiempo, profundizó la tendencia liberal que iba tomando el gobierno menemista al dejar libres los precios, el tipo de cambio y las tasas de interés. A partir de marzo de 1990, la inflación logró ser contenida, pero al precio de una recesión y de la revaluación del austral. Mientras tanto, la apertura económica seguía avanzando lenta y desparejamente: los aranceles a la importación tendieron a reducirse y a reducir su dispersión, pero sin sobrepasar un piso (establecido inicialmente en el 24%); en tanto que algunos aranceles que se hallaban en niveles mínimos fueron aumentados con el argumento de compensar la recaudación fiscal, que decrecería

cuando se eliminasen los impuestos a la exportación (Viguera, 2000, pág. 112; Birle, 1997, págs. 274-5).

En este escenario, y sin dejar de prestar su apoyo “al rumbo general” de la política económica, las organizaciones que representaban a los capitalistas industriales presionaban al mismo tiempo para que la apertura económica no los afecte individualmente. En enero, el MECON presentó un nuevo esquema arancelario en el que se fijaba un nuevo techo, sin afectar en principio a los productos ubicados por debajo de él. Al mes siguiente, avanzó en su intento de controlar los precios al suspender por 6 meses los aranceles de importación de algunos alimentos y artículos para transporte y envase. Dicha medida, sin embargo, fue revocada en marzo tras las protestas de los capitalistas del sector. Otros intentos de avance aperturista, esta vez de carácter permanente, enfrentaron similares resistencias, y resultaban en negociaciones en las que aquéllos lograban obtener concesiones de algún tipo (Viguera, 2000, págs. 119-21).

La SRA, por su parte, ya planteaba la cuestión como un enfrentamiento abierto contra los capitales industriales. Por una parte, entonces, denunciaba su reproducción sobre la base de utilizar el *lobby* como principal estrategia política. Se trataba de un proceso particularmente perverso: los representantes de dichos capitales lograrían obtener recursos económicos mediante el lobby, parte de los cuales debían destinar a sostener su estrategia de lobby. La producción agraria, por el contrario, se veía marginada de distribución semejante, lo que a su vez, le impediría defender mejor sus intereses:

Se enfrentan [...] diversos sectores, públicos y privados, de empresarios y laborales, de la industria, del comercio, de los servicios, de la agroindustria y agropecuarios. Es una lucha que [...] no se desarrolla comúnmente a campo abierto, sino en el espacio de los despachos y la estrechez de los pasillos oficiales [...]. Es evidente que el sector agropecuario debe ser adecuadamente representado, e incluso defendido, para evitar que se lo siga discriminando [...]. Esta defensa, al estar referida al sector más genuino de la actividad productiva beneficia sin duda a la Nación [...] necesita ser atendida en todos los ámbitos y circunstancias en que se desarrolla el enfrentamiento de posiciones. Al respecto es lamentable comprobar que no siempre se imponen o triunfan los que tienen razón sino que el éxito acompaña por lo general a los que cuentan con más medios para lograr divulgar sus argumentos y en última instancia, para informar tanto el conocimiento de quienes gobiernan como el del resto de los integrantes de la comunidad [...]. Esta acción sintetizada corrientemente con la expresión “lobby” [...] requiere cada día mayores gastos y consecuentes ingresos económicos. Hay sectores –como es de público conocimiento, no son los que representan al ruralismo- que desde hace tiempo cuentan con importantes recursos de origen financiero que les permiten actuar [...] en garantía de la mejor defensa de sus intereses sectoriales. Dichos recursos provienen de aportes previstos y ordenados por disposiciones legales y en otros casos voluntarios por parte de sus representados. Los resultados están a la vista (A-Dic89: 4-5).

Por otra parte, la SRA no se limitaría a denunciar tal estrategia, sino que procuraría avanzar hacia la liquidación absoluta de lo que consideraba “privilegios” sectoriales y expresando su apoyo hacia los avances, todavía “insuficientes”, del programa económico liberal:

Tantos años de experiencias con esperanzas fallidas y promesas incumplidas han dado fundamento a la generalizada convicción de que la causa determinante de estos comunes padecimientos deriva del Estado sobredimensionado que, asumiendo ineficazmente funciones propias de la actividad privada, agobia a la población con impuestos, retenciones, tarifas y tasas que nunca alcanzan para satisfacer sus irracionales gastos.

Y es así que interpretando deseos comunitarios se ha legislado ya para reducir los emprendimientos del Estado, acotando su campo de acción y racionándolo [...]. No puede ignorarse que aun cuando resulta insuficiente lo hecho en ese sentido hasta la fecha por el actual gobierno nacional, se han concretado ya acciones [...] con tal propósito. Valgan a mero título enunciativo la liberalización de los mercados de cambio, la adecuación de aranceles y retenciones procurando la expansión de exportaciones y la apertura comercial, la privatización de dos canales de televisión nacionales, las licitaciones con igual propósito para la prestación de servicios telefónicos, ferroviarios y de transportes aéreos y marítimos, el retorno a las paritarias para la determinación de salarios, las recientes medidas de reducción del gasto público, y todo ello en pocos meses.

Pareciera entonces que, como muchas veces antes, la impaciencia nos lleva a los argentinos a reiterarnos en el error de perder la visión del bosque por mirar el árbol que tenemos más próximo, por lo común, “nuestro árbol” [...]. Es necesario entonces que [...] al formular reclamos y considerar los de los demás, lo hagamos simultáneamente el grado de posibilidad de cada uno, pero tomando en cuenta también las necesidades de la Nación. Tal vez así tendremos que admitir que para reducir el déficit ferroviario sea penoso, pero indispensable, que algunas localidades que cuentan con otros medios de transporte se vean privadas del ferrocarril ineficiente aunque con tarifas reducidas. Que para que sea menor el gasto público de algunos servicios que no son propios de los objetivos básicos del Estado deban pasar a la actividad privada [...]. Que jamás será viable una comunidad feliz en tanto subsistan privilegios de cambio, de servicios, de aranceles, de subsidios, de créditos, de impuestos e incluso previsionales, que no puedan sostenerse con recursos provenientes de aportes genuinos y lo sigan haciendo a través del Estado mediante transferencias (A-Abr90: 4).

No resulta extraño, en este marco, que el gobierno siguiera sin lograr obtener un apoyo claro de los capitalistas industriales, e incluso de su fracción más concentrada, más allá de las declaraciones de apoyo general que emitían esporádicamente el CEA y el G-8. En este contexto, en septiembre fue conformado, a instancias del gobierno, un “Consejo Consultivo” integrado por dirigentes sindicales y capitalistas, entre los cuáles se hallaba Eduardo de Zavalía. El hecho de que estos participaran a título personal, sin embargo, ponía

en evidencia la fragilidad del grupo como soporte de la política del gobierno, lo que se sumaba a las desavenencias a su interior que se manifestaron inmediatamente (Viguera, 2000, pág. 114).

La SRA, mientras tanto, recibía estímulos cruzados. Si bien el austral proseguía su apreciación, para peor en un contexto recesivo, al mismo tiempo el equipo económico anunciaría a mediados 1990 una rebaja en las retenciones, consensuada con la SRA y las restantes entidades agrarias. El porcentaje afectado por este impuesto sobre las distintas mercancías agrarias había sido modificado gradualmente por el gobierno a lo largo de su primer año de gestión, llegando a reducirlo a aproximadamente la mitad respecto de los valores que regían hacia el momento de recambio presidencial, y manteniendo su promesa de eliminarlo por completo. A cambio, Alchourón había manifestado su acuerdo, en nombre de la asociación, al reemplazo de dicho impuesto por la aplicación del IVA a la rama agraria (P/12, 05/08/12).

Ya en mayo, tras reunirse con los dirigentes de las asociaciones, el equipo económico del gobierno había convenido una rebaja en las retenciones al trigo, que caerían del 15% al 9% a partir de noviembre. Hacia julio, y en un contexto en el que el austral se hallaba ya fuertemente apreciado, el gobierno volvió a aceptar discutir una baja en el impuesto. En su interior, era Felipe Solá, desde la Subsecretaría de Agricultura, quien presionaba por una baja sustancial del tributo, encontrando la principal oposición en la Subsecretaría de Hacienda, más preocupada por impedir el desequilibrio fiscal. Paralelamente, los dirigentes de las distintas entidades, incluida la SRA, eran recibidos por el Presidente. En agosto, finalmente, se anunciaría una nueva reducción de un 50% en los derechos de exportación de granos para la siguiente campaña, que quedaban ahora comprendidos entre el 8 y el 13%. Las carnes, por su parte, también pagarían una alícuota en promedio 8 puntos menor, pasando a tributar entre 8 y 18%. El escenario elegido por el gobierno para el anuncio fue la Exposición Ganadera de Palermo, en la que a los funcionarios se sumaron dirigentes de CRA y CONINAGRO. Alchourón, en representación de la SRA, valoró la medida como “una señal positiva”, y sin dejar de recalcar que “el país no quiere retenciones”, señaló que se trataba de “un paso adelante”, y destacó la aplicación del IVA al sector agrario por tratarse de un impuesto “neutral y no discriminatorio” (LN, 04/08/90). En este marco se realizó la exposición ganadera de Palermo, en la que Menem fue ovacionado por segunda vez consecutiva. La cuestión impositiva surgió allí ya en el discurso de Solá, quien pidió explícitamente que se dejara de considerar a la carga fiscal como “confiscatoria”.

Alchourón, sin embargo, no se limitó a prescindir del uso del término. Por el contrario, reafirmó enfáticamente la aprobación de la asociación hacia la política económica del gobierno: “este agosto de 1990 tiene un sabor trascendental [...] la sociedad argentina sabe

que está viviendo un cambio profundo [...] que la puede sacar de una vez por todas de la chatura y el estancamiento, y devolverla al nivel de vida [de] las primeras décadas de este siglo”. Se trataba no sólo de una coincidencia general con los lineamientos de la política, sino con la gestión de Erman González:

Hace un año, en estas mismas circunstancias, recibimos la impresión de que se abría ante nosotros una alternativa nueva [...]. Pero pese a haber comenzado la reforma estructural, el mantenimiento de los esquemas monetarios y cambiarios clásicos de nuestro país esterilizó todos los esfuerzos [...] fue en esa emergencia cuando [se] tomó la histórica decisión de dejar de lado de una vez todas las fantasías de la alquimia económica y liberar definitivamente los mercados monetarios, cambiarios y de precios, como tantas veces generaciones de dirigentes reclamaban desde esta centenaria tribuna.

Hubo de reconocer, a continuación, que “el costo del ajuste” afectaba particularmente a la rama agraria, aunque manifestó a los representantes del gobierno que “pese a que soportamos enormes dificultades pueden contar con nuestros brazos que luchan para sacar adelante a nuestro país”. Posteriormente, volvió a celebrar el inicio del proceso de privatizaciones de empresas públicas “retrógradas e inservibles, incapaces de prestar servicios a precios razonables que arrastraban a la quiebra del Estado” e instar a avanzar en otras áreas como la “flexibilización laboral”, la apertura de la economía, la reforma arancelaria, la reducción de costos de transporte terrestre y portuario, y el mejoramiento de las condiciones del crédito. Cabe destacar, por último, la expectativa que mantenía la entidad en torno a la eliminación definitiva de las retenciones. Alchourón, en este sentido, señaló que la SRA apreciaba el esfuerzo por reducir las, e hizo públicos sus deseos al respecto: “que en 1991 ese verdadero muro de Berlín del comercio exportador que fueron y son las retenciones sea demolido para siempre en la historia de la economía argentina” (A-Sep90: 6-9).

En este escenario, y confiando en su capacidad de incidir efectivamente sobre las políticas económicas del gobierno, la SRA mantuvo su defensa cerrada del rumbo general que éste adoptaba. Dicha defensa, a esta altura, era planteada casi en términos de una cruzada, en la que el papel de los infieles lo jugaban los capitales industriales y, en la medida en que lograba articular su defensa a través de sus organizaciones sindicales, la clase obrera:

Se escuchan aún a diario expresiones y amenazas de acciones gremiales para impedir la necesaria readecuación a las circunstancias. Se crean incluso nuevos agrupamientos sindicales y empresarios que alegan la defensa de la producción y de lo que califican como intereses nacionales [...]. Son los mismos que piden paritarias libres sin intervención del Estado, pero que cuando con ello no alcanza reclaman el “salariazó” a costa de quien sea, así

sea el país. Son los que reclaman que se liberen los mercados, pero que al dólar se le fije un valor “adecuado” para su comercio o industria, son los que quieren actividad privada pero sin riesgos y con tarifas garantizadas por el Estado; son, en fin, los de siempre [...]. Nuestra actitud no debe ser expectante y menos aún contemplativa. Debemos seguir de pie y ponernos al frente de la batalla que se inicia (A-Dic90: 6).

Dicha batalla se extendería hasta fragmentar la precaria alianza con que las organizaciones agrarias habían enfrentado al gobierno de Alfonsín durante los últimos años, y que había entrado en stand-by desde el cambio de gobierno. En efecto, la sobrevaluación de la moneda que volvió a imponerse hacia el segundo semestre de 1990 y comenzó a desviar una enorme fracción de renta de la tierra de los bolsillos de la clase terrateniente, sumada al estado general de endeudamiento del sector a tasas de interés positivas (principalmente con bancos, y en menor medida con semilleras y exportadoras) con un alto nivel de morosidad, así como el aumento del precio de los peajes, aceleraban el proceso de liquidación de los capitales agrarios de menor tamaño. Frente a esta situación, las restantes entidades, con la FAA a la cabeza, darían curso a un intenso ciclo de protestas.

Mientras tanto, y a pesar de haber avanzado en la implementación del programa neoliberal, el gobierno menemista se había mostrado impotente para contener una crisis que había hundido ya dos equipos económicos: hacia enero de 1991, la apreciación cambiaria se había resuelto nuevamente en una devaluación violenta. A ello se sumaban los coletazos del “Swiftgate”, desatado ese mismo mes: el embajador estadounidense había respaldado una denuncia del frigorífico Swift, desde donde afirmaban haber recibido propuestas de agilizar trámites de radicación de capital mediante sobornos a funcionarios públicos. La situación fue demasiado para Erman González, que renunció dos meses después. Su lugar sería asumido por Domingo Cavallo.

Durante este período, la SRA no logró articular un espacio de peso que pudiera convertirse en soporte del gobierno e influir en sus políticas. Mientras la UIA intentaba resolver sus disputas internas, que sólo se zanjarían mediante una elección a fines de 1990, la SRA condenaba públicamente el accionar de numerosos capitalistas que la integraban: a pesar de que estos seguían manifestando su acuerdo con la dirección que tomaba la política económica, no dejaban de intentar negociar con el gobierno para obtener concesiones de algún tipo. En este sentido, y más allá de coincidir con ellos en el apoyo a las medidas que tomaba el gobierno, la SRA encabezó la fracción más liberal de las organizaciones, al pujar por la liquidación lisa y llana, si a eso había que llegar, de los capitales industriales que se sostenían sobre la base de la apropiación de fracciones de renta de la tierra. En este frente, sus únicos acompañantes de peso provenían de los capitalistas agroindustriales (nucleados, en buena parte, en la COPAL, que lideraba uno de los frentes internos de la UIA) y bancarios (representado por ABRA y ADEBA). La confluencia de estos en el G-8, sin

embargo, se extendía hasta abarcar a los capitales industriales que se veían directamente afectados por la dirección que tomaba la acumulación y pugnaban por morigerar determinados aspectos de la avanzada neoliberal, lo que neutralizaba a dicho espacio para la adopción de una línea política más determinada que las vagas declaraciones de apoyo que de tanto en tanto emitían. La inclusión de los capitales bancarios en el G-8, con quienes la SRA mantenía un enfrentamiento en torno al nivel de las tasas de interés, que consideraban excesivo, impedía también a dicha organización utilizar dicho espacio para avanzar con tales reivindicaciones. Pero tampoco podía acercarse, por otra parte, a las restantes organizaciones agrarias, que al enfrentarse a un proceso de liquidación de las unidades de producción de menor escala tendían a confrontar con el gobierno. Así, la SRA se veía incapacitada para formar parte de una alianza de mayor escala, o al menos de una que fuera operativa.

5.2. La consolidación de la CD

Como hemos visto, la CD había cerrado filas en torno al gobierno menemista desde el primer momento, a pesar de que las líneas generales que tomaría la política económica no estaban aún completamente definidas. Esta estrategia daría lugar a un enfrentamiento en el seno de la comisión. No por defender un programa económico liberal, por supuesto, sino más bien por el apoyo irrestricto al gobierno que lo ponía en marcha, por añadidura de origen peronista. En los editoriales de Anales aparecen trazas de esta disputa:

La participación sensata requiere superar el temor a “quedar pegados” al eventual fracaso de funcionarios o gobiernos a cuyos planes o acciones, por coincidir aunque fuera sólo circunstancialmente con nuestros pensamientos de siempre, adherimos en el momento en que son enunciados (A-Abr90: 5).

Por cierto, la SRA nunca dejaría de reclamar, a lo largo de todo el período neoliberal, por lo que se les aparecería como la “pata renga” del modelo: los impuestos a la producción agraria. Ya en 1990 la entidad criticaría la decisión de subir el impuesto al inmobiliario rural (A-Jun90: 5-6), mientras que en la Exposición de Palermo de ese año, Alchourón insistiría sobre la cuestión impositiva (A-Ago90: 7). El eje de su discurso, sin embargo, estaría constituido por la defensa de la política económica del gobierno, y la ampliación de las críticas hacia las administraciones provinciales y municipales, que no parecían darse prisa en reducir el gasto fiscal.

La estrategia seguida por la asociación respecto del gobierno nacional acabó tensando demasiado la cuerda, que se cortó finalmente en la Asamblea Ordinaria de ese año, en la que finalizaba el mandato de Alchourón. Allí, violentando la tradición, se

presentaron dos listas a las elecciones, hecho que sólo había sucedido previamente en tres oportunidades. Como ya señalamos, el funcionamiento habitual consiste en la presentación de una lista única a los socios, consensuada en el interior de la CD. Esta vez, sin embargo, la dirigencia fue incapaz de conciliar posiciones.

Una de las listas presentadas expresaba la necesidad de mantener la distancia respecto del gobierno nacional, ante la posibilidad de “quedar pegados” en el caso de que el programa económico no se desarrollara exitosamente, manteniendo así el estilo tradicional de la entidad de confrontar públicamente con los gobiernos democráticos. Sus integrantes repudiaban, por otra parte, la autonomía que había adquirido Alchourón y su séquito. El artífice de esta lista y candidato a vicepresidente era Carlos Gómez Alzaga. Propietario, junto con otros miembros de la familia, de unas 60.000 has de tierra; bisnieto de Indalesio Gómez, quien fuera ministro del Interior de Roque Sáenz Peña; vinculado a las FF.AA. durante la presidencia de Onganía, y administrador de la casa de consignaciones Alzaga Unzué, su linaje se extiende a lo largo de generaciones y se entremezcla con el de esta otra familia no menos aristocrática. A la cabeza de la lista se hallaba Horacio Gutiérrez, presidente de la Corporación de Aberdeen Angus y de la propia SRA entre los años 1980 y 1984, y vinculado con la UCeDé. Apadrinada por el presidente saliente, la otra lista llevaba a la cabeza a Eduardo de Zavalía, propietario de un pequeño campo en Azul destinado a la producción de leche, actividad que compartía con Alchourón, y ex director de la Asociación de Criadores de Holando Argentina, mientras que para la vicepresidencia se proponía a Enrique Crotto (P/12, 05/08/90; 13/07/08). Estos encarnaban la línea renovadora, que buscaba accionar menos mediante la confrontación que a través del trato conciliador y el contacto personal con los miembros del gobierno (Heredia, 2003). Tras una áspera campaña, en la que hechos como la denuncia de la oposición por captación irregular de votos ante la Inspección General de Justicia alcanzaron las páginas de los diarios, el oficialismo representado por de Zavalía se impuso por 2467 votos contra 1269 (LN, 16 y 28/09/90). Se consolidaba así no sólo la hegemonía de la fracción renovadora en el interior de la CD, sino también su estilo dirigenal, y con él, el acercamiento de la entidad al gobierno peronista.

Se trataba, como puede apreciarse, de diferencias en cuanto a la estrategia política a desarrollar ante el nuevo escenario político y económico, que se sustentaban asimismo en el pedigrí de los candidatos: mientras que la línea Gutiérrez/Gómez Alzaga nucleaba a los individuos de más extenso linaje en el interior de la SRA, el grupo de Alchourón, que llevaba a de Zavalía a la cabeza, estaba constituido principalmente por figuras de menor ascendencia, y había accedido a la dirección de la entidad con el objetivo de lavar su imagen de cara a la transición democrática. Huelga decir, sin embargo, que no existían diferencias en cuanto a sus principios ideológicos o su inserción estructural, con la

excepción de que tanto Alchourón como de Zavalía se dedicaban no a la producción de carne, sino de leche, hasta aquí una actividad marginal respecto de la tradición en la SRA, aunque de peso creciente.⁷⁶ No obstante, cabe destacar que de Zavalía, abogado él mismo, provenía de un tradicional familia de abogados que habían desempeñado roles políticos destacados en la historia nacional desde los albores del siglo XIX.⁷⁷

Así, el oficialismo se consolidaría por un nuevo período al frente de la asociación. Poco tiempo después, el curso de la política económica neoliberal adoptaría su rumbo definitivo de la mano de la sanción de la Ley de Convertibilidad.

5.3. La SRA frente a la instauración de la Convertibilidad y el inicio de una fase de auge de la protesta agraria

La asunción de Cavallo, en marzo de 1991, despertó expectativas en las distintas fracciones de las organizaciones de capitalistas. Mientras que la UIA y las restantes organizaciones industriales lo consideraban como un economista que implementaría una política “de aliento a la producción”, la SRA se limitó a manifestar su confianza en que el nuevo ministro ratificara el rumbo económico, reclamando por su parte una mejora en el tipo de cambio, control del gasto público y eliminación de las retenciones (Viguera, 2000, pág. 132).

Y efectivamente, tras su llegada al MECON, Cavallo profundizó la orientación neoliberal de la política económica, anunciando un ajuste fiscal e impositivo y aumentando las tarifas de servicios y combustibles, así como otros impuestos, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Posteriormente, en el contexto de un paro agrario en ciernes, anunció también la virtual eliminación de las retenciones a la exportación como parte de un llamado “pacto fiscal”, que incluía otras medidas de menor trascendencia, como la oferta de una línea de créditos para la rama agraria. A pesar de que las medidas reclamadas por las cuatro entidades sobrepasaban ampliamente las que finalmente se tomaron, la eliminación de las retenciones fue festejada enormemente por la SRA: “matar al dragón de las retenciones es un objetivo que vale muchos sacrificios”, afirmó Alchourón (LN, 02/03/91).

Al mismo tiempo, Cavallo intentó además estabilizar las principales variables macroeconómicas mediante un instrumento de su propia cosecha: la sanción de la Ley de Convertibilidad, puesta en vigencia apenas a un mes de su llegada. Tras la implementación

⁷⁶ Cabe destacar, en este sentido, que este último había sido presidente y director de la Asociación de Criadores de Holando Argentino (ACHA). El incremento del peso de los ganaderos lecheros en las filas de la SRA a lo largo de las décadas previas, en este sentido, fue notada ya por Pierri (2007).

⁷⁷ Por caso, su tatarabuelo, el tucumano Salustiano Zavalía Lami (1806-1873), fue diputado, senador y posteriormente gobernador de la provincia; participó de la Coalición del Norte que enfrentó a Rosas, y se convirtió luego en un ferviente partidario de Mitre. Por otra parte, uno de sus hijos, Salustiano Zavalía Iramain (1837-1914), fue integrante de la Corte Suprema de la Nación.

de un sistema de flotación sucia, la Convertibilidad fijaba por ley una paridad de 10.000 australes (posteriormente equivalentes a 1 peso) por dólar, establecía mecanismos para sostenerla, e impedía la emisión de moneda que no tuviera un respaldo equivalente en dólares en las reservas del BCRA. Si bien el tipo de cambio implicaba una devaluación relativamente pequeña respecto de los valores entre los que se movía el austral, dicha ley daría forma al sostenimiento de una moneda sobrevaluada en torno al 100%.

La SRA recibió esta novedad de forma algo más cautelosa. En una nota en Anales, el economista que encabezaba el Instituto de Estudios Económicos de la SRA señalaba que:

La convertibilidad establecida es una de las medidas más audaces en materia de política económica en los últimos años. Es una restricción a la creación de dinero. Se basa en una relación que obliga a mantener un respaldo del 100% de la base monetaria en reservas [...]. En cuanto al tipo de cambio se presenta lo siguiente: si consideramos el valor nominal del tipo de cambio y lo ajustamos por el índice de precios al consumidor (IPC) de Argentina y mayoristas de los EE.UU., se observa que al mes de abril esta variable se encuentra por debajo en un 55% o 41,9% (según consideremos el tipo de cambio comercial o libre) con respecto al índice promedio de los años 1980/9. Si tenemos en cuenta los precios mayoristas con respecto al IPC las relaciones del mes de abril '91, se presentan en los niveles históricos más bajos.

La situación desfavorable en los precios relativos afecta significativamente al sector exportador, y particularmente al agropecuario.

Así, por una parte, la convertibilidad garantizaba por ley la imposibilidad de emitir dinero para compensar el déficit fiscal, lo que de acuerdo a la SRA constituía la fuente de todos los males económicos. Pero, por la otra, se señalaba que el tipo de cambio era desfavorable. Esto podría corregirse, se estimaba, avanzando en el proceso de reformas neoliberales:

El tipo de cambio real de la economía es uno de los principales problemas a solucionar por el Dr. Cavallo. El camino más seguro para lograrlo es una mayor apertura [...]. Simultáneamente es necesario lograr una flexibilización laboral. En caso de no optarse por este sendero, presionar a la baja los servicios y obtener un aumento de productividad puede ser una manera de evitar un mayor deterioro, pero es difícil de lograr en el corto plazo [...]. En el sector agropecuario, la reducción de la presión impositiva y la eliminación de regulaciones que actúan sobre el transporte y puertos, permitirían mejorar la situación del sector.

En conclusión:

El sector agropecuario deberá acostumbrarse a contar con un tipo de cambio real más bajo que el promedio histórico, no obstante resultaría mayor que el actual. Los ingresos del

productores pueden mejorar en la medida en que se reduzcan los costos de la estructura de comercialización, como así también la tasa de interés. La disponibilidad de la línea de crédito para financiar el capital de trabajo y las inversiones, permitirán contar con la liquidez adecuada y facilitar la reducción de costos (A-Jun91: 78-9).

Meses después, en el informe económico anual presentado a la Asamblea Ordinaria, se ponderaba la estabilidad y la pérdida de fuentes de financiamiento del gasto público que representaba la medida:

El régimen cambiario actual se diferencia del tipo de cambio fijo en que el precio de esta variable nominal está fijado por ley, y como consecuencia haría falta que el Congreso aprobara otra ley para realizar una devaluación. Esto da una mayor dosis de certidumbre en cuanto al valor futuro de la divisa, lo cual a su vez favorece la monetización de la economía y permite una caída más pronunciada de la tasa de interés. Además, en el sistema de tipo de cambio fijo no se requiere un respaldo absoluto de la base monetaria, y por lo tanto el gobierno puede emitir dinero para solventar el gasto público [...]. En cambio, bajo la ley de Convertibilidad, no es posible esta forma de financiación de las erogaciones. Es decir que [...] el gobierno pierde distintas fuentes de financiamiento del gasto público: el impuesto inflacionario, el “señoraje” y la utilización de reservas del BCRA.

Y, nuevamente, señalaba aspectos sobre los que debería avanzarse para que el esquema general resulte sostenible. En primer lugar, se requería “una gran flexibilidad en las leyes laborales a fin de permitir un reajuste a la baja en los salarios nominales”. Por otra parte, señalaba que la modificación de la estructura de precios relativos dejaba al sector agrario en una “situación crítica”, a la que se sumaba el aumento de la presión impositiva en jurisdicciones provinciales y municipales. La solución volvía a referirse a la “convergencia de los precios internos de algunos servicios”, entre los que destacaban los del sector financiero y comercial, particularmente transportes internos y puertos (M91: 14-5). Este aspecto fue retomado por de Zavalía, quien lo reclamó públicamente al gobierno en la inauguración de la exposición de Palermo:

No puede ocultarse a nadie que las circunstancias en que debió instaurarse la Convertibilidad han llevado a un esquema de precios relativos desfavorable para los sectores exportadores y para el agro en particular. Comprendemos la dificultad de su corrección por la vía cambiaria, toda vez que tenemos conciencia de que eso es imposible dentro del camino elegido, pero este tema debe ser tenido muy presente al definir las políticas que afectan al sector. Porque hay que tener muy en claro que para competir en los mercados externos, deben tomarse rápidamente todas las medidas necesarias para reducir los costos internos y llevarlos a niveles internacionales (A-Sep91: 14).

Tras ello, volvió a enumerar las medidas exigidas: privatización de los puertos, flexibilización laboral, baja de impuestos a la producción agraria y de las tarifas de los servicios públicos, así como de las tasas de interés.

Así, y a pesar de detentar la representación de la clase terrateniente, la SRA se aferraría al régimen cambiario de la Convertibilidad durante toda su vigencia. Sobre esa base, el énfasis comenzó a ser puesto en la necesidad de incrementar la productividad del trabajo mediante la reducción de costos, al tiempo que rechazaría explícitamente la posibilidad de una devaluación:

El cambio en el sistema jurídico de la economía del país ya ha sido dispuesto y ordenado en todos los ámbitos. La legislación en materias monetaria, cambiaria, impositiva, arancelaria, contractual y laboral, entre otras, fue modificada sustancialmente en muchos y fundamentales aspectos. Asimismo se redujeron la intervención y los controles del Estado en diversos órdenes de la vida productiva, mediante privatizaciones y desregulaciones que continuarán ocurriendo conforme a los anuncios del gobierno.

Las medidas referidas posibilitaron la contención de la inflación, a mi juicio el hecho más trascendental para promover el crecimiento económico nacional. La importancia que adjudico a este auténtico acontecimiento encuentra su razón de ser en la persistencia con que el flagelo inflacionario destruyó la riqueza e impidió el desarrollo del país durante varias décadas [...]. Esa pesadilla parece haber terminado [...].

Este es entonces el turno de los productores [...]. En tanto vivamos en un estado de derecho, con la plenitud de sus libertades y respecto por la propiedad privada, no cabe esperar y menos pretender que sea el Estado el que solucione la falta de rentabilidad que hoy padecen nuestras empresas [...]. Para poder competir con la producción nacional en el campo internacional y lograr mayor rentabilidad, incluso en la comercialización local, la solución debe inexorablemente pasar por el ajuste sobre la base de la reducción de costos. Ello debe ser así, porque ya tenemos sobradas experiencias de devaluaciones y sabemos que junto con el mayor precio que por esa vía lograron muchas veces nuestros productos, a poco andar, en la misma o mayor proporción aumentaron los gastos necesarios para obtenerlos. Las propias experiencias, por lo tanto, deberían impulsarnos a preservar la transformación, a cuidar la estabilidad y la paridad cambiaria ahora lograda (A-Dic91: 5-6).

El acuerdo con la Ley de Convertibilidad, en este sentido, no hizo sino reafirmar, en el análisis de la SRA, la necesidad de avanzar en el programa liberal. Y particularmente, de avanzar en las privatizaciones, bajo el supuesto de que la gestión de estas distintas producciones por capitales privados permitiría, por el mero hecho de este traspaso, reducir los costos de producción. Por caso, en el discurso de inauguración de la Exposición Ganadera de ese año, de Zavalía refirió la importancia de avanzar en la privatización del capital aplicado a la distribución y comercialización de la energía eléctrica, que no

sucumbiría ante este proceso hasta mediados de 1992: “perjudican seriamente al sector las desmedidas tarifas eléctricas [...]. Este insumo vital aumenta nuestros costos, el precio de los bienes que adquirimos, los gastos de comercialización, castigando a los productores de mayor grado de tecnificación y desalentando el progreso de todos” (A-Ago91: 14). De igual modo, la SRA presionaría durante el resto de la década para que el gobierno avance sobre otros aspectos que consideraba igualmente cruciales. En primer lugar, la llamada “flexibilización laboral”, junto con la reducción de los “costos del trabajo”, esto es, los llamados “aportes patronales”. Asimismo, la reducción de las tasas impositivas en general, pero particularmente las que gravaban la producción agraria. Finalmente, el elevado nivel de las tasas de interés pagadas por los créditos (A-Jul92: 5-6, 8-12).

También una privatización de otro tipo fue particularmente celebrada por la entidad: la del predio de Palermo. En enero de 1992, mediante un decreto ley, el gobierno menemista enajenó la propiedad, sellando definitivamente su alianza con la asociación. A pesar de los festejos por lo que fue considerado como la concreción de una “reivindicación histórica”, la transacción acarrearía inúmeros problemas a la organización desde el mismo momento en que fue anunciada, como mostramos en el segundo anexo de esta tesis.

Mientras tanto, los precios de las mercancías agrarias permanecían estancados, estrangulando la producción, al tiempo que la sobrevaluación de la moneda arrancaba a la clase terrateniente el 80% de la renta de la tierra, cuya magnitud se hallaba en proceso de contracción. La SRA no podía más que reconocer la situación, e insistía en que el programa económico aplicado había resultado desfavorable para el agro, aunque no tanto con el fin de cuestionarlo como con el de hacerlo avanzar de forma tal que compense dichos efectos negativos. Por otra parte, comenzaba a enfatizar con cada vez mayor fuerza el perjuicio ocasionado por las políticas agrarias puestas en marcha por los países importadores de mercancías agrarias argentinas:

Bajo los lineamientos del actual programa económico, diversos factores se han conjugado para determinar un fuerte desequilibrio de precios relativos [...]. En el sector agropecuario se percibe particularmente este desequilibrio, en especial en aquellas actividades cuyo destino principal son los mercados externos [...]. La ardua realidad de todos los días muestra un cuadro sumamente duro, en el que muchos productores no encuentran los medios para nivelar sus cuentas [...]. Los precios que reciben nuestros productores no resultan de costos reales o de la eficiencia productiva de la competencia. Los fijan los caprichos de las tesorerías de los países desarrollados y sus guerras comerciales. Frente a ese contexto negativo de precios en esta etapa de cambio estructural, se define también un cuadro donde los insumos se ven afectados por las distorsiones que aún subsisten en la economía interna: altas tasas de interés, el costo laboral, el elevado peso de los servicios [...], la falta de infraestructura de transportes, los costosos mecanismos y elevados márgenes de la

comercialización y la protección sobre algunos bienes necesarios para la producción (M92: 201-2).⁷⁸

En este contexto, la SRA no dejaría, por un lado, de expresar su apoyo al programa económico puesto en marcha, y por el otro, de precisar algunos de los aspectos específicos sobre los cuales creía necesario actuar, que repetiría posteriormente ante Menem en la exposición de Palermo:

Seguramente como nunca su situación [la de los productores, NPT] fue tan crítica [...] Es oportuno recordar que la SRA brindó su franco apoyo al programa económico [...] en razón de la manifiesta adecuación que tenía con las medidas que nuestra entidad venía reclamando a sucesivos gobiernos [...]. Va de suyo entonces que la SRA sigue identificada con ese programa [...]. Pero obviamente la ejecución y la puesta en práctica de los programas no siempre se corresponde ni se adecúa con ellos Y así como la Argentina padece en el ámbito del comercio internacional la competencia desleal e intervencionista [...] así también en lo interno los productores agropecuarios soportamos el peso de disposiciones gubernamentales que en nada se compadecen con los planes enunciados. Lo ocurrido con el IVA, impuesto que se implanta con el atributo de neutro para la producción por las sucesivas transferencias hacia el consumo final y que por eso aceptó nuestra entidad, dado que era el menos dañino de los impuestos [...] en razón de los cambios producidos se convirtió en una nueva retención y a la postre en un tributo a las ventas ante su irrecuperabilidad en la práctica [...]. [Hay] provincias y municipios que no han participado del cambio e incluso han incrementado [...] su gasto, para lo que también aumentaron a moneda constante las contribuciones inmobiliarias y tasas viales [...]. Ni que hablar de la falta de créditos [...]. Los empresarios debemos valerlos como único crédito posible y ágil de los descubiertos bancarios, con tasas que rondan el 60% anual; en tanto, si circunstancialmente disponemos de algún excedente, sólo se nos reconoce un 12% por igual período. También es motivo de profunda preocupación la falta de eficacia del Estado en la adopción y ejecución de medidas antidumping (A-Sep92: 5-6).

Todo esto sin dejar de establecer, como lo hizo de Zavalía en su discurso en la Exposición Ganadera, que “finalmente, el balance es positivo” (A-Sep92: 11).

El reclamo formulado, ciertamente, tenía también como destinatario a los propios socios de la entidad, que seguían cuestionando la posición política que ésta había adoptado: “apoyar la idea o proyecto general no signific[ca] «quedar pegado» y perder la libertad de señalar, criticar o incluso bregar con firmeza contra las realizaciones gubernamentales erróneas como lo vienen haciendo las entidades del sector en su conjunto” (A-Sep92: 6).

⁷⁸ Se trataba, en realidad, de un reclamo que la SRA había venido enarbolando desde décadas atrás, como señala Sidicaro (1982, pág. 66), y respecto del cual procuraba accionar políticamente. A diferencia de años anteriores, sin embargo, empezaría a cobrar mayor relevancia en los análisis que la entidad realizaba sobre la coyuntura.

En efecto, la relación con las restantes organizaciones agrarias mostraba, en este punto, la dinámica que mantendría durante el resto del período. Por una parte, el accionar conjunto prácticamente no se interrumpiría, ya que mantendrían la coordinación técnica para la elaboración de propuestas de políticas económicas sobre la base de algunas coincidencias básicas. El documento que las cuatro asociaciones entregarían a Cavallo en septiembre expresa estas coincidencias en una serie de puntos: financiamiento a costos y plazos equivalentes a los que rigen el mercado mundial, adecuación de la legislación laboral “a efectos de posibilitar la reducción de costos laborales sin afectar el ingreso de bolsillo de los asalariados” (esto es, reducción del salario vía la contracción de los llamados “aportes patronales”), eliminación de los impuestos que recaen específicamente sobre la producción agraria y de los que afectan la importación de medios de producción para dicha rama, y políticas de defensa frente a la competencia desleal, entre otros (M93: 89-91).

Por la otra, sin embargo, la SRA acabaría enfrentándose a estas organizaciones toda vez que avanzaran un paso más allá de la mera sugerencia y se enfrentaran abiertamente al gobierno mediante la realización de un paro u otra forma de protesta. Ya en marzo de 1991, la FAA había buscado sumar a CONINAGRO y la CRA a un primer paro agrario masivo. Rápido de reflejos, el gobierno logró desactivar la participación de esta última entidad mediante el anuncio de un llamado “pacto fiscal” que daba cumplimiento a la promesa de campaña que satisfacía un deseo largamente añorado por todas las entidades: la virtual eliminación de las retenciones a la exportación.⁷⁹ De forma complementaria, se incrementaba ligeramente la magnitud del crédito destinado al sector para abarcar a otros 3000 productores, siempre que no estuvieran ya endeudados. A pesar de que la CRA inicialmente había rechazado las medidas por considerarlas insuficientes y anunciado su participación en el paro, días antes del mismo aceptó una pequeña modificación de las medidas anunciadas y suspendió su participación en la protesta, aunque no pudo evitar que una de sus federaciones, la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa se uniera a la medida (CL, 18/3/91).⁸⁰ La SRA, por su parte, manifestó que las medidas tomadas coincidían sustancialmente con las que había propuesto: “encuentro que hay una razonable aceptación del Plan de Salvataje Agropecuario que la SRA propusiera en los puntos contenidos en este acuerdo. Por lo tanto, y por el momento, me doy por satisfecho”, sostuvo de Zavalía tras los anuncios (17/03/91). Para la FAA, en cambio, que exigía medidas más sustantivas, como el establecimiento de precios sostén, no era suficiente. Junto a CONINAGRO, por lo tanto, decidieron seguir adelante con el paro (CL, 18/3/91). Éste tuvo eje en la región pampeana, en la que se desarrolló con actos concentrados

⁷⁹ La eliminación del tributo no fue completa, a pesar de los anuncios, ya que la exportación de soja siguió tributando un 3,5% a lo largo de todo este período.

⁸⁰ Cabe destacar que la producción de algodón, principal actividad de los asociados a esta entidad, no pagaba retenciones.

principalmente en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, y en menor medida en Córdoba y Entre Ríos. (CL, 19/3/91).

La SRA rechazó inmediatamente la acción. Tras reconocer que la situación en la rama agraria se había tornado crítica, cuestionó a las dirigencias de las otras entidades: “por el hecho de estar muy mal nuestro sector y sabiendo que los otros también lo están [...] ¿cabe pensar en camionetazos, obstrucción de calles y rutas y cese de suministros de alimentos [...]?”. Y reafirmó, en contrario, su vocación de diálogo: “en la opción entre la protesta [...] o el diálogo con propuesta casi siempre se optó por la segunda [...]. Por graves que sean las crisis [...] no justificarán que los dirigentes dejen de lado los principios institucionales y las conductas sociales básicas” (A-Abr91:7).

En octubre del siguiente año, la FAA resolvería en su 80º Congreso Anual realizar un nuevo paro comercial con actos y movilizaciones y convocar a las restantes organizaciones, que prefirieron esperar los resultados de una nueva reunión con el gobierno. Allí les fue anunciada una ley de devolución de impuestos indirectos por la exportación de productos primarios, así como el establecimiento de aranceles compensatorios por las importaciones de productos lácteos y una disminución de 2 puntos del IVA para la producción de granos y algunos puntos más para la de carne. Mientras que la SRA expresó su satisfacción con los anuncios, CONINAGRO y la CRA los consideraron insuficientes y, en consecuencia, se plegaron al paro dispuesto por la FAA para el 2 y 3 de noviembre (LN, 19 y 23/10/92). La medida tuvo un éxito algo menor a la anterior, en parte porque CRA y CONINAGRO sólo apoyaron un paro pasivo.

La SRA volvió a expresar públicamente su descontento ante esta acción. El editorial de la publicación de Anales que siguió al paro ofrece una síntesis de la posición que adoptaría la entidad durante casi toda la década, y que se resume en la búsqueda de obtener beneficios mediante la negociación directa con el gobierno menemista y la consecuente condena de las distintas formas de protesta que realizarían las restantes organizaciones, a las que además procuraría dictarles su propia agenda:

Tanto CONINAGRO y CRA como FAA [...] resolvieron y realizaron en conjunto un paro [...] para expresar su protesta ante el gobierno. La SRA no compartió dicha decisión, y en cambio prosiguió sin interrupciones su diálogo permanente con las autoridades en procura de nuevas medidas y definiciones en beneficio de los productores. Varias de ellas logró en esos días [...], como la supresión del componente impositivo en el gasoil [y] los reintegros de exportaciones [...].

Con la generalización de los sistemas republicanos, en la medida en que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de peticionar [...] a las autoridades y de manifestar sus ideas libremente [...], la decisión del paro me parece poco adecuada y eficiente [...]. No debemos

acudir a medidas de fuerza que generalmente al adoptarlas se las suele confundir con la violencia.

Tranqueras adentro la mayoría de los empresarios que cultivan la tierra saben cómo lograr los mejores resultados [...]. Ahora, para defender[los], deben también esforzarse a fin de reducir los costos del transporte y la comercialización. Sin embargo, por lo común no participan personalmente, por ejemplo, en la cada día más necesaria y permanente lograr la reducción del gasto público y con él la de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales (A-Dic92: 6-7).

De esta forma, mientras la SRA se mantendría firme en su posición de apoyar al gobierno aun en momentos de crisis sectorial, las restantes entidades repetirían sus acciones de protesta, tensando cada vez más la relación con aquélla:

En los últimos años los problemas se agudizaron. Es que frente al incremento de muchos costos, en algunos casos, los precios de venta de los productos ni siquiera se han mantenido; por el contrario, registran importantes reducciones [...]. Algunos dirigentes y representantes de los productores y de los demás afectados suelen perder la serenidad junto a quienes estiman como sus “bases”. Entonces, con el objeto de satisfacerlas aunque más no sea mediante quejas, critican y denuncian indiscriminadamente programas y acciones de gobierno, con duras calificaciones [y] sin propuestas [...]. Sólo cuando se logre la serenidad, la reflexión conjunta podrá conducir al equilibrio y a la razón [...]. Sin embargo el consenso se ve a menudo imposibilitado porque muchos reclamen el cambio integral del programa económico, sin más aclaraciones, como si hubiera que atribuirle los males que padecemos. Y es claro que con tal pretensión somos muchos los que no coincidimos. Es que precisamente ha sido con este plan que, después de varias décadas de frustraciones, hemos logrado de momento terminar con la inflación, contar de nuevo con una moneda valorizada y aceptada en el mundo, la adecuada desregulación de la actividad privada, la privatización de los complejos empresariales que administraba el Estado y la paulatina recuperación del equilibrio fiscal mediante la disminución de la evasión [...]. Falta mucho entonces para que la transformación vuelva a nuestra patria a los carriles de la prosperidad, pero no desconozcamos aquello que [...] se ha logrado (A-Mar93: 6-7).

5.4. De la euforia a la decepción: reevaluación de la política económica y giro hacia una posición de apoyo crítico

Como señala Viguera, recién hacia 1993, y tras un nuevo recambio de autoridades, la UIA se avino a apoyar explícitamente el “modelo”, poniendo así en marcha la estrategia de “acordar para negociar mejor”. Esto se debía, en parte, a que el equipo económico del gobierno se había mostrado inflexible frente a aquéllos que preferían la confrontación por sobre la negociación. Pero también a que el esquema económico había demostrado ser

hasta ese momento sostenible: el PBI había vuelto a crecer y otros indicadores económicos también mostraban una recuperación, lo que se sumaba al control sobre la inflación (a pesar del llamado “rebrote inflacionario” de 1992). Paralelamente, el buen resultado que el PJ obtendría en las elecciones legislativas de 1993, que le permitió sostener la mayoría en el Congreso, fue leído como un respaldo de la población hacia su gestión.

En este contexto, las críticas de índole general provenientes de los capitalistas nucleados en la UIA tendieron a desaparecer, y los reclamos a focalizarse en los problemas que afectaban, de manera individual, a las distintas ramas de la producción. Esto permitió la formación de una suerte de “coalición de la Convertibilidad”, basada en una combinación de apoyo, aceptación o simplemente tolerancia de la política económica en su conjunto. Expresión de esto fue la revitalización del G-8, que a partir de 1993 comenzó a tener una presencia más activa en la escena política. El grupo concentró su accionar en dos líneas principales: por un lado, la defensa del “modelo” frente a las críticas de la oposición o del propio partido gobernante; por el otro, en la demanda de su profundización, que descansaría en tres ejes primordiales: flexibilización laboral, reforma del sistema previsional y ajuste fiscal, particularmente en las administraciones locales. Ciertamente, otros aspectos de mayor importancia quedarían afuera del radio de acción del G-8, como la apertura económica, la política industrial y el tipo de cambio, en torno a los cuales las distintas entidades que lo conformaban seguían presentando posiciones diferentes. Pero si durante los primeros años del gobierno menemista dichas diferencias habían pesado más que las coincidencias generales, ahora la cuestión comenzaba a invertirse (Viguera, 2000, págs. 183-4).

En la rama agraria, no obstante, el escenario económico seguía sin ser favorable. En la región pampeana, la superficie sembrada continuaba sin poder superar la marca de 1990, de por sí menor a registros obtenidos durante el primer lustro de la década previa; al mismo tiempo, la renta de la tierra arrancada a la clase terrateniente alcanzaba ya el 80% del total. A diferencia de la UIA, sin embargo, la SRA no abandonó en ningún momento el aval a la política del gobierno, aval que amplificaba con la reaparición en escena del G-8. Pero tanto las críticas a aspectos puntuales de la política económica como los reclamos de medidas compensatorias adquirieron cada vez mayor fuerza.

Ya a principios de 1993, tras reiterar su apoyo general al programa económico y reconocer una mejora en los principales indicadores, señalaba en un editorial que la situación en la rama agraria seguía sin mejorar en lo sustancial: “la situación emergente es grave para el agro. Las cuentas de la gran mayoría de productores no cierran, el endeudamiento es creciente y se ve agravado por el alto nivel de las tasas de interés” (A-Mar93: 11). Sobre esta base, insistía en la necesidad de aplicar una serie de medidas con efecto en esta rama, consistentes en la eliminación o reducción de impuestos, la

desregulación del comercio de carnes, la eliminación de la protección arancelaria que recae sobre el transporte terrestre, y el freno de las importaciones a precios de dumping. Inmediatamente, sin embargo, reconocía que a pesar de la aplicación de estas medidas, un gran número de capitalistas y/o terratenientes agrarios se verá arrasado por la competencia al no poder acompañar la expansión de la escala mínima de producción:

Algunos productores podrán solucionar su situación con estas medidas, pero otros aun así no lograrán competir. Ellos deberán cuestionarse seriamente su estructura, examinar si el tamaño de sus empresas, el tipo de producción que realizan, la cantidad de personal que emplean, si su equipamiento y capital de giro son los adecuados y qué posibilidades concretas existen para superar las carencias.

No obstante, como señalamos, la SRA mantendría su apoyo general a la política económica, condenando a quienes exigían cambiarla de raíz y presionando en las áreas en las que coincidía con los restantes miembros del G-8:

En definitiva la Sociedad Rural piensa que de nada sirve reclamar medidas que signifiquen hacer fracasar un Plan Económico que ha tenido grandes resultados y que es apto para el éxito final [...]. Luchemos todos juntos con honestidad, sinceridad y valentía para construir una Argentina nueva [...]. Necesitamos la reforma del sistema jubilatorio, porque la reclama el futuro de nuestros jóvenes [...] y porque puede convertirse en la primera fuente de ahorro genuina en nuestra patria. Debemos flexibilizar el sistema laboral, porque son costos que hoy no podemos soportar frente a la necesidad de competir. No debemos crear nuevas regulaciones sino terminar de eliminar las que restan.

Restaba ofrecer una explicación de por qué, en un contexto en que la acumulación se expandía, la rama agraria se veía particularmente afectada. La caída de los precios de las mercancías agrarias era, por supuesto, la primera explicación esbozada. Pero en una nota publicada en ese mismo número, de Zavalía comenzaría a señalar también, tíbiamente, la existencia de “desvíos” respecto de los lineamientos originalmente planteados:

Es imposible pensar que en un proceso de este tipo no pueden detectarse desviaciones. Las más marcadas son la protección de la industria automotriz, [y] ciertas regulaciones que subsisten, especialmente [... en el mercado de carnes [...]. Preocupan las secuelas de una estructura impositiva con fuertes retenciones que desnaturalizan la neutralidad del IVA, con altos impuestos al capital del agro a través de lo que llamamos la “triple imposición” (activos-inmobiliario-municipio), con impuestos absurdos como ingresos brutos y sellos (A-Mar93: 9-10).

A esto se agregaba, por supuesto, los reclamos usuales, reiterados en un editorial de mediados de 1993:

El gasto público provincial y municipal es todavía alarmante. El “costo argentino” que se manifiesta a través de salarios, precios de servicios y tarifas muy altas para la productividad de la economía de nuestro país, si bien no son una desviación propiamente dicha [...] restan competitividad a aquel sector cuya única alternativa de crecimiento es exportar, como ocurre en el agro.

Y recordaba, una vez más, la estrategia de la entidad: “la SRA mantiene una lucha permanente en cada uno de estos frentes y aprovecha todas las oportunidades para plantearseles a las autoridades”.

Con este diagnóstico, la organización incrementaría la presión sobre el gobierno menemista para corregir estos “desvíos”:

El refrán “del dicho al hecho hay un largo trecho” [...] es enunciado generalmente para señalar una inconsecuencia o falta de cumplimiento a la palabra empeñada [...]. Si lo recordamos aquí es porque desde hace unos meses somos cada día más los productores agropecuarios que, ante la demora en implementarse las medidas anunciadas por el gobierno, hemos vuelto a valernos de aquella sentencia [...]. Están frescas en la memoria las palabras del Presidente de la Nación, el 1º de mayo pasado, ante la Asamblea Legislativa, cuando mencionó un conjunto de disposiciones que se adoptarían para mejorar la crítica situación del productor agropecuario. Entre ellas recordamos, por su particular significación, la supresión del impuesto a los activos, la eliminación de aranceles y tasas [...] para la importación de camiones, la simplificación de liquidaciones y declaraciones impositivas, la posible reducción mediante el acuerdo con las provincias de los impuestos inmobiliarios, tasas viales y la eliminación del de sellos, la reducción de retenciones por IVA y créditos para alentar la reactivación productiva [...]. A casi dos meses hoy del recordado anuncio [...] no se han producido los cambios entonces anunciados [...]. Es así que, sin mengua de la seriedad y mejor propósito del Presidente de la Nación al disponer las medidas referidas, lo cierto es que el tiempo –que se agotó para el campo- sigue transcurriendo y aquellas no se efectivizan [...]. La orientación económica del Poder Ejecutivo y la estructura de su plan son correctas. Por ello se las ha apoyado desde el primer momento [...]. Pero, en algunos aspectos, se han desvirtuado muchas veces en su implementación y faltan medidas complementarias y específicas para el sector agropecuario [...] (A-Jun93: 6-7).

Consecuente con su estrategia, la SRA buscaría entonces fortalecer los canales de diálogo con el gobierno mediante la creación de un ámbito específicamente agrario, legitimado por la participación de las restantes entidades. Se trataba del Consejo para la Reconversión y el Desarrollo Agropecuario, presidido por el Presidente de la Nación, con la vicepresidencia del Ministro de Economía, y la vicepresidencia ejecutiva del Secretario de Agricultura. Dicho Consejo se complementarían con los presidentes de las Comisiones de Agricultura de las Cámaras de Senadores y Diputados, de AACREA y de las cuatro

entidades rurales, y tendría el propósito de “agilizar y colaborar en la urgente y correcta instrumentación de las medidas enunciadas en el Plan de Crecimiento 1993-1995 y proponer todas las complementarias para la recuperación y reconversión del sector agropecuario”. En síntesis, para la SRA se trataba del establecimiento de “un sistema de comunicación ágil y efectivo entre productores y funcionarios para la implementación de las disposiciones necesarias y el seguimiento de los trámites, que asegure [...] la eficiencia frente a las tradicionales barreras burocráticas (A-Jun93: 6-7).

Así, ante la evidencia de que la política económica no alcanzaba los resultados esperados en el sector agrario, la respuesta de la asociación fue incrementar la presión sobre el gobierno y demandar la institucionalización de un canal de diálogo mediante el cual tuvieran acceso directo a los poderes ejecutivo y legislativo, de forma tal de poder presentar sus demandas y presionar por ellas sin intermediarios. El apoyo a las políticas de achicamiento estatal, sin embargo, les impedían reclamar por el reemplazo de la SAGPYA por un ministerio, otro de los reclamos históricos de las entidades, con lo que la propuesta se limitaba a la creación de este espacio.

Mientras tanto, las otras entidades no limitaban su estrategia a este reclamo. Con la FAA a la cabeza, organizarían una nueva acción de protesta para el mes de julio de 1993, en el contexto de la caída en el precio de los granos y el aumento de las importaciones de pollos, cerdos y lácteos. Se trataría de un nuevo paro, acompañado ahora por marchas desde el interior a Plaza de Mayo.

Esta acción tuvo mayor trascendencia que las anteriores. En primer lugar, porque la marcha hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires le dio una mucha mayor visibilidad. Alrededor de 2000 vehículos, entre los que se contaba un buen número de tractores y camionetas, ingresaron a Plaza de Mayo por tres columnas, provenientes de distintas áreas de la región pampeana, en especial el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Al mismo tiempo, hubo muchas más movilizaciones y cortes de ruta en el interior del país, con epicentro en Santa Fe, el sur de Córdoba y Entre Ríos. En regiones extrapampeanas, se desarrollaron actos y marchas en Tucumán, Mendoza, la Patagonia y el Noreste (CL, 27/07/93). Las tres entidades habían consensuado un petitorio para presentar a la presidencia, en el que pedían nuevamente refinanciación de las deudas, mayor financiación pública y privada, menores tasas de interés, reducción impositiva, disminución de las importaciones que compiten contra algunas producciones agrarias, y compensaciones para las producciones afectadas por la caída de los precios. En los discursos, las quejas abarcaron también al tipo de cambio, aunque sin llegar a cuestionar la Convertibilidad ni pedir salir de ella (LN, 28/07/93). Por su parte, tras mantener una reunión con Cavallo, la SRA expresó su rechazo al paro (LN, 26/07/93).

Llegado este punto, no obstante, la crisis que atravesaba el sector se había vuelto particularmente aguda. Así lo señala de Zavalía en su discurso durante la Asamblea Ordinaria de 1993:

En el tema gremial nos ha tocado quizá la crisis más aguda y profunda que ha vivido nuestro sector en toda la historia. Condiciones externas e internas se han conjugado de tal forma que hacen que nuestra rentabilidad sea escasa, cuando no nula o negativa. A ello se han sumado fenómenos meteorológicos –tornados e inundaciones- que han provocado verdaderos estragos en muchas provincias del país (M93: 81).

En este marco se desarrollaría la exposición de Palermo de 1993, a la que no dejaría de concurrir el Presidente de la nación. La SRA anticipaba un recibimiento quizás no tan cálido como en años anteriores:

Es evidente que de no producirse cambios sustanciales que permitan visualizar la recuperación, no habrá ánimo para ofrecer recepciones festivas [...]. Palermo podrá mostrar una vez más el estoicismo y tesón de los hombres de campo. Pero, sin rápidas respuestas a sus justos reclamos, resultará imposible cualquier expresión de esperanza y menos de alegría (A-Jun93: 7).

Temeroso, quizás, de una recepción de ese estilo, apenas dos días antes de la inauguración el gobierno anunció la implementación parcial de algunas de las medidas que la SRA había reclamado recientemente, entre las que destacaba la rebaja (más no la suspensión demandada) de las retenciones en el IVA, la derogación del impuesto a los activos y la reducción del impuesto a las ganancias en las provincias firmantes del acuerdo, así como la reducción de aranceles a la importación de insumos, especialmente en fertilizantes, agroquímicos y semillas. Otras medidas de mayor trascendencia, se había prometido, serían puestas en marcha en el largo plazo.

Mientras tanto, sin embargo, el clima en torno al evento se había enrarecido mucho más de lo que la SRA hubiera deseado:

A pesar de ser la crisis del campo pública y reconocida por todos, la esperada respuesta gubernamental no se insinuaba y los días transcurrían sin noticias concretas. Fue entonces que comenzaron a cundir comentarios que decían expresar el generalizado malestar de los productores y a trascender afirmaciones sobre la posibilidad de que el presidente de la Nación no fuera bien recibido si concurría al acto inaugural en Palermo [...]. En ese estado, las expectativas en relación a las nuevas disposiciones gubernamentales, que permitieron al menos aliviar la crisis, se vieron sólo parcialmente cubiertas con los anuncios efectuados por el Ministro de Economía, apenas dos días antes del acto inaugural [...]. Lo cierto es que las medidas fueron tardías, a tal punto que no hubo tiempo de conocer el verdadero alcance de

muchos de los anuncios con antelación al propio día de la muestra [...]. En consecuencia, el estado de natural preocupación de los productores no se había superado y ello daba pie a la reiteración de comentarios previendo actitudes hostiles por parte del público (A-Sep93: 5).

Actitudes que, efectivamente, sobrevinieron desde las gradas, pero fueron contenidas por lo que la prensa denominó como un “operativo anti-abucheo” organizado por el gobierno, constituido por “1.300 agentes, reforzados por patrulleros y carros de asalto para proteger a los 7.000 presentes. Eso sin contar los «servicios» vestidos de civil que también ocuparon las tribunas, los «barras bravas» y público adicto especialmente invitado para sumar aplausos” (CI, 15/08/93). Así y todo, dicho operativo no logró disuadir los intentos de silbatinas, de los cuales la SRA se desentendió:

Todas aquellas previsiones agoreras quedaron totalmente desvirtuadas cuando las autoridades nacionales y el propio Presidente de la Nación hicieron su ingreso a la pista central y fueron recibidos con el mayor respeto y con cálidos aplausos por el público asistente. Después se escucharon algunos silbidos y se supo posteriormente por la prensa que ocurrieron incidentes, cuyos protagonistas fueron vinculados con sectores del quehacer político partidista. Nuestra entidad lamentó profundamente tales hechos que no estuvo a su alcance controlar y mucho menos evitar.

Es claro que la SRA no buscaba llegar tan lejos. Apenas pensaba limitarse a aprovechar la oportunidad para hacer públicos sus reclamos, cosa que efectivamente hizo de Zavalía en su discurso de inauguración, sin dejar de expresar su reconocimiento a la “política de libertad de mercados, con estabilidad, con equilibrio fiscal y abierta al mundo”, pero señalando que “la evolución de las variables económicas provoca serios problemas al productor agropecuario”, y planteando la necesidad de reconocer que el esquema económico “ha provocado fuertes cambios en los precios relativos y generó presiones impositivas que afectaron seriamente la estructura tradicional de las empresas agropecuarias, comprometiendo su rentabilidad y aumentando su endeudamiento con un costo financiero desmedido” (A-Sep93: 9).

Pero sus pedidos hallaron poco eco. En primer lugar, el Consejo Nacional Agropecuario fue finalmente constituido, pero no exactamente como había propuesto la SRA, ya que ni el Presidente nacional, ni el Ministro de Economía, ni los legisladores serían parte del él. Como representación oficial, se contaba solamente al Secretario de la SAGPYA, a la sazón Felipe Solá, que había mantenido desde siempre una buena relación con los dirigentes de la SRA pero que, como ésta señalaba, carecía incluso “de la jerarquía funcional para hacer comparecer a los responsables de las áreas a las que compete el tema de los reclamos”. La organización deploraba así la escasa operatividad de la institución creada (A-Mar94: 5).

En segundo lugar, los festejos por la tibia relajación de la presión impositiva no duraron demasiado. Pocos meses después de aquéllos anuncios, el gobierno implementó un nuevo impuesto a la riqueza que compensaba dicha retracción fiscal, anuncio que la SRA recibió de muy mala manera. El editorial de junio sintetiza cabalmente el tránsito de la euforia a la decepción que la dirigencia de la SRA había experimentado durante el primer lustro menemista. Vale la pena, entonces, transcribirlo in extenso:

Fuimos muchos los que nos ilusionamos y creímos que la hora del reclamado y ansiado cambio había llegado cuando, al inaugurarse la exposición de la SRA en 1989 [...] el Presidente de la Nación expresó: “en las últimas décadas, el Estado argentino ha desestimulado sistemáticamente al hombre de campo. La desprotección del campo argentino es una de las más feroces del planeta. No es sorpresa, entonces, la miseria que estamos exportando y nuestro humillante eclipse en el concierto de los que cuentan en el mundo. Esto se terminó. A esto yo le digo basta. El futuro está en el campo”.

Este regocijo inicial se prolongó en tanto, mediante las transformaciones producidas, se desreguló la economía, se liberaron los mercados de cambios y de salarios, se eliminaron la casi totalidad de las retenciones a las exportaciones y, fundamentalmente, se fue recuperando la estabilidad y el valor de nuestra moneda.

En esas condiciones parecía que iba a ser posible recuperar la rentabilidad para nuestras empresas e incluso volver a programar su crecimiento. Pero lamentablemente aquellas esperanzas no duraron mucho. El cambio que consideramos auspicioso exigió un considerable ajuste de cuentas para subsistir. La sanción de la ley de convertibilidad encontró al sector sin reservas [...], con costos de insumos recientemente incrementados debido a la reactivación económica y con precios para los bienes producidos sustancialmente deprimidos [...]. Por otra parte, la falta de capital no pudo cubrirse con créditos, porque el mercado financiero aún no ha sido suficientemente desregulado y sus operadores, tal vez por ello, no han concretado su ajuste. Lo cierto es que los créditos que hoy dispone el campo superan casi siempre la tasa del 14% anual, o del 3% mensual en descubiertos de cuenta corriente que, con una moneda dolarizada y estable, conforman condiciones verdaderamente leoninas.

Los impuestos en el conjunto de las jurisdicciones se incrementaron a niveles intolerables para la mayoría de las empresas agropecuarias [...]. Las retenciones del IVA desnaturalizaron totalmente su proclamada neutralidad transformándose, para algunos productores, en un impuesto a las ventas.

La carga fiscal por la triple imposición a la tierra [...] en general se ha mantenido y en muchos casos ha aumentado [...]. Cuando confiamos en un alivio, por la eliminación del impuesto a los activos, se nos apabulló con el anuncio de un nuevo impuesto a la riqueza, que pareciera ser más gravoso aún que el eliminado.

Los efectos del tan comentado Pacto Fiscal no llegaron siempre a beneficiar a los contribuyentes en la magnitud prevista.

A nuestro territorio ingresan, además, productos agropecuarios en condiciones de “dumping”, que contradicen la leal competencia, sin contar los productores con medios eficaces y ágiles para evitarlo.

El universalmente conocido “costo argentino” evidenciado, entre otros factores, por los fletes, energía, comunicaciones, puertos y costo laboral, sigue constituyéndose en un obstáculo a la competitividad del sector frente a los de otros países. Es que [...] los ajustes con la consecuente reducción de gastos no se han efectuado, por el contrario ahora son mayores, y de ellos se deriva siempre una carga fiscal mayor para el campo.

Todas las circunstancias mencionadas y muchas más que sería imposible detallar en este editorial, han llegado a generar una situación insostenible para gran número de las actividades rurales. Ello es así y en ciertos casos –como ha ocurrido con la cría ganadera- [han llegado] al extremo de transformarlas en deficitarias, aun operando en condiciones de máxima eficiencia productiva.

Tras esta amarga enumeración de la forma en que el programa neoliberal los afectaba, y respecto del cual parecían comenzar a perder la fe, los hombres de la SRA se abstuvieron de condenar el nuevo paro agrario que se hallaba en ciernes. Más aún, cuidándose de referirse a la validez de los métodos, la entidad se limitó a señalar que los reclamos que las restantes organizaciones venían enarbolando se hallaban justificados: “son esas sólo algunas causas de los permanentes y justificados reclamos de las entidades agropecuarias a los diversos organismos gubernamentales”.

Por su parte, el gobierno menemista había reaccionado ante la escalada, arrojándole a la SRA los argumentos de que ella misma se había valido para justificar la liquidación masiva de los pequeños capitales agrarios. La asociación no pudo menos que reaccionar:

Las actitudes y expresiones de ciertos funcionarios resultan inauditas. Unos han dicho que no cabe otro destino, para cientos de miles de productores, que el de dejar de serlo por no alcanzar las escalas de eficiencia, como si fueran estos los causantes de la crítica situación y sin importarles todas las secuelas de frustración social, económica y familiar que de esas decisiones se derivan.

Acaso más hirientes le habían resultado las afirmaciones abiertas de que la producción agraria no ocupaba ya un rol predominante, sino que se hallaba en el mismo escalón que las restantes ramas de la economía: “otros han sostenido que lo que hay que entender es que al campo no le corresponde el papel preponderante en la economía nacional que sus representantes le atribuyen”.

Parecía, entonces, que comenzaba a abrirse una brecha en la hasta aquí fluida relación con el gobierno, en la medida en que la entidad subía el tono de sus protestas, trazaba escenarios apocalípticos, y urgía a aquél a tomar conciencia del problema:

Al tomar conciencia de tales manifestaciones [...] se advierte [...] que actúan en el gobierno hombres ignorantes de la real significación de la actividad agropecuaria o, lo que es igualmente grave, que la desprecian [...]. De mantenerse el tratamiento actual por parte de los gobiernos a nuestro sector agropecuario [...] no me parece aventurado prever que cientos de miles de productores agropecuarios no sólo tendrán que dejar de serlo, sino que nuestra producción decrecerá y llegará el día en que, con el recuerdo de haber sido el granero del mundo, seremos abastecidos por otras naciones [...]. Es hora entonces de que reaccionemos todos los productores con nuestra activa participación en apoyo de las entidades que nos representan [...]. Pero lo esencial es que en el ámbito nacional, de una vez por todas, se admita la gravedad del problema y se instrumenten en integridad las soluciones requeridas por las cuatro entidades nacionales del sector agropecuario (A-Jun94: 5-7).

Mientras tanto, comenzaba a gestarse un nuevo paro. Las cuatro asociaciones agrarias, que seguían manteniendo reuniones periódicas, habían consensuado una agenda común de reclamos para presentarle al gobierno, entre los que destacaban una acción más enérgica para impedir la importación de mercancías agrarias a precios de dumping, la aplicación de reintegros a las exportaciones, y la eliminación de la exigibilidad de la deuda previsional de los capitalistas agrarios. El punto más importante, no obstante, lo constituía la resolución del alto nivel de endeudamiento que caracterizaba a la rama, ante lo cual pedían créditos más accesibles, mejores tasas de interés, y diez años de plazo para la refinanciación de las deudas ya contraídas. La poca receptividad mostrada por el gobierno ante estos pedidos motivó que la FAA impulsara la iniciativa de realizar un paro conjunto. Primó, finalmente, la posición de esperar a la inauguración de la exposición de Palermo, en la que el gobierno anunciaría medidas tomadas unilateralmente, y reunirse dos días más tarde para analizar la situación (Azcuay Ameghino, 2009).

Y efectivamente, Menem anunció allí un conjunto de disposiciones, algunas de las cuales satisfacían los reclamos formulados. Sin embargo, las que referían al problema del endeudamiento fueron consideradas insuficientes. El 1 de agosto se realizó la reunión programada entre las entidades para determinar el curso de acción, mas la SRA no fue de la partida. De hecho, mientras los dirigentes de FAA, CRA y CONINAGRO resolvían marchar al paro y discutían su modalidad, de Zavalía mantuvo una reunión con Cavallo, y tras anunciar que se había acordado también reintegros para las exportaciones así como un fondo de garantías agropecuarias para aquéllos que no tuvieran avales suficientes para obtener créditos, comenzó a distanciarse de la protesta (op. cit.). Las restantes entidades, por su parte, anunciarían inmediatamente la realización de un paro de diez días de duración.

Este comenzó el 12 de agosto, y la región pampeana fue nuevamente el núcleo de la acción. Allí, las tres entidades formaron comités para garantizar, mediante cortes de ruta, la efectividad de la interrupción del transporte de mercancías. Se observó un acatamiento

masivo en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa, y se registraron movilizaciones y tractorazos. La acción se extendió además a las provincias del Noreste, Mendoza y zonas de la Patagonia (LN, 12-22/08/94).⁸¹

La SRA, como señalamos, acabó una vez más por abstenerse de participar en la acción. No obstante, no se privó de expresar su malestar ante Menem y sus funcionarios, cosa que comenzó por hacer de una forma relativamente amable en la exposición de Palermo, tras escuchar los anuncios. Las observaciones acerca de la coyuntura formuladas por de Zavalía mostraron allí una inversión en la ponderación: en lugar de destacar el acertado rumbo que había tomado la política económica de la gestión menemista y dejar en un segundo plano la situación que atravesaba la producción agraria, puso ésta de relieve soslayando aquélla.

Acaso para no cargar tanto las tintas sobre la gestión, de Zavalía comenzó por deplorar el panorama internacional, acentuando los efectos negativos de las políticas agrarias de los principales importadores de mercancías agrarias sobre la producción local, y lamentando el encarecimiento de los mercados externos de capitales. Pero a continuación, y tras afirmar escuetamente que “nuestro país ha encarado una transformación profunda y trascendente [...] avanzamos hacia la libertad y la apertura”, señaló inmediatamente que “pese a este proceso positivo, no debe ignorarse la cruda realidad del campo de todos los días”, y comenzó a detallar largamente los problemas: en primer lugar, destacaba que “el cambio de los precios relativos fue muy duro para el sector”; a continuación, lamentaba que “la reestructuración del sistema financiero se realiza a un ritmo demasiado lento”, ocasionándole perjuicios a la rama agraria, lo mismo que sucedía ante la falta de una reforma laboral; asimismo, indicaba que “algunos impuestos distorsivos [...] se ha[n] extendido demasiado tiempo”, mientras que el agro debía aún soportar “el costo derivado del mantenimiento de protecciones a ciertos sectores y [la] falta de austeridad en el gasto de muchas provincias y municipios”. Sobre esta base justificaba, por tanto, que la rama agraria mantuviera su reclamo, y destacaba que las cuatro entidades habían logrado presentar un plan conjunto, cuyos aspectos principales refirió largamente. El dirigente reconoció, asimismo, las medidas anunciadas minutos atrás, pero insistió también en la necesidad de disponer de mejores condiciones para la toma de créditos, sugiriendo implícitamente que a pesar de los anuncios, ese punto, que definía como “el corazón del programa” presentado, no había sido satisfecho.

La situación se le hacía tan amenazante a la SRA que comenzó a poner en cuestión por primera vez en el período, de forma explícita, su ideario liberal, al pedir condiciones de crédito más favorables que las que obtenían otras ramas de la producción. Así, de Zavalía hubo de reconocer que:

⁸¹ Un análisis más detallado del paro puede hallarse en el trabajo de Azcuy Ameghino (2009)

Esto puede ocasionar costos a la sociedad, pero no son tan grandes, ni alterarán el equilibrio de las finanzas públicas. Implican, y no tenemos temor de aceptarlo, un trato especial que se justifica plenamente para compensar las características particulares del problema que afrontamos.

Semejante pedido sería también justificado, por supuesto, por los aportes que la rama agraria podría hacer a la economía, y como forma de “reparación histórica” por los “despojos” que ésta sufrió históricamente. Es también llamativo el hecho de que, nuevamente, la SRA volvía a destacar el escenario de liquidación de capitalistas y terratenientes agrarios, sugiriendo ahora que las medidas reclamadas podrían contenerlo: “si no lo hacemos, muchos productores perfectamente rescatables perderán sus explotaciones”.

Por último, y antes de cerrar con un último párrafo en el que se condensaban muy apretadamente los aspectos positivos de la coyuntura, de Zavalía reconoció públicamente las dificultades que le ocasionaba a la dirigencia de la entidad seguir exhibiendo un alineamiento incondicional al gobierno menemista:

Frente a estas emergencias, la SRA ha extremado sus esfuerzos en crear soluciones, abrir caminos, hacer propuestas y evitar enfrentamientos, usando la imaginación y la capacidad de diálogo, hasta límites comprometedores para la dirigencia (A-Sep94: 8-10).

Más allá del pedido de condiciones más favorables de crédito, que choca de plano contra los principios de la ideología liberal en la que se ampara la entidad, el contenido de los reclamos tenía en realidad poco de novedoso. Sí lo tenía, en cambio, la reconsideración acerca de las bondades del programa económico del gobierno respecto de la rama agraria, que comenzaban a ser puestas en cuestión ya de forma manifiesta.

Pocos días más tarde, la asociación emitió un comunicado en el cual insistía con mayor firmeza en sus peticiones, retomando la escalada contra las fracciones del capital que se habían constituido en las beneficiarias más visibles de los “desvíos” del programa original. Sobre esta base, y a pesar de diferenciarse de las restantes entidades que confrontaban abiertamente, estableció la legitimidad de sus reclamos:

El agro argentino vive horas difíciles y conflictivas, en las que productores buscan insistentemente un camino que les permita desarrollar sus explotaciones en el actual marco macroeconómico, frente a limitaciones muy serias y en ciertos casos imposibles de superar sin ayuda.

Por eso las reacciones, a veces violentas, tienen origen lógico en el lógico deseo de seguir trabajando su tierra [...]. La SRA no cree en la confrontación como sistema y no ha participado por ello de medidas que pueden agravar el conflicto, pero reconoció siempre la existencia de las causas y la necesidad urgente de darles urgente solución.

No cabe duda de que la implementación del plan económico, más allá de sus indudables aciertos en el orden general [...] modificó sustancialmente las relaciones de precios en el sector rural. Ello, sumado a otros aspectos negativos del programa, dejaron [sic] en definitiva sin rentabilidad a muchísimas empresas y han puesto a un importante número de ellas en situación de quebranto [...] El Estado y las organizaciones de la producción deben volcar todos sus esfuerzos para buscar la salida, sin agravios ni infructíferas polémicas, sin posturas políticas o ideologizantes [...].

El señor Ministro de Economía ha dicho que está orgulloso del programa de la industria automotriz. Sin entrar en su análisis, nuestra reflexión es que si no se hubiera implementado ese programa ese sector hubiera quebrado. Hace pocos días se prorrogaron los beneficios para las empresas ubicadas en Tierra del Fuego. También si no fuera así, ellas habrían cerrado. La industria papelera y la textil recibieron también atención del gobierno. ¿Por qué entonces para el agro no hay consideración? (M95: 88).

En este punto, la relación con el gobierno había alcanzado el punto de máxima tensión durante el lustro, aunque no la suficiente, como se ve, para unirse a las medidas de protesta realizadas por las otras entidades. Mientras tanto, la fracción dirigencial renovadora consolidaría su hegemonía interna, a un costo quizás demasiado alto.

5.5. Consolidación y descrédito de la Comisión Directiva

Como señala Heredia (2003, págs. 88-9), la desconfianza inicial hacia el gobierno de Menem, motivada por su pertenencia al PJ y el contenido populista que había cobrado su campaña cedió paso rápidamente a la euforia. El viraje ideológico que había llevado a cabo (en el que a la ejecución de un plan de ajuste de la más pura ortodoxia liberal se sumaba la política diplomática de apoyo a los EEUU, el discurso de la “reconciliación nacional”, y la amnistía a los militares condenados por crímenes durante la dictadura) había alcanzado su punto cúlmine con el plan de Convertibilidad, la privatización de los servicios públicos, la liberalización de la economía y la apertura comercial como pilares fundamentales de la reforma económica. Todo ello ante el estupor de los antiguos enemigos del peronismo, que pudieron ver como un gobierno emergido de sus filas aplicaba las políticas que ellos mismos reclamaban desde hace décadas.

Sobre esta base, la fractura que había mostrado la dirigencia de la SRA en la elección de su dirigencia en 1990 comenzaría, lentamente, a soldarse. Por lo pronto, ya en 1992, el grupo oficialista había logrado impedir una nueva presentación de la lista de oposición, e imponer la reelección de Zavalía mediante lista única, marcando un principio de acuerdo entre las facciones. Así lo expresó de Zavalía en el discurso a la asamblea: “es motivo de especial satisfacción para mí que esta Asamblea se haya realizado sin ningún tipo

de disidencias ni separación entre los socios de la SRA. [...] es para mí un honor muy especial el ser el Presidente de este acuerdo (M93: 77).

Tras la consolidación de este grupo dirigenal, la entidad ingresaría en una etapa de sostenido descrédito público. El principal problema sobrevendría con la compra del predio de Palermo. Tanto el valor al que había sido tasado como la forma en que el gobierno lo enajenó resultaron en acusaciones de haber fraguado una operación espuria. Y junto con el lastre político que descargaría dicho negocio sobre el ahora mancillado prestigio de la organización, se uniría un lastre no menos pesado: el económico. En efecto, a pesar de haber logrado adquirir el predio a un precio que se hallaba 30 veces debajo de la tasación original, y de obtener enormes facilidades para el pago del valor, lo cierto es que la SRA no contaba con los fondos para pagarlo, lo que la llevó a contraer deudas que la dejaron cerca de la quiebra, y a asociarse con capitalistas de reputación cuanto menos dudosa.

A pesar de lo que sería sólo el comienzo de una sucesión de oscuros eventos relacionados con la compra y usufructo de los terrenos, la dirigencia de la SRA comenzó a cerrar filas. La gestión del predio, cabe aclarar, siguió siendo objeto de discusiones en el seno de la CD, que en muchos casos acabarían ventilándose. Sin embargo, ambas facciones coincidieron en procurar resolverlas bajo el paraguas de la tradición, esto es, presentando una sola lista a las elecciones.

Poca cosa sobreviviría, no obstante, de la tradición de la entidad, uno de sus pilares identitarios fundamentales. Además del encadenamiento de escándalos públicos en torno al predio, el nuevo uso comercial que se le daría implicaba en sí mismo un sacrilegio. En efecto, la compra del predio desencadenó la necesidad de tornarlo un espacio rentable para poder pagar el préstamo. Así, las vacas comenzaron compartir el espacio con exhibiciones que nada tenían que ver con la ganadería:

En 1992, al mismo tiempo que subrayaban el récord en el número de visitantes (casi dos millones de personas), los diarios de la capital consideraron que la exposición de la SRA se había transformado en un “centro comercial sin el más mínimo confort”. En lugar de los productos y de la tecnología agrícola; en lugar del despliegue del simbolismo patriótico, podían encontrarse electrodomésticos, automóviles y restaurantes de comidas rápidas. Habida cuenta de que el alquiler de lotes otorgaba a la asociación más ingresos que la exhibición de especímenes de raza, la SRA disminuyó el espacio destinado a los animales y dicha exhibición se volvió rotativa. Estas modificaciones contribuyeron a aumentar los costos y el tiempo que los productores del interior debían acordar para la exposición. El evento también perdió interés para quienes descubrían en sus rituales e instalaciones la evocación de la Argentina de principios del siglo XX. Entre otras muchas modificaciones, las antiguas instalaciones del terreno de Palermo fueron destruidas para aprovechar mejor el espacio. (Heredia, 2003, págs. 90-1).

La consolidación de este grupo dirigencial daría lugar a otra serie de transformaciones en el funcionamiento de la entidad. Durante este período, la más significativa fue la modificación estatutaria que asignaría rentas al presidente y vicepresidente, que durante un siglo y casi tres décadas, al igual que los restantes miembros de la CD, habían ejercido su cargo *ad honorem*. Esta decisión, además de arrasar con otra de las tradiciones, volvió a exponerla públicamente, puesto que trascendió a la prensa incluso antes de la realización de la asamblea de 1993. Tan es así que dos veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ) fueron parte de la misma, y bajo la orden de la Jefa del Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones aconsejaron a la CD retirar la propuesta de modificación estatutaria, por “no estar conforme con el espíritu de una Asociación Civil sin fines de lucro, y la SRA es una sociedad civil sin fines de lucro”. Por su parte, Carlos Vaquer, que en su rol de Vicepresidente 2do había asumido la presidencia temporal de la Asamblea (puesto que la cuestión involucraba directamente al Presidente y Vicepresidente), insistió con que la propuesta no estaba prohibida por ninguna disposición legal, y que como el tema ya estaba incluido en la orden del día no era ya posible retirarlo de la votación. A las objeciones de la IGJ se sumó un grupo de cuatro socios, que constituirían el germen de lo que sería la oposición a la línea oficial. Finalizado el debate, se procedió a la votación, en la que se aprobó la modificación por 101 votos contra 31 (M94:83-5; M95: 130-1).⁸²

En ese mismo año, los grupos de socios previamente enfrentados volverían a acordar un nuevo presidente, a elegirse por lista única. Así, de Zavalía cedería su lugar al hasta entonces Vicepresidente, Enrique Crotto (h). Proveniente de un linaje que hunde sus raíces en los orígenes del Estado nacional, y que registra antepasados terratenientes y ganaderos,⁸³ Crotto no tomó a su cargo la gestión de las explotaciones familiares, lo que no le impidió alcanzar la presidencia de la SRA. Luciano Miguens, por su parte, pasaría a ocupar la vicepresidencia. Bajo su dirección, la entidad profundizaría su derrotero.

5.6. Síntesis del período y forma de la acción política

A pesar de las dudas que sembraba el origen peronista del gobierno, la CD de la SRA apoyó públicamente su programa económico desde el primer momento. Esto tuvo dos consecuencias importantes para la entidad: en lo interno, la conformación de una lista de

⁸² La cuestión no terminó allí. Tras la resolución, la IGJ procedió a enviar a la CD una resolución en la que se disponía el no acatamiento de lo dispuesto por la Asamblea, cuestión que fue apelada ante el Ministerio de Justicia, que al año siguiente falló a favor de la revocación pedida por la entidad.

⁸³ Entre sus antepasados más destacados se cuenta, por ejemplo, José Camilo Crotto, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical en 1891, y posteriormente presidente de su Comité Nacional, senador por la ciudad de Buenos Aires y gobernador de la provincia. Participó, asimismo, de la Liga Agraria. Véase, respecto de esto último, el trabajo de Colombo y Sartelli (1998).

oposición que bregaba por una estrategia de mayor independencia respecto del gobierno; en lo externo, la imposibilidad de establecer alianzas plenamente operativas para avanzar en la búsqueda de la sanción de medidas económicas específicas.

En efecto, la estrategia de la entidad se aferró al llamado “modelo Alchourón”, incluso cuando éste abandonó la presidencia: se trataba de evitar la confrontación abierta y privilegiar la negociación con el gobierno. De esta manera, la acción política de la entidad seguía un camino dual: mientras que los esfuerzos por obtener, modificar o anular medidas económicas que afectaran particularmente a sus representados se buscaban encarrilar mediante la negociación con el presidente o sus funcionarios, ante quienes tenían acceso directo, la reivindicación del contenido general de la política económica ante las críticas provenientes de otros sectores sociales y la presión por su profundización se enmarcaron en una alianza con los capitales más concentrados. Dicha alianza, que operó bajo el nombre del G-8, no comenzó sin embargo a funcionar de forma fluida sino hasta 1993.

El hecho de que las restantes entidades no desestimaran la vía de la confrontación impidió a la SRA establecer con ellas una alianza sectorial, que podría haber tenido una mayor especificidad en cuanto al contenido de las propuestas o reclamos que la que se podía permitir el G-8. Lo que no obstaba, ciertamente, para que pudiera aprovechar los beneficios que acarrearía la serie de paros agrarios (o su mera amenaza) realizados en este período ya que, por lo general, las cuatro entidades acababan siendo convocadas por el gobierno para discutir medidas. Ni tampoco, por otra parte, para impedir que sostuviera con ellas un vínculo permanente destinado a elaborar informes técnicos conjuntos, sobre la base de los cuales consensuarían la presentación de proyectos con propuestas de políticas para el sector. En la provincia de Buenos Aires, este tipo de relación devendría en la articulación de un espacio de diálogo permanente, la Mesa Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires, que hacía eje fundamentalmente en la cuestión impositiva. La presentación de demandas conjuntas, en este sentido, permitía tanto a la SRA como a las restantes entidades investir de una mayor legitimidad a sus reclamos, aunque el hecho de que no logaran coordinar una acción política conjunta provocaba una disminución del impacto.

Los vaivenes de la relación entre estas organizaciones son presentados por el propio de Zavalía:

Dentro de este esquema hemos tratado, hasta donde fue posible, trabajar en conjunto con las distintas entidades del sector agropecuario. A ustedes no se les escapará que esto no es una tarea fácil porque las cuatro entidades tienen una historia [...], porque hay una ideología distinta, porque hay modos de pensar distintos [...]. Sin embargo, durante casi todo el período que ha cubierto este año, hemos realizado importantes trabajos conjuntos, un gran esfuerzo de conciliación de posiciones, que finalmente concluyeron en el Programa Conjunto que las cuatro entidades presentaron al señor Ministro de Economía. Quiero recalcar la importancia de este

trabajo más allá de que en este momento los resultados hayan sido magros [...]. Lamentablemente, después hubimos de seguir algunos caminos distintos cuando se presentaron diferencias en el modo de implementar, en el modo de luchar, en el modo de tratar de obtener que estas propuestas que hemos realizado en conjunto se conviertan en realidad (M95: 74-5).

Por otra parte, incluso cuando el G-8 logró constituirse como coalición defensiva del “modelo”, la SRA no dejó de recelar de sus aliados. Mientras la UIA oscilaba entre el apoyo y la crítica al gobierno, la SRA se despachaba casi a diario contra la industria “ineficiente” que quería “conservar sus privilegios” a expensas del resto de la sociedad. Los ataques sólo cesaron cuando, hacia 1993, la UIA abandonó los impulsos de torcer la política económica mediante la confrontación y encaró también la línea de la negociación, aunque para ese momento dicha política ya estaba firmemente asentada. Pero incluso así, la SRA siguió denunciando “desvíos” del programa económico que favorecían al sector industrial, como la mayor protección de la que gozaba la rama automotriz, y cargando insistentemente contra otro de sus aliados en el G-8: el capital bancario, que de acuerdo a la entidad seguía operando en un sector que no había sido “suficientemente desregulado”, y en virtud de ello podía seguir cobrando tasas de interés excesivamente altas.

A pesar de que el aval incondicional a la política económica desarrollada por el menemismo mermaría, la SRA jamás llegó a poner en cuestión las bases sobre las que aquella se asentaba. Es cierto, como hemos visto, y como señalan tanto Muro de Nadal (2009) como Gálvez (2012), que la Convertibilidad fue recibida de forma cautelosa. Sin embargo, la asociación tardó poco tiempo en convertirse en férrea defensora de dicho régimen cambiario. Si bien no dejó de protestar por lo que consideraba un esquema de precios relativos desfavorable para el sector agrario, lo que a su entender era producto de la instauración del dicho régimen, insistió permanentemente en que la solución de este problema no podía realizarse por la vía cambiaria. Y, de hecho, las menciones al tipo de cambio fueron muy esporádicas a lo largo de estos años, y acabaron por desaparecer completamente.

En este sentido, y a pesar de que la Convertibilidad había dado forma a una moneda fuertemente sobrevaluada, las críticas que comenzaron a multiplicarse hacia finales de este período no la tenían por blanco, a pesar de que la renta apropiada por sujetos sociales distintos a los terratenientes tenía por origen a dicha sobrevaluación. Quedaba claro, en este sentido, que la producción agraria no sería precisamente la beneficiaria de la política económica, en la medida en que, tras la eliminación de las retenciones, la carga impositiva había vuelto a crecer por otros medios, lo que concentraba las críticas de la organización. Todo esto, por otra parte, en un contexto en el que los precios de las mercancías agrarias se hallaban relativamente contraídos.

A esto se unía el evidente rechazo del gobierno a constituir canales de diálogo institucionalizados. La expresión más clara de esto puede hallarse en la creación del CNA, vacío de toda la potencia con que la SRA pretendía investirlo. Así, ésta había fracasado en su intento de asegurar el acceso, que hasta aquí había sido fluido, a los principales funcionarios del gobierno, incluido el presidente.

La SRA pasaría entonces de una euforia expectante a un distanciamiento progresivo del gobierno, que parecía marchar hacia una ruptura en las relaciones. El firme apoyo inicial había cedido paso hacia una crítica cada vez más abierta. La organización se había puesto, de este modo, en una posición difícil. Los miedos que expresaba la oposición interna ante la posibilidad de “quedar pegados” a un gobierno con el que habían entablado una relación estrecha parecían estar tomando forma, y la posición política algo más crítica que enarbolaba esta línea interna comenzaba a ser asumida por la conducción oficial. Tras su fallido intento por reconquistar el control de la CD, sin embargo, la oposición no volvería a presentarse a elecciones, sino que buscaría accionar desde el seno de la comisión.

En este contexto, y ante el continuo deterioro de la situación en la rama agraria, la entidad se veía forzada a alzar la voz. No podía hacerlo con demasiada fuerza, sin embargo, puesto que se trataba de un gobierno que, a grandes rasgos, había puesto en marcha las transformaciones económicas que ella misma venía reclamando. El apoyo a la continuidad del “modelo”, en este sentido, era una cuestión que no merecía siquiera discutirse. De lo que se trataba, más bien, era de accionar por la modificación de lo que, cada vez con más fuerza, se le aparecían como “desvíos”, algunos de los cuales afectaban particularmente a la rama agraria.

Se trataba, por lo tanto, de una fase que podría entenderse como de “apoyo crítico”, en la cual la SRA procuraba modificar la política aplicada sobre la rama agraria, pero sin cuestionar el marco general en la que ésta se desarrollaba. Esto limitaba severamente la capacidad de presión que podía ejercer sobre el gobierno: no fuera cosa de que, en lugar de jugar el papel de soporte del avance del neoliberalismo, se convirtiera en vehículo de su freno. En otras palabras, por más que la implementación de estas políticas estuviera afectando particularmente al sector agrario y, especialmente, a los terratenientes, la SRA prefería luchar para cambiar algunos de sus aspectos puntuales que para cambiar al “modelo” de raíz. Incluso en los momentos más álgidos, como el que cierra este período, la CD no hizo más que subir el tono de las críticas, pero se abstuvo de realizar acciones de protesta.

Este dilema aparece expresado nuevamente por el propio de Zavalía, al dejar la presidencia de la organización en 1994:

La SRA ha luchado permanentemente por compaginar dos temas sustancialmente difíciles y complejos. Por un lado, que el país continuara efectuando este proceso de transformación [...] pero por el otro lado, lograr despertar la atención de las autoridades en aquellas necesidades urgentes que la empresa agropecuaria tiene y que no siempre son motivo [...] de la atención suficiente [...]. Creo que esta es una tarea que dejamos un poco inconclusa. Ojalá pudiéramos terminar este período y pudiera este Presidente, al concluir su gestión, tener la satisfacción de decir que hoy el agro está en situación distinta o que avizoramos un futuro más claro. No es así. Lamentablemente da la sensación de que la lucha va a tener que continuar, que la transformación va a seguir siendo dura, por lo menos por un tiempo.

Las palabras del presidente saliente, pronunciadas ante los socios de la SRA, revelan el contenido de la política desarrollada hasta el momento, e incluso sostenida en el corto plazo. Se trataba de seguir apoyando una transformación que “va a seguir siendo dura” e intentando accionar, siempre dentro de los límites del proceso, para mitigar sus efectos, llamando la atención de los funcionarios del gobierno respecto de las “necesidades urgentes” del sector agrario.

Pero si, por un lado, la relación con el gobierno menemista se debilitaba, también comenzaba a hacerlo, por el otro, su fe en la capacidad de la aplicación de las políticas liberales a nivel local para pasar por encima de lo que denunciaban como obstáculos externos. En efecto, desde principios de la década, la entidad había denunciado no sólo las políticas de proteccionismo a nivel local, sino también las aplicadas en países externos, y particularmente en los mercados tradicionales o potencialmente compradores de mercancías agrarias argentinas.⁸⁴ Sin embargo, hasta este momento, había insistido en contrapartida en que la liberación de las “trabas” que se le aplicaban a la rama agraria en la Argentina, cosa que sólo podría suceder mediante el desarrollo de un programa económico liberal, le permitiría tener la fuerza suficiente como para barrer estas dificultades. La crisis en la que se hallaba dicha rama la hizo reconsiderar, momentáneamente, esta fe casi inquebrantable, en una protesta en la que ahora el insuficiente liberalismo de los países “desarrollados” abría las puertas para justificar la aplicación de similares políticas a nivel local:

Cuesta admitir que haya “técnicos” que creen que sólo el mercado solucionará los problemas, sin considerar que para la producción agropecuaria no existen ahora los mercados libres y transparentes que siempre ambicionamos, porque hace tiempo que todos los mercados están condicionados por las políticas de subsidios y proteccionismo que instrumentaron los países reconocidos como “desarrollados” para defender a sus agricultores (A-Mar94:5).

⁸⁴ La SRA también actuaría políticamente en el frente externo para remover estas limitaciones, como veremos posteriormente.

Sus propias convicciones liberales parecieron ser también momentáneamente puestas en cuestión, como mostramos previamente, al pedir condiciones especiales de crédito y, reconocer incluso que esto ocasionaría algún costo a la sociedad.

La SRA mostraba así ser incapaz de cambiar el rumbo de su acción política, y comenzaba a experimentar las consecuencias. Pronto, sin embargo, la situación se transformaría marcadamente.

Capítulo 6

Del apoyo crítico a la apoteosis menemista (1995-1997)

Me animaría a decir que vamos a ser la entidad más poderosa de la Argentina.

Enrique Crotto, diciembre de 1997.

El traspaso de autoridades en la SRA anticiparía la época de mayor cercanía al gobierno menemista. La Asamblea Ordinaria de 1994 presentó la candidatura única de Enrique Crotto y Luciano Miguens, que había sido nuevamente avalada por los comités que fueran partícipes de la disputa en 1990. La escisión en el seno de la CD seguía cerrándose: tras agradecer a Alchourón y Gutiérrez, presidentes de los comités enfrentados, por elegirlo como candidato por la unión, Crotto afirmó que se proponía “luchar para que por muchos años no haya más dos listas en la Rural” y estar seguro de que “el año que viene, gracias al trabajo de ellos dos y la gente que integró el Comité habrá una sola lista y por muchos años más” (M95: 77-8).

En su alocución a la Asamblea, que contó con la presencia de Felipe Solá, el flamante presidente reafirmó la posición que había adoptado recientemente la entidad: apoyo crítico al programa del gobierno y denuncia de una situación de profunda crisis en la producción agraria, pero sin cruzar la línea simbólica trazada ante las restantes entidades, cuyo rechazo hacia dicho programa era explícito:

Decir que el campo está mal en la Argentina no tiene nada de original, decir que es la crisis más profunda que el sector ha vivido en los últimos tiempos, es quedarse corto [...] creo que tenemos el derecho como sociedad pionera del sector agropecuario de exigir cosas [...] porque hemos sido durante 5 años los que hemos estado pagando el pato de la boda y me parece que tenemos derecho, por lo menos, a luchar en las mismas condiciones que tienen otros [...]. Vamos a luchar también por la presencia de las entidades, pero quiero que esto quede bien claro: no vamos a pelear por la unión de las entidades a cualquier precio. Hay principios filosóficos que la Rural no va a sacrificar por más unión que ponga adelante. Si tenemos que ir solos, vamos a ir solos (M95: 77-8).

Crotto había llegado a la conducción de la entidad precedido por su reputación de “duro”: “creemos en el diálogo. Algunos me pintan como más duro, pero las políticas de la Rural no las fija el Presidente, sino [...] la CD” (M95: 77). Sin embargo, se encargaría prontamente de revertir dicha fama.

6.1. Del apoyo crítico a la apoteosis

En su primera conferencia de fin de año, pocos meses después de su elección, Crotto comenzó reconociendo la difícil situación que atravesaba la producción, aunque prefirió cargar las tintas sobre el mercado mundial, circunstancialmente sacudido por la crisis del tequila:

En el año que está por terminar no se produjo una significativa reversión de la difícil y crítica situación de los productores agropecuarios [...] en lo referente al área nacional, no se han logrado significativos avances con respecto a 1993, que faciliten una más rápida salida de los problemas económico-financieros de gran parte de los productores. El cuadro del sector agropecuario sigue siendo preocupante. Se advierte una gran dispersión en los indicadores de rentabilidad, según el tipo de producción, escala económica y nivel de endeudamiento. Factores básicamente externos han producido esta nueva fisonomía de la realidad agropecuaria, en la cual algunos segmentos comienzan a presentar resultados positivos, mientras que otros continúan en el estancamiento o la depresión (M94: 120).

E inmediatamente, destacó los logros económicos del gobierno, centrándose en la expansión económica, el tibio repunte de las exportaciones y de la inversión.

Ciertamente, Crotto no dejaría de insistir sobre las cuestiones usuales: en el plano general, la reducción del gasto público y el avance en la desregulación de los mercados (particularmente, el laboral y el financiero), aspectos sobre los que procuraba avanzar el G-8; en el sector agrario, la reducción de las tasas de interés y la relajación de la presión impositiva seguían apareciendo como los temas más inmediatos, a los que se sumaba un mayor financiamiento para el SENASA, que tenía ante sí la tarea de implementar un programa de lucha contra la fiebre aftosa. Todo esto, sin embargo, comenzaría a ser expresado en un tono mucho más cordial y menos alarmista que el empleado durante los dos años anteriores.

El vínculo con el gobierno se estrecharía a tal punto que dirigentes de la entidad comenzarían a formar parte estable de la comitiva que acompañaría a Menem en sus viajes al exterior. Si bien esto ya había comenzado a suceder de forma esporádica en años anteriores, durante este período las notas sobre la participación de la SRA en dicha comitiva inundarían las páginas de las Memorias.

Sin dudas, la mejora de algunos indicadores ganaderos contribuyó a generar este clima. En 1995 se exportaron más de 520.000 tn de carne, un 37,3% más que el año anterior, lo que sumaba un total de más de un millón de dólares, valores que configurarían los picos de la década a pesar de que los precios no habían subido. Esto permitió

compensar, parcialmente al menos, la tendencia a la contracción de la demanda del mercado interno, que durante el primer lustro de la década se había desplomado.

También mejorarían algunos indicadores agrícolas. En este período, el maíz alcanzaría los 167 US\$/tn en 1996, lo que representó un aumento del 53% sobre el promedio anual de los años previos de la década, aunque luego se retrajo nuevamente; lo mismo sucedió con el trigo, que en 1995 llegó a los 208 US\$/tn, creciendo así un 17%; la soja, por su parte, alcanzó su techo en los años de 1996 y 1997, en los que llegó a venderse a un promedio de 290 US\$/tn, lo que constituía una expansión del 25% en relación al año previo. Al mismo tiempo, los rendimientos mostrarían una tendencia a la alza, alcanzando también en este período los picos de la década. Sobre esta base, a la que se sumaría la introducción de nuevas tecnologías agrícolas, la superficie sembrada y el total de la producción se expandirían igualmente, marcando records de volumen y superficie sembrada.

En este contexto de calma relativa, la SRA redujo el tenor de sus críticas hasta casi abandonarlas por completo. Uno de los últimos reclamos de tipo general aparece en agosto de 1995, en un editorial en el que se afirma que a pesar de que los indicadores económicos y los precios de las mercancías agrarias mejoran, “la «sensación térmica» del productor es bien distinta. Agobiado por la presión impositiva y las altas tasas de interés, agotado su capital de trabajo, se pregunta cómo llevar adelante esa reconversión técnica que se le reclama (A-Ago95: 5).

En los últimos meses del año, la fuerte sequía que afectó la producción de trigo, carne y leche se convirtió en el eje de las protestas. En noviembre, la entidad se quejaba amargamente de que el régimen de emergencia agropecuaria puesto en marcha ante el desencadenamiento del fenómeno, a diferencia de lo sucedido en períodos anteriores, no contemplaba más que una reducción de los intereses sobre las prórrogas (A-Nov95: 5):

Sin capital de trabajo, sin acceso a créditos razonables, soportando una cruel presión impositiva, el productor se enfrenta al mismo tiempo con contingencias climáticas que, como este invierno pasado, han golpeado fuerte [...]. Inmediatamente se puso en marcha el régimen legal previsto para estas circunstancias [...]. Esto regímenes prevén, en el orden crediticio e impositivo, prórrogas de los vencimientos hasta 180 días después de finalizada la emergencia, descartando en general en esa prórroga la actualización monetaria del capital y aplicando intereses con tasas subsidiadas hasta el 50% [...]. En épocas de inflación, esto significaba un notable alivio para la situación del productor, ya que la desvalorización monetaria transformaba la prórroga en una quita.

Hoy no es así, y al término de la prórroga el propietario enfrenta el pago de los vencimientos acumulados del período de emergencia más el que les corresponde a ese momento.

El mes siguiente, el eje de la protesta volvió a correrse hacia el crédito bancario:

Se acaba 1995 [...] año que [...] tuvo una de las sequías más prolongadas de las últimas décadas. El año golpeó fuerte al productor que, culminando la esforzada reconversión de sus sistemas productivos, vio pasar primero con esperanza y luego con frustración las favorables condiciones de los mercados internacionales. Las tasas de interés, que incomprensiblemente decuplicaron las tasas de inflación, le impidieron acceder al capital de trabajo necesario para aprovechar las oportunidades que surgen (A-Dic95: 5).

Las quejas, sin embargo, no pasaban ya de algunas líneas escuetas, aunque la organización siguió aprovechando cada encuentro con Menem para insistir sobre la cuestión. En septiembre, en la inauguración de la exposición, Crotto reiteró los planteos que la SRA había formulado durante toda la década, aunque ciertamente en un tono mucho menos catastrofista. Y, por cierto, no dejó de expresar oficialmente la satisfacción de la entidad ante la reelección que Menem había obtenido en mayo, con casi el 50% de los votos (A95-Oct: 12).

Paralelamente, la posición respecto a las restantes entidades volvió a endurecerse. Si hacia el final del período anterior la SRA se limitaba a condenar el método de protesta justificando al mismo tiempo la validez de los reclamos, ahora volvía a reprenderlas duramente, sugiriendo además la que estimaba que debía ser su nueva función: el resguardo de las condiciones actuales de acumulación. En el editorial de septiembre de 1995, señalaban que:

El país rural espera [...] de las entidades gremiales ruralistas: que comprendan y acompañen la reconversión que en forma tan dura está viviendo el sector [y] que terminen con las actitudes contestatarias inútiles, con la búsqueda del aplauso fácil, con los personalismos que las dividen y debilitan, y trabajen juntas en torno a la doctrina que les es común, para brindar al productor lo que tanto necesita y es la verdadera función del gremialismo moderno: vigilia permanente para evitar distorsiones del libre marco de la producción, servicios modernos y eficaces y capacitación permanente para la toma de decisiones adecuadas (A-Sep95: 5).

Sobre la base de esta retracción temporaria de la presión que la asociación venía ejerciendo sobre el gobierno, temas de menor urgencia ganaron la atención de la CD. Las petroleras comenzaban a consolidarse como una nueva fracción de capital enemiga a raíz del avance de la exploración hidrocarburífera sobre tierras de propiedad privada: a la contaminación de los suelos por la explotación del subsuelo se agregaba un avance judicial de los capitales petroleros para la expropiación (esto es, el forzamiento de la venta) de las tierras, sobre la base legal de que el subsuelo no pertenece al terrateniente, sino al Estado. Lo mismo sucedió con la consolidación de los capitales comerciales más concentrados:

desde 1995, diversas notas en los Anales refieren a la expansión de cadenas extranjeras de supermercados, que tras barrer a gran número de las carnicerías, se configuraron como depresores del precio pagado a los ganaderos por la venta de carne.⁸⁵

Otra cuestión que afectó a la SRA durante estos años fue la transformación del Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines (ISSARA), anteriormente gestionado por las cuatro entidades agrarias y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), cuyos fondos quedarían exclusivamente bajo el control de la UATRE. La entidad se quejó entonces amargamente, señalando que el problema del ISSARA es que había sido “manejado por funcionarios públicos designados por el Estado, que manejándolo en forma personal y arbitraria, lo fueron convirtiendo en herramienta de demagogias y cueva de la ineficiencia más atroz”, y protestando por la decisión:” el Estado no encuentra mejor solución que transformar[lo] en una obra social sindical, entregando [...] la administración de los fondos [...] a una asociación gremial que no alcanza a tener como afiliados el 10% de los beneficiarios del sistema, y excluyendo a las entidades rurales del manejo del mismo” (A-Feb96: 5).

El verdadero temor de la SRA consistía, en realidad, en el fortalecimiento del sindicato de obreros rurales que sobrevendría como consecuencia del control de los fondos en cuestión. Esto se pone abiertamente de manifiesto en otra nota de Anales, en la que se revela la persistencia de su particular concepción acerca de la especificidad de las relaciones sociales en la rama agraria:

Dado que la [obra social OSPRERA] se utiliza para fortalecer un sindicato (UATRE), que no es representativo del sector y cuyo crecimiento y fortalecimiento es a todas luces inconveniente a los productores agropecuarios, socios o no de la SRA, es conveniente evitar su crecimiento a expensas de la obra social. Un sindicato de trabajadores rurales iría contra la esencia del trabajo rural; dificultaría la relación patronal-obrero que tiene características particulares; generaría permanente conflicto (A-Nov96: 24).

A pesar de esta serie de problemas que la SRA no podía dejar de advertir, también era notorio que el aumento de la presión impositiva había encontrado un techo, al menos momentáneamente. Y, de igual modo, las protestas de la entidad respecto de esta cuestión también perdieron centralidad, aunque nunca dejó de reclamar la anulación o rebaja de los impuestos ya existentes. Los únicos conflictos destacables, en este sentido, estuvieron relacionados con el revalúo inmobiliario de la provincia de Buenos Aires y la implementación

⁸⁵ Al respecto, Azcuy Ameghino (2007a) afirma que tanto el número de carnicerías como su competitividad en relación a las cadenas de supermercados se redujeron notablemente durante la Convertibilidad. Asimismo, señala que hacia el año 2003, los supermercados acaparaban ya el 30% del total de la venta de carne en la ciudad de Buenos Aires, y un 24% en el resto del país.

de un nuevo impuesto al gasoil en 1996. Ante este escenario, la SRA se quejó de que el precio local de este insumo se hallaba marcadamente por encima de su precio en el mercado mundial por efecto de la serie de impuestos que lo gravaban, e insistió con su clásica receta, poniendo ahora de relieve, en lo que comenzaría a ser un argumento reiterado, a la corrupción como fuente de dilapidación de recursos, y apelando al bolsillo del pobre ciudadano de a pié:

Si la política del gobierno busca generalizar el marco de competitividad, entonces el precio del combustible para el productor argentino debe compararse con el que rige para el productor de EE.UU. o Canadá [...] por la simple razón de que competimos en condiciones ya de por sí desfavorables, con camiones y tractores caros, como resultado de esa telaraña aberrante, llamada el costo argentino [...]. Para el agro, esta nueva carga tiene una sola lectura: apenas mejoran los ingresos del productor de algún segmento, el gobierno le mete la mano en el bolsillo [...]. El campo es, hoy por hoy, el soporte económico más importante del país. Frente a un cuadro de inflación cero se pretende cargar sobre las espaldas de los contribuyentes, los que le ponen el hombro al país tomando un colectivo todos los días [...]. El sacrificio debe ser equitativo y conjunto. El Estado debe ser transparente, reducir y reasignar los gastos, administrar eficazmente sus recursos, y para eso hay que erradicar la corrupción y la impunidad (A-Sep96: 5).

Por otra parte, la evasión impositiva en la producción ganadera se fue convirtiendo en un tema que ganó un lugar creciente en la agenda política. La SRA intentó despegarse, sugiriendo que se trataba de un problema que no podía ser generalizado a toda la actividad, y que en realidad no había un verdadero interés político por resolverlo. Así lo afirmaba Horacio Gutiérrez en una entrevista, adornada con noticias de medios gráficos que referían a las acusaciones que recaían sobre Alberto Samid, dueño de varios capitales frigoríficos (A-Sep96: 24-5). Otras opiniones provenientes de la entidad también partían de afirmar que la responsabilidad de la evasión la tenía el Estado, pero aprovechaban para llevar agua a su molino: el problema, sugerían, era el elevado nivel de la presión impositiva, y se indicaba que si éste se redujera caería también la evasión. Esto es lo que señalaba en otra entrevista Arturo Llavallol, presidente del Comité de Carnes:

En lo que respecta a la parte impositiva, [...] la carga que están recibiendo los productores es tremenda. Eso se debe [...] al gasto público, y diría que en primer lugar también a la evasión fiscal. Con respecto al gasto público, no hay ninguna duda de que hay que bajarlo, pero bajarlo no solamente en el orden nacional, [sino también] en el orden provincial, municipal. Y con respecto a la evasión, si estamos calculando una evasión entre 20 y 30.000 millones anuales frente a un déficit como se produce este año de 6.000, yo creo que haciendo un intento de refiscalizar y recaudar mejor no hubiera sido necesario poner impuestos a la producción,

como es el caso del gasoil. Pero evidentemente 6.000 millones de dólares de déficit fiscal es un déficit alto.

ANALES: Es alto, pero la ecuación, para que cierre, debe reducir el gasto y mejorar la recaudación. Para esto tal vez un incentivo sería una baja en los impuestos...

LLAVALLOL: Para que haya más gente que pague (A-Dic96: 41).

Y a propósito de la evasión, la decisión de mandar al ahora envalentonado sindicato rural a la caza de trabajadores en negro tampoco fue muy bien recibida por la entidad, que protestó por las “medidas [...] retrógradas como el decreto del 17 de octubre pasado que [...] autorizó a las organizaciones sindicales a ejercer funciones de policía de trabajo en las empresas para detectar casos de trabajadores no registrados” (A-Mar97: 3).

Todas estas cuestiones, sin embargo, estuvieron muy lejos de ganar espacio en la agenda de la organización. Por el contrario, fueron dejadas de lado casi inmediatamente. De este modo, el apoyo crítico con que se había cerrado el período anterior fue dando paso a una calma casi inalterada, y ésta hacia la más absoluta apoteosis. Tras un lustro de crisis, la producción agraria parecía, lenta y desigualmente, entrar en una fase de expansión. Lo hacía, ciertamente, sobre la base de la aceleración del proceso de concentración y centralización del capital agrario, que liquidaría una enorme masa de pequeños capitalistas en la región pampeana. Pero la SRA avizoraba una época de vacas gordas, a pesar del bajo peso de las que se venían faenando.

A la recuperación de los precios y mercados de carne y la expansión de la producción de leche, se sumaría un hecho largamente esperado por la organización: el reconocimiento oficial de la eliminación de la aftosa. En mayo de 1996 se habían cumplido los dos años sin focos de la enfermedad exigidos por el organismo internacional encargado de su control, la Oficina Internacional de Epizootias (OIE). Por lo tanto, representantes de la SRA acompañaron a París a la delegación argentina, encabezada por Felipe Solá y Bernardo Cané, director del SENASA, a presentar el correspondiente informe. Un año después, la Argentina obtendría el status de país libre de aftosa con vacunación. El editorial de junio de 1997, seguido de una serie de artículos que celebraban el evento, narraba el proceso en tono de epopeya, ponderando tanto la acción del gobierno a través del INTA y el SENASA como de los propios ganaderos, que tenían ahora “una historia que será bueno contar a los nietos” casi tan épica como la mismísima Conquista del Desierto:

Han pasado 130 años y la lucha continúa. El territorio a conquistar ya no es el desierto, [sino] los mercados internacionales. Las armas no son la lanza y el fusil, sino la integración regional y la tecnología de punta. Las batallas se pelean en el terreno de la competencia y el enemigo no es el indio sino el proteccionismo económico. Vocablos como Itapirú, Tuyutí o Curupaytí son reemplazados por otros como GATT, Ronda de Uruguay o MERCOSOR.

En aquellos tiempos, Roca, de la mano de nuestro hombre de campo, se abrió paso entre los fortines y por sobre la zanja de Alsina para salir al desierto a conquistarlo. Esto marcó el fin del país limitado, amurallado. Hoy el país sale de la economía cerrada que lo caracterizó durante décadas e inicia su apertura comercial al mundo, para concretar la conquista de mercados donde colocar sus productos. Y, como siempre, en la primera línea de combate están los hombres de la SRA (A-Jul96: 3).

Ni siquiera el reemplazo de Cavallo por Roque Fernández alteró la calma. Con el G-8 puesto sobre aviso con la antelación suficiente, la SRA se limitó a homenajear al ministro saliente y expresar su apoyo al entrante:

Más allá del cambio de hombres y de las dificultades puntuales que acarrea, a todos nos mueve la confianza en la continuidad de una política económica que es la del Gobierno Nacional. Es la política que, pese a algunos desaciertos en su aplicación que nuestra entidad no vacila en señalar reiteradamente, ha cambiado el país y ha terminado con la discriminación [de] que históricamente fuera objeto la actividad agropecuaria.

Es bueno recordar a veces pequeños hechos de la vida cotidiana de muy pocos años atrás, como el transitar por rutas destruidas, tratar de comunicarse por teléfono desde y hacia el campo, la espiral inflacionaria devorando los ingresos, las retenciones a las exportaciones... No es necesario profundizar mucho para reconocer el cambio en la calidad de vida de la población rural [...]

Por eso hoy desde Palermo, podemos rendir nuestro homenaje a un gran Ministro de Economía que se aleja y recibir con confianza a quien ocupa ese puesto, en la convicción de que ambos serán ejecutores de las etapas de un plan de transformación que es producto de la voluntad de la Nación, expresada en democracia (A-Ago96: 3).

No deja de ser notorio que, tras un lustro de soportar con cada vez menor tolerancia el incremento de la presión fiscal, y a pesar de que recientemente había vuelto a incrementarse gracias al nuevo impuesto al gasoil y el revalúo inmobiliario en Buenos Aires, la entidad dejara de presentar al sector como víctima de una especial discriminación. Por el contrario, dichos aumentos aparecían ahora como “algunos desaciertos” provenientes de un gobierno que había terminado con la “discriminación” que históricamente habían soportado.

Mientras tanto, y ya entrada la segunda mitad de la década, algunos de los rasgos más característicos del período, como la expansión del desempleo y la corrupción, comenzarían a manifestarse con creciente crudeza. Por el momento, sin embargo, estas manifestaciones de la especificidad de la economía argentina pasaban limpiamente de largo para la entidad. Y cuando aparecían, eran o bien minimizadas o bien utilizadas para sugerir la necesidad de profundizar la aplicación del programa económico neoliberal:

Hoy la opinión pública, que poco tiempo atrás prestigiaba como objetivos la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal, vuelca su atención hacia el desempleo y la corrupción. Contra la corrupción, nuestra intervención en lo sectorial fue una prédica constante por la regularización del mercado de ganados y carnes, para lo que ofrecimos y brindamos el apoyo de la entidad. Con respecto a la desocupación, su impacto en el tejido social es alarmante. La sensación de desamparo de un individuo o de una familia con respecto a la falta de trabajo es enorme [...]. El país no tiene memoria histórica del fenómeno del desempleo. Había años atrás salarios bajos y erosionados por la inflación, pero había pleno empleo. La transformación económica, con algunas asignaciones pendientes como la flexibilización laboral, combinada con la mutación tecnológica, generan el desempleo (A-Dic96: 3).

En este sentido, el discurso de la SRA durante este período acabó configurando una abierta apoteosis:

El mensaje del presidente de la Rural del pasado 9 de agosto llega en un momento en que los números de la macroeconomía agropecuaria demuestran que el sector ha realizado el esfuerzo que el país le solicitara y está cosechando los frutos. El país, por su parte, le ha brindado al sector a través de la estabilidad económica y de la desregulación de la actividad, un clima propicio para que los sacrificios no queden estériles. Así lo expresan claramente las palabras de Crotto, generosas en el elogio (A-Ago97. 3).

Efectivamente, la alocución de Crotto en la inauguración de la Exposición Ganadera sería más que generosa en el elogio. No sólo porque mencionaría cuanto indicador positivo exhibiera la producción agraria, sino porque, ante la persistencia de la crisis en determinadas producciones, escogería cargar las tintas sobre los gobiernos provinciales, como en el caso de la producción ovina en la Patagonia; expresaría su inmovible fe en que las medidas tomadas lograrían paliarla, en relación a la producción porcina; o haría eje en la imposibilidad de revertirla en el corto plazo, refiriéndose a la cría ganadera:

En esta muestra queremos hacer un breve balance de lo que pasó durante el año transcurrido desde la última. Sin ir más lejos, a los dos días de inaugurada la del año pasado, el gasoil [...] subió el 60% y los productores, al entender los motivos del aumento, apretaron los dientes y le ofrecieron al país y a sus habitantes la máxima cosecha de la historia [...]. Obtuvimos records en trigo, maíz, soja, arroz y porotos. Por eso invertimos 9.000 millones de pesos, que es el valor de nuestra producción de granos y algodón. Por eso este incremento de la producción rural fue por lejos el hecho económico que más contribuyó a sustentar la estabilidad [...].

Nuestra ganadería ha consolidado un nuevo status sanitario [...]. Estuvimos en Francia, en representación de todos los ganaderos argentinos [...]. Y concurrimos, como lo solemos hacer, para ayudar a las autoridades públicas a obtener un nuevo status sanitario de la OIE, que nos reconoció como país libre de aftosa con vacunación [...]. Ahora asumimos una mayor

responsabilidad: salir a conquistar a los consumidores de las distintas regiones [...]. Como habíamos anticipado el año pasado, crecen las posibilidades de exportar. El panorama que se avizora es distinto al de ayer. El gran reto que se nos plantea es revertir la crítica situación que todavía atraviesa el sector agropecuario y en especial la cría. El stock se ha reducido en más de 1.700.000 cabezas durante el último año, [sin embargo] el incremento de la producción ganadera no se logra de repente. Se requieren por lo menos 4 o 5 años para alcanzar un crecimiento significativo en nuestro rodeo [...].

Mucho bregamos por resolver el problema patagónico [...]. Pero de algo estamos seguros: la solución patagónica no pasa sólo por el gobierno nacional. Los gobiernos provinciales también deben hacer lo suyo ya que no hay remedios mágicos [...].

La producción porcina estaba condenada a desaparecer. En los últimos días se adoptaron las medidas antidumping que reclamaban los productores y esperamos que ellas ayuden a revertir la indudable situación crítica del sector.

La producción lechera exhibe un continuo aumento y durante el último quinquenio creció más del 37%. De mantenerse esta tendencia en poco tiempo nos convertiremos en uno de los países productores más importantes del mundo. Estos logros no son aleatorios ni eventuales. Se deben al gran esfuerzo que realizan los empresarios lecheros para aumentar la productividad, a pesar de la persistente sequía que atravesaron las distintas cuencas. Desde que logramos la estabilidad económica la producción física por cabeza creció un 16%, fruto de la mejor selección, alimentación y sanidad de los rodeos lecheros.

Las producciones de las comarcas regionales serán sin duda los motores de crecimiento de importantes comarcas del país, pues en la mayoría de los casos tuvieron significativas evoluciones y de continuar con la fuerza que le imprimen los productores, se constituirá en otro de los pilares del aporte del sector a la economía nacional [...].

En relación al crédito no podemos ignorar los esfuerzos realizados por la banca oficial para reducir las tasas de interés; dicha reducción contribuyó de manera muy importante a la reactivación del sector.

Con las entidades del Grupo de los 8 hemos trabajado mucho. Tratamos con ellas de consensuar con la CGT un proyecto de modernización laboral. Avanzamos bastante pero no lo suficiente. Hoy las propuestas se hallan en el Congreso y serán los legisladores los responsables de sancionar una ley acorde con una Argentina insertada en el siglo venidero [...].

Nadie duda de que la macroeconomía argentina funciona de manera excelente y se consolidó más de lo que algunos esperaban. La transformación espectacular que logramos de las fuerzas productivas no admite retroceso [...]. Hoy advertimos con satisfacción que la economía argentina emprende el rumbo del crecimiento.

La SRA, en síntesis, ya casi no tenía motivo de queja. Así lo expresa Crotto en una entrevista para Anales:

Creo que cuando uno tiene motivo de queja, tiene que quejarse, pero en este momento viendo todo el escenario del país y del mundo, estamos bien. El país está mejorando.

Allí puede hallarse, además, la forma en que la SRA intentaba despegarse de la imagen de entidad demasiado apegada al oficialismo. La táctica consistía en poner algún pequeño contrapeso en el otro platillo de la balanza, de forma tal que no se pudiera decir que había perdido toda capacidad de crítica. Para el caso, al discurso abiertamente apologético de la inauguración de la exposición de Palermo en 1997 (y al que el propio Biolcatti había descripto, como vimos, de ser “generoso en el elogio”) se añadía una mención al deterioro institucional, una batalla que, de cualquier modo, se hallaba ya irremediablemente perdida por el gobierno ante la opinión pública. Sobre esta base podría montarse para responder los cuestionamientos externos e internos acerca de su relación con Menem y los funcionarios del gobierno, en el entorno controlado de dicha entrevista:

ANALES: ¿Cómo es la relación con el poder para mantener la necesaria independencia de criterio?

CROTTO: Yo tengo un profundo aprecio por el presidente Menem, creo que él me aprecia también. Con los ministros –algunos más y otros menos- también tengo una buena relación. Pero yo creo que a la dirigencia gremial empresaria también se la respeta cuando se expresa si no está de acuerdo. Por ejemplo, al discurso de Palermo lo pensé mucho [...] se trató de usar las palabras justas porque si algo no quería era ofender a nadie, pero tenía el íntimo convencimiento, como lo tenía toda la CD, que había algunas cosas que marcar.

-ANALES: ¿No le preocupa la imagen oficialista que se puede tener al estar tan cerca de Menem?

-CROTTO: Siempre que uno hace cosas está expuesto a que lo tilden de oficialista o de antioficialista. A veces es difícil marcar una línea exacta pero siempre hemos peleado en favor del campo y del país, más allá de simpatías personales que se pueden tener por determinada persona. Nosotros nunca hicimos algo pensando qué le convenía o le dejaba de convenir al poder de turno, pero siempre lo hicimos pensando qué le podía convenir al campo.

La entrevista cierra con un Crotto exultante, quien augura un futuro brillante para la SRA, y que sintetiza en pocas líneas el espíritu de este período:

ANALES: ¿Cómo ve a la Rural dentro de 10 años?

CROTTO: Yo me animaría a decir que vamos a ser la entidad más poderosa de la Argentina y no me limito con esta apreciación al sector agropecuario. Todo está dado para que lo seamos no solamente en lo político sino también en lo económico. Y así debería serlo porque al final, el sector agropecuario es el más importante de la Argentina (A-Dic97: 22-4).

Mientras tanto, la idea de la modificar la Constitución para poder presentarse por tercera vez consecutiva como candidato a la Presidencia había sido ya abandonada por

Menem, y la SRA comenzó tempranamente a sondear a los posibles candidatos a sucederlo. En el número de Anales de diciembre de 1997 se publicaron dos entrevistas realizadas a Carlos Reutemann, uno de los posibles candidatos del oficialismo, y a José Luis Machinea, referente económico y posterior ministro de economía de la Alianza. Las preguntas de la SRA buscaban indagar acerca de la continuidad del esquema macroeconómico puesto en marcha por el menemismo, así como en la política agraria que desarrollarían, haciendo eje específicamente en la presión fiscal y la tan temida posibilidad de reinstalar las retenciones.

La relación con las restantes entidades agrarias, por otra parte, tuvo escasos puntos salientes, ya que éstas desistieron de confrontar directamente con el gobierno durante la mayor parte del período. Sin embargo, se mantuvo el vínculo con éstas para resolver cuestiones comunes, muchas veces de carácter técnico. A modo de ejemplo, la Mesa Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires continuó reuniéndose para consensuar la presentación de propuestas de rebajas de impuestos, mientras que en marzo de 1996 las cuatro entidades presentaron al gobierno una propuesta referente al proyecto de ley sobre la explotación de hidrocarburos, en el que se buscaba avanzar en el establecimiento de “la libre negociación entre las partes involucradas”, para lo cual se proponían “mecanismos tendientes a nivelar aquellas diferencias que muchas veces han perjudicado a los productores agropecuarios” (A-Mar96: 4).

Asimismo, la SRA mantuvo su participación activa en el G-8, que siguió mostrando su vitalidad para enarbolar demandas de contenido general de algunas de las fracciones más concentradas del capital. Así lo expuso Crotto, de forma contradictoria en lo que refiere a los beneficios obtenidos para la rama agraria, en la Asamblea Ordinaria de 1997:

Con el Grupo de los 8, quizás no hemos hecho tanto para el campo pero sí para lo importante que es el país. Logramos, por ejemplo, cambiar el impuesto a las ganancias, lo que trajo algunos problemas con ciertas empresas que tienen muchas ganancias y poco capital. Esto es imprescindible para el campo y gracias al apoyo y al trabajo junto con otros sectores de la industria, de la banca y del comercio, lo pudimos llevar a cabo (M97: 78).

Dicho grupo, mientras tanto, sostendría su acción sobre las líneas preestablecidas: flexibilización laboral y reducción de gasto público (M97: 209-10).

6.2. La unificación de los comités

A lo largo estos años, la entidad avanzaría en el proceso de unificación de los grupos enfrentados en el seno de la comisión. Durante los seis años que siguieron a la elección de 1990, ambos comités mantuvieron su existencia, aunque procurando resolver la disputa bajo

los carriles habituales. Esto significó, como vimos, la búsqueda del consenso en torno a la presentación de una sola lista que había llevado a la cabeza a de Zavalía en 1992, para posteriormente definir a Crotto como el candidato del consenso en 1994.

En 1996, la fisura terminó de cerrarse, y la SRA anunció con bombos y platillos la unificación de los comités enfrentados en la Asamblea Ordinaria, en la que se reeligió la fórmula Crotto-Miguens. El editorial de octubre anunciaba a los socios la buena nueva:

A dicha asamblea se llegó con un solo comité unificado, formalizándose así la unidad de criterios en la conducción. La coincidencia entre los asociados ya era clara en los últimos cuatro años, cuando el Comité de Unión Rural y el Acción Rural presentaban listas de unidad en las asambleas. Hoy, la integración de ambos comités en el de Unidad y Acción institucionaliza lo que fue la voluntad de todos: cerrar filas tras un único ideal ruralista (A-Oct96: 3).

El nuevo comité, a cuya cabeza se hallaba Hugo Feü, director de Acción Gremial y artífice de la unión, tendría la misión de consensuar la presentación de listas. La unificación de ambos grupos implicó una modificación en la forma en que este órgano había funcionado tradicionalmente, de forma que ambos grupos tuvieran representación en él. Así lo explica el propio Feü:

Pensamos en pequeñas modificaciones. El Comité debía ser presidido no por una sola persona como siempre fueron los Comités de la Rural, sino por una Mesa Directiva en la que precisamente estuviéramos representados los dos anteriores grupos [...]. Se decidió que la Mesa Directiva estuviera integrada por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios. Eso fue aprobado por los dos comités, y llegó el momento de designar quiénes iban a ser las autoridades. Y además se había establecido que la Mesa Directiva tuviera una duración de dos años en su mandato, y que cada dos años se eligiera por voto secreto de todos los miembros del Comité las nuevas autoridades [de forma] que hubiera una posibilidad de rotación [...]. El primer período [...] se decidió que fuera de tres años en vez de dos [...]. Se eligió para integrar a esa Mesa Directiva a Darío Anasagasti como Vicepresidente, a [Héctor] Pereda y a Ravagnan como Secretarios, y a mí me eligieron Presidente (A-Oct96: 39).

En síntesis, mientras la entidad consolidaba su relación con el menemismo, la CD comenzaba a soldar su fractura. El drama del predio de Palermo, mientras tanto, desarrollaba su segundo acto: las obras comprometidas por contrato ni siquiera habían sido iniciadas, y el consorcio formado para su explotación con el banquero Moneta comenzaba a trastabillar, junto con la situación económica de éste. La CD encontró entonces en OGDEN, un capital estadounidense, un nuevo socio para la explotación. Las condiciones impuestas por éste, sin embargo, serían más duras.

Comenzaba así a revelarse que, a pesar de haber pagado por el predio un precio marcadamente bajo, su adquisición no había sido un buen negocio. La situación financiera de la SRA comenzaba a complicarse: los balances arrojaban déficit, que estaba siendo compensado mediante la no realización del mantenimiento del predio, además del no pago de la deuda y la no ejecución del cargo público al que se había sometido, esto es, la construcción de las obras proyectadas. De momento, la solución consistió en la venta del predio que la organización poseía en Del Viso, lo que resolvió sus problemas inmediatos de caja y le permitió cancelar la deuda con los bancos privados por la adquisición del predio.

A pesar de estas dificultades, la dirigencia también logró cerrar filas en torno a esta cuestión. Prueba de ello fue que Horacio Gutierrez, otrora enfrentado a la conducción oficial de la entidad, manifestó su acuerdo con la propuesta en la Asamblea.

Paralelamente, la SRA seguía procurando avanzar en la expansión de su representatividad. Por una parte, el sistema de delegaciones prosiguió su desarrollo sobre la base del trabajo de Crotto y su comitiva, que recorrían personalmente el territorio nacional para visitar las nuevas delegaciones y consolidar los vínculos. Dichas visitas ocupan varias páginas de las Memorias de este período. Por la otra, la SRA decidió avanzar también en la incorporación de sociedades rurales del interior mediante la creación del ya referido CF.

Estas transformaciones impactarían sobre la fisonomía interna de la SRA, que buscaría profundizar la renovación de la CD mediante la incorporación de algunas de estas nuevas figuras, particularmente los delegados. Si bien estos no tendrían formalmente un director que los represente, la CD buscaría promover a algunos de ellos de forma individual, dando un nuevo paso en esta renovación:

[El cuerpo de delegados] ha sido un semillero de dirigentes, porque hemos ido viendo la actuación de los delegados de las distintas zonas, y la Rural los ha incorporado como directores [...]. No menos de entre 25 y 30 delegados han sido y son actualmente Directores de la SRA. Es un número importante, que han formado parte de la CD. Inclusive en la nueva renovación de diez cambios que hay en la CD, de diez personas que entran como nuevos Directores, cinco son Delegados. En esta incorporación también entra un presidente de una Sociedad Rural del Interior del CF. Así que la gente que tiene más inquietudes, los dirigentes que tienen más convocatoria en la zona, más capacidad de acción, los vamos incorporando a la CD.

La velocidad a la que avanzaba la renovación, por otra parte, era inusualmente rápida. En 1996 habían ingresado siete nuevos vocales a la CD, de los cuales apenas dos registraban antecedentes como suplentes. La CD se creyó entonces en la obligación de explicar este proceso a sus socios:

ANALES: En esta renovación, teniendo en cuenta que es consensuada, llama la atención la cantidad de miembros que se renuevan. Yo creo que esto es positivo, es una opinión personal [...] porque las dirigencias no deben eternizarse [...]. Pero pareciera ser una política novedosa dentro de la SRA, porque no recuerdo que haya habido grandes modificaciones, por lo menos en los últimos años. Y el hecho de que participen delegados zonales, o como en este caso concreto, un presidente de una sociedad rural, también está diciendo que los mecanismos que se pusieron en marcha [...] están dando sus frutos.

Feü: Yo creo que eso también marca un funcionamiento de la CD distinto porque todos los directores que se incorporan han sido delegados, han vivido y viven en zonas del interior y viven los problemas con un conocimiento profundo de lo que está sucediendo en su zona. Entonces es una comunicación más directa de la entidad [...] con todas las zonas productoras del país (A-Oct96: 40-1).

En suma, durante el período de mejor relación con el gobierno menemista, la CD de la SRA cerró filas y avanzó en el proceso de transformación interna. De igual modo, la imagen pública de la entidad, salpicada por los escándalos relacionados con el predio y por lo que parecía una excesiva cercanía con el gobierno, avanzó en su deterioro.

6.3 Síntesis del período y forma de la acción política

Los tres años que ocupa este período constituyen, indudablemente, un respiro para una entidad que parecía haberse hallado al borde del colapso. La estrategia de acercamiento al gobierno se le había vuelto cada vez más pesada, en la medida en que la producción agraria seguía estancada. Por añadidura, las restantes organizaciones agrarias no vacilaban en enfrentar al gobierno en la calle.

Hacia mediados de la década, dicha estrategia comenzaba a resultar contraproducente. Oportunamente, sin embargo, los indicadores y precios agrarios comenzaron a mostrar signos de mejora, mientras la acumulación seguía expandiéndose, sólo perturbada por la Crisis del Tequila. Sobre esta base, la dirigencia de la SRA no sólo respiró aliviada, sino que dio inicio a un extenso período de apoteosis, a lo largo del cual los distintos problemas que iban apareciendo serían soslayados de forma marcada.

Se trató, en este sentido, de un lapso en el que la alianza establecida con los restantes miembros del G-8 se estabilizaría. La disputa con los capitales industriales había ya quedado atrás, y el grupo lograría asentarse como uno de los soportes más significativos del neoliberalismo. Incluso las restantes entidades agrarias habían entrado en una fase de retracción de sus acciones de protesta, con lo cual amainaría la tensión entre éstas y la SRA. Así, la forma que había tomado la acción política de la asociación se sostuvo a lo largo de estos años.

Paralelamente, la dirigencia de la entidad cerraba filas con la unificación de los comités enfrentados, y avanzaba en su intento por expandir su representatividad. La SRA parecía tener ante sí un futuro brillante, como Crotto no se privaba de señalar.

Como veremos a continuación, le llevaría muy poco tiempo desengañarse.

Capítulo 7

Pedaleando en el aire. La desorientación de la SRA durante la crisis de la convertibilidad (1998-2001)

Los dirigentes del campo y la industria [...] piden una devaluación. [...]. A medida que pasa el tiempo se empiezan a ver cuáles son los grupos corporativos que estuvieron al lado del Gobierno en las épocas de vacas gordas y cuando se acerca el final abandonan el barco [...]. Que algunos industriales pidan devaluaciones no me sorprende pero hay otros sectores que ahora abandonan el barco.

Roque Fernández, Ministro de Economía, 28/03/99.

En cuanto a las declaraciones atribuidas al Sr. Ministro referidas a que empiezan a verse cuáles son los grupos corporativos que cuando se acerca el final abandonan el barco, afirmamos categóricamente que nuestra entidad no abandonará jamás el barco, porque para nosotros el barco es el país.

Comunicado de prensa de la SRA, 29/03/99.

La mejora de algunos indicadores y precios agrarios que había caracterizado al período anterior, así como las expectativas que ello había generado, entraron en una violenta reversión en 1998, mientras las principales variables macroeconómicas de la convertibilidad también se desplomaban como un castillo de naipes. A ello se sumó una serie de inundaciones que afectarían durante todo el período extensas áreas de la región pampeana. En este marco, la SRA revertiría nuevamente el curso de su acción hacia una posición más crítica, que incluiría esta vez la realización de un paro ganadero junto a las restantes entidades. Sin embargo, siguió procurando sostener el “modelo” frente a su inminente colapso, mostrándose incapaz de siquiera pensar una alternativa.

7.1. De la apología a la desesperación...

Las primeras evidencias de la crisis ya se habían hecho presentes a principios de 1998. Escaso de fondos, el gobierno había presentado un proyecto de ley para modificar nuevamente el IVA agropecuario. Así, la euforia menemista que persistía hacia diciembre de 1997 cedió paso hacia una dura protesta apenas dos meses más tarde. La SRA salió con

los taponés de punta a enfrentar el proyecto de ley de modificación del IVA, sumando otras críticas que había dejado pasar durante el período anterior. En el editorial de febrero de 1998 puede apreciarse este brusco cambio en el humor de la entidad:

Es una verdad por todos conocida que la elevada tasa del IVA es el motor de la evasión fiscal [...]. También es sabido que el motivo por el que se hizo necesario elevar la tasa a esos niveles es el desequilibrio en las cuentas del Estado. El gasto público ha continuado creciendo a pesar de leyes y decretos que con pomposos nombres anuncian reformas del Estado tendientes a disminuirlo. [...]. Casi inerte frente a la falta de decisión política de sancionar efectivamente a los presuntos evasores, [la DGI] recurrió al facilismo de sugerir una medida que intentó presentar como una concesión a la producción: la baja de la alícuota del IVA a la primera venta agropecuaria. Esta propuesta [...] no significa otra cosa que continuar pagando el 21% en las compras y cobrar el 10,5% en las ventas. Después vendrán los técnicos con alambiques y explicaciones e intentarán decirnos que lo que vemos como un perjuicio no es tal, pero la verdad siempre está cerca de las cosas simples: si cobro la mitad de lo que pago, pierdo dinero, aunque me digan lo contrario [...]. Se dice que tenemos un crédito fiscal que de alguna manera nos será devuelto, pero la historia dice que eso no es así [...]. ESTE PROYECTO NO REDUCE UN IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN, CREA UN IMPUESTO NUEVO [...]. La pretendida medida tiene un claro sesgo antiproductivo, configurando un nuevo intento de discriminación sobre el sector, y actúa como un desincentivo para la inversión [...]. Cabe al Estado arbitrar los medios para solucionar la evasión [...] y con respecto al nivel de la alícuota, bajarla en forma general encontrando el camino hacia el equilibrio fiscal a través de la austeridad en el gasto que toda la sociedad le reclama (A-Feb98: 3; mayúsculas en el original).

La protesta, como se ve, adopta duros términos. Ante la reaparición del déficit fiscal vuelve a insistir sobre la necesidad de bajar el gasto público, acusando al gobierno de ser el responsable de no avanzar en su reducción. Al mismo tiempo, reaparecen las acusaciones de “discriminación” al campo, poco tiempo después de haberse afirmado que el gobierno menemista había puesto fin a dicha política.

El escenario se ponía aún más negro con la renovación de los intentos por privatizar al Banco Nación, que concentraba la mayor parte de la deuda del sector agrario. Ya despuntando la crisis, y privatizado buena parte del capital que se hallaba bajo control estatal, el gobierno comenzó a apuntar hacia los restos, reflatando una idea que había sido echada a rodar dos años antes.

La sola idea causaba escozor en las filas ruralistas. La tapa del citado número de Anales, de título “vendiendo los fardos de la abuela” refería a una nota acerca de este tema. Ya en su epígrafe se desnudan los límites dentro de los que podía avanzar, para la SRA, el proceso de privatizaciones, a la vez que deja en evidencia que los argumentos utilizados

para oponerse a la venta podrían haber sido igualmente aplicados durante el avance general de dicho proceso a principios de la década:

Más que la idea de mejorar su nivel de “eficiencia”, la decisión de privatizar el Banco Nación esconde la necesidad de obtener recursos para la reducción del déficit fiscal. Con su privatización [...] se corre el riesgo de dejar sin asistencia bancaria a miles de productores, industriales y comerciantes diseminados por todo el país.

La nota revela no sólo un quiebre en la relación de la entidad con el gobierno, sino también un problema más profundo: una temprana manifestación de los límites que enfrentaría su orientación ideológica, y que acabaría por sumir a la entidad en la más profunda desorientación. Detengámonos entonces brevemente en este episodio.

En primer lugar, como vimos, la asociación había necesitado recurrir a algunas de las objeciones que formulaban aquéllos que enfrentaron la ola de privatizaciones de principios de la década. Peor aún: para sostenerlas tendrían que combatir los argumentos oficiales, que no hubieran dudado en hacer propios de no tratarse de una privatización que los afectaría particularmente.

Se trataba, afirmaban desde el gobierno, de un banco con una gran cartera de morosos entre los cuales destacaban los capitalistas agrarios,⁸⁶ que por añadidura tomaban los créditos oficiales a un interés marcadamente menor que el que ofrecían los bancos privados.⁸⁷ Su privatización permitiría incrementar la eficiencia del banco. Para los capitales agrarios, sin embargo, esto suponía el encarecimiento del crédito (y para muchos de los más pequeños, estrangulados por el endeudamiento y siempre al borde del remate, significaba la liquidación lisa y llana).

Ante este escenario, la SRA sólo atinó a afirmar que:

Quienes piensan que hay que privatizar el Nación señalan la “exagerada” proporción de créditos con problemas –una cuarta parte de su cartera- como un prueba inequívoca de que sus directivos no han sabido seguir los principios elementales con que las entidades tienden a asegurar su patrimonio [...]. Pero vayamos por partes y de la mano de un “traductor” de palabras [...]. Por ejemplo, cuando se dice “préstamos políticos”, se dice productores que no pagan porque se han declarado en zonas de emergencia o de desastre agropecuario y que han tenido que ser financiados [...]. Lo cierto es que el Banco Nación ha sido la entidad que más ha sostenido financieramente a los productores. Cuando se dice “cartera de incobrables” tampoco es justo ubicar en dicha categoría a clientes con garantías hipotecarias [...]. Si las garantías

⁸⁶ También de acuerdo a un informe de la CRA citado por Sidicaro (2002, pág. 194), el endeudamiento bancario había aumentado un 190% en las explotaciones agrícolas y ganaderas durante el primer lustro de la década, mientras que un 64% del crédito tomado correspondía a la banca pública.

⁸⁷ En la misma nota la SRA afirmaba, al respecto, que “hoy la banca privada está prestando a las PYMES en el orden del 16 al 24% de interés, mientras que el Nación está entre el 11 y el 9% de acuerdo a la línea”.

hubieran pasado a manos privadas, miles de productores se encontrarían hoy sin su campo, producto de los remates y liquidaciones [...]. Pero el panorama en este sentido es alentador. El nivel de morosidad del banco se va reduciendo día a día. El campo –que representa un poco más del 50% de la cartera del banco- no es mal pagador, sólo necesita tiempo para acomodarse después de décadas de discriminaciones y malas economías.

La SRA resumaba indignación por todos sus poros. Mas no sólo no tenía más argumentos para ofrecer que el mencionado “panorama alentador”, sino que tampoco podía justificar adecuadamente por qué, súbitamente, la quiebra de los capitales incapaces de pagar su deuda (esto es, los que el discurso neoliberal consideraría como “poco eficientes”), se había transformado en un problema. Lo mismo sucedía en relación al propio banco: la entidad podía mostrar que a pesar de ofrecer crédito a tasas más bajas éste producía ganancias, pero se le hacía mucho más difícil enfrentar el argumento de la “ineficiencia” en relación a las sucursales que, consideradas individualmente, daban pérdidas: “Hay unas 330 [sucursales] que, por estar en pequeños pueblos a lo largo y ancho del país, irremediablemente dan pérdida aunque presten un servicio vital, que obviamente una banca privada cerraría inmediatamente”.

Esta objeción se contraponía frontalmente, por ejemplo, con el apoyo brindado a la privatización de los ferrocarriles públicos, en la que el argumento de la ineficiencia pesaba más que el del cierre de los ramales, “lamentable pero necesario”. Peor aún: no pudieron dejar de reconocer que el sostenimiento de dichas sucursales y de la menor tasa de interés podía ser considerado un subsidio:

Los teóricos sostienen que esto no es argumento para ir contra la privatización y que si la decisión política de la sociedad es mantener un subsidio para ciertas actividades o regiones, debe ser dispuesto por ley e incluido en el presupuesto. Muy bien. Vendamos el Banco Nación y hagamos números. El banco gasta por mes para funcionar 50 millones de dólares. Las sucursales no rentables representan la mitad de ese gasto, unos 300 millones de dólares anuales si las van a subsidiar para mantenerlas abiertas. Si uno suma a ese banco los “subsidios” que el banco da porque a través del volumen puede dar mejores tasas, más la asistencia que debe realizar, más el costo de estructura para llevar a cabo todo esto, no se puede pensar en una cifra menor a 1.000 millones de dólares. Quien crea que algún ministro vaya a otorgar del presupuesto nacional 1.000 millones de dólares por año para compensar esto es por lo menos un ingenuo.

De esta forma, la crítica del sostenimiento de capitales “ineficientes” o del otorgamiento de subsidios para sostenerlos cedía paso al lamento ante el avance de esta política sobre un área que afectaba particularmente a la entidad. Cerraba la nota un último acápite en la que la SRA sintetizaba sus propias contradicciones de una forma muy

expresiva: “no se puede ser tan ingenuo de pensar que porque el mundo corre hacia una economía desregulada y más abierta no tiene cabida un banco de propiedad estatal” (A-Feb98: 6-8).

La asociación comenzaba a enfrentarse así a las consecuencias de la política que había apoyado, de manera general, durante casi una década. Frente a la reaparición del déficit fiscal, la emisión de dinero estaba bloqueada por la convertibilidad. Y la sobrevaluación del peso que ésta expresaba requería, a su vez, del ingreso permanente de divisas. La crisis internacional desatada en los últimos meses de 1997, en este contexto, se cernía sobre el sostén de la Convertibilidad: el ingreso continuo de una masa de riqueza social bajo la forma de la deuda externa. En este marco, el gobierno buscaba resolver la cuestión mediante la reducción del gasto público, tal como sugería la SRA; sin embargo, había intentado hacerlo atacando precisamente uno de los pocos soportes de los que aún podían sostenerse los capitales agrarios, cuya liquidación seguía avanzando. Y cuando aquél blandió los argumentos con los que la organización había insistido durante años para apuntalar el avance del programa económico neoliberal, la dejó con pocas armas para defenderse.

La desorientación en que quedaría sumida la dirigencia de la SRA, sin embargo, apenas comenzaba a despuntar. La relación tejida con el gobierno menemista se deterioraría mucho más rápidamente.

A la modificación del IVA agropecuario ya referida se sumaría el envío al Congreso de un “proyecto de reforma tributaria”, que significaba un nuevo intento por avanzar en la expansión de la presión impositiva, y resucitaría las tensiones que la entidad se había apresurado a enterrar. Ante la insistencia del gobierno en dar luz verde al proyecto, Crotto concurrió en mayo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para expresar su oposición a los aspectos del mismo que afectaban a la producción agraria: el aumento de la alícuota máxima del impuesto a las ganancias, la modificación de los impuestos internos, la reimplantación del impuesto a los activos bajo el nombre de “ganancias presuntas” y la creación de uno nuevo sobre el endeudamiento financiero, lo que se sumaba a la modificación del IVA. A esa acción siguió la publicación de un comunicado de prensa que rechazaba enfáticamente el paquete (M98: 183-5).

Mientras el proyecto de reforma tributaria se traba en el Congreso, la modificación del IVA agropecuario acabaría siendo promulgada por decreto en mayo. La SRA avanzó entonces en la escalada interponiendo un recurso de amparo que fue aceptado, y forzando así al gobierno a negociar. Una expresión de Crotto en un discurso, que se convirtió en la tapa de la Anales de mayo, sintetizaba en pocas palabras el cambio de humor de la entidad: “si querían hacerla mal, les salió fenómeno”. En la edición de marzo, una nota titulada “IVA: ¿la vuelta al populismo?” había llevado el no menos expresivo epígrafe: “con un criterio más

populista que económico la reducción del IVA es una nueva retención a la producción agropecuaria”. El decreto fue finalmente anulado y reemplazado posteriormente por uno que afectaba en mucha menor medida a dicha producción, pero la relación quedaría resentida.

A pesar de haberse anotado un pequeño triunfo, la excesiva cercanía que la entidad había entablado con el gobierno comenzaría a pasarle facturas cada vez más abultadas. Con argumentos válidos o no, comenzaron a surgir cuestionamientos que referían a que su accionar había sido tardío. La SRA se vio obligada entonces a justificarse ante sus socios, publicando una nota en Anales en la que se efectuaba una cronología de sus intentos por evitar la sanción de la modificación del impuesto, que iban desde entrevistas con el presidente hasta la interposición del recurso de amparo, pasando por numerosas protestas verbales (A-Jun98: 9-11).

Si bien la disputa por el IVA agropecuario fue la más dura en relación al aumento de la presión impositiva, estuvo lejos de ser la única. En 1998 se aumentaron también otros impuestos y se crearon nuevos, algunos de los cuales fueron ya señalados, mientras que otros sobrevendrían con posterioridad, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Las Memorias de 1998 dedican un apartado especial a esta cuestión y sintetizan en la sección de análisis económico: “el período bajo análisis se caracterizó por una casi constante confrontación entre las entidades agropecuarias y el gobierno en materia tributaria, especialmente con referencia al IVA” (M98: 13).

En efecto, la confrontación había sido constante durante ese año. Ya en enero la FAA, encabezada por Chacareros Federados (CF), una de sus fracciones internas, había realizado un corte de ruta al sur de la provincia de Santa Fe el 23 de enero de 1998 (LN, 23/01/98). Durante los dos meses siguientes, la FAA repetiría la acción cuatro veces más en distintas localidades de Córdoba y Buenos Aires (LN, 30/01, 11 y 28/02, y 12/03/98). En la mayoría de estas acciones fueron acompañados por CONINAGRO, federaciones adheridas a CRA (CARTEZ o CARBAP, según la región), el MMAL, y entidades que representan a los transportes de carga. En agosto, CARBAP realizó un paro, con el apoyo de la CRA y la FAA (03/08/98). Dos meses más tarde, la FAA realizó un acto en Plaza de Mayo, con el apoyo de la CTA (LN, 09/09/98). En diciembre, la FAA, CONINAGRO y CRA cerraron el año con una serie de asambleas en las que discutieron nuevas medidas de fuerza (28/12/98 y 09/09/99). Como resultado, dispusieron realizar en enero una movilización en Pergamino (LN, 13/01/99).

Así, tras un breve período de tensa calma, la confrontación volvía a plantearse para las entidades agrarias en términos de acciones directas, en abierto contraste con el accionar desarrollado por la SRA. En su defensa, había vuelto a alegar la opción por la negociación frente a la acción pública de protesta. Sucedió no obstante que, como se había manifestado

anteriormente, este obrar mostraba pocos resultados, y la imagen oficialista que se había granjeado comenzaba a pesarle.

Los aumentos impositivos no fueron los únicos que afectaron directamente a la producción agraria. Al aumento en el precio del gasoil de fines de 1997 se sumaba uno del 10% en el del peaje a principios de 1998. De este modo, la defensa que la asociación seguía ejerciendo sobre la aplicación de las reformas neoliberales comenzaba a mostrar un grueso error de cálculo: lejos de bajar los costos de producción, la privatización de empresas resultó en una suba de estos.

Así, la SRA quedaba colocada en una posición complicada. Por una parte, no podía hacer otra cosa que seguir defendiendo el proceso de privatizaciones. Tampoco podía, al mismo tiempo, dejar de protestar ante estos aumentos. Pero al hacerlo, seguiría evitando avalar la confrontación directa que ejercían las restantes organizaciones. En lugar de ello, retomó su cruzada contra los capitales industriales, en este caso, los transportistas, sobre quienes buscó descargar el aumento de precios, sin poner en cuestión la privatización de las rutas. Así se expresaba Crotto en una entrevista:

ANALES: ¿Cuál es tu posición acerca del aumento del peaje del 10%? Hubo mucha oposición y protestas como el tractorazo...

Crotto: Creo que es una injusticia que en un país que tiene inflación cero haya aumentos de peaje. Más allá de que estén autorizados o no [...] también creo que a veces las reacciones son desmedidas [...]. En un flete, el peaje es una porción del costo bastante chica y me parece que también sería responsabilidad de las empresas de transporte asumir ese costo, porque acá no hay que olvidarse que para el transportista el viaje es más rápido, y más seguro, porque el camión se rompe menos, las gomas se rompen menos. Nadie duda que las rutas deban ser manejadas por peaje. Han mejorado. Yo no sé lo que sería de este país si las rutas no tuvieran peaje (A-Mar98: 29).

A estas cuestiones se sumaba un exceso de lluvias que había provocado inundaciones en distintas regiones del área pampeana, y el declive de los precios de las mercancías agrarias que habían retrocedido a los valores de los años previos a la suba de precios. La SRA comenzó a entrever un panorama oscuro:

La situación por la que atraviesa hoy el productor agropecuario dista mucho del optimismo y la cuasi euforia de hace pocos meses. Los excelentes rindes que hacían avizorar las abundantes lluvias durante el primer período de la [cosecha] gruesa se fueron convirtiendo en lo que es hoy una cruda y dolorosa realidad. Fue muy difícil ya en diciembre levantar el trigo, el girasol se derrumbó por el exceso de humedad, el desastre algodonero en el Chaco es por todos conocido, los enormes volúmenes logrados en maíz no se pueden cosechar por falta

de piso o por caminos cortados. La soja está comprometida severamente. Las inundaciones en zonas ganaderas del litoral han afectado mucho más que la producción [...].

En medio de este panorama surge casi como una extravagancia del [...] gobierno [...] la decisión de rebajar el IVA agropecuario, reteniendo en condiciones de difícil sino imposible recuperación casi dos mil millones de pesos que pertenecen al sector al que se pretende ayudar [...]. El gobierno y el sector exportador se beneficiarán con este duro castigo al productor. El primero recibirá oxígeno financiero para cubrir parte del déficit fiscal que para este año está calculado en 3.500 millones. El segundo dejará de soportar el costo que significa el tiempo que la DGI demora en devolver los 600 millones que por año debería reintegrarle por las exportaciones.

El productor será el principal perjudicado, y al mejor estilo de la deleznable progresividad de los impuestos territoriales, más se perjudicará cuanto mayor sea la inversión destinada a mejorar su eficiencia (A-May98: 4).

Pero si algo terminó de irritar a la SRA fue la errática política ganadera que se desarrollaría en este período. Ya en marzo había expresado su enojo por la puesta en marcha de un plan de trazabilidad de la hacienda ganadera acorde con las exigencias de importación de la UE, que no había sido consensuado con las entidades, así como denunciado irregularidades en el proceso y precios excesivos (A-Mar98: 6).

Ahora bien, si el gobierno menemista había logrado algún mérito en dicha área, éste consistía en la exitosa implementación de una serie de programas para la erradicación de la fiebre aftosa, que tras siete años habían obtenido el muy ansiado logro de recibir el status de país libre de aftosa con vacunación, lo que permitía avanzar en la reapertura del mercado europeo. La SRA había ponderado la labor de los propios ganaderos en la erradicación de la enfermedad, pero reconocido en distintas oportunidades la importancia de estos programas. Era, por lo tanto, algo que no podía quedar abierto a manoseos de ningún tipo.

Las necesidades de la campaña, sin embargo, marcaban como prioridad la exhibición de algún triunfo en medio de la crisis. Junto al Ministro de Economía, el nuevo director de un SENASA en plena reestructuración tras la salida de su titular, Bernardo Cané, en diciembre de 1996, anunciaron sus planes de declarar ante la OIE el fin de la vacunación y reclamar el status de país libre sin vacunación, sin haber dado previa noticia a las entidades agrarias. El plan no pudo ser concretado, y la SRA se horrorizaba ante la improvisación que exhibía el gobierno en tan sensible área:

Asistimos con cierta tolerancia a algo así como un renovado suplicio de Tupac Amaru, en el que distintos funcionarios forcejean por llevarse la mayor porción posible de mérito por el logro obtenido. Desaparece Cané y se reestructura el SENASA, disminuyendo en forma preocupante la participación [de las entidades agrarias] en las decisiones del organismo. Mientras tanto el productor sigue sosteniendo con esfuerzo una situación que permite a los

funcionarios comenzar a hablar del fin de la vacunación. Leímos en los diarios que el titular del SENASA, Luis Barcos, y el propio Ministro de Economía, Roque Fernández, anunciarían en París ante la OIE el fin de la vacunación durante 1999, reclamando para el país el status de país libre de aftosa sin vacunación. Sorprende la ausencia del secretario Felipe Solá en esa oportunidad, pero más sorprende leer en los diarios que el anuncio no se hizo.

Idas y venidas, sugestiva danza de improvisaciones en tiempos políticos ante un inminente 1999 teñido por los colores de la lucha electoral.

Es necesario tener bien en claro que el fin de la vacunación obligatoria implica [...] la prohibición de vacunar en el país. Con eso no se puede jugar. Aceptamos el forcejeo por llevarse los méritos políticos, pero no vamos a permitir que en ese tironeo el Inca despedazado sea la salud de nuestras vacas [...]. En lugar de volcar el esfuerzo hacia el logro de medidas eficaces e seguridad en fronteras, se juega peligrosamente con la idea de hacer coincidir el año electoral con el éxito por decreto en una larga lucha [...]. Así como el Estado controló que los productores cumpliéramos con la responsabilidad que nos tocaba en esta lucha, hoy exigimos al Estado que haga lo suyo y no se embarque en apresurados e irresponsables sueños triunfalistas (A-Jun98: 4-5).

A esto se agregaba un recambio en la SAGPYA que la organización calificó como “traumático”. No sólo por la salida de Solá, con quien habían mantenido una excelente relación, sino porque incluso las segundas líneas de la secretaría también serían reemplazadas, en lo que fue interpretado como una lucha por un botín político y marcada por enfrentamientos personales en medio de la campaña (A-Sep98: 32-4).

En este estado de cosas, y con un inminente paro ganadero fogueado por CARBAP, se acercaba la exposición de Palermo. A pesar de que la relación con el gobierno se hallaba en el punto más crítico de toda la década, la SRA se resistía a enfrentársele con algo más que protestas verbales, y se atuvo a la línea que había enarbolado durante toda la década: la condena a todo tipo de acción de protesta que realizaran las restantes entidades. En particular, la relación con CARBAP se había resentido especialmente por efecto de la creación del Consejo Federal, al cual dicha entidad no podía dejar de ver como un competidor directo. A ellos refiere, por elevación, el editorial de junio, en el que se llamaba a dejar de lado “mezquinas banderas que son parte del pasado”, y a no dejar “que las nuevas generaciones de dirigentes confundan declamación con trabajo fecundo, ruin lucha por pequeños espacios de poder con representatividad y vetustez con tradición”, para cerrar con una declamación en la que sintetizaba su posición durante toda la década: “las entidades que agotan su accionar en lo meramente contestatario son ya historia” (A-Jun98: 6-7).

Mientras las restantes organizaciones intensificaban sus acciones de protesta frente al gobierno de Menem durante el segundo semestre de 1998 y el primero de 1999, la SRA mantendría esta línea, amonestando incluso con mayor dureza al accionar de aquéllas. La disputa con CARBAP, mientras tanto, recrudecía. Esta entidad había ratificado un paro

ganadero de siete días en protesta por la reforma impositiva, y tras un recambio dirigenal, la CRA en pleno había apoyado la medida. Aunque no adhirió formalmente, también la FAA recomendó a último momento a sus socios no efectuar operaciones comerciales.

La semana de paro inició el 2 de agosto, pero Liniers no quedó completamente desabastecido: los primeros días ingresaron entre un 40 y un 65% del promedio habitual de cabezas (CL, 02/08; LN, 03 y 04/08/98). El presidente de CARBAP demoró poco tiempo en acusar a la SRA de boicotear el paro enviando carne al mercado, y la respuesta no se hizo esperar:

Es necesario expresar hoy nuestros deseos ante algunas actitudes que parecen hacernos retroceder cuarenta años en la historia [...] Utilizar una medida de fuerza como el paro ganadero como instrumento en una contienda electoral nunca es acertado, y menos cuando casi un 40% de sus asociados manifiesta su desacuerdo. Que una entidad provincial lo decrete, basado en problemas de orden nacional, tampoco lo es. Si a eso agregamos que la entidad está representada en el orden nacional por una Confederación que está discutiendo los mismos problemas y obteniendo resultados mediante la negociación y la propuesta, el resultado no puede ser otro que el que quedó a la vista: una desdibujada medida de fuerza con escasos y desgastados apoyos formales [...]. Las declaraciones del flamante presidente de CARBAP imputando a los socios de la SRA la responsabilidad de los ingresos de hacienda a los mercados sonaron patéticas. Fue demasiado evidente el intento de responsabilizar a terceros frente a fracasos que sólo surgen de erróneas decisiones [...].

Más allá de las luchas, discusiones y propuestas de ajustes frente al gobierno y la política fiscal, Palermo demostró el unánime apoyo de la producción a los lineamientos de la política que llevó al agro a la posición que hoy ocupa (A-Ago98: 7-8).

En efecto, Crotto no había dejado pasar la visita de Menem y su séquito a la exposición de Palermo para enrostrarle todos los problemas que la entidad venía marcándole, en un tono ya no tan amistoso. A la protesta por la cuestión impositiva sumó críticas al proyecto de reforma laboral, que calificó como “gatopardista” e incapaz de incentivar el empleo, y al poco interés por avanzar en la “racionalización del gasto público”. Asimismo, retomó la avanzada contra los capitales automotrices, que propiciaban un aumento en los aranceles de importación de automóviles: “una vez más un sector ineficiente de la industria argentina propicia el aumento del arancel externo común del MERCOSUR que sólo traerá aparejado un nuevo incremento de costos [...] e impedirá el abaratamiento de los fletes carreteros”. Por cierto, tampoco se privó de criticar a los países que sostenían los subsidios a la producción agraria, dificultando o impidiendo las exportaciones: “cabe preguntarles a esos jueces que quieren investigar sobre derechos humanos si nunca

pensaron que también los productores de nuestros países tenemos el humano derecho de producir y comercializar sin trabas artificiales ni barreras proteccionistas”.⁸⁸

Una de las cuestiones más significativas que surgirían en su discurso, sin embargo, sería un tibio replanteo respecto del rol del Estado. Tras alegar una ausencia de política ganadera, Crotto afirmó que “tenemos muy presente que una economía de mercado no es sinónimo de una economía sin inducción política adecuada”. No era la primera vez, ciertamente, que la SRA reclamaba la formulación de una política ganadera más definida, cosa que no choca, ciertamente, con los principios liberales que animan a la entidad. Lo que destaca, más bien, es la formulación, en la que se resalta la necesidad de una “inducción política”. Veremos cómo, posteriormente, la organización desarrollaría más profundamente este replanteo.

Cabe señalar que, a pesar de que el humor de la SRA respecto del gobierno había experimentado un drástico vaivén, Crotto buscó contemporizar. Hacia el final de su discurso agradeció por sus servicios a Solá, que abandonaba la SAGPYA para postularse a la gobernación de la provincia de Buenos Aires,⁸⁹ y buscó morigerar las críticas ensayando una débil defensa de las política del gobierno, intercalada por un intento de calmar el estado de ánimo de los socios: “a usted, señor Presidente, gracias por su confianza [...]. A los señores socios, gracias por confiar en esta Comisión y entender que los sacrificios que tengamos que hacer ahora se verán muy recompensados en el futuro” (A-Sep98: 25).

A esta altura de la década, con la producción agraria nuevamente estrangulada, a lo que se sumaban los vaivenes en la política ganadera ocasionados por lo que la SRA identificaba como necesidades puramente electorales, nuevamente parecía que la entidad daría un paso más en la confrontación con el gobierno. La relación con éste, mientras tanto, seguiría deteriorándose al calor de la crisis. En octubre, las cuatro entidades señalaron su “preocupación ante la restricción crediticia que se generó como consecuencia de la crisis internacional”, reclamando soluciones. Dos meses más tarde, los capitales exportadores agrupados en CIARA-CEC anunciaron, con el aval del gobierno, la implementación de un diferimiento en el 15% del precio de compra de las mercancías agrarias.⁹⁰ La SRA rechazó la medida con un comunicado titulado “una vez más los problemas se transfieren a los productores”. En diciembre, volvió a protestar ante versiones de un nuevo impuesto a los combustibles, insistiendo en que el camino correcto seguía siendo la lucha contra la evasión y la “eficiencia” del gasto público. Dos semanas después, ante la sanción de la Reforma

⁸⁸ La referencia a los “jueces que quieren investigar sobre derechos humanos” parece apuntar a Baltasar Garzón, magistrado español que hacia 1998 investigaba la participación de oficiales españoles en la causa de los “vuelos de la muerte” producidos durante la última dictadura militar (LN, 04/04/98).

⁸⁹ Sería reemplazado, por muy breve lapso, por Gumersindo Alonso, quien fuera presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y representante de CARTEZ en la CRA (LN, 05/08/98).

⁹⁰ Ya a esta altura de la década, la concentración de los capitales exportadores de granos y sus subproductos había avanzado velozmente, desplazando en buena medida a las cooperativas. Al respecto pueden consultarse, para el caso de la soja, los trabajos de Pierri (2006; 2009).

Tributaria, rechazó especialmente el Impuesto sobre el Endeudamiento Financiero, que recaía sobre los intereses de los préstamos, mientras que en febrero de 1999 desempolvó un tema que parecía saldado: las retenciones a las exportaciones. Al respecto, expresó que “los productores de oleaginosas siguen soportando el efecto perverso de las retenciones a la exportación de sus granos, lo que constituye una rémora del pasado que es necesario subsanar”. Posteriormente, alertó sobre el “abusivo aumento de la tasa vial”, que se desarrollaba principalmente a nivel municipal (A-Abr99: 10-3). A esto se sumaba la devaluación de la moneda brasileña, que expandió las importaciones de pollos y porcinos. Por añadidura, los precios de los granos habían iniciado un ciclo de descenso, que tocaría fondo en 1999.

En este contexto, las restantes entidades agrarias agudizaban la confrontación. Una serie de asambleas en la región pampeana resultarían en un nuevo acto conjunto de protesta en Pergamino hacia enero de 1999. La SRA se abstuvo tanto de unírseles como de condenar la acción. En el editorial de diciembre, mientras tanto, había amonestaba al gobierno en duros términos. Titulado “¿Todo en orden?”, comenzaba protestando por la presión impositiva:

En el mes de los aguinaldos, los premios a los peones, la cosecha, las inversiones, las reservas, el Estado alegremente exige un anticipo de ganancias, mientras traslada sus propios aguinaldos al ejercicio siguiente y resuelve postergar el reintegro del IVA a las exportaciones. Ante esto, la industria y los exportadores de cereales y oleaginosas con “visión de estadistas” descubren la solución: que paguen los productores. Liquidan un 85% de cada venta de cereal y postergan el 15% a 210 días, ya sea para exportación o para venderla al panadero de la esquina.

Y a continuación, repasa la debacle económica y moral del gobierno menemista:

Mientras tanto, el gasto público crece, la ley de presupuesto de 1999 aumentó de un peso a tres por voto el financiamiento a los partidos políticos, triplica los gastos para viajes presidenciales y los jugadores de River viajan a Anillaco en el Tango 01 para un partido de beneficio (¿por qué no en el Chaco, Corrientes o Berazategui?). La deuda externa crece, la presión tributaria llega a su punto de inflexión, la recaudación baja, los senadores ocupan sus bancas por la ventana, por la misma que la Corte asiste impávida al espectáculo, el Presidente descubre las ventajas del Colegio Electoral y las maldades del voto obligatorio y sugiere una “pequeña” reforma de la constitución para solucionar el problema.

Posteriormente, enumera una serie de escándalos resonantes que en otro momento hubiera pasado por alto: “la Aduana, IBM, Banco Nación, la venta de armas, los jueces corruptos, la violencia callejera, la policía cómplice y venal, los vecinos armados, son realidades que crean desaliento y afectan la credibilidad de los argentinos”. Luego vuelve a

reclamar encendidamente por el problema de las inundaciones, justificando esta vez las acciones de protesta:

Los productores del Litoral, que además del agua fueron inundados por imágenes de funcionarios con el agua a las rodillas y por discursos de Secretarios y Ministros en cada tribuna de cada rural, por convenios firmados ante miles de fotógrafos (caso BID en plena tribuna de Palermo), por promesas permanentes y por postergaciones burocráticas humillantes, esos productores siguen aún esperando. Apenas el 20% de los 180 millones prometidos [...] llegaron a destino [...]. Hubo que cortar rutas, cerrar el tránsito de Resistencia a Corrientes, provocar el caos que siempre condenamos, para que una orden del presidente desde Roma hiciera aparecer el dinero.

Pero no terminaba allí la protesta. En tren de sumar reclamos, la SRA enumeró los conflictos más recientes sobre los que venía insistiendo al gobierno, añadiendo el cierre de fronteras de Brasil a las importaciones argentinas y una nueva disputa con la UATRE por un seguro de sepelio. A ello sumó un nuevo descargo de la bronca por los vaivenes en la política ganadera: la denuncia de negociados espurios en torno a la implementación del uso de microchips para la trazabilidad del ganado, proyecto finalmente abortado tras una serie de denuncias; el proyecto de promoción de carnes, que seguía trabado en el Congreso; la reestructuración del SENASA, que seguía sumido en un caos; y por supuesto, el abrupto y temerario cambio de rumbo respecto de la lucha contra la aftosa. Finalmente, volvió a cargar culpas por la debacle al contexto de elecciones, que parecía absorber tanto las energías como los fondos del gobierno saliente (A-Dic98: 6-7).

La SRA no lograba comprender que mientras la producción agraria atravesaba un momento crítico, los organismos oficiales no acababan de recomponerse tras el recambio de autoridades, y la crisis de la economía argentina tocaba fondo, Menem y sus funcionarios preferían ocuparse de la campaña política. En este contexto procuraba, simplemente, llamar la atención a un gobierno que parecía abandonarla a su suerte, sin decidirse a enfrentarlo más abiertamente.

En lugar de eso prefirió avanza en la confrontación con CARBAP y la CRA (que ya se había convertido en la comidilla de la prensa),⁹¹ a cuyas dirigencias acusaba de confrontar con el gobierno para mantener su posición de liderazgo:

Es recurrente y generalizada la actitud periodística que busca resaltar las diferencias entre posiciones de las entidades, intentando implantar en los lectores una sensación de

⁹¹ Tras la dura recriminación que había recibido por parte de la SRA, CARBAP envió una respuesta en la que ratificaban los motivos alegados para realizar el paro, rechazaban que éste estuviera impulsado por motivos de política interna, afirmaban que había sido exitoso, y señalaban que el hecho de que los que enviaron hacienda a Liniers son socios de la SRA salía del listado de remitentes, lo que no tiene nada de raro porque la SRA se opuso al paro. (A-Oct98: 10).

frustración por un pseudo-ideal de unidad no alcanzable debido a una presunta mezquindad de los dirigentes. La unidad por sí misma no tiene sentido. La verdadera unidad sólo se alcanza cuando se representan los mismos intereses [...]. Nuestra SRA y Confederaciones Rurales difieren más por sus actitudes y métodos para la defensa del sector, que por supuestas diferencias ideológicas. La SRA reflexiva, técnica, negociadora, privilegiando siempre la propuesta por sobre la protesta. CRA, en una actitud más contestataria, condicionada quizás por un sistema interno de decisiones que coloca a sus dirigentes muchas veces ante la necesidad de actuar para poder canalizar el descontento de sus bases. En el ruralismo es más fácil la unidad porque existe la de los ideales de fondo [...]. La verdadera dimensión de un dirigente no se valora por las pasiones que pone en juego, sino por su capacidad de encauzarlas y reinar sobre ellas. Convocar gente que está en el límite de su supervivencia como productores, exacerbarla con discursos encendidos, para luego recibir de ellos un mandato de combate, no es el rol de la dirigencia como nosotros lo entendemos.

Al mismo tiempo buscó contemporizar con el gobierno, trazando la línea que sostendría de allí en adelante: más allá de la larga serie de problemas que la SRA seguía poniendo en primer plano, la causa última de la crisis que afectaba a la economía argentina se hallaba en la crisis mundial:

A nosotros también nos molesta y nos duele la frivolidad, el autoritarismo, el desenfado en la adjudicación política de fondos de ayuda, la designación de funcionarios como pago político y no en función de su idoneidad para el cargo, las promesas incumplidas, la justicia claudicante, el gasto público caótico y desproporcionado, la manipulación de bancas, los opositores que restan quórum, las alianzas simplemente electoralistas, los apetitos de poder por el poder mismo, la inseguridad permanente, la desocupación que posterga, lacerar el alma y acorta la vida. La realidad nos golpea igual que a todos [...]. Pero como dirigentes sectoriales debemos saber distinguir el descontento que se genera en las bases desde su condición de ciudadanos políticos [...] del reclamo surgido de una posición meramente gremial [...]. El descontento en el sector existe, y desafortunadas medidas del gobierno tienen mucho que ver con él, pero su principal causa es la caída de precios internacionales de nuestros productos y las sucesivas crisis en las economías emergentes que han sacudido nuestros mercados (A-Feb98: 6-7).

Así, la asociación buscaba hacer equilibrio en un escenario extremadamente complicado. Con el auge de la crisis, que efectivamente había vuelto a derrumbar los precios, el proceso de liquidación de los capitales agrarios se aceleraba, ante lo que las entidades agrarias redoblaban la confrontación. La SRA, por su parte, se veía desamparada ante un gobierno en retirada y ocupado en diseñar su sucesión. Los editoriales y notas muestran que el propósito de la organización no era más que llamar la atención tanto hacia la crisis económica de la rama como hacia los problemas de política ganadera, afectada por

la campaña política. Y, al mismo tiempo, debía contener a sus propios socios, que presionaban a la CD a ir más allá, acaso envalentonados por el momento de flujo en las protestas. En pocas palabras, se veía obligada a enfrentar con más fuerza a un gobierno al que, en última instancia, procuraban seguir apoyando. La situación se le había vuelto insostenible.

7.2. ...y del paro al temor

El nulo eco que encontraron sus reclamos, expresados con creciente virulencia, forzaron la situación hasta su límite. Tras el paro ganadero de 1998, el sector agrario se había vuelto un polvorín. A la movilización de enero, que se había decidido tras una proliferación de asambleas locales en distintos puntos de la región pampeana, siguió una intensificación de acciones gremiales comandadas principalmente por la FAA. En febrero, de la mano de CF, ésta realizó un corte de ruta en Cañada de Gómez, junto a CONINAGRO (LN, 19/02/99). En marzo, los cortes se multiplicaron por 20 en la provincia de Córdoba, en una acción coordinada con CARTEZ (LN, 18/3/99).

A pesar de ello, el gobierno seguía sin recibir a las entidades agrarias, que reclamaban una reunión desde septiembre de 1998. Lo hizo recién siete meses después, durante la primera semana de marzo, en la cual Menem recibió por separado a los presidentes de las entidades (LN, 6-11/03/99). En una de esas reuniones, Crotto le entregó un informe detallando el efecto de las tasas de interés bancario y la elevación de los impuestos sobre la producción agraria, e insistió sobre la necesidad de eliminar impuestos. Se fue, sin embargo, con las manos vacías (LN, 13/03/99). Ante la falta de ofrecimientos concretos, tampoco las otras organizaciones se fueron conformes. La semana siguiente, FAA y CONINAGRO protagonizaron un nuevo corte de ruta, esta vez en Concordia (LN, 14/03/99).

La situación había acabado, finalmente, también con la paciencia de la SRA: por primera vez en 10 años de gobierno menemista, resolvió interrumpir el diálogo y pasar a la acción. El 24 de marzo anunció la realización de un paro ganadero, al cual se plegó inmediatamente la CRA. Por su parte, la FAA y CONINAGRO acordaron participar de la protesta y propusieron sumar una marcha. Mientras tanto, llevaron adelante una movilización al sur de Santa Fe (LN, 24-29/03/99).

Roque Fernández salió a confrontarlos:

Los dirigentes del campo y la industria que participan de las protestas piden una devaluación. Me lo han dicho en la cara y yo les contesté que no devaluaremos [...]. A medida que pasa el tiempo se empiezan a ver cuáles son los grupos corporativos que estuvieron al lado del Gobierno en las épocas de vacas gordas y cuando se acerca el final abandonan el

barco. Ahí se ve cuáles son los verdaderos amigos de la apertura económica y las transformaciones [...]. Que algunos industriales pidan devaluaciones no me sorprende pero hay otros sectores que ahora abandonan el barco (CL, 28/03/99).

Ante semejante acusación, la SRA volvió a dejar clara su posición de defensa de la Convertibilidad:

En cuanto a las declaraciones atribuidas al Sr. Ministro referidas a que empiezan a verse cuáles son los grupos corporativos que cuando se acerca el final abandonan el barco, afirmamos categóricamente que nuestra entidad no abandonará jamás el barco, porque para nosotros el barco es el país (M99: 158-9).

Estas declaraciones, ciertamente, no ayudaron a aligerar tensiones. Sucede que, a pesar de haberse vuelto él mismo un terrateniente y capitalista ganadero,⁹² el ministro no sólo carecía de la capacidad de encanto que Cavallo ejercía sobre la SRA, sino que le había tocado, además, ser el gestor de la peor situación económica que afrontara el menemismo.

El escenario había inquietado al gobierno, que reaccionó desplazando a Alonso de la SAGPYA alegando que se había enfrentado con el resto del gabinete en defensa de la rama agraria (A-Abr99: 4). Posteriormente, convocó a negociar a la CRA y la SRA, en un intento por romper el frente agrario. Pero por primera vez, esta última se negó a participar, arrastrando en su negativa a la primera. El segundo intento consistió en un anuncio de medidas. Mas todo lo que ofrecieron como prenda de negociación fue la prórroga en el pago de renta para los campos inundados, y un proyecto de ley de apoyo crediticio (01 y 08/04/99).

Fue demasiado poco, y demasiado tarde. Las organizaciones rechazaron en bloque las medidas. El 19 de abril iniciaron un paro de una semana, paralizando virtualmente el comercio de carne y granos. A esto se sumaron algunos piquetes aislados en el norte de Buenos Aires y en Entre Ríos, así como un tractorazo en Santiago del Estero, sostenidos principalmente por la FAA (LN, 19, 20 y 29/04/99).⁹³

La decisión de realizar el paro fue, probablemente, la más significativa de la entidad a lo largo de toda la década menemista. Atenazada por la presión de sus propias bases

⁹² En el paro posterior, realizado en el mes de julio, Roque Fernández sufriría un escrache en uno de sus campos en Entre Ríos. Si bien dicha propiedad poseería una extensión de 200 has, los manifestantes denunciaron que habría comprado otras propiedades a lo largo de toda la provincia, precisamente a pequeños terratenientes que no habían logrado retener siquiera la propiedad de la tierra, afectados por el acelerado proceso de concentración y centralización que se desarrolló en la década de 1990 (P/12, 22/07/99; LN, 23/10/00). Sus denuncias, en apariencia, tenían asidero. En el 2001, el ya ex ministro se asoció con Luis Barcos, ex presidente del SENASA, para criar wagyu, una raza bovina japonesa destinada a la producción de carne kobe, considerada la más cara del mundo (véase <http://fondodeolla.com/kobe-beef-en-argentina-el-bife-mas-caro-del-mundo-a-la-criolla/>). Años más tarde, otro artículo periodístico menciona que Roque Fernández destinaba la mayor parte de sus hectáreas en propiedad a la producción de dicha raza, que sumarían ya alrededor de 3.000 has a lo ancho de la provincia (IP, 25/09/10)

⁹³ Un análisis detallado de la organización de este paro en el contexto de la crisis económica puede hallarse en el trabajo de Salvia (2014a).

frente a la crisis, la acumulación de problemas en el sector agrario ante los cuales el gobierno no ofrecía respuestas, y el incremento de la confrontación por parte de las otras entidades, la SRA se vio forzada a pasar de las palabras a los hechos. Y, por cierto, sus socios respondieron: casi no se registraron operaciones durante esa semana en el Mercado de Liniers. En este sentido, la realización de un paro le permitía garantizarse, esta vez, la recepción del mensaje. Así se expresaba la SRA en el editorial de abril:

La decisión de la CD de la SRA de convocar a un paro agropecuario [...] fue sin duda una de las más trascendentes de los últimos años. Ganó espacios en la prensa de todo el país y, por primera vez, llevó el tema agropecuario al seno del Gabinete. El peso de la entidad inclinaba la balanza [...]. Si podemos calificar de alguna manera la respuesta de los funcionarios de Economía a los legítimos reclamos de nuestro castigado sector, es que estaba en modo de “contestador automático” [...].

El giro que había dado en los últimos meses, tras el cual había pasado de reprender severamente a CARBAP por realizar un paro ganadero a motorizar uno ella misma, también la forzaba a ofrecer una explicación. La trabajosa unidad se había logrado, señalarían, porque se había puesto en riesgo la propia supervivencia de los productores, además de por las reiteradas torpezas políticas del gobierno, que confiaba en que la cosa no pasaría a mayores. La SRA demostró entonces poseer un mayor pragmatismo del que se le atribuía:

Hemos dicho hace poco que “...la verdadera unidad sólo se alcanza cuando se representan los mismos intereses...” y hoy somos testigos de que la carencia total de sensibilidad política de algunos funcionarios puso a la vista el interés que hoy anima en común a las cuatro entidades del agro: la supervivencia del productor. La unidad fue un inesperado sopapo en el rostro de quienes habían apostado sus fichas a la división.

En otras palabras, lo que para las restantes entidades se constituía simplemente como otra acción en el largo enfrentamiento que ya llevaban con el gobierno menemista, reforzada ahora por la participación de la SRA, para esta última tenía un fin menos trascendente: lograr que el gobierno le “atendiera el teléfono”. Y lo logró, aunque tuvo también un efecto adverso: el reemplazo de Alonso por otro Secretario de Agricultura, quien a su vez tenía ya de antemano los días contados: Ricardo Novo asumiría anticipando que renunciaría en junio, para integrarse al gabinete de la provincia de Córdoba. La novedad desagradó a la SRA: “creemos que no se valora debidamente en el gobierno la importancia de nuestro sector. La Secretaría de Agricultura no es una prenda a conquistar. Necesitamos en estos tiempos desesperadamente continuidad y probidad en la gestión” (A-Abr99: 4-5).

La SRA no se había corrido un solo milímetro de su línea. El paro no había tenido como objeto enfrentar el rumbo general de la política económica del gobierno, aunque la

organización no dejaría de denunciar los aspectos que consideraba perniciosos. Crotto se ocupó de dejar en claro que los problemas del sector provenían de la crisis internacional, mientras que la responsabilidad del gobierno se limitaba a, en lugar de instrumentar medidas para paliarla, aumentar la presión fiscal:

Este paro, desde mi punto de vista, no tiene otro motivo que el de demostrar la bronca, la impotencia y el sentimiento de abandono que siente el productor agropecuario cuando se le caen todos los precios internacionales, que sabemos que el gobierno no puede hacer absolutamente nada para remediarlo, pero sí puede tomar medidas para ayudar a pasar esta crisis [...]. En lugar de hacer esto, [...] nos pone más palos en la rueda, nos sube los impuestos [...] (A-Abr99: 17).

Estas declaraciones contrastaban con las de los presidentes de las entidades, en las que cargaban contra el gobierno de forma mucho más dura. La SRA, sin embargo, no dejó de considerar al paro “un éxito”, sobre la base de que habían logrado instalar en la opinión pública los problemas agrarios “en forma armónica y ordenada, [ya que el paro] no afectó la convivencia ni los derechos de los demás”. A pesar de ello, desde la organización tuvieron que reconocer que, en otros aspectos, había tenido poco éxito:

El gobierno como tal no escuchó el reclamo del campo. No se tomó medida alguna para aliviar el costo fiscal sobre el productor ni para disminuir el “costo argentino” [...]. Lejos de racionalizarse, la fiesta continuó. Mientras se subían los aportes del erario público a los partidos políticos y se recortaba el presupuesto para la educación, los dos “Tango” de la Presidencia de la Nación y una cantidad de helicópteros sólo vista en Vietnam aterrizaban en Colonia Caroya para celebrar lo que debió ser una fiesta del campo y de los productores: la última vacunación de aftosa en el país (A-May99: 4-5).

En efecto, a pesar de la enorme carga simbólica que conllevaba la realización de una acción política conjunta por parte de las 4 entidades, el gobierno no reaccionó inmediatamente. En consecuencia, la FAA propuso en mayo un nuevo paro, al que se sumaron el resto de las entidades. La respuesta del gobierno fue doble: en primer lugar, Roque Fernández volvió a acusar al sector en su totalidad de ser “evasor por excelencia”, mientras que Menem lo secundó afirmando a su vez que el nuevo paro estaba “politizado”, recordando la eliminación de las retenciones, y arrojando la pelota de nuevo al otro campo:

“el campo tuvo períodos muy buenos y no sé cuáles son los aportes lógicos que le hicieron al país [...] no es posible que cuando vienen períodos más o menos malos [...] le estén reclamando al Gobierno una ayuda [porque:] ¿con qué puede ayudar el Gobierno a este sector? Con recursos del resto del pueblo argentino” (LN, 20/05/99).

Posteriormente, volvió a recurrir a la táctica de división, convocando a negociar solamente a la SRA y la CRA. Esta vez, con un anuncio apenas más sólido: la elevación del capital mínimo que tributaría el impuesto a la renta presunta. Esto se sumaba a otras medidas aprobadas durante el paro, como la prórroga en el pago de dicho impuesto, una línea de crédito para deudores morosos, y el aumento de los impuestos a la importación de cerdos y lácteos. Fue suficiente para que la SRA desistiera de realizar la acción. Pero no para las restantes entidades, que convocaron a un nuevo paro de cuatro días con movilizaciones y cortes para el mes de junio.

En este sentido, la unidad exhibida en el paro de abril demostró ser absolutamente esporádica. La SRA y la CRA habían aceptado reunirse de forma individual con funcionarios del gobierno que intentaban desactivar el segundo paro. Esto había generado nuevos cortocircuitos en la relación, reconocidos por Crotto: “a los presidentes de CONINAGRO y FAA les pareció hasta discriminatorio [...]. Hay que entender que el que invita es quien decide a quién invita. Lo importante acá es encontrar soluciones a los problemas del campo y no quién lo logra” (A-Jun99: 24).

Así, la SRA volvió a tomar distancia tanto de las entidades agrarias como del paro como método de protesta:

Yo creo que es muy importante la unidad, pero en base a algunas reglas de juego muy claras para todos [...]. Cuando vamos a las grandes líneas filosóficas y uno está en una vereda y el otro en la de enfrente, con señores que han sido tenaces enemigos no de un gobierno sino de un sistema de vida, no hay unidad que valga [...].

Si los maestros, las amas de casa, los camioneros, los automovilistas, los jubilados, los estudiantes, los desocupados, manifiestan sus legítimas angustias cortando rutas, impidiendo la circulación de productos y encendiendo mechas para el caos y el desorden, estamos poniendo en peligro, sin darnos cuenta, un estilo de convivencia democrática [...]. Compartir la legitimidad de un reclamo no implica coincidir en la metodología de la protesta (A-Jun99: 25).

La autoexclusión de la SRA, como cabía esperarse, no logró detener la acción ya programada, caracterizada por una multitud de cortes de ruta principalmente en el sur de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos, y en menor medida en Córdoba y La Pampa. También hubo piquetes y marchas en Chaco, Mendoza, Formosa, y Jujuy. En Rosario, la FAA organizó una movilización junto a los transportistas de carga. (LN, 11 y 25 al 29/05 y 02 al 10/06/99).

La SRA volvió a hacer un balance en el que ponderaba la situación: si bien cuestionó la medida, aceptó como válidos los motivos que la originaron: “más allá de discutir adónde nos puede llevar un crescendo de medidas de acción directa en un país convulsionado que intenta una transición ordenada en democracia, hay una realidad: la situación que da origen

a estos reclamos es auténtica e insoslayable”. E insistió en que más allá de los errores que pudiera estar cometiendo el gobierno, la crisis de la economía argentina estaba sobredeterminada exteriormente por la crisis internacional, que había provocado el derrumbe de precios. Sobre esta base, enfocó sus cañones hacia las prácticas comerciales de los países compradores.

En rigor, la SRA había denunciado las prácticas proteccionistas de muchos países compradores o competidores (específicamente, la CEE y los EEUU) desde principios de la década. Sin embargo, la crisis en que se había sumido la economía argentina le dio nuevos bríos a la cuestión, que hasta aquí ocupaba un lugar secundario en los análisis de la coyuntura. El nuevo fracaso de las negociaciones en la OMC, que habían ocupado la atención y los recursos de la entidad a lo largo de los últimos años, la proveyó de un blanco externo hacia el cual descargar culpas. En esta lectura, la responsabilidad del gobierno neoliberal se reducía a la incapacidad de dar estabilidad a la SAGPYA para el diseño de una estrategia con la cual accionar:

La crisis de ingresos de nuestros productores está fundamentalmente provocada por la caída de los precios internacionales, donde el componente de subsidios y restricciones de acceso a los mercados juega un papel clave. El comercio mundial de alimentos se maneja en un sistema perverso, donde los países dotados para una producción eficiente juegan el papel de defensores a ultranza del libre comercio, mientras sus competidores desleal y arbitrariamente usan los mecanismos de subsidios descubiertos o encubiertos para mantener sistemas productivos caros e ineficientes [...]. Los productores gastamos fortunas en eliminar enfermedades de nuestro ganado que pueden dificultar las exportaciones a países que impiden el ingreso de nuestras carnes mientras estos no vacilan en engordar sus pollos y sus vacas con alimentos contaminados con residuos de productos industriales.

Cuando la caída del poder adquisitivo de vastos sectores de [la población] provoca una retracción en la demanda, los países con liderazgo económico aumentan los subsidios [mientras que] nosotros tememos la reacción que puede provocar en esos países el uso de semillas resistentes a herbicidas para bajar nuestros costos, dudamos en aplicar cualquier política tendiente a favorecer la exportación de algún producto sensible por temor a represalias, no aplicamos medidas ante el dumping de que somos objeto por falta de decisión política [...].

Debemos buscar caminos alternativos que, sin renunciar a la necesaria e indiscutida liberalización del comercio, permitan enfrentar situaciones transitorias en condiciones de mayor competitividad y para ello, se hace necesaria [...] una estrategia como país [...]. Esta estrategia no podrá ser diseñada con una Secretaría de Agricultura casi inexistente y degradada por manejos políticos propios de un comité (A-Jun99: 4-5).

Pero la prudencia de la SRA al momento de evaluar la conveniencia de hacer un paro respondía no sólo a la dificultad que hallaban para confrontar directamente con un

gobierno al que, haciendo a un lado las críticas coyunturales, sentían como propio. La organización entendía que la adopción de medidas de fuerza más duras que los reclamos meramente verbales podía poner en riesgo la estabilidad del gobierno, sobre todo en un momento de crisis como el que transitaba. Se trataba, entonces, de calibrar adecuadamente los embates, no fuera cosa de que el tiro acabara saliendo por la culata y la organización acabara contribuyendo, sin quererlo, al derrumbe del “modelo neoliberal”. Y peor aún, al retorno de un gobierno populista.

Crotto deja traslucir este miedo en dos entrevistas del número de junio de 1999 de Anales, en las cuales se ve obligado a explicar a los socios las razones de la participación en el paro de abril y de la declinación a formar parte del siguiente:

-ANALES: Lamentablemente tenemos el trauma de las transiciones [presidenciales]. [...].

-Crotto: Yo lo veo tan así que es por eso que la decisión que toma la Rural es no ir a ningún tipo de paro. Yo no sé qué va a pasar si alguna de las entidades va al paro. Más allá de que yo le reconozco la razón a un productor que hace paro. Lo que creo y cree la SRA es que no es el momento. Insisto con esto porque me parece que la Argentina no está en estos últimos meses de gobierno como para hacerse los locos. Yo creo que la Argentina necesita de alguna profundización de cambios que van a tener que hacerlos los políticos. Por eso, en un ambiente que no es color de rosa, los dirigentes tenemos que tener la suficiente prudencia como para no llevar baldes de nafta cerca del fueguito [...] No vamos a un paro por un llamado a la cordura (A-Jun99: 23).

Más importante que el sector agropecuario es el país en su conjunto, [...] tenemos que priorizar ciertas reglas que no deben modificarse. El país está sufriendo una agresión externa por parte de algunos señores de fondos de inversión muy grandes, que ponen en duda ciertas medidas, como la Convertibilidad, que para los argentinos tienen que seguir en la Argentina. Los dirigentes tenemos que ser muy prudentes en las medidas que vamos a tomar y en las declaraciones que vamos a hacer [...]. Hay que procurar que esto termine bien el 10 de diciembre y no quedar en el camino como sucedió en [el] 89. Lo que tiene que primar acá es la cordura (A-Jun99: 24).

Pero la “cordura” estaría lejos de primar. Tras el segundo paro, al gobierno no le quedó más remedio que hacer un ofrecimiento un poco más sustancioso. Dispuso entonces, finalmente, un paquete de medidas fiscales a instrumentarse desde el Banco Nación: suspensión de los remates por 180 días, flexibilización de las condiciones de ingreso a un plan de refinanciamiento de deudas a 20 años, ampliación de los beneficiarios, y extensión de un crédito para cooperativas.

Pero las organizaciones no tuvieron siquiera tiempo para pronunciarse sobre la cuestión. Tres días después, una nueva instrumentación en el cobro del IVA volvió a agitar

los ánimos (LN, 10 y 14/06/99). La FAA y CONINAGRO confirmaron la marcha que tenían prevista para junio, pero la postergaron para el mes siguiente a la espera de una resolución de la CRA. CARBAP se sumó casi inmediatamente, y tras una nueva reunión fallida con el Secretario de Agricultura, la CRA dispuso su participación. Esta vez, y al igual que en 1993, al paro sumaron una marcha a Plaza de Mayo, aunque duplicando la asistencia: unas 10.000 personas ingresaron al microcentro, provenientes en su mayoría de distintas áreas de la región pampeana. Dos días después, una protesta en Entre Ríos, en la cual participó la FAA, frustró un acto en el que iba a participar el presidente Menem (LN, 24 y 26/06, 16, 21 y 22/07, y 24/07/99).

A esta altura, las protestas de distintos sectores contra el gobierno de Menem se multiplicaban de manera exponencial, y el esquema económico en su conjunto amenazaba con resquebrajarse. Aun aceptando la validez de las medidas, la SRA comenzó a exigir mano dura. Los destinatarios circunstanciales de los golpes reclamados serían los camioneros, cuyos cortes de ruta interrumpían la circulación de, entre otras, las mercancías agrarias:

No es fácil que el problema de los camioneros sea comprendido por el tambero que se vio obligado a derramar su producción, o por el pasajero que con sus hijos menores fue detenido en la noche y se lo hizo esperar bajo la helada con el motor del ómnibus parado sin brindar calefacción por decisión de un grupo de exaltados. No comprendemos la indiferencia de la policía ante estas conductas delictivas [...] ni [...] la posición de [...] entidades colegas que adhirieron a esa medida de fuerza (A-Jul99: 4-5).

Era claro, a esta altura, que la SRA no obtendría demasiado del gobierno saliente. A escasos meses del recambio presidencial, se concentró entonces en la elección. Un mes antes de que tuviera lugar, invitó a los tres principales candidatos a una reunión abierta en la exposición de Palermo, para que presenten sus puntos de vista en relación a la situación del sector. Allí todos ellos prometieron a los asistentes el oro y el moro, cosa que indignó a la CD, que dejó traslucir su amargura: “¿Si todos están de acuerdo, por qué esperan?! ¿Por qué cada uno de los candidatos dice que propondrá lo que promete recién cuando sea gobierno? ¿Creen que podemos esperar? [...] ¿Por qué nos subestiman? [...] ¿Por qué todos nos mienten tanto?” (A-Ago99: 4-5).

El escenario, no obstante, no se presentaba a priori tan desventajoso para las finalidades de la SRA. En primer lugar, ninguno de los candidatos había planteado alterar las principales variables macroeconómicas, sino más bien lo contrario. Además, la entidad tenía hombres de su confianza en los equipos de cada uno de los candidatos, quienes los habían exhibido en Palermo. Domingo Cavallo había sido acompañado por Armando Caro Figueroa, ex ministro de Menem, y por el economista Adolfo Sturzenegger, lo que transmitía

garantías respecto la continuidad del modelo; pero también fueron de la partida Marcelo Regúnaga, ex secretario de la SAGPYA durante la gestión de Alfonsín y de buena relación con las entidades agrarias, y el propio Guillermo Alchourón, candidato a diputado. De la Rúa, por su parte, había llevado a José Berhongaray, quien ocuparía la titularidad de la SAGPYA y mantenía una buena relación con las entidades, además de a José Luis Machinea. Finalmente, Duhalde, quien había sido ungido por el PJ para disputar la presidencia, se mostró con Felipe Solá, candidato a vicegobernador por la provincia. De esta forma, el triunfo de cualquiera de ellos no sólo garantizaba una continuidad en la política económica, sino también la llegada directa de la entidad al gobierno.

La exposición de 1999, por otra parte, revistió especial significatividad, puesto que se trataba de la última que inauguraría Menem. Crotto procuró en su discurso mantener la línea que había adoptado la entidad respecto de la crisis: derrumbe de los precios como causante principal, y errores del gobierno como meros agravantes. Al mismo tiempo, hizo explícitos los esfuerzos de la CD por contener los reclamos de su propia base social:

Lamentablemente se cayeron los precios de todos los cereales y de casi todos los productos de las economías regionales. El valor del novillo se depreció en más de 30% y los productores lecheros, a los que las industrias lácteas exhortaron a producir más, hoy trabajan a pérdida [...]. Este escenario desfavorable [...] se agravó internamente por una pésima e inoportuna reforma tributaria. Mientras que otros países o bloques [...] adoptaron medidas para proteger a sus productores, nosotros sufrimos los efectos negativos de una nueva presión impositiva y un aumento del costo del dinero [...]. Señores: si al gobierno la plata no le alcanza a nosotros tampoco [...]. Quiero que comprenda, Sr. Presidente, que estamos haciendo un gran esfuerzo para que el descontento de nuestros productores no se convierta en un trastorno nacional.

Pero a pesar del regaño, Crotto cerró su discurso dejando perfectamente clara la apreciación general que la SRA hacía del gobierno de Menem:

Sr. Presidente: esta es la última vez que durante su gobierno ud. ocupa oficialmente esta tribuna [...]. Sepa que esta es su casa. Las puertas de nuestra entidad estarán siempre abiertas para recibirlo. Si tuviera que hacer un balance de su gestión el discurso se haría largo. Puede concluir orgulloso su mandato. Usted rompió las barreras que impedían el crecimiento de nuestro país. Los argentinos de bien se lo agradecen. Los errores que se cometieron servirán de escarmiento y ojalá quien lo suceda sepa aprovechar la experiencia atesorada. Por eso, cuánta razón tenía Cervantes cuando decía que entre los pecados mayores que los hombres cometen, unos dicen que es la soberbia, [pero] nosotros decimos que es la ingratitud. Gracias por todo lo que hizo, y permítame remedarlo con mi deseo de "que dios lo bendiga" (A-Sep99: 24-5).

Sobra decirlo, las restantes entidades hacían un balance menos positivo. La inminente retirada del gobierno menemista no implicó para ellas una tregua. Tras el segundo paro ganadero fueron convocadas a una nueva reunión, en la que negociaron refinanciaciones de deudas a 20 años, créditos para siembra y cosecha a baja tasa de interés, y seis meses de peajes subsidiados, entre las resoluciones más destacadas. Aunque fueron juzgadas insuficientes, ninguna entidad respondió anunciando más protestas. Pero, un mes más tarde, el Banco Nación rechazaría las propuestas de créditos y refinanciaciones (LN, 27/07 y 21/08/99). En respuesta, y mientras Menem se despedía de Palermo, la FAA lo despidió a él con un nuevo paro de dos días, que tuvo un alto nivel de acatamiento en la región pampeana, especialmente en el sur de Santa Fe. Allí realizaron numerosos cortes de ruta, con el apoyo de entidades de transportistas de carga. En el sudeste bonaerense, los bloqueos impidieron el abastecimiento de la industria lechera, resultando en fuertes pérdidas para los capitales tamberos. Asimismo, se desarrollaron acciones en el Chaco. (LN, 13 y 15/09/99). La SRA, nuevamente, siguió tomando distancia de dichas entidades, que recrudecían la protesta, y exigió la represión de los cortes de ruta realizados por camioneros a los que se había sumado la FAA, interponiendo incluso recursos de amparo para intentar detenerlos (A-Oct99: 14-5). Posteriormente, Crotto acusó a la FAA por incidentes ocurridos en las rutas. “Es la respuesta de los envidiosos”, fue la lacónica respuesta que recibió por parte de dicha organización (LN, 15/09/15).

Así, tras el paro de abril, la SRA no sólo había vuelto a su posición habitual de condena de este tipo de protestas, sino que sumaba a eso un pedido cada vez más acentuado de represión. Al respecto, vale la pena transcribir algunos párrafos de una nota de Anales, en la que se explicita además la preferencia de la entidad agraria por la modalidad de “paro comercial” que excluya la realización de otras acciones como el bloqueo de rutas, sin dejar de ponderar el efecto de estas medidas en la circulación de mercancías, aspectos sobre los que volveremos posteriormente en este trabajo:

Si bien la SRA antes de la huelga había hablado con los transportistas para que dejen pasar a los transportes que llevaban alimentos perecederos, esto sólo se cumplió los primeros dos días [...]. La queja de los productores llegó a las oficinas de la SRA, que [...] presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Junín [y] envió copias de la denuncia a todos sus delegados para que actuaran de la misma manera en otros puntos del país [...]. Al día siguiente, la SRA fue la única entidad agropecuaria que participó de una reunión [con el] gobierno nacional [...].

Estimar cuál fue la pérdida económica por la mercadería que debió tirarse, analizar cuál fue el lucro cesante de los productores, acopiadores, industriales, comerciantes y aún los mismos camioneros tal vez no sea justipreciable, pero no cabe duda de que en una crisis tan

profunda nadie puede darse el lujo de perder siquiera un centavo, máxime cuando existen menos envalentonadas y no por ello menos eficaces reacciones para lograr los objetivos.

No se respetaron los productos perecederos y hubo pérdidas,⁹⁴ no pasaron los camiones de combustible y muchos se quedaron sin poder cumplir con los laboreos [...]. Se perdieron buenos días para sembrar porque hubo productores que no contaban con gasoil, semillas y agroquímicos [...]. Luego vino el mal tiempo y no se pudo trabajar. Quienes debían mandar animales al mercado tuvieron que seguir alimentándolos a pérdida. Se complicó todo el esquema de producción.

Además, se rompió el esquema comercial, porque se perdieron las oportunidades de venta y cobro, retrasando pagos que después seguramente tendrán recargos [...].

Los reclamos son justos, pero no se comparte la metodología [...]. Es casi cansino repetir que “no hay derecho a entorpecer la actividad del otro” [...]. Si existen mecanismos legales y constitucionales para que no se llegue al caos y no se pusieron en práctica sino luego de que la SRA hiciera una presentación judicial, queda claro que hubo inacción [...].

Resulta explicable que ante esos piquetes, el único recurso disponible hubiera sido reprimir, generando una acción de un alto costo político y máxime en un año de elecciones presidenciales. Pero la defensa de los principios constitucionales así lo exigía (A-Oct99: 14-5)

Las elecciones, celebradas apenas unos días más tarde, resultarían en la victoria de De la Rúa. Los temores de la SRA parecían disiparse en lo inmediato: la transición presidencial no sufriría los sobresaltos de una década atrás. Pero lejos de resolverse, la crisis seguía desarrollándose.

7.3. El cuestionamiento de las reformas y la desbandada del G-8

Mientras tanto, la SRA recrudecía los enfrentamientos contra distintas fracciones de capitalistas. Una de ellas, como vimos, eran los transportistas, que interrumpían permanentemente la circulación de mercancías agrarias e insumos para la producción.⁹⁵ Los industriales lecheros también se convertirían en blanco de sus reclamos. Tras el incremento en la producción de leche destinada a su procesamiento industrial, pactado con las cámaras del sector, éstas habían bajado el precio de compra, provocando la ira de los tamberos. Asimismo, la puesta en marcha del llamado Plan Canje, destinado a sostener las alicaídas ventas de las automotrices, había resucitado el encono de la entidad contra dicha fracción del capital.

Y en la ya caótica enumeración de reclamos, la SRA comenzaba a ceder en algunos de sus inquebrantables principios de fe liberales. En primer lugar, retrocediendo en su

⁹⁴ La referencia es a “el quiebre sufrido por la logística para la provisión del supermercadismo, el caos de los tambos que debían tirar la leche, o de los productores de los pollitos BB que se morían de a miles”.

⁹⁵ En rigor, dicha rama está compuesta tanto por pequeños capitalistas como por productores independientes.

creencia de que las políticas económicas que reclamaba serían por sí mismas suficientes para reconquistar el mercado mundial, y apelando nuevamente al argumento del proteccionismo de los países importadores:

Alguien dijo alguna vez que nuestra pampa húmeda y nuestros productores son una invencible combinación que convierte a nuestro sector agropecuario en el más eficiente del mundo. Nos lo creímos y en eso nos quedamos [...]. “Quitemos las trabas, que eso basta para que podamos competir en el mercado internacional. Somos más fuertes que los subsidios y las regulaciones”, creíamos y dijimos. Y cuando nos quitaron las retenciones allí fuimos, dogmáticos y honestos, convencidos de que éramos [...] capaces de sobrevivir en un mercado [...] con trabas, regulaciones y subsidios salvajes [...]. Hicimos bien todos los deberes, mejor que nadie, producimos carne con pasto, eliminamos la aftosa, tenemos enormes exigencias de calidad y sanidad, pero no nos compran [...]. Además, ellos, cuando la economía se los permite, aplican algunas de las regulaciones y distorsiones que combaten [...] con un pragmatismo envidiable. Nosotros no [...]. Nos aplican barreras arancelarias y paraarancelarias en todos los mercados con la mayor desfachatez, pero nosotros no nos damos el lujo de autorizar la entrada de semen de países europeos donde la BSE es endémica, porque si lo hacemos podríamos ser objeto de sanciones por parte de la OMC [...].

Pero en segundo lugar, y más sintomático aun, la protesta ya no se limitaba a criticar la política de subsidios a, por caso, los capitales automotrices, sino a reclamar, tímidamente, subsidios a la propia producción agraria:

Entiéndase bien. No se trata de renegar de una posición filosófica en la que creemos y a la que seguimos siendo fieles y lo seguiremos siendo, como objetivo final. Se trata de seguir luchando contra los molinos de viento, pero con la mejor armadura y la mejor lanza, no a pecho descubierto como Quijotes modernos.

Nos creímos otros dogmas: “nosotros no necesitamos subsidios ni protecciones, déjenos competir...” o bien “al Estado no podemos pedir nada, no tiene dinero”. Así nos va. Sí necesitamos protecciones y subsidios para sobrevivir en los mercados internacionales que están plagados de ellos, y sí el Estado tiene dinero. Bien que lo malgasta a nuestra vista, a la vez que subsidia otras actividades. ¿Alguno pensó cuánto cuesta el Plan Canje?

Hay actividades que podrían ordenarse y regularse para exportar, como la lechería, sin solicitar dinero fuera del sector, pero el temor siempre presente es la reacción de la OMC [...]. Debemos dejar de una vez por todas de ser tan temerosos y dogmáticos, y crear los mecanismos apropiados para sobrevivir en un mercado donde los inocentes que ingresan utilizando como argumento de ventas el preámbulo de libremercado dogmático, son devorados antes de terminar de pronunciar el nombre venerado de los organismos encargados de terminar con las regulaciones del comercio internacional (A-Oct99: 4-5).

Pero, además, la forma concreta que había tomado la implementación del programa económico neoliberal también comenzaría a revelársele contraproducente. Sin ir más lejos, la política de privatización del capital ferroviario que la SRA había apoyado fervorosamente estaba lejos de haber dado los resultados esperados: los servicios que habían sobrevivido eran deficientes, a pesar de contar con subsidios, y el precio del flete, ahora realizado principalmente por ruta, en lugar de caer se había incrementado. La entidad ensayó entonces un tibio replanteo:

La actitud del gobierno [a principios de la década] era explicable en virtud del caos económico reinante y las culpas que se achacaban al servicio ferroviario de aumentar día a día las deudas del Estado. De ese modo, se logró preparar el terreno para privatizar parcialmente el servicio que, aún hoy, sigue concitando polémicas en cuanto a las concesiones otorgadas. De hecho, el gobierno sigue gastando un millón de dólares diarios en concepto de subsidios, y las concesionarias (principalmente las de carga) se ocupan poco del mantenimiento [...]. El profundo recorte en los servicios ferroviarios produjo que muchas estaciones desaparecieran del mapa, arrastrando completamente a los pueblos que se asentaron en su entorno. Mucho más problemático fue el cierre de talleres y administraciones de los ferrocarriles, que dejaron sin empleo a miles de trabajadores [...]. Tras casi una década de abandono en lo que refiere a políticas relacionadas al sector, que mantiene una estructura viaria con características que pueden ser aprovechadas, son muchos los que se preguntan si no fue un error despreocuparse totalmente del “paquete ferroviario”. Encaminados hacia el nuevo milenio, los países desarrollados ahora le imprimen a la política globalizada un concepto que involucra a la economía y los recursos naturales en un mismo plano [...]. Prueba de eso está manifestada en el informe del “Worldwatch Institute”, que en 1993 realizó un pormenorizado estudio sobre el sector ferroviario [...]. Entre las consideraciones realizadas por el organismo (que cuenta con status semioficial de la comunidad internacional) se señala que “después de décadas de congestión de tráfico, elevadísimas facturas de petróleo y smog, muchos gobiernos van cayendo en la cuenta de que fue un error abandonar el ferrocarril en beneficio de la carretera” (A-Nov99: 38-9).

De este modo, la SRA buscaba una salida para los nuevos problemas que le había ocasionado la aplicación de un programa que seguían defendiendo. Las dificultades para hacerlo, sin embargo, eran manifiestas, dado el inquebrantable apoyo que habían mostrado una década antes, en plena euforia privatista. Todo lo que podían hacer era mostrar lo que se les aparecía como un fracaso en la implementación de dichas políticas, y buscar argumentos nuevos para justificar la presión por su retracción. En este caso, se trataba de un informe publicado por una organización europea en momentos en que el proceso de privatizaciones seguía avanzando, y en los que no pareció pesar demasiado el hecho de que contara con un “status semioficial de la comunidad internacional”. A eso sumaban otros

de raíz ecologista, de desarraigo en los pueblos del interior, y de reducción de la tasa de accidentes en comparación con la expansión en la utilización de las rutas.

A esta altura, en la que comenzaba a ser evidente que la Convertibilidad agonizaba, y con ella todo el esquema macroeconómico, las distintas fracciones del capital se habían reacomodado. El G-8 sólo logró sostenerse durante la primera mitad de este período, en el que siguió funcionando como espacio articulador de demandas de contenido general y soporte de la política económica, hasta que la crisis acabó por desbandar a sus miembros. Durante 1998, estos siguieron manifestando coincidencias básicas, como el rechazo al proyecto de reforma laboral consensuado entre el gobierno y la CGT, o la reforma tributaria (M98: 163-4). Hacia fines de ese año, una reunión tuvo por objeto exclusivo “analizar la evolución de la crisis y las posibles acciones que el Grupo pudiera tomar frente a esta situación” (M99: 148). En febrero de 1999, la devaluación brasileña volvió a alterar el escenario económico, motivando una nueva reunión. Asimismo, el G-8 sostuvo otro encuentro con funcionarios del gobierno, en la que volvieron a plantear “revisar las reformas laboral y tributaria”, avanzar hacia una “permanente austeridad en el gasto público y una ampliación en la base tributaria”, buscar la forma de “prevenir los impactos sectoriales causados por la crisis brasileña” y de “desarrollar el mercado de capitales”.

Junio fue testigo de la última reunión del grupo, en la que volvió a discutirse la crisis. Pero desde antes de su disgregación, ya comenzaba a verse de qué lado quedarían sus integrantes. En la primera semana de ese mes tuvo lugar una cumbre empresaria organizada por la Asociación de Bancos Argentinos (ABA)⁹⁶ “en apoyo al modelo económico”, en la que “se dispuso dar su apoyo a la Convertibilidad en el convencimiento de que es una necesidad para el país”. Invitado por el presidente de la ABA, Crotto fue partícipe de la reunión, y compartió los argumentos esgrimidos por los banqueros:

El encuentro alcanzó un excelente nivel, siendo sus disertantes especialistas en inversiones del Deutsche Bank, de la Banca Morgan y Lehman Brothers, quienes manifestaron que si bien existen problemas microeconómicos no ocurre lo mismo con la macroeconomía y esa es una realidad, porque de lo contrario, estas personalidades no confiarían en la República Argentina (M99: 149).

Comenzaban así a partirse los caminos respecto de la resolución de la crisis. De un lado quedaban la SRA y los capitales bancarios, a quienes se sumaban las empresas privatizadas. Estos seguirían presionando para sostener la Convertibilidad mediante los caminos ya referidos: reducción del gasto público y ordenamiento de las cuentas fiscales, de forma tal de garantizar el pago de la deuda para sostener un mayor endeudamiento. La UIA,

⁹⁶ Se trata de una asociación constituida en 1999 a partir de la incorporación a ADEBA de algunos bancos de capital extranjero, anteriormente nucleados en la Asociación de Bancos de la República Argentina.

por su parte, tomaría un nuevo rumbo. El recambio presidencial que atravesó en 1999 devino en un nuevo estilo de conducción y una nueva estrategia, ya que comenzaría a reclamar al gobierno aliancista políticas específicas para el sector industrial. La dirigencia que ahora tomaba el timón de la UIA se anclaba ya no en las ramas alimenticia y petroquímica, sino la metalúrgica, las economías regionales y los pequeños capitales nacionales, todas ellas fuertemente afectadas por la crisis. Sobre esta base, comenzó a articular reclamos de contenido opuesto a los que enarbolaba como parte del G-8, enfatizando los cuestionamientos sobre el alto costo financiero, el papel del MERCOSUR, la no aplicación de las leyes antidumping, la apertura económica y la no restricción de las importaciones. Estos reclamos no serían compartidos por las fracciones del capital anteriormente mencionadas, pero sí por la Cámara de la Construcción, que se sumaría al nuevo grupo que lideraría la UIA. No así la SRA, que también había sido invitada a participar, y cuyo lugar acabó siendo ocupado por la CRA (Dossi, 2007; Salvia, 2014).

De esta forma, las tensiones generadas por la crisis acabarían por quebrar incluso los consensos más básicos de las fracciones del capital nucleadas en el G-8, y éste acabó desintegrándose. De sus cenizas nacería, en agosto, una agrupación menguada pero con un mayor consenso interno, y por lo tanto capaz de articular demandas mucho más específicas: el Grupo Productivo (GP). Éste presionó por una salida de la crisis en la cual las fracciones industriales (en sentido estricto) del capital recuperaran preeminencia frente a lo que, entendían, había sido un avance de los capitales bancarios y de los servicios. A diferencia de los representantes de estos, se pronunciaban en contra de los ajustes fiscales y proponían políticas económicas de fomento a la producción de valor agregado y las exportaciones, priorizando a los capitales nacionales y promoviendo la reactivación económica (Salvia, 2014).

La ruptura del G-8 había dejado entonces, de un lado, al GP, que timoneado por la UIA, presionaría por una resolución de la crisis que favoreciera a los capitales industriales, mientras que del otro lado quedaban las fracciones del capital que impulsaban un mayor ajuste y endeudamiento.⁹⁷ La SRA, naturalmente, había quedado de este último lado, en el

⁹⁷ La posición política de estos sectores con respecto a la Convertibilidad en tanto régimen cambiario, a lo largo de su crisis final, ha sido objeto de debate. Al respecto, Basualdo (2001; 2002; 2003) plantea la existencia de una división en dos bloques de los capitalistas argentinos, de los cuales uno habría presionado por la devaluación mientras que el otro lo habría hecho en favor de la dolarización. Otras investigaciones también plantean esta alternativa, aunque matizando en ocasiones el rol de los capitalistas y sus asociaciones (Castellani & Schorr, 2004; Castellani & Szkolnik, 2011). Por su parte, Salvia (2014b; 2014c) argumenta que la evidencia empírica para sostener dicha hipótesis es débil, y plantea en su lugar que la generalidad de los capitalistas mantuvo su apoyo a la Convertibilidad durante toda su vigencia, diferenciándose por las alternativas propuestas para gestionar la crisis.

Lo mismo sucede respecto de la acción de la UIA. Sobre la base del planteo de la existencia de una fracción articulada en torno a una propuesta devaluatoria, distintos trabajos (Gaggero & Wainer, 2004; Ortiz & Schorr, 2007; Dossi, 2009; 2014; Castellani & Szkolnik, 2011) atribuyen a la UIA encabezar o participar de dicha fracción, mientras que otros autores, entre los cuáles se hallan Beltrán (2011), Gálvez (2011), y Salvia (2015) se alejan de este planteo, y afirman por el contrario que la generalidad de las organizaciones de capitalistas apoyaron el régimen cambiario de la Convertibilidad hasta su final.

que no había llegado a conformarse un nuevo grupo. Desarmado el G-8, enfrentada a las restantes organizaciones agrarias, y teniendo por aliado circunstancial al capital bancario, de quien había recelado durante toda la década, la SRA proseguiría su acción en soledad.

En diciembre, De la Rúa asumiría la presidencia, mientras que Alchourón y Volando ocuparían sus bancas en el Congreso. La entrada del primero en la política partidaria había llegado de la mano de Acción por la República, el partido creado por Cavallo tras su dimisión. Desde allí procuraría, con escaso éxito, impulsar proyectos de ley para el ámbito rural.

El recambio presidencial sumergió a las entidades en un compás de espera, en la expectativa de anuncios de algún tipo para el sector agrario. No obstante, la SRA apremiaba al gobierno a actuar inmediatamente, sin salirse, por supuesto, del marco de la convertibilidad, ni de su lectura de la crisis:

Todos tenemos bien claro que el principal factor que ha provocado la crisis de nuestro sector es la brutal caída de los precios internacionales [...]. También sabemos que dicha caída está fuertemente influenciada por los crecientes subsidios a la producción y a la exportación que aplican las economías desarrolladas y a las modificaciones en la política cambiaria de países competidores y compradores de nuestros productos. Conocemos que sostener la estabilidad a través de la actual política monetaria es vital para nuestra economía, por lo que nos está vedada la solución facilista de la devaluación para paliar los problemas del sector exportador. El camino, indudablemente, es bajar los costos internos [...]. El apoyo se nos niega permanentemente, ya que no es posible tomar medida alguna que tenga "costo fiscal" [...]. Con respecto al "costo fiscal" [...], es bueno recordar que el pasado 31 de enero se cerró el plan canje automotor por el que el Estado, todos nosotros, los productores agropecuarios también, cedió a la industria automotriz la suma de 710,3 millones de pesos en menos de un año [...]. La lechería, que todo el mundo sabe está en crisis terminal, no consigue que se le anticipe 30 millones de pesos para devolver en cinco años para poner en funcionamiento un plan de despegue del sector por el "costo fiscal" que ello implicaría, y la "posible reacción de los organismos internacionales". Si entonces la única solución que podemos esperar es la reducción de los costos internos, recordemos que aún están vigentes los célebres impuestos distorsivos que se había prometido eliminar, que la presión impositiva aumentó, que los fletes siguen haciendo imposible sacar la cosecha para las empresas alejadas de los puertos, mientras el gasoil y los peajes no bajan y la protección efectiva de más del 50% de la que gozan los camiones industria nacional hace ilusoria la importación para abaratar ese servicio [...]. Es necesario que las autoridades recientemente asumidas tomen conciencia de la importancia vital del sector agropecuario para la economía del país (A-Feb00: 4-5).

Los magros resultados que la política neoliberal había tenido para la SRA se le volvían cada vez más evidentes: bloqueadas todo tipo de medidas de política monetaria, la única forma de ganar competitividad era mediante la reducción de los costos de producción,

cuestión que, en apariencia, resolverían las privatizaciones. Demasiado tardíamente, la entidad lamentaba que el resultado había sido el inverso. La flexibilización laboral, asimismo, no había avanzado tanto como hubiera deseado. Así, incapaz de considerar siquiera la salida del esquema, protestaba porque otras ramas de la producción se veían beneficiadas por las transferencias de riqueza social que, como era cada vez más patente, escapaban de su bolsillo.

En este contexto crítico, la lucha por la apropiación de la renta de la tierra recrudesció. A la disputa mantenida con los capitales automotrices se sumaban ahora los petroleros, que se consolidaban como otro enemigo de la clase terrateniente, y entre quienes halló a un enemigo particularmente perverso:

Dos años de negociación que ocupó a medio gobierno llevó el acuerdo al que se arribara para el comercio automotor [...]. Ninguno de nosotros, hombres comunes, comprende muy bien su contenido, pero todos sospechamos que no va a beneficiar a los usuarios y menos al productor, que continuará usando los servicios de camiones fabricados por una industria que goza de una protección efectiva de un 47% sin contar el plan canje [...].

No se bajará el costo argentino mientras no se logre un efectivo control de las empresas privatizadas, prestadoras en su totalidad de servicios esenciales, que someten al usuario a una condición de servidumbre que lo obliga a pagar tarifas desproporcionadas a veces con la complicidad del Estado que, como en el impuesto a la transferencia de combustibles, se asocia a esa exacción a través de un alto porcentaje del precio de venta.

Ejemplo paradigmático el de las compañías petroleras, que parecen intocables para el Estado nacional, quizás por el impuesto que percibe; para los Estados provinciales, por las regalías; para la prensa, por la profusión de publicidad que le prodigan [...]. Ante la indiferencia oficial, una empresa perteneciente a un Estado extranjero vende el 60% del combustible que consume el país, aprovecha la discutida legislación que otorgó el Estado nacional de expropiar el subsuelo a nuestros productores, fija los precios a su arbitrio obligándonos a pagar precios inalcanzables por el combustible que usamos para producir deteriorando nuestra competitividad, y luego utiliza esas utilidades para subsidiar a los agricultores de su país, desplazándonos de los mercados (A-Mar00: 4-5).

Así, la euforia desreguladora se había tornado en reclamos de control contra los capitales privatizados que, en virtud de su "posición oligopólica", fijaban precios excesivamente altos a sus mercancías, llevándose consigo una porción de renta de la tierra. Paralelamente, el enfrentamiento con los capitales automotrices subiría el voltaje. Las protestas por las "transferencias de ingreso" formuladas en los editoriales de febrero y marzo ya citados se repetirían en mayo, junio y julio, con no menor virulencia.

Para peor, un secretario acaso demasiado compenetrado con la defensa de los intereses de la rama daría entidad oficial a la veracidad de los argumentos. Antonio

Berhongaray, ungido por el gobierno aliancista para hacerse cargo de la SAGPYA, había encargado un informe sobre las transferencias del sector agrario a la industria automotriz. Su publicación acabó desatando un vendaval. En efecto, el informe daba cuenta de algunas de las formas bajo las cuales los capitales industriales, y particularmente las ramas automotriz, de autopartes, textiles, de refinación de petróleo, plásticos y siderurgia apropiaban una porción considerable de renta de la tierra vía distintos mecanismos de la política comercial que habían sobrevivido a la euforia desreguladora de principios de la década (CL, 01/07/00).

Para la SRA, se trataba de una evidencia con status oficial de que el sector agrario continuaba realizando “transferencias” hacia el sector industrial, en el contexto de una crisis que no hacía más que empeorar. Blandiendo el informe, redoblaron entonces la presión sobre el gobierno de De la Rúa:

.Ahora que no podemos disimular la verdad, ahora que sabemos por boca del mismo Estado que quintuplicamos la mano de obra empleada por el sector automotriz; que en 1999, en plena crisis, hemos transferido más de cinco mil millones de dólares de nuestro bolsillo a sectores que producen bienes o servicios caros que estamos obligados a comprar, mientras se nos niega ayuda por tener “costo fiscal”, ahora que todo está blanco sobre negro, ¿cómo seguimos? (A-Jun00: 4-5).

La publicación del informe retrotraía la situación al momento inicial de la década, cuando la SRA atacaba duramente a la generalidad de los capitales industriales. En la inauguración de Palermo, Crotto denunciaría “la errónea política fiscal que históricamente nutrió al sesgo antiexportador”, y los subsidios para “seudo empresas y [...] personeros del lobby de la ineficiencia, que además utilizan parte de esos fondos para perpetuar sus ventajas” (A-Ago00: 24). Similares apreciaciones vertió en una entrevista, en la que ya ni siquiera la agroindustria se salvaba de la afrenta:

Tenemos que trabajar todos juntos en el agro para que se acaben las transferencias de recursos a otros sectores y si la industria que no recibe más esos fondos desaparece, que lo haga, como sucede con los productores a los que no les dan los números. Por qué tenemos que estar subsidiando a la industria de los cueros o a las aceiteras. Ya hicimos muchas fábricas de aceites y no las queremos hacer más [...]. Hay muchas agroindustrias que son eficientes y podemos trabajar juntas. Pero otras que viven gracias a los recursos que les transfiere el campo. (LN, 31/07/00).

Al mismo tiempo, la entidad avanzó en la ofensiva contra las empresas privatizadas, a pesar de que estas presionaban por igual resolución de la crisis: “urge una desregulación cierta de la totalidad de los servicios. Debemos evitar los monopolios y oligopolios que

perjudican a personas y empresas, como ocurre con las comunicaciones, los supermercados, la electricidad, los combustibles y peajes” (A-Ago00: 22-4).

La SRA se veía forzada a reconocer que tanto las privatizaciones como los efectos de la política de apertura comercial que había defendido se le habían vuelto en contra. Similar apreciación vertió Biolcati en un debate organizado por La Nación: “con las privatizaciones se nos dijo que lo importante no era la plata que se obtendría, sino la baja de tarifas debido a una mejor eficiencia. Pero desde que se privatizó, en lugar de tener servicios más baratos, los tenemos más caros” (A-Jul00: 22).

Claro que no se trataba de abjurar de dicha política, sino de profundizarla. El proceso de privatizaciones, en este sentido, había fracasado por “insuficiente”:

La escasa profundización en las desregulaciones implementadas [...] trajo como consecuencia una importante e injustificada transferencia de recursos inter-sectoriales y que traban la posibilidad de menores costos para los usuarios [...]. El sector sufrió el impacto negativo de la baja de los precios internacionales, sin recibir plenamente el beneficio que le hubiera correspondido cuando los precios de los insumos disminuyen, como se vislumbra en el caso del sector petrolero (A-Ago00: 22-4).

La SRA no podía abdicar de sus principios liberales, ni condenar el avance de la política neoliberal que había apoyado durante años. Pero tampoco podía dejar de reconocer que su implementación no estaba teniendo precisamente el resultado que ella misma había promocionado. En este contexto, la solución fue cargar las culpas sobre los capitales que gestionaban los servicios privatizados, afirmando que constituían monopolios u oligopolios capaces de elevar artificialmente el precio al que venden sus mercancías, resultado de un desarrollo inconcluso del proceso privatizador. Y, consecuentemente, la propuesta no era otra que profundizar dicho proceso y, mientras tanto, exigir al Estado recuperar la capacidad de control sobre los capitales privados, tras haberle exigido durante años que renunciara a ella:

La apertura y desregulación requieren de una segunda etapa, la del aumento de la competitividad mediante la entrada al mercado de mayor cantidad de empresas para aumentar la competencia interna que tiende a disminuir costos [...].

Está demostrado que el Estado debe controlar las actividades desreguladas en función de intereses superiores del país, a fin de recuperar parte de la competitividad perdida a causa de la acción de monopolios, oligopolios o cartelizaciones de empresas que puedan distorsionar los precios relativos en perjuicio de otros sectores (M01: 14-5).

Así, el enfrentamiento contra los capitales de las empresas privatizadas impedía a la SRA actuar coordinadamente con una de las fracciones del capital que pugnaban por una

salida de la crisis similar. En relación no menos tensa con sus pares de la rama agraria, que no vacilaban en enfrentar abiertamente a los gobiernos neoliberales, la SRA seguiría su camino en soledad.

7.4. La SRA en el derrumbe del neoliberalismo

En este marco, y ante la profundización de la crisis, los enfrentamientos entre distintas fracciones de capitalistas y terratenientes seguían su curso. En el sector agrario, la ya deteriorada relación entre la SRA y la CRA acabaría por fracturarse.

Ambas organizaciones habían quedado de hecho en bandos opuestos en relación a su vínculo con el gobierno menemista, al que CRA había enfrentado con creciente vehemencia. Lo mismo sucedería con el gobierno de la Alianza: mientras la SRA evitaba realizar acciones de protesta, la CRA proseguiría su política de confrontación abierta.

El puntapié inicial lo había dado CARBAP. Ya en una asamblea celebrada en marzo había amenazado con realizar el primer paro ante el gobierno de la Alianza (LN, 26/03/00). La falta de propuestas concretas tras una reunión de las cuatro entidades con De La Rúa y su ministro de economía, José Luis Machinea, acortó aún más los tiempos. Mientras, la FAA publicaba un documento en el que se exigían medidas, aunque sin considerar aún la posibilidad de realizar acciones de protesta. Similar posición presentaban CONINAGRO y la SRA (LN, 22/04 y 06/05/00). En mayo, otra reunión con Machinea tuvo como resultado el anuncio de una baja de las tasas de interés de la deuda bancaria de las entidades. No fue suficiente para CARBAP, que finalmente convocó al paro hacia fin de mes. Además de arrastrar a la conducción de la CRA, buscó sumar, sin éxito, a las restantes entidades (LN, 18-22/05/00). Por su parte, y tras un recambio dirigencial, la FAA volvería a la acción. A principios de octubre, la delegación de Entre Ríos formó parte de otro paro de transportistas. Paralelamente, la CRA volvió a la carga con la gestión de un nuevo paro, al que se lograría sumar esta vez tanto a la FAA como a CONINAGRO. A pesar de que el tono de las críticas de la SRA al gobierno había ido in crescendo, siguió sin correrse de su línea, y buscó detener el paro “para darle oxígeno al gobierno y superar este difícil momento político” (LN, 11/10/00).

Pero la medida siguió en pie. A mitad de mes, las tres entidades realizaron un paro comercial de 6 días, al que se sumaron organizaciones de camioneros. Una multitud de piquetes se desarrollaron en distintas áreas de la región pampeana, y se extendieron a las provincias de Chaco y Salta. El alto acatamiento logró paralizar casi por completo el comercio de granos, y afectó en buena medida a la producción de carne, ya golpeada por la reaparición de focos de aftosa. Muchos piquetes se extendieron incluso algunos días más de lo previsto, con la anuencia de las asociaciones agrarias (16-22/10/00).

A pesar de repudiar el paro, la SRA exigió al gobierno medidas “de fondo”, y denunció que “no existe una política agropecuaria nacional, el gobierno no cree en el campo como motor de la economía, mientras subsidia directa o indirectamente a otros sectores”.

Paralelamente, anunciaría su propia estrategia, que contrastaba con el paro:

La SRA está trabajando [...] en la elaboración de una propuesta abarcativa [...] Entonces sí, con una propuesta alternativa concreta y posible, lucharemos con todas las armas disponibles y todas las metodologías necesarias para encontrar comprensión y apoyo de todos los poderes del Estado. Participar de un paro mediático para generar imágenes de un Liniers con corrales vacíos puede ser emblemático, pero es minimizar nuestro problema y recargar casi exclusivamente sobre las espaldas del productor ganadero el peso de la protesta [...] No está en juego un paro, sino el futuro (M01: 79-80).

La entidad seguía temiendo que el “estallido social”, del que ahora hacía responsables incluso a los periódicos, acabara derrumbando al gobierno aliancista y con él, al neoliberalismo. En esta tesitura, amonestó a la CRA por la organización del paro agrario y, de paso, por su incorporación al GP:

Un peligroso cocktail compuesto por una insostenible situación económica de un sector marginado cada vez mayor, sumado a la prédica desestabilizante de la izquierda y a los comercialmente rentables títulos catástrofe de los diarios, hacen del estallido social una posibilidad cada vez menos remota [...]. No se trata hoy de luchar por una rebaja en la tasa de interés, por una refinanciación o por un nuevo parche impositivo que nos favorezca. Se trata de demostrar que la salida [...] pasa por la agroindustria, se trata de convencer a la sociedad de que nuestra prédica no es por una mezquina ventaja sectorial en el reparto de la cada vez más pequeña torta, sino por darle una solución al país. Por eso las propuestas deben ser serias y los reclamos hechos con prudencia [...]. Como productor agropecuario no me he sentido entre pares, sino más bien atemorizado, cuando piquetes de jovenzuelos de no más de dieciocho años me detenían días pasados en las rutas de mi país, alegando representarme [...]. Nuevamente los sectores protegidos, que el estudio de la SAGPYA dejó a la vista, vuelven a lucrar. Lo extravagante de esta situación es que el apoyo a proyectos que privilegian los aeropuertos por sobre sacar el agua del centro del país, esta vez es brindado también por nuestra hermana confederación ruralista, a través de su actuación en el denominado “grupo productivo”. Es nuestro deseo que esa entidad, de indudable peso en algunos sectores del gremialismo rural, recupere el rumbo y sus autoridades el liderazgo, sin duda comprometido con algún cuestionado paso al costado de máximos dirigentes o dolorosos episodios de acefalía parcial. Cuando el poder formal en una entidad es ejercido por personas que por falta de voluntad o de vocación no pueden asumir el poder real, la anarquía lleva a la incoherencia, y la agresividad estéril reemplaza a la verdadera acción gremial. El bullicio contestatario es efímero y muchas veces peligroso. Las que permanecen son las obras (A-Oct00: 4-5).

Mientras tanto, el escenario político seguía acelerando su deterioro, al compás de la crisis económica. En noviembre, el vicepresidente renunciaba tras el escándalo de las coimas en el senado. El mes siguiente, un nuevo brote de aftosa reaparecía en el Noreste, cerrando así la efímera etapa de país libre sin vacunación, y tensando la relación de las entidades con el gobierno de De la Rúa: a las torpeza política que exhibió en el manejo de rebrote se sumaba la incapacidad de acción del SENASA, al que se le inyectaban cada vez menos fondos. Por cierto, la UE volvió a impedir las importaciones de carne argentina, pero no por la reaparición de la enfermedad (ya que el brote se desató antes de que pudiera reconocer el status concedido por la OIE de país libre de aftosa sin vacunación), sino por la política de ocultamiento (LN, 16/01/02).

En diciembre, la SRA emitió un documento en el que, además de reiterar los reclamos usuales, lamentaba el bloqueo en el Congreso de los proyectos de ley presentados conjuntamente con las restantes entidades (en especial, el de creación del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, propuesto en 1998, y el de Promoción de Lácteos, que contaba incluso con el aval de la industria lechera), y protestaba por la aparición de un nuevo brote de aftosa y la falta de obras para contener las inundaciones, que al igual que en 1999 afectaban vastas áreas de la región pampeana.

A pesar de que el sostenimiento de la convertibilidad dependía cada vez más abiertamente de la renovación de una deuda impagable, la SRA celebró su nueva expansión mediante el llamado "Blindaje", que lograría extender otro año la agonía: "Esta semana clave, en la que internacionalmente se nos renovó la confianza y se nos dio el oxígeno para seguir respirando, no debe ser desperdiciada porque no sabemos cuándo tendremos otra oportunidad" (A-Dic00: 4-5). En este contexto, en el que la reproducción de esta fase de la acumulación marchaba ya visiblemente hacia el colapso, volvió a explicitar su rechazo a las acciones de protesta, en el temor de que pudieran acabar, como lo harían, derribando al gobierno.

Ya a esta altura, sin embargo, un viejo fantasma recorría nuevamente la Argentina: el de la devaluación. Roque Fernández, como ya vimos, le había imputado dicha intención a las asociaciones agrarias. En mayo de 1999, sería el propio Cavallo quien deslizaría la posibilidad de salir de dicho régimen, e incluso de estar dispuesto él mismo a diseñar la salida en el caso de que Duhalde resultara ungido presidente. Aunque el ex ministro aclaró posteriormente que una eventual salida del tipo de cambio establecido no significaba abandonar el tipo de cambio fijo y, por lo tanto, la Convertibilidad, los mercados se desplomaron inmediatamente, tras decodificar el mensaje como una devaluación en puerta (LN, 20/05/99).

Algunas de las asociaciones agrarias parecían receptivas a la alternativa. En una entrevista concedida a La Nación por la dirigencia de las cuatro entidades, los presidentes

de CONINAGRO y FAA refirieron al “atraso cambiario” y el “deterioro de los precios relativos” como principales problemas del agro, mientras desde SRA y CRA se enfatizaba el problema del “costo argentino” (LN, 17/04/99).

Sin reclamar explícitamente una devaluación, las dos primeras entidades sostendrían su posición. De acuerdo a Sidicaro (2002), un informe de CONINAGRO calculaba hacia 1999 que el tipo de cambio de paridad era de 1,68\$ por dólar, y en mayo de ese año su presidente, Valentín Levisman, insistiría con que el atraso cambiario afectaba a la producción agraria y provocaba una transferencia de ingresos hacia los capitales de servicios privatizados (págs. 200-1). Por otra parte, Humberto Volando, presidente de la FAA hasta 1996 y devenido senador tres años más tarde, había sugerido discretamente la posibilidad a mediados del 2000, dejando entrever que consideraba que la alternativa podría ser peor:

Desde mediados del año pasado hasta la fecha 40 países han devaluado. Hasta el propio Brasil devaluó y nos saca ventaja. No soy partidario de las devaluaciones pero hay desempleo, las empresas chicas desaparecen, las empresas grandes ponen todo arriba de un camión y se lo llevan a Brasil. Yo no puedo cargar mi campo arriba de un camión. Así la Argentina no camina. Los extremistas hacen cosecha cuando la gente está muy caliente. Ojo: no sólo está en riesgo mi bolsillo, sino también el régimen democrático (A-Jun00: 42-3).

La SRA se mantendría en su posición de defensa del régimen. Mientras tanto, la crisis avanzaba con prisa y sin pausa. En mayo del 2000, el gobierno de la Alianza anunciaba un plan de ajuste que incluía un recorte en los sueldos estatales superiores a 1000\$, la reestructuración del sistema previsional y la desregulación de las obras sociales. Esta última era una de las exigencias del FMI, cuyos técnicos arribarían días más tarde en un contexto complicado para el gobierno: a pesar de que el último crédito se hallaba condicionado a que el déficit anual no superara los 4700 millones de dólares, hacia abril ya se había alcanzado casi la mitad de ese número (LN, 29 y 30/05/00).

Las entidades agrarias lograron concertar una reunión con funcionarios del organismo. Nuevamente, las diferencias quedaron bien marcadas: mientras que Bonetto, presidente de la FAA, exigió al FMI “que nos saquen la pata de encima”, Crotto prefirió valerse del encuentro para plantearle al organismo algunas de las cuestiones económicas que inquietaban a la SRA, y valoró que éste estuviera dispuesto a recibir denuncias por políticas paraarancelarias o subsidios encubiertos. Los funcionarios que participaron de la reunión se ocuparon, sin embargo, de dejar sus ideas aún más claras de lo que ya estaban, y espetaron a los presidentes de las entidades agrarias que “hay que racionalizar el presupuesto y bajar el gasto público” (LN, 08/06/00).

Era claro que dicha meta no lograría ser cumplida como no fuera a fuerza de ajustes como el anunciado. Pero si los acreedores externos atenazaban al gobierno de un lado, del otro la acción política de la clase obrera lo enfrentaría con fuerza creciente en las calles. La visita del FMI fue repudiada por la CGT disidente conducida por Moyano, que organizó una numerosa marcha. Envalentonado tanto por el éxito en el paro de transportes que había comandado tan sólo un mes antes como por la convocatoria que había tenido la marcha, Moyano anunció allí el primer paro nacional contra el gobierno de De la Rúa: el 9 de julio, tanto esa central como la CTA y la otra fracción de la CGT paralizaron la actividad económica (LN y CL, 10/06/00).

A principios del año siguiente, la crisis fagocitaría al primer gabinete económico nombrado por de la Rúa. Tras la renuncia de Machinea, el gobierno de la Alianza, o lo que a esta altura quedaba de ella, consideró para el cargo a Ricardo López Murphy y a Domingo Cavallo, inclinándose por el primero.

Las entidades agrarias recibieron la noticia de distinto modo. La FAA, como cabía esperarse, fue la menos optimista, y expresó en un comunicado que “sólo puede ofrecer al país más de la misma receta: dar continuidad y acentuar el esquema de ajustes socioeconómicos, de tan dolorosa experiencia para la población”. La CRA, por su parte, se desmarcó parcialmente de la línea del GP, cuando su presidente afirmó que López Murphy “es un economista serio y ortodoxo. Antes de asumir dijo que hay que reducir el gasto público y eso es fundamental, porque el sector público gasta mucho y mal”. La SRA también lo recibió con los brazos abiertos. Crotto señaló que se trataba de buena elección, ya que “sabe que hay que bajar el costo fiscal, intentar que todos paguen [...]. Yo, como presidente de la Nación, lo hubiese elegido a él por su afinidad con el partido, era lógico. Aunque creo que Cavallo también hubiese sido una excelente elección” (LN, 07/03/01).

El nuevo ministro no demoró mucho en anunciar un programa de brutal reducción del gasto público, que alcanzaba los 2.000 millones de pesos para el año en curso y 2.500 para el siguiente, y recaía particularmente sobre el presupuesto destinado a la educación pública. Y a pesar del apoyo de una amplia fracción de la clase capitalista (LN, 18/03/01), tampoco demoró demasiado en verse obligado a renunciar, tras una serie de cortes de ruta y paros docentes que culminaron en una nueva huelga general convocada por la CTA, la CGT de Moyano y la CCC.

El gobierno de la Alianza jugó entonces su última carta en el intento de sostener la Convertibilidad y el rumbo general de la política económica, reponiendo a Cavallo en el Ministerio de Economía. Esto le permitía recuperar algo de fuerza política, menguada por la virtual escisión del FREPASO y las rencillas al interior de la propia UCR, mediante una alianza con el partido político del propio economista, además del golpe de efecto que suponía reinstaurar al padre de la criatura. Los 15 días de López Murphy en el MECON, sin

embargo, ofrecían un panorama poco alentador: tan sólo en marzo se habían sucedido tres ministros de economía.

El recambio dio lugar a impresiones similares a las que había provocado la designación de López Murphy. Mientras que el presidente de la SRA se mostró “muy satisfecho” por el regreso de “el economista más espectacular del último medio siglo que tuvo el país”, el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, advirtió que con Cavallo se iba a “profundizar la recesión”, ya que “representa la consolidación del viejo modelo menemista” (LN, 21 y 24/03/01).

Dos meses después, Cavallo expuso su propio paquete de medidas que sería, cuanto menos, confuso, puesto que eliminaba o modificaba impuestos ya existentes, a la par que creaba otros nuevos. Entre algunas de las medidas que la SRA valoraría como positivas, se contaban la eliminación de impuestos que la entidad consideraba “distorsivos”, como el de endeudamiento empresario (intereses) y ganancia mínima presunta, la disminución del costo de los peajes, la disminución del impuesto a las ganancias y a los vehículos gasoleros. También se devolverían los saldos retenidos del IVA, pero mediante un bono que, se descontaba, circularía a un valor menor al nominal. Al mismo tiempo, sin embargo, se proyectaba aumentar el precio del gasoil, se creaba un impuesto a las transacciones financieras, y se reducía la alícuota del IVA a la venta de granos. No menos confusión generó el anuncio de la “ampliación” de la convertibilidad, por la cual el tipo de cambio para el comercio exterior se determinaría como un promedio entre el dólar y el euro, lo que en la práctica representaría una pequeña devaluación del tipo de cambio para las exportaciones.

La reacción al plan no se hizo esperar. A pesar de haber anunciado el paquete un viernes por la noche, de forma tal de poder enfrentar los eventuales cuestionamientos durante todo el fin de semana, al lunes siguiente el riesgo país se disparó y los bonos de la deuda se desplomaron. “Los mercados no entendieron las medidas”, se lamentó Cavallo (P/12, 16/06/01).

La evaluación de la SRA fue no menos confusa. El IEE publicó dos notas en la edición de Anales de julio. En la primera, establecía que las medidas lograrían una reactivación en la economía, y que la rama agraria había sido beneficiada por la eliminación de impuestos distorsivos y la modificación impositiva en general. Respecto del nuevo tipo de cambio comercial, señalaba que el paquete “mejora el tipo de cambio y por ende, el ingreso de los exportadores [...] a su vez, encarece las importaciones. Al mismo tiempo, se reducen reintegros a las exportaciones [...], pero el balance es positivo para las materias primas”. El balance, finalmente, era positivo: “estamos en presencia de medidas tendientes a lograr una reactivación de la economía [...]. Las medidas económicas son buenas para el agro, pero financieramente supondrán un esfuerzo adicional” (A-Jun01: 28-9). Sin embargo, en la nota

siguiente, protestaban en duros términos contra la reducción del IVA a la venta de granos: “pretender reducir las alícuotas de IVA a la venta de granos es una aberración” (A-Jun01: 30-1).

Con el anuncio del paquete (del cual muchas medidas jamás llegaron a aplicarse), Cavallo estaba metiendo mano en lo que, tanto para la SRA como para distintas fracciones de capitalistas, era la vaca sagrada del modelo: la Convertibilidad. La organización valoró positivamente el nuevo tipo de cambio comercial a pesar de, o precisamente porque, representaba para ella una devaluación; no obstante, siguió presionando para sostener la convertibilidad mediante el endeudamiento y el ajuste fiscal, aunque procurando, por supuesto, que éste no recayera sobre el sector agrario. De poco valdrían sus esfuerzos.

Hacia mediados del 2001 los acontecimientos comenzaron a precipitarse. Al impuesto al cheque puesto en vigor en mayo le siguió un nuevo recorte presupuestario. En julio se sancionó la ley de “déficit cero”, que procuraba suprimir el déficit fiscal mediante una quita en los salarios públicos del 13% (y un número mayor en el caso de los docentes, que sufrirían la quita de los llamados “incentivos”), así como una reducción en los subsidios de desempleo y los presupuestos provinciales, entre otras medidas de similar tenor. Al mismo tiempo, buscó contener la presión de la deuda mediante una reestructuración que pasó a la historia como el “megacanje”, en la que se postergaban vencimientos de capital e intereses hasta el 2005 y se incrementaba la deuda total.

La SRA apoyó, una vez más, el avance del ajuste. Tras el anuncio de la ley de déficit cero, emitió un comunicado de prensa titulado “para volver a creer”, en el que afirmaban que:

El país ha enfrentado el duro golpe de enfrentar una realidad que veníamos escondiendo debajo de la alfombra. No tenemos resto, nuestra capacidad de endeudamiento tocó fondo y la única salida es tratar de sobrevivir en lo inmediato con nuestros recursos [...]. Los caminos son claros y no existen medidas alternativas. El gasto público no puede sostenerse a nivel nacional y mucho menos a nivel provincial.

La angustia y el dolor que generan los recortes salariales, especialmente en los sectores de menores recursos, deberán ser acompañados y contenidos con gestos de grandeza de parte de nuestros gobernantes [...].

La SRA, como una de las entidades más antiguas del país, llama a una mesurada reflexión de todos los sectores involucrados [...] para acompañar [...] un proceso de restricción inevitable que nos permita volver a empezar (M02: 49-50).

Por su parte, distintas fracciones de la clase obrera salieron a enfrentar las medidas. Entre julio y agosto, la CGT liderada por Moyano, nuevamente acompañada por la CTA y la CCC, lanzaron dos nuevas huelgas generales, mientras que los desocupados, agrupados en

las distintas vertientes del movimiento piquetero, confluyeron en un congreso en el que determinaron la realización de numerosos cortes de ruta. La conducción oficial de la FAA y la fracción representada por CF participarían de estas acciones (Pérez Trento, 2015).

En este convulsionado escenario, la SRA realizó una nueva exposición ganadera en Palermo, con la particularidad de la prohibición de las exhibiciones de ganado vacuno debido al brote de aftosa. Allí, Crotto volvió a defender enfáticamente las medidas de Cavallo:

Sr. Presidente [...], quiero agradecerle la eliminación de los impuestos a la GMN y sobre los intereses [...]. La Ley de Convertibilidad ampliada y el cómputo como crédito fiscal en el IVA a los importes abonados como contribuciones patronales son dos medidas que devuelven competitividad a un sector que estaba al borde del colapso. Por eso Sr. Ministro de Economía, gracias por escuchar nuestros requerimientos. Estas medidas merecen nuestro aplauso.

La proximidad de las elecciones legislativas motivó, asimismo, una encendida diatriba, en la que la defensa del “modelo” aparecía inexorablemente atada a la defensa del débil gobierno que lo sostenía: “debemos estrechar filas en torno al gobierno porque no es la suerte de un partido la que está en juego, sino la existencia de la Nación misma [...]. Este es el momento de dar la Madre de todas las batallas: la lucha contra el gasto público y la reducción a cero del déficit fiscal”. Y ante el nuevo momento de flujo de la lucha de clases, volvió a pedir el descargo de la represión sobre la clase obrera: “no podemos aceptar en silencio que grupos de piqueteros, más allá de la posible validez de sus reclamos, corten impunemente las rutas argentinas y nadie haga nada para impedirlo” (A-Sep01:14-7).

Así, aun ante el inminente colapso, la SRA no atinó más que a defender la política de ajuste y ajuste fiscal, reclamar represión para los que la enfrentaban, y apoyar al gobierno que daba una forma política cada vez más precaria a la contracción económica. Tampoco se apartó de la interpretación de la crisis en la que el causante había sido la caída de los precios internacionales de las mercancías agrarias y las políticas proteccionistas emprendidas por otros países.

Las elecciones legislativas de septiembre, en las que se impuso el llamado “voto bronca”, complicaron aún más el escenario: con un ausentismo de más de la cuarta parte del padrón, un quinto de los votos en blanco o impugnados, y un caudal de votos significativamente bajo tanto en el caso de la UCR como del PJ y creciente para los partidos de izquierda, la crisis de la representación política avanzó un nuevo paso. Para peor, el PJ había obtenido un rotundo triunfo sobre la Alianza y el partido de Cavallo, lo que presagiaba mayores dificultades para el gobierno.

Dos meses más tarde, el agravamiento de las inundaciones volvía a partir aguas entre las organizaciones agrarias: mientras que la SRA se limitó a protestar verbalmente, la

FAA, CONINAGRO y CARBAP, menos contemplativas, se movilizaron a Plaza de Mayo, sumando su granito de arena al estado general de efervescencia (LN, 06/11).

A esta altura, la Convertibilidad sufría ya sus últimos estertores. Tras la concreción de la primera fase del canje de la deuda, Cavallo procuró negociar con el FMI el desembolso de créditos pendientes a cambio de realizar un nuevo ajuste presupuestario para el 2002. La evidente incapacidad del gobierno para efectuarlo, sin embargo, hizo fracasar las negociaciones, ante lo cual el ministro decidió postergar el pago de las jubilaciones y anunció un aumento de los recortes salariales y la supresión del pago de los aguinaldos. El derrumbe ya se presentaba como algo inminente, y la fuga de dólares y el retiro de depósitos bancarios que siguió a los anuncios no hizo sino retroalimentar la espiral.

A mediados de noviembre, algunas de las organizaciones representantes de la clase capitalista que defendían abiertamente el rumbo general de la política económica aún vigente publicaron una solicitada llamando a la realización de un "pacto nacional". Allí se reafirmaba la necesidad de sostener la Convertibilidad, se defendía la ley de déficit cero, la reestructuración de la deuda pública y se llamaba, en última instancia, a "defender las instituciones de nuestra Patria y la continuidad, sin interrupción, ni cambios, de nuestro régimen constitucional". La SRA se sumó a las organizaciones firmantes, que incluían a ABA, CAC, y COPAL, mas no a la UIA ni las restantes entidades nucleadas en el GP (CL, 18/11/01). Evidentemente, la perspectiva de una alteración del orden institucional, o acaso la consecuencia que ello tendría respecto del esquema económico, preocupaba a la dirigencia de las asociaciones firmantes. En particular, Crotto destacó que "no se puede andar especulando con cambios de figuras. Sería un error que pagaríamos todos los argentinos [...]. La situación del país es lo suficientemente grave para buscar un consenso. No podemos estar bailando sobre el Titanic" (LN, 19/11/01).

El 1 de diciembre, Cavallo decretó el congelamiento de los depósitos bancarios para detener la sangría, dando lugar a un nuevo ciclo de movilizaciones que abarcarían ahora a fracciones crecientes de la clase obrera y los pequeños capitalistas, afectados por la iliquidez monetaria. La imposición del "corralito" bancario fue el último intento de sostener la a esta altura insostenible sobrevaluación del peso. A mediados de diciembre todo el arco sindical dispuso un paro nacional, al que adhirieron la FAA y CONINAGRO. Los sucesos del 19 y 20 de diciembre precipitaron la caída del gobierno de De La Rúa y el fin de la Convertibilidad. Y con ella, el de todo el "modelo".

La SRA, por su parte, había sido incapaz de alterar el sentido de su acción política, incluso en el ocaso del neoliberalismo. Valga como prueba el discurso de fin de año pronunciado por Crotto el 19 de diciembre, mientras la Plaza de Mayo recibía a los manifestantes que forzarían la caída del gobierno:

Nuestro gran cometido es mostrarle al mundo que somos capaces de construir sobre bases sostenibles un país digno de crédito [...]. La falta de solvencia fiscal y la pérdida de competitividad son factores que nos empujarán al default, y que traerán como consecuencia inmediata la desaparición del financiamiento externo e interno, fenómeno que en la práctica ya se manifiesta [...]. No podemos pensar en devaluaciones que nos retornarían a la hiperinflación, ni en dolarizaciones que la inmensa mayoría no quiere [...]. El camino es bajar el gasto público y lograr el equilibrio fiscal (M02: 48-9).

Así, incluso a horas del colapso, la SRA fue incapaz de considerar algún tipo de salida de la Convertibilidad, y siguió apoyando un curso que ya había demostrado, a los ojos de todo el mundo, haberse vuelto inviable. La entidad había mantenido su promesa de no abandonar el frágil barco de la Convertibilidad. Pero cuando este finalmente se hundió, la arrastró consigo. El ocaso del neoliberalismo la encontró entonces, por así decirlo, pedaleando en el aire.

7.5. La gestión dirigenal de la entidad, también en crisis

La íntima relación que la CD había entablado con el gobierno menemista no se extendió al gobierno de la Alianza, pero aun así la SRA había accionando por su estabilidad, en la medida en que la suerte del esquema económico estaba sellada a la de aquél. El muy breve período de precios altos para las mercancías agrarias había permitido sortear con mayor facilidad los cuestionamientos hacia la acción política desarrollada por la dirigencia, aunque las críticas en torno a la gestión interna de la entidad persistieron, centradas especialmente en su accionar relativo a la compra del predio. La crisis que comenzaba a abrirse en 1998, no obstante, volvía a poner presión a la CD desde distintos flancos.

Por una parte, la deuda con el Estado y los bancos privados por la compra del predio ya había sido cancelada. Esto suponía haber superado la potencial quiebra económica, aunque los escándalos relacionados con la operación habían manchado irremediamente la imagen de la entidad. Por otra parte, sin embargo, la entidad daría un nuevo paso en falso en su intento de explotar el predio. En primer lugar, el proyecto propuesto por OGDEN, su nuevo socio, incluía la realización de salas de cine, bowling, y restaurantes. Para ello, la sociedad solicitó y obtuvo un crédito del Banco Provincia, nuevamente bajo condiciones sugestivamente favorables, lo que se constituyó en un nuevo escándalo. Por otra parte, la construcción de las obras proyectadas sólo podía realizarse si se rezonificaba el área, lo que presentaba múltiples problemas. Entre ellos, el hecho de que esto debía hacerse mediante un proyecto de ley presentado a la legislatura porteña, instancia que nunca logró superar por distintas razones. Poco tiempo después, OGDEN decidió vender todos sus activos en la Argentina, dejando nuevamente a la SRA sin socio comercial.

Por otra parte, nuevas acusaciones recaían sobre la CD, esta vez por parte de los propios socios de la entidad. Un grupo de ellos denunció a Crotto por distribuir panfletos antisemitas, justo en momentos en que Moneta, quien además de haber sido socio comercial para la explotación del predio era amigo personal de aquél, se “defendía” de las acusaciones periodísticas que exhibían su proceder argumentando que los periodistas eran judíos y lo atacaban por ser católico (P/12, 23/07/00). A pesar de haber estado en medio de una investigación penal, Moneta había sido invitado a la exposición de la SRA para exhibir, una vez más, su escuadra de caballos, lo que motivó la objeción de otros dos socios (P/12, 25/07/00). En la exposición rural, estos convocaron a la prensa para expresar su descontento con la conducción de la entidad, expresando que la crítica no revestía motivos electorales, sino que simplemente pretendían mostrar su descontento con la gestión de Crotto. Uno de ellos resumió la situación en una tabla de doble entrada, en la que se leía:

Antes de Crotto [...]: 200 hectáreas en Del Viso, ningún escándalo, ningún Moneta, tasa fiscal global razonable, rentabilidad del agro razonable, endeudamiento de 2200 millones [...]. A partir de Crotto [...]: 200 hectáreas en Del Viso volatilizadas vendidas a 20 millones de pesos aunque hoy valen 200 millones de pesos, denuncias de vecinos y causas penales, aparece Moneta, tasa fiscal confiscatoria, rentabilidad del agro negativa, endeudamiento de 10 mil millones (P/12, 02/10/00)..

Como se ve, las críticas no se limitaban ya a la gestión del predio, sino que se extendían hacia la acción política de la organización. El grupo de socios disidentes rechazaba la estrategia de alineación incondicional al gobierno de Menem (y, en particular, al vínculo abiertamente estrecho que con él mantenía el propio Crotto). Es por eso que la CD se veía en la necesidad de “agradecer la confianza” de los socios en momentos en que la dirigencia seguía apoyando firmemente al gobierno menemista a pesar de la crisis, señalando que el esfuerzo se vería recompensado en un futuro que, de hecho, no llegaría. Incluso cuando la CD no tuvo más remedio que accionar contra el gobierno, fue acusada de hacerlo de forma tardía, como en el caso de la interposición del recurso de amparo contra la modificación del IVA en 1998, o improvisada, como ante la realización del paro ganadero en 1999.

Las críticas a la gestión de la dirigencia habían recrudecido a tal punto que la edición de Anales de diciembre de 1999 incluyó una nota titulada “respuesta a diversas inquietudes”, en la que la CD responde, precisamente, a “inquietudes” varias de socios, medios de prensa y políticos. La propia publicación de la nota muestra la presión a la que estaba sometida la dirigencia.

Los principales aspectos sobre los cuales la CD buscó defender su accionar referían, por un lado, a la remuneración de las autoridades, aprobada seis años atrás; por el otro, a la

sociedad con OGDEN, y la naturaleza de las deudas contraídas para la construcción de las obras en el predio. La nota también muestra preocupación por la imagen que los medios de prensa, que se habían hecho eco de los escándalos sucedidos en torno a la compra del predio, mostraban de la entidad. Asimismo, se acusaba recibo del pedido de informes presentado por legisladores del FREPASO sobre el crédito otorgado por el BAPRO (A-Dic99: 40). El descargo no refería a otra de las objeciones presentadas por la disidencia, que consistían en que parte de la dirigencia de la entidad no sólo había pasado a ser remunerada por su tarea al frente de ella, sino también fuera de ella. O no exactamente fuera: al tiempo que era presidente de la SRA, Crotto había sido nombrado director de la sociedad conformada para la explotación del predio, junto a otros dirigentes de la CD como Juan Ravagnan y Carlos Hubert, en cargos que se hallaban retribuidos con unos 5.000\$ mensuales (P/12, 30/07/00). Esta remuneración, se señalaba, constituía un conflicto entre el interés de la asociación civil y el de la sociedad anónima. Por último, la CD respondía también a los cuestionamientos sobre el número de socios, cuya contracción no aparecía reflejada en los balances de la entidad. Al respecto, se limitó a afirmar lacónicamente que “el procesamiento de los mismos implica un trabajo material que, por su costo y diversidad, supera lo que razonablemente puede suministrarse a los asociados” (A-Dic99: 40).

En este contexto, las bases de la disidencia se ampliaban: los socios que protestaban contra la gestión de la CD habían logrado ya constituir un grupo que nucleaba, según los contara Crotto o las informaciones periodísticas, entre 20 y 40 individuos. Teniendo en cuenta que asambleas en las que se discutieron temas de importancia habían llegado a reunir poco más de 130 socios, el número no era despreciable. Y de hecho, en la Asamblea Ordinaria del año 2000, en la que Crotto se presentaba para ser reelecto por última ocasión como presidente, enfrentó una fuerte oposición por primera vez. Si bien los disidentes no tenían pretensiones de desbancarlo del cargo, sí buscaron impugnar la asamblea ante la IGJ.⁹⁸ Una de las denuncias refería a la exactitud de los estados contables, que en apariencia no reflejaban que la entidad seguía registrando pérdidas. Y lograron, además, rechazar un proyecto de reforma de los estatutos que radicalizaba las sanciones disciplinarias, y que interpretaban como un intento por acallarlos. Página/12 publicó, al respecto, un diálogo bastante expresivo que mantuvo con el presidente de la organización:

–¿Por qué tiene tanto interés en cambiar las normas disciplinarias? [...]

–Bueno... queremos un nuevo sistema de tribunal de honor, el que tenemos ahora es muy lento. Imagínese que data del estatuto de 1866.

⁹⁸ Se trataba de la puesta en marcha de la estrategia del grupo de judicializar las acciones de la CD, con el propósito final de remover a sus integrantes (LN, 06/05/00).

–¿Y en qué se manifiesta esa lentitud? ¿Por ejemplo, hay muchos acusados acumulados?

–No, en rigor no hay ninguno (P/12, 02/10/00).

A pesar de las críticas, la presentación de una lista única en la que Crotto se hallaba nuevamente a la cabeza le concedió la cuarta y última reelección. Su permanencia al frente de la entidad duraría ocho años, record que sólo había sido igualado por Faustino Fano (1960-8). Bajo su mandato, indudablemente podría afirmarse, como la hizo un periodista de La Nación, que “para bien o para mal, aquella Sociedad Rural Argentina fundada a mediados del siglo XIX ha cambiado” (LN, 20/09/00).

7.6. Síntesis del período y forma de la acción política

La acción política de la SRA durante la crisis de la Convertibilidad es evaluada de distinta forma por la literatura. Por caso, Sartelli (2008) afirma que, al igual que las restantes entidades agrarias, la SRA conspiró para acelerar la caída del gobierno de De la Rúa, mientras que Gálvez (2012) señala que la acción de la SRA es “confusa y ambivalente”, lo que atribuye a la dificultad para alinearse con fracciones del capital al momento de elaborar consensos para posicionarse de cara a la crisis. Específicamente, este autor retoma los cuestionamientos vertidos por miembros de la CD hacia las empresas privatizadas y los capitales bancarios y petroleros, que se habrían constituido como algunos de los soportes fundamentales del “modelo”, así como a los capitales nucleados en el GP, quienes promovían una salida industrialista de la crisis. Esta posición política intermedia, señala, acabó operando en el sentido del sostenimiento de la Convertibilidad, ya que la SRA nunca llegó a enarbolar una posición crítica.

En este capítulo hemos procurado mostrar que, lejos de presionar para hacer caer al gobierno de la Alianza, como sugiere Sartelli, la SRA procuró sostenerlo hasta el límite de lo indecible. En este sentido, su posición estuvo lejos de ser ambivalente, como afirma Gálvez. Desde el primer momento, la asociación accionó de forma incontrovertible para sostener y hacer avanzar la política económica neoliberal. Esto es, accionó para sostener el esquema de la Convertibilidad de forma de superar la crisis mediante el aumento del endeudamiento y el ajuste fiscal. Al mismo tiempo, no dejó de denunciar todo aquello que se le apareció como “desvíos” del programa original, a pesar de lo cual la defensa del régimen se constituyó siempre como el objetivo primordial. Tanto es así que ni siquiera en el momento más álgido de la crisis, cuando, como acertadamente señala Gálvez, embistieron con mayor fuerza contra el capital bancario y las empresas privatizadas, la Convertibilidad fue puesta en duda. De lo que se trataba, simplemente, era de “corregir” estos defectos.

Como vimos, una de las consecuencias del desencadenamiento de la crisis en 1998 fue la situación de tensión que atravesó el vínculo entre la SRA y el gobierno menemista. A las cuestiones anteriormente señaladas cabría añadir el incremento de la presión impositiva que afectó a la producción agraria en ese mismo año, situación que dio lugar al reavivamiento de las tensiones. El sacudón fue tan fuerte que la entidad se vio incluso llevada a interponer un recurso de amparo para obligar al gobierno a negociar y mostrar que estaba accionando en defensa de los intereses representados. A su vez, los vaivenes en la política ganadera terminaron de alterar el humor de la CD. Para peor, la campaña política se interpuso en lo que otrora había sido una relación fluida, y la entidad comenzó a quejarse de que desde el gobierno “no le atendían el teléfono”. Mientras tanto, las otras organizaciones agrarias retomaban la vía de la confrontación, y algunos socios de la SRA se quejaban de la pasividad con que la CD encaraba la situación.

Es en este contexto en el que ésta decide marchar hacia un paro, medida a la que no habían recurrido a lo largo de toda la fase neoliberal. Y efectivamente se trató de una acción excepcional, a la que no hubieran recurrido de no haberse visto en este particular escenario. Lejos de repudiar o, menos aún, buscar torcer el rumbo general de la política económica, la SRA pretendía apenas llamar la atención del gobierno respecto de los problemas que aparecían como coyunturales, como el aumento de la presión impositiva y los problemas en la política ganadera. Pero no sólo se trataba de evitar accionar contra un gobierno al que, más allá de las circunstancias, seguían valorando positivamente. Pesaba también el temor a acabar por convertirse, ella misma, en quien diera el golpe final al modelo de la Convertibilidad, ya bastante maltrecho. No sorprende, entonces, que demoraran muy poco en desentenderse del paro siguiente, que acabaron realizando las otras entidades agrarias.

Queda claro, por otra parte, que a pesar de la poca estima que la entidad manifiesta poseer respecto de la realización de este tipo de acciones, le cuesta poco encontrar razones de fuerza mayor para justificarlas. Como veremos, sin embargo, dichas razones tenderán a brotar con más facilidad en períodos posteriores. En este sentido, y a pesar de que el paro realizado en 1999 parecía, a primera vista, mostrar un cambio de rumbo, ésta no hizo sino profundizar en su línea.

Ni siquiera la velocidad a la que se avanzaba la crisis le hizo expresar dudas respecto al rumbo general de la política económica implementada por el gobierno. Lejos de ello, se refugiaron en el argumento de que los países compradores o competidores de la exportación de mercancías agrarias ponían en práctica mecanismos proteccionistas, lo que dificultaba la expansión económica local.

Argumento que, por cierto, no era novedoso. La SRA venía denunciando estas prácticas desde décadas atrás. La novedad consistía en que ahora pasaban a ocupar un primer plano: junto a la crisis mundial, que determinaba la caída en los precios, aquéllas

explicaban la crisis de la economía argentina. Bajo este paraguas, todo lo que reclamaban para sí ante el gobierno era que no les pusiera “más palos en la rueda” incrementando la base impositiva, y una política más activa en el plano internacional por parte de la SAGPYA para enfrentar estas trabas en el mercado mundial.

Paralelamente, el G-8, en el que había encontrado un espacio para apoyar el avance de la política neoliberal, entraba en desbandada con el reacomodamiento interno de la UIA, cuya salida del grupo acabó por fracturarlo. La SRA retomó entonces su escalada contra algunas ramas del capital industrial, en torno a la cada vez más evidente exacción de renta de la tierra que sufría la clase terrateniente en beneficio de aquéllas. Y mientras la UIA empezaba a accionar en pos de una vía distinta de gestionar la crisis, formando ahora un grupo más reducido, la SRA siguió enarbolando la defensa del “modelo” e insistiendo con la necesidad de avanzar en el ajuste.

No se hallaba, respecto de esta última cuestión, del todo sola. Entre otros de los actores que seguían enarbolando esa propuesta se hallaban, por ejemplo, los capitales bancarios, hasta allí unidos a ella mediante el G-8. Sin embargo, esta coincidencia no bastó para establecer una coalición defensiva más pequeña como la que la UIA articulaba en torno a sí, ya que la crisis volvería a agudizar el enfrentamiento entre las distintas fracciones de la clase capitalista. Y de hecho, durante toda la década, la SRA había reclamado la baja de las tasa de interés en el crédito bancario.

También las privatizadas habían resultado beneficiadas por el avance del neoliberalismo. Tras un apoyo inquebrantable a la política de privatizaciones, la SRA comenzaba a reconsiderar su posición, a raíz de que los costos de producción no caerían por efecto de dicha política, sino todo lo contrario. Sin embargo, lejos de cambiar su parecer respecto de la conveniencia de implementar dichas políticas, comenzó a postular que las privatizaciones habían fracasado por haberse hecho de forma “insuficiente”, y que dichas empresas habían conformado mono u oligopolios. La solución sugerida, por supuesto, consistía en hacer avanzar el proceso en una segunda etapa.

Así, mientras el “modelo” que seguía defendiendo marchaba hacia una inexorable crisis, la CD de la SRA mantenía su rumbo inalterado. Con la gestión de la explotación del predio de Palermo salpicada por escándalos que acababan involucrando a la propia dirigencia de la entidad, la pérdida de una gran cantidad de socios, y un grupo de estos que cuestionaba con cada vez más fuerza la acción política de la CD, parecía imponerse la necesidad de una renovación en su interior. Esta, sin embargo, reafirmó su línea al consensuar un último período de Crotto en la presidencia. En este sentido, la crisis del 2001 dejaría a la SRA no sólo cuestionándose, en cierta medida, sus propios principios liberales, sino también sumida en una crisis dirigenal.

A lo largo de todo el período neoliberal, por otra parte, la SRA sostuvo la estrategia de acercamiento a los sucesivos gobiernos, y logró mantener durante casi toda la década menemista un contacto fluido tanto con el presidente nacional como con los más importantes funcionarios del gobierno, que pretendió utilizar para influir en las políticas estatales. Si bien bajo el mandato de De la Rúa el vínculo no fue de tanta cercanía, la organización se atuvo a su estrategia de evitar todo tipo de enfrentamiento que excediera el mero reclamo verbal y presionar por la resolución de la crisis vía mayor ajuste y endeudamiento.

Al respecto, Panero (2013; 2014) afirma que esta acción es paradójica, en la medida en que la SRA habría logrado entablar un vínculo aceitado con los gobiernos en cuestión, pero no pudo imponer su agenda porque en este período el Estado habría perdido la capacidad de gestionar la política cambiaria y comercial, con lo cual el “perfil gremial” que seguiría caracterizando a la entidad se habría debilitado, para recuperarse sólo parcialmente a la salida de la Convertibilidad:

Durante la etapa de la convertibilidad, cuando el Estado restringió su intervención, fue cuando más aprobación obtuvo de parte de la SRA, y también cuando mayor influencia sobre el Estado tuvo la entidad, debido a su fluido acceso al elenco gubernamental. No obstante, el hecho de que el blanco de sus reclamos, el Estado, se encontrara más restringido en sus capacidades para pautar los lineamientos económicos le quitó efectividad a esa posibilidad de incidencia. En el marco de un Estado incapaz de aplicar política cambiaria y comercial, la rentabilidad sectorial quedó sujeta al nivel de precios internos (2014, pág. 28).

En lo que refiere a la SRA, no obstante, la incapacidad de incidir sobre la política económica no parece relacionarse con este “retraimiento” del Estado. Por el contrario, como hemos señalado, su agenda política consistía precisamente en la resignación de todo tipo de capacidad de intervención macroeconómica por parte del Estado: liberación y unificación del mercado de cambios, apertura económica, eliminación de impuestos e intervención sobre los mercados eran, esencialmente, las demandas que la SRA venía enarbolando. El hecho de que el gobierno de Menem haya avanzado sobre ellas es lo que explica, precisamente, que la entidad se haya acercado a él. Pero esto no supone, como afirma Panero, que el Estado se haya privado a sí mismo de toda capacidad de actuar en política económica.

Tan es así que la SRA no dejó de reclamar sobre dos cuestiones en las cuales el gobierno retenía el control. En primer lugar, y con mayor o menor énfasis según la marcha de la acumulación, insistió vehementemente (tal como reconoce el propio Panero) sobre la necesidad de reducir impuestos. Sin embargo, y a pesar de la eliminación casi total de las odiadas retenciones, la estructura impositiva no dejó de aumentar su presión sobre la

producción agraria, de manera formal o informal. En segundo lugar, reconoció el fuerte avance realizado en la desarticulación de algunos de los mecanismos de apropiación de renta. Pero en cuanto comenzaba a estrangularse la acumulación, volvía a insistir sobre la necesidad de concluir la tarea, avanzando sobre las ramas que aún conservaban “privilegios”. El ejemplo más marcado es el de los capitales automotrices, a quienes la SRA denunció de forma sostenida, puesto que además de las distintas formas de apropiación de renta agraria (no siempre percibidas o cuantificadas adecuadamente, como el caso de la sobrevaluación), el sostenimiento de los aranceles de importación impedía a los capitalistas agrarios reducir el costo del transporte de mercancías, lo que hubiera redundado en un aumento de la renta de la tierra apropiada por los terratenientes. A esto se sumaba el evidente perjuicio que le ocasionaban otras políticas del gobierno: la relación entablada con éste no había bastado siquiera para, en los momentos en los que contingencias meteorológicas afectaban la producción agraria, hacerlo desembolsar el dinero destinado a esta eventualidad. Mucho menos, entonces, cabría esperar que el gobierno terciara en la disputa que entablara contra los capitales exportadores cuando comenzaron a postergar parte del pago por la compra de mercancías agrarias, o contra los capitales petroleros cuando estos pusieron en cuestión los derechos de propiedad sobre el subsuelo.

Tampoco la Ley de Convertibilidad puede asumirse como una simple retracción del Estado respecto de su capacidad de ejecutar políticas económicas. En primer lugar, como ya hemos visto, y por más que dicha ley limite aspectos de la política cambiaria como la gestión del tipo de cambio y la emisión monetaria, por otro lado es precisamente el Estado el que debe encargarse de sostener la sobrevaluación del peso, cosa que hace primero, de manera general, mediante la liquidación de capitales de propiedad estatal, y luego a través de la expansión desenfrenada del endeudamiento externo. El Estado perdió así la posibilidad de operar sobre el nivel de sobrevaluación, pero debió igualmente encargarse de sostenerla. En este sentido, como ya vimos, la SRA festejó, ciertamente, la limitación autoimpuesta para la emisión de dinero, sobre la base de que esto impediría la expansión del gasto público que era financiado, señalaban, por la rama agraria,⁹⁹ mientras que la sobrevaluación desapareció rápidamente de su horizonte.

⁹⁹ No hemos hallado referencias en los análisis económicos de la SRA, sin embargo, al rol de la emisión dineraria para sostener el gasto público expandido y la consecuente inflación como vehículo para la sobrevaluación de la moneda.

Capítulo 8

El desconcierto. La SRA bajo el gobierno de Duhalde (2002-2003)

Nos propusimos demoler los edificios anacrónicos de un Estado paternalista, regulador, superdimensionado, y en los pliegos de "licitación" de la tarea [...] nadie se acordó de los planos de la nueva estructura.

Así nos fue. Hoy seguimos viviendo en una Argentina desmantelada, desprotegida, a merced de una globalización dura e inflexible, que marca sus propias reglas de juego.

Editorial de Anales, septiembre de 2002.

Tras el estallido de la Convertibilidad, los hechos se sucederían velozmente. Tras los cinco presidentes en una semana y el default de la deuda externa, la discusión ya no era si había que salir del esquema cambiario, sino cómo hacerlo. Pero la dirigencia de la SRA no acababa de despertarse del sueño de la Convertibilidad, devenido pesadilla. "No hay que pensar en devaluar", declaró Crotto el 2 de enero, consternado porque incluso López Murphy había apoyado la medida (LN, 02/01/02). Los tiempos habían cambiado, pero la SRA tardaría en acomodarse.

8.1. Devaluación y desconcierto

Ya ungido presidente por la Asamblea Legislativa en ese mismo día, Eduardo Duhalde formó gobierno, enarbolando un discurso pro industrialista y anti finanzas, y buscando diferenciarse de la orientación económica que habría regido durante la década previa. En este marco, devaluó el peso cuatro días más tarde, manteniéndolo durante un breve lapso en una relación de 1,4\$/1US\$.

Ya producido el golpe, a la SRA sólo le quedaba obrar de forma tal que la situación no acabara por desmadrarse aún más. Temeroso del avance de la protesta social, Crotto no pudo sino expresar su apoyo: "el campo va a apoyar esta gestión [...]. Duhalde puede contar con todo nuestro apoyo, porque estamos convencidos que no ha[brá] un sector que se salv[ará] solo. Se salva la Argentina o no se salva nadie". Mientras tanto, insistió en la necesidad de bajar el gasto público, y celebró la promesa de Duhalde de no reimplantar las retenciones: "para nosotros era un tema clave, he visto tantas veces devaluaciones compensadas con retenciones al campo, que realmente nos preocupaba" (LN, 8 y 16/01/02).

Antes de ver sus temores hechos realidad, la SRA protestó por la pesificación de las deudas, que tenían un tope de 100.000\$, ya que según Crotto, “cualquier productor agropecuario que haya invertido en tecnología tiene una deuda mucho mayor” (LN, 08/02/02). En ese momento, la deuda total del sector ascendía a unos 6.000 millones de dólares con los capitales bancarios más la mitad de esa suma con capitales privados proveedores de insumos y maquinarias. Las entidades agrarias reclamaron entonces mantener el tipo de cambio de la convertibilidad para las pesificaciones, esto es, el 1 a 1, lo que implicaba ciertamente una licuación de la deuda, mientras que los capitales acreedores reclamaban el pago al tipo de cambio de importación (LN, 26/01/02).

La SRA se refirió a ambas cuestiones en un comunicado del 10 de enero, en el que señalaba implícitamente que la devaluación sólo beneficiaría a los exportadores de granos, pero no al resto de las producciones agrarias:

Si bien la devaluación beneficia a los sectores exportadores por una mejora en el precio de los commodities, no es ésta la situación de todos los productos del campo, como ser carnes, lácteos y otras producciones regionales, ya que sus precios se forman en el mercado interno [...] la devaluación repercute negativamente, encareciendo los insumos importados del agro, incrementando los costos de producción. Por otra parte, existe una preocupación por la pesificación parcial de las deudas de los productores, cuya mayoría no se ha beneficiado por la Ley 25.561 [...] a los cuales hay que darles una solución (M02: 51).

En febrero, Duhalde anunció una nueva modificación en el IVA agrario, cuya aplicación a la venta de granos se vería reducida. La SRA respondió con los mismos argumentos que utilizara anteriormente: “reducir la alícuota del IVA a la venta de los granos es aumentar la presión impositiva sobre los productores, generar mayor crédito fiscal y subas en los costos de producción” (M02: 53). A esto se sumaba la reiteración de las quejas por el diferimiento del 10% en la liquidación de cereales por parte de los exportadores

Pero el problema sobrevendría con la reinstalación del impuesto que para la entidad era inaceptable: las retenciones a la exportación. A mediados de mes, y al amparo de la suba de precios en el mercado interno de la canasta básica, el nuevo gobierno comenzó a discutir la posibilidad de reinstaurarlas, ante lo que las cuatro entidades volvieron a cerrar filas, recordando la promesa del propio Duhalde. A pesar de que incluía un explícito rechazo hacia la Convertibilidad, la SRA se avino a firmar un comunicado conjunto en la que las asociaciones señalaban que “el sector agropecuario ha sufrido durante décadas –como ningún otro- los efectos del perverso atraso cambiario, producto de la rigidez de un sistema monetario ausente” (M02: 58).

Fue inútil. En su carácter de Ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov anunció el 5 de marzo la reinstalación de las retenciones, estableciéndolas en un 10% para los productos primarios y un 5% para los manufacturados, y aduciendo la necesidad de incrementar la recaudación para sostener los planes sociales y la obra pública. Asimismo, se adelantó a las protestas de las entidades, señalando que el impuesto “no perjudica para nada las exportaciones”, puesto que el tipo de cambio “es el más alto de la década” (LN, 05/03/02).

En efecto, el día anterior al anuncio el tipo de cambio oficial había sido de exactamente 1US\$=2\$, lo que representaba una devaluación del 100% en comparación con la década previa. Pero no era suficiente. La entidad emitió inmediatamente un comunicado de tono apocalíptico, titulado “el agro pierde competitividad y retrocederemos un siglo”, en el cual achacaba a los impuestos en cuestión ser responsables del estancamiento productivo, e insistía en que la devaluación no había favorecido al sector debido a los aumentos en insumos y maquinarias agrarias, gasoil, transporte, servicios de contratismo, y el desdoblamiento del pago en la venta de granos. En relación al tipo de cambio, afirmó posteriormente que “se pretendió [...] mejorar la competitividad de las exportaciones a través de la modificación del tipo de cambio. El efecto buscado ahora se esteriliza con la reimplantación de las retenciones”. La semana siguiente dispuso la presentación de dos recursos de amparo contra la medida, argumentando nuevamente una discriminación al sector agropecuario. (LN, 12/03/02)

La SRA era consciente, por cierto, de que la devaluación del peso no llegaría sola. Así, se había anticipado y ofrecido, junto a las restantes entidades rurales, la constitución de un fondo voluntario de 1500 millones de pesos destinados a políticas asistenciales y administrados por Cáritas, la ONU y alguna ONG aún no definida. El rechazo del gobierno a tan generosa oferta motivó la ira de la asociación: “la falta de transparencia y eficiencia estructural de los aparatos de asistencia del Estado hicieron que condicionáramos esa donación a la auditoría de la Iglesia. Se nos rechazó. Hoy el aporte es compulsivo y [...] pasa a alimentar el clientelismo político”. Paralelamente, Crotto volvió a protestar contra la forma que iba tomando la pesificación, y que constituía una nueva “discriminación” al sector agrario, puesto que si bien la generalidad de las deudas contraídas en dólares pasarían a pesos al tipo de cambio estipulado por la ley, las del sector agrario con los proveedores de materias primas deberían cancelarse al tipo de cambio de exportación, esto es, según el mercado libre de cambio.

La conferencia en la que la SRA protestó contra estas medidas muestra además la confusa forma en la que la entidad procesaba la crisis, oscilante entre pasar sin más la página respecto a los gobiernos anteriores y denunciar su “mala administración”:

No es hora de echar culpas al pasado, o a quienes ya pasaron. Asignársela al modelo, por otra parte, es un simplismo intelectual inadmisibile, es carecer de herramientas de diagnóstico precisas, y de propuestas idóneas para salir de la crisis [...]. La mala administración del Estado consiguió que hoy el hambre y la pobreza sea un denominador común en vastos sectores de la población.

La entidad urgía además a recuperar la “seguridad jurídica” y el “contrato social”, esto es, la confianza en las instituciones:

Cumplir los compromisos y devolver el prestigio de las instituciones nacionales deben ser las prioridades para reconstruir el país [...]. El corralito bancario, la declaración del default y su festejo por parte de ciertos políticos, la ruptura por decreto de los contratos privados, la salida no programada de la Convertibilidad, la destrucción del ahorro privado previsional, entre otras, son manifestaciones nefastas de la más absoluta falta de seguridad jurídica. Una justicia independiente, un Banco Central autónomo, un Poder Legislativo a servicio de la comunidad, provincias bien administradas [...], son necesidades básicas para recomponer el Contrato Social quebrado (M02: 59-60).

El anuncio de las retenciones trajo como consecuencia la renuncia de Miguel Angel Paulón, secretario de la SAGPYA durante este breve tiempo. Crotto consideró el hecho como "un gesto muy digno", y pidió que "sea imitado por algún otro funcionario que se manejó en este tema", en un tiro por elevación a quien consideraban responsable de la medida: José Ignacio de Mendiguren, Ministro de Producción (LN, 16/03/02). Lejos de ello, en ese mismo momento comenzaba a discutirse una nueva alza en la magnitud de las retenciones, que fue anunciada el 5 de abril. Tanto los granos como los productos manufacturados de origen agrario pasarían ahora a tributar un 20%, mientras que las carnes se mantenían en el 5% (LN, 06/04/02).

Inmediatamente, la FAA y CRA convocaron a la realización de asambleas para coordinar una acción conjunta. En el sur de Santa FE, CF se adelantó a la protesta, realizando una movilización dispuesta por la Mesa Federal Agraria. Lo propio hizo la filial de Córdoba, bloqueando el acceso a una de las exportadoras de granos (LN, 6, 9-13 y 18/04/02). La SRA, por su parte, amagó con unírseles, pero finalmente descartó su presencia (LN, 25/04/02). Siguió repudiando, sin embargo, la política económica del gobierno de Duhalde: “devaluamos a lo indio”, fue la gráfica expresión de Crotto, quien mostraba así una vez más ser un digno representante de la clase terrateniente argentina (LN, 13/04/02). Luciano Miguens explicaría más tarde los motivos de la declinación: “en las actuales circunstancias pareciera que no les queda otra alternativa. Frente a gente que se muere de hambre, pedir la quita de las retenciones no sería razonable” (A-Dic02: 13). Pero la entidad tampoco se quedó de brazos cruzados, sino que buscó accionar por la vía judicial.

Ya en marzo había presentado dos recursos de amparo, tanto contra la reinstalación de las retenciones como contra la pesificación asimétrica (LN, 13/03/02).

Inmediatamente a la determinación de realizar el paro, tanto la FAA como la CRA fueron convocadas por Duhalde, quien les pidió una tregua hasta el 15 de mayo para estudiar soluciones a sus reclamos. Alcanzó para desactivar la participación de la primera: la CRA fue al paro sola. Pasado el tiempo propuesto, sin embargo, nada había cambiado, con lo cual la FAA dispuso un paro de cuatro días para fines de mayo. La acción se desarrolló principalmente en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y el norte de Buenos Aires, en donde hubo cortes de ruta y movilizaciones. La adhesión de una fracción de transportistas contribuyó a paralizar el comercio de granos y reducir el volumen del de carnes. El último día, el paro coincidió con la movilización de la CTA hacia el Congreso, que organizó una jornada de protesta contra “la política de hambre, desocupación y entrega” (LN, 26-29/05/02).

Fue el pico de la confrontación de las entidades agrarias con el gobierno de Duhalde durante ese año. Hasta aquí, la SRA había mantenido su posición de utilizar medios que consideraba válidas para protestar, como los recursos de amparo, descartando su participación directa. Pero redoblaría la presión por otros medios.

El 26 de junio, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, dos jóvenes militantes de un movimiento piquetero, fueron asesinados por la policía bonaerense en una manifestación en la que reclamaban aumentos en los salarios y en los subsidios para desocupados. Este hecho precipitó la salida del gobierno de Duhalde, programada para diciembre del 2003, y que fue finalmente adelantada al mes de mayo, con las elecciones a realizarse en abril.

Uno de los principales interesados parecía ser el propio Menem, que intentaría volver al gobierno. Sus laderos más fieles comenzarían entonces a presionar en favor del adelantamiento. Y entre ellos, se seguía contando Crotto. En julio, y junto a su par de la CAC, éste pidió adelantar las elecciones en una conferencia de prensa, advirtiendo tempranamente al sucesor de Duhalde: “quien resulte electo va a tener que escuchar a los empresarios que son los que generan empleo” (LN, 25/07/02; CL, 31/07/02).

8.2. Reprocesando la Convertibilidad

Mientras Crotto operaba políticamente, la entidad renovaba su CD. Al nombramiento de 14 nuevos dirigentes se sumaba el recambio presidencial: Luciano Miguens, vicepresidente de Crotto durante los cuatro períodos de su gestión, ocuparía ahora la presidencia, cediéndole su puesto a Hugo Biolcati.

La renovación dirigenal producida en medio de la crisis económica abriría el camino hacia una relajación en las rígidas posiciones políticas de la entidad. El suave replanteo acerca del éxito de la política económica neoliberal, que había caracterizado los últimos

años del mandato de Crotto, cedería paso a una posición un poco más abiertamente crítica en la que se permitirían reclamar más claramente la reversión de algunas de las transformaciones que la entidad había apoyado y acabaron volviéndose en contra de los intereses que representa. La desregulación por la que tanto habían bregado había acabado por dejarlos aún más a la merced de los capitales normales del sector. Al nuevo apropiador de plusvalía que constituían las cadenas de supermercados se sumaba con renovada fuerza, desde fines de la década pasada, otro viejo apropiador: los capitales comerciales exportadores de cereales. También los capitales dedicados a la producción de semillas transgénicas parecían estar avanzando en su pretensión de cobrar regalías extendidas. Ante ellos, la entidad pediría ahora protección. Igual retroceso se evidenciaba respecto de los reclamos de “achicar” el Estado, que se mostraba incapaz de ejercer el papel de contralor que, afirmaban ahora, no debió haber abandonado. El nuevo editorialista, Carlos Vila Moret (h), se esfuerza por conciliar esta nueva posición con la anterior, para lo cual comienza a introducir sutiles distinciones, como la atinente al “Estado fuerte” y el “Estado superdimensionado”, aunque no puede evitar atribuir a la globalización, otrora abiertamente celebrada, un papel negativo. El título del editorial, “el Estado ausente”, habla por sí mismo:

Nos propusimos demoler los edificios anacrónicos de un Estado paternalista, regulador, superdimensionado, y en los pliegos de “licitación” de la tarea (tal vez resuelta por “contratación directa”) nadie se acordó de los planos de la nueva estructura.

Así nos fue. Hoy seguimos viviendo en una Argentina desmantelada, desprotegida, a merced de una globalización dura e inflexible, que marca sus propias reglas de juego.

De las Juntas Reguladoras que ahogaban genuinos procesos comerciales, pasamos a un marco donde las reglas de juego de la producción agropecuaria las fija una de las partes –la otra, por supuesto- sin que nadie pueda reclamar caminos alternativos.

Que nadie interprete que propiciamos un Estado intervencionista, con políticas absolutamente controladoras, causante sistemático de efectos no deseados [...]. No es ese el camino, pero el mundo actual, altamente globalizado, con presiones sobre los mercados, exige Estados fuertes –que no es lo mismo que Estados superdimensionados- capaces de cumplir con prudencia y equidad, una lógica función reguladora en defensa de los productores.

En aras de optimizar un ente se lo empieza a acotar y se termina en una reducción tal que afecta su funcionamiento y pone en peligro el fin para el cual fue creado. La fusión del IASCAV al SENASA o la eliminación del INASE entre otros, son manipuleos institucionales que en pos de achicar al Estado han desprotegido al productor [...]

Hoy tratar de ejercer el derecho del uso propio en semillas [...] choca contra la política comercial de dos o tres semilleros que, avasallando los derechos del productor, pretenden cobrar regalías extendidas por una semilla que ya hemos pagado [...]. Otro tanto sucede con los granos donde en forma arbitraria cuatro o cinco exportadores, en una actitud casi

cartelizada, se ponen de acuerdo en pagar una parte a 120 días con el argumento de que deben soportar demoras en los reintegros del IVA [...].

Es difícil transitar en esta selva de decisiones unilaterales. Sería interesante que el Estado asuma el papel de contralor que nunca debió haber abandonado del todo, fijando reglas y normas justas y lógicas (A-Sep02: 6).

Como se ve, la entidad comenzaba a aglutinar reclamos, algunos de los cuales incluso referían a problemas surgidos antes de la devaluación, por los cuales comenzaba a mostrarse como perjudicada por los resultados de la política desarrollada durante la década de 1990. En esta reconsideración, la devaluación también sería reexaminada. En su despedida de Palermo, y tras emprenderla contra retenciones, capitales exportadores y pesificación asimétrica, protestar además porque los ganaderos deberían pagar la vacunación contra la aftosa, e insistir con que “es ilógico suponer que los problemas se solucionan con asistencialismo o planes trabajar [sino que] se solucionan con una mayor producción y menores gastos”, Crotto volvió a despacharse contra la devaluación y sus ejecutores:

Jamás imaginé en aquella lejana primavera del '94, cuando me tocó asumir la presidencia de esta entidad, que aquella Argentina pujante que crecía a un ritmo excepcional y prometedor, hoy en este, mi último discurso como presidente de la SRA, sea la misma que se encuentra como está: un país donde languidece el estado de derecho, donde se rompió el contrato social, donde se faltó a la palabra empeñada, donde se confiscaron los ahorros, donde circula una increíble cantidad de espurios medios de pago, donde el salario real disminuyó a niveles alarmantes, donde se profanó la seguridad jurídica y donde la estabilidad lograda con tanto esfuerzo se dilapidó de golpe e irresponsablemente frente al influjo de camarillas integradas por quienes se autocalifican de productivos, que provocaron una devaluación de funestas consecuencias.

Y aprovecha la ocasión para defenderse, nuevamente, de las críticas por su alineación incondicional al menemismo:

Algunos de nuestros críticos nos imputan complacencias. Nunca fuimos genuflexos, ni obstinados opositores. Aplaudimos lo que sirve a la patria grande y condenamos lo que la paraliza. Si algo distinguí [...] a la SRA es su fidelidad a sus principios fundamentales y los principios que hicieron grande a esta Nación. Y si nos tenemos que quedar solos por defender estos principios, que a nadie le quepa duda que solos nos quedaremos (A-Sep02: 10-2).

Pero mientras Crotto defendía su gestión y despotricaba contra la devaluación “a lo indio” que había destruido la “estabilidad lograda con tanto esfuerzo”, el nuevo presidente de la entidad, en el siguiente número de Anales, no pudo menos que reconocer tibiamente que

El campo ha salido “favorecido”, entre comillas, luego del colapso de fin de año pasado [...]. Es sabido que el sector exportador en los últimos años había perdido mucha competitividad y el agro lo estaba sintiendo a pesar de las buenas cosechas que, escasamente, le servían para salvar el ciclo. Incluso sin las retenciones, se hacía difícil competir frente a países que subsidian fuertemente sus producciones [...]. Las nuevas posibilidades que ofrecía la tan discutida devaluación, las circunstancias favorables a raíz de los mejores precios internacionales de los granos frente a la falta de stock, la obtención de buenas cosechas [...] junto a la utilización de la siembra directa y la potencia genética de las semillas, fueron factores gravitantes en esa mejor situación.

Tampoco a la ganadería le iba mal. Si bien la producción de leche atravesaba una nueva crisis que dejaría un tendal de tambos en quiebra,¹⁰⁰ la reapertura de las exportaciones de carne y la suba de los precios internacionales, en combinación con la devaluación, habían mejorado sustancialmente la situación de los ganaderos. En enero, por otra parte, estos habían recibido una noticia alentadora: la posibilidad de reanudar las exportaciones de carne a Europa. Por supuesto, Miguens no se privaría de señalar que

En este país cuando el campo tiene contingencias favorables, se lo tiene en cuenta para sacarle beneficio y no para apoyarlo [...]. No se piensa en crecer a través del campo sino a costa del campo. Basta mencionar que inmediatamente aparecieron las retenciones, aumentos impositivos, la actitud de los exportadores respecto a que el Estado no les devuelve el IVA tomando la decisión de pagarle al productor el 10% de su cosecha a 120 días pesificado. Otro factor negativo fue el problema que tuvimos con los proveedores de insumos de la cosecha vieja, que pretendieron, y en gran parte consiguieron, que el gobierno dolarizara lo que habíamos comprado el año anterior (A-Dic02: 12-3).

Sin embargo, la devaluación había hecho más que simplemente “favorecer”, entre comillas, al “campo”, también entre comillas, puesto que quienes resultaban más que favorecidos eran específicamente los terratenientes. Con el dólar orillando los 3\$ y alcanzando picos de 4\$, el peso había dejado de estar sobrevaluado en torno al 100\$ para subvaluarse alrededor de un 30% en promedio durante el 2002. Lo que significaba que, lejos de esterilizarse el efecto de la devaluación por la implantación de las retenciones, la clase terrateniente embolsaría a lo largo de ese año no sólo el 100% de la renta de la tierra, sino una masa de riqueza adicional restada de los ya flacos bolsillos de la clase obrera, vía el aumento de precios en el mercado interno de las mercancías agrarias (Iñigo Carrera, 2005).

A pesar de reconocer esto, la parcialmente renovada CD de la SRA interpretaba la nueva coyuntura económica como un modelo de características opuestas al anterior (un

¹⁰⁰ Un relevamiento del número de tambos localizados en la provincia de Santa Fe, donde se concentra buena parte de la producción primaria de leche, muestra una reducción del 33% de los establecimientos entre los años 1994 y 2002 (Fernández S. , 2004).

“antimodelo”) que favorecía específicamente a una fracción del capital industrial, quien había sido además la responsable de ponerlo en marcha. Así lo señalaba Biolcati, precisamente en la Conferencia Industrial realizada por la UIA:

Debemos abandonar momentáneamente el reclamo sectorial a ultranza para encontrar caminos de convergencia hacia una reconstrucción posible, que rescate de los escombros la posibilidad de refundar nuestra Nación [...].

Cuando la economía marchaba a buen ritmo, miramos al costado, sin cuestionar las evidentes úlceras de corrupción [...]. Cuando una justicia politizada y al servicio del poder de turno bloqueaba cualquier investigación seria, nos encogíamos de hombros. Cuando abrimos las puertas del mundo, lo hicimos sin anestesia, condenando a muchos a la desaparición empresaria, sin tiempo para asumir la transformación [...]. Cuando hablamos del “fracaso del modelo” montamos un antimodelo improvisado, sectorial, sin analizar ni medir efectos no deseados y terminamos irresponsablemente destruyendo un aparato productivo [...]. En el default, en la devaluación salvaje, en la pesificación asimétrica y en otras barbaridades cometidas este último año, hubo empresarios involucrados, gente que podría muy bien estar sentada con nosotros. Fuimos entonces como entidad duramente criticada por no sumarnos al delirio de los iluminados (A-Dic02: 16-7).

Así, también el vicepresidente hacía explícita una crítica un poco más abierta hacia la política económica de la década anterior. Aunque sin dejar de rechazar, ciertamente, la forma que tomaba ahora la acumulación del capital.

Mientras tanto, incluso los economistas que habían defendido a ultranza la Convertibilidad, y a quienes la SRA consultaba habitualmente, comenzaban a retroceder posiciones. Tal el caso de Javier González Fraga, presidente del Banco Central durante el segundo semestre de 1990 y columnista habitual de La Nación, además de tambero y dueño de una empresa dedicada a la producción de dulce de leche. Si hasta el 2001 había insistido en que “no hay que exagerar la crisis, estamos muchísimo mejor que en el ‘88/’89” (DR, 25/09/14), y reclamaba, incluso tras la sanción de la ley de Déficit Cero y el recorte del 13% a jubilados y trabajadores estatales, un “ajuste en serio” (P/12, 31/08/01), tras la devaluación viró abruptamente su discurso. La SRA lo convocó a participar en la última reunión de delegados del 2002, en la que sintetizó su nuevo parecer: “creíamos que estaba todo bien, pero sólo vivíamos una fiesta. El 2002 fue la resaca de esa larga borrachera” (A-Dic02: 22). La asociación eligió colocar la primera frase citada como título de la nota sobre la reunión, en una nueva muestra de que también su dirigencia, lentamente, comenzaba a procesar el fin de la Convertibilidad.

8.3. El “veranito” y el paro

La SRA no había necesitado mucho tiempo para declarar como enemigo al gobierno de Duhalde, al que le imputaban buscar la reactivación económica a costa de la rama agraria. Hubieron de reconocer sin embargo que, en parte, lo había conseguido, puesto que ya a fines del 2002 se hablaba de la existencia de un “veranito” económico. Si, ante las evidencias, la entidad comenzaba a aceptar que la devaluación había favorecido a la rama (e incluso temer por la revaluación) y específicamente a los productores de mercancías exportables, la modificación de la base impositiva que la había acompañado y que tendía a compensar los efectos de la subvaluación constituía para la entidad un motivo de enfrentamiento. A eso le sumaban una protesta por la regulación de la jornada de trabajo de los obreros agrarios, y reclamos en relación a la política agraria.

En enero del 2003, Miguens sintetizó la serie de problemas que los afectaban:

La Argentina de la post-convertibilidad generó una mejora relativa del tipo de cambio que buscaba, según sus mentores, mejorar la competitividad de nuestra producción. Pero la devaluación por sí sola no mejora la competitividad, sino que está condicionada por una gran cantidad de factores [...]. Se consiguió [...] aumentar el ingreso de los pesos cobrados por cosechas y otros bienes exportables. [Pero] a reimplantación de las retenciones a las exportaciones amortiguó la mejora conseguida [...]. Se cercena así el legítimo ingreso del agro por su inversión y su trabajo. Además, el productor de oleaginosas sigue pagando una retención adicional, y el ganadero cobra menos por los cueros que el precio internacional, subsidiando las industrias específicas [...]. Además, se discriminó al campo dolarizando las compras financiadas de los insumos para el agro [...].

Por otra parte, el fenomenal aumento del gasoil impactó en la estructura de costos del sector [...]. El colapso financiero [...] determinó la total ausencia del crédito bancario [...]. La voracidad fiscal determinó la negativa de las autoridades económicas a aceptar un ajuste por inflación en los balances impositivos, constituyendo [...] un nuevo impuesto patrimonial.

Los cambios fiscales modificaron las condiciones del mercado de granos: el no reintegro en tiempo y forma del IVA a los exportadores provocó la cartelización de estos, quienes redujeron en un 10% el ingreso a los productores, que pasaron a financiar a exportadores y fisco [...].

La discusión acerca de otro cambio en el IVA granos [...] derivó en una compulsiva baja al 10,5% con retenciones [...]. En esta campaña se compraron insumos con 21% de IVA y se cobrará la cosecha al 10,5%, descolocando la cuenta IVA de los productores, creando un “saldo a favor” de difícil recuperación.

Otra cuestión que irrita a quienes soportan el flagelo de las inundaciones es el desmanejo del Fondo Hídrico Nacional [...], constituido por decreto con destino exclusivo al manejo de aguas. El veto del art. 30 de la Ley de Presupuesto liberaría estos fondos hacia

otros sectores de la economía, en clara actitud de burla tanto hacia los contribuyentes como hacia los productores. El aumento del 45% en dólares de la tarifa del peaje de la Hidrovía también será pagado por el agro.

A esta desmedida voracidad fiscal nacional hay que agregarle los aumentos provinciales y municipales por impuestos y tasas [...].

La posible reestructuración del SENASA, plasmada con urgencia en un proyecto de ley inconcluso, aparece como un nuevo escollo. También, proyectos de trazabilidad ganadera generados a espaldas de los productores [...].

En rigor, algunas de estas cuestiones precedían a la crisis del 2001 (como la “cartelización” de los capitales exportadores o los problemas del SENASA) o no constituían novedad alguna respecto de la década previa (como el aumento de la base impositiva o la nueva modificación del IVA agrario que resultaba en una retención de saldos), mientras que otras no eran más que expresiones de la crisis (como la falta de crédito). Sin embargo, la SRA planteaba que se estaba “desalentando” la producción agraria, y advirtió:

Esta enumeración de decisiones que desalientan la producción agropecuaria nos motivan a hacer un público llamamiento a las autoridades, para que las necesidades fiscales no asfixien el motor de la economía del país. Hoy el agro y la agroindustria son los principales demandantes de mano de obra. Pero en el ámbito laboral sufrimos nuevas regulaciones que atentan contra la creación de empleo, como la resolución sobre la duración de la jornada de trabajo en Buenos Aires y La Pampa.

Se debe advertir que si se revalorizara el peso, como está sucediendo, y si bajara aún más el precio internacional de los granos, como está sucediendo, el veranito que vivimos se revertirá muy rápidamente [...] (M03: 52-3).

En particular, la cuestión impositiva comenzaba a abroquelar nuevamente a las entidades agrarias. El 20 de febrero emitieron un comunicado protestando contra la “voracidad fiscal”, que nuevamente “discrimina” al agro. Apenas una semana más tarde, la flamante “Cadena Agroindustrial” (CAI), en la que se habían coaligado tanto la SRA, la CRA y la FAA como otras que representaban a los distintos eslabones de la cadena en cuestión, repetía similares argumentos.

Al día siguiente, la CAI anunciaba su arribo a la escena política anticipando la realización de una acción de protesta, consistente en la paralización del comercio de granos entre el 3 y el 7 de marzo. En el comunicado, señalaron que “es intención de los participantes que la medida no altere el normal abastecimiento [...] de los productos básicos de la canasta familiar” (M03: 53-5). Dicho paro logró un alto grado de efectividad, paralizando casi totalmente el comercio de granos (LN, 03/07/03).

Así, la SRA demoraría apenas un año en realizar un paro contra el gobierno de Duhalde, en una coalición que, además de la CRA y la FAA, incluiría a un aliado otrora impensado: las cámaras exportadoras nucleadas en CIARA-CEC, a quienes acababan de acusar de “cartelizarse”. La creación de una asociación que aglutinaba a los distintos eslabones de la cadena agroindustrial le había permitido, de momento, aunar fuerzas para enfrentarse al gobierno.

8.4. Renovación dirigencial y conformación del FCA

La gestión de Crotto al frente de la SRA no había podido acabar de peor manera. La sucesión de escándalos en torno a la compra del predio no sólo había manchado la imagen pública de la entidad, sino que además le había ocasionado problemas jurídicos; las sociedades conformadas para desarrollarlo habían fracasado, y sus partenaires empresariales habían pasado a estar prófugos de la justicia o en convocatoria de acreedores; por último, a fines del 2001, la SRA solicitaría una refinanciación de la deuda, argumentando problemas financieros e imposibilidad de explotar comercialmente el predio. La devaluación posterior le facilitó la apertura de una discusión irresoluble con los organismos del Estado, a quienes reclamaron la pesificación de la deuda y el no pago de intereses. A esto se sumaba la estrategia respecto del gobierno menemista, criticada por la oposición interna.

Sobre esta base, la disidencia comenzaba a darse una forma más orgánica. Tras la asamblea en la que se eligió al sucesor de Crotto para ocupar la presidencia, el grupo publicó una solicitada en el diario La Nación en la que denunciaban “la autoritaria y arbitraria actitud del presidente saliente”, que había impedido “expresar sus opiniones a algunos socios”, tras lo cual manifestaban su inquietud ante la inacción de la entidad frente la crisis del sector agrario y enumeraban a continuación algunas de las irregularidades vinculadas a la compra y explotación del predio, así como la repercusión que eso había tenido sobre la imagen de la entidad (LN, 12/10/02). El desairado grupo contaba ya entre sus filas a individuos de reconocida trayectoria en la entidad (tal el caso de Juan Antonio Pirán, presidente en el período 1978-1980 y vicepresidente durante los cuatro años anteriores) o miembros de familias de igualmente notable pasado (como Carlos Alberto Firpo Peña, hijo de Luis José Firpo Miró, presidente entre 1968 y 1972 y vicepresidente durante los seis años previos, y pariente de Marcos Firpo, quien ocupara entre otros cargos el de la vicepresidente entre 1976 y 1978).

Mientras tanto, la salida de Crotto daría lugar a una renovación parcial de la CD, a cuya cabeza se colocaría Miguens. Dueño de unas 2200 has en Salto destinadas principalmente a la cría de caballos, así como de otras tantas en Chascomús (PE, 18/03/08;

CL, 10/08/08); ex director de la Asociación Argentina de Fomento Equino y de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos; veterinario; descendiente de una familia de larga tradición en la producción agraria, en particular ganadera y equina; e integrante de la CD de la SRA desde 1979 (LN, 27/09/02; 14/07/07),¹⁰¹ Miguens se encargaría de darle a la conducción de la entidad un perfil más sobrio que el que había desempeñado Crotto. Junto con aquél, ingresarían catorce nuevos miembros a la CD, de los cuales sólo cuatro habían ocupado previamente cargos suplentes. Se trataba de una renovación significativa, si se tiene en cuenta que el número de vocales había llegado ya a 34, con lo cual se hallaban 17 lugares en juego.

Se trataba, sin embargo, no solamente de un cambio en el estilo de la representación. Al arrasar con la Convertibilidad, la subvaluación de la moneda que se había impuesto tras la crisis había vuelto a poner en primer plano la apropiación de renta de la tierra vía una de sus formas más evidentes: las retenciones a las exportaciones. A eso se sumaba la reconfiguración de la base impositiva y la pesificación al tipo de cambio libre aplicada a las deudas del sector agrario. Finalmente, la incapacidad para controlar al movimiento piquetero, de gran actividad durante este período, y la sospechada gestión de los diversos planes de asistencia social, hacían de Duhalde y los restantes funcionarios del gobierno personas con las que difícilmente la SRA podría entenderse. Al contrario, como hemos visto, poco tardó la CD en marchar hacia un paro.

Miguens procuró, al mismo tiempo, recomponer la relación con las restantes entidades, reducida casi a su mínima expresión durante la década previa. Pocos meses antes de abandonar la presidencia, Crotto había vuelto a enfrentarse con la CRA a propósito de su participación en el GP, uno de cuyos líderes, de Mendiguren, formaría parte del gobierno duhaldista. En la conferencia en la que pidió el adelantamiento de las elecciones, Crotto había reprochado a los integrantes de dicho grupo, y particularmente a la CRA, haber participado de una “fiesta devaluatoria”. El presidente de dicha entidad procuró desmarcarse del GP, pero no dejó pasar la oportunidad para responderle a Crotto, cuyas “actitudes individualistas [...] sólo conducen a generar más confusión y no ayudan a elaborar un proyecto común de un nuevo país” (VC, 28/07/02).

Pocos días más tarde, Miguens anunciaría su objetivo de reconstruir la relación y avanzar con las asociaciones agrarias en acciones conjuntas:

Insistiremos en la conformación de un frente de acción conjunta con las demás entidades del sector, por la mayor fuerza que ello otorga a nuestros reclamos (LN, 27/09/02).

¹⁰¹ Por cierto, la tradición familiar incluía también la participación política. Su hermano Ricardo Miguens había sido funcionario del MECON durante la gestión de Krieger Vasena en el gobierno de facto que había asumido en 1966. Allí ocupó un puesto en la Secretaría de Industria y Comercio, participó en la creación del INDECy fue director de la Junta de Carnes (LN, 14/07/07).

Las cuatro entidades venimos trabajando juntas hace tiempo, aunque aún no nos hemos organizado. De todos modos cuando me preguntan si es mejor estar en una sola entidad, yo creo que es bueno que cada una tenga su filosofía y su forma de pensar [...] pero sí se pueden elaborar estrategias comunes (A-Dic02: 14).

El paro del 2003, en efecto, parecía mostrar una mayor disposición de la SRA a formar parte de acciones de protesta, al menos dentro de los estrechos márgenes que aquélla les estipulaba. Así lo reconocía el propio Miguens:

Hay que cambiar de alguna manera la fuerza del reclamo. Cuando uno exige que se hagan las tareas proyectadas contra las inundaciones y no se hace nada, a pesar de que tendrían que estar los fondos que se recaudan de un nuevo impuesto a las naftas, o el Instituto de Carnes que está frenado, a pesar de que [...] el costo lo paga el productor, realmente no sé si llegamos con el reclamo, o llegamos mal, o debemos usar otra estrategia (A-Dic02: 14).

El paro, por otra parte, no sólo inauguró una fase en la que la SRA confrontaría más fuertemente con los sucesivos gobiernos. También constituyó, al mismo tiempo, la presentación en sociedad de la Cadena Agroindustrial, que posteriormente adoptaría el nombre de Foro de la Cadena Agroindustrial (FCA) (CL, 17/08/03; 13/11/04).

Se trata de un nuevo agrupamiento de cuarto grado en el que participaría la SRA, que se constituiría formalmente al año siguiente, y que agruparía a entidades que representaban las distintas ramas del sector agroindustrial: proveedores de insumos, producción primaria, industria alimentaria, comercialización y transportes conformaban una lista de alrededor de 40 asociaciones, a las que se sumaban las que representaban a los bancos. Ciertamente, el foro nuclearía a entidades que mantenían habitualmente enfrentamientos entre sí. En el caso de la SRA, el ejemplo más evidente es el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), con quien mantenían una disputa desde fines de 1999 por la liquidación diferida del precio de los granos, o la industria aceitera (CIARA), contra la que Crotto había despotricado tres años antes.

Este nuevo agrupamiento buscaría legitimarse sobre la base de representar una extensa fracción del capital, partiendo de la consigna de que la producción agroindustrial constituye el motor de la economía desde la mismísima fundación de la nación. Así lo expresa su declaración de principios:

La cadena agroindustrial argentina representa en conjunto el 45 % del valor agregado por la producción nacional de bienes, el 36 % del total de empleos y el 56 % de las exportaciones [...]. Afirmamos que la Cadena Agroindustrial es el motor más productivo y competitivo de la Argentina, protagonista clave del desarrollo económico, la generación de empleos y divisas, la integración nacional y la proyección internacional.

La Cadena Agroindustrial Argentina es el conjunto de actividades productivas de mayor raigambre en toda la extensión del país. Las que más nos vinculan con todo el mundo. Las que compiten con éxito en los mercados más exigentes. La Cadena abastece la variedad completa de alimentos y bebidas, indumentaria y otros bienes que los argentinos consumimos diariamente. Sus orígenes se remontan a los de la Patria: ya en 1810 Manuel Belgrano promovía en sus escritos la combinación de agricultura, comercio e industria como fuente de riqueza para la nueva Nación. A través de tan larga como rica experiencia ha demostrado que es capaz de desarrollarse y progresar aún en los contextos internacionales o domésticos más negativos.

Como se ve, el discurso que enarbolaba el FCA coincidía casi plenamente con el de la SRA, destacando el rol de la cadena en su totalidad en lugar del simple “productor agrario” o el “sector primario”. En este sentido, aparecen aquí la identificación de la producción agroindustrial como el eje clave o el “motor” de la economía (la rama más “productiva” o “competitiva”, generadora de empleos y divisas, etc.), la necesidad de impulsar la expansión de la cadena como necesidad para el crecimiento económico general, su posibilidad de vincular a la Argentina con el mundo, su capacidad de expandirse aún en contextos adversos, y su identificación con la patria misma. La condena a las retenciones y a los países que, por el contrario, subsidian la producción agraria son otras visibles coincidencias:

La expansión de los sectores de la cadena es la mejor contribución posible a la salud y sustentabilidad de la economía nacional, toda vez que con exportaciones crecientes se mitiga el déficit de la cuenta corriente del Balance de Pagos que históricamente se manifiesta cuando la economía crece. La Cadena Agroindustrial Argentina asegura la inserción competitiva en los mercados internacionales y el abundante aprovisionamiento del mercado interno. Este elevado nivel de eficiencia y competitividad es el que nos permite ocupar tan destacados lugares en el ranking mundial de producción y exportación de productos agroindustriales. Todo ello a pesar de escenarios en los que nuestros competidores externos no pierden de vista que el agro es su principal industria, subsidian fuertemente a la producción y exportación y restringen los accesos a mercados, mientras los argentinos nos “penalizamos” con crisis recurrentes e impuestos a las exportaciones, sin un claro reconocimiento en la sociedad de lo que nuestra actividad significa para todos.

El objetivo formal de la Cadena apunta a la generación de un consenso en torno a un programa económico articulado en torno a las demandas más generales en las que coincidían sus integrantes, y la presión ante el Estado para su ejecución:

El objetivo central de la creación de este marco institucional moderno es contribuir al bienestar de todos los argentinos mediante una estrategia de desarrollo nacional, con

proyección mundial, que potencie todos los recursos y posibilidades de la mayor cadena productiva del país, la más competitiva, dinámica y generadora de empleos y divisas [...].

El Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina es una alianza estratégica para ser más sustentables y competitivos a nivel nacional e internacional. No se superpone con las entidades existentes ni las reemplaza. Las reúne y potencia para consensuar temas de la agenda de Estado, mantener abierto un canal de comunicación con los poderes públicos y con la sociedad, y sumar masa crítica para proyectos que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.

Pero además de constituirse como interlocutor del Estado, buscaba posicionarse ante el resto de la sociedad para ganar apoyo ante sus demandas, especialmente frente a los habitantes de áreas urbanas.

Todavía existe la creencia de que la producción agraria comienza y termina en el establecimiento rural, una visión que nada tiene que ver con la realidad. Su esclarecimiento, principalmente en las áreas urbanas, es un objetivo fundamental del Foro Agroindustrial Argentino. Porque es necesario que todos comprendamos que la Argentina es un país agroindustrial. Y que la Cadena Agroindustrial es la más competitiva, exportadora y generadora de trabajo y divisas. Si la Agroindustria crece, crece la Argentina. Cuando se ignora esta condición básica de nuestra realidad existe el riesgo de perder tiempo y recursos buscando respuestas y soluciones donde no están (FCA, 2004: 1-10).

Al mismo tiempo, el espacio procuraría contener las disputas entre sus miembros, como la ya referida entre la SRA y la CEC, para plantear una demanda común frente al Estado.¹⁰²

8.5. Síntesis del período y forma de la acción política

Que la SRA es uno de los portavoces por excelencia del liberalismo económico en el ámbito nacional es algo difícil de discutir. Tanto como que Crotto, a título individual, se había convertido en uno de los más acabados exégetas de su versión de fin de siglo, el neoliberalismo. Cuando éste entró en crisis, la SRA se vio forzada a adaptarse a un nuevo escenario. En primer lugar, había perdido su papel de soporte del “modelo”: en adelante batallaría contra gobiernos a los que no identificaría precisamente como aliados. Hasta aquí, sin embargo, no había salido mal parada en lo absoluto: a pesar de los nuevos aumentos de

¹⁰² Este aspecto, en el que las relaciones de competencia tomaban la forma de las de solidaridad, es presentado como la superación de aquéllas por éstas: “señalamos el funcionamiento y las realizaciones de la Cadena Agroindustrial como la expresión de un enfoque moderno sobre las relaciones intersectoriales de la economía y la sociedad nacional, opuesto a falsas antinomias y divisiones estériles”. Durante la crisis del 2008, como veremos, las falsas antinomias y estériles divisiones volverían a aflorar.

la base impositiva, la devaluación implicaba para la clase terrateniente la apropiación de un flujo de riqueza extraordinariamente alto. Por supuesto, también conllevaba la exacción de una parte de dicha riqueza mediante la reinstauración de las retenciones, que a pesar de no impedir que dicha clase apropiara porciones de renta agraria mucho más sustanciosas que durante toda la década previa, hacían sentir a los representantes del sector agrario particularmente “discriminados”.

Como cabía esperarse, la SRA se enfrentó inmediatamente al gobierno por el impuesto en cuestión. La devaluación, en cambio, provocaría lecturas distintas. Crotto insistió en afirmar que ésta había tenido consecuencias “funestas” incluso en su último discurso en Palermo como presidente de la entidad. Así, persistió en la defensa de una de las piezas claves del esquema neoliberal, precisamente la que más había afectado a la clase terrateniente. Asimismo, se mantuvo en la tesitura de haber sostenido el “modelo” a cualquier precio: “si nos tenemos que quedar solos por defender estos principios”, había exclamado, “solos nos quedaremos”.

Pero Crotto ya había desempeñado su papel, y comenzaba a convertirse en un lastre para una SRA que buscaba dejar atrás la imagen que había dado durante la década de 1990 y enfrentar los desafíos de la siguiente. Si bien le había garantizado a la asociación un acceso fluido a los funcionarios del gobierno menemista (que, de cualquier modo, había probado no ser ni tan fluido ni demasiado eficaz), su consustanciación con éste y con la política que había implementado le impedían denunciar, incluso tras la caída del neoliberalismo, los aspectos de éste que indudablemente la habían perjudicado.

La renovación de la CD, en este sentido, actualizaría la mirada de la SRA respecto de lo pasado y el porvenir. Mientras Crotto seguía lamentándose por la caída del neoliberalismo, Miguens comenzaba a reconocer que la devaluación había “favorecido” al sector agrario, y el nuevo editorialista de Anales establecía sutiles distinciones para poder, sin abandonar su ideología liberal, clamar protección al Estado frente al avance de los capitales que durante la década de 1990 se habían consolidado como apropiadores de renta de la tierra. De esta forma, y a pesar de que su versión extrema del liberalismo estaba siendo revisada, la entidad intentaba reposicionarse en el mapa político. Y a asumir que, lejos de haberse transformado en “la entidad más poderosa de la Argentina”, la crisis del neoliberalismo la encontraba encarnando más bien un papel de víctima.

En efecto, a lo largo de la crisis de dicho régimen, la SRA mudó abruptamente sus posiciones. Pero tampoco aquí se trata de que adoptara posiciones “confusas y ambivalentes”, como señala Gálvez, en referencia al hecho de que la entidad no sostuvo una línea política coherente a lo largo de la crisis de fin de siglo.

Como ya señalamos, el sentido general de la acción política de la SRA a lo largo del período neoliberal consistió en defender el esquema económico hasta último momento. Y

efectivamente, cuando éste acabó por quebrarse, cambió su perspectiva. Así, si la acción de la SRA aparece como confusa y ambivalente, y más aún, contradictoria, esto proviene de un hecho que escapa al análisis de Gálvez: la renovación de la CD. En el año 2000, como vimos, Crotto volvió a ser reelecto para representar a la organización hasta el año 2002. Esta comisión, sin embargo, tenía fecha de vencimiento: ningún presidente había durado más que 4 períodos al frente de la entidad. Y el contraste con la CD electa en el 2002 se hizo patente de forma inmediata: si Crotto siguió hasta su salida de la presidencia despachándose contra la devaluación y afirmando que la SRA no trepidaría en “quedarse sola” si así tenía que hacerlo para defender sus principios, apenas tres meses después del recambio la comisión renovada reconocía que la devaluación había favorecido al agro, que las transformaciones económicas puestas en marcha durante la década de 1990 no habían sido tan favorables para el sector agrario como parecían, y que la SRA volvería a buscar la compañía de las restantes entidades agrarias, de quienes se había alejado a lo largo de toda la década previa. Crotto y la CD que lo secundaba habían sido capaces de personificar la defensa de la Convertibilidad y de los gobiernos neoliberales, mas la representación de la entidad en el nuevo escenario económico y político demandaba individuos de características distintas.

Al mismo tiempo, la forma que comenzaba a tomar la nueva fase de la acumulación de capital le permitía a la SRA abandonar su rol de soporte de una política económica para desarrollar un perfil más confrontativo. La sola reinstalación de las retenciones constituía para ella motivo suficiente para volver a denunciar “discriminación” hacia la producción agraria, y pasar a la ofensiva. El argumento de que lo recaudado iría a financiar la asistencia social en momentos en que el desempleo y la pobreza alcanzaban picos nunca antes vistos contuvo a la CD de lanzar un paro inmediatamente. Al año siguiente, no obstante, el incremento de la “voracidad fiscal” fue suficiente para que la entidad participase en la medida lanzada por el FCA.

Pero además de enfrentar la política de Duhalde, el paro había sido la presentación en sociedad de este nuevo agrupamiento. Se trataba, en principio, de uno en el que existía una mayor ligazón entre sus miembros que la que podía presentar un grupo como el G-8, dado que al tratarse de una cadena podía articular con mayor facilidad demandas sectoriales. Aunque esto no significaba, ciertamente, la supresión de las disputas internas. Por el contrario, en la medida en que la relación entre eslabones consiste precisamente en la compraventa de mercancías, la relación antagónica entre unos y otros se presenta en su inmediatez.

Capítulo 9

Fantasmas del pasado. La SRA y el regreso del populismo (2003-2008)

Desterremos para siempre la violencia como método, el pasamontañas y la ocultación de identidad como medio intimidante y la toma de rehenes como recurso, ante la pasividad y la complacencia de quienes deben ser nuestros garantes [...]. Es hora de terminar con la confusión entre el derecho de peticionar y el delito de extorsionar.

Luciano Miguens, julio de 2004

Seguro a la mayoría de la gente no le gusta que se corte la ruta, habrá quienes lo entenderán y quienes no. Sin embargo, el dato objetivo es que los cortes muestran la impotencia de la gente del campo, que siente que es la última oportunidad que le queda para pelear por su fuente de trabajo.

Luciano Miguens, abril de 2008.

Las elecciones del 2003 habían dejado como vencedor a un hasta entonces casi desconocido Néstor Kirchner, presentado por la oposición como un simple “delfín” del saliente Duhalde. Considerando la fuerte derrota a la que probablemente se vería sometido en el ballottage, Menem abandonó la carrera por recuperar la presidencia, dejando a Kirchner como presidente electo con el escaso 22% que había cosechado en la primera vuelta. En este escenario, la SRA batallaba por salir de la desorientación en que había quedado sumida tras la crisis del 2001.

9.1. Saliendo de la desorientación

El editorial de Anales de junio transcribía, aprobatoriamente, algunos pasajes del discurso ante la Asamblea Legislativa del presidente entrante. Allí se evidencia aún la apertura de la SRA hacia una política económica en la que el Estado juegue un papel más activo, siempre y cuando, por supuesto, se mantenga el equilibrio fiscal. Sin embargo, el editorialista se toma el trabajo de citar los párrafos del discurso en el que Kirchner reivindica la necesidad de avanzar en la obra pública, contraponiéndose a la fase neoliberal. Tras

recordar las palabras del editorial en el que rechazaban lo que habían denominado “Estado ausente”, ahora afirmaban:

En este “frente frío” que parece venir del Sud de la mano del presidente Kirchner y [...], hay líneas de pensamiento que parecen marcar rumbos equilibrados [...]. “Debemos asegurar la existencia de un país normal [...] con el sector público y el sector privado cada uno en sus respectivos roles” es el punto de partida de un concepto que concluye con la necesidad de “planificar y ejecutar obra pública para desmentir con hechos el discurso del neoliberalismo que la estigmatizo como gasto público improductivo”. “La construcción intensiva de viviendas, las obras de infraestructura vial y hospitalaria, educativa y de seguridad, perfilarán un país productivo” [...].

Hay también semáforos en amarillo cuando todo eso está condicionado a “la sabia regla de no gastar más de lo que entra. El equilibrio fiscal debe cuidarse”.

Y a pesar de deplorar a las “teorías keynesianas” que estarían proliferando en la Argentina, vuelve a contemporizar al reconocer la importancia de la obra pública, aunque condicionándola al “equilibrio fiscal”, y sugiriendo como destino a la rama agraria:

Nadie puede oponerse a una obra pública útil, ordenada y eficiente, de directo impacto productivo y generadora de puestos de trabajo. Imaginemos los beneficios en materia de empleo, actividad económica y recaudación impositiva que generaría la recuperación productiva de tres millones de hectáreas inundadas.

Finalmente, tras volver a quejarse de que en ninguno de los discursos “el campo fue protagonista, ni siquiera actor de reparto”, vuelve a plantear lo que sería una constante durante este período: la interpretación económica que destaca el rol de la producción agraria en la expansión económica posterior a la crisis:

No pretendemos un reconocimiento público del aporte del sector para el promocionado superávit fiscal de los últimos meses [...] o el aumento de la actividad industrial, motorizado por el sector de la maquinaria agrícola. Tampoco reclamamos que alguien diga que los planes sociales [...] se sustentan en un impuesto directo y distorsivo como son las retenciones. Sólo nos hubiera gustado, como hombres de campo que somos, que alguien nos diera las gracias por la cuarteada generosa (A-Jun03: 8-9).

Como consuelo, les valió la afirmación pública del nuevo ministro de economía, Roberto Lavagna: “el campo es un sector fundamental de la economía”.

Pasado el mal trago que les había significado el gobierno de Duhalde, la SRA seguía tomando algo de distancia de las rígidas posiciones políticas que había sostenido durante buena parte de la década neoliberal. Esto le permitía sintonizar, aunque con las esperables

reservas, con el discurso del gobierno entrante, a pesar del tibio populismo que tempranamente comenzaba a aflorar. De momento, adoptaron la posición de esperar.

El nombramiento de Miguel Campos como secretario de la SAGPYA también fue bien recibido. Una entrevista concedida a Anales fue titulada “la esperanza continúa” y alcanzó la tapa de la publicación, en la que escribían como epígrafe que Campos: “priorizó la necesidad de establecer un «diagnóstico» para luego implementar políticas para el sector. Reconoció el papel del agro como soporte de la economía local y afirmó que cuenta con un respaldo «total» por parte del Ministro de Economía” (A-Ago03).

La SRA reclamaba entonces, por una parte, mayores precisiones respecto a la política agropecuaria, o al menos las principales “líneas de acción”, e insistía con los reclamos por “la diferencia de IVA, la presión impositiva [y] las retenciones” (A-Ago03: 24), y planteaba la necesidad de efectuar “reformas de fondo al aparato político corporativo”, que ampara “reelecciones indefinidas y [...] listas sábana”. Por la otra, sin embargo, no dejaba de reconocer la habilidad del gobierno en la renegociación tras el default en la deuda externa, situación que urgía a resolver: “nos satisface concluir que, en apariencia, la seriedad de los pasos dados auguran la posibilidad de encontrar fórmulas de acercamiento para un mínimo desahogo que nos permita una bocanada de aire (A-Ago03: 8-9).

Este estado de cosas se mantuvo hasta mediados del año siguiente. Kirchner desairó a la entidad al no asistir a la inauguración de la exposición, afirmó que la política cambiaria estaba favoreciendo particularmente al sector agrario, y pidió “tener buena memoria” respecto a que años atrás “algunos de los que condujeron al campo defendieron con mucha fuerza” la Convertibilidad (P/12, 31/07/03). Sin embargo, días después visitó la muestra, descomprimiendo así tensiones y haciendo exclamar a Miguens que su visita era “una señal de estímulo para el campo” (P/12, 05/08/03).

La cuestión impositiva siguió inquietando a la asociación. El último cuatrimestre del año, arremetió mediante comunicados de prensa contra un proyecto de reforma impositiva que estipulaba el pago de ganancias de acuerdo al precio vigente al momento del embarque, las demoras en la devolución del IVA, y los controles satelitales del stock almacenado para la determinación de los impuestos correspondientes sobre el volumen producido (M04: 60-2). A pesar de ello, en septiembre seguían manifestando tener “una sensación de esperanza” respecto del gobierno. Aunque señalaban cuestiones preocupantes como “que la reforma política quede en el arcón de los recuerdos, que los gastos del Estado sigan creciendo, que las reglas de juego cambien al vaivén de la necesidad recaudatoria”, dejaban aún abierto el espacio para la negociación:

Se trata de saber descubrir la ventana abierta [...] para seguir el diálogo [...]. Hay que abandonar el perfil de la protesta permanente ante el hecho consumado [...]. No bastará con el

discurso de barricada, con la crítica mordaz o la señalización sistemática del error o el perjuicio para el sector. Habrá que construir el camino alternativo (A-Oct03: 10).

En la exposición ganadera, Miguens reconoció el cambio en el humor político, que pasaba del “que se vayan todos” a la renovada esperanza, y exclamó: “es momento de unir, no de dividir”. Posteriormente, insistió con los reclamos habituales de la entidad: la necesidad de bajar los impuestos, el gasto público y la emisión dineraria, proteger la seguridad jurídica, y la necesidad de créditos y obras públicas para el sector, entre otras (A-Sep03: 18-22).

Aún en abril del año siguiente la SRA se mantenía expectante y se contenía de lanzar críticas abiertas al gobierno, no obstante la suma de reclamos específicos que venía acumulando. En buena medida, el alza en los precios de las mercancías agrarias había contribuido a calmar los ánimos. El “veranito” económico se había prolongado, sosteniéndose precisamente sobre esta base, y el rol del sector agrario en esta recuperación comenzaba a ser puesto de relieve en los análisis económicos. La entidad, apoyándose en ello, afirmó en un editorial:

El boom del campo está en pleno apogeo. Economistas, líderes de opinión pública, consultores, opinan del agro tal cual en la época en que nos denominaban el granero del mundo [...]. No cabe duda de que nuestro sector está en el centro de la escena nacional.

Pero nos miran de reojo. Estamos de moda, y como todo lo que está de moda, un día desaparece del candelerero o no, según el camino que emprendamos de aquí en adelante. He aquí la cuestión. ¿Cómo hacemos para que este momento de reactivación que vive el agro, se transforme en una constante de acá en adelante en base a políticas previsibles y de fomento a la producción?

El agro es valor agregado en sí mismo, genera mano de obra, el productor reinvierte en lo que hace, del campo dependen el 60% de las exportaciones nacionales, [...] es dinamizador de las economías regionales, [...] salvó al país de una crisis terminal, los últimos anuncios de inversiones fueron del sector agropecuario, la recaudación es record gracias a las retenciones, etc. ¿Cómo se plasman esas verdades inobjetables [...] en acciones concretas del gobierno? ¿Cómo pasar de ser noticia del momento a liderar el proyecto de país de futuro? ¿Cómo hacer entender a la opinión pública que el campo forma parte de sus vidas sin siquiera ser consciente de ello? [...].

Nos gratifica ver al Presidente, junto a su gabinete, recorrer con entusiasmo primero Palermo 2003 y hace poco Feriagro [...]. Pero que quede claro que no alcanza. El reconocimiento, bienvenido sea, pero el campo necesita atención a tiempo completo, necesita de un plan a largo plazo, necesita ocupar una silla en las reuniones de gabinete, necesita que se lo tenga en cuenta como base de sustentación de la economía.

Así, la SRA buscaba montarse sobre el reconocimiento de la rama agraria como actor principal de la expansión económica. Y sobre esta base, procuraba instalar sus demandas en la agenda política, valiéndose ahora de la nueva organización de la que formaba parte:

La Rural apuesta a que la labor de la cadena agroalimentaria pueda ser fundamental para que se cumpla lo antes descripto. Por su peso específico y por su amplio espectro de representatividad, este ámbito donde confluyen más de 30 asociaciones y cámaras contribuirá a posicionar al agro en donde puede y debe estar. ¿Cómo? Ya lo está haciendo. Luego de un minucioso y exhaustivo trabajo, presentará ante la opinión pública el impacto del agro en la economía nacional (A-Abr04: 4-5).

En junio, la caída de los precios de los granos disparó las luces de alarma. La SRA empezó a entrever que el gobierno no tenía intención alguna de eliminar las retenciones, tal como había prometido. Ya superado el momento más álgido de la crisis, arremetió duramente contra los planes de asistencia a la fracción desempleada de la clase obrera, recurriendo también a los informes y programas elaborados en el marco de la CAI, en lo que sería una constante a lo largo de este período:

Tal como se preveía, la escalada de los precios internacionales de los commodities no sólo se frenó, sino que entró en una espiral descendente [...]. El gobierno se muestra preocupado ante los menores ingresos que obtendrá [...] por lo cual es casi improbable [sic] cumpla con su promesa de rebajar las retenciones [...].

Desde la reimplantación de las retenciones insistimos al gobierno [en] que no debían perdurar en el tiempo. Solo avalamos que se destinen los fondos para atender la emergencia social reinante, no para alimentar las apetencias de los punteros políticos de turno. En estos días se conoció un estudio elaborado por el propio gobierno que dice que sólo el 3,8% de los beneficiarios de los planes jefes y jefas logró reincorporarse al mercado laboral formal. El Estado destina 299 millones de pesos para financiar dichos planes. Al mismo tiempo, otro informe concluye que la cadena agroindustrial genera el 36% del empleo total del país [...]. A la luz de lo expuesto, no hay que ser adivino para aventurar qué pasaría con el desempleo si el gobierno decide suprimir la presión tributaria. ¿Por qué no lo hace?

La embestida tenía, ciertamente, una causa menos noble que la incorporación de los desempleados al mercado laboral formal, al cual el capital agrario contribuía escasamente a expandir: los planes de asistencia social habían logrado poner un piso al derrumbe salarial. Pero aún otro aspecto turbaba el espíritu de los dirigentes de la asociación. El gobierno había dejado pasar, sin ofrecer argumentos sólidos, la oportunidad de volver a presentar ante la OIE el pedido del status de país libre de aftosa con vacunación, lo que significaba un

freno a las negociaciones para reabrir importantes mercados externos, EE.UU. entre ellos. La SRA no se atrevió a sugerir intencionalidad, pero avizoró un escenario de conflicto:

La explicación al respecto [...] fue casi nula y confusa a los medios, y escasa hacia los principales interesados, los productores. Decisiones de esta magnitud merecen un tratamiento responsable y transparente, lo cual en este caso no sucedió, y nos preocupa. Ello sumado a fuertes rumores que hablan de una apatía por parte del gobierno con todo aquello que implique aumentos de productos alimenticios para el mercado interno, es poco alentador (A-Jun04: 4-5).

La crítica se completaba con la ausencia de funcionarios de rango en el 150º Aniversario de la Bolsa de Cereales, con lo cual entendía que el gobierno “desairó [...] a toda la cadena agrícola”. Sin embargo, la entidad se mostraba aún conciliadora y dispuesta al diálogo.

Kirchner tampoco asistió a la inauguración de la exposición de Palermo en el 2004, pero la visitó dos días más tarde y dijo sentirse “como en su casa”. En el discurso, cuyos tópicos son retomados en el editorial de Anales de octubre, Miguens volvió a mostrar inquietud por la negativa del gobierno a reducir las retenciones ante el descenso de los precios de los granos, solicitó una reforma tributaria y la creación de un Ministerio, entre otras de las demandas más usuales. Asimismo, volvió a ponderar el rol de la cadena agroalimentaria en la reactivación económica y la generación de empleo. Pero un tema sobre el que la SRA venía insistiendo cobraría pronto particular relevancia: la discusión y puesta en marcha de un “plan ganadero” (A-Oct04: 8-9; 20).

En noviembre, otro episodio inquietaría a su dirigencia. Presionado por el reconocimiento previo de Brasil y de Chile, el gobierno de Kirchner también se vio obligado a conceder a China el status de “economía de mercado”, lo que implicaba una mayor dificultad para detener la expansión de las importaciones de mercancías chinas que desplazarían a algunas de las ramas que habían experimentado una moderada expansión tras la devaluación de la moneda, como las de textiles, calzados, juguetes y metalúrgica. En contrapartida, no obstante, el gobierno obtuvo el levantamiento de barreras fitosanitarias a la exportación de carnes y frutas, y posteriormente de otros productos de origen agrario (P/12, 13/11/04; LN, 18/11/04).

El acuerdo no implicaba el aumento de la presión sobre la demanda de carne vacuna, puesto que China sólo importaba pequeñas cantidades. Sin embargo, la negociación había reabierto el debate acerca del “modelo de desarrollo” deseable para la Argentina: el acuerdo pondría en discusión la posibilidad de una reversión de la lenta expansión industrial que se había desarrollado tras la crisis, así como un impulso hacia una “reprimarización” de la economía (P/12, 08/11/04).

Distintos representantes industriales expresaron su temor ante una posible invasión de mercancías chinas y criticaron el acuerdo, por añadidura presentado por el gobierno de forma confusa (LN, 22/11/04). La SRA, por su parte, defendió la apertura comercial, y fustigó a los capitalistas industriales por presentar el acuerdo como el aumento de la importación de productos chinos industrializados como contrapartida por el de la exportación de mercancías primarias y de escaso valor agregado, categorías que irritaron particularmente a la entidad, que les recitó los guarismos elaborados por la CAI respecto al valor agregado en la producción agroindustrial. Pero también criticó al gobierno:

Como era de prever, el gobierno ya está tomando medidas para resguardar los intereses de varios sectores [...]. En virtud de lo expuesto [...] era necesario [para el gobierno, NPT] disparar contra el sector agroindustrial acusándolo de “primario” y de aportar poco valor agregado (A-Dic04: 9).

A año y medio de la asunción de Kirchner, la relación comenzaba a tensarse. En otro artículo, la entidad protestaba por la falta de políticas concretas para el sector agropecuario, acusando al gobierno de limitarse a ejecutar medidas coyunturales, y lamentando una serie de cuestiones: no hay plan ganadero a pesar de las reiteradas reuniones con funcionarios del gobierno, no se logró el status de libre de aftosa con vacunación que podría haberse obtenido en octubre, el plan de trazabilidad del ganado no logró consenso, el SENASA no se reestructuró, el IPCV no terminó de organizarse, las disputas en torno al reparto de la cuota Hilton recrudecieron. A esto se sumaba la inacción del MECON frente a los problemas de las economías regionales, la falta de crédito y la cuestión de la refinanciación de las deudas con el BN, la presión impositiva, el escaso poder de la SAGPYA frente al MECON, y otros reclamos de contenido más general (A-Dic04: 8-11).

Al mismo tiempo, la SRA reemprendió la batalla por ganar la opinión pública en favor de la eliminación de las retenciones, que sólo habían “aceptado” en nombre de paliar la explosión de la pobreza. La caída en los precios de los granos les brindó, como vimos, un momento oportuno para avanzar en este sentido. Amparándose en la CAI, Biolcati reeditó la polémica con De Mendiguren, quien apoyado por distintas entidades industriales así como por CONINAGRO, disputaba la conducción de la UIA al amparo de Lavagna:

Una de las cosas frente a las cuales estamos muy unidos en la cadena agroindustrial es la clara conciencia de terminar con las retenciones. Eso no [es lo que] busca el ministro Lavagna y evidentemente apadrinó algún tipo de movimiento que apoya el mantenimiento de las retenciones [...]. De Mendiguren, figura por lo menos discutible para el sector agroalimentario, y en sus primeras declaraciones en el despacho de Lavagna, dijo que las retenciones debían continuar. Me parece que esto es una jugada más bien política porque está muy influenciado por empresas algunas de ellas alimenticias [...] a veces las necesidades

políticas hacen surgir estas cosas. [En cambio] la Cámara de la Agroindustria está completamente despojada de un fin político (A-Dic04: 25-6).

A pesar de esta tensión, la SRA seguía buscando accionar por la vía de la negociación, como lo atestiguan sus reuniones con el vicepresidente Scioli, el ministro Lavagna, el Secretario de Finanzas Guillermo Nielsen (uno de los principales gestores de la renegociación por el pago de la deuda) y el Ministro de Infraestructura Julio de Vido, entre otros funcionarios de menor rango. Asimismo, el FCA también había desempeñado el rol de vínculo entre los capitalistas del sector agroindustrial y el gobierno, al concertar encuentros con De Vido y con Javier de Urquiza, subsecretario de la SAGPYA (M04: 37-42). Este panorama comenzaría a cambiar tras el estallido del conflicto por la carne.

9.2. La acción de la SRA en la crisis de la carne¹⁰³

Tras la eliminación de la fiebre aftosa y la inminente recuperación del status de “país libre con vacunación”, la producción cárnica comenzaría a reconquistar algunos de los jugosos mercados internacionales que se habían mantenido cerrados durante la década de 1990. Ya en el 2004, sobre un promedio histórico de aproximadamente un 15%, la proporción de carne exportada había trepado al 20% y continuaría subiendo. Al mismo tiempo, la reactivación económica había arrastrado una recuperación del consumo interno. Y a pesar de que el stock de ganado había ya salido de su punto crítico de 48 millones de cabezas alcanzado en 1998 para superar los 52 millones en 2002 y alcanzar casi 57 en el 2004, la oferta no podría igualar la velocidad del crecimiento del consumo interno y externo. Al mismo tiempo, la expansión de los precios en el mercado mundial que había seguido a la crisis del 2001 comenzaba a trasladarse, por efecto de la competencia, al mercado interno.

Un ganadero y consultor privado resumiría al año siguiente la situación que comenzaba a plantearse en el 2004: “la cuenta es que a un lomo aquí le puedo sacar 5 dólares y al exportarlo puedo obtener 10 o 12 dólares [...] dejar de exportar cortes vacunos de alto precio en el mercado internacional para comerlos aquí significa tener un importante lucro cesante” (LN, 24/09/05).

En este escenario no era arriesgado presagiar un conflicto. La SRA, que desde la erradicación de la aftosa venía demandando a los distintos gobiernos la implementación de un plan ganadero destinado a elevar el número de cabezas y el peso del ganado, redobló la presión sobre el kirchnerismo. En octubre, Miguens había sugerido algunos lineamientos básicos: incentivar a las economías regionales a aumentar la producción, invertir en praderas y manejo de pastizales, estudiar suplementaciones estratégicas para mejorar los

¹⁰³ Un detallado análisis de este conflicto puede hallarse en el trabajo de Azcuy Ameghino (2007a, págs. 273-316).

pesos de faena, y asegurar los controles sanitarios. Para ello, el requisito fundamental era la reestructuración del SENASA, acosado por la “falta de recursos financieros” y amenazado por un proyecto de ley oficial que proponía la eliminación de los representantes del agro de su CD. Finalmente, anunciaba que la SRA formularía su propio plan para ser presentado al gobierno (A-Oct: 8-9; 21).

Los primeros meses del 2005 habían registrado veloces alzas en algunos artículos que componían la canasta básica o incidían en ella. Uno de estos productos eran los combustibles. Ante esto, el gobierno había convocado a no comprar productos a la petrolera Shell en marzo, profundizando su faceta populista: se trataba del “boicot nacional que [se] le puede hacer [...] a quien se está abusando del pueblo” (LN, 11/03/05). El siguiente turno sería el de la carne.

La estrategia inicial del gobierno consistió en buscar un acuerdo de precios. Tras una negociación con los capitalistas frigoríficos y el aval de los supermercadistas, Campos anunció una reducción del 10% en cinco cortes de carne “populares” que regiría durante 90 días. Y advirtió: el éxito del acuerdo también depende de que “no se dispare el precio del ganado en [el mercado de] Liniers” (LN, 15/03/05). Posteriormente, también adhirieron las carnicerías.

Paralelamente, Kirchner siguió avanzando en la escalada: “hay sectores que no desean el mejoramiento paulatino del poder adquisitivo de la sociedad ni tampoco desean distribuir las rentas y las ganancias que puedan tener”, afirmó Kirchner en marzo sobre las petroleras y la cadena de producción cárnica (LN, 10/03/05). Mientras tanto, el MECON consideraba la posibilidad de aumentar las retenciones a la carne (LN, 12/03/05).

Ante el recrudecimiento del conflicto, la SRA comenzó a mostrarse abiertamente crítica de la política económica del gobierno:

Cuando el 10 de marzo el Presidente [...] se topó con las tapas de los diarios que informaban del aumento de los combustibles y la carne, seguramente [...] se le disparó el mecanismo que activa la “memoria hiperinflacionaria” y como es su costumbre salió a pegar verbosamente, antes de que alguno de sus asesores le avisara (al menos en el tema carnes) que había llovido mucho, que no entró hacienda a Liniers, que se abrieron mercados en el mundo, que no hay más aftosa por la vacunación, que la carne cuesta, que el Plan Ganadero no se puso en marcha [...] y un montón de argumentos más [...]. A partir de ahí se inició una especie de cruzada contra el aumento de precios no sólo de la carne vacuna sino también del pollo [...] y los lácteos.

Los estigmas entonces reverdecieron, a través de las amenazas de más retenciones o de la clásica acusación de que el agro es un evasor, ambas alternativas ensayadas desde el Ministerio de Economía (A-Abr05: 16-7).

En el editorial de abril, asimismo, la SRA exigía ya con mayor dureza el abandono de políticas que interpretaba como “cortoplacistas” y la discusión e implementación de un plan ganadero que mejore la oferta de carne. Pero también con mayor resignación: el perfil que iba consolidándose en la política del gobierno no traía buenos augurios a la dirigencia de la entidad, que comenzaba a rechazarlo con mayor firmeza:

Nos señalan como los culpables de la inflación, cuando en realidad fuimos los responsables de que el país haya vuelto a caminar. Hemos contribuido, vía retenciones, con miles de millones de pesos, hemos puesto el hombro, hemos transformado el alza de los precios internacionales en inversión genuina y en generación de mano de obra [...]. Este presente nos encuentra frente a un gobierno que por un lado tiene un discurso pro-exportador y por el otro no genera las condiciones mínimas para fomentarlas [...].

Es alarmante que nos acusen de especuladores y de no pensar en el bien común [...]. Que quede claro que la inflación nos preocupa igual que al gobierno. Pero disentimos por completo sobre la propuesta meramente cortoplacista e inconducente para salir de esta encrucijada. Se lo dijimos en todos los idiomas: queremos producir más. Llevamos dos años esperando la puesta en marcha del Plan Ganadero [...]. El escenario actual era de por sí previsible.

La única respuesta concreta es una amenaza latente de aumentar las retenciones, cuando en realidad debemos sentarnos juntos, actividad privada y gobierno, para diseñar medidas que generen en forma rápida un aumento de la oferta, única receta para satisfacer el consumo interno y la exportación sin alterar los precios [...].

La realidad urge un replanteo sobre qué modelo de país queremos de aquí en adelante: el que demostró en base al esfuerzo y el trabajo que puede ser el motor de la economía del país, o aquel sustentado en una continua presión tributaria sobre los sectores productivos transfiriéndose recursos vitales para el crecimiento en manejos y en formas de hacer política severamente cuestionadas por la sociedad (A-Abr05: 7).

Mientras tanto, el acuerdo mostraría tener escaso efecto: los precios de la carne no descendieron, y los distintos eslabones de la cadena de producción de carne comenzaron a cargarse las culpas unos a otros. Mejor suerte había tenido el acuerdo alcanzado en la rama láctea, cuya producción comenzaba a expandirse nuevamente. Si bien los precios de las mercancías más consumidas internamente se habían mantenido relativamente estables desde el convenio firmado en marzo, la negativa de los capitalistas a la renovación del acuerdo tuvo como respuesta el incremento de retenciones a las exportaciones de leche en polvo y quesos (LN, 23/07/05).

Por supuesto, la entidad protestó contra la medida en su editorial, argumentando que este tipo de políticas “lo único que logran es desalentar la producción y por ende restringen

la oferta [...] precisamente el objetivo que el gobierno argumenta querer combatir” (A-Ago05: 4). Biolcati fue un poco más duro:

Es una locura, un acto esquizofrénico. Hasta hace poco se festejaba desde el gobierno [...] los logros obtenidos en la conquista de mercados, la posibilidad de apertura de otros, la inserción de nuestra carne y leche en el mundo [...]. Y hoy, exportar carne, leche y cereales quieren hacerlo aparecer como un acto de traición a la patria, que le estamos quitando la comida a los chicos, como una “voracidad” empresaria en la búsqueda de rentabilidad [...]. Son decisiones de neto corte electoralista: si sale en el diario que aumentó el precio de la leche, el gobierno tiene que salir al día siguiente a decir que hizo algo para evitar esa suba (A-Ago05: 15).

Similares argumentos esgrimió Miguens en su discurso inaugural de la Exposición Ganadera. Allí, la entidad acabaría de reafirmarse en la posición que le resultaba más cómoda: la de confrontación contra un gobierno de ya visibles rasgos populistas que “discriminaba” al sector agrario. Miguens comenzó destacando allí la importancia del sector agrario y la agroindustria en la recuperación económica, y acusó al gobierno de Kirchner, quien ciertamente no visitaría Palermo en ese año, de “indiferencia” ante esa realidad. Tras afirmar que las retenciones afectaban la producción de granos, carne, leche y economías regionales, pidió su abolición:

Desde la reimplantación de los ilegítimos derechos de exportación, le hemos transferido al Estado más de 6 mil millones de dólares, perdiendo la oportunidad de invertir. En el mundo desarrollado se le paga al productor [...] para que permanezca en la tierra [...]. Mientras que allá a ellos se los regalan, aquí a nosotros nos lo quitan [...].

Hablar de las retenciones como impuesto distorsivo ha sido calificado como una postura ideológica. Si sostener que el campo, eterno y genuino reinversor, necesita de sus propios fondos, para multiplicar su producción es una cuestión ideológica, bendita sea esa ideología. La realidad es que al campo se lo castiga por exportar.

De igual modo, la reducción del gasto público, otro de los tópicos recurrentes en el discurso de la entidad, volvió a consolidarse como eje de disputa:

El gasto público sigue aumentando. La presión fiscal total entre Nación, provincias y municipios es la más alta de los últimos doce años. El agro paga más del doble de impuestos que el resto de la economía y el superávit fiscal está basado sobre impuestos distorsivos [...]. Tenemos al Estado como socio oneroso, que sólo parece esperar nuestro crecimiento para aumentar su recaudación (A-Nov05: 21).

Asimismo, cargó contra los costos laborales y pidió una nueva Ley de Riesgos del Trabajo “que contemple el compromiso de los empresarios en la prevención de accidentes”

y al Estado “que [...] asegure previsibilidad en los costos y erradique la industria del juicio”, la realización de obras públicas de infraestructura de transporte y obras hídricas, la reforma del SENASA, y acciones para enfrentar el delito rural. La SRA recuperaba así los principales ejes de su programa, que habían sido soslayados tras los resultados de la implementación de la política económica neoliberal, para contraponerlos al afirmamiento populista del gobierno.

Ya hacia finales del 2005, en el discurso de fin de año, la SRA objetaría con más fuerza la política kirchnerista. Tras destacar el momento de expansión económica, Miguens volvió a insistir en la reducción (o, alternativamente, “eficientización”) del gasto público y el otorgamiento de “incentivos” fiscales y financieros a la producción; la necesidad de avanzar hacia una “distribución equitativa del ingreso”, lo que “implica la búsqueda de políticas económicas superadoras a la actual política del asistencialismo”; el “ajuste de los precios relativos y las tarifas de los servicios públicos”; y la importancia de llegar a un arreglo con los deudores que no entraron en la reestructuración y un acuerdo con el FMI, que “sería positivo tanto para la imagen del país y las inversiones como para las cuentas fiscales, pues el financiamiento de las deudas es claramente más barato que la emisión de bonos”. Todo ello mientras el gasto fiscal seguía creciendo, en parte debido a las políticas de sostenimiento de los trabajadores desocupados; el congelamiento de tarifas comenzaba a convertirse en forma de apuntalamiento de la acumulación de los capitales industriales vía la suba del salario indirecto, y la deuda con el FMI se hallaba a horas de ser cancelada, pero no para refinanciar la deuda pendiente, sino para pagarla, con lo cual el FMI se convertiría en enemigo público nacional declarado.

En este sentido, el pago de la deuda contraída con dicho organismo mereció la aprobación de la SRA, cuyo presidente señaló que “cumplir con el servicio de la deuda es un signo de confianza para los mercados [...] para las inversiones que el país necesita, puede ser positivo” (IC, 19/12/05). A pesar de considerar esta medida como positiva, el conflicto entre la entidad y el gobierno pronto se profundizaría, cuando hacia mediados del año siguiente, la saga de la carne iniciara su segundo capítulo.

Mientras se celebraba la exposición ganadera en el mes de agosto, y en procura de aumentar la oferta de carne, Lavagna y Campos anunciaron la prohibición de faenar animales de menos de 300 kg. de peso a partir de noviembre. Aunque la SRA manifestó compartir el objetivo final, esto es, el aumento del peso de faena, rechazó inmediatamente la medida:

Medidas como la propuesta fomentarán la faena clandestina, aumentarán los costos de producción, reducirán la eficiencia productiva, la rentabilidad del ganadero y con ello la oferta de carne. Se insiste con una visión cortoplacista y electoralista que limita la inversión y

desalienta la producción [...]. El sector ganadero, por representar un negocio de largo plazo vinculado a tiempos biológicos inalterables, requiere de reglas claras, seguridad jurídica y respeto por la iniciativa privada (M06: 56).

A ella se sumaron en un comunicado conjunto tanto la CRA y CONINAGRO como las cámaras que agrupan a los consignatarios, con similares argumentos. La intervención sobre el mercado de la carne, sin embargo, estaba dividiendo las aguas. Los frigoríficos y engordadores respaldaron el anuncio: “la medida es excelente; hay que dejar de atender el quiosco y mirar el bosque, porque el peso de faena había que elevarlo frente a una mayor demanda”, afirmó el Presidente de la Cámara de Engordadores de Hacienda (LN, 26/08/05). Los distintos eslabones de la cadena de producción de carne, de esta manera, no lograban actuar coordinadamente para confluir en una demanda conjunta al gobierno.

Por su parte, éste buscaba alcanzar un nuevo acuerdo de precios: a pesar del establecido en marzo, la carne había subido más del 11% en lo que iba del año, contra una inflación promedio que aún no alcanzaba el 8%. El gobierno buscó entonces alcanzar un nuevo acuerdo, convocando esta vez no sólo a los frigoríficos, sino también a los consignatarios y supermercados. Estos últimos, de hecho, carecían de mucho margen de maniobra tras haber sido blanco de las críticas de Kirchner.¹⁰⁴

Las negociaciones, sin embargo, no incluyeron a los ganaderos. En un comunicado, la SRA, la CRA y CONINAGRO protestaron por la “marginación” a la que fueron sometidas a pesar de ser “parte fundamental” de la cadena, y afirmaron que “estas prácticas intervencionistas del gobierno ya han demostrado no alcanzar los objetivos planteados” (M06: 57).

El acuerdo, que regiría durante 90 días, se firmó el 15 de septiembre. Además de la incorporación formal de supermercados y consignatarios, el acuerdo revestía otra novedad: no se trataba ya de bajar los precios de algunos cortes de carne, sino de mantener el precio del mes anterior de la media res, que se dividía en 17 cortes. Por otra parte, los frigoríficos habían logrado imponer una cláusula que establecía que el acuerdo sólo se cumpliría si se mantenía estable el valor de la hacienda en los mercados (LN, 7, 15 y 16/09/05).

La SRA volvió a protestar ante el acuerdo. En un comunicado de prensa, lo juzgó “cortoplacista” y “electoralista”, y fustigó en duros términos a los funcionarios de gobierno:

Los productores ganaderos no son formadores de precios, ya que el valor de la carne se establece con el libre juego de la oferta y demanda en el Mercado de Liniers, frigoríficos y carniceros, entre otros. La medida tomada se torna estrictamente preeleccionaria, y es fruto de

¹⁰⁴ “Está mejorando la rentabilidad empresarial [...] pero en la lucha contra la inflación es hora también de que los que generan bienes y los que los comercializan, como los supermercados, se den cuenta de que no se pueden abusar del bolsillo del pueblo y de que hay un gobierno que va a estar al lado del pueblo” (LN, 07/09/05).

la incapacidad e ignorancia de los funcionarios responsables, la cual provocará graves distorsiones en el mercado (LN, 17/09/05)

Días antes de obtener un holgado triunfo en las elecciones legislativas de octubre, el gobierno intentó descomprimir la presión escalonando el límite de faena, que comenzaría en los 260 kg para llegar a los 300 recién el 31 de enero, de forma que los ganaderos contarían con más tiempo para engordar a sus animales. Miguens ponderó la modificación de la norma: "se mejora en algo, pero seguimos objetando la obligatoriedad en el control del peso. Esta medida es cortoplacista, ya que no se busca una solución para que aumente la producción de carne" (LN, 05/10/05). Al día siguiente, la SRA envió una carta a Campos junto a CRA, CONINAGRO y las cámaras de consignatarios ratificando el rechazo a la medida por establecer un "gradualismo que sólo significa un parche para una mala medida", reiterando las objeciones sobre el "cambio en las reglas de juego" en una rama cuya producción transita ciclos largos, reclamando nuevamente que la implementación de un plan ganadero, y proponiendo algunas medidas alternativas inmediatas a discutir con el secretario (M06: 57-8).

La aparición de focos de aftosa en Brasil y el incremento sostenido del consumo interno, que se ubicaba ya alrededor de los 70 kg por cabeza, sin embargo, seguían presionando los precios hacia arriba. Ya en noviembre, el acuerdo tambaleaba nuevamente y distintos eslabones de la cadena anunciaban aumentos de precios (LN, 05/11/05).

Mientras las cámaras frigoríficas reafirmaban su compromiso de no aumentar los precios, la SRA presentaba su propio proyecto, elaborado por el IEE: el Plan Estratégico Ganadero Argentino. Se trataba de una serie de medidas agronómicas y fiscales, entre las cuales destacaban una deducción en el impuesto a las ganancias y créditos a tasas subsidiadas para la implantación de pasturas y el uso de fertilizantes, y cuyo costo fiscal ascendía a poco más de 1100 millones de dólares. El objetivo principal consistía en el aumento, en un lapso de diez años, de 12 millones de cabezas en el stock vacuno, estancado desde hacía décadas (M06: 59-60).

En la presentación del plan, Miguens criticó la política seguida por el gobierno: "los acuerdos de precios son increíbles porque algunos sectores se juntan para acordar los valores de nuestro producto, eso no tiene ningún sustento". Y sugirió, amparándose en el brote de aftosa de Brasil, que los precios acabarían subiendo: "No hay intención de que el precio aumente porque perderíamos el mercado interno, pero hay cortes de exportación que tienen viento a favor y no lo podemos desaprovechar" (LN, 08/11/05).

Y efectivamente, solamente en noviembre el precio local había subido un 8%. Lavagna buscó entonces detener los aumentos mediante otro método un poco más directo. En primer lugar, suspendió los reintegros a las exportaciones, lo que en la práctica consistía

en una suba de las retenciones. Dicha medida alcanzó además a todos los productos de la canasta básica, lo que provocó protestas de otras ramas de la agroindustria como los capitalistas aceiteros, agrupados en CIARA. En lo que respecta a la carne, el reintegro ascendía a unos 5 puntos (LN, 11/11/05). Pocos días después, sin embargo, anunció el restablecimiento de los reintegros, el aumento de las retenciones a la exportación de carne fresca y congelada (no termoprocesadas) en otros 10 puntos (elevándolas así al 15%), y una reducción de dicho impuesto sobre los cueros salados, que pasaba de 15% a 8%. Como contrapeso, el ministro anunció asimismo que el escalonamiento del peso máximo de faena volvía a extenderse, con el límite de 300 kg corrido ahora hacia marzo, y otras dos medidas que iban en la línea de las sugeridas por la SRA: una línea de créditos con tasas subsidiadas para la implantación de pasturas, y la incorporación de las empresas agropecuarias al proyecto de ley de exención impositiva para deducir las utilidades reinvertidas del impuesto a las ganancias. Fue una de las últimas medidas impulsadas por el ministro: incapaz de contener el avance inflacionario, fue reemplazado por Felisa Miceli a finales de noviembre.

Los anuncios volvieron a generar tensiones entre los distintos eslabones de la cadena. Mientras que la Asociación de Propietarios de Carnicerías avaló la medida, la SRA comandada por Miguens volvió a protestar: "el campo no es formador de precios, simplemente mandamos nuestros productos. Estamos volviendo a viejas prácticas que en la Argentina nunca tuvieron éxito", y volvió a reclamar medidas de largo plazo (LN, 19/11/05). También los exportadores acusaron el golpe: el consorcio ABC buscó negociar con el Estado la suspensión de la medida a cambio de un mayor aporte impositivo por las ventas de la cuota Hilton, sin obtener resultados (P/12, 22/11/05). Los frigoríficos, por su parte, respondieron anunciando inmediatas suspensiones de personal (LN, 30/11/05).

Tampoco la elevación de las retenciones, sin embargo, atenuó la suba de precios, que alcanzó el 11,5% entre noviembre y diciembre. El gobierno buscó entonces realizar un tercer acuerdo de precios, incluyendo ahora también a las cuatro entidades agrarias y sugiriendo que la retracción en la suba de las retenciones sería parte del acuerdo. Tras su firma, no obstante, quedó claro que el valor de las retenciones no sería modificado. La SRA, la CRA y los consignatarios renunciaron entonces a tomar parte en el convenio, que acabaron suscribiendo FAA, CONINAGRO y las cámaras de frigoríficos (LN y P/12, 24/01/06). Por su parte, los no firmantes, esto es, la SRA, CRA, los consignatarios, exportadores, engordadores y el Frente Agropecuario Nacional emitieron un comunicado desligándose de la responsabilidad por el fracaso de las negociaciones y manifestando mantener la vocación de diálogo. En respuesta, Kirchner amenazó con volver a subir las retenciones y reprendió a las organizaciones que no suscribieron el acuerdo:

Les pedimos responsabilidad a todos los sectores, especialmente a los más fuertes de la economía, a aquellos que tienen mayor nivel de rentabilidad, que están exportando [...]. Fíjense que tienen un dólar competitivo y que están ganando bien. Sean solidarios con el resto del pueblo argentino [...]. Les pido, no de corazón porque sé que esos sectores muchas veces no tienen corazón y sé cómo se mueven, que no haya avaricia, que haya comprensión, queremos que les vaya bien, pero queremos que les vaya bien a todos los argentinos [...]. A algunos sectores del campo como la Sociedad Rural o CARBAP les va bien, exportan más que nunca, lograron salir del encierro de años, pero no hay que ser avaros (P/12, 25/01/06; LN, 26/01/06).

La disputa recrudecía: “el presidente no tiene materia gris”, aseveró en respuesta la vicepresidenta de CARBAP. Del lado de enfrente, el cariz populista que iba tomando el gobierno no hacía sino afirmarse, también en el ámbito discursivo: “la dirigencia ganadera que critica a Kirchner es la misma oligarquía vacuna que tiene las manos sucias de sangre”, afirmó Luis D’Elía, en ese entonces funcionario. Similares expresiones vertió Hugo Moyano, líder de la CGT: “la vieja SRA, que cobijó a la oligarquía vacuna y fue cómplice de todas las dictaduras militares [...], está coaccionando al Gobierno porque se niega a limitar su extraordinaria tasa de ganancia acordando un precio razonable de la carne” (CL, 27/01/06).

A pesar del acuerdo limitado, las retenciones, y el límite al peso de faena, el precio al consumidor de la carne subió otro 5% en el primer trimestre. El 8 de marzo, el gobierno recurrió entonces a la carta más fuerte que le quedaba: el cierre de las exportaciones durante 180 días, manteniendo excepciones como la cuota Hilton y convenios bilaterales. La SRA rechazó la medida en un comunicado, lamentando la pérdida de exportaciones por casi 600 millones de dólares, la posibilidad de perder mercados externos recientemente reconquistados, y la destrucción de la imagen del país como “productor y exportador previsible y confiable”. Como contrapropuesta, sugirió bajar los impuestos a la producción y comercio de carne, e insistió con la necesidad de dar forma a un plan ganadero de largo plazo (M06: 59-60).

Paralelamente, procuró coordinar una posición conjunta con el resto de los eslabones de la cadena de producción cárnica, igualmente afectados por el cierre, con el fin de consensuar una propuesta para acercarle al gobierno que incluyera la reapertura de las exportaciones. Dicho consenso, sin embargo, probó ser difícil de alcanzar, en la medida en que suponía que algún sector resignara parte de su ganancia. Así lo señalarían posteriormente desde la propia SRA:

No todos los miembros de la cadena de la carne pensaban igual. Las posiciones más enfrentadas eran las de los frigoríficos exportadores y los consumidores, que no querían pagar ellos solos el costo del acuerdo. La SRA, por su parte, peleaba porque el acuerdo final reflejara un precio de referencia razonable en el mercado de Liniers y que se permitiera continuar

faenando a los establecimientos sin planta propia [...]. Asimismo, propuso dotar al acuerdo de dos compromisos indeclinables: la suspensión del peso mínimo de faena, una de las causas más directas del aumento reciente de los precios de la carne, y la inclusión de un plan estratégico ganadero nacional, única solución de fondo para este problema (A: May06: 8-9).

Mientras tanto, también los socios de la entidad comenzaban a expresar su descontento. Durante la segunda quincena de marzo, socios y delegados se reunieron con miembros de la CD en Mar del Plata, Rosario y el 25 de mayo, publicando en cada oportunidad declaraciones de protesta y solicitando la reapertura del mercado externo (M06: 62-3). A esto se sumaban protestas organizadas por sociedades rurales de localidades de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes. Pero el gobierno condicionaba el reinicio de las negociaciones a una baja del 20% en el precio de la carne: "no habrá negociaciones hasta que bajen los precios", afirmó Kirchner el 31 de marzo, caracterizando al sector como la "patria ganadera" (P/12, 31/03/06).

Al día siguiente, una asamblea convocada por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes en la localidad de Mercedes tuvo la participación de miembros de la CD de la SRA y la CRA. A pesar de las propuestas de realizar acciones de protesta, como el corte de los puentes internacionales con Uruguay, la asamblea se limitó a emitir un nuevo documento de similar tenor a los anteriores. Confiado en la reanudación de las negociaciones, Miguens procuró de momento mantener la calma: "como productor entiendo los reclamos de mis colegas, pero como dirigente debo priorizar el diálogo para superar este conflicto [...] Llegado el momento, evaluaremos la posibilidad de tomar otras medidas para que nos escuchen" (LN, 01/04/06).

En abril, finalmente, se reiniciaron las negociaciones. Tras una semana de reuniones con funcionarios de gobierno, y particularmente con el Subsecretario de la SAGPYA, Javier de Urquiza (quien pronto ascendería a Secretario a raíz de la negativa a negociar con Campos por parte de distintas entidades, a quien veían como uno de los principales responsables del curso de la política agraria), el 6 de abril se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y las entidades agrarias, frigoríficos, carnicerías, supermercados y consignatarios. El convenio contemplaba rebajas de entre 17% y 41% en 11 cortes "populares", planteaba a los ganaderos el compromiso de abastecer el mercado de hacienda con no menos de 180.000 tn de carne al mes, y a los frigoríficos el de implementar, de forma progresiva, la comercialización interna de ganado por cuartos en lugar de la media res. El gobierno, por su parte, flexibilizaría el cierre de las exportaciones, suspendería el límite de faena, avanzaría en la delineación del plan ganadero, daría apoyo financiero mediante el Banco Nación e incentivaría la implantación de pasturas y fertilización. La SRA expresó su satisfacción ante el convenio: "entendemos que el acuerdo firmado era la alternativa más factible para

encontrar una salida al problema en el que nos encontrábamos inmersos” (M06: 65). La semana siguiente, el flamante Secretario de Coordinación Técnica, Guillermo Moreno, procuraría extender el acuerdo. Tras una serie de reuniones con las distintas entidades, el 20 de abril Javier de Urquiza y Guillermo Moreno, devenido Secretario de Comercio, anunciaron la ampliación: el acuerdo ahora incorporaría 12 cortes, y los precios de referencia para el Mercado de Liniers afectarían no sólo al novillo, sino a las restantes categorías de vacunos, que a diferencia del novillo seguían encareciéndose. Si los precios de Liniers superaran los de referencia, por otra parte, la diferencia iría a la conformación de un fideicomiso destinado a la financiación de proyectos productivos. Asimismo, Moreno insistió en que la reapertura de las exportaciones seguía supeditada a la baja de precios (LN, 20/04/06).

La CRA criticó inmediatamente el nuevo esquema, denunciándolo por “intervencionista”: “es más intervencionismo y significa la aplicación de precios máximos”. La SRA fue menos dura. Miguens señaló que no se trataba de la aplicación de precios máximos, y que aún con el nuevo sistema “existe la opción de que un productor venda una muy buena hacienda a mayor precio que el sugerido y, aunque se le retiene la diferencia en una cuenta personal, entendemos que podrá liquidarla al poco tiempo” (LN, 22/04/06).

El nuevo acuerdo tuvo como efecto inmediato una caída de los precios en el Mercado de Liniers de alrededor del 10% entre el 20 de abril y el 8 de mayo. Mientras los frigoríficos anunciaban el cierre temporario de algunas de sus plantas, y las dirigencias de las cuatro entidades manifestaban su apoyo a los primeros lineamientos del plan ganadero que mostraba el gobierno, ganaderos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires organizaban asambleas en las que comenzaba a discutirse la posibilidad de realización de un paro nacional (LN, 22 y 29/04/06).

En mayo, finalmente, el gobierno lograba parcialmente su objetivo: los precios de la carne habían acumulados una baja del 10% en las carnicerías durante los últimos tres meses. Sin embargo, la caída de los precios de la hacienda en Liniers promediaba ya el 30%. En este marco, y con la CRA presionada para realizar un paro por sus federaciones y sociedades rurales, que continuaban realizando asambleas y movilizaciones, Kirchner recibió el 26 de mayo a las entidades agrarias y les anunció la reapertura de las exportaciones por un valor máximo del 40% de lo exportado el año anterior. El 4 de julio el porcentaje se extendió al 65%, e incluyó a los cortes más caros. No fue suficiente: en el marco de fuertes disputas internas, la CRA acabó convocando al primer paro agrario contra el gobierno de Kirchner (CL, 14/07/06).

El paro se desarrolló entre el 22 y el 25 de julio, con movilizaciones y cortes de ruta en las provincias de la región pampeana y el Noreste del país. En Entre Ríos, la filial de la FAA se sumó a la protesta (LN, 24/07/06). La SRA resolvió no participar, objetando que

estaba teniendo lugar la Exposición Ganadera en Palermo. Sin embargo, aconsejó a sus socios que acataran el paro.

Aunque faltaba aún un último round, el conflicto de la carne, que durante más de un año y medio había mantenido en vilo a los distintos actores de la producción cárnica, comenzaba a cerrarse. La dirigencia de la SRA había actuado según su libreto: mantener la calma ante las reiteradas acusaciones, amenazas y medidas del gobierno, y procurar influir en la política mediante la presentación de su propio proyecto. Pero había logrado bastante poco. El plan que diseñaba el gobierno apuntaba a beneficiar a ganaderos que poseyeran no más de 1000 cabezas, cosa con la que, naturalmente, no estaban de acuerdo (A-Jun06: 10-2). El conflicto se había saldado además con una marcada redistribución de las ganancias en el interior de la cadena cárnica, que perjudicaba principalmente a los ganaderos (Azcu y Ameghino, 2007, pág. 290).

En la exposición de Palermo, Miguens buscó destacar estos aspectos: “como dirigentes preferimos la madurez del consenso a la esterilidad del enfrentamiento”. Pero al mismo tiempo, señaló que:

Lo único que bajó [...] fue el precio de la hacienda en una proporción que jamás llegó al mostrador. Se perdieron mil millones de pesos por la caída simultánea de las exportaciones y el precio del ganado en pie. El más perjudicado fue el productor. El más beneficiado no fue el consumidor. Si bajó la carne, hasta más del 30% al productor y sólo el 5% en las carnicerías ¿quién fue el ganador? (A-May06: 19).

La respuesta la daría el propio vicepresidente de la SRA, Hugo Biolcati:

Son 240 millones de dólares nuestros con los que se quedaron los industriales, los matarifes, los supermercados y los carniceros [...]. El sistema de contención de los precios de la carne [...] si es que tuvo algún efecto, fue bancado por nosotros, los ganaderos. Fuimos nosotros, los productores, los que pusimos el hombre mientras otros se llenaban de plata a costa de nuestro esfuerzo. Y después nos dicen que no tenemos solidaridad, que somos avaros (A-Sep06: 138-9).

Otras declaraciones evidenciaban el contraste con la actitud más calma de Miguens. En agosto, y en el marco de un debate público acerca de la extranjerización de la propiedad de la tierra, D'Elía había ingresado a un campo perteneciente a un capitalista estadounidense y cortado un alambrado de forma simbólica, en protesta por el avasallamiento de la tenencia de tierras de miembros de pueblos originarios. Para Biolcati, había sido demasiado:

Cuando creíamos que habíamos tocado fondo en cuanto a la desatención e ignorancia del sector oficial respecto del campo, nos sorprendieron con una medida sin parangón en el

mundo: el cierre de la exportación de nuestro producto más emblemático y de mayor calidad. Luego de meses de intensas negociaciones, con mucho esfuerzo logramos revertir parcialmente la situación y una reapertura incompleta de las exportaciones. Pero el daño ya estaba hecho: la actividad ganadera quedó hecha jirones.

Como si esto fuera poco, [...], como si ya no hubieran sido suficientemente burlados, aparece un personaje, el subsecretario D'Elía, y viola el derecho de propiedad en un campo correntino [...]. Pareciera que acá cualquiera puede hacer y decir lo que quiera, en total impunidad, sin represalias, sin costo político.

Recuerden lo que decían de los ganaderos: que éramos avaros, que éramos oligarcas. A nosotros nadie nos regaló nada. Todo lo que tenemos lo conseguimos rompiéndonos el lomo trabajando, no con prebendas ni en pago de favores políticos. Nos acusaron de especular con el hambre del pueblo y hasta de digitar a nuestro arbitrio la oferta de los mercados, ignorando el aporte sustancial que los ganaderos hicimos y hacemos para sacar este país adelante. ¿Quiénes creen que se pusieron el país al hombro para sacarlo de la situación en que se encontraba? (A-Sep06: 138-9).

A pesar de que la SRA había evitado, hasta aquí, la participación en acciones de protesta, resultaba claro que ya no albergaban simpatía alguna hacia un gobierno que iba consolidando su perfil populista. Abordado durante la exposición de Palermo, Biolcati había afirmado que “[si bien] hemos estado permanentemente al lado del productor y de CRA en esta lucha por combatir medidas tan equivocadas [...] por más que lo compartimos, no es un paro nuestro”, ya que “en la SRA no somos afectos a los paros” (LN, 24/06/06). Como se verá, tampoco serían reacios.

9.3. La SRA ante la consolidación del populismo

La temporaria resolución de la crisis había llevado algo de calma a la SRA. Miguens había evaluado el plan como “positivo”, aunque, por supuesto, mejorable: “es un principio, hay cosas para mejorar, puede tener correcciones” (IC, 25/06/06), y deploraría pocos días después las “decisiones equivocadas” tomadas por el gobierno en la materia, y que tuvieron como resultado principal una caída en el precio de la hacienda que no se trasladó a los consumidores finales (M07: 68-9). Mucho más importante que el plan en sí (y que, de cualquier modo, no llegaría a ponerse en marcha sino hasta el año siguiente), sin embargo, era la perspectiva de reapertura del comercio exterior de carnes, que lentamente comenzaba a normalizarse.

A pesar de la momentánea calma, la relación de las entidades con el gobierno había alcanzado un punto de quiebre. Durante el desarrollo del conflicto, el populismo se había profundizado como forma política general de la acumulación de capital. Para las

organizaciones agrarias, esto significaba la consolidación del avance de la apropiación de renta mediante políticas inmediatamente visibles, como las retenciones (con un tipo de cambio ya oscilando en torno a la paridad), la fijación de precios y el cierre de exportaciones.

La CRA había marchado al paro presionada por sus confederaciones, especialmente por CARBAP. Por su parte, la FAA estaba endureciendo su posición. Si bien su conducción había apoyado los distintos intentos del gobierno por detener la suba de precios, delegaciones de distintas provincias comenzaban a realizar asambleas para discutir acciones de protesta (Pérez Trento, 2014). En este contexto, poco tardaría también la SRA en pasar a la ofensiva, que se perfilaba dura: los presidentes de CRA y CONINAGRO habían visitado la exposición ganadera y accedido a fotografiarse con su par de la SRA, en lo que la entidad consideró una muestra de la “unión del campo” (A-Dic06: 4).

Mientras tanto, la intervención en los mercados de granos desataría un nuevo episodio. Meses antes del cierre del conflicto, con los precios tanto de la carne como del trigo y maíz nuevamente en alza, el gobierno había modificado el precio FOB del trigo, lo que implicaba un mayor valor en las retenciones cobradas sobre su exportación, al mismo tiempo que presionaba además por la baja de su precio interno. Posteriormente, intervendría también el mercado de maíz, disponiendo la fijación de precios internos y el cierre de las exportaciones. Finalmente, el conflicto por la carne tuvo un último coletazo, con la fijación de nuevos precios de referencia en el mercado de Liniers y un intento por recortar las exportaciones a 45.000 tn.

Esta sucesión de medidas no hizo sino seguir irritando a la dirigencia de la CRA, que demoró poco para convocar a un nuevo paro, esta vez de 9 días de duración, al que adhirió inmediatamente la FAA. CONINAGRO, por su parte, dejó en libertad de acción a sus afiliados (LN, 29 y 30/11 y 1/12/06).

La SRA se plegaría esta vez al paro, denunciando en un comunicado las “medidas erráticas a las que asistimos desde hace más de un año”, las cuales “destruyen los mercados, las fuentes de trabajo y paralizan las decisiones de inversión”. Era la inevitable respuesta ante el regreso de un gobierno que no dudaba en accionar sobre los mercados agrarios (dando así forma a la apropiación de renta de la tierra por parte de capitalistas industriales), y que comenzaba a encontrar en los capitalistas y terratenientes agrarios un enemigo que encajaba perfectamente en su discurso: la “oligarquía ganadera”, y por extensión, también la agrícola, responsables de la suba de los bienes principales que conformaban la canasta básica:

El arbitrario manoseo de estos mercados, sumado a la falta de reglas de juego claras y permanentes, generan gran inseguridad jurídica en el sector, quitándole previsibilidad para seguir contribuyendo al desarrollo del país.

A esta situación se agrega la falta de reconocimiento y el destrato continuo al que son sometidos los productores agropecuarios (M07: 63).

La participación de la SRA iba a dar forma al paro más fuerte que enfrentaría el gobierno de Kirchner desde su asunción. Y marcaría, como la propia entidad lo reconocería, un punto de inflexión:

Si bien nunca llegó a implementarse, porque en el medio ocurrió el paro, esta última medida [el límite a la exportación de carne, NPT] significaba [...] un cambio drástico de tendencia: hasta entonces se hablaba de ir hacia una mayor apertura y de repente se proponía un retroceso. Todas estas idas y vueltas [...], intervenciones y regulaciones resultaron inaceptables para el sector [...]. Por eso decidimos convocar también a la medida decidida por CRA y FAA, como una manera de expresar ese reclamo y un llamado de atención sobre la necesidad de sentarse a negociar reglas de juego claras y duraderas [...]. Así, la SRA, que nunca fue afectada a las medidas de fuerza, decidió acompañar este paro, luego de 7 años desde que lideráramos, durante el gobierno menemista, una medida de fuerza similar (M07: 77).¹⁰⁵

La convocatoria al paro por parte de las tres entidades le dio una alta carga simbólica. Además, la SRA y la CRA habían conseguido el apoyo de la CAI, que en medio del paro emitió un comunicado rechazando la política del gobierno (M07: 64). La FAA fue una de las organizaciones más activas, sobre todo en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (LN, 04-11/12/06). También los delegados de todo el país de la SRA se reunieron durante el paro y emitieron un nuevo comunicado protestando por la “manipulación” de los distintos mercados, sobre todo los de carne y granos, que “provoca la transferencia de recursos desde el sector primario a otros eslabones de la cadena de valor, sin beneficiar en nada al consumidor” (M07: 64-5).

Es que también el mercado de trigo, como fue señalado, había sido intervenido. Al amparo de la suba del precio del pan, Moreno había presionado a los exportadores del cereal para que ofrezcan un menor precio interno a los vendedores, lo que había paralizado al mercado durante semanas (LN, 30/12/06). Las cuatro entidades agrarias habían propuesto, en este contexto, la creación de un fondo destinado a subsidiar el trigo comprado por los molinos que vendían harina en el mercado interno, lo que volvía innecesario, desde su óptica, el aumento de las retenciones (M07: 66).

¹⁰⁵ Aunque es cierto que no lo habían liderado, la SRA había participado del paro convocado por la CAI en el año 2003, en protesta por la política seguida por el gobierno Duhaldistista respecto del agro.

Sin embargo, en enero del 2007, y ante el inicio de la nueva fase de alza de precios que no se detendría hasta ya iniciado el conflicto del 2008, el gobierno volvió a aumentar las retenciones a la soja en cuatro puntos, afirmando que la recaudación se utilizaría en el sentido propuesto por las entidades. Éstas, por su parte, rechazaron la medida y se congregaron para analizar la posibilidad de realizar un nuevo paro, fogoneado por FAA y las confederaciones de CRA. Comenzaban, mientras tanto, a despuntar los intentos de avanzar hacia protestas de mayor alcance: “tenemos que desabastecer las ciudades, así el Gobierno se da cuenta de que el campo existe”, señaló Manuel Cabanellas, ex presidente de la CRA y ahora titular de CARSFE, quien buscaba realizar un paro de no menos de 21 días (P/12, 17/01/07).

De momento, sin embargo, ni CONINAGRO ni la SRA apoyaron la propuesta. Esta última entidad ponderó las negociaciones con el gobierno:

Hemos rechazado esa medida porque creemos que no es necesario ejercer una nueva presión sobre la economía del productor frente al incremento de los ingresos del Estado provenientes de nuestro sector. Pero esta vez, el destino de esos fondos adicionales no son las arcas fiscales. Se dio un paso en el sentido correcto. Nuestro dinero irá a abaratar el precio de los bienes que nosotros producimos, los alimentos que consume nuestra población (M07: 68).

La implementación del subsidio, sin embargo, no satisfizo a la SRA, que denunció que serían los molinos quienes acabarían recibéndolo, al pagar a los vendedores el precio máximo fijado por el gobierno (M07: 69). En efecto, el subsidio se destinó no sólo a la industria molinera, sino a la generalidad de las industrias que producían alimentos utilizando granos como materia prima: avícolas, aceiteras, engordadores de ganado vacuno, criadores de cerdos y tamberos, de quienes se esperaba que trasladen el ahorro al precio final. En una nota de Anales, la SRA protestó por la “distorsión” que ello implicaba, la posibilidad de perder mercados internacionales, y el destino final que tendrían esos fondos en un año electoral (A-Mar07: 16-20). La CRA, por su parte, denunció también que el mecanismo le parecía “poco transparente”. En la vereda de enfrente, los capitalistas avícolas y engordadores de hacienda vacuna apoyaron la medida, declarando que contribuiría a bajar los precios de sus mercancías (LN, 12/01/07). El conflicto involucraba así a distintos actores de la CAI, dificultando su accionar.

Las cuatro entidades, mientras tanto, seguían procurando mantener un frente común. Si bien no lograron coincidir en la convocatoria a un paro, el 31 de enero emitieron un documento en el que reiteraban su “firme voluntad de trabajar en conjunto con las autoridades nacionales”, aunque advertían: “entendemos el malestar de muchos productores y es por ello que el accionar gremial de nuestras entidades seguirá encaminado a dar fiel cumplimiento al mandato de sus representados” (M07: 74).

Pero si la SRA comenzaba a avanzar en la formación de un bloque con las restantes organizaciones, la CAI había brillado por su ausencia durante estos últimos conflictos. En la cuarta jornada del grupo, a finales del 2007, la SRA reconocería este déficit, afirmando que a pesar del “fuerte poder económico y político” que la cadena ostentaría en virtud del porcentaje de la producción nacional y de las exportaciones que representaba, ello no se reflejaba en la práctica:

Esto que parece tan lógico y deseable no siempre se ha podido cumplir en la práctica. El ejemplo más cercano y reciente surge del intrincado sistema de compensaciones, cuyo esquema de subsidios cruzados entre distintas cadenas productivas o eslabones de esas cadenas generó intereses contrapuestos y hasta conflictos entre algunos de los integrantes de este foro.

Tampoco es conveniente ir al extremo opuesto de pretender consensos absolutos sobre cada uno de los temas que guardan relación con la cadena, al punto de lograr una parálisis del organismo. El abordaje de los temas debe moverse, por lo tanto, en un punto medio, que demande cierto consenso pero no pretenda coincidencias totales donde es imposible que ellas existan (M08: 51).

A pesar de que el comienzo del 2007 presagiaba nuevos enfrentamientos, sobrevino una momentánea calma. Apenas la contracción en la oferta de energía, y particularmente de gasoil, apareció como un nuevo problema en la órbita de la SRA, que la atribuyó a “falta de previsión y de visiones de largo plazo” (A-Jul07: 4). Pero la entidad ponderó el restablecimiento del diálogo con el gobierno, logrado a partir de febrero con la salida de Campos de la SAGPYA y su reemplazo por su segundo al mando, Javier de Urquiza. Ganadero y terrateniente en Santa Cruz, y con un pasado de delegado de la CRA en esa provincia, su nombramiento fue leído como una señal hacia el sector. Aunque el presidente de CARBAP no demoró en calificarlo como “traidor” (LN, 12/01/07), lo cierto es que su llegada logró contener, temporalmente, la tensión que se imponía en las filas de las organizaciones agrarias. Una entrevista publicada en la edición de julio de Anales señalaba precisamente que su llegada a la SAGPYA había significado la recuperación del diálogo con funcionarios del gobierno (A-Jul07: 58-62). La salida del MECON de Felisa Miceli, una de las principales voces cantantes de los acuerdos de precios que tanto habían perturbado a la entidad, contribuyó a este proceso. Acusada de corrupción tras el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho, se vio obligada a renunciar en julio, cediéndole su puesto a Miguel Peirano, un economista de buenos vínculos con la UIA. Ante su arribo, y procurando dar señales de distensión, Miguens afirmó que se trataba de un economista que “conoce profundamente la actividad, ha mantenido un bajo perfil sobre su actuación, ha participado de la actividad industrial” (CL, 17/07/07).

Paralelamente, la SRA avanzaría en su búsqueda por resolver a largo plazo el problema de la oferta de carne. Su propuesta consistía, además de la implementación del consabido plan ganadero, en una mayor selectividad en la política de abaratamiento de los cortes de carne acompañada por modificaciones en la tradicional dieta argentina:

Desde el punto de vista de los consumidores, la carne es un artículo de primera necesidad. ¿Pero cuál carne es de primera necesidad? Sobre la carne para el guiso o el puchero, no hay ninguna duda; también podemos incluir en esta categoría, en virtud de las tradiciones locales, el asado del domingo. Pero el lomo, el cuadril o el peceto, ¿son también artículos de primera necesidad? (...) Los consumidores tenemos que adaptarnos a la idea de que puede haber una carne barata para mantener nuestra tradición histórica de consumo, y otra carne cara que compita con las exportaciones y que tendrá precios similares a los de exportación [...]. También existen otras estrategias, que no les caen bien a algunos participantes en el negocio [...]. Una de ellas es la sustitución de carne vacuna, de mayor valor unitario, por la de pollo o cerdo (A-May07: 33).¹⁰⁶

Aparece como indispensable la puesta en marcha de una fuerte campaña educativa interna para diversificar el consumo de carnes por parte de la población local, a fin de reducir la “vacuno-dependencia” y mejorar los hábitos alimentarios con la incorporación de aves, cerdos, pescados y mariscos a la dieta nacional (A-Dic07: 9)

El gobierno recogió el guante, pero no como a la SRA le hubiera gustado, ya que propuso utilizar los fondos del IPCVA para financiar la campaña. La entidad, por supuesto, rechazó la propuesta, argumentando la incompatibilidad con los objetivos del instituto (M08: 53).

Poco tiempo después, la exposición ganadera fue el escenario de un nuevo entredicho, en pleno clima electoral. Allí asistió De Urquiza, quien sin embargo no pronunció su discurso y se retiró tras el de Miguens. Pretendiendo no entender los motivos del desaire, así se refería al episodio la SRA en su editorial de octubre:

En rigor, el discurso no era más duro que el de otros años, ni de lo que se venía sosteniendo tanto en forma pública como privada. Si bien señalaba las asignaturas pendientes en materia económica, como el aumento de la inflación, el crecimiento del gasto público y la falta de incentivo para la inversión privada, también destacaba algunos logros del país, como el crecimiento del PBI en los últimos años (A-Oct: 6).

Ciertamente, el discurso no había sido mucho más duro, y ello a pesar de que Miguens reclamaría, una vez más, la eliminación total de las retenciones. Pero desde el

¹⁰⁶ No deja de ser llamativa, en esta nota, la estrategia de una identificación con los “consumidores” por parte de quienes, y esto considerando exclusivamente su pertenencia a la clase capitalista, son en realidad los organizadores de la producción.

gobierno esperaban algún tipo de distensión, tanto más cuanto que en los días previos la SRA y las restantes entidades venían acercando posiciones con el gobierno respecto del conflicto, con la mediación del flamante Ministro de Economía. En lugar de ello, Miguens había no sólo formulado una crítica abierta, sino también hecho una referencia explícita a las elecciones venideras, rodeado además por candidatos de la oposición como Macri, López Murphy y de Narváez (LN, 05/08/07) :

El voto es una inversión que hacemos cada vez que vamos a las urnas. El productor agropecuario, cuando decide sembrar un cultivo, retener un ternero o preñar una vaca, debe atenerse a las consecuencias de su decisión. De la misma manera, cuando elige tal o cual propuesta, deberá vivir con las consecuencias de esa elección.

Utilizar nuestro derecho cívico con responsabilidad será una eficaz contribución para conducir a la Argentina a los niveles de bienestar que nos merecemos [...]. Debemos devolvernos el respeto mutuo para, en consenso y en disenso, progresar juntos. Las autonomías provinciales deben ejercerse con plenitud. La coparticipación federal debe ser para las provincias una justa retribución por su identidad, no una dádiva del poder central utilizada políticamente. La Patria fue y será Federal (A-Ago07).

Lo cierto es que a Miguens le hubiera sido difícil proceder de otra forma, principalmente porque los socios de la entidad, y los ganaderos en general, se hallaban particularmente ofuscados debido al prolongado conflicto por la carne, como señaló uno de los líderes de la oposición interna (P/12, 12/08/07). En este sentido, y a pesar de que Miguens afirmara en su discurso que “la SRA, cuando critica, no hace oposición”, el contenido del discurso parecía desmentirlo.

El vínculo entre la asociación y el gobierno no lograría ya recomponerse. Meses más tarde, éste declinó la invitación de la SRA a que los candidatos a presidente para las elecciones del 2007 expusieran su programa agropecuario en la sede de Florida (M08: 51). No sería más que un preanuncio.

Fortalecido por el triunfo electoral que catapultaría a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia con un 46% de los votos (el doble de los que obtuvo Elisa Carrió, relegada al segundo lugar), y en el marco de un ascenso imparable del precio de los granos, el gobierno volvió a anunciar una suba de entre 5 y 8 puntos para el trigo, el maíz y la soja. Como cabía esperarse, las cuatro entidades repudiaron inmediatamente la medida (LN, 7 y 8/11/07). Sin embargo, a días del recambio gubernamental, ninguna de ellas decidió realizar acciones de protesta. Se trataba, por una parte, de un gobierno en retirada, ante el cual tenía ya poco sentido enfrentarse, como afirmaría Miguens. Por otra parte, el alza del impuesto se ubicaba notablemente por debajo del aumento en los precios de los granos, que ya había iniciado su veloz curva ascendente: entre julio y diciembre, el precio de la soja

había crecido un 40%, el del trigo un 67%, y el del maíz un 11%. Solamente CF, una de las corrientes internas de la FAA que lideraba la oposición al gobierno kirchnerista, realizó un corte de ruta en el sur de Santa Fe, epicentro de su zona de influencia (Pérez Trento, 2014). Las conducciones oficiales de las cuatro entidades, por su parte, se limitaron a emitir un nuevo comunicado rechazando el incremento por “unilateral” e “injustificado”. La SRA también protestó porque “en lugar de resolver el problema de fondo, que es la necesidad de aumentar la oferta, desincentiva la producción”. Al respecto, Miguens señaló que “sabíamos que tendrían que equilibrar el gasto público y político de este año y que, una vez más, el campo sería el pato de la boda”. Sin embargo, añadió que “esta es una medida impuesta por un gobierno que se va. Buscaremos reinstaurar el diálogo con el que llega” (M08: 56). No sería posible.

Al mes siguiente, Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia, nombrando como Ministro de Economía a Martín Lousteau. Tras otros tres meses en que el precio de los granos siguió aumentando velozmente, el joven economista creyó encontrar entonces la solución definitiva: un esquema de retenciones móviles que acompañara los movimientos de precios. La resolución 125 estaba destinada a ser el zarpazo definitivo del gobierno sobre la renta de la tierra agrícola, ya que estipulaba un esquema de valores móviles para las retenciones a la exportación de mercancías agrarias. Conforme variaran los precios, el impuesto se movería, pudiendo alcanzar un máximo del 50%. Con los precios de aquel momento, el trigo y el maíz, cuyo nivel de retenciones se hallaba en ese momento en un 28% y 25% respectivamente, pasaban a tributar un punto menos, mientras que la soja y el girasol hubieran alcanzado el 44,1% y 39,1% respectivamente, lo que implicaba un alza de 9,1 puntos para la soja, que se hallaba en el 35%, y 7,1% para el girasol, que alcanzaba el 32%.

Fue el acabose. Los titulares de las cuatro entidades, que en el momento del anuncio se hallaban en el Congreso de la Nación discutiendo políticas agrarias con diputados de la oposición, reaccionaron inmediatamente. A menos de 24 horas del anuncio dispusieron un paro comercial de dos días y volvieron a conformar de hecho la Mesa de Enlace. El paro agrario más largo de toda la historia, y probablemente uno de los más trascendentes, se ponía así en marcha.

9.4. “El piquete está de moda”. La SRA en el conflicto del 2008¹⁰⁷

Al día siguiente, las cuatro entidades emitieron un primer comunicado, titulado “el campo dice basta”, en la que para las siguientes 48 horas convocaron “a los productores

¹⁰⁷ Una pormenorizada cronología del conflicto puede encontrarse en los trabajos de Barsky y Dávila (2008, págs. 235-327) y de Comelli, Castro García, Godfrid, Schvartz, Ciccolella y Negro (2011). Por su parte, Giarracca, Teubal y Palmisano (2008) presentan una crónica en la que secuencian el conflicto en etapas.

argentinos a que no comercialicen productos del campo como consecuencia de una nueva confiscación por parte del gobierno”, se declaraban en estado de “asamblea permanente”, y anunciaban nuevas reuniones para decidir el curso a seguir. “Esto se va a poner pesado”, vaticinó Llambías, presidente de la CRA. Miguens, por su parte, reclamó públicamente una reunión con funcionarios del gobierno (LN, 11-12/03/08). Ante la intransigencia de éste, que no hacía sino escalar el conflicto con declaraciones que acusaban a los protestantes de ser “extorsionadores” o “anti-pueblo”, las organizaciones instaron a seguir el paro. La SRA se vio forzada a rever sus posiciones: ya no sólo se trataba de una medida de fuerza como el paro, que revestía además particular intensidad, sino de cortes de ruta que rápidamente comenzaban a multiplicarse. Interrogado en una entrevista radial, Miguens sólo atinó a decir al respecto que “el piquete está de moda. Es la medida que más duele” (P/12, 21/03/08).

El desabastecimiento generado en las zonas urbanas, sin embargo, comenzó a inquietar a los líderes de la protesta, que exhortaron a los manifestantes el día 25 a no interrumpir dicho suministro: “la producción y entrega de leche y otros productos altamente perecederos no deberá verse afectada por la medida de protesta”. No menos inquietante resultaba el momento en que se había desencadenado el conflicto: se trataba de la época de la cosecha gruesa. La Mesa de Enlace aclaró en este sentido que: “el paro es comercial, por lo tanto la recolección de la cosecha en condiciones normales para su almacenaje debe realizarse, asumiendo luego la firmeza suficiente para defender la producción” (M08: 63).

La protesta, mientras tanto, dividía las aguas que alimentaban el caudaloso canal de la agroindustria. Mientras que el FCA sería incapaz de emitir un pronunciamiento, atravesado por tensiones internas, Buzzi denunciaría a Roberto Urquía, senador del PJ y titular de la Aceitera General Deheza, considerado uno de los responsables intelectuales de la resolución 125, así como a “multinacionales [...] grupos exportadores [...] y un puñado de grandes industrias”. Por elevación, CIARA y CEC, nucleadas en el FCA:

Este gobierno está concentrando la riqueza en muy pocas manos, las compensaciones (subsídios a los alimentos) son para los mismos ganadores de siempre: las multinacionales, los grupos exportadores y un puñado de grandes industrias. La Aceitera General Deheza, del senador nacional Roberto Urquía, es un ejemplo de esta situación. Es decir, cuando pisan el precio de nuestros productos, cuando nos amenazan para terminar con nuestras protestas, lo que están haciendo es defender esta política, y por eso este paro va a seguir adelante con más firmeza que nunca (LN, 25/03/08).

La posición de CIARA, en realidad, había sido ambigua. Por una parte, se había sumado al coro de protestas por las retenciones por su “distorsión de la agroindustria”, y había posteriormente emitido un comunicado afirmando que las retenciones “atentan contra la competitividad del sector, limitando las expansiones de la producción, y se convierten en

un factor central de erosión de los ingresos de los productores y de desaliento a la producción”, declaraciones sobre las que insistiría posteriormente (LN, 15/03/08; CL, 22/03/08). Por otra parte, sin embargo, jamás adheriría formalmente al paro.

Otros miembros del FCA, en cambio, sí habían respaldado el paro a título individual, como la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. También habían expresado su apoyo MAIZAR, ASAGIR, AACREA y AAPRESID (LN, 14 y 25/03/08).

La protesta recién despuntaba, y ninguno de los contendientes daba muestras de ceder. A pesar de buscar posicionar a la SRA como más predispuesta a la negociación en relación a otras entidades, Miguens no pudo evitar tener que volver a justificar la metodología de los cortes de ruta, y el día 25 afirmó que:

Seguro a la mayoría de la gente no le gusta que se corte la ruta, habrá quienes lo entenderán y quienes no. Sin embargo, el dato objetivo es que los cortes muestran la impotencia de la gente del campo, que siente que es la última oportunidad que le queda para pelear por su fuente de trabajo (LN, 25/03/08).

Por su parte, el gobierno prosiguió la escalada. El 25 de marzo, Cristina Kirchner acusó a los activistas de instalar “piquetes de la abundancia”. No obstante, tras un discurso conciliador pronunciado por la presidenta el 27 de marzo, y el llamado a negociaciones con las entidades, el conflicto entró en un primer impasse. Atrás quedaban más de dos semanas de cortes de ruta, una escasez de alimentos que comenzaba a hacerse sentir en los precios, manifestaciones en contra del gobierno, e intentos de ganar el control de la calle que acabaron en episodios de violencia, como el que protagonizó Luis D’Elía en Plaza de Mayo.¹⁰⁸ Otras manifestaciones singulares del conflicto radicaban en la acción de individuos que no respondían directamente a ninguna de las organizaciones de la Mesa de Enlace, y fueron denominados por la prensa “autoconvocados”. Cabe destacar, sin embargo, que uno de sus referentes principales en la provincia de Entre Ríos, uno de los focos de este fenómeno, era Alfredo de Ángeli, líder distrital de la FAA.

Con el paro aún en marcha, comenzaban las conversaciones para iniciar las negociaciones. El llamado a negociar fue recibido de distinta forma por los dirigentes de las entidades. Una de las que se mostraba más dura era la FAA, cuyo presidente afirmó:

Hay un cambio de tono y de actitud, pero no hay una definición. Cuesta traducir a medidas concretas los enunciados de la Presidenta. [...]. Hasta tanto se produzca esa traducción, el paro es el que es porque la gente no recibió las respuestas que esperaba, y que era la vuelta atrás con las retenciones (LN, 28/03/08).

¹⁰⁸ Por delante quedaba, en cambio, la urgencia por dar término al proceso de producción granaria: si bien buena parte de la cosecha ya se había realizado, el costo del almacenamiento había frenado parte de esa labor. Por otra parte, tras el levantamiento del paro, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la trilla de soja no había llegado aún al 5%. Restaba, asimismo, transportar la producción (P/12, 04/04/2008).

La SRA, por su parte, y a pesar de los reiterados embates del gobierno que hacían especial foco en ella, mostró mayor disposición. El día 28, Biolcati, mucho menos contemporizador que Miguens, fue el primer dirigente en destacar la importancia de iniciar un diálogo. Al día siguiente, también éste buscó poner paños fríos, mostrando voluntad para discutir propuestas: “no pretendemos que acepte dar marcha atrás, sino que acepte analizarlas, discutir las, y demostrarnos cuáles son las ventajas y necesidades de esa medida, y permitírnos ofrecer medidas superadoras” (LN, 29/03/08).

Tras una serie de idas y vueltas en torno a una nueva propuesta oficial, que incluyó anuncios de reintegros para alrededor de 60.000 pequeños capitalistas agrarios, y que fueron rechazados por “imprecisos” por las cuatro entidades, el paro se levantó unos días más tarde y los cuatro dirigentes fueron recibidos por funcionarios del gobierno. Luego de una semana de negociaciones, se logró avanzar en la reapertura de la exportación de otra categoría de vacas que no se consume internamente. Sin embargo, en cuanto al eje del conflicto, esto es, las retenciones a la exportación de granos, no lograban producirse avances. La presencia de Moreno como uno de los negociadores del gobierno no colaboró a mejorar el clima de las reuniones. A pesar de la salida de Lousteau del MECON (a la cual contribuyó el propio Moreno) y de su reemplazo por Carlos Fernández, las negociaciones permanecían estancadas y la ruptura de la tregua parecía inminente. En particular, de Ángeli seguía mostrándose como líder de una de las alas más duras de la protesta: “Hace cuatro años y medio que le estamos golpeando la puerta a los Kirchner y no nos daban bola. ¿Ahora les vamos a aceptar una? No, ahora queremos las diez. Vamos por todo”, había exclamado el 18 de abril (P/12, 19/04/08). Días más tarde, había afirmado que en Entre Ríos “estábamos preparados para resistir [...], había escopetas, carabinas, de todo” (P/12, 22/04/08).

Al término del mes de tregua, las negociaciones no habían avanzado en lo más mínimo. En este contexto, y con los piquetes reinstalándose en las rutas, el 6 de mayo se produjo un violento intercambio verbal entre Buzzi y Alberto Fernández que acaba rompiendo definitivamente la paz, y la Mesa de Enlace anuncia nuevas medidas de protesta. En el ínterin, Miguens dejó ver la estrategia que seguiría la Mesa de Enlace: “vamos a federalizar la protesta hablando con intendentes y gobernadores porque las provincias son las más perjudicadas por la entrega de la riqueza al poder central” (LN, 10/05/08). Y, en efecto, la semana siguiente las entidades comenzaron a reunirse con gobernadores y partidos políticos de la oposición, buscando sumar apoyos a la protesta e incluso consensuar un proyecto alternativo (LN y P/12, 12/05/08).

En esa misma semana, sin embargo, Cristina Kirchner convocó a reanudar las negociaciones. Las acciones de protesta se detuvieron nuevamente el 20 de mayo, mientras

sus organizadores dan forma a un acto del “campo” para el día 25. Sin embargo, las negociaciones volvieron a fracasar.

El 25 de mayo se realizaron dos actos. Organizado por la Mesa de enlace, al acto de Rosario concurrieron entre 170.000 y 300.000 personas. Destacó allí la participación de políticos de la oposición: si bien no formaron parte de los oradores, su presencia denotó el grado creciente de politización que iba adquiriendo el conflicto. Al respecto, la SRA afirmó:

En las tribunas, la imagen era menos uniforme. La “oligarquía golpista” tan mencionada por los discursos oficiales contó entre sus filas a dirigentes rurales como Horacio Gutierrez [...], líderes piqueteros como Raúl Castells, políticos del PRO y del MST-Nueva Izquierda, clanes de productores como los Gómez Álzaga y miles de familias que se plegaron a un pedido de un país más federal (A-Jun08: 17).

Quien sí habló ante la multitud fue Alfredo de Ángeli, que sostuvo una de las posiciones más duras: “si no hay solución, empieza de nuevo el paro y les aviso que si volvemos a cortar rutas es por culpa del gobierno”. Miguens, por su parte, presentado como “uno de los líderes más moderados dentro de la protesta”, mantuvo efectivamente una posición más conciliadora: “ratificamos nuestra voluntad para el diálogo a pesar de los obstáculos y mentiras que tuvimos que soportar en estos últimos meses [...] los del campo queremos que al gobierno le vaya bien porque si le va bien, nos irá bien a todos” (A-Jun08: 21-2).

Paralelamente, el gobierno organizó su propio acto en Salta, al que asistió aproximadamente la mitad de personas. Allí, además de la presidenta, tomó la palabra Urtubey, gobernador de la provincia: también el gobierno comenzaba a buscar solidificar los apoyos locales.

Tras los actos, el gobierno endurecería su posición, al suspender una reunión con las entidades y reiterar declaraciones provocativas, al tiempo que el PJ emitió un documento en el que atacaba duramente a la Mesa de Enlace. Ésta, por su parte, ratificó la continuidad del cese en la comercialización de granos, incluyendo la interrupción del envío de hacienda a Liniers.

El 29 de mayo el gobierno anunció una modificación del esquema, que fue rechazada por “unilateral” y por ser “más de lo mismo” (LN, 29/05/08). Mientras tanto, se reiniciaban las hostilidades. Al día siguiente, la prefectura arrestaría a manifestantes en San Pedro por cortar la ruta y anunciaría días después su intención de impedir los cortes mediante el uso de la fuerza pública. El propio de Ángeli acabaría siendo detenido por unas horas.

La primera semana de junio, la Mesa de Enlace decidió no extender el paro. A esto contribuyeron tanto los cortes de ruta totales realizados por entidades de camioneros y que

amenazaban con derivar en enfrentamientos violentos, las reuniones con el Defensor del Pueblo y miembros de la Iglesia que insistieron en retomar las negociaciones, cuestión sobre la que insistieron también la UIA y la CAC (LN, 07/06/08). Pero los dirigentes de las asociaciones comenzaban a ver menguada su capacidad de controlar a los líderes locales de las protestas: la asamblea de Entre Ríos, en la que de Ángeli tenía un papel protagónico, decidió profundizar las medidas de protesta desoyendo las indicaciones de la Mesa de Enlace.

El conflicto seguía estando lejos de resolverse. En la primera semana de junio comenzaron a llegar granos a los puertos, tras el levantamiento de algunos cortes. En algunas ciudades, por otra parte, y con epicentro en Buenos Aires, el 16 de junio se realizó un cacerolazo en repudio a la política desarrollada por el gobierno en el conflicto. Al día siguiente, Cristina Kirchner anunció el envío del proyecto de ley al Congreso, que se convertía así en el nuevo escenario de batalla.

El día 20 los cortes fueron completamente levantados, mientras comenzaban los intentos por parte de representantes de las entidades y funcionarios del gobierno de ganar el voto de diputados y senadores. Si bien el proyecto fue aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados (con una modificación que introducía un sistema de compensaciones a los capitalistas de menor escala), dos semanas después la Cámara de Senadores vetó el proyecto con el “voto no positivo” del propio vicepresidente de la Nación, dando así un cierre al conflicto favorable al bloque agrario.

Ya en el editorial de junio, la SRA se había mostrado exultante por el desarrollo del conflicto. En primer lugar, a causa de haber alcanzado una “unidad”, con lo que se referían al cerrado frente que las entidades habían opuesto al gobierno, sobre la base de una movilización masiva: “bastó una medida a todas luces injusta para que las entidades dejaran de lado diferencias históricas y se unieran en un reclamo unánime hasta conformar un bloque inquebrantable, reforzado por los cientos de miles de productores argentinos”. A la festejada unidad añadían también el logro de la “conciencia de sí”: “ya nadie puede afirmar que el campo argentino es una dispersión de voluntades inconexas a lo largo del territorio nacional [...] es evidente que es un grupo social con conciencia de sí, que sabe lo que quiere y cómo lograrlo”. Finalmente, la trilogía conceptual, de raíz casi hegeliana, se completaba con el “reconocimiento” por parte de la ciudadanía del rol ocupado por la rama agraria en la economía argentina (A-Jun08: 7).

Desde su óptica, el conflicto se había producido no sólo por el aumento de las retenciones, sino también por el carácter de la nueva medida. Al respecto, Biolcati afirmaba que “estamos en desacuerdo con las retenciones, pero este conflicto estalló por la movilidad, que implica precios máximos”. A eso se sumaba la política de intervención desarrollada unilateralmente por el gobierno:

El mix de alza en los costos directos e indirectos del sector agropecuario, los precios máximos para la leche, la carne, los cereales y derivados [...] y las limitaciones para vender al exterior [...], la inflación que se siente en los bolsillos de todos los argentinos tuvieron mucho que ver en el recrudecimiento del conflicto campo-gobierno.

Pero no hay que perder de vista otras características de la tirante relación entre ambas partes: la falta de consensos. Desde los inicios de la gestión K se pueden contar con los dedos de una mano las veces [en] que la dirigencia nacional agropecuaria fue convocada en su conjunto a la Casa Rosada para discutir proyectos para el crecimiento sectorial (A-Jun08: 14).

A pesar de la difícil relación que reconocía tener con un gobierno con el que no simpatizaba, la SRA se siguió mostrando conciliadora durante el paro:

Las posturas radicalizadas, de una y otra parte, no contribuyen en nada. Los reclamos del campo para que “se dejen de confiscar gran parte” de sus dineros y crear una política agropecuaria a largo plazo [...] y la postura inquebrantable del gobierno en pos de “defender al pueblo y redistribuir riqueza” tendrán que reencontrar el equilibrio perdido, de manera de poder garantizar que el crecimiento sea para todos y lo más parejo posible (A-Jun08: 14).

Lo que no obstó, por supuesto, para que la derrota del proyecto en el Senado fuera interpretada como un gran triunfo del “campo”, que contribuía así nada menos que a mejorar la calidad de la democracia y reconquistar para sí la consideración social que aquél merecía:

Nada volverá a ser lo mismo en la Argentina después del 17 de julio. Lo que empezó siendo un reclamo del campo terminó siendo una lucha de todo el pueblo por recuperar las instituciones. El resultado no puede ser más alentador: la democracia argentina ha mejorado su calidad y su funcionamiento. El campo le ha puesto límites a un poder que por momentos parecía omnipotente y ha logrado un lugar en la sociedad que nadie le podrá disputar por muchos años (A-Jul08: 6).

Así, la SRA lograba anotar, por primera vez en un largo tiempo, lo que parecía ser un triunfo valiosísimo, al haber formado parte de una coalición que infligió al gobierno una derrota trascendente. En primer lugar, porque se trató del primer traspie significativo de la gestión de los Kirchner, que fracasarían dos veces en la sanción de una ley de vital importancia, puesto que les hubiera permitido incrementar marcadamente la recaudación fiscal. En efecto, el anuncio de la Resolución 125 desató un conflicto de magnitud tal que el gobierno se vio obligado a retroceder en su aplicación, suspendiendo su vigencia y enviándola como proyecto de ley al Congreso, donde no logró su sanción. En segundo lugar, porque el conflicto acabaría cristalizando una fuerte oposición al gobierno por parte de distintos sectores de la sociedad, que por añadidura se animaban a enfrentarlo en las calles. Finalmente, y como ya fue señalado (Castro García, Cornelli, & Palmisano, 2011; Varesi,

2011), esta oposición tuvo posteriormente un correlato político a nivel partidario: el oficialismo ganó un muy estrecho margen (31 puntos contra 29, aproximadamente) las elecciones legislativas del año 2009, a pesar de llevar nada menos que a Néstor Kirchner a la cabeza de la lista, lo que tampoco le impidió perder en la provincia de Buenos Aires frente a de Narváez. Tales fueron las consecuencias de la forma en que se saldó este conflicto.

9.5. La licuación del contenido político en la crítica de la oposición interna

Paralelamente, la dirigencia de la entidad consolidaba a Miguens como su cara más visible. En efecto, la fórmula Miguens-Biolcati fue reelecta en las Asambleas del 2004 y el 2006, aunque no sin nuevas complicaciones.

Hacia mediados de la década, la fracción de socios disidentes, que actuaba ahora al mando del abogado Roque Cassini, volvió a articular una lista interna opositora, aunque no lograron presentarse a elecciones. La lista, denominada “cultivar es servir”, intentó presentarse a la renovación de vocales para la CD durante la elección del 2007 asegurando haber reunido más de 100 avales, el doble de lo exigido por los estatutos.

Sus miembros, igual que otros en el pasado, cuestionaban la competencia de la CD para conducir adecuadamente la entidad. Ya en el mes de abril anunciaban la conformación de la lista mediante el envío de una carta de lectores al diario La Nación, en la que tras protestar por la política del gobierno kirchnerista, la emprendían contra la dirigencia del oficialismo: “La unión del agro nos impedirá caer en el juego de los que quieren “dividir para reinar”. Para ello hay que dejar de lado pequeños intereses y constituir una fuerza homogénea, con una voz tan contundente que no pueda dejar de ser escuchada” (LN, 28/04/07).

La lista no llegó a presentarse: fue impugnada por la CD, que alegó que algunos de los candidatos no eran miembros de la SRA, sino de sociedades afiliadas, cuestión sobre cuya validez no existía un criterio claro en el reglamento o los estatutos. Esto provocó un intercambio epistolar, también vía el correo de lectores de La Nación, protagonizado por Cassini, de un lado, y Feü y Héctor Pereda del otro (presidente y vice del unificado Comité de Acción de la entidad, es decir, del oficialismo), a quienes se sumó un socio vitalicio de la entidad que no formaba parte de ninguno de los grupos.¹⁰⁹

Allí, la lista de oposición acusó al oficialismo de haber hecho que la entidad perdiera el brillo que históricamente había tenido, tomando como uno de los ejes la caída en el número de socios:

¹⁰⁹ El intercambio tuvo lugar en la edición de los días 25 de agosto, y 8, 15 y 22 de septiembre.

Hoy los socios "activos y vitalicios" difícilmente superen los 3000 ante un universo de más 300.000 explotaciones agropecuarias (censo del 2002), lo que equivale a una representación que llega al 0,01 por ciento. Hace 20 años había por lo menos cinco veces más socios (que hoy "migraron" a otras entidades).

La responsabilidad la tendría una CD cerrada en sí misma, que se perpetuaba en la dirección e impedía acceder a las minorías a la gestión de la entidad:

La actual Comisión Directiva es continuación de las anteriores, pues los nombres se repiten en los últimos 25 años. Hay directores que están en sus cargos desde hace 35 años. Cincuenta y ocho cargos en la Comisión Directiva, más 3 revisores de cuentas, más 30 cargos en el Tribunal Arbitral, hace un total de 91 cargos para dirigir a 3000 votantes, lo que equivale a un cargo cada 32 socios. Un disparate, si a ello le sumamos la imposibilidad de que las minorías estén representadas.

Añadía, finalmente, que el 28% de los socios actuales son personas jurídicas, con lo que justificaba su inclusión en la lista, además de señalar que la propia CD reconocía que los estatutos no eran claros al respecto, y apelaba ganar legitimidad invocando a los fundadores de la entidad:

No creo que aquellos pioneros fundadores, que tenían como premisas el trabajo, la innovación, la aventura, el riesgo, y la inclusión hubiesen participado de esta forma de conducir. Ni qué hablar de la representatividad que pueda ejercer esta dirigencia aplicando estos sistemas de gobierno en su propia casa, cuando, por su trayectoria e historia debería ser la entidad rectora del campo argentino.

A diferencia del otro socio, el Comité de Acción Gremial no negó la caída en los afiliados a la entidad. En su lugar, se limitó a afirmar que "la opinión vertida en cuanto a la representatividad de la SRA parece ignorar que, socios o no, la mayoría de los productores agropecuarios del país se sienten representados por nuestra entidad" y a establecer que ésta seguía ostentando "la más sólida estructura técnica", para cerrar exhortando a Cassini a competir por los canales institucionales preestablecidos y "evitar confrontaciones mediáticas que sólo confunden a la opinión pública y dañan la imagen de nuestra querida institución".

Pero Cassini no se resignó a dejarles la última palabra, y en una última carta en la que continúa deplorando la gestión de la entidad mete, por así decirlo, el dedo en la llaga:

No creo que la mayoría de los socios activos y vitalicios estén al tanto de los muy importantes pasivos que surgen de los balances societarios y de las pérdidas que se producen hace ya varios ejercicios. También hay que tratar de subsanar las graves consecuencias aparejadas a la entidad por la muy mala idea que fue [...] destinar una institución sin fines de

lucro y no preparada, a actividades comerciales como es el negocio de la explotación del Predio de Palermo, que tantos problemas y dolores de cabeza nos ha traído, entre otros, un enorme aumento del endeudamiento.

En efecto, la explotación del predio se había convertido en algo bastante peor que un dolor de cabeza desde hacía ya más de una década, y la CD se mostraría incapaz de hacer otra cosa que profundizar el derrotero de escándalos que se sucedían sin solución de continuidad. Así, tras la retirada de OGDEN, la SRA encontró en Francisco de Narvéez a un nuevo socio, quien adquiriría (en rigor, lo harían sociedades anónimas bajo su control) el 50% de las acciones anteriormente controladas por OGDEN.

El derrotero del predio no hizo sino consolidar la oposición que venía desarrollando el grupo de socios que acabarían articulando una lista de oposición al oficialismo, poniendo en riesgo la continuidad en el tiempo del grupo directivo. Por otra parte, la acumulación de irregularidades sucedidas desde la compra en 1992 seguiría acarreado a los miembros de la CD problemas bastante más graves que un dolor de cabeza, como imputaciones judiciales y citaciones, que continuaban proyectando una imagen negativa en los medios de prensa.

El contenido de la impugnación del grupo disidente, no obstante, casi no refería ya a su acción política, como venía sucediendo desde fines de la década de 1990. En una entrevista concedida a Página/12, Cassini había recriminado a Miguens, en el 2007, haber confrontado directamente con el gobierno tras el conflicto por la carne:

Estoy básicamente de acuerdo con los reclamos, en particular para el sector ganadero. Pero me pareció mal lo que dijo respecto al voto en octubre; no debió enfrentarse al Gobierno. Eso es cruzar lanzas. Diez días atrás había elogiado la actitud dialoguista del ministro (Miguel) Peirano y del secretario Javier De Urquiza.

En este sentido, y tras sintetizar crudamente el objetivo político de la SRA, plantea la que cree que debe ser la estrategia más adecuada:

El objetivo central de la Rural debe ser obtener la mayor cantidad de ventajas o evitar la mayor cantidad de situaciones desfavorables, y eso no se logra con una actitud totalmente opositora si hay un gobierno progresista o totalmente complaciente si hay un gobierno liberal. Se logra con inteligencia en la negociación y adecuándose a la realidad del momento. Siempre hay temas para negociar, otros que requieren plantear firme oposición, y también medidas para apoyar.

Posteriormente, sin embargo, reconoce que Miguens no hizo más que “decir lo que los ganaderos querían escuchar. Y el sector ganadero es claramente opositor, y tiene sus razones porque el Gobierno se ha manejado muy mal”, a lo que agrega que además aquél

se hallaba condicionado por la propia existencia de la oposición (P/12, 12/08/07). Era claro, por otra parte, que Miguens tenía un perfil mucho más dialoguista y negociador tanto en comparación a las otras entidades agrarias, como pudo apreciarse a lo largo del conflicto del 2008, como frente a otros miembros de la dirigencia de la SRA. El propio Biolcati, a la sazón vicepresidente, ya había dado sobradas muestras de su destemplanza. Por el contrario, y a pesar de que la SRA había virado hacia una posición de abierta confrontación con el gobierno kirchnerista, Miguens parecía más bien haber sido empujado hacia ella que haberla liderado.

Con lo cual, las diferencias políticas entre el oficialismo y la oposición estaban lejos de ser tan marcadas como habían sido hacia el final del período neoliberal. Por el contrario, lo que seguía resaltando era la cuestión del predio, como destaca el propio Cassini: “el haber convertido ese lugar en un gigantesco ámbito de lucro se aleja bastante de los objetivos estatutarios, que antes que nada debería ser la acción gremial. Y la acción gremial hoy está muy desatendida” (P/12, 12/08/07). Así, la oposición tenía como fuerte la crítica de los problemas administrativos y de gestión que atravesaba la entidad, mientras que en contraposición, el contenido político tendía a perder peso.

9.6. Síntesis del capítulo y forma de la acción política

La asunción del gobierno kirchnerista encontró a la SRA en pleno proceso de adaptación a la crisis del neoliberalismo. La salida de Crotto había permitido a la entidad esbozar una suerte de crítica parcial al “modelo” caído en desgracia, que se extendía hasta abarcar la convertibilidad. Por otra parte, aquélla había dejado de intentar proyectar una imagen de grandeza para asumir, nuevamente, un papel de víctima, hasta aquí de los capitales normales.

A medida que el populismo se consolidaba como forma general de la representación política, la SRA encontró en él a un victimario a la medida de sus necesidades, puesto que tras los innúmeros problemas surgidos de su alineamiento casi incondicional con los gobiernos neoliberales volvía a asumir un rol que, como vimos, le ocasionaría muchos menos cuestionamientos: el del enfrentamiento contra un gobierno que intervenía en los mercados y aumentaba las retenciones. En este sentido, el breve período inicial durante el cual, a pesar de no haber establecido una relación tan fluida como la entablada con el gobierno menemista, se mantuvo a la expectativa, pronto cedió paso hacia un escenario de conflicto. La disputa por el precio de la carne dejaría a la SRA y el gobierno en veredas opuestas, y la entidad se permitió participar en otro paro, apenas a tres años del anterior. Dos años después, lideró como parte de la Comisión de Enlace el conflicto del 2008.

Este cambio en la dirección de su acción política se constituía como reacción al afianzamiento del populismo: con la expansión constante de la masa de renta que ingresaba al proceso nacional de acumulación de capital, las distintas formas de apropiación adquirían creciente potencia. Y con la moneda moviéndose lentamente de la subvaluación a la paridad, los modos de apropiación predominantes estaban lejos de revestir la discreción de la sobrevaluación: retenciones, acuerdos de precios, precios máximos, y suspensión de exportaciones, entre otras medidas de similar calibre, encrespaban a la dirigencia de la SRA, cuya preferencia por formas de protesta que no involucraran la interrupción del comercio mercantil comenzaron a flaquear. De esta manera, la organización recuperó el vigor político que había languidecido durante la década de 1990.

Respecto de esta cuestión, Panero (2013; 2014) señala que, en contraposición a lo sucedido durante los gobiernos neoliberales, a lo largo del período kirchnerista el Estado habría recuperado la capacidad de incidir sobre las principales variables macroeconómicas, pero la SRA perdería acceso al gobierno, ante el cual no podría entablar una relación tan estrecha. Como vimos, es cierto que la organización se distanció prontamente del kirchnerismo, precisamente cuando comenzaba a quedar claro cuál era el perfil que éste iba tomando. Y resulta notorio, efectivamente, el contraste en la estrategia política seguida durante ambos períodos.

Pero no menos llamativo resulta el resultado de dichas estrategias. Si durante los años del neoliberalismo la SRA no logró anotarse, como conquistas resonantes, mucho más que la eliminación casi total de las retenciones (seguida por el establecimiento de un tipo de cambio que desviaba una fracción mucho más grande de renta diferencial de la tierra), el viraje hacia una posición de enfrentamiento político que emprendió bajo los años del kirchnerismo tampoco le deparó demasiados réditos a excepción de la anulación de la Resolución 125, que analizaremos posteriormente.

El desplome del neoliberalismo, asimismo, había reconfigurado el mapa de alianzas entre las distintas fracciones de la clase capitalista, y la SRA había cambiado al omnirepresentativo G-8 por el sectorial FCA, en principio capaz de articular demandas más específicas. Sin embargo, la intervención en los mercados agrarios que comenzó a tomar forma en el 2005 y alteró la distribución de los beneficios al interior de las distintas cadenas de producción tornó al grupo impotente incluso para posicionarse al respecto.

La SRA se replegó entonces, nuevamente, hacia una alianza con las restantes entidades agrarias, con quienes no había hecho buenas migas durante la década de 1990. También en este aspecto fue crucial tanto la salida de Crotto de la presidencia como su reemplazo por Miguens, quien afirmarí­a abiertamente su propósito de recomponer los lazos.

En este sentido, la renovación del grupo dirigen­cial permitió que la entidad diera vuelta la página de su acción durante la década de 1990 y se reposicionara de cara al nuevo

escenario, abandonando sus pretensiones de convertirse en “la entidad más poderosa de la Argentina” y retomando nuevamente el discurso de la discriminación al campo. Mas se mostró impotente para poner fin a la serie de escándalos relacionados con la explotación del predio, lo que tuvo como resultado la creación de una corriente interna opositora. A diferencia de las disidencias planteadas por los socios bajo los gobiernos neoliberales, sin embargo, el objetivo de esta corriente de oposición no era cambiar el rumbo político de la entidad, sino meramente desplazar a una dirigencia a la que consideraban responsable de involucrar a la entidad en negocios espurios, afectando consecuentemente su prestigio público.

Capítulo 10

La acción política de la SRA: análisis de su representatividad, sus formas concretas y su potencia

En los capítulos anteriores hemos dado cuenta tanto de la forma concreta que tomó la acción política de la SRA a lo largo del período estudiado como del marco desde el cual buscaremos analizarla. Procuraremos por lo tanto, en lo que sigue, extraer algunas conclusiones. En primer lugar, nos centraremos en la cuestión de la representatividad, buscando mostrar que, de manera general, el sujeto representado por la acción política de la SRA es la fracción agraria pampeana de la clase terrateniente nacional. A continuación, volveremos a detenernos sobre su ideología, indagando en el rol que juega en su acción. Posteriormente, avanzaremos en el análisis de la estrategia seguida por la entidad, incluyendo las alianzas entabladas para llevar adelante su acción, así como en las consecuencias que ésta tuvo en el seno de su dirigencia. Cerraremos, finalmente, con un análisis de la potencia que caracterizó a la acción política de la SRA a lo largo de este período.

10.1. Representatividad

Como hemos visto en los capítulos anteriores, las demandas y reclamos de la entidad en torno a las cuales concentra su acción política son relativamente constantes a lo largo del tiempo, aunque la importancia atribuida a algunas de ellas es variable; ocasionalmente, por otra parte, surgen otras cuestiones de menor importancia. Analizaremos, en lo sucesivo, las que mayor trascendencia parecen revestir para la entidad.

Cabe, al respecto, realizar una observación preliminar. De manera general, las políticas económicas que afecten de manera exclusiva a los capitales aplicados en la rama agraria, no repercutirán en última instancia sobre la ganancia de estos sino, vía la competencia, sobre la renta de la tierra. En este sentido podría ocurrir, por ejemplo, que como resultado de dichas políticas estos capitales comenzaran a apropiarse una ganancia extraordinaria en relación a su condición, la que acabaría convirtiéndose en renta de la tierra vía la competencia por ingresar a la rama para apropiarla. De manera inversa, si una porción del precio de las mercancías agrarias resultara afectado por alguna política o circunstancia específica, ésta recaería, por el mismo motivo, no sobre la ganancia de los capitales agrarios, sino sobre la renta. Avancemos entonces sobre la cuestión concreta.

Como queda claro a lo largo de todo el período estudiado, una de las políticas que más irrita a la dirigencia de la SRA es la existencia de retenciones a la exportación de mercancías agrarias. A pesar de que la recaudación de estos impuestos se efectúa a través del movimiento de capitales que producen y comercian tales mercancías, las retenciones no pueden brotar a expensas de estos ni de sus ganancias normales, ya que de hacerlo socavarían las bases de la reproducción normal de los capitales afectados, agotándolos o expulsándolos de las actividades en las que operan. De esta forma, las retenciones recaen necesariamente sobre la renta de la tierra (Iñigo Carrera, 2007b). La lucha de la SRA por la eliminación de estos impuestos se ejerce entonces en representación de la clase terrateniente.

Y de una porción mucho más grande de dicha clase, por cierto, que la que constituye su base social, ya que las porciones de tierra que poseen sus miembros, como señalamos, siguen siendo utilizadas principalmente para la producción ganadera. La SRA, sin embargo, luchó a lo largo de todo el período por la eliminación de las retenciones que afectan tanto la producción de carne como la de granos, siendo estas últimas las que se sostienen durante un mayor lapso y con una magnitud superior. Más aún: en la medida en que los granos se constituyen como insumos para la ganadería (en los últimos años del período estudiado, por ejemplo, la producción de leche se realizó crecientemente sobre la alimentación del ganado con maíz, cuyo precio interno se hallaba abaratado por las retenciones y la intervención de los mercados), el encarecimiento del precio de su circulación en el mercado interno hace aumentar, consecuentemente, los costos de producción de dicha actividad. Es claro, por lo tanto, que la representación de los terratenientes que ejerce esta organización excede marcadamente a su base social.

Por otra parte, y como ya vimos, las retenciones a la exportación no fueron el único impuesto que atravesó sucesivas transformaciones a lo largo del período. En efecto, la generalidad de la estructura impositiva atravesó un proceso similar, particularmente a lo largo de toda la fase neoliberal. Y este fue otro de los aspectos sobre los cuales la SRA actuó de forma sostenida, rechazando gran parte de las modificaciones, la expansión de las alícuotas, y la creación de impuestos nuevos.

Uno de los casos más destacados fue el del IVA, a cuyas continuas modificaciones se opuso frontalmente la organización tras haber manifestado inicialmente su acuerdo respecto de la aplicación de dicho impuesto a la producción agraria. Respecto de la reforma de 1998, particularmente, la SRA argumentó que el resultado sería la generación de un saldo positivo y que este sería retenido indefinidamente por el gobierno, si es que acaso les era devuelto alguna vez. La magnitud de la riqueza social en juego, equivalente al 10,5% del precio de venta de las mercancías, sólo puede ser una fracción de la renta de la tierra, ya que se trata de una porción del precio comercial lo suficientemente grande como para

afectar el ciclo de reproducción de los capitales agrarios. Dicha porción se suma entonces al total de renta apropiada, o en caso de ser devuelta, se constituye como un crédito a tasa de interés nula. Un caso similar a éste último ocurre con los capitales comerciales que exportan mercancías agrarias. Durante la crisis de la Convertibilidad, estos comienzan a posponer el pago de una fracción del precio de aquéllas, ante lo cual la SRA protestó duramente. También en este caso sólo puede tratarse de una porción de renta de la tierra, ya que la suma adeudada ascendía al 15% del precio de las mercancías.

Otros impuestos y tasas que se convirtieron en eje de disputas entre la SRA y los distintos gobiernos no recaen específicamente sobre la producción agraria, como las tasas viales municipales, o los impuestos al cheque y al endeudamiento financiero. Tampoco lo hacen en otros casos, como los del impuesto a los activos, a las ganancias, a los ingresos brutos, y a los bienes personales; en la medida en que estos gravan la propiedad de la tierra, no obstante, sí tienen por fuente a la renta de la tierra. Impuestos como el inmobiliario rural, en cambio, sí la gravan específicamente.¹¹⁰

Cabe considerar, por último, el caso de los impuestos que gravan el consumo de combustibles, como el aplicado sobre el gasoil por primera vez en 1996. A pesar de que el capital agrario está lejos de ser el único consumidor de esta mercancía, se trata de un insumo que, en relación a las restantes fracciones del capital, constituye una proporción mayor de los costos de producción, tanto en lo que refiere a la producción propiamente dicha de las mercancías agrarias (y particularmente de las agrícolas, debido al uso de maquinaria durante la siembra, labores culturales y cosecha) como a su transporte. Por otra parte, la imposibilidad de trasladar este costo al precio comercial de las mercancías, determinado en el mercado mundial, hace que dicho impuesto acabe afectando la renta de la tierra. El hecho de que una porción sustantiva de lo recaudado por los impuestos a los combustibles provenga de la producción agraria se refleja en la constitución de un fondo destinado específicamente a la realización de obras de infraestructura en áreas rurales, fondeado con esta recaudación: se trata del Fondo Hídrico, cuya constitución debía solventar obras para prevenir inundaciones. Al respecto, cabe destacar que, ya al poco tiempo de su creación, la SRA denunció que los fondos se estaban desviando hacia otras áreas.

El apoyo a la instauración de políticas económicas de corte neoliberal, así como a su sostenimiento y profundización, se constituye asimismo como una de las acciones más

¹¹⁰ Sobre la base de lo señalado previamente, sería posible considerar que los impuestos que afectan a los capitalistas o incluso a los consumidores en general recaen sobre la renta de la tierra si la proporción tributada por los capitalistas agrarios es mayor respecto de la tributada por los capitalistas de las restantes ramas de la producción. La gran complejidad de la estructura impositiva, sin embargo, dificulta un análisis más profundo de cada impuesto específico. Baste mencionar que sólo en la provincia de Buenos Aires existían unas 117 tasas municipales diferentes hacia el año 2008, de las cuales se aplicaban un promedio de 20 por cada municipio. Véase, al respecto, el trabajo de Martino, Romero y Cardelli (2013). Conclusiones similares obtienen también Argañaraz, Devalle y D'Angelo (2012).

trascendentes de la entidad durante todo el período neoliberal, y particularmente desde la llegada de Menem al gobierno. La SRA defendió entonces la aplicación del paquete completo de reformas, apoyando marcadamente la quita de subsidios y regímenes de promociones a los capitales industriales; el ajuste en el Estado, esto es, reducción de las instituciones bajo su órbita o de las funciones que desempeñaban, y despidos de empleados públicos; la liberalización del mercado de cambio; la apertura comercial, especialmente en lo referido a los aranceles a la importación; las privatizaciones del capital bajo control del Estado aplicado a la producción de servicios públicos; la liquidación de los capitales estatales que arrojaban déficit, y la reducción del gasto público en general. Detengámonos entonces en estos distintos aspectos.

La SRA argumentaba que parte de estas reformas apuntaban a reducir los costos de producción para el capital en general. Es notorio, sin embargo, que algunas de las más importantes afectaban especialmente a la producción agraria, como la privatización del sistema de transportes, específicamente de los sistemas portuario, vial y ferroviario, por donde las mercancías agrarias circulan hacia el mercado mundial o los centros urbanos locales. El éxito en esta tarea permitiría por tanto la expansión en el volumen de renta. Otras privatizaciones, en cambio, no afectaban especialmente a dicha producción, pero se trataba de fragmentos de capital bajo control estatal que operaban arrojando un déficit, y se sostenían con gasto público.

La reducción de dicho gasto, como vimos, se transformó en una de las banderas de la SRA, ya que éste, afirmaban, debía compensarse mediante la expansión de la base tributaria, y particularmente de la que afectaba a la producción agraria. Y que, como señalamos anteriormente, recae principalmente sobre la renta de la tierra. En este sentido, y a pesar de no referirse estrictamente a la renta, la organización mostró tener plena conciencia de que buena parte del gasto público proviene de la recaudación impositiva originada en la producción agraria y procuró eliminar toda fuente de gasto público considerado innecesario. En este sentido, también destaca especialmente su apoyo, planteado lisa y llanamente en términos de una “batalla”, a la liquidación de organismos estatales, contracción de sus funciones, y despidos de empleados públicos.

Lo mismo sucede respecto a los regímenes de promoción industrial y subsidios a los capitales industriales, calificados como “ineficientes”. Aquí el enfrentamiento reconoce dos causas principales: por una parte, la SRA condenaba, a principios de la década, las “transferencias de riqueza” realizadas para sostener la acumulación de estos capitales, riqueza cuyo origen reconocen en la producción agraria; por otra parte, y además de la recepción de tales transferencias, los capitales en cuestión se sostenían sobre otros “privilegios” como los aranceles a la importación, lo que resultaba en la posibilidad de vender sus mercancías a precios superiores a los que rigen en el mercado mundial. Doble

perversidad la de su existencia a ojos de la clase terrateniente, entonces, ya que algunas de las mercancías producidas se constituyen además en costos de producción para el capital agrario, haciendo caer su tasa de ganancia y afectando también de ese modo, por lo tanto, a la renta de la tierra. En este sentido, la asociación tomó como enemigo paradigmático a los capitales automotrices, que siguieron gozando de algunos “privilegios” durante todo el período (como el mantenimiento de aranceles a la importación, el Plan Canje, y otras formas de transferencia de riqueza denunciadas en el estudio publicado por Berhongaray), lo que elevaba el costo del flete terrestre.

El apoyo de la SRA a la implementación y el avance de la llamada “Reforma del Estado”, cuyo contenido consistía en la eliminación y reducción de funciones en los organismos estatales y despidos masivos de empleados públicos, también se encuadra en la batalla que la organización entabló contra lo que consideraba un exceso en el gasto público. Batalla que se extendió posteriormente, como vimos, hacia los niveles provincial y municipal.

Ya vimos también que una de las formas en las que se desvían fracciones de renta hacia los capitales industriales es la gestión del tipo de cambio. Hacia fines de la década de 1980, éste fue desdoblado de forma tal que afectó circunstancialmente a la producción agraria, que además de las retenciones enfrentaba un tipo de cambio ligeramente más alto para la exportación. En este sentido, el programa económico presentado como salida a la crisis incluía, ciertamente, la “liberación” del mercado cambiario, esto es, la unificación del tipo de cambio.

Lo que no se mencionaba, sin embargo, es en qué nivel debería ubicarse éste. Podría suponerse que la posición de “no intervención”, sin embargo, implicaba la libre flotación del precio del dólar. En este sentido, resta explicar la acción de la SRA frente a la instauración de la Convertibilidad, es decir, un tipo de cambio fijo y marcadamente sobrevaluado, que da lugar a la apropiación de fracciones de renta de la tierra por parte de los capitales industriales. Lo mismo sucede en relación a la toma y el pago de la deuda externa, aspectos en los que nos detendremos posteriormente.

A medida que la crisis se profundizaba, la SRA seguiría sumando demandas. Entre ellas, aparece fuertemente la de limitar o prohibir la importación desde Brasil de mercancías agrarias producidas localmente denunciando precios de dumping, que se repetiría hacia finales de la década. Se trató, principalmente, de carne de cerdo y de pollo, ramas de la producción nacional en las que es probable que no se forme renta de la tierra de ningún tipo. La contracción de su producción vía el aumento de las importaciones, sin embargo, tiende a su vez a contraer la demanda de los insumos correspondientes, entre los que se hallan los granos utilizados como alimento. Con lo cual, la acción con la que enfrentan estas

importaciones tiene el objeto de expandir la producción local de granos, lo que en última instancia tiende a expandir la magnitud de renta apropiable.¹¹¹

Con el alza en los precios de las mercancías agrarias que tuvo lugar hacia mediados de la década de 1990, la mayoría de estas demandas perdió fuerza. Sin embargo, surgieron reclamos y conflictos de otra índole. Destaca entre ellos el que enfrentó a la entidad agraria con los capitales hidrocarburíferos, que al amparo de la legislación que determinaba que el subsuelo es propiedad del Estado, desarrollaban sus actividades de exploración contaminando los suelos, cuando no avanzaban judicialmente para obtener la expropiación. También aquí es evidente que esta acción se ejerce en representación de la clase terrateniente.

Tras la llegada de una nueva crisis, la SRA desempolvó algunas demandas que había dejado de lado durante los años de bonanza, y en torno a las cuales concentró su acción: reducción de la presión impositiva, contracción del gasto público, y enfrentamiento con fracciones del capital industrial (de forma notoria, nuevamente el capital automotriz fue el principal blanco de las críticas y protestas) estuvieron entre las principales cuestiones. A ellas se sumaron otras que afectaban los costos de producción de las mercancías agrarias, como el impuesto a los combustibles o los aumentos en los peajes.

En el mismo sentido operó la reconsideración de su posición frente a las privatizaciones. Si durante los primeros años de la década la SRA había acaudillado el proceso, una década más tarde deploraba que los resultados habían sido exactamente los opuestos a los buscados, ya que el costo de producción había crecido en lugar de contraerse. La solución demandada, no obstante, jamás podría ser la reversión del proceso. En su lugar, la entidad abogó por una segunda ronda de privatizaciones y una desregulación mayor, que desplazaran a los monopolios u oligopolios que habían emergido como consecuencia del proceso.

La presión ejercida sobre el gobierno para erradicar la fiebre aftosa, asimismo, es otra cuestión que sobresale a lo largo de toda la década, pero alcanza su punto más alto en los años de la crisis. Se trata de un tema particularmente sensible, puesto que el éxito en esta tarea incrementaría las posibilidades de exportar mayores cantidades de carne hacia los mercados europeo y estadounidense, en los que se vende a mejores precios. Así, lo que se pone en juego aquí es, en última instancia, la apropiación de mayor renta de la tierra.

¹¹¹ Es claro, en este sentido, que las magnitudes en juego son mínimas (por ejemplo, la Asociación Argentina de Productores Porcinos estimó en 1999 que la importación de unas 120.000 cabezas, equivalentes a 2/3 del volumen producido localmente, implicaban que unas 144.000 has de maíz, sorgo y soja dejaran de producirse localmente; véase al respecto LN, 08/11/01), lo que sin embargo no cambia el sentido de la acción. Pesa también en este reclamo, asimismo, un fuerte componente ideológico, vinculado con el contenido "agrarista" de la ideología de la SRA: la renuncia a aceptar que un país caracterizado por la exportación de mercancías primarias comience a importarlas. A lo que se suma la consideración de la posibilidad de que hoy se importe carne de pollo y cerdo, y mañana de res.

En este sentido, la desarticulación, desfinanciamiento, o inoperancia relativa del SENASA (así como de otros organismos gubernamentales que operan sobre la producción agraria) tiene muchas veces por consecuencia una caída en el precio comercial de las mercancías agrarias, lo que puede, circunstancialmente, afectar dicha renta. De ahí que la SRA accione políticamente en procura de mejorar la actividad de dichos organismos.

El período de posconvertibilidad alumbró nuevos reclamos, a la par que algunos de los anteriores siguieron ocupando un lugar destacado. A pesar de que la devaluación multiplicó la proporción de renta que afluyó hacia la clase terrateniente, la reinstalación de las retenciones (así como la posterior expansión de su magnitud) se convirtió en uno de los ejes de su acción. Asimismo, la entidad comenzó a intervenir de forma más fuerte en la lucha que distintos sectores del agro entablaban con los capitales internacionales que producen organismos genéticamente modificados a propósito del pago de regalías por la reproducción de semillas transgénicas. En este sentido, el uso de la eufemísticamente llamada “bolsa blanca”, esto es, la venta de dichas semillas sin el pago del canon correspondiente, se había constituido en una nueva fuente de expansión de la renta de la tierra. Aunque tardíamente en relación con otras organizaciones, tal como señala Panero (2013; 2014), la SRA acabó haciendo de este punto un eje importante de sus demandas.

La expansión del gasto público volvió a consolidarse como uno de los aspectos principales sobre los cuales buscaba accionar la organización. No sólo porque éste alcanzaría niveles record, sino porque ahora se agregaban como destinos el sostenimiento de los planes sociales y el abaratamiento de los servicios públicos.

En este período se reabrió también el enfrentamiento con los capitales industriales, aunque en un grado menor. En efecto, el acuerdo firmado con China en el año 2004 reflató la polémica en torno al nivel de elaboración de los productos primarios, así como por las distintas medidas de protección reclamadas por dichos capitales ante una posible expansión en las importaciones de productos chinos, por cierto dificultada por la subvaluación del peso.

Mucho más significativa fue la acción de la SRA en el conflicto desarrollado en torno al precio de la carne. La expansión económica comenzaba a expresarse en un aumento del consumo precisamente cuando la Argentina recuperaba el status de libre de aftosa para su producción ganadera, lo que provocó un aumento en las exportaciones y comenzó a atar el precio interno de la carne al del mercado mundial, en un momento en el que este último iniciaba una fase de alza. Se trataba, por tanto, de una abrupta expansión en la afluencia de renta para los propietarios de tierras ganaderas. La SRA procuró, mediante distintas estrategias, que dicha fracción de la clase terrateniente retuviera para sí la renta expandida.

Algo similar sucedió posteriormente con la producción de granos, en cuyo mercado también intervino el gobierno. A medida que la expansión económica avanzaba, y con ella su carácter político populista, la apropiación de renta de la tierra mediante medidas

intervencionistas también se consolidaba: aumentaba la magnitud de las retenciones a las carnes, los granos y sus derivados, así como se intervenían los mercados y se cerraban exportaciones. La SRA combatió estas medidas, como hemos visto, con energía creciente. En este sentido, el conflicto desatado en el 2008 en torno a la Resolución 125 se configuró como el punto más alto del enfrentamiento.

Detengámonos, por último, en dos aspectos que no fueron presentados en los capítulos anteriores por estar ligados a acciones que realiza la SRA en el campo internacional. Una de ellas consiste en la lucha por la liberalización de los mercados agrarios, que lleva adelante en asociación con otros países que conforman el llamado “grupo Cairns”. Fundado en la ciudad australiana del mismo nombre en 1986 con el objeto de consensuar una posición común para la Ronda de Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), dicha organización reúne a asociaciones agrarias de 20 países caracterizados por ser exportadores de mercancías agrícolas.¹¹² El grupo aboga por la eliminación de los subsidios a la producción y las barreras arancelarias y paraarancelarias a la importación de dichas mercancías en Europa y Estados Unidos, y presentó también una posición conjunta en la Ronda del Milenio en 1999 y en la Ronda de Doha en el 2001, ambas organizadas por la Organización Mundial de Comercio (véanse al respecto, por ejemplo, A-Jul99 y A-Ago99). El objetivo último de esta acción es también la expansión de la renta de la tierra apropiada, vía la eliminación de un competidor al que se considera “desleal” por recibir subsidios, y la consecuente alza de los precios de las mercancías en cuestión en el mercado mundial.¹¹³

A nivel sudamericano, por otra parte, la SRA gestionó también la creación de una organización destinada a resguardar los intereses más inmediatos de la clase terrateniente: la Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR (FARM), creada en 1998. A pesar de que su estatuto determina que su principal objetivo es la “defensa de los intereses comunes de los productores rurales de los países del MERCOSUR” (M98: 165), Crotto afirma en la Asamblea Ordinaria de ese año que lo que motiva la constitución de dicho organismo no es otro que “el famoso tema de los «sin tierra» en Paraguay”, esto es, la defensa de la propiedad privada sobre la tierra (M98: 80). De este modo, la SRA tomó parte activa en la creación de una verdadera Asociación Internacional de Terratenientes, aunque ésta reviste en realidad un carácter más bien defensivo.¹¹⁴

¹¹² Además de Australia, el grupo está compuesto por Canadá, Pakistán, Sudáfrica, todo el subcontinente sudamericano con excepción de Venezuela, y algunos países del sudeste asiático.

¹¹³ Con la ilusión, por otra parte, de acceder a los precios que rigen en los mercados internos de EE.UU. y la UE, que incluyen por cierto el subsidio recibido como vehículo para el desarrollo de la productividad del trabajo agrario (Iñigo Carrera, 2007b).

¹¹⁴ En este sentido, y confundiendo dos acepciones de un mismo refrán de forma tan poco acertada que no logra hacer rimar las líneas, Crotto expresa el miedo de los terratenientes locales:

Hasta aquí, entonces, algunas de las principales líneas de acción de la SRA a lo largo de todo el período. Sobre ellas, creemos posible poder fundamentar, en primer lugar, que la acción política de la SRA representa de manera general a los terratenientes; y en segundo lugar, que no se trata simplemente de la fracción de dicha clase que conforma su núcleo social, de base ganadera, sino que su representación tiende a expandirse hacia la generalidad de la fracción agraria de la clase en la región pampeana.

No se trata, tal como señalamos anteriormente, de que la SRA no enarbore en absoluto demandas específicas de la clase capitalista. Por el contrario, en el período analizado se evidencian algunas que resultan inequívocas al respecto. Tal es el caso, por ejemplo, de la presión por la flexibilización laboral, que se transformó precisamente en una de las demandas conducidas por el G-8. En el mismo sentido puede también entenderse su rechazo hacia las políticas de asistencia hacia los trabajadores desempleados: si bien el argumento subyacente se ligaba más bien con el aumento del gasto público, al mismo tiempo dicha política ponía un piso a la caída salarial. Los conflictos con el sindicato de obreros rurales desatados durante la década de 1990 también entran en esta categoría.¹¹⁵

No puede afirmarse, por tanto, que la SRA represente exclusivamente a la clase terrateniente. Semejante tipo de representación, sin embargo, difícilmente pueda existir. En primer lugar, porque la renta de la tierra emerge del ciclo de valorización del capital agrario. Así, por más que los terratenientes agrarios entablen necesariamente una relación antagónica con los capitalistas de la rama en torno a la apropiación de dicha fracción de plusvalía, requiere al mismo tiempo que el capital agrario complete su ciclo exitosamente para poder apropiarla. En otras palabras, el interés de la clase capitalista en valorizar su capital es también el de la clase terrateniente, lo que determina al mismo tiempo la existencia de una relación de solidaridad entre ambas.

Por otra parte, la forma concreta en que se forma la renta diferencial de la tierra, esto es, la competencia de los capitales individuales por la apropiación de una ganancia extraordinaria, determina que en algunas ocasiones los intereses inmediatos de los

El problema no era de Paraguay o ahora de Brasil, [sino que] era de todo el MERCOSUR, y entonces nos anticipamos y empezamos a trabajar en conjunto [...]. Estamos muy preocupados y tratamos de anticiparnos a cosas que hasta ahora no han pasado [y] ojalá nunca pasen pero como dice el verso: "si la casa de tu vecino ves arder pon tus barbas a remojar", por eso creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tema porque es peligroso (M98: 80).

¹¹⁵ La protesta por la acelerada expansión de capitales comerciales fuertemente concentrados como los supermercados, que tras barrer con gran número de carnicerías lograron reducir el precio de la carne pagado a los ganaderos también parecería constituir un problema que afecta específicamente a esta fracción del capital agrario, en la medida en que la relación entablada entre estos y dichos capitales comerciales se asemeja al vínculo que tienden a desarrollar los capitales medios y los pequeños capitales, que ceden fracciones de plusvalía en favor de aquéllos.

capitalistas coincidan con los de los terratenientes. Uno de los ejemplos concretos es el de un aumento en un impuesto que normalmente recae sobre la renta de la tierra, pero por el momento en que entra en vigencia puede afectar, circunstancialmente, la ganancia del capitalista.

Asimismo, los miembros de ambas clases reproducen su vida sobre la base de la apropiación de una fracción de la plusvalía, que obtienen mediante la propiedad privada de los medios de producción. Con lo cual, también aquí la clase terrateniente va a compartir un interés con la capitalista: el de la apropiación de la mayor cantidad de plusvalía posible. Y, consecuentemente, el de la reproducción del modo de producción capitalista. En este sentido, una de las expresiones concretas que toman estas coincidencias es la ideología que exhibe la SRA, la cual guía en buena medida su accionar, y sobre la que nos detendremos posteriormente.

Cabe agregar, por último, una determinación más concreta que hace específicamente a la composición social de la SRA. Como ya hemos señalado, su base está conformada, principalmente, por individuos que son miembros de ambas clases al mismo tiempo, lo que permite explicar que plantee también este tipo de demandas.

De manera general, por lo tanto, es difícil esperar que la clase terrateniente no enarbole reclamos que expresan en realidad los intereses de los capitalistas. Mucho menos si la organización estudiada está compuesta por sujetos que personifican ambas clases. Lo que aquí procuramos demostrar, por el contrario, es que a pesar de identificar algunas demandas que son específicas de la clase capitalista, la SRA se configura de manera general como representante de la clase terrateniente.

10.2. Ideología

Como mostramos previamente, las acciones desplegadas por la SRA están estrechamente encuadradas en la ideología que profesa. También habíamos señalado que ésta se enmarca en el ideario del liberalismo económico, respecto del cual la organización se constituye como uno de sus portadores más notorios. Procuraremos, en lo sucesivo, dar cuenta del porqué.

El vínculo entablado entre la SRA y los sucesivos gobiernos durante este período se corresponde, a grandes rasgos, con el accionar previo de la entidad ante la presencia de gobiernos de características tanto liberales como populistas. Durante la década de 1990, la SRA apoyó fervientemente la implementación y el desarrollo de las políticas neoliberales: privatización de empresas, flexibilización laboral, reducción o eliminación de los impuestos a la importación, desregulación de los mercados, unificación del tipo de cambio, eliminación de subsidios o regímenes especiales para los capitales industriales, etc. Y festejó,

particularmente, la eliminación casi total de las retenciones a la exportación. Nuevamente, sin embargo, se mostró impotente para enfrentar la sobrevaluación del peso, sostenida esta vez durante una década en niveles que oscilaban en torno al 100%. Y nuevamente, hubo de reconocer la existencia de “desviaciones” respecto del programa que entendían debía aplicarse, y que referían a la reexpansión del gasto público y la consecuente ampliación de la presión tributaria, o el sostenimiento de lo que consideraban espacios de acumulación “privilegiados” para fracciones del capital industrial. De la misma forma, terminó reconociendo que otras políticas económicas, que tenían como caso más marcado a las privatizaciones, no habían tenido el resultado esperado y acabaron perjudicando a los intereses que representa, aunque eximió de culpas al gobierno que las realizó. Asimismo, el resurgimiento del populismo como forma general de representarse la acumulación de capital desencadenó, como ya vimos, un rechazo cada vez más marcado hacia las políticas económicas que lo caracterizaron. Este accionar se corresponde, evidentemente, con la lectura del escenario político y económico, mediado a su vez por la ideología liberal que detenta la SRA. En este sentido, es pertinente preguntarse por la necesidad de que ella rija su accionar mediante esta forma específica de conciencia, así como por la potencialidad que esto le determina respecto de su acción política.

Al respecto, plantearemos que lo que determina a la SRA como una asociación capaz de enarbolar la ideología liberal en su pureza es la especificidad que caracteriza al proceso nacional de acumulación de capital. Mientras que aquí los fragmentos de capitales industriales normales o sus equivalentes en escala se reproducen obteniendo la tasa normal de ganancia mediante la apropiación de renta de la tierra agraria, es la clase terrateniente la que deja de apropiarse dichas fracciones de renta. Esto pone un límite al liberalismo en el que puede ampararse la acción política de las organizaciones que representan a los primeros, toda vez que su reproducción se realiza normalmente bajo formas que ponen en evidencia tal apropiación. Y, al mismo tiempo, no hace sino reforzar las convicciones liberales de los representantes de la clase terrateniente. En este sentido, la SRA denuncia, toda vez que los mecanismos de apropiación de renta por los capitales industriales se vuelven inmediatamente visibles, que se trata de capitales “ineficientes” que sólo pueden reproducirse mediante distintos tipos de “privilegios” (entre los que no logran incluir, por cierto, a la sobrevaluación de la moneda), cuyo origen identifican, correctamente, en la producción agraria. Así, es el hecho de representar a la clase terrateniente en un espacio de acumulación con las características que presenta el argentino lo que les da pie para sostener un liberalismo a ultranza.

Por cierto, si el liberalismo radical que caracteriza a la SRA le permite avanzar en su lucha contra los capitales industriales por la apropiación de renta de la tierra, se le revela contraproducente cuando ésta se realiza mediante formas en las que no media una política

económica específica. En efecto, la defensa a rajatabla del mercado como el más eficiente organizador de la vida social la deja pobremente resguardada ante los efectos del ingreso y la expansión de capitales medios, como los exportadores de granos (capaces no sólo de empujar hacia abajo los precios de las mercancías compradas sino también de demorar su pago, en virtud del vínculo que establecen con los pequeños capitales), o los capitales que ingresan hacia las ramas privatizadas de la producción, particularmente en el transporte de cargas. Ante ellos, el liberalismo de la SRA no tiene más armas que la denuncia de los “monopolios” o “cartelizaciones”, que constituirían violaciones del principio de libre mercado. Sin embargo, su propia ideología le impide enfrentar el ingreso y expansión de dichos capitales a la economía nacional, o determina incluso que sea también su propia acción la portadora de este movimiento, tal como sucedió con el apoyo a las privatizaciones.

Por otra parte, la invariante condena a las diferentes formas de subsidio que reciben los capitales industriales imposibilita a la SRA reclamar la instrumentación de estos para la producción agrarios. Esto le impide, por lo tanto, hacer causa común con entidades como la FAA, que ante escenarios de crisis exige subsidios a la producción, precios sostén para las mercancías agrarias, etc. En este sentido, la posibilidad de ejercer una acción de conjunto queda limitada a los reclamos que la SRA considera válidos, como la eliminación de las retenciones.

El colapso de las fases del proceso nacional de acumulación de capital que toman la forma política del liberalismo, sin embargo, acaba poniendo en tensión la ideología de la organización. Como señala de Palomino (1988), la crisis que cierra el período bajo el cual la representación política general de dicho proceso la tuvo el gobierno militar fue atribuida a la existencia de “desvíos” respecto del programa original. Similar evaluación acabaría realizando respecto del gobierno menemista y el breve lapso del gobierno de la Alianza: el apoyo incondicional que mostró respecto a las principales líneas de la política económica (privatizaciones, apertura económica, liquidación de algunas de las formas de sostenimiento de los capitales industriales, eliminación de las retenciones, intentos de avanzar en la “flexibilización laboral”, convertibilidad de la moneda, etc.) acabó trastocándose en una crítica (moderada, en comparación a la que desarrollaría ante el gobierno kirchnerista) que ciertamente descansaba en la existencia de nuevos desvíos, aunque el origen del problema era en realidad localizado en la existencia de una crisis internacional.

Ya hacia 1993, cuando la producción agraria aún continuaba estancada, la SRA comenzó a denunciar la existencia de “desviaciones” de una “orientación económica” que en lo esencial era “correcta”. Éstas referían, en primer lugar, a la persistencia de “privilegios” para determinadas ramas, entre las que destacaban especialmente a la industria automotriz. En segundo lugar, comenzaba a hacerse patente que, tal como denunciaba la entidad, el gasto público, fuertemente recortado a nivel nacional, comenzaba a reaparecer en los

niveles provincial y municipal. Y hacia fines de la década, había vuelto a expandirse también en el nivel nacional (Oszlak, 2003). En tercer lugar, a pesar de las privatizaciones y desregulaciones, los costos de producción para el capital agrario (entre los cuales menciona específicamente salarios y precios de servicios y tarifas bajo el rótulo del “costo argentino”) seguían siendo más altos de lo que deberían, según planteaba (la SRA reconocía, sin embargo que esto “no es una desviación propiamente dicha”). Finalmente, señalaban a la estructura impositiva aplicada al sector agrario como otra desviación que aún no había sido corregida, a pesar de la eliminación casi total de las retenciones.

Hacia el final de la década, y frente a la crisis del “modelo”, la SRA volvió a denunciar estas desviaciones, en una suerte de reevaluación de los resultados de la política económica. Allí volvió a emprenderla contra toda una gama de fracciones del capital industrial (aunque, nuevamente, las automotrices se hallaban a la cabeza) por seguir recibiendo subsidios “directa o indirectamente”. Al mismo tiempo, las privatizaciones aparecían ahora definitivamente como una política que no había dado los resultados previstos, ante lo cual sólo podían sugerir proseguir por el mismo camino: como las privatizaciones habían sido “insuficientes”, y los capitales ahora privados habían configurado “monopolios”, sólo cabía avanzar hacia una “segunda etapa” en la cual ingresarían más empresas a las ramas en cuestión, de forma tal de aumentar la competencia y reducir costos. A esto se añadían, por supuesto, los habituales reclamos por la reducción del gasto público (y apoyo a las medidas más brutales que éste comenzaba a tomar, como el recorte a los salarios de los trabajadores del Estado) de forma tal de poder aflojar, consecuente, la presión impositiva.

A pesar de recurrir constantemente a este tipo de análisis ante el fracaso de una política económica que, en lo esencial, coincidía con las propuestas que la organización formulaba habitualmente, el liberalismo de la SRA comenzó a tensionarse hacia el final de este período. La reexaminación de las privatizaciones no sólo daba como resultado su “insuficiencia”, sino que incluía replanteos acerca de si valía la pena haberlas realizado en primer lugar, como habían sugerido respecto de la rama ferroviaria. Su firme condena a todo tipo de subsidio que pudieran recibir los capitales había vacilado, y en el marco del énfasis puesto en los mercados internacionales como responsables de la crisis y la dificultad para exportar, la SRA se permitió sugerir tibiamente que quizás “sí necesitamos protecciones y subsidios para sobrevivir en los mercados internacionales que están plagados de ellos”. Sin embargo, fue incapaz de denunciar a la Convertibilidad como forma concreta de apropiación de renta (aunque recibió con sumo agrado la alteración del tipo de cambio exportador anunciada por Cavallo) y, en suma, de apartarse del “modelo” al que tan apegada había estado durante todo el período.

Cuando éste hizo agua, la SRA puso en cuestión su versión extrema del liberalismo, en la que el enemigo absoluto estaba dado por un Estado regulador e intervencionista. Ésta cedió paso hacia la crítica a un Estado ausente, que había dejado a la Argentina "desmantelada, desprotegida, a merced de una globalización dura e inflexible", y la asociación pasaría a exigir no un Estado intervencionista, pero sí "fuerte"; no "superdimensionado", pero sí capaz de cumplir "una lógica función reguladora en defensa de los productores". El clamor por la supresión de organismos estatales inútiles, y que por añadidura sólo podían sostenerse mediante el abominado gasto público, se transformaba así en una crítica a tamaña reducción: "en aras de optimizar un ente se lo empieza a acotar y se termina en una reducción tal que afecta su funcionamiento y pone en peligro el fin para el cual fue creado". Tras la crisis del neoliberalismo, la entidad pedía ahora que el Estado "asuma el papel de contralor que nunca debió haber abandonado del todo, fijando reglas y normas justas y lógicas", y reconocía, diez años después, que la convertibilidad no había sido precisamente beneficiosa para el sector agrario.¹¹⁶ Sólo cuando la acumulación de capital volvió a tomar una forma política de tipo populista, la SRA abandonó este tipo de formulaciones para así volver a sus raíces ideológicas y retomar, lentamente, su rol de crítica de dicha forma política. Precisamente en la medida en que el populismo se consolidaba, y con él la expansión del gasto público, las retenciones a la exportación, y la intervención en los mercados agrarios, la entidad volvería a enarbolar con fuerza creciente los planteos liberales con los que históricamente lo había enfrentado.

El análisis de este período muestra por lo tanto, un resultado dual. Por una parte, la SRA exhibe una marcada incapacidad para enfrentar a un gobierno con el que comulga ideológicamente, a pesar de que su política terminara revelándose, más temprano que tarde, bastante poco beneficiosa para la clase terrateniente. Más aún, su acción política se centra en la defensa de la forma política neoliberal que había adquirido el proceso nacional de acumulación. Por la otra, la presencia de un gobierno con tintes populistas le permite diferenciarse fuertemente respecto de éste, y consecuentemente mostrar una posición crítica y agudizar la confrontación política.

10.3. Estrategia de acción

Detengámonos a continuación en la estrategia de acción empleada por la SRA. Uno de los aspectos que más resalta es su preferencia por la negociación (ya sea en forma individual o en el marco de alianzas establecidas con otras fracciones de capitalistas y/o terratenientes) a la confrontación mediante alguna forma de protesta. Ciertamente, durante

¹¹⁶ Aspecto sobre el que insistirían posteriormente de forma esporádica. Por caso, en el año 2008, Miguens volvió a afirmar que "el uno a uno terminó complicando al campo" (A08-Jun: 56).

el período estudiado la organización tuvo mayor predisposición a realizar paros frente a gobiernos con los que no congeniaba: demoró apenas un año en manifestarse contra el gobierno de Duhalde, que se hallaba a tan sólo dos meses de concluir su mandato, y tres frente al kirchnerismo, contra el que realizó dos paros en tan sólo cinco años, números que contrastan con el único paro hecho durante los doce años de neoliberalismo. No obstante, incluso antes de decidir marchar hacia el paro en el 2006, tras el prolongado conflicto por la carne y la posterior intervención estatal en los mercados de granos, la entidad mostró en reiteradas ocasiones su preferencia por el diálogo con los funcionarios del gobierno. Lo mismo sucedió durante el conflicto del 2008.

Al respecto, cabe destacar que la asociación logró entablar desde el primer momento un vínculo fluido con los principales funcionarios del gobierno menemista, incluyendo al propio Menem. La posibilidad de sostener un diálogo directo con estos decantó en el afianzamiento del ya referido “modelo Alchourón”, en el cual la dirigencia se valía del uso de estos canales de comunicación para plantear sus reivindicaciones y abandonaba prácticamente todo tipo de acción directa contra el gobierno, con lo cual corría el riesgo, señalado por la oposición interna, de “quedar pegada” a él. El único paro al que adhirió la SRA durante este período, en 1999, se enmarca en un contexto de crisis económica y nuevos aumentos de la base impositiva con un gobierno ya en retirada que, según la interpretación de la SRA, estaba más preocupado por la campaña política que por dar respuestas a la entidad, inquieta por el aumento impositivo y por los vaivenes en la política ganadera. En este escenario, los hombres de la entidad no lograban siquiera reunirse con los del gobierno, a quienes acusaban de “no atenderles el teléfono”. Es precisamente esta interrupción en la otrora aceptada comunicación que habían sabido sostener lo que, sumado a la presión de los socios por unirse a la serie de protestas que realizaban las restantes entidades, forzó a la SRA a realizar un paro.¹¹⁷

Contrariamente, ante el gobierno de Néstor Kirchner los canales de comunicación se fueron cerrando progresivamente. Durante el primer año y medio, la organización se mostró dispuesta a entablar vínculos con aquél, que la retribuyó a su vez invitándola a reuniones con funcionarios. Incluso el propio Kirchner, que se había abstenido de participar en las inauguraciones de la exposición ganadera, acabó encontrando una solución de compromiso visitándola días más tarde. El clima comenzó a espesarse con el conflicto por la carne, cuando el gobierno encontró en la “oligarquía ganadera” un enemigo a la medida de sus

¹¹⁷ En este sentido, cabe destacar que a pesar del acceso hacia el gobierno menemista que la SRA había logrado obtener, éste se había negado a institucionalizar los canales de diálogo, tal como solicitaba la entidad. Al respecto, cabe referirse a la creación del Consejo Nacional Agropecuario, organismo cuya creación habían propuesto las cuatro entidades para intentar mantener siempre abierta una vía de comunicación. Tras años de discusión, dicho organismo fue creado, pero vacío de toda la potencia con que se pretendía investirlo, en la medida en que ni lo integrarían ni el Presidente de la Nación, ni el Ministro de Economía, ni miembros del Congreso.

necesidades, y la SRA empezó a asumir el rol de víctima de un gobierno que se afirmaba en su faceta populista. Posteriormente, la entidad avanzaría en la confrontación, aunque sin renunciar a exhibir su vocación de diálogo y negociación.¹¹⁸ De este modo, cuando los canales de comunicación empezaban a cerrarse (o, más bien, en la medida en que la entidad y el gobierno comenzaban a reconocerse mutuamente como enemigos, lo que desembocaría en un congelamiento casi permanente de los vínculos formales), la SRA se permitiría recurrir al paro como método de protesta y presión.

Similar trayectoria caracterizó a la breve gestión de Duhalde, con quien jamás lograron establecer una buena relación: a la salida de la Convertibilidad y la devaluación, de por sí traumática para una dirigencia que bregó por sostenerla, se sumaron nuevas modificaciones impositivas, la dolarización de las deudas con proveedores, y el restablecimiento de las retenciones. Inicialmente, sólo la apelación a la necesidad de aumentar la recaudación para sostener a la explosión de población obrera sobrante en un contexto de fuerte crisis hizo desistir a la SRA de realizar acciones de protesta (a pesar de lo cual, como vimos, no se quedó de brazos cruzados, sino que accionó por vía judicial). No obstante, demoraron apenas un año en despedir al gobierno ya saliente con un fuerte paro comercial.

En síntesis, la SRA tiende a la búsqueda de la conformación de canales de comunicación con los funcionarios del gobierno, privilegiando así la negociación ante las acciones de protesta. En cuanto a éstas, como vimos, la disposición a realizarlas ante gobiernos con los que no coincide ideológicamente es mayor. Detengámonos entonces en la potencia que mostraron tener estas distintas estrategias.

A primera vista, llama la atención la menguada tendencia a efectuar acciones de protesta por parte de la organización, si se la compara con las restantes entidades agrarias. Ya destacamos previamente su preferencia por la modalidad de “paro comercial” en relación a otras acciones como el corte de rutas. Y es que dicha acción detiene, como la SRA manifiesta al rechazar el paro de camioneros de septiembre de 1999, la circulación de mercancías agrarias. Por un lado, entonces, impide la realización de la plusvalía y la renta de la tierra portada en las mercancías ya producidas, ya sea por su carácter perecedero, lo que desemboca en ocasiones en la pérdida total de su valor de uso, y por tanto de su valor, o por las dificultades que acarrea mantener en producción mercancías ya listas para ser vendidas. Asimismo, el bloqueo de rutas impide también la compra de mercancías insumo necesarias para poner en marcha la producción que, también debido a este carácter específico, sólo puede realizarse bajo determinadas condiciones climatológicas, mientras

¹¹⁸ Lo que quedó de manifiesto, por ejemplo, cuando en plena crisis de la carne presentó al gobierno su propio plan ganadero, y durante el conflicto del 2008, en el que se mostró, aunque con vaivenes, como una de las entidades más conciliadoras.

que la demora en ponerla en marcha puede expresarse en caídas en la productividad del trabajo. Finalmente, refiere también al costo general que implica la interrupción en la circulación de mercancías. De esta manera, la SRA evaluaba como excesivamente alto el costo de esta modalidad, la que sin embargo no deja de utilizar, como vimos, ante circunstancias que considera excepcionales, esto es, cuando lo que está en juego es una porción cuantiosa de renta de la tierra.

Este rechazo proviene, en primer lugar, de su condición de clase: como terratenientes, pero también como capitalistas, históricamente condenaron las huelgas realizadas por la clase obrera, tanto las que afectaban específicamente a la rama agraria como, por solidaridad de clase, las que afectaban otras ramas o la generalidad de éstas. Esta posición política fuerza a la entidad a que al momento de emprender acciones de esta naturaleza, sólo pueda hacerlo invocando razones de fuerza mayor.

Este accionar dual en la rama agraria provocó además una suerte de división de tareas durante el período neoliberal: mientras las restantes organizaciones buscaban forzar a negociar a los gobiernos realizando acciones de protesta, la que acababa encabezando las negociaciones sería la SRA, precisamente por haberse marginado de participar en la acción.¹¹⁹

Por último, la participación de la SRA en una acción conjunta con las restantes entidades agrarias brinda a dicha acción una mayor carga simbólica, en la medida en que las cuatro organizaciones pueden proclamar que “el campo” está enarbolando este o aquél reclamo. Se trata de una carta que la organización se guardó casi hasta el final de dicho período. Y que le reportó, no obstante, un magro resultado, al igual que las escasas acciones de protesta en las que participaría de allí en adelante, con la excepción de la del año 2008. En 1999, el paro agrario conjunto le permitió alcanzar el modesto objetivo de recuperar la atención del gobierno en medio de una crisis ya acentuada, así como atender los reclamos de sus propios socios. No obstante, las escasas medidas económicas anunciadas en respuesta por el gobierno parecieron ser más útiles a la voluntad de la SRA de detener la escalada que a los sujetos sociales por ella representados. Y en efecto, las restantes entidades no dudaron en efectuar otro paro al mes siguiente.

Al respecto, cabe detenerse brevemente en otro aspecto específico que surge del análisis de los años del neoliberalismo. Allí, la resistencia que mostró la SRA a confrontar

¹¹⁹ Su propia dirigencia es capaz de reconocer este hecho, en un editorial en la que recriminan su proceder a aquéllas:

No dejamos de reconocer que la existencia de sectores y entidades más intemperantes ayuda en la negociación, y esos sectores saben que mientras ellos juegan su papel contestatario, hay quien se sienta a negociar y obtiene para todos los frutos que a ellos les son negados (A-Feb99: 5).

con el gobierno mediante medidas como los paros, por ejemplo, no reside únicamente en la calidad del vínculo entablado con éste, sino que va más allá: en medio de una crisis que finalmente se demostró terminal, la entidad evaluaba que además de expresar su descontento y buscar forzar al gobierno a negociar, la realización de un paro podría tornarla a ella misma en sujeto activo del derrumbe del neoliberalismo, al enmarcarse en un momento de flujo del enfrentamiento de distintos sectores sociales ante los gobiernos de Menem y de De la Rúa. Así lo sugería el propio Crotto, quien tras verse forzado a avalar la participación de la SRA en el paro de abril de 1999, desistió inmediatamente de repetir la acción apelando a argumentos como “la Argentina no está en estos últimos meses de gobierno como para hacerse los locos [...]. Los dirigentes tenemos que tener la suficiente prudencia como para no llevar baldes de nafta cerca del fueguito [...]. No vamos a un paro por un llamado a la cordura”. Y ante este escenario, especificaba más aún sus propios temores: “El país está sufriendo una agresión externa por parte de algunos señores de fondos de inversión muy grandes, que ponen en duda ciertas medidas, como la Convertibilidad, que para los argentinos tienen que seguir en la Argentina”. Así, la entidad prefería no arriesgarse a contribuir a poner en riesgo el “modelo”.

Una vez que éste cayó, la SRA mostró menor temor a emplear dicho recurso. Sin embargo, como ya señalamos, no obtuvo mucho éxito. El paro del 2003 pareció no tener mucho más objeto que el de presentar en sociedad al FCA y mostrar su poder de cara al gobierno entrante, puesto que fue realizado a sólo dos meses de la finalización del mandato del gobierno de Duhalde. En el 2006, tras el extenso conflicto por la carne y las posteriores intervenciones del gobierno en los mercados granarios, la SRA volvió a marchar al paro respondiendo en parte a las demandas de sus socios, aunque no logró más que hacer público su descontento. Con el paro del 2008, en cambio, sí logró su objetivo inmediato, consistente en hacer caer la resolución 125. Volveremos sobre esto posteriormente.

Cabe destacar, por último, un aspecto específico de la participación de la SRA en acciones de protesta. Es evidente, en primer lugar, que la base social que le responde más directamente, es decir, sus propios asociados, no constituyen una masa suficiente como para sostener acciones en las que el número de participantes es determinante, como los cortes de ruta. Sí son capaces, en cambio, de controlar el comercio de carne en el mercado de Liniers, como lo prueban los paros de 1998 y 1999: si en este último, gestionado por la SRA y al que adhirieron las restantes entidades, el comercio se vio interrumpido casi en su totalidad, en el paro de la CRA que no contó con su adhesión el ingreso de cabezas se redujo, en el día más fuerte de paro, a un 40%, lo que fue atribuido a la decisión de la SRA de boicotearlo. Por otra parte, y a pesar de que la masa social directamente encuadrada en la organización es relativamente pequeña, es probable que la cantidad de individuos que se identifican con su discurso y su acción política sea bastante mayor. En este mismo sentido,

su participación en acciones coordinadas con las otras tres entidades agrarias tiene, como ya señalamos, un efecto mayor a la simple suma de fuerzas.

Más allá de que la SRA mostró una mayor predisposición al entendimiento con los gobiernos neoliberales, durante este período intentó recurrir primeramente a la negociación ante todos ellos. Sin embargo, cuando tuvo buena recepción, cosa que sucedió principalmente a lo largo del período neoliberal, no le dio mejores resultados. Las medidas que logró obtener, como la anulación de la suba de retenciones en 1990, su eliminación casi total en 1991 o medidas de escasa significatividad en relación a líneas de crédito o declaraciones de emergencia agropecuaria ante inundaciones, se revelan absolutamente minúsculos frente a la consolidación de políticas que afectaban particularmente a la rama, como la marcada sobrevaluación de la moneda, la continua expansión de la presión impositiva, o la inacción del gobierno frente al avasallamiento de los terratenientes agrarios por los capitales hidrocarburíferos y los exportadores de mercancías agrarias.

En síntesis, la SRA logró escasos resultados tanto ante los gobiernos neoliberales, con quienes privilegió la estrategia de la negociación, como respecto de los gobiernos populistas, a quienes enfrentó mucho más decididamente. Ya nos referimos a la paradoja que formula Panero (2013; 2014) en relación a estas cuestiones, y que se resume en que durante la década neoliberal, la SRA tuvo acceso al gobierno pero no fue capaz de incidir sobre la política económica debido a que el Estado habría perdido capacidad de maniobra en este terreno, mientras que tras la caída de dicho régimen, el Estado habría recuperado margen de acción pero la asociación perdería acceso al gobierno, con quien no sería capaz de entablar un vínculo tan estrecho. Así, bajo los gobiernos neoliberales, el perfil político que seguiría caracterizando a la entidad se habría debilitado, para recuperarse sólo parcialmente a la salida de la Convertibilidad.

Al respecto, también argumentamos previamente que, en realidad, la limitación en la capacidad del Estado de accionar sobre los mercados era precisamente el programa que enarbolaba la SRA, que se mostró plenamente satisfecha una vez emprendidas las reformas que avanzaban en este sentido.¹²⁰ Y que, allí donde el Estado conservó su injerencia en materia de política económica, como por ejemplo, respecto de la modificación de la base impositiva, accionó en líneas generales de forma contraria a los intereses de la entidad (con la excepción de lo sucedido con las retenciones), que no dejó de quejarse al respecto.

Así, más que la paradoja previamente señalada, el análisis de la estrategia seguida por la entidad revela otra cuestión: la organización obtuvo pocos resultados positivos tanto cuando escogió como vía la negociación, aprovechando la posibilidad que le brindaba la

¹²⁰ Es pertinente recalcar, en este sentido, que aunque la implementación de la Ley de Convertibilidad consolide la apariencia de un Estado que deja de accionar en materia de política económica, y particularmente de la gestión del tipo de cambio, debe seguir encargándose de sostener la sobrevaluación de la moneda.

posibilidad de acceso a los principales funcionarios del gobierno, como cuando, clausurada esta vía, desarrolló un perfil mucho más confrontativo.

De forma paralela a la alternativa negociación/confrontación (en la que, como vimos, la inclinación hacia una estrategia no excluyó la utilización accesoria de la otra), la SRA avanzó por un tercer camino: la acción política en el terreno parlamentario, mediante la elección de Alchourón como diputado nacional en 1999 y su reelección en 2003. Desde allí procuró dar impulso a proyectos de ley, entre los que destacan la eliminación de retenciones para las mercancías agrarias de las llamadas “economías regionales” y luego para las harinas, un proyecto de declaración para que el gobierno kirchnerista se abstuviera de aumentar las retenciones a la soja en el 2003 (ante versiones periodísticas de que tal cosa sucedería), proyectos para modificar el sistema impositivo de acuerdo a los reclamos de la entidad (entre los que se contaban el reajuste por inflación para el cómputo del pago de ganancias, la derogación del impuesto a la ganancia mínima y de otros impuestos considerados “distorsivos”), para informar del estado de deuda de los capitalistas agrarios con el Banco Nación, declarar el estado de emergencia ante sequías, aumentar los fondos destinados a las obras sobre la Cuenca del Salado, agravamiento de penas para el contrabando, etc.

Cabe, al respecto, presentar la forma en que SRA procesa la lucha política en tales áreas. Como vimos, ya en 1989, en el contexto de la batalla que había comenzado a dar a los capitales del sector industrial, planteaba que el éxito de estos hundía sus raíces en un sistema perverso, en el que eran capaces de sostener sus regímenes de privilegio por la acción de “lobbys” pagados en ocasiones con parte del dinero recibido, y que era necesario enfrentarlos en su propio ámbito. Es por eso que, ante la elección de Alchourón como diputado, Anales saludó el hecho con una nota titulada “el lobby que faltaba”. Años más tarde, Miguens volvería sobre el problema: se trataba de que el sector agrario es incapaz de conseguir una adecuada representación legislativa, cosa que sí logra hacer la industria, lo que atribuye a su gran capacidad de lobby (A-Dic02: 14).

También en la arena parlamentaria, sin embargo, el grado de éxito obtenido fue relativamente bajo. Particularmente, la acción de Alchourón en el Congreso no obtuvo avances en las áreas más sensibles para la SRA, en especial respecto de las retenciones y los restantes impuestos. Cabe destacar, por otra parte, que la entidad no guarda relación destacada con ningún partido político específico, aunque un número relativamente bajo de sus miembros se vincula con alguno de ellos, como en el caso del propio Alchourón o de Crotto.

10.4. Alianzas

Otro aspecto que destaca respecto de la acción política de la SRA refiere a las alianzas que entabla. Éstas oscilan, a grandes rasgos, entre la participación en agrupamientos de cuarto grado más o menos informales y la coincidencia esporádica con las restantes asociaciones agrarias.

Durante la fase neoliberal, la SRA integró el G-8 hasta su disolución, en 1999. En los primeros años de la década de 1990, sin embargo, dicho grupo no logró constituirse como actor de peso en la escena política local, probablemente debido a que aún se hallaba en juego la forma concreta que iba a tomar la acumulación de capital, lo que afectaba de distinta manera a los miembros del grupo. En este sentido, como señala Viguera (2000), se trató de un nucleamiento más bien de tipo defensivo: a pesar de que no todos sus integrantes coincidían en la valoración de las distintas políticas concretas que se pondrían en marcha, no vacilaban en declarar su apoyo al “rumbo general” del proceso. El acuerdo se limitó entonces a apoyar a un gobierno de impronta liberal, y de conformarse como su soporte ante actores sociales que accionaban en su contra. Sólo posteriormente lograron consensuar un programa común básico, que incluía como ejes principales la flexibilización laboral y la contracción del gasto público, en torno a los cuales accionaron. Sin embargo, cuando la crisis comenzó a poner en tensión las bases del “modelo”, hacia finales de la década, este consenso mínimo terminó fracturándose y el grupo se disolvió.

Hasta ese momento, la SRA se había mantenido sumamente apegada al gobierno menemista. Pero cuando, en abril de 1999, no tuvo más remedio que marchar al paro, lo hizo recostándose sobre las restantes entidades agrarias. A pesar de aparecer como sus aliados más “naturales”, sin embargo, su vínculo con éstas se vio marcadamente deteriorado durante la década, debido a la dispar evaluación efectuada respecto de las políticas económicas implementadas. En este sentido, el paro de 1999 resultó una coincidencia esporádica que volvió a deshacerse apenas dos meses más tarde, cuando la SRA decidió no participar del siguiente.

Esta relación comenzó a recomponerse con posterioridad a la crisis del 2001 y la devaluación, tras los que el proceso nacional de acumulación de capital tomó una forma política distinta. Para la SRA, el proceso implicó también la salida de la presidencia de Crotto, quien se había mostrado sumamente crítico de este tipo de alianzas, y el arribo de Miguens, que inmediatamente plantearía la necesidad de mejorar el vínculo. Asimismo, la consolidación de un gobierno de marcadas características populistas significaría un mayor consenso entre las entidades a la hora de posicionarse: con algunos vaivenes iniciales por parte de la FAA, las cuatro organizaciones acabarían enfrentadas al gobierno kirchnerista.

Paralelamente, la SRA avanzó en la creación de una nueva agrupación de cuarto grado, esta vez de un carácter distinto al G-8: se trata del FCA, compuesto por un buen número de los capitales que operan en la rama agraria. Dicho grupo, sin embargo, se reveló incapaz de coordinar siquiera una posición de conjunto ante la intervención del gobierno en los distintos mercados agrarios, lo que resultaba en una alteración de las ganancias apropiadas por los distintos capitales del sector.

Estas distintas alianzas mostraron tener, como vemos, potencia desigual. El G-8, en primer lugar, logró consolidarse como un actor de peso en la escena política, siendo uno de los vehículos de sostenimiento del esquema implementado ante alternativas consideradas peores, así como de promoción de la profundización del “modelo” en las direcciones ya señaladas. Sin embargo, el consenso alcanzado en su interior nunca dejó de tener un alto grado de fragilidad, lo que se expresó en la incapacidad de articular una salida conjunta ante el avance de la crisis. En lo que hace a la SRA, dicha fragilidad proviene, en primer lugar, de su enfrentamiento con la generalidad de los capitales del sector industrial (representados principalmente por la UIA) en torno a la apropiación de renta de la tierra. Y, de hecho, durante los primeros años de la década, la organización no hizo sino denunciar reiteradamente los “privilegios” recibidos por estos capitales y apoyar su eliminación, para posteriormente protestar porque no se había avanzado lo suficiente en este aspecto. Sólo cuando la UIA se resignó a negociar con el gobierno en lugar de confrontar con él, el grupo comenzó a funcionar mejor. La crisis del esquema económico, sin embargo, volvió a instalar tensiones en su seno. Así, la SRA volvió a la carga con las denuncias contra los “desvíos” que todavía favorecían a algunos capitales industriales, mientras que la UIA renovó su conducción, abandonó el grupo y persiguió una nueva estrategia.

En cuanto al FCA, la potencia mostrada para coordinar líneas de acción comunes no logró avanzar más allá del paro realizado en 2003 contra el gobierno de Duhalde. En efecto, el grupo procuraría articular una acción política conjunta que involucrara a la mayor cantidad posible de capitales dentro de la misma rama, esto es, capitales unidos ya por una relación económica inmediata: la competencia en la compraventa de la misma mercancía. La coordinación de acción semejante se ve enturbiada, no obstante, cuando lo que está en juego es el margen de ganancia que resulta de dicha compraventa. Y aunque la intervención del gobierno en los mercados agrarios, en este sentido, tuvo como objeto desviar una fracción de la renta de la tierra hacia los capitales industriales, también resultó en la alteración circunstancial de dichos márgenes, sumiendo así al FCA en una manifiesta incapacidad para actuar.

Dicha incapacidad derivó en la reactivación de la alianza de la SRA con las restantes entidades agrarias, alianza que posee una característica que la diferencia cualitativamente de las otras: con dichas organizaciones comparte la representación de la clase terrateniente.

Así, éstas se convierten en sus aliados naturales para desarrollar la defensa de la apropiación de renta de la tierra toda vez que ésta avanza mediante sus formas más visibles, como las retenciones.

Bajo los gobiernos neoliberales, sin embargo, la acción conjunta de las entidades agrarias estuvo bloqueada, debido a que la SRA se alineó casi incondicionalmente con el gobierno menemista y buscó accionar por la vía de la negociación, así como se resistió a enfrentar posteriormente al gobierno de la Alianza. La excepción fue el paro de 1999, decidido por la propia entidad bajo el contexto ya descrito, y al que las restantes organizaciones se acoplaron de inmediato.

En síntesis, a lo largo de todo el período, la SRA articuló distintos esquemas de alianza, cada uno de los cuales tuvo sus propias limitaciones y potencialidades. El G-8 no logró extender su rango de acción más allá de una serie de coincidencias básicas, debido a la diferente forma en que sus miembros fueron afectados por el desenvolvimiento del esquema económico. Para la SRA, señalamos, el límite estaba dado por la denuncia de la supervivencia de “privilegios” o “transferencias de riqueza” hacia el sector industrial y de cobro de tasas de interés excesivamente altas por un sector bancario que no había sido “suficientemente desregulado”. Por su parte, el FCA se conformaba como un espacio más propicio para avanzar con demandas específicas del sector agrario, con lo cual revestiría, a priori, una mayor potencialidad. Sin embargo, la relación de competencia puso un límite inmediato a una acción efectiva del grupo, precisamente cuando lo que estaba en juego era la intervención sobre los mercados agrarios. Un poco más efectiva le resultó la alianza con las organizaciones agrarias, que sólo pudo consolidarse tras el surgimiento de formas de apropiación de renta en las que era visible la acción del Estado. La SRA tuvo que esperar, no obstante, que algunas de ellas se decidieran también a enfrentar a los gobiernos kirchneristas.

10.5. Las disputas en el seno de la CD

El análisis del funcionamiento interno de la SRA revela también aspectos de relevancia a la hora del análisis de su acción política. Destaca, en primer lugar, el hecho de que la alineación con el menemismo durante la década de 1990 no haya tenido jamás el aval de todos los socios, o al menos de los que participaron activamente en la vida de la entidad. Al respecto, sobresalen particularmente las elecciones internas de 1990, en las que una fracción de socios presentó una lista de oposición al oficialismo, que representaba la continuidad de la línea política que había emprendido la CD bajo la presidencia de Alchourón y privilegiaba la vía de las negociaciones con el gobierno de turno, incluso ante la circunstancia de que éste tuviera un origen peronista. Tras el triunfo de esta última, sin

embargo, ambos grupos cerraron filas y se unificaron bajo un nuevo comité, que se convirtió en el espacio desde el cual se arbitró y zanjó la disputa.

Mientras tanto, la sucesión de escándalos generados en torno a la compra y explotación del predio de Palermo mancillaban la imagen pública de la entidad, que ya enfrentaba cuestionamientos por lo que aparecía como un excesivo acercamiento al gobierno de Menem. Ambas cuestiones fueron determinantes para la emergencia de un grupo de socios disidentes, que no lograron formar una masa lo suficientemente grande como para enfrentar el apoyo mayoritario que sostenía a la CD. Hacia el final de la década, no obstante, este grupo comenzaría a consolidarse y denunciar insistentemente el perjuicio que le habían causado a la entidad tanto los negocios montados en torno al predio como su apoyo casi irrestricto al gobierno de Menem, vistos los resultados de su política en la rama agraria.

En la década siguiente, la CD buscó transformar la imagen de la SRA eligiendo a Miguens como presidente. Dicha renovación, por otra parte, no se limitó a un simple recambio del principal representante de la entidad, sino que se extendió a más de la mitad de los miembros de la comisión. Semejante recambio pareció expresar también la necesidad de actualizar la perspectiva política que seguía sosteniendo la SRA: como ya hemos señalado, la entidad sólo pudo comenzar a poner en cuestión algunos de los lineamientos políticos que había sostenido durante toda la década de 1990 tras la renovación de la CD. Sin embargo, el predio siguió constituyéndose como fuente de problemas, y la oposición acabó cristalizando en una agrupación interna que intentó, aunque sin éxito, presentarse a elecciones.

En este sentido, se ha sugerido que los negocios llevados adelante por los integrantes de la CD durante los años del menemismo habrían sido una de las causas del estrecho vínculo que la entidad consolidaría con dicho gobierno. En particular, fue la serie de irregularidades surgidas en torno a la compra y explotación del predio lo que denunciaron insistentemente los socios disidentes. Al respecto, Muro de Nadal afirma que

La compra del Predio de Palermo dejó a la institución en manos de su acreedor. Cuando la política económica empezó a mostrar aspectos perjudiciales para la prosperidad del sector, la SRA había perdido su independencia y no podía ejercer con legitimidad la defensa de los intereses de sus asociados frente a su acreedor. En su lugar se impuso una suerte de relación intimista y de amistad personal entre el Presidente de la SRA y el titular del Poder Ejecutivo que dejó bastante de lado la persecución de su papel gremial (2009, pág. 218).

Es indudable, como señala la autora, que es sólo en el contexto de la relación entablada entre la SRA y el menemismo que puede analizarse el traspaso del predio. Sin embargo, a pesar de las condiciones favorables que revistió la transacción, y de que

algunos dirigentes, como mostramos previamente, usufructuaron personalmente con la gestión de la explotación, desde un primer momento fue claro que la compra del predio distaría de ser un buen negocio para la entidad. Es la propia Muro de Nadal la que resalta este aspecto:

La impresión que queda de las consultas realizadas, es que la SRA quedó sin opciones: o compraba o el predio era asignado a otro destino. Pero al comprar, se comprometía a llevar adelante una larga serie de inversiones, como parte de las obligaciones colaterales asumidas, amén de comenzar a abonar impuestos [...]. Aunque nadie lo dice públicamente, la SRA se vio obligada a comprar el Predio y no tenía medios económicos para hacerlo. El gobierno de Menem no dejó demasiado espacio para una contrapropuesta (2009, págs. 199-202).

En última instancia, el alineamiento político de la SRA con un gobierno liberal resulta algo poco novedoso, como puede apreciarse en el racconto efectuado por de Palomino (1988). En este sentido, el alineamiento con el gobierno menemista responde en parte, como hemos procurado mostrar, a una cuestión de afinidad ideológica, cuestión que la propia dirigencia recalca. Como sintetiza Heredia: “según la nueva comisión directiva, la SRA no comprometía su neutralidad: se trataba simplemente de que [...] no podían dejar de apoyar un programa que ellos mismos habían reclamado desde siempre” (2003, pág. 90).

Cabe destacar que ninguno de estos conflictos internos es expresión de una base social heterogénea, como ocurre frecuentemente en otras entidades. Ya señalamos anteriormente que, por el contrario, la base social de la SRA es relativamente homogénea. Las disputas internas durante la década de 1990 expresan más bien, en primer lugar, diferentes propuestas de posicionamiento frente a un gobierno de características liberales pero de origen peronista,¹²¹ a lo que se sumó posteriormente la cuestión del predio.

Se trata, en síntesis, del impacto interno producido por la llegada de un gobierno que, a pesar de su génesis peronista, puso en práctica un programa económico que coincidía en gran parte con el que proponía la entidad. El advenimiento de un gobierno populista, en este sentido, tuvo el efecto contrario: el de unificar las posiciones políticas en el interior de la asociación.

10.6. La potencia de la acción política de la SRA

Repasemos lo visto hasta aquí. A lo largo del período estudiado, la SRA desplegó una acción política orientada hacia la defensa de los intereses de la clase terrateniente. Dicha acción asumió variadas formas. Su estrategia de acción, en primer lugar, osciló entre

¹²¹ Precisamente, el advenimiento del primer gobierno peronista dio lugar, como señala de Palomino (1988, págs. 65-6), a un período de fuertes disputas internas cuyo eje estaba constituido por la dicotomía de enfrentar abiertamente a aquél o procurar amoldarse para minimizar los daños.

buscar negociar con los gobiernos y enfrentárseles, combinando en distintos momentos ambas alternativas. Con la excepción de la resolución del conflicto del 2008, sin embargo, la SRA logró anotar escasos triunfos. Similar apreciación podría realizarse respecto de las alianzas que integró. El G-8, conformado con los capitales industriales, comerciales y bancarios durante la década de 1990, logró constituirse en soporte de la Convertibilidad, pero sólo pudo articular algunas demandas de contenido muy general y acabó por disolverse ante la crisis. La SRA integró posteriormente el FCA, limitándose a aliarse allí con los capitales del sector agroindustrial. Pero este grupo se mostró impotente para accionar ante la intervención de dichos mercados. La asociación recurrió entonces, al igual que lo había hecho en 1999, a la acción conjunta con las restantes entidades agrarias, cosa que repetiría también durante el período siguiente. Recién el conflicto del 2008, sin embargo, se resolvió en favor de las demandas que enarbolaban las entidades.

De manera general, por lo tanto, la acción política de la SRA mostró poseer escasa potencia para enfrentar las distintas formas de apropiación de renta de la tierra. A los aspectos ya señalados cabe aún sumar otros dos. En primer lugar, la fuerte sobrevaluación de la moneda que rigió durante la década de la Convertibilidad no sólo no fue enfrentada sino que fue defendida hasta su extinción. Lo mismo puede afirmarse respecto de la deuda externa, ya que a pesar de tener por fuente de pago una masa de renta de la tierra, la entidad apoyó vehementemente tanto el proceso de endeudamiento como el de renegociación y pago tras el default.

En contraste, su acción política sí fue lo suficientemente potente como para impedir la sanción de la Resolución 125. Se trató de un triunfo doblemente significativo: no sólo porque logró impedir un aumento en la proporción de renta apropiada vía retenciones, sino que además infligió una derrota significativa a un gobierno al que ya consideraba enemigo.

Para avanzar en la explicación de este fenómeno es necesario reexaminar a los sujetos sociales representados por la SRA, es decir, la clase terrateniente, así como el rol que ella juega en la acumulación de capital en la Argentina. Sólo de este modo será posible interrogarnos tanto por este singular proceder como por sus resultados.

10.6.1. La SRA y los límites de su acción política

Previamente habíamos señalado que la clase terrateniente no juega papel alguno en la organización del proceso de producción social, a pesar de lo cual es capaz de apropiarse fracciones de riqueza social producida por el capital sin entregar a cambio contrapartida material alguna. En efecto, la forma concreta que toma la regulación de la producción y el consumo sociales en el modo de producción capitalista, esto es, la formación de la tasa

general de ganancia, fuerza al capital a ceder plusvalía en favor de la reproducción parasitaria de dicha clase y a expensas de su capacidad de acumulación.

Pero la mediación de la forma nacional bajo la que se realiza la acumulación del capital social total da distintas formas a este proceso. Concretamente, el ámbito argentino de acumulación es engendrado, como también vimos previamente, de forma tal que los espacios nacionales en los que se concentra el capital industrial en general puedan recuperar para sí la mayor parte de la plusvalía que dejan escapar bajo la forma de renta diferencial de la tierra. A partir de la década de 1960, la forma concreta que adopta este proceso consiste en el desprendimiento, por parte de dichos capitales industriales, de fragmentos de sí que se valorizan a la tasa normal de ganancia a pesar de operar con una productividad marcadamente inferior a la que rige el precio de producción, compensando este mayor costo de producción mediante distintos mecanismos entre los que sobresale la apropiación de fracciones de renta. A aquéllos se suman a los acreedores externos, que apropian otra fracción de renta cobrando una deuda contraída a tasas que se hallan marcadamente por encima de la que rigen en el mercado mundial.

La contrapartida de esto, también habíamos destacado, está dada por el hecho de que los terratenientes dejan de apropiarse dichas fracciones de renta. Y de más está decirlo, estos no están dispuestos a entregar conscientemente una fracción de dicha masa de riqueza social. Lo que sucede es que, precisamente por jugar en el proceso nacional de acumulación el rol ya mencionado, esta clase no es portadora de la potencia para enfrentar dicha apropiación.

Y efectivamente, en cuanto representante político de esta clase, y de manera general, la SRA muestra carecer de la potencia para revertir tales mecanismos. E incluso, en ocasiones, para siquiera intentarlo. Volvamos a examinar entonces sus acciones, ahora sobre esta base.

Una de ellas sobresale a lo largo de todo el período, precisamente porque tiene lugar a lo largo de las distintas fases políticas. Se trata del rol jugado por la entidad en relación a la deuda externa. Durante la fase neoliberal, la SRA apoyó el proceso de endeudamiento con la condición de que fuera utilizado para expandir la acumulación, y no para “aumentar [la] capacidad de control de las variables económicas”. A pesar de que el destino del crédito acabó siendo, precisamente, el sostenimiento de un tipo de cambio que desviaba ingentes fracciones de renta de la tierra hacia los capitales industriales, la entidad presionó para reproducir la fase de endeudamiento, literalmente, a cualquier precio. Agotada esta fuente de ingreso, la sobrevaluación se volvió insostenible y la Convertibilidad hizo implosión. Posteriormente, con la expansión del flujo de renta, se abrió una extensa fase de pago de la deuda. Y a pesar de que la fuente de dicho pago está dada por la renta de la tierra, la entidad apoyó tanto el proceso de renegociación como el de pago efectivo.

Desde el punto de vista de la SRA, sin embargo, el proceso tiene sentido: como se menciona en el programa económico que aquí analizamos, la toma de crédito debería realizarse con el objeto de potenciar la acumulación de capital a nivel general, lo que permitiría a su vez expandir la aplicación de capital sobre la tierra, y consecuentemente el flujo de renta que ingresa hacia la economía nacional. Una vez contraída la deuda, ciertamente, a la SRA jamás se le ocurriría otra cosa que pagarla.

Detengámonos a continuación en la apropiación de renta por parte de los capitales industriales. Durante la fase neoliberal del período estudiado, la forma principal de aquella estuvo dada por la sobrevaluación de la moneda. En lugar de enfrentarla, no obstante, la SRA se constituyó en soporte de su reproducción. Cabe entonces interrogarse por el contenido de esta acción.

En primer lugar, se trata de un mecanismo que, de manera general, y a diferencia de otras formas concretas de apropiación como las retenciones, la intervención de los mercados o el cierre de las exportaciones, la sobrevaluación no es inmediatamente visible. A menos, por supuesto, que su magnitud sea lo suficientemente grande. Pero incluso ante el reconocimiento de su existencia, el accionar en torno a su eliminación es mucho más dificultoso. En efecto, por tratarse no de un impuesto o mecanismo que recae específicamente sobre la producción agraria, sino de una variable económica que se constituye como condición sobre la que opera el conjunto de los capitales, aquéllos que se ven afectados por ella no pueden plantear que se siente particularmente “discriminados” por un impuesto o medida específica que afecta exclusivamente a la rama agraria.

En el caso de la Convertibilidad, no obstante, la SRA identificó y denunció inicialmente la presencia de la sobrevaluación, aduciendo el perjuicio que causaba al sector exportador en general y al agrario en particular. Pero no sólo no accionó para enfrentarla, sino que incluso esta apreciación no se sostuvo en el tiempo. Distintos motivos pesaron para ello.

En primer lugar, el régimen de la Convertibilidad parecía constituirse como una alternativa posible para superar la crisis abierta hacia finales de la década de 1980. En este sentido, y como señala Beltrán (2011), en cuanto el esquema mostró ser capaz de sostenerse ofreciendo al mismo tiempo un contexto de estabilidad, la posibilidad de salir de él sólo podía ser pensada a un alto costo en términos económicos y políticos. Con lo cual, la acusación de “desestabilizador” ciertamente pendería sobre las cabezas de quienes se atrevieran a ponerlo en cuestión. Al mismo tiempo, la crisis hiperinflacionaria de finales de la década de 1980 no sólo había constituido a la “estabilidad” como un valor en sí mismo, sino que también había dado lugar a la interpretación, compartida incluso por la SRA, de que las devaluaciones no lograrían resolver la situación y que el camino de salida de la crisis

pasaba por la reducción de los costos de producción.¹²² En este sentido, la asociación rechazó fuertemente la posibilidad de devaluar desde el principio, y sólo dentro de ese marco se permitió, tan sólo durante unos pocos años más, quejarse por el “desequilibrio en los precios relativos” en que habían quedado las mercancías agrarias respecto de los llamados “bienes no transables”.

Ya asentada la Convertibilidad, sin embargo, este punto de vista no volvió a aparecer en sus apreciaciones respecto del “modelo” económico. En efecto, la idea de que la moneda se hallaba sobrevaluada fue perdiendo fuerza a medida que la paridad cambiaria se consolidaba. Así, transcurridos los tres primeros años de la sanción de la Ley, en los que la sobrevaluación siguió avanzando con base en el sostenimiento de la inflación (moderada en comparación con los niveles de los años anteriores) con un tipo de cambio fijo, éste comenzó a naturalizarse a medida que los precios se estabilizaban y el “modelo” se consolidaba. Y de hecho, como ya hemos señalado, la Convertibilidad no fue puesta en discusión sino hasta su crisis, hacia finales de la década. Para ese momento, sin embargo, todo tipo de reparo en torno al nivel del tipo de cambio y sus consecuencias había quedado, para la SRA, definitivamente atrás.

Otras cuestiones, asimismo, pesaron para que la entidad abrazara al régimen desde el principio. La fijación del tipo de cambio mediante la ley de Convertibilidad ponía límites precisos a la emisión de moneda, lo que debería llevar al gobierno, se afirmaba, a contraer el gasto público. Como mostramos anteriormente, se trataba de cuestiones que constituían aspectos particularmente sensibles del programa económico que la SRA luchaba por

¹²² Cabe volver a transcribir, al respecto, una reflexión de fines de 1991 ya citada en la tercera sección del capítulo 5:

Para poder competir con la producción nacional en el campo internacional y lograr mayor rentabilidad, incluso en la comercialización local, la solución debe inexorablemente pasar por el ajuste sobre la base de la reducción de costos. Ello debe ser así, porque ya tenemos sobradas experiencias de devaluaciones y sabemos que junto con el mayor precio que por esa vía lograron muchas veces nuestros productos, a poco andar, en la misma o mayor proporción aumentaron los gastos necesarios para obtenerlos. Las propias experiencias, por lo tanto, deberían impulsarnos a preservar la transformación, a cuidar la estabilidad y la paridad cambiaria ahora lograda.

Tal era, precisamente, la posición esgrimida por los defensores de la Convertibilidad. Por caso, Juan Llach, uno de sus más destacados panegiristas, sostenía a propósito de la crisis que antecedió a dicho régimen que “«el tipo de cambio alto» basado en la megainflación y en la permanente devaluación de la moneda no tuvo ningún efecto positivo en la creación de ocupaciones en los sectores exportadores” (1997, pág. 63). En cuanto a la Convertibilidad, señala que a pesar de que “algunos opinan que [el tipo de cambio fijo establecido] sobrevaluaba al austral-peso”, y de que apenas un mes antes de la puesta en vigencia del régimen se había producido una corrida cambiaria, “sin embargo, en el marco del sistema de banda de flotación cambiaria elegido por Cavallo [...] la cotización del dólar hasta el anuncio de la convertibilidad estuvo más cerca del piso que del techo [...]. Esto significa que, en un sentido de corto plazo al menos, la paridad finalmente elegida no estaba lejos del equilibrio”. Y vuelve, inmediatamente, a insistir con la cuestión ya referida: “una nueva devaluación [...] se habría trasladado total o casi totalmente a los precios” (1997, págs. 133-4).

implementar, razón por la cual fueron valoradas positivamente. El hecho de que las medidas estuvieran respaldadas por una ley del Congreso, por otra parte, fue algo igualmente apreciado por la asociación, que ponderaba la estabilidad que ello ofrecía. Cabe considerar, asimismo, que dicha ley formaba parte de la avanzada neoliberal que emprendía en ese momento el gobierno menemista, y a la cual la entidad apoyó decididamente. Por un lado, se estaba poniendo fin a algunas de las formas más visibles de apropiación de renta por parte de los capitales industriales. Por el otro, los procesos de privatizaciones y de apertura económica seguían desarrollándose, y la SRA esperaba que eso resultara en una reducción de los costos de producción para el capital agrario. No menos valorada, por cierto, fue la eliminación casi total de las retenciones. En última instancia, estas cuestiones remiten a la vertiente radical de la ideología liberal que caracteriza el pensamiento de la asociación y que, como ya señalamos, es expresión del hecho de que representa a la clase terrateniente.

Así, la SRA accionó desde el principio en favor de la reproducción del régimen, y siguió haciéndolo incluso cuando ya se había hecho evidente que éste no daría más de sí. Con lo cual, se convirtió ella misma en sostén de una fase de la acumulación que tuvo como característica el apoyarse sobre una apropiación de renta mucho mayor, en términos proporcionales, que la trascurrída en las décadas anterior y posterior.

Esta orientación general de su acción hace posible, a su vez, comprender los distintos aspectos específicos analizados anteriormente. En primer lugar, la alianza con los capitales industriales y comerciales que también presionaron por la instauración y avance del neoliberalismo, con quienes los terratenientes argentinos mantienen una relación antagónica, puede entenderse como un esfuerzo por apuntalar la fase neoliberal. La afinidad con el programa económico instrumentado por el gobierno, asimismo, llevó a que la entidad persiguiera sus objetivos mediante una estrategia de negociación, abandonando casi por completo formas de protestas más enérgicas que la discursiva.

Nada de esto hizo variar, en lo sustantivo, la dirección que había tomado la acción política de la entidad, que procuró seguir sosteniendo la Convertibilidad. Cuando ésta acabó por derrumbarse, y con ella la sobrevaluación, se impuso la necesidad de apropiar renta mediante otros mecanismos. Y sobrevino, consecuentemente, un cambio en la forma que tomaba la acción política de la SRA. Como señalamos, durante el año 2002 la magnitud de las retenciones no alcanzó a compensar el efecto de la devaluación, que había dejado al peso subvaluado. Sin embargo, este impuesto se convirtió inmediatamente en el principal foco de conflicto entre la entidad y el gobierno de Duhalde.

A diferencia de la sobrevaluación, las retenciones son una forma de apropiación de renta inmediatamente visible. Por esta razón, la organización readecuó su estrategia de acción, y a excepción de un breve lapso tras la asunción del gobierno kirchnerista, en el que se mantuvo expectante, también pasó a enfrentarlo de manera directa. Tanto más cuanto

que a las retenciones se sumaron otros mecanismos igualmente evidentes como el cierre de las exportaciones o la intervención sobre los mercados. Hasta el 2008, sin embargo, no logró revertir o detener el avance de tales mecanismos.

Este nuevo escenario, a su vez, dio lugar a una reconfiguración de las alianzas. Desarticulado el G-8, en buena medida porque la UIA había comenzado a diseñar una posible estrategia de salida en torno a la cual nucleó a otras organizaciones, la SRA eligió aliarse con capitalistas agroindustriales. Como vimos, sin embargo, el nuevo agrupamiento exhibió prontamente sus límites, con lo cual la organización viró hacia una alianza con las entidades agrarias.

Lo antedicho permite llegar a una primera conclusión: la acción de la SRA en cuanto representante político de la clase terrateniente es incapaz de evitar que una parte sustancial de la renta de la tierra vaya a parar a los bolsillos de otros sujetos sociales, en particular de los capitales del sector industrial. Cuando la principal forma concreta de la apropiación estuvo dada por la sobrevaluación de la moneda, y una vez que el régimen se consolidó, toda referencia a este hecho desapareció prontamente de los análisis de la entidad. Así, no sólo no logró dar cuenta del fenómeno, sino que su defensa de los lineamientos generales de la política económica incluyó, ciertamente, al tipo de cambio, con lo cual su acción acabó convirtiéndose en vehículo de sostenimiento de la sobrevaluación. Por el contrario, cuando sí logró identificar otras formas de apropiación de renta, accionó para revertirlas, aunque sin obtener resultados significativos.

Pareciera entonces, hasta aquí, que en cuanto representante de la clase terrateniente, la SRA carece de toda potencia para revertir, o incluso simplemente enfrentar, estos mecanismos. Como vimos, no obstante, no siempre resulta éste ser el caso. En efecto, en el conflicto del 2008, la organización mostró tener la potencia para, en alianza con las restantes entidades agrarias, poner límite al intento por avanzar en la apropiación de renta. Avancemos entonces hacia el análisis de dicha acción.

10.6.2. La SRA y los límites a la apropiación de renta de la tierra

Repasemos una vez más el punto de partida: la representación política de la clase terrateniente ejercida por la SRA no hace sino expresar las potencias que porta dicha clase en cuanto sujeto de la forma específica que cobra la acumulación de capital en la Argentina. Por lo tanto, su acción no puede ser capaz de retener la totalidad de la renta de la tierra que fluye hacia ella, lo que se expresa, como hemos visto, bajo formas contrapuestas.

Ante esto cabe realizar una primera observación: a pesar de esta aparente debilidad, la clase terrateniente ha logrado reproducirse desde su misma génesis. Lo que muestra que, a pesar de no ser capaz de evitar esta sangría de renta agraria, jamás ha dejado de

constituirse como uno de sus apropiadores, lo que la convierte en socia de los apropiadores restantes. En este sentido, el hecho de que la acción de la SRA en cuanto representación política de la clase terrateniente se constituya como forma concreta de realizarse la acumulación de capital bajo la modalidad específica que hasta aquí ha tomado en la Argentina, significa que es también forma concreta del apropiarse de una fracción de renta que siempre bastó para reproducirla como tal. Así, por más que dicha potencia no sea capaz de enfrentar o revertir los mecanismos de apropiación ya vistos, no deja de ser al mismo tiempo la forma concreta en que dicha clase reproduce su existencia.

Más allá de esto, resalta el hecho de que el resultado del conflicto del año 2008 se configura como la contracara de todo el análisis previo, en la medida en que muestra un resultado positivo para la acción política de la SRA. Veamos dicha acción más en detalle.

Señalábamos anteriormente que, debido a la forma específica en la que se acumula el capital en la Argentina, la SRA no posee la potencia en cuanto representante político de la clase terrateniente para impedir que una porción de renta de la tierra fluya hacia otros sujetos sociales, y que en determinadas fases de la acumulación, incluso, es ella misma quien se encarga de apuntalar este proceso. Afirmábamos también que, al mismo tiempo, es precisamente la forma que toma aquí la acumulación la que no deja de reproducir a los terratenientes como tales. Lo que significa que la apropiación de renta por parte de sujetos sociales distintos de ellos tiene como límite, precisamente, la reproducción de dicha clase. Bajo esta forma específica de acumularse el capital, por lo tanto, los terratenientes tendrán la fuerza suficiente para impedir que la apropiación exceda dicho límite.

¿Se trató, entonces, de que la Resolución 125 llevó la proporción de renta apropiada a niveles que pondrían en peligro la reproducción de la clase terrateniente? Es evidente que no, ya que de haberse sancionado, hubiera llevado las retenciones hasta un 44% para el caso de la soja, lo que significaba 9 puntos más respecto del 35% vigente. Pero incluso con este aumento, la proporción de renta apropiada por sujetos distintos de la clase terrateniente no hubiera superado el promedio de la década de 1990, en la que oscilaba en torno al 80%.

Claro que la proporción apropiada no es lo significativo cuando está en juego es la magnitud absoluta, puesto que cuanto más se contraiga la masa de renta disponible, menos puede apropiarse dejando suficiente para la reproducción normal de los terratenientes. Pero tampoco se trató, en este caso, de un problema de magnitud, puesto que lo que movió al gobierno a avanzar en la apropiación fue precisamente la veloz expansión de la masa de renta que fluía hacia la economía nacional, y que alcanzaría su máximo nivel histórico.

No es entonces el hecho de que estuviera en juego su reproducción lo que le dio a la clase terrateniente la potencia para impedir la sanción de la resolución. Detengámonos entonces en la forma que adoptó el fallido intento de apropiación.

De lo que se trataba, como ya mencionamos, era de establecer un sistema de retenciones móviles que acompañara los movimientos de precios. A los valores de marzo, eso significaba que la soja y el girasol pasaban a tributar 44% y 39% respectivamente. Tales guarismos chocarían contra un límite de tipo jurídico. En efecto, por más que afecten la porción de la plusvalía que cobra la forma de renta de la tierra, las retenciones toman la forma de un impuesto a la producción. Y en cuanto tales, estos tienen estipulado un máximo de magnitud, pasado el cual se los considera “confiscatorios”.¹²³

Así, el aumento de la magnitud de las retenciones chocó nada menos que contra la forma propia de la libertad en el modo de producción capitalista, entre cuyas formas jurídicas se hallan los principios de equidad fiscal y no confiscatoriedad. Esto permitió a los terratenientes presentarse como abstractos “productores” (lo que se ve reforzado por el hecho de que muchos son al mismo tiempo pequeños capitalistas) que se ven subyugados por un impuesto que excede los límites jurídicos, lo que lo convierte en “confiscatorio”.¹²⁴

En este sentido, la idea de que “el campo”, o en todo caso, los no menos abstractos “productores”, se veían especialmente perjudicados por la insaciable voracidad de un gobierno que buscaba expandir su recaudación incluso por medios confiscatorios, avasallando así nada menos que la propiedad privada, logró imponerse rápidamente, lo que le permitió a la Comisión de Enlace sumar apoyos de distintos sectores sociales. A esto se sumó el hecho de que los terratenientes llegaban al conflicto con suficiente fortaleza para sostener su acción durante un período prolongado, debido a la serie de buenas cosechas a precios en alza que les permitieron acumular una masa sustancial de renta.¹²⁵ Sobre esta

¹²³ El sustento jurídico del argumento de la confiscación utilizado durante el conflicto refería específicamente al artículo 17 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la propiedad privada y prohíbe la confiscación como pena. Claro que restaba aún nada menos que demostrar el hecho alegado. Y como el aparato judicial no se diera prisa en dar razón a presunción semejante, hubo que ampararse en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que todo impuesto superior al 33% es confiscatorio, y por lo tanto, de acuerdo al mentado artículo, inconstitucional. Véase al respecto, por ejemplo, la nota escrita por Daniel Sabsay, abogado constitucionalista (CL, 22/03/08). No obstante la fuerza que cobró este argumento, cabe destacar que el impuesto a las ganancias tanto para las sociedades anónimas como para las personas tiene un tope del 35%.

¹²⁴ Como ya señalamos, la Comisión de Enlace denunció el carácter confiscatorio de la medida al día siguiente de su anuncio, en un comunicado titulado “El campo dice basta”. Dicha conceptualización fue repetida posteriormente (véase, a modo de ejemplo, la conferencia de prensa del 8 de junio, reproducida parcialmente en P/12, 08/06/08). Incluso ya finalizado el conflicto, Miguens insistió con el concepto en la apertura de la Exposición Ganadera de la SRA en ese año (P/12, 02/08/08).

Por cierto, si bien el argumento apareció por primera vez entre los integrantes de la Comisión de Enlace, fue posteriormente retomado por otras organizaciones. En primer lugar, por partidos políticos de la oposición, entre ellos, la Coalición Cívica, (IB, 23/05/08), la Unión Cívica Radical (P/12, 30/03/08), y el Partido Demócrata Progresista, cuya base social se halla en la provincia de Santa Fe, donde se realiza buena parte de la producción de granos (ES, 19/03/08). Al mismo tiempo, la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) interpuso un recurso de amparo para dejar sin efecto la medida, que fue denegado por la justicia (P/12, 29/03/08).

Por supuesto, tampoco los medios de comunicación se privaron de editorializar al respecto. En particular, el periódico La Nación insistió reiteradamente sobre la cuestión (véase, por ejemplo, los editoriales del 03/06 y el 02/07).

¹²⁵ En otros contextos, sin embargo, esto no había resultado suficiente. Desde mediados de la década de 1940, en otro de los momentos históricos en que la magnitud de la renta agraria que fluye hacia la Argentina se expande violentamente, el congelamiento de los arrendamientos y la suspensión de los desalojos en un escenario de veloz pérdida de la capacidad de representar valor de los signos monetarios no dejó a aquéllos más

base, y actuando como integrante de la Comisión de Enlace, la SRA logró impedir la suba de la magnitud de las retenciones.

Repasemos una vez más la determinación. La forma específica con que acumula el capital en la Argentina se sustenta parcialmente en la apropiación de fracciones de renta de la tierra por parte de distintos sujetos sociales, entre los que destacan los fragmentos de capitales medios. Lo que significa que la clase terrateniente no se constituye como el único apropiador de renta de la tierra, sino que se ve forzada a dejar escapar una fracción de ella. Como vimos a lo largo del período estudiado, la acción política de la SRA como representante político de dicha clase es, en este sentido, la portadora de esta determinación bajo distintas formas.

Cuando la apropiación de renta transcurrió mediante mecanismos inmediatamente visibles, entre los que destacan las retenciones a la exportación, la SRA los enfrentó. Su acción, en este sentido, es portadora de la potencia que corresponde a los sujetos que representa: la de impedir que estas formas de apropiación traspasen ciertos límites, como el que hace chocar a dicho impuesto contra las formas jurídicas bajo las que se realiza la acumulación, o en el extremo, el de su propia reproducción como tales. Pero es incapaz de ir más allá de tales límites.

alternativa que la valorización de la renta de la tierra como capital prestado a interés. Dicha masa de riqueza social siguió su curso hacia los capitalistas industriales en general por medio de la existencia de una tasa de interés real negativa (Iñigo Carrera, 1998). Este panorama es distinto en el escenario actual, en el que los terratenientes pueden evitar que la renta de la tierra tenga este destino mediante dos caminos. Uno de ellos es su inversión como capital inmobiliario, lo que va a convertirlos a su vez en terratenientes urbanos (de acuerdo a Ferrero y Gallego (2012), el boom inmobiliario registrado en la provincia de Córdoba durante la década pasada se enmarca específicamente en este escenario). El otro refiere al desarrollo de una nueva tecnología de almacenamiento denominada "silobolsa", con la cual es posible acopiar granos por un período de tiempo relativamente extenso sin que se deteriore su valor de uso. De esta manera, la clase terrateniente puede literalmente sentarse a esperar la resolución del conflicto sobre su pequeña montaña de riqueza.

Por otra parte, la transformación en el sistema de arrendamientos, que comienzan a realizarse en muchas ocasiones por el lapso de una cosecha, operó también en favor de los terratenientes, ya que les permite elevar los cánones anualmente acompañando el movimiento de los precios, cosa que efectivamente hacen durante todo el período (Bisang, 2007).

Conclusiones generales

¿Qué potencias muestra tener, en síntesis, la SRA como representante de la clase terrateniente argentina? Habíamos señalado, inicialmente, que los planteos acerca de la potencia política de esta organización se dividen, de manera muy esquemática, en autores que le atribuyen un gran poder económico y político, mientras que otros afirman que, por distintas razones, dicho poder habría declinado marcadamente.

Aquí hemos partido de afirmar, en primer lugar, que dicha potencia sólo puede explicarse a partir de los sujetos sociales representados por esta entidad. Y como hemos mostrado, estos conforman la fracción agraria pampeana de la clase terrateniente. En otras palabras, la representación política de la SRA excede su base social, constituida principalmente por propietarios de tierras destinadas a la producción ganadera, puesto que la acción política de la asociación se extiende hasta abarcar también a los propietarios de tierras en las que la agricultura, y particularmente la producción de granos, es la actividad central.

Sobre esta base, fue posible arribar a la conclusión general, en la que se afirma que, lejos de aquella imagen que coloca a la clase terrateniente como el sujeto social dominante en el proceso nacional de acumulación, ésta no es capaz de impedir la continua la apropiación de renta de la tierra por parte de sujetos sociales distintos de ella. Al contrario, la acción de la SRA, en su representación, contribuye muchas veces al sostenimiento de las políticas que dan forma a tal apropiación.

Pero tampoco se trata, sin embargo, de una clase social que se halle en un proceso de decadencia o pérdida de su poderío, puesto que no deja de constituirse también ella como socia en dicha apropiación, rol que ha desempeñado desde su misma génesis. En este sentido, y por más que carezca de la fuerza para lograr que los terratenientes retengan la totalidad de la renta, la acción política de la SRA no deja de ser una de las formas concretas bajo las cuales estos logran embolsar su fracción correspondiente. Ni deja de tener, asimismo, la potencia para enfrentar exitosamente, en determinados contextos, algunos de los mecanismos de apropiación de renta.

Así, la principal conclusión que surge de la presente investigación consiste, en síntesis, en que la potencia que tiene la acción política de la SRA no es otra que la que corresponde a los sujetos sociales representados, es decir, a los terratenientes argentinos. Más precisamente, se concluye que la fuerza política de la SRA está dada por la determinación portada en la acción de la clase terrateniente local, que se constituye como forma de realizarse la unidad de un ámbito nacional de acumulación de capital cuya especificidad radica en la producción de mercancías agrarias portadoras de renta de la tierra, parte de la cual refluye hacia los capitales de los ámbitos nacionales de acumulación

que la dejan escapar. Y, en consecuencia, dicha acción conlleva la contradicción de ser forma concreta tanto de la apropiación de una fracción de renta por parte de los terratenientes como de la apropiación de otra porción por parte de sujetos sociales distintos a ellos. En suma, se concluye que las potencialidades y los límites que encuentra la fuerza política de la SRA se explican por ser la expresión de una clase terrateniente cuyo papel en el proceso nacional de acumulación de capital es el de apropiar sólo una fracción de renta de la tierra, dejando al mismo tiempo que otros apropien la restante.

Repasemos, por último, el camino seguido hasta alcanzar la conclusión antedicha. Comenzamos indagando en las determinaciones generales de la acción política de la clase terrateniente, desarrolladas sobre la base del análisis de las que corresponden a la acción de la clase capitalista. Allí señalamos que, en cuanto personificación del valor de uso que poseen, los terratenientes habrán de poner su conciencia y su voluntad al servicio de la apropiación de la mayor parte posible de renta de la tierra y que las organizaciones políticas bajo las que se nuclean ambas clases sociales juegan un papel relevante en su accionar.

Se trata hasta aquí, sin embargo, de determinaciones de carácter general. El siguiente paso en el análisis, por lo tanto, se dirigió hacia la indagación de la forma específica que toma la acumulación de capital en la Argentina. Dicho proceso se caracteriza tanto por la presencia de una multitud de pequeños capitales como por la de fragmentos de capitales de tamaño normal que aquí operan restringiendo su escala al minúsculo tamaño del mercado interno. Estos capitales encuentran aquí, sin embargo, distintas fuentes de compensación, entre las cuales destaca, tanto por su carácter continuo como por su magnitud, la apropiación de fracciones de renta de la tierra agraria. Lo cual determina que la relación antagónica que entabla la clase terrateniente respecto de la capitalista en torno a la apropiación del plusvalor que toma la forma de renta de la tierra se presenta aquí exacerbada, en la medida en que una fracción variable de esta riqueza social es desviada mediante distintos mecanismos hacia los capitales industriales. Esto hace prever que la clase terrateniente, por vía de las organizaciones que la representan políticamente, dará batalla para evitar o al menos limitar dicha apropiación.

A continuación, nos detuvimos brevemente en la forma concreta que adopta la acumulación de capital en la rama agraria en la región pampeana, y en la estructura social que ésta determina. La importancia de extender hasta allí el análisis radica tanto en que la apropiación de renta está ligada a la valorización del capital agrario como en el hecho de que las transformaciones en este proceso constituyen el escenario sobre el que la SRA actúa. Así, tras sintetizar la evolución en el largo plazo de la estructura agraria y repasar los debates acerca de las características concretas en las que se estructura actualmente la propiedad de la tierra, repasamos las tendencias más marcadas que caracterizaron la evolución de la rama agraria a lo largo de este período, centrándonos especialmente en la

expansión de la producción agrícola y el estancamiento relativo de la ganadería, fenómenos que ocurren sobre la base de una marcada aceleración en el proceso de concentración y centralización del capital.

Posteriormente, pasamos al análisis de la SRA, centrándonos en primer lugar en algunas de sus características generales que consideramos de relevancia, entre las cuales incluimos su creación y relación con los distintos gobiernos, base social, estructura interna, dirigencia, relación con otras organizaciones e ideología. Asimismo, mencionamos los aspectos más significativos de su acción política en el contexto de la crisis de finales de la década de 1980, deteniéndonos específicamente en el programa económico formulado en ese contexto. Luego nos detuvimos en la forma concreta que adoptó su acción política en el período investigado, dividiéndolo en cinco subperíodos: tres para los años de gobierno neoliberal, uno dedicado al período inmediatamente posterior a la salida de la Convertibilidad, y que coincide con la presidencia de Duhalde, mientras que el último se extiende hasta el conflicto del 2008. En estos capítulos desarrollamos la trayectoria política de la entidad, centrándonos en su relación con los distintos gobiernos, su estrategia de acción, y las alianzas entabladas, sin dejar de lado, cuando tuvo incidencia, los conflictos en su interior.

En el último capítulo, finalmente, procuramos desarrollar una explicación de su accionar centrándonos en estos aspectos específicos, de forma tal de poder avanzar hacia el análisis de la potencia de su acción política. En primer lugar, procuramos mostrar que, con base en el análisis de la orientación de su accionar, éste representa de manera general a la fracción agraria pampeana de la clase terrateniente. Esto determina, como señalamos de forma subsiguiente, que la ideología liberal que caracteriza su pensamiento es la forma concreta necesaria bajo la que rige su accionar. A continuación, nos detuvimos en su estrategia adoptada para perseguir sus objetivos y las alianzas entabladas, mostrando los vaivenes seguidos por la SRA en estos aspectos, así como los resultados obtenidos. Por último, y sobre estas bases, pasamos a analizar la potencia de la acción política de la SRA, llegando a las conclusiones ya sintetizadas.

Tales conclusiones se enmarcan, necesariamente, en el complejo y cambiante escenario de la representación de intereses del sector agropecuario, particularmente en el interior de la región pampeana. En efecto, y como ya señalamos, distintos autores han notado que dicha representación parece estar transformándose, principalmente debido al surgimiento de asociaciones de tipo técnico.¹²⁶ En este sentido, se ha planteado que dichas

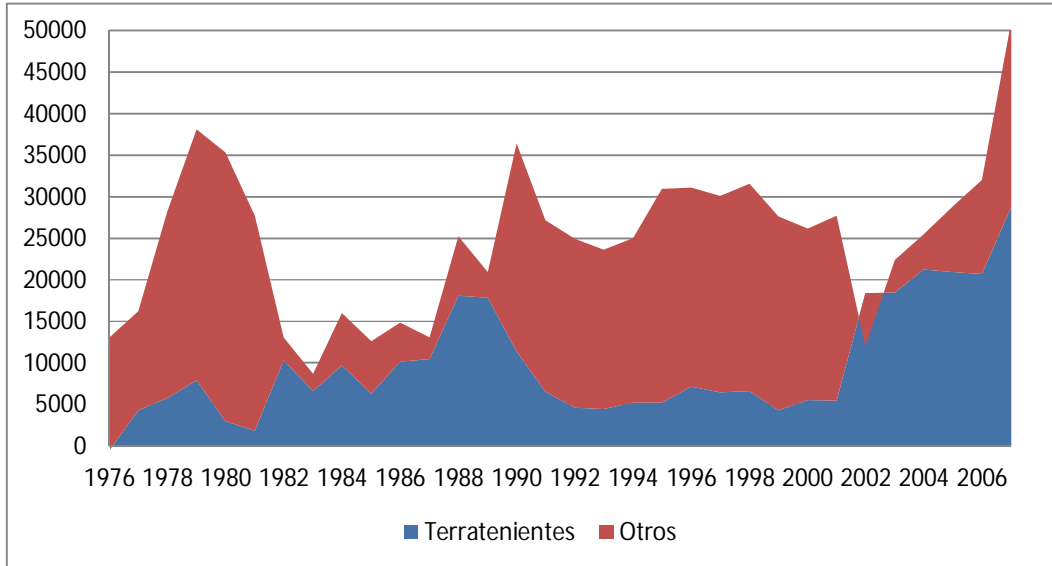
¹²⁶ A lo largo de la década de 1990 serían creadas una serie de asociaciones de tipo técnico que agrupan a los distintos eslabones de la cadena de producción de distintas mercancías agrarias (entre las cuales destacan particularmente las que refieren a la producción de granos, como ACSOJA, ASAGIR, MAIZAR, etc.). Ello se suma a la consolidación de otras, como AAPRESID, cuyo eje gira en torno a la producción mediante la utilización de la siembra directa y las técnicas y tecnologías vinculadas a ella.

entidades surgen para dar respuestas a necesidades que las entidades tradicionales no estarían en condiciones de ofrecer, y que podrían por lo tanto desarrollar una relación de competencia con éstas (Bocchicchio & Cattáneo, 2005). Asimismo, se ha relacionado su creación con el surgimiento de nuevos sujetos sociales en la producción agrícola, que se organizarían sobre la base de la producción en red (Anlló, 2013), y se habrían conformado en la nueva “cúpula agraria”, desplazando así a los sujetos sociales que conformarían anteriormente dicha cúpula, y cuya representación recaía sobre la SRA (Panero, 2014).

Al respecto, las conclusiones alcanzadas en la presente investigación apoyan la hipótesis de que la clase terrateniente necesita darse una representación política propia, que de momento parece escapar al alcance de estas nuevas organizaciones. Queda aún abierta, sin embargo, la pregunta por el funcionamiento de esta cambiante estructura de representación de intereses, así como de su relación con la estructura social de la rama agraria y, en última instancia, con la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina.

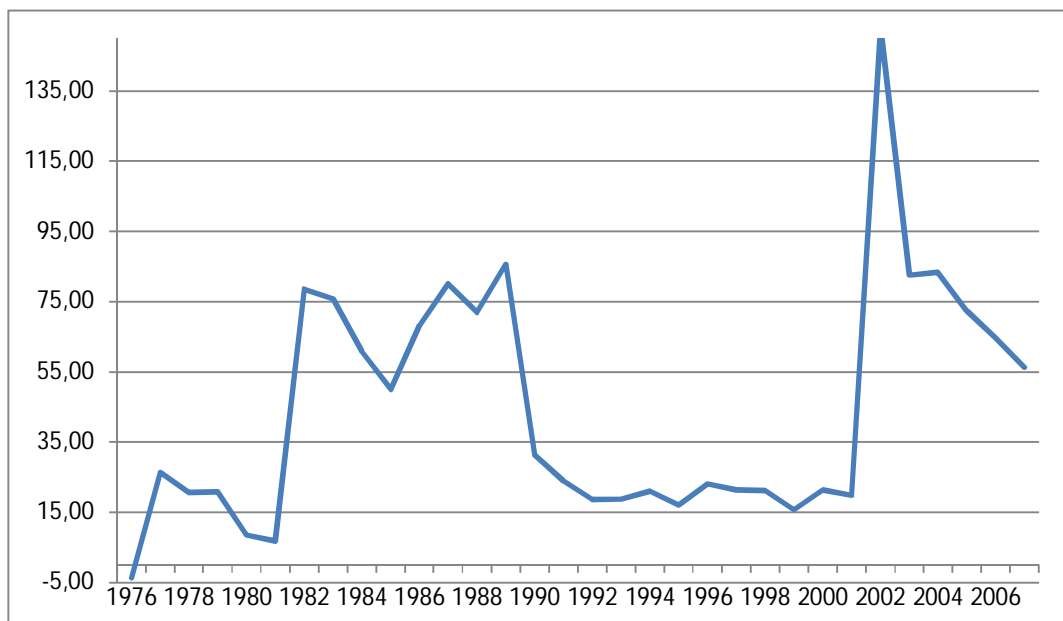
Anexo 1. Fuentes estadísticas

1. Magnitud y apropiación de la renta agraria en millones de \$ año 2004: 1976-2007



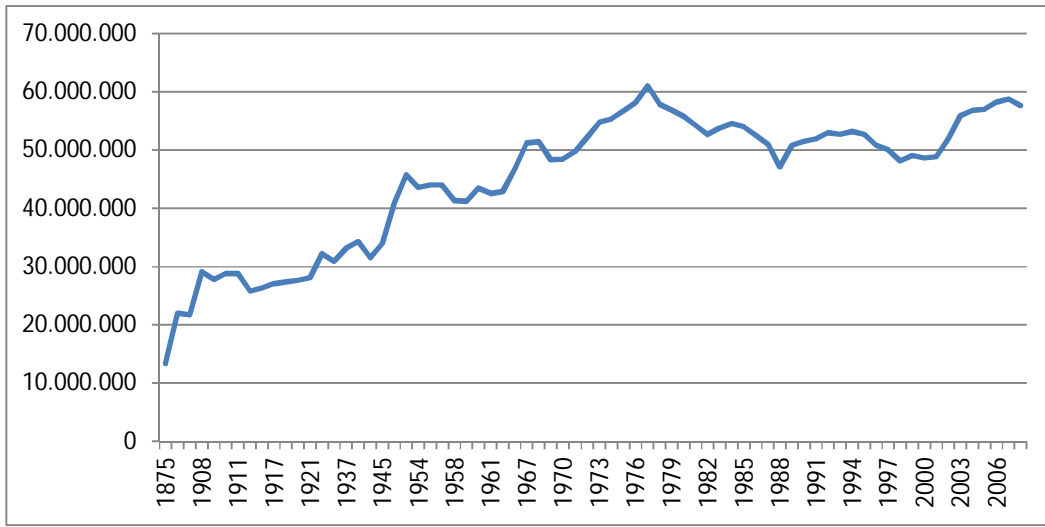
Fuente: Iñigo Carrera (2008).

2. Porcentaje del total de renta de la tierra apropiado por la clase terrateniente: 1976-2007



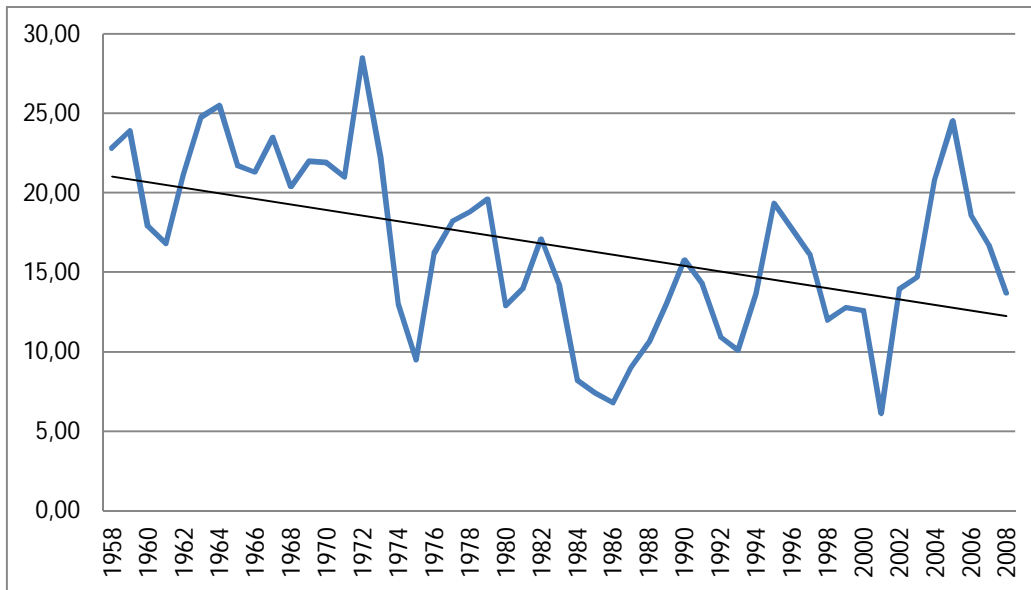
Fuente: Iñigo Carrera (2008).

3. Existencias totales de ganado bovino en millones de cabezas: 1875-2008



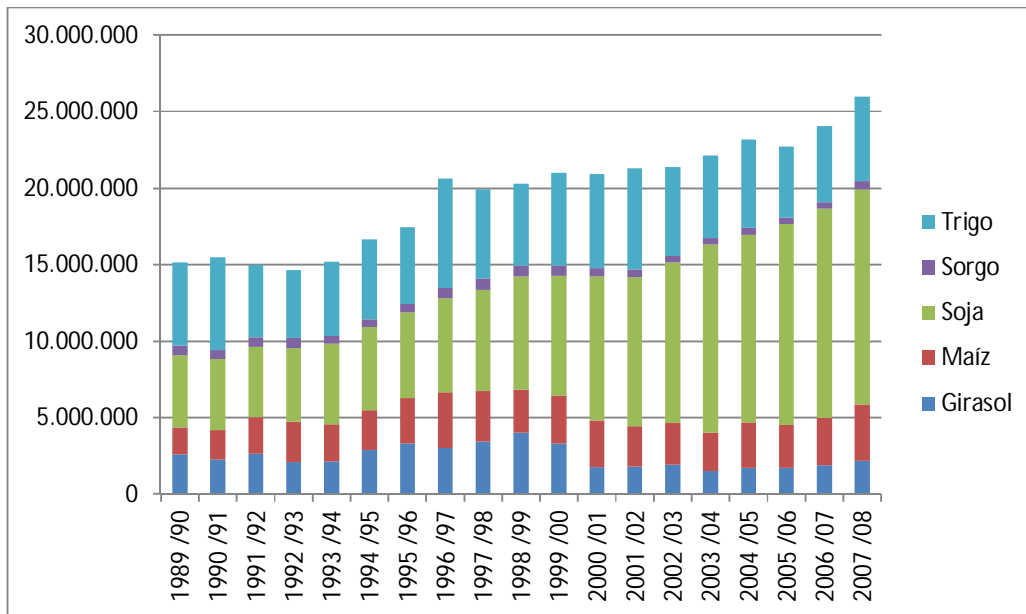
Fuente: Subsecretaría de Información y Estadística Pública, MINAGRI.

4. Exportación de carne fresca, porcentaje sobre el total producido: 1958-2008



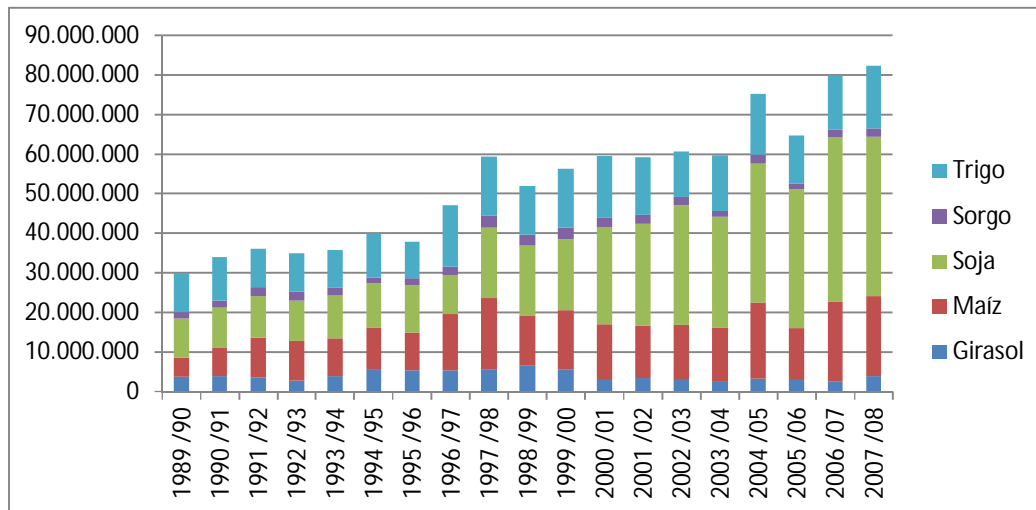
Fuente: Azcuy Ameghino (2007a).

5. Producción anual de granos en las provincias de la región pampeana, total y por producto, en toneladas: 1989-2008



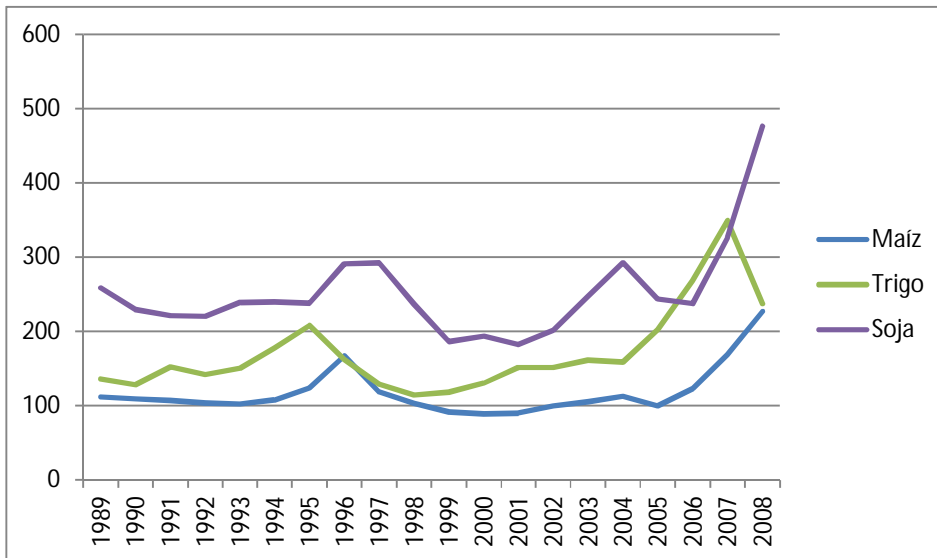
Fuente: Subsecretaría de Información y Estadística Pública, MINAGRI.

6. Superficie sembrada anual de granos y oleaginosas en las provincias de la región pampeana, total y por producto, en hectáreas: 1989-2008



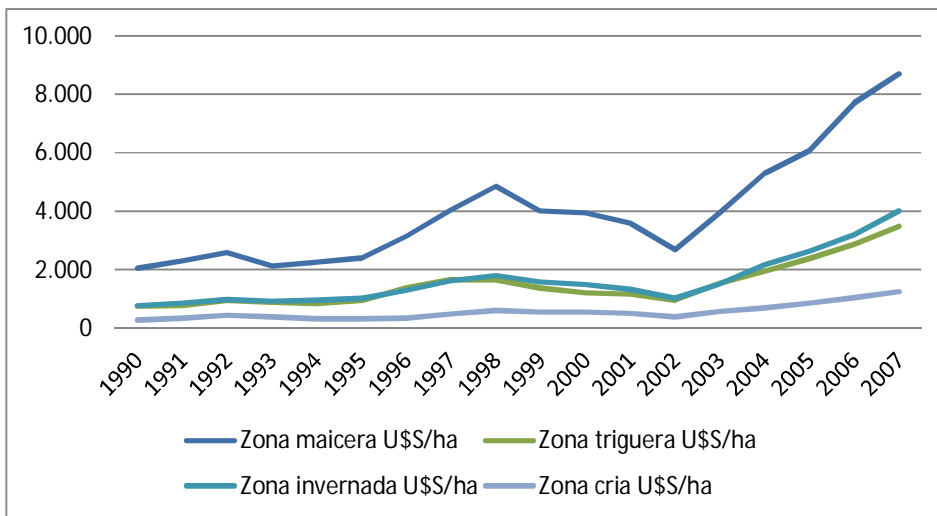
Fuente: Subsecretaría de Información y Estadística Pública, MINAGRI.

7. Precios promedio anuales en el mercado mundial de los granos de maíz, trigo y soja en US\$ por tn (FOB golfo): 1989-2008



Fuente: Subsecretaría de Información y Estadística Pública, MINAGRI.

8. Precios del arrendamiento de la tierra en la región pampeana para zonas agrícolas y ganaderas en US\$ por hectárea y quintales/kilaje.



Fuente: Bisang (2007).

9. Indicadores ganaderos: 1990-2008

AÑO	TRANSFORMACIÓN				EXPORTACION DE CARNE VACUNA			MERCADO INTERNO		NOVILLOS		
	Faena Total País (Cabezas)	Peso promedio Res	% Novillos	Producción (En miles de tns con hueso)	Volumen (En tns res con hueso)	Valor (en Miles de US\$)	Precio (US\$/ton. De res c/hueso)	Consumo Aparente (en miles de tns res c/hueso)	Consumo per Capita (Kg./Hab.)	Precio (Kilo Vivo en US\$)	Índice (1960=100)	Peso (Kilo Vivo)
1990	13.423.578	224	41,2	3.007	474.078	729.606	1.539	2.533	78,23	0,66	73	460
1991	13.516.311	211	37,2	2.854	407.333	730.348	1.793	2.447	75,02	0,75	82	455
1992	12.823.907	212	38,3	2.723	297.118	578.489	1.947	2.426	73,43	0,87	100	454
1993	13.216.597	211	37,9	2.787	281.133	556.362	1.979	2.506	74,86	0,77	86	449
1994	13.200.357	209	37,9	2.762	376.776	727.178	1.930	2.389	70,46	0,76	83	443
1995	12.857.408	209	37,5	2.688	520.062	1.004.760	1.932	2.171	63,21	0,79	81	441
1996	12.916.716	209	34,4	2.694	476.640	850.802	1.785	2.225	63,84	0,82	83	442
1997	12.794.717	212	36,4	2.712	437.852	815.280	1.862	2.284	64,81	0,91	92	442
1998	11.267.726	219	35	2.469	295.867	654.383	2.212	2.207	61,94	1,06	109	445
1999	12.145.029	224	37,2	2.719	347.599	661.658	1.904	2.387	66,24	0,79	85	451
2000	12.400.235	219	33,7	2.719	342.092	617.819	1.806	2.391	65,63	0,87	90	450
2001	11.586.732	215	30,8	2.489	152.599	215.774	1.414	2.348	63,82	0,77	81	455
2002	11.499.838	220	32,5	2.526	351.201	452.838	1.289	2.181	58,73	0,48	89	453
2003	12.531.634	213	30,5	2.664	391.983	577.206	1.473	2.280	60,82	0,64	97	449
2004	14.331.980	212	29,5	3.032	631.030	972.522	1.541	2.404	63,49	0,68	95	452
2005	14.350.320	219	32,8	3.148	771.427	1.294.966	1.679	2.379	62,26	0,77	98	457
2006	13.415.160	226	28,1	3.037	565.057	1.199.615	2.123	2.476	64,15	0,76	93	483
2007	14.955.659	216	23,7	3.224	539.011	1.281.042	2.377	2.688	68,97	0,85	94	480
2008	14.660.284	214	21,6	3.132	429.360	1.486.335	3.462	2.705	68,76	0,93	95	483

Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario, MINAGRI.

10. Superficie y número de EAPs en la región pampeana: 1988 y 2002

Escala	1988				2002				Variación intercensal			
	Explotaciones		Superficie		Explotaciones		Superficie		Explotaciones		Superficie	
	Nº	%	has	%	Nº	%	has	%	Nº	%	has	%
Hasta 25	31.804	16,9	367.728	0,5	17.034	12,7	204.240	0,3	-14.770	53,56	-163.488	55,54
25,1 a 100	53.268	28,4	3.605.087	5,1	33.496	25	2.056.378	3	-19.772	62,88	-1.548.709	57,04
100,1 a 200	35.846	19	5.277.614	7,5	24.294	18,11	3.607.689	5,28	-11.552	67,77	-1.669.925	68,36
200,1 a 500	37.666	20	12.005.504	17	29.352	21,89	9.517.207	13,92	-8.314	77,93	-2.488.297	79,27
500,1 a 1000	15.544	8,3	10.884.851	15,4	14.978	11,2	10.577.016	15,5	-566	96,36	-307.835	97,17
1000,1 a 2500	9.735	5,2	14.992.355	21,3	10.294	7,7	15.968.594	23,4	559	105,74	976.239	106,51
2500,1 a 5000	4.308	1,5	10.223.408	14,5	3.107	2,3	10.958.576	16	-1.201	72,12	735.168	107,19
Más de 5000	1.408	0,7	13.485.508	19,2	1.557	1,2	15.481.403	22,6	149	110,58	1.995.895	114,8
TOTAL	186.171	100	70.474.327	100	134.112	100	68.371.102	100	-52.059		-2.103.225	

Fuente: INDEC.

Anexo 2. La SRA y el devenir del predio de Palermo

La historia del predio de Palermo, hoy propiedad de la SRA, está caracterizada por un sinnúmero de vaivenes que reflejan la relación mantenida por la entidad con los distintos gobiernos. Y en buena medida, por lo tanto, la propia historia política de la Argentina. En lo que sigue repasaremos brevemente, y sobre la base de la investigación realizada por de Palomino (de Palomino, 1988, págs. 39-43) el devenir de dicho predio desde su cesión a la SRA hacia finales del siglo XIX, para posteriormente detenernos en los eventos sucedidos en el período comprendido por la presente tesis.

En 1878, y tras haber realizado las dos primeras exposiciones rurales en un terreno perteneciente a uno de sus socios fundadores, el Congreso otorgó a la asociación el usufructo del predio, hasta entonces de propiedad pública, para destinarlo a tal fin. A pesar del carácter precario de la concesión, éste se extendió a lo largo de casi tres décadas. En 1907 la concesión fue extendida por otros veinte años, al término de los cuales fue renovada por el mismo lapso. El vencimiento de esta última renovación, sin embargo, coincidió con el advenimiento del gobierno peronista, con el que la SRA entabló un vínculo sumamente conflictivo.

Ya en 1947, y estando aún vigente la concesión anterior, el gobierno cedió el uso de buena parte del predio al Ministerio de Guerra para el almacenamiento de material militar, limitando así el uso de la SRA a la exposición ganadera. En 1951, el predio fue donado a la Fundación Eva Perón, que permitió a la SRA realizar la exposición a cambio de una fracción de los ingresos allí generados. El gobierno de facto que derrocó al peronismo, sin embargo, devolvió el uso exclusivo a la asociación por otros veinte años, a condición de que ésta realizara una inversión destinada a mantener la infraestructura. Por su parte, el gobierno democrático de Frondizi, que sucedió a dicho régimen, reformuló en 1961 los términos de la cesión: otros veinte años a contar desde la fecha de su vencimiento, esto es, 1978, a condición de la construcción de un estadio con capacidad de albergar a 30.000 personas en los primeros diez años. Tras el siguiente golpe militar, en 1966, la SRA solicitó la anulación de la cláusula alegando el elevado costo de la obra y espacio insuficiente para su construcción. El régimen militar aceptó derogar la exigencia, pero no modificó el vencimiento legal de la última concesión, que expiraría en 1998.

El retorno del peronismo, en 1973, dio lugar a un nuevo capítulo en la saga. Ese mismo año, un decreto presidencial declaró extinta la concesión de 1961, alegando el incumplimiento de la obligación que acarreaba y había sido condonada por el gobierno militar, con lo cual el vencimiento volvía a situarse en 1978. Un nuevo golpe militar, sin embargo, volvió a auxiliar a la entidad, que reinició sus gestiones ante el nuevo gobierno de facto, más receptivo a sus peticiones. Pero no por completo: en 1979, y ya vencida la

concesión anterior, ésta fue prorrogada tan sólo por cinco años más, computados a partir del vencimiento de 1978; al mismo tiempo, se establecía expresamente que la prórroga estaba ligada a un desplazamiento de la exposición hacia otro lugar, dándole a la entidad un margen de tiempo para hallar un nuevo sitio en el que realizarla. De Palomino menciona que, aunque el intento no guarda registros en los documentos de la asociación, ésta intentó sin suerte comprar el predio en 1982. Ya en 1983, con el gobierno militar en retirada, la SRA insistió en obtener una extensión de la concesión antes de la asunción del siguiente presidente, que sería elegido democráticamente, y logró una prórroga de tres años. En 1986, el plazo fue extendido por otros tres años, ahora mediante una ley del Congreso.

Dicho plazo vencería entonces en 1989, año que abre el período analizado en la presente tesis, y en el que asume un nuevo gobierno democrático. Ante él, por lo tanto, la SRA volvería a iniciar gestiones en relación al predio, que tras ser usufructuado por aquélla de forma irregular durante más de un siglo, accedería finalmente a su propiedad. Su zigzagante historia, sin embargo, estaría lejos de discurrir por carriles más apacibles.¹²⁷

El decreto ley que enajena la propiedad fue publicado en 1992, aunque como señala Muro de Nadal (2009), las negociaciones comenzaron a desarrollarse desde la asunción de Menem a la presidencia, precisamente en el año en que volvía a vencer la última concesión. Y a pesar de los festejos por lo que fue considerado como la concreción de una “reivindicación histórica”, la transacción acarrearía innúmeros problemas a la SRA desde el mismo momento en que fue anunciada. Se trataba de una venta realizada en condiciones económicas muy favorables para la entidad, y que tenía por condición la realización de obras de infraestructura. Tras la divulgación del acuerdo, las críticas no tardaron en llegar.

A los reclamos por el valor al que fue tasada la propiedad, considerado un precio vil, se sumaron inmediatamente los que señalaban que la asociación no sería capaz de efectuar la prometida remodelación del lugar: “los que quieren y respetan a la Rural, e incluso los que pertenecemos a ella debemos ser [...] tolerantes ante los inescrupulosos y [...] los promotores del descontento que se preocuparán por demostrar que la Rural no hace nada. Nuestra respuesta deberá ser una sola, la ejecución de las obras programadas” (A-Mar92: 5). Como veremos, la respuesta en cuestión no tuvo la contundencia declamada.

El quid de la cuestión, sin embargo, se hallaba en el valor del terreno. Tras haber sido tasado en más de 900 millones de dólares, el predio acabó siendo vendido por apenas

¹²⁷ La reconstrucción del devenir del predio ya bajo propiedad de la SRA puede hallarse, principalmente, en notas periodísticas publicadas en *Página/12*. Se trata no sólo del medio de prensa que dedicó más espacio al tema, sino que colaboró activamente en la denuncia de buena parte de esta trama mediante investigaciones realizadas por Horacio Verbitsky (véanse P/12, 12/09/99, 05/05/00, 30/07/00, 14/06/09, 23/12/12). Se han consultado, asimismo, otras publicaciones de prensa (IB, 08/01/13; IJ 08/02/15; CL, 13/05/99, 27/02/08; LN, 30/04/04), así como las Memorias de la asociación. Debido a que la información se halla repartida en estas distintas fuentes, que contienen por otra parte, en numerosas ocasiones, errores o imprecisiones, hemos optado por no referirlas más que cuando realizamos transcripciones, de forma tal de no interrumpir constantemente la lectura con las referencias.

30. Pero no sólo el valor pactado se hallaba varias veces por debajo del originalmente estimado, sino que la forma de pago acordada también resultó sospechosa: 10% a la firma más 10 cuotas de 2 millones de dólares, con dos años de gracia y a una tasa de interés marcadamente más baja que la del mercado.

Pero aquí no terminaba el problema. El argumento por el cual se justificaba el bajo precio al que se cedía el predio radicaba en que se trataba de un terreno cuya zonificación restringía fuertemente su explotación comercial. En este sentido, la SRA, como asociación civil sin fines de lucro, asumió el compromiso de limitar el uso del predio al funcionamiento del mencionado Centro Internacional de Exposiciones y Congresos, para lo cual se comprometía a efectuar las obras necesarias. Inmediatamente a la firma de la escritura, en 1992, la SRA constituyó “La Rural de Palermo” Sociedad Anónima, suscribiendo el 99% de un capital inicial de 12.000\$. El propósito de dicha sociedad, sin embargo, no era otro que el lucro, puesto que su objeto consistía en “generar la explotación de ferias, exposiciones y congresos, de hoteles y locales gastronómicos en todos sus ramos, de espectáculos y de sus afines o derivados, por cuenta propia o de terceros y/o asociada con terceros, pudiendo a tales efectos realizar sin limitación toda actividad conexas” (P/12, 12/09/99). Para ello formó inmediatamente un consorcio junto con Raúl Moneta, escribano, criador de caballos y dueño del Banco República y presidente del holding Citicorp Equity Investments (CEI), quien asumió entonces la organización de los principales eventos en el predio.

Estas irregularidades en la venta tomaron inmediatamente estado público. Particularmente, los partidos de la oposición denunciaron insistentemente el precio de venta como uno de los tantos negocios espurios que se constituirían como característica del gobierno menemista. El proyecto de construcción de un centro comercial recibió también fuertes críticas, puesto que la enajenación de los terrenos se había realizado, como señalamos, sobre la base de su utilización por una organización sin fines de lucro.

Tras el escándalo que había causado la compra de los terrenos, el consorcio formado con Moneta bajo el paraguas del CEI-Citicorp había comenzado a trastabillar junto con la situación económica de dicho grupo, afectada por la llamada “crisis del tequila”, en 1994.. Por otra parte, los balances de la SRA habían arrojado saldos fuertemente negativos durante algunos años, como consecuencia del pago de la deuda y los intereses. Todo esto mientras las obras no habían sido siquiera puestas en marcha.

Ante la incapacidad del CEI de hacerse cargo del desarrollo del proyecto, la CD decidió ampliar el consorcio y transformarlo en una sociedad con otra empresa, bajo la figura legal de una unión transitoria de empresas (UTE). Tras evaluar distintos socios posibles, en 1995 la dirigencia acabó inclinándose por OGDEN, un capital con sede oficial en Delaware, considerado un paraíso fiscal estadounidense.

La asociación con OGDEN liberaba a la SRA de las deudas contraídas con los bancos privados para la adquisición del predio, puesto que dicha empresa adelantó a la SRA la suma de 15 millones de dólares en contrapartida por el establecimiento del usufructo compartido sobre el predio. La persecución de dicho usufructo, sin embargo, se convertiría en un serio problema para la entidad.

Ya en una Asamblea Extraordinaria realizada ese mismo año con el objeto de votar la asociación con OGDEN, la dirigencia adelantó a los socios presentes algunos de los problemas que se avecinaban. En primer lugar, la SRA se había obligado a determinados cargos en la operación de compra del predio: descuentos a jubilados y estudiantes, la cesión del predio al Estado durante 15 días anuales, y el 5% del ingreso de las boleterías, lo que significaba “un menor valor del negocio futuro que quiera realizarse en el Predio”, aunque, según señaló Crotto, dichos cargos “justificaron que la SRA pudiera comprar el Predio del modo en que lo hizo”. Pero la principal dificultad sería otra: “actualmente el Municipio tiene zonificado el Predio como parque, de manera que aún es necesario superar ciertos trámites administrativos para que esa zonificación [...] permita construcciones que son necesarias para la remodelación del Predio”. Y es que el bajo precio al que fue vendido el predio debió apoyarse, como señalamos, en la zonificación bajo la que se hallaba. La SRA confiaba en poder realizar los “trámites administrativos” necesarios para solucionar este inconveniente, que consistían lisa y llanamente en el cambio de zonificación. El detalle es que el trámite en cuestión debía pasar nada menos que por la legislatura porteña, lo que no garantizaba su éxito. De hecho, ni siquiera el convenido Centro de Convenciones había podido empezar a construirse, pues tampoco se hallaba en conformidad con la zonificación del área.

La sociedad con OGDEN dependía entonces del éxito de estos “trámites”, puesto que dicha empresa no estaba interesada en ninguno de los usos a los que la SRA se había comprometido formalmente:

Estos aspectos del cargo público constituyeron inconvenientes en la negociación [...]. OGDEN en todo momento planteó que no quería estar sujeto a una exigencia de tipo indefinido, sobre todo referida a componentes del proyecto que no son rentables, como es el Centro de Convenciones y Congresos. De manera tal que los acuerdos a que hemos llegado establecen una limitación al monto que la UTE se dispone a invertir en el cumplimiento de los cargos del Estado.

En otras palabras, las condiciones de la sociedad implicaban que la SRA sería el principal responsable de la ejecución de las obras menos o nada lucrativas (OGDEN se comprometía a obtener una suma fijada en 4,5 millones de dólares para dicho proyecto), mientras que los beneficios de las que sí lo eran serían compartidos. Mientras tanto, las

finanzas de la SRA experimentaban un serio declive. El pago de la deuda por la compra había llevado a la organización a tener que sostenerse de forma bastante precaria:

¿Cómo se puede financiar el déficit? En parte como se está haciendo: sin realizar mantenimientos ni reparaciones [en el predio] [...]. Además, podríamos no cumplir con [...] las obras que se exigen y que tendrían que estar terminadas en 1997 [...]. De todas maneras podemos ver que aún sin realizar mantenimiento y sin cumplir con el cargo público aparece un saldo negativo a financiar. ¿Cómo se financia eso? No pagando la deuda de compra del Predio, que es lo que está sucediendo. En estos momentos la SRA no está cumpliendo con el cargo público; en estas condiciones de explotación no puede hacerlo y no puede pagar la hipoteca de compra del Predio. Está sometida a un riesgo institucional muy grande (M96: 84-90).

A pesar de las condiciones privilegiadas bajo las que la SRA accedió a la propiedad del predio, ni su compra ni su explotación estaban demostrando haber sido un buen negocio. Sin embargo, la dirigencia mostraba ya consenso en torno al mismo. Prueba de ello fue que incluso Horacio Gutiérrez, otrora enfrentado a la conducción oficial de la entidad, manifestó su acuerdo con la propuesta en la Asamblea.

La entidad resolvió en lo inmediato sus problemas de caja mediante la venta del predio que poseía en Del Viso en 1996, por unos 26 millones de dólares. Esto le permitió cancelar también la deuda con los bancos privados por la compra del predio de Palermo. Al mismo tiempo, aplicó su propio plan de ajuste: solamente en el ejercicio de 1996/7 despidió a la tercera parte de su personal y traspasó a gran número a la UTE (M97: 76-7).

Así, la deuda con el Estado y los bancos privados por la compra del predio logró ser cancelada. Esto suponía haber dejado atrás el riesgo de una quiebra económica, aunque los escándalos relacionados con la operación habían manchado irremediabilmente la imagen de la entidad, que volvería a dar un paso en falso en su intento por explotar el predio.

El proyecto propuesto por OGDEN consistía en la construcción de 20 salas de cine con capacidad para 4500 butacas, una sala para proyección de cine tridimensional para 500 espectadores, sala de bowling con 16 pistas profesionales, locales, restaurantes y patio de comidas. La inversión total se estimaba en 173,5 millones de dólares.

En 1998, la UTE solicitó y obtuvo un crédito de 106 millones de dólares del Banco Provincia, a pagarse en en 9 años y medio, con 2 años de gracia y una tasa de interés menor al 10%, mucho menor a la vigente para préstamos en dólares para firmas de primera línea, que oscilaba en torno del 14% y en condiciones menos ventajosas. Se trataría de otra operación plagada de irregularidades. En primer lugar, el crédito, que se constituyó como el segundo en importancia concedido a una entidad privada por parte del BAPRO, se había otorgado sin más garantía que la futura explotación del predio. Es decir, sin ninguna

garantía real. Además, el proyecto al que la UTE pensaba aplicarlo implicaba necesariamente la re zonificación del área, cuestión que no podía garantizarse. Por otra parte, el crédito cubría el 62% de la inversión proyectada, lo que constituye de por sí un porcentaje inusualmente alto, y más aún en el área de entretenimientos, considerada de alto riesgo. Finalmente, la justificación del propio préstamo se convirtió en un desafío para el directorio del Banco, ya que contravenía la principal condición de su otorgamiento: no sólo la actividad se desarrollaría fuera de la provincia, sino que no era de interés para el desarrollo de la economía provincial.

El otorgamiento del crédito en dichas condiciones acabó forzando la renuncia de uno de los miembros del directorio. Aunque no precisamente la de Juan Anchorena, director de la SRA que no consideró necesario excusarse de participar en la votación. Ni tampoco la de Carlos Sánchez, ex viceministro de Economía durante la gestión de Cavallo. Cabe destacar, asimismo, que Anchorena integraría la lista de candidatos en la boleta que llevaba como presidente a Duhalde, quien como gobernador de la provincia había nombrado a los directores del banco en cuestión.

Las condiciones en las que se otorgó el préstamo, así como el entramado de relaciones con los distintos partidos políticos llevaron a que Horacio Piemonte, legislador del FREPASO, presentara un pedido de informe en la legislatura y posteriormente una denuncia, que se constituiría en una nueva mancha para el ya bastante mancillado prestigio de la organización. El estudio realizado por el legislador suponía que la magnitud de los beneficios y las condiciones del crédito involucraban la existencia de retornos o de socios encubiertos. En este sentido, una investigación de Página/12 reveló la existencia de un aporte de OGDEN a la campaña presidencial de De la Rúa, mientras que Alberto Fernández, a la sazón director del BAPRO y responsable de la fundación Duhalde Presidente, declinó responder si también había recibido una contribución (P/12, 19/09/99).

Para peor, las organizaciones vecinales habían tenido éxito en detener las obras. A pesar de las objeciones presentadas por asociaciones de vecinos que rechazaban los negocios hechos en torno al predio y las obras proyectadas aduciendo que traerían problemas al barrio, de La Rúa había aprobado las dos primeras etapas: un centro de exposiciones de 5.000 metros cuadrados y un centro de exhibiciones, en un pabellón de 35 mil metros cuadrados. El primero fue inaugurado en julio de 1998, y con él la SRA cumplía con lo estipulado en la compra del predio; el segundo sería concluido a mediados del año siguiente. Pero el proyecto de un centro de entretenimientos con cines y restaurantes, que constituía la tercera etapa, y la más jugosa (o acaso la única) en términos de rentabilidad, fue rechazado en marzo de 1999 por la Secretaría de Planeamiento por no guardar relación con el centro de exposiciones. La UTE Ogden-Rural presionó entonces por la re zonificación, y de la Rúa envió en abril un proyecto a la Legislatura para avanzar en este sentido y

permitir así la construcción de los cines. Pero en mayo de 1999 la Legislatura lo devolvió al Gobierno de la Ciudad sin siquiera discutirlo, por carecer de fundamentos e informes técnicos sobre el impacto que tendría en el barrio. Además, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, exhortó a la Legislatura y al Gobierno porteño a rechazar el proyecto de rezonificación, ya que desnaturalizaría las condiciones de venta oportunamente fijadas y afectaría el medio ambiente. El proyecto fue reenviado el mes siguiente, pero una denuncia presentada por la Asociación Amigos del Lago encontraría eco en el fiscal Campagnoli, quien retuvo el expediente para dar inicio a la investigación.

El fracaso en el desarrollo del proyecto dejó además un gigantesco símbolo: el pozo en el que se emplazarían los cimientos. Confiando en que lograrían sortear favorablemente lo que se revelaría como algo más complicado que un simple “trámite administrativo”, la UTE había comenzado a construir las obras, que nunca pasaron del pozo.

Apenas unos meses más tarde, la SRA recibió un nuevo golpe: Ogden Corporation acababa de anunciar en Estados Unidos que pondría en venta sus inversiones en negocios de aviación y entretenimientos, con el objetivo de concentrarse en el sector energético. Esto afectaba todas sus actividades en la Argentina: la administración de los aeropuertos, el hotel y casino Iguazú y el negocio con la Rural de Palermo S.A. La SRA debía buscar entonces un nuevo socio para un proyecto que aparecía, cada vez, como más difícil de realizar. Y que, preferentemente, ostentara credenciales morales y judiciales algo mejores a los anteriores: Raúl Moneta, el socio electo inicialmente, no sólo había sido acusado de subversión económica, asociación ilícita y evasión fiscal en el marco de la causa de la quiebra del Banco República, sino que a esta altura se hallaba ya prófugo de la justicia, e Interpol había pedido su captura.

Peores noticias aún les traería el año siguiente, en el que la venta del predio comenzaría a reportarle nuevos problemas, esta vez en el ámbito judicial. En mayo del 2000, y a raíz de la denuncia presentada el año anterior, Campagnoli pidió, en el marco de una megacausa sobre la usurpación de tierras públicas del Parque Tres de Febrero, la indagatoria de Menem y Cavallo, acusados de fraude por la venta del predio, y de De la Rúa, por permitir su remodelación a pesar de que el área mantenía su zonificación como “urbanización parque”, bajo la que la instalación de toda otra cosa que no fueran bancos, fuentes o árboles es irregular. El fiscal solicitó además la citación de los funcionarios del gobierno involucrados en la transferencia, así como de varios miembros de la CD de la SRA, incluyendo a Crotto, aún presidente.

A mediados de 2001, Crotto afirmó que había logrado consensuar con Aníbal Ibarra el cambio de zonificación, lo que autorizaría a realizar “construcciones complementarias” al uso principal, aunque el proyecto original de los cines sería, por así decirlo, sepultado en el pozo: “ya desistimos de los cines, sabemos que perdimos”, habría afirmado Crotto (P/12,

14/06/09). Evidentemente, sin embargo, aún no se resignaba aún a perder por completo, puesto que anunció inmediatamente la apertura de dos nuevas cuadras en la prolongación de la calle Darregueira, en las que se construirían restaurantes, bares, cafés, galerías comerciales y un hotel cinco estrellas. Una nueva presentación judicial de una asociación vecinal, sin embargo, paralizó el proyecto, precisamente en el momento en que Ogden Corporation anunciaba en Estados Unidos su convocatoria de acreedores.

Mientras tanto, la UTE seguía siendo el epicentro del desgaste al que se veía sometida la CD de la SRA. En efecto, parte de su dirigencia no sólo había pasado a ser remunerada por su tarea al frente de ella, como señalamos previamente, sino también fuera de ella. O no exactamente fuera: al tiempo que era presidente de la SRA, Crotto había sido nombrado director de la UTE, junto a otros dirigentes de la CD como Juan Ravagnan y Carlos Hubert. Dicho cargo venía acompañado de una retribución: la asamblea de accionistas determinó el cobro de unos 5.000\$ mensuales por sus funciones técnico-administrativas. Esta remuneración, se señalaba, constituía un conflicto entre el interés de la asociación civil y el de la sociedad anónima privada, y fue eje de una nueva polémica pública.

También la crisis de la Convertibilidad desembocaría en una situación difícil para la SRA. Hacia fines del año 2001, la entidad solicitó al gobierno una refinanciación de la deuda, argumentando problemas financieros e imposibilidad de explotar comercialmente el predio. La devaluación posterior, sin embargo, acabó derivando en una extensa discusión con los organismos del Estado que tenían a cargo el cobro de la deuda, ante quienes reclamaron la pesificación de la deuda en 1 a 1 y el no pago de intereses, discusión que se extendería hasta años posteriores a los comprendidos por esta investigación.

Paralelamente, la SRA seguía buscando un reemplazante para su socio en retirada, ya que seguía sin estar en condiciones de adquirir el porcentaje accionario que se hallaba a la venta tras la convocatoria de acreedores efectuada por aquél. En este marco, y durante el transcurso del 2003, resolvió ofrecer el paquete accionario a Francisco de Narváez, empresario local que se había constituido como accionista de distintos capitales y comenzaba a incursionar en la política: en 2005 sería electo diputado nacional por el PJ por la provincia de Buenos Aires.

A propuesta de la CD, la Asamblea Ordinaria del 2003 votó venderle el 50% de las acciones anteriormente controladas por OGDEN. El comprador, sin embargo, no fue de Narváez en persona (que sólo adquirió el 5% del paquete), sino otra empresa de la cual éste poseía la mayoría accionaria. Como parte de la operación, de Narváez se comprometió al pago o la refinanciación de la deuda de la SRA con OGDEN, quien le había adelantado dos millones de dólares para el pago de la deuda que la entidad rural mantenía a su vez por la compra del predio con el ONABE, organismo estatal que administra los bienes del Estado.

Asimismo, De Narvéez se comprometía al pago 60.000 US\$ mensuales durante cinco años, en concepto de adelanto por la mitad de las ganancias que corresponderían a La Rural S.A. por la explotación del lugar, aunque hasta el momento no había dado más que pérdidas. Evidentemente, también aquél creía ser capaz de torcer el destino del predio y hacerse así de un magnífico negocio inmobiliario que ofrecería a Creurban, desarrollador inmobiliario de la familia Macri.

La asamblea en la que se resolvieron estas cuestiones fue bastante agitada, de acuerdo a las crónicas periodísticas. Roque Cassini, uno de los socios que lideraba la fracción disidente, mocionó allí para que el estado patrimonial no se aprobara, puesto que la organización estaba cerca de pasar a tener un patrimonio neto negativo, con lo cual podría pasar a estar técnicamente disuelta. El argumento exhibido refería que el principal activo de la organización no figuraba en ningún lado, puesto que estaba afectado a Ogden Rural S.A., de la cual no se presentaban los balances. Sin embargo, deducía de los balances de la SRA que ésta seguía generando pérdidas, puesto que La Rural S.A., y con ella la propia SRA, había perdido la mitad de su patrimonio neto en tres años. Por su parte, Roberto Roemer, otro de los miembros de la corriente de oposición, denunció también que el manejo de las sociedades desviaba a la SRA de su verdadero fin, la defensa del sector agrario, así como el hecho de que la entidad pagara a miembros de la CD suculentos honorarios en el año 2001 a pesar de registrar pérdidas. Otros socios, asimismo, denunciaron que la información de OGDEN se ocultaba deliberadamente. Todo esto mediado por una sucesión de griteríos. El balance, finalmente, se aprobó por 120 votos contra 44 con 6 abstenciones.

Pocos meses después, en abril del 2004, la SRA convocó a una Asamblea Extraordinaria en la que se mocionó la aceptación de la refinanciación de la deuda con el BAPRO (que un año atrás había presentado una demanda por el total de la deuda que superaba ya los cien millones de pesos) y se consideró la posibilidad de vender el restante paquete accionario a De Narvéez. Éste ofrecía además hacerse cargo de la deuda con el BAPRO, el adelantamiento de los más de cuatro millones que la entidad debía aún al Estado por la compra del predio, la prórroga hasta el 2025 del canon mensual adelantado a la entidad, y el 20% de las ganancias obtenidas en la exposición ganadera. Pero aún quedaba la posibilidad, ya anunciada por Crotto, y planteada como tercer punto a discutir en la asamblea, de firmar un convenio con el gobierno de la ciudad por el cual se realizaría un nuevo intento por explotar inmobiliariamente la calle Darregueira, ya separada del predio y por lo tanto rezonificada como las manzanas aledañas.

Nuevamente un grupo de socios impugnó las decisiones, a las que se habían ya anticipado mediante un comunicado firmado por el grupo de Cassini, que había sumado también a Celedonio Pereda, otro ex presidente (1972-78) y vice (1970-72) de la SRA. Sus integrantes objetaban que la cesión representaba “la quiebra de la SRA”, ponía en juego el

predio, perteneciente al “acervo histórico del país”, y condicionaba “la autonomía e independencia gremial de la SRA” (LN, 30/04/04). Miguens, por su parte, afirmaba en la carta con que convocaba a los socios que lo que se buscaba era desvincularse del “riesgo del negocio ferial y del pago de la deuda refinanciada”, mientras que se conservaría el derecho a coorganizar la exposición ganadera. Pero esta vez la pelea se trasladó al seno de la propia CD, ya que el ex presidente de Zavalía criticó ante la asamblea el acuerdo, obteniendo una respuesta no muy amable de Miguens. A pesar del nuevo escándalo, más del 90% de los socios presentes (226 contra 20) aprobaron las propuestas.

La operación constituyó otro fracaso. Tras el recurso de amparo interpuesto por la asociación vecinal en el 2001, sobre la calle en cuestión no se logró construir más que edificios de oficinas. En el 2004, Ibarra autorizó la continuación de las obras (a excepción de las salas de cine) por decreto, esquivando así enviar el proyecto a la legislatura con el argumento de que no era necesaria la rezonificación por tratarse de construcciones “complementarias” del centro de exposiciones. Ante la denuncia de partidos de oposición, la jueza Elena Liberatori declaró nula la resolución paralizando así las obras, lo que provocó un duro enfrentamiento con el gobierno de Ibarra. Al año siguiente, el juez Roberto Gallardo clausuró el predio en su totalidad, tras descubrir que no contaba con la habilitación municipal definitiva.

Un nuevo intento de rezonificación del predio, que avanzó bajo el gobierno interino de Jorge Telerman y fue apoyado posteriormente por Mauricio Macri tras asumir la jefatura de gobierno en el 2007, tampoco logró ser aprobado. La viabilidad de las obras, por otra parte, había quedado sujeta a la resolución de un juicio ordinario, de incalculable duración. En julio del 2006, De Narvárez asestó otra estocada a la entidad al dejar de pagarle el canon mensual. Y a pesar de que ésta lo intimó mediante cartas documento, no logró hacerlo cumplir lo pactado. La SRA volvía a fallar, de este modo, en hallar un socio fiable para poner en marcha la explotación del predio.

Explotación que, por otra parte, parecía hallarse cada vez más lejana en el horizonte. Así, lo que parecía haber sido un negocio insuperable acabó por revelarse como un quebradero de cabeza interminable. Que no se agotó, ciertamente en este período.

Hacia finales del 2012, y ya mediando un vínculo de manifiesta enemistad, el gobierno kirchnerista decretó la nulidad del decreto de venta del predio a la SRA, e intentó recuperar para el Estado la propiedad del predio mediante una medida cautelar, que fue rechazada al año siguiente. A principios del 2015, asimismo, el juez a cargo de la investigación de un fraude en la compraventa del predio elevó la causa a juicio oral, reabriendo así la posibilidad de que el Estado vuelva a obtener, en el caso de un veredicto favorable, la propiedad del predio. A mediados de ese mismo año, la Cámara del Crimen porteña confirmó el procesamiento de algunos dirigentes y ex dirigentes de la entidad en

una causa paralela: la que refiere a la existencia de irregularidades en el otorgamiento del crédito del BAPRO. Mientras tanto, tras la salida de De Narváez, el 50% del paquete accionario que controlaba se repartiría entre dos nuevos socios.

Así, la saga del predio sigue abierta, y promete nuevos capítulos.

Fuentes primarias y sus abreviaturas

Diarios y revistas

CL: Clarín
DR: Diario Registrado
EP: revista El Periodista
EPO: El Popular de Olavarría
ES: El Santafesino
IB: Infobae
IC: Infocampo
IJ: Infojus
IP: IProfesional
LN: La Nación
P/12: Página/12
PE: Perfil
VC: La Voz del Campo

Documentos de la SRA

A-MesAño: Anales de la SRA
M-Año: Memoria y Balance de la SRA

Otros documentos institucionales

FCA (2004): "Si la agroindustria crece, crece la Argentina. Declaración de principios del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina", Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, 2004. Consultado el 02/05/2015 en <http://www.foroagroindustrial.org.ar/files/declaracion.pdf>

Bibliografía

- Acuña, C. (1990). *Intereses empresarios, dictadura y democracia en la Argentina actual, o, Sobre porqué la burguesía abandona estrategias autoritarias y opta por la estabilidad democrática* (Vol. 39). Buenos Aires: Cedes.
- Acuña, C. (1994). El análisis de la burguesía como actor político. *Realidad económica*(128), 45-77.
- Acuña, C. (1995). Política y economía en la Argentina de los noventa (o porqué el futuro ya no es lo que solía ser). En C. Acuña, *La nueva matriz política argentina* (págs. 61-83). Buenos Aires: Nueva visión.
- Alapin, H. (2008). *Rastrojos y algo más. Historia de la siembra directa en Argentina*. Buenos Aires: Teseo.
- Anlló, G. (2013). Cambio de paradigma tecno-productivo y ¿crisis de representación? Nuevas y viejas entidades de la producción agrícola. En Claves para repensar el agro argentino, Anlló, G; Bisang, R; Campi, M; (págs. 259-284). Buenos Aires: Eudeba.
- Argañaráz, N., Devalle, S., & D'Angelo, M. (2012). *Una "constelación" de tasas municipales en Argentina: Existen más de 130 tipos de tasas diferentes*. IARAF.
- Arthur, C. (2002). Capital in General and Marx's Capital. En M. Campbell, & G. Reuten, *The culmination of capital : essays on volume three of Marx's Capital* (págs. 42-64). London / New York: Palgrave-Macmillan.
- Ave-Llallé, G. (2008 [1835-1910]). *Antología 1835-1910*. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional, 2008.
- Avellaneda, N. (1915). *Estudio sobre las leyes de tierra pública*. Buenos Aires: La facultad.
- Azcuy Ameghino, E. (2004a). De la Convertibilidad a la devaluación: el agro pampeano y el modelo neoliberal, 1991-2001. En E. Azcuy Ameghino, *Trincheras en la historia* (págs. 229-72). Buenos Aires: Imago mundi.
- Azcuy Ameghino, E. (2004b). Reformas económicas y conflicto social agrario: la Argentina menemista, 1991-1999. En E. Azcuy Ameghino, *Trincheras en la historia. Historiografía, marxismo y debates* (págs. 215-28). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Azcuy Ameghino, E. (2007a). *La carne vacuna argentina*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Azcuy Ameghino, E. (2007b). "Prueba nombrar de memoria cinco empresas que estén explotando campos..." Propiedad y renta de la tierra en la Argentina a comienzos del siglo XXI. *Revista interdisciplinaria de estudios agrarios, Número 26-27*, 123-140.
- Azcuy Ameghino, E. (2009). La protesta social durante la Convertibilidad: el caso del "paro agrario" de 1994 en la pampa húmeda. *Revista interdisciplinaria de estudios agrarios*, 75-96.

- Azcuy Ameghino, E., & Fernández, D. (2008). Causas, mecanismos, problemas y debates en torno al proceso de concentración del capital agrario en la región pampeana: 1988 - 2007. V *Jornadas de Investigación y Debate: Jornadas Trabajo, propiedad y tecnología en la argentina*. Universidad de Quilmes.
- Azcuy Ameghino, E., & Lazzarini, A. (2001). Anatomía de las pequeñas explotaciones de base familiar: el caso de Pergamino en 1988. *Primer Congreso Rioplatense de Economía Agraria y XXXII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, Montevideo, Uruguay, 24 al 26 de octubre*.
- Azcuy Ameghino, E., & León, C. (2005). La "sojización": contradicciones, intereses y debates. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 23*, 133-157.
- Azcuy Ameghino, E., & Ortega, L. (2010). Sojización y expansión de la frontera agropecuaria en el NEA y NOA: transformaciones, problemas y debates. En *Documentos del CIEA, Nº 5* (págs. 141-159). Buenos Aires: CIEA.
- Balsa, J. (2006). *El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense, 1937-1988*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Barker, C. (2013). Class Struggle and Social Movements. En C. Barker, L. Cox, J. Krinsky, & A. Gunvald Nilsen, *Marxism and social movements* (págs. 41-62). Leiden: Historical materialism book series.
- Barsky, O. (1988). La caída de la producción agrícola pampeana en la década de 1940. En O. Barsky, *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales* (págs. 31-112). Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
- Barsky, O. (1997). La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampeana. En O. Barsky, & A. Pucciarelli, *El agro pampeano. El fin de un período* (págs. 13-204). Buenos Aires: Oficina de publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires.
- Barsky, O., & Dávila, M. (2008). *La rebelión del campo*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Barsky, O., & Gelman, J. (2001). *Historia del agro argentino*. Buenos Aires: Grijalbo-Mondadori.
- Barsky, O., & Pucciarelli, A. (1991). Cambios en el tamaño y el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas. En O. Barsky, *El desarrollo agropecuario pampeano* (págs. 309-454). Buenos Aires: Grupo editor latinoamericano.
- Basualdo, E. (1995). El nuevo poder terrateniente: una respuesta. *Realidad económica*(132), 126-149.
- Basualdo, E. (1996). Los grupos de sociedades en el agro pampeano. *Desarrollo económico*, 36(143), 807-828.
- Basualdo, E. (1998). Características e incidencia de los terratenientes bonaerenses. *Informe de Coyuntura CEB (Centro de Estudios bonaerenses), Año 8(77)*, 19-31.

- Basualdo, E. (1998). La concentración de la propiedad rural en la provincia de Buenos Aires: situación actual y evolución reciente. En H. Nochteff, *La economía argentina a fin de siglo. Fragmentación presente y desarrollo ausente* (págs. 71-107). Buenos Aires: EUDEBA/FLACSO.
- Basualdo, E. (2001). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Buenos Aires: UNQ-FLACSO-IDEP.
- Basualdo, E. (2002). Entre la dolarización y la devaluación: la crisis de la convertibilidad en Argentina. *Íconos. Revista de ciencias sociales*(14-20), 14-20.
- Basualdo, E. (2003). Las reformas estructurales y el plan de convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera. *Realidad económica*(200), 42-83.
- Basualdo, E. (2006). *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Basualdo, E. (2007). *Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía*. Buenos Aires: Maestría en Economía Política, FLACSO.
- Basualdo, E. (2008). El agro pampeano: sustento económico y social del actual conflicto en la Argentina. *Cuadernos del Cendes, Año 25, Nº 68*, 29-54.
- Basualdo, E., & Bang, J. (1997). *Los grupos de sociedades en el sector agropecuario pampeano*. Ciudad de Buenos Aires: FLACSO - INTA.
- Basualdo, E., & Khavisse, M. (1993). *El nuevo poder terrateniente*. Buenos Aires: Planeta.
- Baudino, V., & Sanz Cerbino, G. (2013). El tercer gobierno de Perón y la fractura de la clase dominante. *Estudios del ISHIR*, 84-110.
- Baumestier, E. (1980). *Estructura agraria, ocupacional y cambio tecnológico en la región cerealera. Documento de trabajo Nº 10*. Buenos Aires: CEIL.
- Becker, G. (1976). *The economic approach to human behaviour*. Chicago: University of Chicago.
- Beltrán, G. (2011). Las paradojas de la acción empresaria. Las asociaciones del empresariado argentino y la persistencia de las reformas estructurales. En A. Pucciarelli, *Los años de Menem* (págs. 221-261). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Beltrán, G. (2012). Las prácticas del poder. Discusiones en torno al problema de la acción política empresaria. *Revista Apuntes. Universidad del Pacífico, XXXIX(70)*, 69-102.
- Bendini, M., Murmis, M., & Tsakoumagkos, P. (2009). Pluriactividad: funciones y contextos. Preguntas teóricas y análisis de doz zonas frutícolas del Ato Valle rionegrino. En H. C. Grammont, & L. Martínez Valle, *La pluriactividad en el campo latinoamericano* (págs. 51-80). Quito: Flacso, sede Ecuador.
- Birle, P. (1997). *Los empresarios y la democracia en la Argentina: conflictos y coincidencias*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

- Bisang, R. (2003). Apertura económica, innovación y estructura productiva: la aplicación de biotecnología en la producción agrícola pampeana argentina. *Desarrollo económico*, Vol. 43, No. 171, 413-442.
- Bisang, R. (2007). El desarrollo agropecuario en las últimas décadas: ¿volver a creer? En B. Kosacoff, *Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007*. Documento de la CEPAL, consultado el 02/06/2014 en <http://www.cepal.cl/publicaciones/xml/1/32311/CapVI.pdf> .
- Bisang, R., Anlló, G., & Campi, M. (2008). Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en Argentina. *Desarrollo Económico*, Vol. 48, No. 190/191, 165-207.
- Blanco, M. (2008). Propiedad, arrendamiento y formas societarias. Cambios y pervivencias en la estructura social pampeana del siglo XX. En J. Balsa, G. MAteo, & M. S. Ospital, *Pasado y presente en el agro argentino* (págs. 515-546). Buenos Aires: Lumiere.
- Block, F. (1977). The ruling class does not rule: Notes on the Marxist theory of the state. *Socialist Revolution*, 33(7), 6-28.
- Bobbio, N. (1978). *Ni con Marx ni contra Marx*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bocchicchio, A., & Cattáneo, C. (2005). Transformaciones en la agricultura e innovación organizacional en asociaciones de productores: los casos de AAPRESID y ASAGIR. En R. Benencia, & C. Flood, *Trayectorias y contextos. Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa*. Buenos Aires: La Colmena.
- Bonaudo, M., & Godoy, C. (1985). Una corporación y su inserción en el proyecto agro-exportador: la Federación Agraria Argentina (1912-1933). *Anuario-Escuela de Historia-UNR*(11), 151-181.
- Bowman, J. (1982). The logic of capitalist collective action. *Social science information*, 21(4/5), 571-604.
- Braun, O. (1970). Desarrollo del capital monopolista en la Argentina. En O. Braun, *El capitalismo argentino en crisis* (págs. 11-44). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Caligaris, G. (2012). Clases sociales, lucha de clases y Estado en el desarrollo de la Crítica de la Economía Política. En G. Caligaris, & A. Fitzsimons, *Relaciones económicas y políticas. Aportes para el estudio de su unidad con base en la obra de Karl Marx* (págs. 72-91). Buenos Aires: FCE-UBA.
- Caligaris, G. (2014a). Dos debates en torno a la renta de la tierra y sus implicancias para el análisis de la acumulación de capital en la Argentina. *Razón y revolución*(27), 59-79.
- Caligaris, G. (2014b). *Estructura social y acumulación de capital en la producción agraria pampeana (1996-2013)*. Tesis de doctorado presentada en la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.

- Caligaris, G. (2015). Concentración y centralización del capital agrario en la región pampeana. El caso de los grandes pooles de siembra. *Mundo Agrario*, 16(31).
- Caligaris, G. (2016). Transformaciones recientes en el proceso de trabajo en la producción agraria pampeana: límites y potencialidades del proceso de 'sojización'. *Trabajo y Sociedad*.
- Caligaris, G. (2017). Las 'grandes empresas agropecuarias' en la Argentina: los casos de Cresud y El Tejar. *Cuadernos de Economía*, 36(7), 581-600.
- Caligaris, G., & Pérez Trento, N. (2012). Para una historia crítica de la teoría: la renta diferencial de tipo II en retrospectiva. *ESHET Argentina Conference*. Buenos Aires.
- Campi, M. (2013). Tecnología y desarrollo agrario. En R. Bisang, G. Anilló, & M. Campi, *Claves para repensar el agro argentino* (págs. 95-150). Buenos Aires: Eudeba.
- Cárcano, M. (1968 [1917]). *Evolución histórica del régimen de la tierra pública 1810-1916*. Buenos Aires: Eudeba.
- Carretero, A. (1972). *La propiedad de la tierra en la época de Rosas*. Buenos Aires: El coloquio.
- Castellani, A., & Schorr, M. (2004). Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas en el interior del bloque de poder económico. *Cuadernos del CENDES*(57), 55-81.
- Castellani, A., & Szkolnik, M. (2011). 'Devaluacionistas' y 'dolarizadores'. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001. *Documentos de investigación social*, 1-21.
- Castro García, C., Cornelli, M., & Palmisano, T. (2011). Los usos del conflicto: la influencia de la Mesa de Enlace en el escenario electoral de 2009. En N. Giarracca, & M. Teubal, *Del paro agrario a las elecciones de 2009 : tramas, reflexiones y debates* (págs. 287-312). Buenos Aires: Antropofagia.
- Cloquell, S. (2007). *Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva agricultura*. Rosario: Homo sapiens.
- Colombo, G., & Sartelli, E. (1998). Los ricos y los super ricos: la Liga Agraria de Buenos Aires y la heterogeneidad del sector ganadero pampeano (1890-1930). *Revista de historia*(7), 33-54.
- Comelli, M., Castro García, M., Godfrid, J., Schvartz, A., Ciccolella, M., & Negro, M. (2011). La Trama de un conflicto extendido. El conflicto agrario marzo - julio de 2008. En N. Giarracca, & M. Teubal, *Del paro agrario a las elecciones de 2009; tramas, reflexiones y debates* (págs. 13-192). Buenos Aires: Antropofagia.
- Craviotti, C. (2001). Tendencias en el trabajo agrario y dinámicas familiares. *5º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Buenos Aires.

- Craviotti, C. (Diciembre 2012 - Mayo 2013 de 2012). Las explotaciones familiares en el agro pampeano: controversias y perspectivas. *Revista Pueblos y fronteras digital*, 7(14), 6-30.
- de Imaz, J. (1964). *Los que mandan*. Buenos Aires: Eudeba.
- de Martinelli, G. (2008). Pools de siembra y contratistas de labores. Nuevos y viejos actores sociales en la expansión productiva pampeana reciente. En J. Balsa, G. Mateo, & M. S. Ospital, *Pasado y presente en el agro argentino* (págs. 547-570). Buenos Aires: Lumiere.
- de Palomino, M. (1988). *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina 1955-1983*. Buenos Aires: CISEA/Grupo editor latinoamericano.
- Díaz Alejandro, C. (1970). *Ensayos sobre la historia económica argentina*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Dossi, M. (2007). Alianzas empresarias frente a la crisis del 2001: un análisis del caso del Grupo Productivo. *IV Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires*. Buenos Aires.
- Dossi, M. (2009). La acción colectiva de la Unión Industrial Argentina en el período 1989-2002. Un análisis desde su dinámica organizativa-institucional. *Documentos de investigación social*(10), 1-37.
- Dossi, M. (2012). Debates sobre la acción empresarial organizada: aportes para la elaboración de la acción corporativa empresarial. *Papeles de trabajo*, 58-83.
- Dossi, M. (2014). La formación de consensos en las asociaciones empresarias bajo contextos de crisis. El caso de la Unión Industrial Argentina en los períodos 1989-1991 y 1999-2003. *H-Industri@*, 8(13), 161-96.
- Dossi, M., & Lissin, L. (2011). La acción empresarial organizada: propuesta de abordaje para el estudio del empresariado. *Revista mexicana de sociología*, 73(3), 415-43.
- Elster, J. (1986). *An introduction to Karl Marx*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fausto, R. (2002). *Marx: logica e politica. Investigações para uma reconstrução do sentido da dialética*. São Paulo: Editora 34.
- Fernández, D. (2008). El fuelle del estado: sobre la incidencia de las políticas públicas en la concentración de la producción agrícola pampeana (1989-2001). *Documentos del CIEA, N° 3*, pp. 33-68.
- Fernández, D. (2010). Concentración económica en la región pampeana: El caso de los fideicomisos financieros. *Revista electrónica Mundo Agrario*, 11(21).
- Fernández, D., & Scalerandi, G. (2009). Una vez más sobre el pez grande y el pez chico en la región pampeana: Fondos Comunes de Inversión en el agro y la disputa de la ganancia extraordinaria. *VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y*

- Agroindustriales*. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
- Fernández, S. (2004). El sistema agroalimentario lácteo en la provincia de Santa Fe: desafíos y respuestas en un área periférica de la cuenca centro-oeste. En J. Renold, & M. Lattuada, *El complejo lácteo en una década de transformaciones estructurales* (págs. 27-46). Buenos Aires: Biblos.
- Ferrero, M., & Gallego, A. (2012). (In)versiones de ciudad. *Primer Seminario Internacional "Territorio, desarrollo sostenible, luchas sociales y ciudadanía"*. Villa María.
- Fitzsimons, A. (2013). Producción, relaciones sociales y valor: una crítica a la teoría del patrón de acumulación basado en la valorización financiera. *Razón y revolución*, 85-103.
- Fitzsimons, A. (2014). *Estado y acumulación de capital en Argentina: la expansión de las empresas extranjeras entre 1958 y 1963 en Argentina. Tesis de doctorado presentada en la Universidad de Buenos Aires*. Buenos Aires.
- Fitzsimons, A. (2016). Proceso de trabajo e internacionalización del capital: determinantes globales del "atraso" tecnológico de la industria automotriz argentina en las décadas de 1950 y 1960. *Trabajo y Sociedad*(26), 225-40.
- Fitzsimons, A., & Starosta, G. (2016). Rethinking the determination of the value of labor-power (en prensa).
- Flichman, G. (1970-1). Modelo sobre la asignación de recursos en el sector agropecuario. *Desarrollo económico*, 10(39-40), 375-393.
- Flichman, G. (1977). *La renta del suelo y el desarrollo argentino*. México: Siglo XXI.
- Forni, F., & Tort, M. (1984). *Las explotaciones familiares en la producción de cereales de la región pampeana argentina*. Buenos Aires: CEIL.
- Gaggero, A., & Wainer, A. (2004). Crisis de la Convertibilidad: el rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio. *Realidad económica*(204), 21-34.
- Gálvez, E. (2011). La influencia de los empresarios críticos de la Convertibilidad en las políticas económicas de la Post-Convertibilidad. *Realidad económica*(264), 17-32.
- Gálvez, E. (2012). La actuación de los grandes terratenientes en las crisis económicas de 1989-1991 y 2001-2002 en Argentina. *Cuadernos del CENDES*, 79-96.
- Giarracca, N., Teubal, M., & Palmisano, T. (2008). Paro agrario: crónica de un conflicto alargado. *Realidad económica*, 237, 33-54.
- Giberti, H. (1986). *Historia económica de la ganadería argentina*. Buenos Aires: Hyspamérica.
- Gras, C. (2010). Crisis y recomposiciones de la agricultura familiar (1990-2007). En C. Gras, & K. Bidaseca, *El mundo chacarero en tiempos de cambio* (págs. 41-65). Buenos Aires: Ciccus.

- Gras, C., & Hernández, V. (2009a). Reconfiguraciones sociales frente a las transformaciones de los 90: desplazados, chacareros y empresarios en el nuevo paisaje rural argentino. En C. Gras, & V. Hernández, *La argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios* (págs. 89-116). Buenos Aires: Biblos.
- Grinberg, N. (2007). The New International Division of Labour and the Differentiated Evolution of Poverty at World Scale. *Global Poverty Research Group and Brooks World Poverty Institute Conference held at Hulme Hall, University of Manchester*. Manchester.
- Grinberg, N. (2008). From the 'Miracle' to the Lost Decade: Intersectoral Transfers and External Credit in the Brazilian Economy. *Revista de economía política*, 28, 291-311.
- Grinberg, N. (2010). Where Is Latin America Going? FTAA or Twenty-first-Century Socialism? *Latin american perspectives*, 30, 185-202.
- Grinberg, N. (2013a). Capital Accumulation and Ground-rent in Brazil: 1953-2008. *International Review of Applied Economics*, 27, 449-71.
- Grinberg, N. (2013b). The Political Economy of Brazilian (Latin American) and Korean (East Asian) Comparative Development: Moving beyond Nation-centred Approaches. *New political economy*, 18, 171-97.
- Grinberg, N. (2014). From Miracle to Crisis and Back: The Political Economy of South Korean Long-Term Development. *Journal of contemporary Asia*, 44, 711-34.
- Grinberg, N. (2015). On the Brazilian Ground-rent Appropriated by Landowners. *Revista de economía política*, 35, 799-824.
- Grinberg, N. (2016). Global Commodity Chains and the Production of Surplus-value on a Global Scale: Bringing Back the New International Division of Labor Theory. *Journal of world-systems research*, 22, 247-78.
- Grinberg, N., & Starosta, G. (2009). The Limits of Studies in Comparative Development of East Asia and Latin America: the case of land reform and agrarian policies. *Third World Quarterly*, 30(4), 761-777.
- Grosso, S., Bellini, M. E., Qüesta, L., Guibert, M., Lauxmann, S., & Rotondi, F. (2010). Impactos de los "pools de siembra" en la estructura social agraria. Una aproximación a los espacios centrales de la provincia de Santa Fe (Argentina). *Revista de Estudios Regionales*, 6, 115-138.
- Guevara, S. (2007). El Mercosur como reproducción de la forma específica de la acumulación de capital en el Cono Sur: una primera aproximación desde el sector automotriz. En A. Fernández, *Estados y sindicatos en perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: Prometeo.

- Guevara, S. (2011). *Los trabajadores y el MERCOSUR. Integración productiva, relaciones laborales y acumulación de capital: el caso de la industria automotriz (1991-2008)*. Tesis de doctorado. Buenos Aires.
- Guevara, S. (2012). La lucha de clases en la industria automotriz del MERCOSUR y la reproducción de la acumulación de capital regional. *Razón y revolución*, 141-155.
- Halperin Donghi, T. (1985). *José Hernández y sus mundos*. BUenos Aires: Sudamericana.
- Heinrich, M. (2008). *Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx*. Madrid: Escolar y Mayo editores.
- Heredia, M. (2003). Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital. *Revista mexicana de sociología*, 77-115.
- Hernández, V. (2007). El fenómeno económico y cultural del boom de la soja y el empresario innovador. *Desarrollo económico*, 47(187), 331-365.
- Hernández, V. (2009). La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pampas gringas. En C. Gras, & V. Hernández, *La argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios* (págs. 39-64). Buenos Aires: Biblos.
- Hindess, B. (1984). Rational choice theory and the analysis of political action. *Economy and society*, 13(3), 255-277.
- Hodgson, G. (1985). The Rationalist Conception of Action. *Journal of Economic Issues*, 19(4), 825-51.
- Hodgson, G. (1994). Some Remarks on 'Economic Imperialism' and International Political Economy. *Review of International Political Economy*, 1(1), 21-28.
- Hora, R. (1994). Un aspecto de la racionalidad corporativa de la Sociedad Rural Argentina: el problema de la agricultura, 1866-1930. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*(10), 31-59.
- Hora, R. (2009). *Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Hora, R. (2010). La crisis del campo del otoño del 2008. *Desarrollo económico*, 81-111.
- Hora, R. (2015). *Los terratenientes de la Pampa argentina. Una historia social y política*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Infesta, M. (1993). La enfiteusis en Buenos Aires. 1820-1850. En M. Bonaudo, & A. Pucciarelli, *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones, vol. I*. Buenos Aires: CEAL.
- Infesta, M. (2006). *a Pampa Criolla. Usufructo y apropiación privada de tierras públicas en Buenos Aires, 1820-1850*. Mar del Plata: EUDEM.
- Infesta, M., & Valencia, M. (1987). Tierras, premios y donaciones. Buenos Aires, 1830-1860. *Anuario Instituto de Estudios histórico sociales*(2), 177-213.

- Iñigo Carrera, J. (1995). From Simple Commodities to Capital-Commodities: The Transformation of Values into Prices of Production. , *21st Annual Convention of the Eastern Economic Association, Mini-Conference of the International Working Group in Value Theory*. New York.
- Iñigo Carrera, J. (1998). La acumulación de capital en la Argentina. *XVI Jornadas de Historia Económica*. Quilmes.
- Iñigo Carrera, J. (1999). La apropiación de la renta de la tierra pampeana y su efecto sobre la acumulación del capital agrario. *Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires*.
- Iñigo Carrera, J. (2003). *El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Iñigo Carrera, J. (2005). Argentina: acumulación de capital, formas políticas y la determinación de la clase obrera como sujeto revolucionario. *Razón y Revolución*(14).
- Iñigo Carrera, J. (2007a). *Conocer el capital hoy. Usar críticamente El Capital*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Iñigo Carrera, J. (2007b). *La formación económica de la sociedad argentina. Volumen I. Renta agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882–2004*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Iñigo Carrera, J. (2008). *Terratenientes, retenciones, tipo de cambio, regulaciones específicas: los cursos de apropiación de la renta de la tierra agraria, 1882-2007*. Buenos Aires: CICP.
- Iñigo Carrera, J. (2012a). Acerca del carácter de la relación base económica - superestructura política y jurídica: la oposición entre representación lógica y reproducción dialéctica. En G. Caligaris, & A. Fitzsimons, *Relaciones económicas y políticas. Aportes para el estudio de su unidad con base en la obra de Karl Marx* (págs. 8-19). Buenos Aires: FCE-UBA.
- Iñigo Carrera, J. (2012b). El capital: determinación económica y subjetividad política. *Crítica jurídica*(34), 51-69.
- Iñigo Carrera, J. (2014). *La especificidad del proceso de la acumulación de capital en la Argentina. Desde sus manifestaciones originarias hasta la evidencia de su contenido en las primeras décadas del siglo XX. Tesis de doctorado presentada en la Universidad de Buenos Aires*. Buenos Aires.
- Laclau, E. (1969). Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno. En M. Giménez Zapiola, *El régimen oligárquico* (págs. 19-57). Buenos Aires: Amorrortu.

- Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
- Lash, S., & Urry, J. (1984). The new marxism of collective action. *Sociology*, 18(1), 33-50.
- Lattuada, M. (1986). *La política agraria peronista (1943-1983)*, 2 vols. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Lattuada, M. (1988). *Política agraria y partidos políticos (1946-1983)*. Buenos Aires: Centro editor de América latina.
- Lattuada, M. (1990). *El Estado argentino y los intereses industriales (1983-1989)*. Buenos Aires: CLADE.
- Lattuada, M. (1991). El gobierno de Alfonsín y las corporaciones agrarias: una visión de conjunto. En J. Nun, & M. Lattuada, *El gobierno de Alfonsín y las corporaciones agrarias* (págs. 107-200). Buenos Aires: Manantial.
- Lattuada, M. (1992). Notas sobre corporaciones agropecuarias y Estado. Tendencias históricas y cursos de acción posibles en la experiencia democrática contemporánea. *Estudios Sociales*(2).
- Lattuada, M. (1994). Una lectura sobre El Nuevo Poder Terrateniente y su significado en la Argentina actual. *Ruralis*(5), 125-135.
- Lattuada, M. (2003). Transformaciones institucionales en las corporaciones. En M. Bendini, S. Cavalcanti, & M. y. Murmis, *El campo en la sociología actual: una perspectiva latinoamericana. Actores, lazos sociales y reestructuraciones*. (págs. 177-211). Buenos Aires: La colmena.
- Lattuada, M. (2006). *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina: transformaciones institucionales a fines del siglo XX*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Lazzaro, S. (2005). El Estado y las políticas agrarias: concepciones y estrategias en el contexto de crisis de hegemonía de la clase dominante (1965-1969). En S. Lázaro, & G. Galafassi, *Sujetos, política y representaciones del mundo rural. Argentina 1930-1975* (págs. 165-235). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Lebowitz, M. (1988). Is "analytical marxism" marxism? *Science & society*, 52(2), 191-214.
- Leon, C., & Rossi, C. (2006). La Junta Nacional de Granos. *Realidad Económica*(196), 1-18.
- Lindblom, C. (1977). *Politics and markets*. New York: Basic books.
- Llach, J. (1997). *Otro siglo, otra Argentina*. Buenos Aires: Ariel.
- Llovet, I. (1991). Contratismo y Agricultura. En O. Barky, *El desarrollo agropecuario pampeano* (págs. 607-666). Buenos Aires: Grupo editor latinoamericano.
- Lódola, A. (2008). *Contratistas, cambios tecnológicos y organizacionales en el agro argentino*. Santiago: Publicación de las Naciones Unidas. Disponible en <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/32431/DocW24.pdf>.

- Makler, C. (2007). Reflexiones sobre el gremialismo agropecuario en la Argentina. En O. Graciano, & S. Lázaro, *La Argentina rural del siglo XX. Fuentes, problemas y métodos* (págs. 344-369). Buenos Aires: La colmena.
- Makler, C. (2008). Las organizaciones gremiales agropecuarias durante el peronismo y la "Revolución Libertadora": respuestas y desafíos en tiempos de cambio (1946-1958). *XXI Jornadas de Historia Económica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata*. La Plata.
- Martínez Dougnac, G. (2008). Subsistencia y descomposición: notas sobre el devenir de la agricultura familiar pampeana. En J. Balsa, G. Mateo, & M. Ospital, *Pasado y presente en el agro argentino* (págs. 571-586). Buenos Aires: Lumiere.
- Martínez Nogueira, R. (1988). Las organizaciones corporativas del sector agropecuario. En O. e. Barsky, *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales*. Buenos Aires: FCE-IICA-CISEA.
- Martino, G., Romero, F., & Cadelli, E. (2013). Los sistemas tributarios de la provincia de Buenos Aires. *Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas*. Córdoba: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba.
- Marx, K. (1974 [1861-3]). *Teorías sobre la plusvalía. Vol. II*. Buenos Aires: Cartago.
- Marx, K. (2006 [1867]). *El capital. Tomo I, 3 vols*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Marx, K. (2009 [1885]). *El capital, tomo II, 3 vols*. México: Siglo XXI.
- Marx, K. (2009 [1894]). *El Capital, tomo III, 3 vols*. México: Siglo XXI.
- Marx, K., & Engels, F. (1985). *Manifiesto del partido comunista*. Buenos Aires: Anteo.
- Mascali, H. (1986). *Desocupación y conflictos laborales en el campo argentino (1940-1965)*. Buenos Aires: Centro editor de América latina.
- Miliband, R. (1969). *The state in capitalist society*. Londres: Weidenfeld & Nicolson.
- Miliband, R. (1973). Poulantzas and the capitalist state. *New left review*, 58, 83-92.
- Moseley, F. (2016). *Money and totality*. Leiden: Brill.
- Murmis, M., & Feldman, S. (2005). Pluriactividad y pueblos rurales: examen de un pueblo pampeano. En G. Neiman, & C. Craviotti, *Entre el campo y la ciudad. Desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro* (págs. 15-49). Buenos Aires: Ciccus.
- Muro de Nadal, M. (2009). El discurso y la práctica. Las complejas relaciones entre la Sociedad Rural Argentina y el gobierno del Dr. Menem. *Documentos del CIEA*(4), 185-219.
- Nava, O. (2003). *Políticas de financiamiento de la producción agropecuaria (Documento 16)*. Buenos Aires: IICA.
- Neiman, M. (2010). La agricultura familiar en la región pampeana argentina. La utilización de los factores de producción y su relación con nuevas dinámicas familiares. *Mundo Agrario*, 11(21).

- Niosi, J. (1969). *Los empresarios y el Estado argentino: 1955-1969*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- O'Donnell, G. (1978). *Notas para el estudio de la burguesía local, con especial referencia a sus vinculaciones con el capital transnacional y el aparato estatal*. Buenos Aires: CEDES.
- Obschatko, E. (1988). Las etapas del cambio tecnológico. En O. Barsky, *La Agricultura Pampeana. Transformaciones productivas y sociales* (págs. 117-135). Buenos Aires: FCE/IIIC/CISEA.
- Oddone, J. (1930). *La burguesía terrateniente argentina*. Buenos Aires: Libera.
- Offe, C. (1988). The attribution of public status to interest groups: observations on the West German case. En S. Berger, *Organizing interest in western Europe* (págs. 123-58). Cambridge: Cambridge university press.
- Offe, C., & Ronge, V. (1975). Theses on the theory of the State. *New german critique*(6), 137-47.
- Offe, C., & Wiesensthal, H. (1980). Two logics of collective action: theoretical notes on social class and organizational form. *Political Power and Social Theory*, 1, 67-115.
- Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard: Harvard University Press.
- Ortiz, R., & Schorr, M. (2007). La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la posconvertibilidad. *Papeles de trabajo*, 1(2), 1-42.
- Ostiguy, P. (1990). *Los capitanes de la industria: Grandes empresarios, política y economía en la Argentina de los años 80*. Buenos Aires: Legasa.
- Oszlak, O. (2003). El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina. *Desarrollo Económico*, 42(168), 519-43.
- Panero, M. (2013). La representación de los sectores dominantes del agro en debate: el caso de la Sociedad Rural Argentina. En C. Gras, & V. Hernández, *El agro como negocio* (págs. 323-346). Buenos Aires: Biblos.
- Panero, M. (2014). Sectores dominantes del agro y representación política: el caso de la Sociedad Rural Argentina. *Quinto Congreso Uruguayo de Ciencia Política, "¿Qué ciencia política para qué democracia?"*. Montevideo.
- Pengue, W. (2001). Impactos de la expansión de la soja en Argentina. Globalización, desarrollo agropecuario e ingeniería genética: un modelo para armar. *Biodiversidad*, Nº 29, 7-13.
- Peralta Ramos, M. (1973). *Etapas de acumulación y alianza de clases en la Argentina (1930-1970)*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pérez Trento, N. (2014). Transformaciones en la estructura social agraria pampeana y organizaciones rurales. El caso de la Federación Agraria Argentina (1990-2008). *XI Congreso Argentino de Antropología Social*. Rosario.

- Pérez Trento, N. (2015). La acción política de la Federación Agraria Argentina durante el período de la Convertibilidad (1991-2001). *Mundo agrario*, 16(32), 1-24.
- Pierri, J. (2006). El boom de la soja: ¿un retorno al pasado? *Realidad económica*(219), 53-63.
- Pierri, J. (2007). *Sector externo, político agraria y entidades del agro pampeño 1960/1986: claves del carácter dependiente del agro pampeano*. Buenos Aires: Cooperativas.
- Pierri, J. (2009). Grandes empresas y cooperativas en el comercio exterior del complejo sojero, 1990-2006. *Documentos del CIEA*, 147-63.
- Piñeiro, M., & Villarreal, F. (2005). Modernización de la agricultura y nuevos actores sociales. *Ciencia hoy*, 15(87), 32-6.
- Portantiero, J. C. (1977). Economía y política en la crisis argentina: 1958-7973. *Revista mexicana de sociología*, 39(2), 531-565.
- Posada, M., & Martínez de Ibarreta, M. (1998). Capital financiero y producción agrícola: los pools de siembra en la región pampeana. *Realidad económica* Nº 153, 112-135.
- Postone, M. (1993). *Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica de Marx*. Madrid: Marcial Pons, 2006.
- Poulantzas, N. (1969). *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Poulantzas, N. (1969). The problem of the capitalist state. *New left review*, 58, 67-78.
- Poulantzas, N. (1973 [1968]). *Political power and social classes*. Londres: New left books.
- Przeworski, A. (1985). Marxism and rational choice. *Politics Society*, 14(4), 379-409.
- Pucciarelli, A. (1997a). Estructura agraria de la pampa bonaerense. Los tipos de explotaciones predominantes en la provincia de Buenos Aires. En O. Barsky, & A. Pucciarelli, *El agro pampeano. El fin de un período* (págs. 205-290). Buenos Aires: FLACSO - Oficinas de publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires.
- Pucciarelli, A. (1997b). Las grandes estancias de la pampa bonaerense. En O. Barsky, *El agro pampeano. El fin de un período* (págs. 291-357). Buenos Aires: FLACSO - Oficina de Publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires.
- Robles Baez, M. (1997). Marx: Sobre el concepto de capital. *Economía: teoría y práctica*. Nº 7, 129-156.
- Roemer, J. (1982). *A general theory of exploitation and class*. Harvard: Harvard University Press.
- Sábato, H. (1989). *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar, 1850-1890*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Salvia, S. (2014a). Asociaciones empresarias del agro y crisis de acumulación, 1998-1999. Un antecedente de la "Mesa de Enlace". *Mundo Agrario*, 15(28).

- Salvia, S. (2014b). Empresarios, convertibilidad y crisis. ¿Entre la dolarización y la devaluación? *Íconos. Revista de ciencias sociales*(50), 177-193.
- Salvia, S. (2014c). Devaluación sin devaluadores: Consideraciones sobre la disolución de la "comunidad de negocios" y la acción de la burguesía industrial, en la crisis final de la Convertibilidad. *Ciclos en la historia, la economía y la sociedad*(43).
- Salvia, S. (2015). La industria en crisis bajo la convertibilidad. Diagnóstico y demandas de la Unión Industrial Argentina. *H-Industri@*, 17, 92-120.
- Sanz Cerbino, G. (2010). El huevo de la serpiente. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias y el golpe de Estado de 1976. *Realidad Económica*(251), 7-28.
- Sanz Cerbino, G. (2012). La historia negra de Federación Agraria. La intervención política de los 'chacareros' entre Onganía y Videla (1966-1976). *Razón y Revolución*(24), 25-41.
- Sanz Cerbino, G. (2014). Antecedentes históricos de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas. La formación de la Comisión de Enlace y la disputa por la renta (1966-1973). *Mundo agrario*, 1-33.
- Sanz Cerbino, G. (2015). El Partido del Orden en la Argentina de los '70. El Consejo Empresario Argentino (CEA), 1967-1976. *XI Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires*, (págs. 1-14). Buenos Aires.
- Sartelli, E. (2008). *Patrones en la ruta*. Buenos Aires: Ediciones RyR.
- Satorre, E. (2005). Cambios tecnológicos en la agricultura argentina actual. *Ciencia Hoy*, Vol. 15, Nº 87, 24-31.
- Schmitter, P., & Streeck, W. (1999). *Organization of business interest*. Köln: Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung.
- Schneider, B. (2004). Business Politics in Argentina: fragmented and politicized. En B. Schneider, *Business politics and the State in twentieth-century Latin America* (págs. 173-208). Cambridge: Cambridge University press.
- Sesto, C. (2005). *Historia del capitalismo agrario pampeano. Tomo 2: la vanguardia ganadera bonaerense*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Sidicaro, R. (1982). Poder y crisis de la gran burguesía agraria en la Argentina. En A. Rouquieu, *Argentina hoy* (págs. 51-104). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Sidicaro, R. (2002). *Los tres peronismos*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Slutzky, D. (1968). Aspectos sociales del desarrollo rural en la pampa húmeda Argentina. *Desarrollo Económico*, 8(29), 95-135.
- Smith, P. (1986). *Carne y política en la Argentina*. Buenos Aires: Hyspamérica.
- Starosta, G. (2011). Machinery, productive subjectivity and the limits to capitalism in Capital and the Grundrisse. *Science & society*, 75(1), 42-58.
- Starosta, G. (2016a). *Marx's Capital, method and revolutionary subjectivity*. Leiden: Brill.

- Starosta, G., & Caligaris, G. (2016b). The Commodity Nature of Labor-Power. *Science & society*, 80, 319-345.
- Starosta, G., & Grinberg, N. (2014). From global capital accumulation to Varieties of Centre-Leftism in South America: The Cases of Brazil and Argentina. En N. Grinberg, & G. Starosta, *Crisis and contradiction* (págs. 236-272). Londres: Brill.
- Streeck, W. (1990). *Interest heterogeneity and organizing capacity: two logics of collective action*. Madrid: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.
- Teubal, M. (2003). Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario argentino. *Realidad Económica*, Nº 196, 52-74.
- Tirado, R. (1996). La elite del empresariado y la estructura de representación de intereses empresariales en México. *Ensaïos FEE*, 17(2), 262-288.
- Tirado, R. (2015a). Teorías y conceptos para analizar las organizaciones gremiales de empresarios. *Revista mexicana de sociología*, 77(3), 467-95.
- Tirado, R. (2015b). Enfoques teóricos y conceptos sobre el poder político empresarial. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*(225), 311-40.
- Traxler, F. (1993). Business associations and labor unions in comparison: theoretical perspectives and empirical findings on social class, collective action and associational organizability. *The British Journal of Sociology*, 44(4), 673-91.
- Udéhn, L. (1993). Twenty-five Years with The Logic of Collective Action. *Acta sociológica*, 36, 239-261.
- Valencia, M. (1991). La Sociedad Rural Argentina. Masa societaria, composición e intereses. En M. Valencia, G. Banzato, G. Quinteros, & M. Corva, *Estudios de historia rural II* (págs. 10-35). La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
- Valencia, M. (1993). La vanguardia de la Sociedad Rural y su actuación parlamentaria. En M. Bonaudo, & A. Pucciarelli, *La problemática agraria, nuevas aproximaciones* (págs. 121-39). Buenos Aires: CEAL.
- Valencia, M. (2005). *Tierras públicas, tierras privadas: Buenos Aires, 1852-1876*. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
- Varesi, G. (2011). Argentina 2002-2011: neodesarrollismo y radicalización progresista. *Realidad Económica*(264), 34-59.
- Viguera, A. (2000). *La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996)*. México: FLACSO.